LEGISLACIÓN MEXICANA

O

COLECCIÓN COMPLETA

DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

EXPEDIDAS

DESDE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA

ÚNICA EDICIÓN OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA.

CONTINUACIÓN DE LA ORDENADA POR LOS LICS.

MANUEL DUBLÁN y JOSÉ MARÍA LOZANO.

****

TRANSCRITA, EDITADA Y DIGITALIZADA
POR ARMANDO RÍOS JÁQUEZ.

TOMO 40 – Parte 1.
Año de 1908.

La colección completa contiene:

Primera parte: Del Tomo 1 al 34 con 16,890 disposiciones numeradas, ordenadas cronológicamente, cuya cobertura va de 1687 a 1902.

Segunda Parte: Del Tomo 31 al 42 (estructurada en 22 volúmenes) y cuya cobertura va de 1899 a 1910. (En esta segunda parte, los tomos del 31 al 34 se repiten en su numeración).

ABOGADOS E INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL GRUPO
DE PATROCINADORES PARA LA TRANSCRIPCIÓN, EDICIÓN Y DIGITALIZACIÓN
DE LA MONUMENTAL COLECCIÓN DE LEYES,
DENOMINADA **"LEGISLACIÓN MEXICANA",** LA CUAL
FUE REALIZADA POR MANUEL DUBLÁN Y JOSÉ MARÍA LOZANO.

Saliendo a la luz el año de 1876, por medio de la Imprenta del Comercio,
a cargo de Dublán y Lozano, hijos.

Lic. Juan M. Álvarez, Corredor Público No. 46 de la ciudad de México.

Lic. Leopoldo Burruel Huerta, Vocal Jurídico en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, en la Ciudad de México.

Dr. Luis Manuel C. Méjan, catedrático del ITAM, en la ciudad de México.

El Colegio de México (COLMEX), con la intervención de Micaela Chávez Villa, Directora de la Biblioteca "Daniel Cosío Villegas" y el Mtro. Alberto Santiago Martínez, Coordinador de Innovación Digital de esta Biblioteca.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste (URSE) de Oaxaca, por mediación de su directora Lic. Olivia Carolina Pérez Ojeda.

Lic. Ángel Martín Junquera Sepúlveda, del Despacho de Abogados Junquera y Forcada, S. C., de la Ciudad de México, y director de la Revista "El Mundo del Abogado".

Dr. Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, abogado con domicilio en la ciudad de Torreón, Coah., y recientemente nombrado Delegado en Coahuila de la (CONCAM) "Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A. C. 2018-2019."

Lic. Gilberto Miramontes Correa, Corredor Público No. 2, en la plaza del Estado de Nayarit.

Dra. Teresa Peña Gaspar, Notaria Pública de Tepozotlán, Edo. de México.

Lic. Fernando Pérez Correa, de Solórzano, Carvajal, González y Pérez Correa, S.C., de la ciudad de México.

Prestigiada universidad en la Ciudad de México, que prefiere mantener el anonimato.

Ing. Leopoldo Manuel Ríos García, de la ciudad de Torreón, Coah.

Lic. Héctor Romero Fierro, de Correduría Pública 58, S. C., en la ciudad de Guadalajara, Jal.

Dr. José Luis Soberanes Fernández, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ex director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza, Magistrado de la ciudad de Torreón, Coah., y recientemente nombrado Consejero Nacional de la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), por el periodo 2018-2021.

Sra. Tulina, bella e inteligente dama de la ciudad de Torreón, Coah.

Universidad Autónoma de la Laguna (UAL), de la ciudad de Torreón, Coah., por mediación de su rector el Contador Público Omar Lozano Cantú y el Lic. Hyrum Licona Rivera, coordinador de la carrera de Derecho.

Autor de la Transcripción, Edición y Digitalización de la Obra:
Armando Ríos Jáquez, de la ciudad de Torreón, Coah.
Primera Edición, 2019. Derechos reservados. Copyright 2019
E-mail: armandoriosjaquez@hotmail.com - ISBN (En Trámite) IMPRESO EN MEXICO.

LEYES MEXICANAS.

AÑO DE 1908.

Enero 10 de 1908.- RESOLUCIÓN complementaria de las dictadas por la Secretaría del ramo el 16 de diciembre de 1906 y el 4 de febrero de 1907, sobre exámenes generales y títulos de la Escuela Nacional de Medicina.

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

Oficio relativo.

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes.- México.– Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional.– Mesa 2ª.

Como complemento de las resoluciones dictadas por esta secretaría el 26 de diciembre de 1906 y el 4 de febrero de 1907, sobre exámenes generales y títulos de la Escuela Nacional de Medicina, se resuelve que los alumnos de dicha escuela que hayan principiado sus estudios de médico cirujano antes del 25 de diciembre de 1906, fecha en que empezó a regir el plan de estudios expedido el 22 de noviembre del mismo año, y que los terminen después de dicha fecha, podrán obtener su título respectivo en los términos de los artículos 17° y 18° de ese plan, cuando obtengan él promedio a que se refiere el art. 17° en todos los estudios correspondientes a la carrera de médico cirujano, o cuando obtengan el mismo promedio en los estudios que hayan hecho con posterioridad al referido 25 de diciembre de 1906.

Lo comunico a usted para sus efectos.

Libertad y Constitución.– México, 10 de enero de 1908.- Por orden del secretario: el subsecretario, E. A. Chávez, rúbrica.– Al C. director de la Escuela Nacional de Medicina.– Presente.

Enero 18 de 1908.- OFICIO por el que se señalan las labores que deben desempeñarse en el Departamento Médico de la Escuela Nacional Preparatoria.

SECRETARÍA DEL DESPACHO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional.

Con el atento oficio de Ud. fechado el día 10 del mes actual, se recibió en esta secretaría el informe rendido a esa dirección por el C. Dr. Ricardo de la Cueva, relativo a los trabajos efectuados durante el año escolar próximo pasado en el departamento médico de esa escuela.

Quedo enterado de dicho informe, y en respuesta digo a Ud., que esta secretaría considera necesario que fundamentalmente se utilice el departamento médico de esa escuela para hacer el examen de los alumnos, y sólo se atiendan en él los accidentes que sobrevengan en la misma escuela cuando sean de verdadera urgencia; en el concepto de que para realizar ese fin se deberá:

1°. Examinar a los alumnos que por primera vez ingresen en el establecimiento, con el objeto de darse cuenta de sus condiciones físicas;

2°. Señalar los ejercicios físicos que, en virtud de estas condiciones, deban hacer los alumnos examinados;

3°. Formar progresivamente con los datos recogidos, promedios de desarrollo, según las edades, a fin de que pueda contarse con una cifra que sirva más tarde de punto de comparación, y permita establecer el criterio indispensable para averiguaren qué condiciones de desarrollo se encuentra un alumno dado; y,

4°. Hacer exámenes periódicos de los alumnos del establecimiento, por lo menos uno anual, para decidir si la evolución física se ha efectuado de un modo normal y, en caso contrario, indicar lo que la escuela puede hacer para encaminar en ese sentido dicha evolución.

Digo a Ud., por último, que en el depar-

tamento de que se trata deben hacerse además los exámenes médicos de los profesores, alumnos o empleados, que pidan licencias o deseen justificar fallas por enfermedad.

Libertad y Constitución. México, 18 de enero de 1908.– Por orden del secretario: El subsecretario, E. A. Chávez.– Al C. director de la Escuela Nacional Preparatoria.– Presente.

Enero 20 de 1908.- Programa de las labores del Instituto Médico Nacional en 1908, aprobado provisionalmente por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del despacho de Instrucción pública y Bellas Artes.– México.– Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional.– Esta Secretaría aprueba provisionalmente el programa aprobado por la junta de profesores de ese instituto para que rija los trabajos del mismo establecimiento durante el año actual.

Lo comunico a Ud. para sus efectos.

Libertad y Constitución. México, 20 de enero de 1908.– Por orden del secretario: El subsecretario, E. A. Chávez, Rúbrica.– Al C. director del Instituto Médico Nacional.– Presente.

Enero 20 de 1908.- PROGRAMA general del Instituto Médico Nacional en 1908.

1. Reunir los datos para redactar una memoria que comprenda los amargos nacionales y estudiados en el plantel, y aquellos cuyo estudio quede concluido oportunamente en el año actual.

2. Conclusión y revisión de los datos que acompañarán a cada uno de los tres tomos del Registro Botánico de las plantas nacionales formado por el señor director, con la colaboración de las secciones, y continuación del cuarto tomo de la misma obra.

3. Continuación del Directorio de Herboristería Farmacéutica, igualmente en colaboración de las distintas secciones con la dirección.

4. Los trabajos extraordinarios que ocurran en el curso del año.

5. Lecturas de turno.

Los programas particulares se infieren del general y se llevarán al cabo a la manera siguiente:

PROGRAMAS PARTICULARES.

Sección Primera.

A. Clasificación, historia y descripción del Cuauchichic, Zacatechichic y Malacate, así como de otras plantas que se vayan colectando.

B. Continuación del suplemento de la Biología Central Americana,

C. Continuación de la obra del Dr. Hernández, cuya traducción sigue revisando actualmente el Sr. Don Ricardo Ramírez.

Sección Segunda.

A. Análisis del Malacate, Cuanaxana y Jícama del monte. De la primera se analizará la corteza, de la segunda las hojas y las flores y de la tercera la raíz.

B, Estudios que tiendan a profundizar la naturaleza química de los principios amargos que se han encontrado en las plantas ya citadas.

Sección Tercera.

Estudio fármaco-dinámico de las plantas siguientes: Cuauchichic, Malacate, Jícama del monte y Cuanaxana y experimentación especial de los principales amargos que se vayan preparando en el departamento de Química Industrial.

Sección Cuarta.

A. Experimentación terapéutica de las preparaciones correspondientes al Cuauchichic, Cuanaxana, Jícama del monte, Zacatechichic y Malacate, y aplicaciones de los medicamentos que ya han sido estudiados en

las otras secciones.

B. Baños de aire comprimido.

C. En el departamento de Química Industrial: Preparación de 10 gramos de cada uno de los principios amargos del Estafiate, Tronadora, Simonillo y Cuauchichic.

D. Preparaciones farmacéuticas que sean necesarias para la experimentación y usos terapéuticos de las plantas que están en estudio.

E. El departamento de Química Industrial rendirá un informe sobre la naturaleza del Látex del Palo amarillo y plantas caucheras.

Sección Quinta.

A. Cuadros sinópticos y confección de cartas a colores para terminar el material con que se redactará la parte expositiva de Geografía Médica del Estado de Oaxaca.

B. Colaboración con la sección cuarta en los estudios de Clínica terapéutica.

En caso de que se presente alguna dificultad inesperable para llevar al cabo en todas sus partes este programa, el director ordenará lo que crea conveniente.

Enero 16 de 1908.- ESTABLECIMIENTO del estudio del idioma mexicano como obligatorio para los alumnos del Museo Nacional que deseen hacer estudios de Etnología.

Oficios relativos,

Un sello que dice: Secretaría del Museo Nacional.– México.– Número 4,159.

En atención a que los alumnos de la clase de Etnología no podrán estudiar debidamente a nuestras razas indígenas, sin conocer el único medio de comunicación intelectual con ellas, que es el idioma de las mismas, me permito suplicar a Ud. atentamente que, si a bien lo tiene, se sirva autorizarme para imponer a dichos alumnos la obligación de que asistan a las clases de idioma mexicano en este Museo.

Protesto a Ud., señor ministro, mi mayor respeto y mi más distinguida consideración.

México, 16 de enero de 1908.– Jenaro García.- Rúbrica.– Al ciudadano secretario de Instrucción pública y Bellas Artes.– Presente.

Enero 23 de 1908.- Se resuelve que desde este año no podrán hacer estudios de Etnología los alumnos que no cursen igualmente la asignatura de idioma mexicano.

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional.– Mesa 2ª.

De conformidad con lo consultado por Ud. en su oficio relativo fechado el día 16 del presente mes, y teniendo en cuenta las razones expresadas por esa subdirección, se resuelve que desde este año no podrán hacer estudios de Etnología los alumnos que no cursen igualmente la asignatura de idioma mexicano.

Lo comunico a Ud. para sus efectos.

Libertad y Constitución. México, 23 de enero de 1908.– Por orden del subsecretario: E, A. Chávez.– Rúbrica.

Al C. subdirector del Museo Nacional.– Presente.

Enero 23 de 1908.- TEXTOS para la Escuela Nacional Preparatoria en 1908.

Acuerdo relativo.

SECRETARÍA DEL DESPACHO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional.

Entretanto se estudian y se aprueban definitivamente por el Consejo Superior de Educación pública los textos que deben servir en el próximo año escolar en la Escuela Nacional Preparatoria, se aprueban provisionalmente para ese fin las obras siguientes:

Aritmética y Algebra: Aritmética y Álgebra elemental, por Comberousse, traducida por Eduardo Pardo.

Geometría: Geometría plana y en el espacio, por H. Bos.

Segundo curso de Matemáticas: Trigonometría, rectilínea y esférica, por Manuel María Contreras (última edición).

Cosmografía precedida de nociones de mecánica: Lecciones de Cosmografía, por F. Tisserand y H. Andoyer (3ª. edición) y tratado elemental de Mecánica, por Jorge Maneuvrier (última edición).

Física: Curso elemental de Física, por Ganot y Maneuvrier (última edición).

Química y nociones de mineralogía: Noveau Precis de Chimie, Classes de Lettres, por Joly ct'Lespieau (última edición) y Reconocimiento de Sales, por A. Almaraz.

Botánica: Curso de Botánica, por G. Colomb (última edición).

Zoología: Historia natural de los animales, por Mílne Edwars (última edición).

Psicología: Elementos de Psicología, por Bradford Titchner, traducción del inglés por el Lic. Ezequiel A. Chávez (última edición).

Lógica: Lógica inductiva y deductiva, por el Dr. Porfirio Parra.

Moral: Resumen sintético de los Principios de Moral de Herbert Spencer, por el Lic. Ezequiel A. Chávez, (última edición).

Geografía: Apuntes de Geografía, por M. E. Schulz (última edición).

Historia General: Manual Escolar de Historia General, por el licenciado Justo Sierra.

Primer curso de Francés: « Tu serás commercant,» por Paul Matrat.

Segundo curso de Francés: «Tu serás prevoyant,» por Paul Matrat.

Primer curso de Inglés: Schweitzer Vincent. English Reader with Conversation exercises. Clases de cixiéme.

Segundo curso de Inglés: Schweitzer Vincent. English Reader with Conversation exercises. Clases de cinquiéme.

Tercer curso de Inglés: Schweitzer Vincent. English Reader with Conversation exercises. Clases de quatríéme y troisieme.

Raíces Griegas: Curso de Raíces Griegas, por Jesús Díaz de León. Se resuelve, además, que para los estudios de Geometría analítica y de cálculo infinitesimal que deben hacerse como parte del segundo curso de Matemáticas, las enseñanzas consistirán en el planteo y resolución de problemas elementales, aclarados y comentados por explicaciones orales de los profesores respectivos.

Enero 29 de 1908.- Inscripciones en las escuelas nacionales primarias para el año escolar de 1908.

Oficio relativo.

SECRETARÍA DEL DESPACHO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

Sección de Instrucción Secundaria, Preparatoria y Profesional.

En vista de las razones expuestas por usted en su oficio 15.350, fechado el 22 del mes actual, y de conformidad con lo que en el mismo se ha servido consultar, esta secretaría resuelve que las inscripciones en las escuelas nacionales primarias deberán comenzar en la semana anterior al mes de marzo.

Lo que comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, 29 de enero de 1908.– Justo Sierra. Rúbrica.– Al director general de Instrucción Primaria.– Presente.

Enero 10 de 1908.- Contrato celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. Manuel Mateos Alarcón, en la del Sr. F. E. Yoakum, para el aprovechamiento en beneficio y lavado de metales, de las aguas del Río del Fuerte, del Estado de Sinaloa.

Ar. 1º. Se autoriza al Sr. F. E. Yoakum, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la República y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar en beneficio y lavado de metales hasta la cantidad de quinientos (500) litros de agua por segundo, como máximum, del Río del Fuerte, en la Directoria del Toro, Distrito del Fuerte, del Estado de Sinaloa, tomando dichas aguas y devolviéndolas en el trayecto del rio comprendido en el rancho de los Ciruelos, teniendo por puntos extremos los siguientes: uno situado a 340 metros de la mitad de la pared Sur de la casa del Sr. Jesús Vega, con una dirección de 57 grados N.O., y el otro situado a 400 metros del medio de la pared indicada y con un rumbo de 17 grados S.E.

Art. 2º. Los conocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su Memoria descriptiva, los planos, y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3º. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a las construcciones de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 4º. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5º. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Sinaloa, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6º. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de setenta y cinco pesos ($75.00) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que dé principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7º. El concesionario tendrá el derecho de vía, por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8º. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará

gratuitamente conforme al inciso III del art. 3º de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9º. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósito, y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10°. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11°. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias, a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12°. El concesionario podrá impor-tar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de tos efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13°. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14°. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15°. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16°. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17°. El concesionario podrá emitir igualmente acciones Comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18°. En ningún tiempo y por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19°. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20°. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de dos mil pesos ($2,000.00) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlos en los plazos fijados en los artículos 2º y 3º.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22°. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23°. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en ningún, tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24°. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25°. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los Tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes e la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26°. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los diez días del mes de enero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Manuel Mateos Alarcón.– Rúbricas.

Es copia. México, 29 de enero de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Enero 15 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. José López Portillo y Rojas, en la del Sr. José María Guizar González, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas de la laguna de Quitupán o do Guadalupe, del Estado de Jalisco.

Art. 1º. Se autoriza al Sr. José María Guizar González, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, puede ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como riego, hasta la cantidad de quinientos sesenta y seis (566) litros de agua por segundo, como máximum, de la laguna de Quitupán o de Guadalupe, en su hacienda de san Diego, ubicada en la municipalidad de Quitupán, noveno cantón del Estado de Jalisco.

Art. 2º. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la Secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobado, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3º. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 4º. Una vez concluidas las obras hidráulicas, y aprobadas por la Secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5º. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o genera], siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Jalisco, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6º. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección con la suma de ochenta pesos ($80.00) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7º. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8º. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que había el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del artículo 3º de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9º. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las preven-

ciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10º. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11°. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias, a lo largo de sus instalaciones para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente, y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes, o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12°. El concesionario podrá impor-tar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13°. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare para otros usos alguno o alguno de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14°. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15°. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un periodo de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16°. El concesionario podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas, constituidos conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los concesionarios acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17°. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, Y disponer de ellos.

Art. 18°. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19°. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20°. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de dos mil ciento cincuenta pesos ($ 2,150.00),

en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes.

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 2º y 3º.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22°. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23°. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto deber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24°. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25°. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26°. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, quince de enero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– José López Portillo y Rojas.– Rúbricas.

Es copia. México, 25 de enero de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Enero 16 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Daniel Audiffred, para el arrendamiento de las lagunas Chacahua, Manialtepec, Corralero, Monroy, Jicaltepec y Minitán, y las Salinas, que en ellas existen, así como de los esteros los Limos, Minizo y Espejo, y el cerro de las Garzas, en las costas del Océano Pacífico, en el Estado de Oaxaca, para la explotación de la sal y caza del caimán y garza.

Art. 1º. El Ejecutivo de la Unión da en arrendamiento al Sr. Daniel Audiffred, o a la compañía que al efecto organice, con arreglo a las leyes mexicanas y sin perjuicio de tercero, las lagunas de Chacahua, Manialtepec, Corralero, Monroy, Jicaltepec, Minitán, el cerro de las Garzas que se encuentra en la laguna de Minitán, así como las salinas que se encuentran en dichas lagunas y son conocidas con los nombres siguientes: Manialtepec, Monroy, La Pastora, Grande, El Descabezadero, El Jícaro, Jicaltepec y Estancia Grande, y los esteros los Limos, Minizo Y Espejo.

Art. 2º. El objeto de este arrendamiento es que el Sr. Daniel Audiffred, o la compañía o compañías que al efecto organice, y sin perjuicio de tercero, establezca las obras necesarias para la cristalización de la sal y explotación de ésta, así como la caza del caimán y garza, dentro de los mismos lugares y en una zona, de diez kilómetros de tierra firme, pero en los terrenos que sean exclusivamente nacionales.

Art. 3º. El plazo del arrendamiento es de diez años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, prorrogables por igual término a solicitud del concesionario y a juicio de la secretaría de Fomento.

Art. 4º. El concesionario pagará a la jefatura de Hacienda del Estado de Oaxaca, las cuotas siguientes:

I. Cuarenta centavos ($ 0.40) por cada tonelada de sal que explote, comprometiéndose a explotar, por lo menos, cuatro mil (4,000) toneladas anuales, a partir del segundo año de arrendamiento.

II. Cinco pesos ($ 5.00) por tonelada de pieles de caimán, y sesenta centavos ($0.60), por cada una de las de grasa del mismo, que extraiga en los cinco primeros años, y ocho pesos ($ 8.00) por la de pieles y tres pesos ($3.00), por la de grasa en los años restantes.

III. Cinco pesos ($ 5.00) por cada millar de garzas.

Art. 5º. El concesionario se compromete a presentar a la secretaría de Fomento, dentro de los seis meses de la fecha de este contrato, el plano de las obras que pretenda establecer para la formación de las salinas; y dentro de los tres meses de la fecha de la aprobación de dicho plano, procederá a dar principio a la ejecución de las obras, debiendo comenzar la explotación, a más tardar, a los seis meses de la misma fecha.

Art. 6º. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, con un depósito de dos mil pesos ($ 2,000.00), en Bonos de la Deuda Pública Consolidada, que deberá constituir en el Banco Nacional de México, dentro de los ocho días de la fecha de su promulgación.

Art. 7º. El permiso que se concede por el presente contrato al Sr. Daniel Audiffred, para el establecimiento y explotación de salinas, y la caza de caimán y garza, no lo autoriza para efectuar ningún otro género de explotación.

Art. 8º. En el caso de que la intestamentaria Aguirre, que dice tener derechos a las salinas de la laguna de Jicaltepec, llegue a probarlos, dichas salinas serán segregadas del presente contrato, debiendo el concesionario entregarlas desde luego, y sin tener derecho a indemnización alguna.

Art. 9º. El concesionario queda obligado a respetar los derechos legítimamente adquiridos por particulares, en los lugares a que se refiere este contrato, y a permitir la caza a los cazadores pobres que, sin tener estación de caza en forma, vivan de esa industria.

Art. 10°. El concesionario queda obligado a no destruir y a no capturar, en ningún tiempo, las crías de todos los animales cuya caza se les concede, sino antes bien, a conservarlas para aumentar en cuanto fuere posible, los criaderos, respetando las épocas de veda, o sean las de procreación de dichos animales, y quedando obligado a devolver los citados criaderos una vez terminado este contrato, con todas las mejoras introducidas en ellos, sin que por esto tenga derecho a indemnización de ninguna especie.

Art. 11°. Queda obligado el concesionario a sujetarse a las leyes y reglamentos vigentes, o que en lo sucesivo se expidan sobre los ramos de caza y pesca.

Art. 12°. El concesionario queda obligado a hacer manifestaciones a las aduanas respectivas, de los productos de la caza, y a presentarlos a los agentes que vayan a bordo con este fin, autorizados por los administradores de dichas aduanas.

Art. 13°. El Ejecutivo tendrá el derecho de vigilar e inspeccionar, en todo tiempo, las explotaciones, los criaderos, la fábrica y demás dependencias, debiendo el concesionario proporcionarle los informes que se le pidan, y el gobierno hará respetar el contrato en la forma que determinen las leyes de la república, a cuyo efecto dictará, previo aviso del concesionario, las medidas conducentes para que sus derechos sean respetados, cualquiera, que sea la persona que pretenda violentarlos, pudiendo el concesionario, por sí o por medio de sus agentes, perseguir y apresar a los explotadores fraudulentos, dentro de la zona a que este contrato se refiere, para consignarlos a la autoridad competente.

Art. 14°. El concesionario se compromete a contribuir para los gastos de inspección, desde que dé principio a la caza, con la cantidad de ochocientos pesos ($800.00) anuales, que entregará adelantados a la tesorería general de la Federación; en el concepto de que por falta de pago de las anualidades correspondientes, dicha oficina hará uso de la facultad económico-coactiva.

Art. 15°. El concesionario se compromete a rendir anualmente un informe detallado acerca de las operaciones que hubiere practicado en el año, especificando las cantidades de productos exportados.

Art. 16°. Se obliga el concesionario a cumplir con las disposiciones que dicte la secretaría de Hacienda, para vigilar los intereses fiscales, no pudiendo rehusarse tampoco a que la misma secretaría y la de Fomento hagan inspeccionar los terrenos y aguas en que se verifiquen las explotaciones, a fin de cerciorarse de que se ejecutan conforme a las estipulaciones relativas o que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.

Art. 17°. El concesionario no podrá, en ningún caso ni en tiempo alguno, traspasar, enajenar o hipotecar las concesiones del presente contrato, ni admitir como socio a ningún gobierno o Estado extranjero o agente de él. Cualquiera estipulación en el sentido contrario será nula y sin ningún valor, y perderá el concesionario todo derecho a las propiedades y obras que hubiere emprendido. Puede, sin embargo, traspasar, con anuencia previa del gobierno, a individuos o asociaciones particulares, las concesiones de este contrato.

Art. 18°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito en la fecha que cita el art. 6º, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar las explotaciones dentro del plazo que fija el art. 5º.

II. Por interrumpir las explotaciones por más de seis meses, sin causa debidamente justificada.

III. Porque se compruebe al concesionario que defrauda los derechos fiscales.

IV. Por no sujetarse a las leyes, reglamentos y disposiciones que, sobre los ramos de caza y pesca, expidiere el gobierno Federal.

V. Por explotar las crías o no respetar las épocas de veda.

VI. Por contravenir lo dispuesto en el art. 9º.

VII. Por traspasar este contrato sin los

requisitos que establece el art. 16º.

VIII. Por traspasarlo o admitir como socio a algún gobierno o Estado extranjero o agente de ellos.

IX. Por no presentar en las aduanas respectivas las manifestaciones o productos de la caza.

En todos los casos de caducidad, el concesionario perderá el depósito, sin perjuicio de las otras penas en que hubiere incurrido; y en el caso del inciso VII, además de la nulidad del acto y de la caducidad del contrato, el concesionario perderá las herramientas, aparatos, edificios, etc., etc., empleados en la explotación.

Art. 19°. La caducidad será declarada administrativamente, oyendo previamente al concesionario para su defensa.

Art. 20°. El concesionario o la compañía o compañías que en su caso organice, serán siempre considerados como mexicanos, aun cuando todos o alguno de sus miembros fuesen extranjeros, y estarán sujetos a la jurisdicción de los Tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto de los asuntos relacionados con este contrato derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 21°. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones.

La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de seis meses de haber éste tenido lugar, y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá ya alegar el concesionario la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reanudación de los trabajos

Art. 22°. Las estampillas de este contrato serán pagadas por el concesionario.

Es hecho por duplicado en la ciudad de México, a los dieciséis días del mes de enero del año de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Daniel Audiffred.– Rúbricas.

Es copia. México, 20 de enero de 1908.- A. Aldasoro.– Rúbrica.

Enero 17 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el C Lic. Luis Méndez, apoderado jurídico de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, denominada antes La Compañía Empacadora do los Estados Unidos, The United States Packing Company, cesionaria del contrato celebrado el 4 de Abril de 1903, con The North American Beef Company, para el establecimiento de dos fábricas de diversos productos, utilizando los desechos animales, y dos casas empacadoras de carnes; para reformar este Contrato y los de reforma celebrados en 15 de noviembre de 1905, 17 de marzo y 24 de noviembre de 1906, y 21 de junio de 1907.

Art. 1º. Se prorrogan por seis meses los plazos señalados en los artículos 4º y 7º del contrato de 21 de junio de 1907, para que la compañía avise a la secretaría de Fomento en qué lugar, sea del Estado de Hidalgo, o del de México, o del de Querétaro, erigirá la

fábrica y empacadora a que está obligada por el mismo contrato, y para terminar definitivamente la misma fábrica y empacadora.

Art. 2º. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato original de fecha 4 de abril de 1903, así como los de los contratos de reforma de fecha 15 de noviembre de 1905, 17 de marzo y 24 de noviembre de 1906, y 21 de junio de 1907, que no se modifican por el presente.

Art. 3º. Las estampillas de este contrato sé pagarán por la compañía.

Hecho por duplicado en la ciudad de México, a los diecisiete días del mes de enero del año de mil novecientos ocho.– O. Molina.– L. Méndez.– Rúbricas.

Es copia. México, 23 de enero de 1908.– A. Aldasoro.

Enero 22 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Señor Eduardo Castañeda, en la del Sr.- Jesús Cárdenas, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio Guayalejo, del Estado de Tamaulipas.

Art. 1º. Se autoriza al Sr. Jesús Cárdenas, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la República y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para Utilizar en el riego de los terrenos de la Hacienda de Santa Agapita, las aguas del río Guayalejo, en el Municipio de Llera, del Estado de Tamaulipas, y en cantidad hasta de ciento cincuenta y seis litros por segundo, como máximum, tomando dichas aguas por medio de la toma de la referida hacienda, propiedad del concesionario.

Art. 2º. Los conocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su Memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario, con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3º. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4º. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5º. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Tamaulipas, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6º. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de treinta pesos ($30.00) mensuales, que pagará adelantados en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la

construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos, en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7º. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8º. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3º de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9º. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10°. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11°. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias, a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12°. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la Secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13°. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14°. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15°. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16°. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario por

el presente contrato.

Art. 17°. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18°. En ningún tiempo y por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19°. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para qué se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20°. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de ochocientos pesos ($800.00) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlos en los plazos fijados en los artículos 2º y 3º.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22°. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por, los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23°. Las obligaciones que contrae el concesionario, respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y Pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24°. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25°. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los Tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los

asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26°. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos ocho. – 0. Molina.– Eduardo Castañeda.– Rúbricas.

Enero 30 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Barón de Catllá, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río de Los Naranjos, del Estado de san Luis Potosí.

Art. 1º. Se autoriza al señor Barón de Catllá para que por sí, o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como fuerza motriz, hasta la cantidad de veinte mil (20,000) litros de agua por segundo, como máximum, del río de los Naranjos, en el Distrito de Valles, del Estado de San Luis Potosí, en el trayecto del río comprendido entre un punto situado a cien metros abajo de los rápidos que se encuentran a cuatro kilómetros de la Estación de Micos, del Ferrocarril san Luis a Tampico, y otro punto situado a cuarenta kilómetros rio arriba.

Art. 2º. Para la transmisión de la energía eléctrica el concesionario queda autorizado para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados de la manera más apropiada.

Art. 3º. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de tres meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de nueve meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su Memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4º. Dentro del plazo improrrogable de doce meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 5º. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el tituló que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 6º. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de san Luis Potosí, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7º. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspec-

ción con la suma de cuatrocientos pesos ($400.00) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8º. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9º. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 1º de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 10°. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11°. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12°. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar, libremente, y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren, sobre construcción y explotación de las líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13°. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones qué fije la de Fomento.

Art. 14°. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15°. Durante cinco años contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16°. Queda el concesionario en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los contratos y convenios que juzgue convenientes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose, para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento para su examen y aprobación, sin perjuicio de que el concesionario haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía eléctrica en industrias que sean de su propiedad.

Art. 17°. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos,

quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18°. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república; siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 19°. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 20°. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 21°. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se Entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 22°. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000.00) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 23°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajo de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 3º y 4º.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero o por admitirlo como socio.

Art. 24°. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 25°. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto deber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 26°. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 27°. El concesionario y la compañía mexicana que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28°. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos ocho. – O. Molina.– El Barón de Catllá.– Rúbricas.

Es copia. México, 10 de febrero de 1908. – A. Aldasoro. – Rúbrica.

Febrero 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. Lic. Luis Méndez, en representación de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, para establecer en la república almacenes, refrigeradores, depósitos y mercados para refrigerar, conservar y distribuir productos alimenticios de acuerdo con la facultad que concede al Ejecutivo la ley de 15 de diciembre de 1903.

Art. 1º. El Sr. Lic. Luis Méndez, en representación de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, se obliga a establecer, en la república, dos almacenes refrigeradores y cuatro mercados o depósitos para la propia refrigeración, conservación y manejo de productos alimenticios:

Art. 2º. Son condiciones esenciales de este contrato:

I. Establecer en la república los dos almacenes y los cuatro, mercados mencionados, con las instalaciones y dependencias que fueren necesarias.

II. Invertir en el establecimiento de estos almacenes y mercados, cuando menos doscientos mil pesos ($ 200,000.00), durante el término de este contrato.

Art. 3º. Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se promulgue este contrato, la compañía someterá a la aprobación de la Secretaría de Fomento los proyectos de las instalaciones, edificios y dependencias de los almacenes y mercados, acompañados de los planos y memorias descriptivas que los ilustren suficientemente, e indicando en qué lugar de la república los va a establecer.

Art. 4º. La construcción de los almacenes y mercados principiará a los seis meses y terminará a los dos años, contados uno y otro plazo, desde la fecha en que se aprueben los Proyectos respectivos, estando obligado el concesionario a dar aviso a la secretaría de Fomento un mes antes de emprender la construcción.

Art. 5º. Queda entendido que los almacenes y mercados se erigirán con entera sujeción a las prevenciones del Código Sanitario, respecto a fábricas y establecimientos industriales, observándose siempre las prescripciones que a este respecto dictare la autoridad competente.

Art. 6º. La compañía se obliga a comprobar, a juicio de la Secretaría de Fomento, la inversión del capital a que se refiere el inciso II del artículo 2º.

Art. 7º. La compañía podrá establecer otros almacenes y mercados como los de que se trata, en los lugares de la república que conviniere a sus intereses; pero siempre recabará previamente la aprobación de la secretaría de Fomento.

Queda entendido que para que estos nuevos almacenes y mercados gocen de las franquicias concedidas por la ley, se han de

comenzar y terminar dentro del plazo de la duración de este contrato. Para cada uno de esos almacenes y mercados se invertirá el capital que sea necesario, a juicio de la compañía, dando aviso previo de su monto a la secretaría de Fomento y comprobando ante ella dicha inversión.

En cada caso, se sujetarán a la aprobación de la misma secretaría de Fomento, los proyectos, planos y Memorias descriptivas de las construcciones e instalaciones que se pretenda hacer.

Art. 8º. Queda asimismo obligada la compañía a admitir en sus almacenes y dependencias dos alumnos de las escuelas nacionales, cada vez que el gobierno lo designe para que hagan los estudios relativos a la refrigeración de alimentos y métodos empleados, debiéndoles proporcionar todos los datos necesarios para su aprovechamiento. Admitirá igualmente las visitas periódicas que hagan a los almacenes y mercados los alumnos de las escuelas nacionales, cuando lo soliciten los directores respectivos por el conducto debido.

Art. 9º. Si el gobierno necesitare para su servicio de cualesquiera de los almacenes refrigeradores a que alude este contrato, la compañía se obliga a cederle la mitad de la capacidad total de cada uno de ellos, con un descuento de un diez por ciento de la tarifa general que señale para el público

Art. 10°. Queda igualmente obligada la compañía a enviar a la secretaría de Fomento los informes y datos estadísticos que le pida sobre la Negociación en general, y procedimientos empleados en la refrigeración.

Art. 11°. La secretaría de Fomento tiene la facultad de inspeccionar los trabajos de construcción de los edificios, almacenes y dependencias, y el establecimiento de las maquinarias; y al efecto, comisionará un Ingeniero inspector. Para el pago de honorarios y gastos inherentes al servicio de inspección, la compañía contribuirá con la suma de mil quinientos pesos ($1,500.00) anuales que entregará en la tesorería general de la Federación, por semestres adelantados, comenzando desde que principien los trabajos de construcción. Para hacer efectiva esta obligación, la tesorería usará de la facultad económico-coactiva, si fuese necesario.

Art. 12°. La intervención del inspector no cesa durante la vigencia de este contrato; pero la compañía sólo estará obligada a contribuir para los gastos de inspección, hasta que los almacenes y mercados, con sus dependencias, sean entregados en plena explotación a la secretaría de Fomento.

Art. 13°. El inspector certificará que los materiales de construcción, maquinaria y demás efectos que se importen por la compañía, son adecuados al objeto a que se le destina, de acuerdo con este contrato, a fin de que se cancelen las fianzas que se otorguen al hacer la introducción.

Es obligación de la compañía proporcionar al inspector todos los datos y facilidades necesarias para que pueda efectuar el examen y estudio que requiera el desempeño de su cometido.

Art. 14°. Para garantizar las obligaciones a que se refiere el presente contrato, a los ocho días de la fecha en que se firme, la compañía depositará en el Banco Nacional de México, la cantidad de cinco mil pesos ($5,000.00) en títulos de la Deuda Consolidada.

Este depósito se devolverá cuando la secretaría de Fomento declare cumplidas las obligaciones que se estipulan en este contrato.

Art. 15°. La compañía tendrá siempre en esta capital un representante ampliamente facultado, para que el gobierno se entienda con él en todo lo relativo a este contrato.

Art. 16°. En ningún caso ni en tiempo alguno, podrá la compañía traspasar, enajenar o hipotecar las concesiones del presente contrato, a ningún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio. Tampoco podrá traspasar, enajenar o hipotecar las mismas concesiones, en todo o en parte, sin previo permiso del gobierno, a individuos o asociaciones particulares; pero puede emitir

libremente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones.

Art. 17°. La compañía podrá importar, libres de derechos, las máquinas, aparatos, útiles y materiales de construcción necesarios para la erección de los edificios y mercados. Igualmente podrá introducir, por una sola vez, para cada uno de éstos almacenes o mercados, el material necesario para su alumbrado eléctrico y para la extinción de incendios.

A este fin la compañía presentará oportunamente a la secretaría de Fomento, de acuerdo con los modelos que ésta ha adoptado, una Memoria y listas pormenorizadas triplicadas, de los efectos que dentro de esta concesión se pretenda introducir libremente para las instalaciones y la construcción. En dichas listas se especificará claramente el número, cantidad y calidad de los efectos, explicando el uso a que se destinan y el porqué de las cantidades que se piden. Se acompañarán dibujos, diseños y detalles de las maquinarias y aparatos, y la secretaría de Fomento, previos examen y calificación, determinará si dichos efectos, maquinarias y aparatos, son apropiados a su objeto, de conformidad con este contrato, y en este caso fijará las cantidades que la compañía pueda importar libres de derechos. Esta resolución se comunicará a la secretaría de Hacienda para que, en su oportunidad, transmita las órdenes correspondientes a las aduanas por donde se haga la introducción, entendiéndose que sin la presentación de esas listas y Memorias, la secretaría de Fomento no aprobará ninguna introducción de efectos.

Para la importación libre de derechos de efectos amparados por esta concesión, la compañía observará las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda; entendiéndose que la franquicia de importación de que se trata, sólo subsistirá durante el período de la construcción de los edificios e instalación de la maquinaria, y que la cancelación de fianzas que hubieren de otorgarse en las aduanas por donde se hagan las importaciones, se hará cuando se haya montado la maquinaria y se haya acreditado el empleo de los efectos introducidos, con el certificado del inspector, según lo previene el art. 13° de este contrato.

Art. 18°. Los efectos importados al amparo de la concesión, objeto de este contrato, no podrán ser vendidos por la compañía, sin autorización previa de la secretaría de Hacienda, y por lo mismo, la falta de observancia de esta prescripción, hará incurrir a la empresa en el delito de contrabando y la sujetará a las penas que señalan las leyes.

Art. 19°. El inspector del gobierno puede exigir, en cualquier tiempo, que se proceda a la formación del inventario, para comprobar que existen en los almacenes de la empresa los efectos importados al amparo de la concesión y que aún no hayan sido utilizados.

El mismo inspector tiene la facultad de examinar los libros de contabilidad, los comprobantes y la correspondencia comercial, a efecto de averiguar los hechos que importe conocer al gobierno para la seguridad de los intereses fiscales.

Art. 20°. Durante diez años, que serán los de la duración de este contrato, contados desde la fecha de su promulgación, los capitales que se inviertan en la construcción de los edificios, establecimiento y explotación de la industria, así como las propiedades directa y exclusivamente aprovechadas, como almacenes o mercados, y las acciones y bonos que emita la compañía, gozarán de exención de todo impuesto federal directo, excepto los del Timbre.

Art. 21°. La compañía será considerada como mexicana en todo lo que a este contrato se refiere, aun cuando todos o algunos de los miembros que la formen fuesen extranjeros, y estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca se podrá alegar, respecto de los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma qué sea, y sólo se tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la

república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 22°. Este contrato quedará insubsistente:

Por no hacer el depósito de que habla el art. 14°, en la cantidad y en los términos que el propio artículo previene, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no presentar los proyectos y Memorias descriptivas dentro del plazo que fija el art. 3º.

II. Por no comenzar las construcciones e instalaciones en el tiempo que fija el art. 4º.

III. Por suspender los trabajos de construcción e instalaciones, por más de dos meses, sin causa debidamente justificada.

IV. Por no invertir el capital que se estipula en el inciso II del art. 2º.

V. Por suspender la explotación de los almacenes o mercados, por más de seis meses, sin causa justificada.

VI. Por traspasar este contrato sin permiso del Gobierno.

VII. Por traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero o admitirlo como socio.

Art. 23°. Si la caducidad se declarare por cualesquiera de los motivos que expresan las fracciones I. II, III, IV, V, y VI, la compañía perderá el depósito y las concesiones y franquicias que otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción VII, la compañía incurrirá en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso, la caducidad será declarada administrativamente; pero antes de hacer la declaración respectiva, la secretaría de Fomento concederá a la compañía un término prudente para exponer su defensa.

Art. 24°. Los plazos y condiciones señalados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose prorrogados por todo el tiempo que dure el impedimento y dos meses más. En cualesquiera de dichos casos, la compañía presentará al Ejecutivo Federal las noticias y pruebas de haber ocurrido un caso fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, en el término de tres meses de haber empezado el impedimento, comprobando asimismo que desde luego ha procedido a remover la causa o causas del impedimento.

Por el solo hecho de no presentar tales noticias y pruebas en el tiempo señalado, no podrá ya alegarse por la compañía, en tiempo alguno, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Art. 25°. Este contrato lleva estampillas por valor de mil cuarenta pesos ($1,040.00), pagadas por el interesado, y se adhieren las matrices correspondientes de ellas en el original, y los talones en el duplicado.

Hecho por duplicado, en la ciudad de México, a los once días del mes de febrero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– L. Méndez.– Rúbricas.

Es copia. México, Febrero 11 de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.– Rúbrica.

Abril 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. José Ballesteros Pliego, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río de la Compañía, del Estado de México.

Art. 1º. Se autoriza al Sr. José Ballesteros Pliego, para qué por sí, o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como fuerza motriz, hasta la cantidad de tres metros cúbicos de agua por segundo, como máximum, del río de la Compañía, del Estado de México, en el

trayecto del río comprendido entre la hacienda de Suchitepec, hasta el pueblo de san José Malacatepec.

Art. 2º. El concesionario se obliga a respetar todos los derechos constituidos, y especialmente los de la Sra. María de Jesús Madrid, viuda de Pliego, y de sus menores hijas Guadalupe y Clara Pliego; los del ayuntamiento de san José Malacatepec, y los del Sr. Trinidad Bueno, quienes se opusieron a la solicitud, y que el concesionario asegura que no resentirán perjuicio alguno al otorgarse la concesión.

Art. 3º. Para la transmisión de la energía eléctrica, el concesionario queda autorizado para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados de la manera más apropiada.

Art. 4º. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de dos meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de ocho meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 5º. Dentro del plazo improrrogable de diez meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los cinco años, contados desde la misma fecha.

Art. 6º. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la Secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art 7º. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de México, o ya de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 8º. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección con la suma de doscientos noventa pesos ($ 290.00) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 9º. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 10°. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3º de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 11°. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos

Civiles Federales.

Art. 12°. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 13°. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar, libremente, y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren, sobre construcción y explotación de las líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 14°. El concesionario podrá impor-tar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, la lista general por triplicado, pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 15°. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, pues si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos; sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 16°. Durante cinco años contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 17°. Queda el concesionario en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los contratos y convenios que juzgue convenientes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose, para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la Secretaría de Fomento para su examen y aprobación, sin perjuicio de que el concesionario haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía eléctrica en industrias que sean dé su propiedad.

Art. 18°. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un periodo de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según tos precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 19°. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república; siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art 20°. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, Y disponer de ellos.

Art. 21°. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo cómo socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese

objeto.

Art. 22°. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 23°. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000.00) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 24°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 4º y 5º.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 25°. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 26°. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de las obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 27°. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 28°. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 29°. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, catorce de febrero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– José Ballesteros Pliego.– Rúbricas.

Es copia. México, 7 de abril de 1908. – El subsecretario, A. Aldasoro.– Rúbrica.

Abril 13 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Alejandro Arena, en representación de la Sra. Soledad Toriello, viuda de Arena, reformando el celebrado el 23 de octubre de 1907, para aprovechar, como fuerza motriz, las aguas del rio Higuerón, del Estado de Morelos.

Art. 1º. Se reforma el artículo primero del contrato celebrado en 23 de octubre de 1907, entre el C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Alejandro Arena, en la de la Sra. Soledad Toriello, viuda de Arena, en los términos siguientes:

Se autoriza a la Sra. Soledad Toriello, viuda de Arena, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como fuerza motriz, hasta la cantidad de once mil litros de agua por segundo, como máximum, del río Higuerón en el distrito de Juárez, del Estado de Mórelos, en el trayecto del río comprendido entre un punto inferior a la toma del pueblo de Tlaltizapán y cincuenta metros río arriba de la toma del "Llano de Tlaquiltenango;" en el concepto de que esta concesión queda subordinada a las otorgadas con anterioridad por la secretaría de Fomento, y a la que se otorga al Sr. Lic. Joaquín J. de Araoz para aprovechar el agua en el riego de terrenos de su propiedad.

Art. 2º. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma. .

Art. 3º. Las estampillas de ese contrato se pagarán por la concesionaria.

México, diez y seis de febrero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Alejandro Arena.– Rúbricas.

Es copia. México, 13 de abril de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Febrero 21 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor James P. Taylor en la del Sr. Harry J. Earle, reformando el celebrado en 26 de septiembre de 1907, para la explotación del guano, en las islas que se expresan, situadas en las costas del territorio de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Art. 1º. Se segrega del contrato de 26 de septiembre de 1907, la isla denominada Cayo Arenas, situada frente de las costas de Yucatán.

Art. 2º. Se autoriza al Sr. Harry J. Earle o a la compañía que al efecto organice, con arreglo a las leyes mexicanas, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, para que durante el periodo de diez años, contados desde la fecha de la publicación del contrato anterior, a que se refiere esta reforma, pueda explotar el guano en las islas Contoy a los 21°32' latitud Norte y 12°17' longitud Este de México; Cancún a los 21°6' latitud Norte y 12°18' longitud Este de México; Chinchorros a los 18°22' y 18°50' latitud Norte y los 11°38' y los 11°50' de longitud Este de México; Alacranes a los 22°23' latitud Norte y 9° 14' longitud Oriental de México y del grapa de aquélla, las islas Desterrada, al Norte, Cornezuelo al Sur y Oeste, y Pérez en el centro, así como en la isla Arenas a los 20°37' latitud Norte, y 8°38' longitud Este.

Art. 3º. Las estampillas de este contrato serán expensadas por el interesado.

Hecho por duplicado en la ciudad de México, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos ocho.– 0. Molina.– J. P. Taylor.– Rúbricas.

Es copia. México, 22 de febrero de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Febrero 21 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Gabriel F. Martínez, en la del Sr. Miguel Peón, como cesionario de la Sra. Ernestina Rubio, viuda de Isita, reformando el celebrado con dicha señora, el 20 de diciembre de 1906, para usar, como riego, las aguas torrenciales del río san Juan del Río, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, en la Hacienda de san Antonio y su Anexa Agua Zarca.

Art. 1º. Se reforma el art. 1º del contrato celebrado con la Sra. Ernestina Rubio, viuda de Isita, en 20 de diciembre de 1906, para usar, como riego, las aguas torrenciales del río de san Juan del Río, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, en la forma siguiente:

Se autoriza al Sr. Miguel Peón, como cesionario del contrato celebrado con la Sra. Ernestina Rubio, viuda de Isita, para que sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda aprovechar, en el riego de los terrenos de la Hacienda de san Antonio y su anexa Agua Zarca, la cantidad de seis millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento veinticinco (6.646,125) metros cúbicos por año, de las aguas torrenciales del río de san Juan del Río, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro; construyendo al efecto las obras hidráulicas necesarias en el trayecto comprendido entre la loma llamada de Tasthó, y la vereda de Tejocote, en el Distrito de Jilotepec, del Estado de México.

Podrá, por lo mismo, derivar del río un volumen hasta de setecientos setenta (770) litros por segundo, como máximum, de dichas aguas.

Art. 2º. Se reforma el art. 4º en los términos siguientes.

Dentro del plazo que terminará el 18 de enero de 1909, el concesionario dará principio a las obras, de acuerdo con los planos que apruebe la secretaría de Fomento.

Las obras deberán terminarse, a más tardar, dentro del plazo de seis años, que terminarán el 18 de enero de 1914.

Art. 3º. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma.

Art. 4º. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos ocho.– 0. Molina.– Gabriel F. Martínez.– Rúbricas.

Es copia. México, 25 de febrero de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Febrero 25 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Gabriel F. Martínez, en la del Sr. Miguel Peón, reformando el celebrado el 18 de diciembre de 1906, para usar, como riego, las aguas torrenciales del río san Juan del Rio, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro.

Art. 1º. Se reforma el art. 1º del contrato celebrado con el Sr. Miguel Peón, en 18 de diciembre de 1906, para usar, como riego, las aguas torrenciales del río de san Juan del Río, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, en la forma siguiente:

Se autoriza al Sr. Miguel Peón, para que, sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda aprovechar en el riego de los terrenos de la Hacienda del Cazadero, la cantidad de treinta y un millones doscientos veintiocho mil ciento veinticinco (31.228,125) metros cúbicos por año, de las aguas torrenciales del rio de san Juan del Río, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro; construyendo al efecto las obras hidráulicas necesarias en el trayecto comprendido entre la toma llamada de Taxthó y un punto situado a setecientos metros, aproximadamente rio abajo de la vereda del Tejocote, en el Distrito de Jilotepec, del Estado de México.

Podrá, por lo mismo,

Derivar del río un volumen hasta de

cinco mil (5,000) litros por segundo, como máximum, de dichas aguas.

Art. 2º. Se reforma el art. 4º en los términos siguientes:

Dentro del plazo que terminará el 22 de enero de 1909, el concesionario dará principio a la construcción de las obras de acuerdo con los planos que apruebe la secretaría de Fomento.

Las obras deberán terminarse, a más tardar, dentro del plazo de seis años, que terminarán el 22 de Enero de 1914.

Art. 3º. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma.

Art. 4º. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Gabriel F. Martínez.– Rúbricas.

Es copia. México, 25 de febrero de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Enero 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de listado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el ciudadano Lic. Benito Juárez, para la explotación del guano, en las islas Duncán, Rasa, san Marlín, Elide, san Jerónimo, san Luis y Adelaida, en el Océano Pacifico.

Art. 1º. Se autoriza al Sr. Benito Juárez, o a la compañía que al efecto organice, con arreglo a las leyes mexicanas y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, para que durante el período de diez años, contados desde la fecha de la publicación de este contrato, pueda explotar el guano en las islas Duncán, a los 107° de longitud Oeste y 5°80' de longitud Norte del Meridiano de Greenwich; Rasa, al Norte de la Punta más septentrional de la isla Sal Sipuedes; san Martin, entre los 36°29' y los 116°08'; Élide, a los 28°39' de longitud y a los 114°l6' de longitud; san Jerónimo, a los 29°47' de latitud Norte y los 115°48' de longitud Oeste del mismo meridiano; san Luis, a los 29°58' de latitud y los 15°19' de longitud Oeste de México, y Adelaida, a los 28°37' de latitud y los 144°10' de longitud Oeste de Greenwich.

Art. 2º. Si por negociaciones diplomáticas con otra nación, el gobierno creyere conveniente modificar o retirar la concesión por lo que respecta a la isla Duncán, podrá hacerlo en cualquier tiempo, dándose aviso al concesionario con un mes de anticipación para que entregue la isla, sin que por ello tenga derecho a indemnización de ninguna especie.

Art. 3º. El concesionario se compromete a respetar las concesiones otorgadas por esta secretaría, para la pesca, la explotación de la concha-perla y demás aprovechamientos diferentes de la explotación del guano.

Art. 4º. Para la explotación legal del guano en las islas mencionadas, el concesionario registrará sus operaciones en la aduana de Ensenada, distrito Norte de la Baja California.

Art, 5º. El concesionario pagará al gobierno federal setenta y cinco centavos ($0.75) por tonelada de guano que extraiga, previo arqueo del buque de embarque en la aduana mencionada, la cual percibirá las cantidades procedentes de la referida extracción y extenderá el certificado correspondiente.

Art. 6º. El concesionario se obliga a observar los reglamentos y demás disposiciones que dicten las secretarías de Hacienda, Guerra y Fomento, para la vigilancia de la explotación y exacto cumplimiento de este contrato.

Art. 7º. El concesionario pagará en la aduana respectiva los derechos de exportación del guano que desee extraer, sujetándose estrictamente, en exportación, a las Ordenanzas de aduanas y demás leyes y disposiciones relativas, actualmente en vigor o que se expidan en lo de adelante. La falta de observancia de dichas leyes y disposiciones será castigada con las penas que ellas mismas establecen, sin que pueda alegarse por el concesionario excepción

alguna, con motivo de las estipulaciones del presente contrato.

Art. 8º. Queda obligado el concesionario a dar principio a los trabajos de exploración, dentro del preciso término de doce meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato; a comenzar la explotación dentro de los doce meses siguientes y a presentar, dentro de igual término, los planos de las islas.

Art. 9º. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente contrato, con un depósito de tres mil pesos($3,000.00) en bonos de la Deuda Nacional Consolidada, que constituirá en el Banco Nacional de México, dentro de un mes contado desde la fecha de este contrato.

Art. 10°. El concesionario o la compañía que al efecto organice, se comprometen a no traspasar el presente contrato a un particular o a otra compañía sin previo permiso del Ejecutivo Federal. Bajo ningún concepto podrán traspasarlo a ningún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte en este sentido, y caducando desde luego, por ese solo hecho, este contrato.

Art. 11°. El concesionario y la compañía que en su caso organice, serán siempre considerados como mexicanos, aun cuando todos o alguno de sus miembros sean extranjeros, y estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio. Nunca podrán alegar, respecto de los asuntos relacionados con el presente contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consecuencia, tener injerencia alguna en dichos asuntos, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 12°. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de los plazos de este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al Ejecutivo las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de dos meses, contados desde que comenzó el impedimento. Por el solo hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro del término señalado, no podrá alegarse por él concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor. Queda obligado igualmente el concesionario a presentar a la Secretaría de Fomento, las noticias y pruebas de que han continuado los trabajos en el acto, o dos meses después de haber cesado el impedimento.

Solamente se abonará al concesionario el tiempo que hubiere durado el impedimento, o a lo sumo, dos meses más.

Art. 13°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito de garantía dentro del plazo señalado en el artículo noveno, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo octavo.

II. Por interrumpir la explotación por más de seis meses consecutivos, sin causa justificada.

III. Por no hacer el entero de la cuota que se fija como precio del arrendamiento, o porque se compruebe al concesionario, defrauda los intereses fiscales de explotación o importación.

IV. Por traspasar este contrato sin previo permiso del Ejecutivo.

V. Por traspasarlo o admitir como socio a algún gobierno o Estado extranjero, o agente de él.

Art. 14°. La caducidad será declarada administrativamente por el Ejecutivo, oyendo previamente al concesionario para su defensa. En todos los casos de caducidad, el concesionario perderá el depósito, sin perjuicio de la aplicación de las otras penas

en que hubiere incurrido, y en el caso del inciso V, además de la nulidad del acto y de la caducidad del contrato, el concesionario perderá el guano, embarcaciones, herramientas y demás útiles empleados en la explotación.

Art. 15°. El Ejecutivo por medio de sus empleados federales, podrá hacer visitar las islas en que se haga la explotación, cada vez que lo juzgue conveniente, y el concesionario producirá todos los informes que se le pidan, así como un informe anual del estado de la negociación.

Art. 16°. El concesionario se compromete a prestar su cooperación al gobierno para evitar la explotación fraudulenta del guano y de otras substancias de las islas, facilitando las embarcaciones que tuviere, llegado el caso de necesitarse su auxilio.

Art. 17°. En concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 18°. El concesionario se compromete tener en esta capital muestras del guano que explote.

Art. 19°. Las estampillas de este contrato serán pagadas por el concesionario.

Hecho, por duplicado, en la ciudad de México, a los veintiséis días del mes de febrero de mil novecientos ocho. – 0. Molina. – Benito Juárez. – Rúbricas.

Es copia. México, 27 de febrero de 1908. – A. Aldasoro. – Rúbrica.

Febrero 29 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. Jesús J. Portugal, en la del Sr. Manuel J. Vázquez, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río de la Cuchara, del Estado de Oaxaca.

Art. 1º. Se autoriza al Sr. Manuel J. Vázquez, para que por sí, o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias, para utilizar, como riego, en unos terrenos de su propiedad, ubicados en el pueblo de la Cuchara, hasta la cantidad de treinta (30) litros de agua por segundo, como máximum, del río de la Cuchara, en el distrito de Tlaxiaco, municipalidad de Putla, del Estado de Oaxaca, en el trayecto del río comprendido entre el Paso de Tlaxiaco al Paso para el Barro.

Art. 2º. Los conocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la Secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los pianos se devolverá al concesionario, con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3º. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4º. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la Secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5º. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes

que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Oaxaca, o va de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6º. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de diez pesos ($10.00) mensuales, que pagará adelantados en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7º. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8º. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3º de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9º. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10°. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11°. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias, a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12°. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13°. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14°. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15°. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas

en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16°. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los concesionarios acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario por el presente contrato.

Art. 17°. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18°. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19°. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20°. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de doscientos pesos ($200.00) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21°. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los artículos 2º y 3º.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio,

Art. 22°. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23°. Las obligaciones que contrae el concesionario, respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento,

haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los veintinueve días del mes de febrero de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Lic. J. J. Portugal.– Rúbricas.

Es copia. México 11 de marzo de 1908.– A. AIdasoro.– Rúbrica.

Marzo 4 de 1908.- Contrato celebrado para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Duero, del Estado de Michoacán.

Contrato celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Lic. José N. Macías, en representación del C. Rafael García, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Duero, del Estado de Michoacán.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Rafael García para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la República y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias, para utilizar, como fuerza motriz, hasta fa cantidad de ocho mil (8,000) litros de agua por segundo, como máximum, del río Duero, en el Distrito de Zamora, del Estado de Michoacán, en el trayecto del rio comprendido entre el punto en «The Guanajuato Power and Electric Co.,» devuelve al río las aguas que aprovecha, y otro situado como a 600 metros abajo del punto de derivación. El concesionario deberá ejecutar las obras necesarias a fin de evitar cualquier perjuicio de tercero, pues en caso contrario, quedará insubsistente la concesión.

Art. 2. Para la transmisión de la energía eléctrica, el concesionario queda autorizado para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados, de la manera más apropiada.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de los seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al

concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 6. El concesionario podrá construir, sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento, para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Michoacán, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del Ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuatrocientos pesos ($400) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de qué el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que se necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá exponerlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente, y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la Secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fija la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la Secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este

contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. Queda el concesionario en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los contratos y convenios que juzgue convenientes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose, para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento, para su examen y aprobación, sin perjuicio de que el concesionario haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía hidráulica o eléctrica en industrias que sean de su propiedad.

Art. 17. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a la leyes de la república, siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 19. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 20. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o a Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 21. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 22. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000), en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 23. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III Por suspender la construcción de las obras por seis meses consecutivos, sin permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero o por admitirlo como socio.

Art. 24. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de

cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 25. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar, al gobierno general, las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal, las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 26. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes, y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 27. El concesionario o la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, cuatro de marzo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– José N. Macías.– Rúbricas.

Es copia. México, marzo 11 de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Marzo 24 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr, Lic. Francisco Alfaro, por la Compañía "A. B. Adama Incorporated," reformando el celebrado el 28 de febrero del año próximo pasado, relativo al aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Balsas del Estado de Guerrero.

Art. 1. Se reforma el art. 5° del contrato de fecha 28 de febrero del año próximo pasado, celebrado entre la secretaría de Fomento y el señor Lic. Francisco Alfaro, por la compañía «A. B. Adams Incorporated,» para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas de río Balsas, del Estado de Guerrero, en los términos siguientes: dentro del plazo que terminará el día 23 de agosto del presente año, el concesionario presentará a la secretaría de Fomento, los planos y perfiles relativos a la localización de las obras hidráulicas, por duplicado y a escala métrica decimal apropiada solicitando la aprobación.

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma.

Art. 3. Las estampillas de este contrato serán pagadas por cuenta del interesado.

México, 10 de marzo de 1908.– O. Molina.– Francisco Alfaro.– Rúbricas.

Es copia. México, 24 de marzo de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Marzo 30 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Samson Lang, reformando el celebrado el 17 de marzo de 1905, para el aprovechamiento, con fuerza motriz, de las aguas del río Amacusac, del Estado de Morelos.

Art. 1. Se reforma el art. 6° del contrato celebrado el 17 de marzo de 1905, entre el C. General Manuel González Cosío, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Samson Lang, en los términos siguientes:

Dentro del plazo que terminará el 17 de marzo de 1910, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas el 17 de marzo de 1912.

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma.

México, marzo treinta de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Lang.– Rúbricas.

Es copia. México, abril 9 de 1908.- A. Aldasoro, subsecretario.– Rúbrica.

Abril 2 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Lic. Pascual Luna y Parra, en la de la Sra. Dolores Quintanilla de Orvañanos, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Lerma, en el Estado de México.

Art. 1. Se autoriza a la Sra. Dolores Quintanilla de Orvañanos para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para almacenar y utilizar como fuerza motriz hasta la cantidad de 153 millones de metros cúbicos anuales de las aguas del río Lerma, del Estado de México, en el trayecto del río comprendido entre el puente de san Lorenzo y un kilómetro río abajo de la presa de Temascalcingo o de Calderas.

Art. 2. La concesionaria se obliga a respetar las condiciones convenidas en las juntas de avenencia celebradas con motivo de las oposiciones que a su solicitud de concesión surgieron, a no causar perjuicio a los manantiales de los Pastores; a establecer las obras necesarias para garantizar los derechos de esos manantiales; a substituir el camino de Acambay de manera que no se interrumpa el tráfico; a respetar los derechos constituidos en favor de los opositores Sres. Felipe Martel y Manuel Sánchez Navarro, por lo que se refiere al uso, como riego, de las aguas del río de que se trata; a dejar pasar en el período de lluvias los 100.000,000 de metros cúbicos a que por concesión tiene derecho el Sr. Sánchez Navarro; a dar al río un gasto mensual suficiente para dejar satisfechos los intereses de los ribereños inferiores, y por último, a construir las obras hidráulicas necesarias, de tal manera, que no pueda comenzar a tomar las aguas que se le conceden, sino después de dejar pasar las correspondientes a los derechos preferentes de dichos ribereños.

Art. 3. Para la transmisión de la energía eléctrica, la concesionaria queda autorizada para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados, de la manera más apropiada.

Art. 4. Los reconocimientos del terreno, para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará la concesionaria dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá a la concesionaria con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 5. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, la concesionaria dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 6. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá a la concesionaria el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 7. La concesionaria podrá construir, sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento, para su debida aprobación, y quedará obligada a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de México, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 8. La concesionaria queda sujeta, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligada a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuatrocientos pesos ($400) mensuales, que pagará adelantada, en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que la concesionaria no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 9. La concesionaria tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 10. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare la concesionaria en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que se necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 11. Los terrenos de propiedad particular que necesitare la concesionaria para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 12. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 13. Queda autorizada la concesionaria para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente, y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea de la concesionaria, quedando ésta sujeta a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 14. La concesionaria podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

La concesionaria presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de

ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fija la de Fomento.

Art. 15. Los efectos que introduzca la concesionaria serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 16. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por la concesionaria en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 17. Queda la concesionaria en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los contratos y convenios que juzgue convenientes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose, para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento, para su examen y aprobación, sin perjuicio de que la concesionaria haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía hidráulica o eléctrica en industrias que sean de su propiedad.

Art. 18. La concesionaria perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por la concesionaria las pagarán a ésta según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 19. La concesionaria podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a la leyes de la república, siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas a la concesionaria.

Art. 20. La concesionaria podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 21. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá la concesionaría enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 22. La concesionaria tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 23. La concesionaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000), en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 24. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 4° y 5°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos, sin permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero o por admitirlo como socio.

Art. 25. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, la concesionaria incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso y antes de hacer la declaración de caducidad, la Secretaría de Fomento otorgará a la concesionaria un término prudente para exponer su defensa.

Art. 26. Las obligaciones que contrae la concesionaria respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo la concesionaria presentar al gobierno general, las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y solo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término no podrá ya alegar la concesionaria en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá la concesionaria presentar al gobierno federal, las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 27. La concesionaria se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes, y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 28. La concesionaria o la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 29. Las estampillas de este contrato se pagarán por la concesionaria.

México, dos de abril de mil novecientos ocho.– O. Molina.– P. Luna y Parra.

Es copia. México, 7 de abril de 1908.– El Subsecretario, A. Aldasoro.

Abril 26 de 1908.- Contrato celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. licenciado Luis Vidal, y Flor, en la del C. Pedro V. Rubio, para la explotación de bosques en una zona de terreno ubicada en el Departamento de Comitán, del Estado de Chiapas.

Art. 1. Con fundamento de lo dispuesto en los arts. 18° y 19° de la ley de 26 de marzo de 1894, sobre ocupación de terrenos baldíos y nacionales, se autoriza al C. Pedio V. Rubio para que por sí o por medio de la compañía que al efecto organice, pueda explotar los bosques que se encuentren en una zona de terreno constando aproximadamente de 60,460 hectáreas, ubicada en el departamento de Comitán, del Estado de Chiapas, y lindando: al Norte, con terrenos titulados al Sr. D. Claudio López Bru; al Sur, con la línea divisoria con la república de Guatemala; al Este, con la zona de ribera del río Salinas o Chixoy, y al Oeste, con las zonas de ribera de los ríos Lacantum y Chajul.

Cualquier aprovechamiento que el concesionario pretenda hacer de los productos del subsuelo, se concertará previamente con la Secretaría de Fomento.

La compañía que se organice deberá estar constituida con arreglo a las leyes mexicanas y domiciliadas en la república.

Art. 2. La duración de este contrato será de diez años, contados desde su fecha.

Art. 3. El concesionario pagará como precio del arrendamiento a que este contrato se refiere, la cantidad de doce mil noventa y dos pesos ($12,092) anuales. Esa suma representa el cinco por ciento del valor del terreno de que se trata, calculado a razón de cuatro pesos ($4) la hectárea, estimándose su superficie en 60,460 hectáreas. Se pagará por trimestres adelantados en la tesorería general de la Federación, debiéndose hacer el pago del primer trimestre dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de este contrato.

Art. 4. Para las explotaciones a que este contrato se refiere, el concesionario se sujetará a las prescripciones reglamentarias vigentes para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales y a las disposiciones que dicte la secretaría de Fomento, con el fin de evitar la destrucción de los bosques y otros productos, y asegurar su conservación y mejoramiento.

Art. 5. El Ejecutivo vigilará por medio de sus inspectores los trabajos de explotación que el concesionario establezca en el terreno de que se trata.

El concesionario perseguirá y apresará por sí o por medio de sus agentes a los explotadores fraudulentos de los productos del terreno que se arrienda y los consignará a la autoridad judicial. En estos casos tendrá los mismos derechos que a los denunciantes de esos fraudes concede el reglamento vigente para la explotación de bosques.

Art. 6. El concesionario se compromete a levantar por su cuenta el plano del terreno que se arrienda, en el plazo de dos años, contados desde la fecha de este contrato, señalando en ese plano la parte cubierta de bosques, la de pastos y la que sea cultivable. Si del plano resultare que la extensión del terreno de que se trata es mayor o menor que la que se hace constar en el art. 3°, se aumentará o disminuirá proporcionalmente la cantidad convenida como renta, tomándose para calcularla la misma base que se expresa en dicho artículo.

Art. 7. El concesionario se obliga a no traspasar este contrato a un particular o a una compañía sin previo permiso y aprobación del Ejecutivo federal. Bajo ningún concepto podrá traspasarlo a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, y será nula y de ningún valor ni efecto, toda estipulación que se pacte en ese sentido, caducando desde luego, por solo ese hecho, este contrato

Art. 8. El concesionario remitirá anualmente a la secretaría de Fomento, un informe que contenga todos los datos estadísticos relativos de la explotación de los productos a que se refiere este contrato.

Art. 9. El concesionario no podrá alegar, en ningún tiempo, derecho de propiedad, de posesión, de retención o de cualquiera otra clase respecto del terreno que se arrienda por este contrato, el cual volverá al gobierno al terminar el plazo de arrendamiento y sin derecho por parte del arrendatario a reclamar indemnización por mejoras y obras hechas en el referido terreno.

Art. 10. Conforme a lo que previene el art. 19° de la ley de 26 de marzo de 1894, queda establecido que si el gobierno determinara enajenar en todo o en parte el terreno de que se trata, el concesionario está obligado a entregarlo al comprador a más tardar, seis meses después de expedido el título de propiedad correspondiente.

En caso de que el gobierno acordare enajenar los terrenos a que se refiere este contrato, tendrá el concesionario el derecho del tanto sobre ellos, de conformidad con el artículo 18° de la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, de 26 de marzo de 1894 y en los términos especificados en dicho artículo, siempre que haga

valer ese derecho dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha en que se le notifique dicho acuerdo.

Art. 11. El concesionario podrá construir en los terrenos de que se trata, edificios para habitaciones de empleados y trabajadores, galeras y depósitos, previo aviso y aprobación de la Secretaría de Fomento.

Art. 12. El concesionario garantizará el cumplimiento del presente contrato, con un depósito de dos mil pesos en títulos de la Deuda Pública, que perderá en los casos de caducidad que se mencionan adelante. Se constituirá en el Banco Nacional de México dentro de un mes, contado desde la fecha del presente contrato.

Art. 13. Las cuestiones que sobre el cumplimiento del presente contrato se susciten, serán siempre decididas por los tribunales federales de la república con arreglo a las leyes mexicanas, y no podrá el concesionario alegar derecho alguno de extranjería, aunque sea por pretendida denegación de justicia.

Art. 14. Este contrato quedará insubsistente por no constituirse el depósito pactado en el art. 12°, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no hacer el entero de la cantidad que señala el art. 3°, en los plazos fijados en este artículo.

II. Por no presentar el plano en el plazo do que habla el art. 6°.

III. Por no cumplir lo que establece el art. 4°.

IV. Por traspasar este contrato sin el permiso y la aprobación del Ejecutivo Federal.

V. Por traspasar la concesión a algún gobierno o Estado extranjero, o agente de él, o por admitirlo como socio en la empresa.

Art. 15. La caducidad será declarada administrativamente por el Ejecutivo, oyendo previamente al concesionario para su defensa.

En todos los casos de caducidad, el concesionario perderá el depósito, sin perjuicio de la aplicación de las otras penas en que hubiere incurrido, y en el caso del inciso V, además de la nulidad del acto y de la caducidad del contrato, el concesionario perderá las maderas, ganados, productos de cultivo, herramientas, máquinas y construcciones y lodos los demás objetos empleados en la explotación.

Art. 16. Todos los plazos de este contrato son improrrogables. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de dichos plazos, solamente se suspenderán en caso de fuerza mayor debidamente justificado que impida directamente el cumplimiento de tales obligaciones.

La suspensión citada durará sólo por el tiempo que exista el impedimento que la motiva, debiendo el concesionario presentar al gobierno federal las pruebas del caso fortuito o de fuerza mayor dentro del término de dos meses de haber éste tenido lugar. Pasado ese plazo sin presentar tales pruebas, no podrá ya alegar el concesionario el caso fortuito o de fuerza mayor. Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reanudación de los trabajos.

Art. 17. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, 23 de abril de 1908.– O. Molina.– Luis A. Vidal y Flor.– Rúbricas.

Es copia. México, 24 de abril de 1908.– A. Aldasoro.

Abril 24 de 1908.- Estatutos de la junta de vigilancia de las aguas del rio de la Magdalena, en el Distrito Federal.

SECCIÓN 5ª.- Núm. 7,658.

En contestación al oficio de esa junta, fechado el 6 de noviembre del año próximo pasado, con el que remitió el proyecto de estatutos para esa misma junta, manifiesto a

usted que, hecho el estudio de ellos por esta secretaría, y dada cuenta al ciudadano presidente de la república, el mismo, primer magistrado ha tenido a bien acordar que se aprueben, como en efecto se aprueban, los siguientes estatutos:

Estatutos de la junta de vigilancia de las aguas del rio de la Magdalena, en el Distrito Federal.

Art. 1. La junta de vigilancia del río de la Magdalena, en el Distrito Federal, instituida por el reglamento de fecha 20 de mayo de 1907, sobre el uso de las aguas de dicho río, tiene por objeto hacer cumplir las prevenciones del expresado reglamento.

Art. 2. La junta tendrá las atribuciones siguientes:

A. Vigilar, por medio de los guardarríos respectivos, la distribución de las aguas en la forma legal.

B. Distribuir las aguas en los canales secundarios, según los convenios que a cada uno rijan.

C. Proponer la distribución por tandas del agua asignada para las haciendas de la Piedad.

D. Comunicar a la secretaría de Fomento todas las infracciones al reglamento, para la resolución que en su caso proceda.

E. Proponer a la secretaría de Fomento las cuotas ordinarias y extraordinarias con que cada uno de los usuarios debe contribuir para los gastos concernientes a la distribución de las aguas y a la ejecución de las obras de interés común que deban de efectuarse.

F. Proponer a la secretaría de Fomento las obligaciones de los guardarríos y las zonas que deban asignárseles para su vigilancia.

G. Proponer a la secretaría de Fomento las medidas que juzgue convenientes para lograr el mejor aprovechamiento de las aguas.

H. Proponer a la secretaría de Fomento las modificaciones, tanto del reglamento como de los estatutos, para subsanar las dificultades o deficiencias observadas en la práctica.

I. Proponer a la secretaría de Fomento las obras que sea conveniente hacer en el río para aumentar su caudal e impedir las pérdidas por evaporación y filtración.

J. Recaudar, por conducto del tesorero, los fondos a que se refiere el art. 8° del reglamento de 20 de mayo de 1907, para emplearlos en el objeto a que estén destinados.

K. Admitir las renuncias de sus miembros.

Art. 3. La junta tendrá las obligaciones que siguen:

A. Ser el conducto para promover ante la secretaría de Fomento las modificaciones que se propongan al reglamento en vigor.

B. Ser el conducto para recabar de la secretaría de Fomento el permiso de reparar las obras para conservar la distribución equitativa de las aguas.

C. Ser el conduelo de las gestiones de los usuarios para con la secretaría de Fomento.

D. Emitir informe razonado, sobre todas las gestiones de los usuarios.

E. Informar a la secretaría de Fomento, cuando lo solicite, sobre los títulos o derechos que se alegan al uso de las del rio.

F. Presentar a la secretaría de Fomento, anualmente, una relación detallada de las innovaciones sufridas o que sufra la distribución del Oidor Ladrón de Guevara, por virtud de transacciones de particulares.

La relación anterior contendrá: las propiedades y personas causahabientes actuales de los usuarios reconocidos por Ladrón de Guevara; la especie de aprovechamiento que disfrutan y la cantidad de agua que derivan.

G. Rendir semestralmente a la secretaría de Fomento informe sobre los trabajos ejecutados y resultados obtenidos.

H. Presentar semestralmente a la secretaría de Fomento una cuenta sobre las cantidades percibidas y los gastos efectuados.

Art. 4. La junta se compondrá de seis miembros electos de entre los interesados en las aguas del río.

Art. 5. Cada dos años se renovará la mitad de los miembros de la junta.

Art. 6. El período anterior se contará por años fiscales.

Art. 7. La renovación de la junta se hará en asamblea general celebrada en la secretaría de Fomento, presidida por la persona que ésta designe, y en el mes de julio del año que corresponda. Al efecto, la misma junta convocará con un mes de anticipación.

Art. 8. Para los efectos tanto del reglamento como de los estatutos, se consideran como interesados en el uso de las aguas del río, los causahabientes de los usuarios consignados en el reparto del Oidor Ladrón de Guevara y los agraciados por concesiones de autoridad competente.

Art. 9. La cita será personal para los particulares, y para las poblaciones se hará por conducto de la Secretaría de Gobernación.

Art. 10. Bastará para que pueda celebrarse la asamblea, la concurrencia de la mitad de los interesados. Las resoluciones se tomarán a mayoría absoluta de los votos de los presentes. En caso de empate, resolverá el presidente.

Art. 11. Los votos se computarán de la manera siguiente:

a. Cada población representada Por la persona que designe la Secretaría de Gobernación, no tendrá más que un solo voto.

b. Cada uno de los demás interesados no podrá tener más que un solo voto, aun cuando sean varias las tomas que tenga en el río.

c. En caso de que se hayan subdividido entre varias personas las aguas concedidas a una sola, los actuales poseedores de las aguas deberán nombrar un representante común, quien tendrá un solo voto.

Art. 12. Para ser admitido en la asamblea general, deberá, en el plazo que se fije en la convocatoria, comprobarse ante la junta la personalidad de cada uno de los interesados.

Art. 13. En caso de falta absoluta de algunos de los miembros de la junta, se convocará a asamblea extraordinaria para la elección del substituto.

Art. 14. La falta de asistencia, sin causa justificada, de alguno de los miembros de la junta, será motivo suficiente para considerar abandonado el cargo, y por lo mismo, a moción de la misma junta se procederá a la substitución, conforme a las prevenciones de los estatutos.

Art. 15. Los miembros electos en substitución de los que faltaren durarán en su cargo el tiempo que marcan los estatutos desde el principio del año fiscal de su elección.

Art. 16. El cargo de miembro de la junta es personal, y no podrá desempeñarse por apoderado.

Art. 17. La junta funcionará con la concurrencia de tres de sus miembros, por lo menos.

Art. 18. Se compondrá la junta de un presidente, un tesorero, un secretario y tres vocales. Será presidente la persona de más edad. La junta elegirá libremente entre sus otros miembros a los que hayan desempeñado los cargos de secretario y tesorero.

Art. 19. El presidente será reemplazado en sus faltas temporales por la persona que le siga en edad en la misma junta. El secretario lo será por la que designe la junta.

Art. 20. La junta se reunirá ordinariamente una vez por semana; pero podrá reunirse en sesión extraordinaria, siempre que lo determine el presidente de motu propio, o a petición de cualquiera de sus miembros. Para celebrar una sesión extraordinaria, se citará por escrito a todos los miembros de la junta en ejercicio.

Art. 21. Las resoluciones se tomarán: por mayoría de votos, decidiendo el presidente en caso de empate, y por unanimidad, cuando sean sólo tres los concurrentes.

Art. 22. El miembro que tenga interés especial y directo en los puntos que se discutan, estará obligado a manifestarlo en la junta, y se abstendrá de votar.

Art. 23. Las resoluciones serán autorizadas con las firmas del presidente y del secretario. Las comunicaciones y acuerdos de mero trámite, serán autorizados solamente con la del secretario.

Art. 24. Las copias certificadas de las actas de la junta que sea necesario extender por cualquier motivo, serán autorizadas por el secretario.

Art. 25. En cada sesión se tomará la minuta de los acuerdos adoptados, se dará lectura y se autorizará en el acto con la firma de todos los concurrentes.

Art. 26. La junta llevará un libro de actas y otro de minutas.

Art. 27. Las actas de las sesiones serán autorizadas con las firmas del presidente y del secretario.

Art. 28. El presidente hará ejecutar las resoluciones de la junta. Todos los empleados nombrados por ella estarán sujetos a las instrucciones y órdenes que él les comunique.

Art. 29. El presidente podrá nombrar en comisión a los demás miembros de la junta para que los auxilien en sus labores, pudiendo delegaren ellos el ejercicio de sus funciones, cuando en algún caso no le sea posible desempeñarlos personalmente.

Art. 30. El presidente visitará, cuando lo estime conveniente, las obras de interés general o particular que existan o que estén construyéndose en el curso del río.

Art. 31. El secretario tendrá a su cargo los libros de actas y minutas de las sesiones de la junta, y guardará cuidadosamente el archivo, llevará la correspondencia de acuerdo con el presidente y dará cuenta a la junta de todos los documentos que reciba.

Art. 32. El secretario deberá expedir los citatorios para las sesiones extraordinarias cuando reciba el correspondiente acuerdo del presidente.

Art. 33. El secretario redactará las actas de las sesiones y asentará los acuerdos que se adopten.

Art. 34. El secretario comunicará a la secretaría de Fomento las resoluciones y solicitudes de la junta. Participará igualmente a los particulares los acuerdos que le correspondan.

Art. 35. El secretario formulará el informe semestral que debe presentar a la Secretaría de Fomento y lo someterá a la aprobación de la junta.

Art. 36. El tesorero se encargará de recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se impongan a los usuarios del rio, poniendo en conocimiento de la junta cualquiera negativa o negligencia de éstos para satisfacerlas.

Art. 37. El tesorero tendrá a su cargo los fondos, productos de esas cuotas, y pagará los sueldos de los empleados, así como los gastos que se hagan, de acuerdo con la junta.

Art. 38. El tesorero llevará un libro de caja y los auxiliares que sean necesarios. Presentará a la junta mensualmente un corte de caja.

Art. 39. El tesorero formará la cuenta comprobada que presentará semestralmente la junta a la secretaría de Fomento, haciendo un resumen de los gastos habidos durante el año.

Art. 40. Las resoluciones de la junta confirmadas por la secretaría de Fomento, tendrán carácter obligatorio para todos los interesados en las aguas del río. La falta de cumplimiento por falta de éstos, ameritará la supresión del agua de que disfrutan, mientras no cumplan con lo mandado, además de las penas establecidas en el reglamento y en las leyes vigentes, y el pago de los daños y perjuicios que hubieren causado.

Art. 41. Todos los puntos no previstos

en los presentes estatutos, se resolverán por mayoría de votos en la misma junta, sometiéndose la resolución que se adopte a la aprobación de la secretaría de Fomento.

Art. 42. La mitad de los miembros de la junta actual durarán en su cargo hasta el 30 de junio de 1909, y la otra mitad hasta el 30 de junio de 1911. La suerte designará los miembros que deberán substituirse en 1909.

Y lo comunico a usted para los efectos consiguientes.- México, 24 de abril de 1908.– O. Molina.

Es copia. México, 24 de abril de 1908.– A. Aldasoro.

Mayo 8 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho do Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y los Sres. Gavito y Villar, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río de Cantar ranas, del Estado de Puebla y rectificación en los canales de llegada y desagüe de la fábrica «La Carolina.»

Art. 1. Se autoriza a los señores Gavito y Villar, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, puedan ejecutar las obras hidráulicas necesarias para rectificar los canales de llegada y de fuga de la fábrica «La Carolina,» distrito de Atlixco, Estado de Puebla, a fin de aprovechar, como fuerza motriz, en la caída que resulte, las aguas de que dispone la aludida fábrica. En el canal de desagüe se hará la rectificación hasta un punto situado a cincuenta metros antes de la caja de las haciendas del Cristo y de la Alfonsina, y el volumen que se aproveche por esos canales será el mismo que hasta ahora se ha aprovechado.

Art. 2. Para la transmisión de la energía eléctrica, los concesionarios quedan autorizados para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados, de la manera más apropiada.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzarán los concesionarios dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses contados desde la misma fecha, presentarán a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá a los concesionarios con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, los concesionarios darán principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá a la concesionaria el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 6. Los concesionarios podrán construir, sobre los canales que establezcan, los puentes que juzguen necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento, para su debida aprobación, y quedarán obligados a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Puebla, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7. Los concesionarios quedan

sujetos, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento, y obligados a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de ciento cincuenta pesos ($150) mensuales, que pagarán adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que los concesionarios no hagan los pagos prevenidos en este artículo, se les aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. Los concesionarios tendrán el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad nacional que ocuparen los concesionarios en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitaren para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomarán gratuitamente, conforme al inciso III, art. 3° de la ley de 6 de jumo de 1894.

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular que necesitaren los concesionarios para él establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrán expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12. Quedan autorizados los concesionarios para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzguen necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea de los concesionarios, quedando éstos sujetos a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. Los concesionarios podrán importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

Los concesionarios presentarán a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tengan que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fija la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzcan los concesionarios serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenaren o aplicaren a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por los concesionarios en el trazo, construcción y explotación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. Quedan los concesionarios en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los contratos y convenios que juzguen convenientes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose, para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento, para su examen y aprobación,

sin perjuicio de que los concesionarios hagan uso de su derecho para aprovechar dicha energía hidráulica o eléctrica en industrias que sean de su propiedad.

Art. 17. Los concesionarios perderán el derecho al uso de las aguas que se les conceden, en el caso de que dejaren de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por los concesionarios las pagarán a éstos según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. Los concesionarios podrán emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 19. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrán los concesionarios enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 20. Los concesionarios tendrán en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 21. Los concesionarios garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000), en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando hayan terminado las obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 22. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlos en los plazos fijados en los arts. 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos, sin permiso de la Secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero o por admitirlo como socio.

Art. 23. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, los concesionarios perderán el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, los concesionarios incurrirán, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará a los concesionarios un término prudente para exponer su defensa.

Art. 24. Las obligaciones que contraen los concesionarios respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo las concesionarios presentar al gobierno general, las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y solo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho, término no podrán alegar los concesionarios en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberán los concesionarios presentar al gobierno federal, las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 25. Los concesionarios se han de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes, y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 26. Los concesionarios o la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 27. Las estampillas de este contrato se pagarán por los concesionarios.

México, a los veintinueve días del mes de abril de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Como adjudicatario de los derechos y acciones de la extinguida sociedad Gavito y Villar, R. Gavito.– Rúbricas.

Es copia. México, 8 de mayo de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Mayo 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Gral. Juan A. Hernández, reformando el celebrado el 16 de enero de 1908, con el señor Daniel Audiffred, para el arrendamiento de las lagunas Chacahua, Manialtepec, Corralero, Monroy, Jicaltepec y Minitán, y las salinas que en ellas existen, así como de los esteros Los Limos, Mínizo y Espejo, y el Cerro de las Garzas, en las costas del Océano Pacifico, en el Estado de Oaxaca, para la explotación de la sal y caza del caimán y garza.

Art. 1. Se reforman los arts. 4° y 14° del contrato de 16 de enero de 1908, en los siguientes términos:

«Art. 4. El concesionario pagará a la jefatura de Hacienda del Estado de Oaxaca, las cuotas siguientes:

I. Cuarenta centavos ($0.40) por cada tonelada de sal que explote, comprometiéndose a explotar, por lo menos, quinientas (500) toneladas anuales a partir del segundo año de arrendamiento.

II. Cinco pesos ($5) por tonelada de pieles de caimán y sesenta centavos ($0.60) por cada uno de las de grasa del mismo que extraiga en los cinco primeros años, y ocho pesos ($8) por la de pieles y tres pesos ($3) por la de grasa en los años restantes.

III. Cinco pesos ($5) por cada millar de garzas.»

«Art. 14. El concesionario se compromete a contribuir para los gastos de inspección, desde que dé principio a la caza, con la cantidad de cuatrocientos pesos ($400) anuales, que entregará adelantados a la tesorería general de la Federación; en el concepto de que por falta de pago de las anualidades correspondientes, dicha oficina hará uso de la facultad económico-coactiva.»

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza las demás cláusulas del contrato de 16 de enero de 1908.

Art. 3. Las estampillas de este contrato serán expensadas por el interesado.

Hecho por duplicado, en la ciudad de México, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– J. A. Hernández.– Rúbricas.

Es copia. México, 11 de mayo de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.– Rúbrica.

*Mayo 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo do la Unión, y el Sr. Lic. Fernando Duret, en la del Sr. Frumencio Fuentes, reformando el celebrado el 31 de agosto de 1906, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Nazas, en los Estados de Durango y Coahuila***.**

Art. 1. Se reforma el art. 4° del contrato celebrado con fecha 31 de agosto de 1906, entre el C. Ingeniero Andrés Aldasoro, subsecretario encargado del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. Fernando Duret, en la del Sr. Frumencio Fuentes, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Nazas, de los Estados de Durango y Coahuila, en los términos siguientes:

"Dentro del plazo que terminará el 26 de septiembre de 1909, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, el 26 de septiembre de 1913."

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma.

México, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– F. Duret.– Rúbricas.

Es copia. México, 14 de mayo de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Mayo 8 de 1908.- CONTRATO Celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Luis Martínez de Castro, en la de la Sinaloa Land Company, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Culiacán, del Estado de Sinaloa.

Art. 1. Se autoriza a la Compañía "The Sinaloa Land Company," para que por sí o por medio de la Compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como riego, hasta la cantidad de ocho mil (8,000) litros de agua por segundo, como máximum, del rio de Culiacán, en el distrito de Culiacán, del Estado de Sinaloa, tomando el agua en un lugar situado a 800 metros río abajo del puente de la ciudad de Culiacán.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará la compañía concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá a la compañía concesionaria, con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, la compañía concesionaria dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá a la compañía concesionaria el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5. La compañía concesionaria podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para él tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligada a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respec-

tivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Sinaloa, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. La compañía concesionaria queda sujeta, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento, y obligada a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuatrocientos pesos ($400) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que la compañía concesionaria no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. La compañía concesionaria tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare la compañía concesionaria en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare la compañía concesionaria para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procedo dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizada la compañía concesionaria para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias, a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea de la compañía concesionaria, quedando ésta sujeta a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre constricción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. La compañía concesionaria podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

La compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca la compañía concesionaria serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por la compañía concesionaria en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. Queda la Compañía concesionaria en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas los contratos y convenios que juzgue

convenientes, para el aprovechamiento de las aguas que se le conceden, sujetándose para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento para su examen y aprobación, sin perjuicio de que la Compañía concesionaria haga uso de su derecho para aprovechar dichas aguas en el riego de terrenos que sean de su propiedad.

Art. 16. La compañía concesionaria perderá el derecho al uso de las aguas que le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por la compañía concesionaria, las pagarán a ésta según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas parles.

Art. 17. La compañía concesionaria podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas a la Compañía concesionaria.

Art. 18. La compañía concesionaria podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 19. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá la compañía concesionaria enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 20. La compañía concesionaria tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 21. La compañía concesionaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 22. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los artículos 2° y 3°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por suspender la construcción de las obras en un período de seis meses consecutivos sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 23. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV la compañía concesionaria perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga éste contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, la compañía concesionaria incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará a la compañía concesionaria un término prudente para exponer su defensa.

Art. 24. Las obligaciones que contrae la compañía concesionaria, respecto a los pla-

zos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo la compañía concesionaria presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar la compañía concesionaria, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá la compañía concesionaria presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 25. La compañía concesionaria se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 26. La compañía concesionaria o la que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma qué sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 27. Las estampillas de este contrato se pagarán por la compañía concesionaria.

Ciudad de México, a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Luis Martínez de Castro.– Rúbricas.

Es copia. México, mayo 15 de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Mayo 12 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de fomento, en representación del Ejecutivo do la Unión, y el Sr. Lic. Justo Prieto, en la del señor José María Urrutia, para el aprovechamiento, tomo riego, de las aguas del río Conchos, del Estado de Chihuahua.

Art. 1. Se autoriza al Sr. José Urrutia para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como riego, hasta la cantidad de mil doscientos litros de agua por segundo, como máximum, del rio Conchos, en el Distrito de Camargo, del Estado de Chihuahua, haciendo la derivación de las aguas en un punto que dista como cinco kilómetros, río abajo, de la presa del Saucillo.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes qué juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del Gobierno del Estado de Chihuahua, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. El concesionario queda sujeto en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de ciento cincuenta pesos ($150) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitaren para receptáculos y depósitos de aguas, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso tercero del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario, para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de las líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la Secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas, el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exi-

girá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden en el caso de que dejare de utilizarlas en un periodo de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16. El concesionario podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas, constituidas conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato, a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. El concesionario tendrá en esta Capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de tres mil doscientos pesos ($3,200) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los artículos 2° y 3°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender la construcción de las obras durante un periodo de seis meses consecutivos sin permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso o aprobación de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae el

concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de seis meses de haber éste tenido lugar, y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario y la compañía mexicana que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto de los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Justo Prieto.- Rúbricas.

Mayo 19 de 1908.- Se aprueba el contrato que con fecha 15 de abril último, fue celebrado entre el C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, por una parte, y por la otra, el Sr. Augusto Genin, apoderado de la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, reformando los artículos 6°, 7 y 22° del contrato de concesión de fecha 12 de agosto de 1901, relativo a la edificación Y explotación de una fábrica de dinamita y explosivos industriales en el territorio de la república.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucio-nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato que con fecha 15 de abril último, fue celebrado entre el C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, por una parte, y por la otra, el Sr. Augusto Genin, apoderado de la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, reformando los artículos 6°, 7 y 22° del contrato de concesión de fecha 12 de agosto de 1901, relativo a la edificación Y explotación de una fábrica de dinamita y explosivos industriales en el territorio de la república.

E. Montero, diputado vicepresidente.– A. Arguinzóniz, senador vicepresidente.– R. J. Aspe, diputado secretario.– A. Gaviño, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a diecinueve de mayo de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al señor Lic. Olegario Molina, secretario de

Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a usted para su conocimiento.- México 19 de mayo de 1908.– O. Molina.

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Estampillas por valor de cuarenta pesos ($40), debidamente canceladas.

CONTRATO

celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho do Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, por una parte, y por la otra, el Sr. Augusto Genin, apoderado de la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, reformando los arts. 6°, 7° y 22° del contrato de concesión de fecha 12 de agosto de 1901, relativo a la edificación y explotación de una fábrica de dinamita y explosivos industriales en el territorio de la república.

Art. 1. Se reforma el art. 6° del contrato de concesión, fecha 12 de agosto de 1901, modificado por el art. 3° del contrato de reformas, de 17 de enero de 1905, en los términos siguientes:

«Art. 6. La compañía queda exceptuada del pago del impuesto interior de consumo, creado por decreto de 21 de febrero de 1905, desde el 1° de marzo del presente año hasta el 1° de marzo de 1918, y pagará dicho impuesto a razón de veinte pesos ($20), por tonelada en los cinco años siguientes, que terminarán el 1° de marzo de 1923; a razón de cuarenta pesos ($40) por tonelada en los cinco años comprendidos entre 1923 y 1° de marzo de 1928, y a razón de sesenta pesos ($60) por tonelada en los cinco últimos años de esta concesión.»

Art. 2. El artículo 7° del contrato de 12 de agosto de 1901, modificado por el art. 2° del contrato de reformas de 23 de marzo de 1904, queda redactado en los siguientes términos:

«Art. 7. Queda obligada la empresa a sujetarse a una inspección técnica por todo el tiempo que dure esta concesión, y a una inspección fiscal, desde el 1° de marzo de 1918 hasta la espiración de este contrato, las cuales serán ejercidas por parte del gobierno por medio de los agentes que nombrare. La empresa, desde el 1° de febrero de 1908, hasta el 1° de febrero de 1918, contribuirá para los gastos de la inspección técnica con la suma de cuatro mil pesos ($ 4,000) anuales, y desde esta última fecha hasta la terminación de este contrato, contribuirá para los gastos de la inspección técnica y de la fiscal con la suma de ocho mil pesos ($8,000) anuales, cuyas cantidades serán entregadas en la tesorería general de la Federación, por semestres vencidos, los días 1° de agosto y 1° de febrero de cada año. Para hacer efectiva esta obligación, la tesorería podrá usar de la facultad económico-coactiva, si fuere necesario.»

Art. 3. El art. 22° del contrato de concesión de 12 de agosto de 1901, modificado por el art. 3° del contrato de reformas de 17 de enero de 1905, queda redactado como sigue:

«Art. 22. La duración de este contrato será de veinticinco años, que terminarán el día 1° de marzo de 1933, y durante todo este tiempo no podrá ser otorgada por el gobierno concesión o contrato alguno semejante al presente, ni tampoco podrá ser exceptuado de los impuestos interiores de consumo, que deberán crearse con arreglo a este; contrato, ningún fabricante, productor o importador nacional o extranjero de dinamita y explosivos, que tengan por base la nitro-glicerina; o cualquiera otra substancia explosiva, según se expresa en el art. 5°, ni en su caso otorgar primas a otros fabricantes o compañías.»

Art. 4. Las notas puestas al calce de la lista de precios anexa al contrato de reformas de 17 de enero de 1905, aplicables a la venta de dinamita en carro por entero, quedan reformadas en los siguientes términos:

«Los precios anteriores son por caja de 22 kilos 680 gramos en remisiones a un solo consignatario en carro por entero, con el

peso mínimo de carga que fijen las tarifas aprobadas por la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas a los ferrocarriles de la república.

Para cantidades menores, los precios serán los que siguen:

Para ventas comprendidas entre la mitad del peso mínimo autorizado por las tarifas ferrocarrileras para carro por entero, hasta dicho peso mínimo, un peso ($1.00) adicional en caja de 22 kilos 680 gramos.

Para ventas menores de la proporción a que se refiere el inciso anterior, un peso cincuenta centavos ($1.50), adicional en caja de 22 kilos 680 gramos.»

Art. 5. La Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, no podrá importar dinamita o explosivos semejantes a los de su propia fabricación, destinados a los lugares de la república donde se puedan enviar sus productos en condiciones que no sean perjudiciales para la compañía, y sólo podrá importar dinamita o explosivos para dichos lugares, cuando por causa de fuerza mayor sus fábricas no estén en condiciones de producción, o cuando la Secretaría de Fomento, en casos justificados, autorice a la compañía para efectuar importaciones con destino a los lugares expresados.

Art. 6. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato original de 12 de agosto de 1901, y los de los contratos de reformas fechas 22 de julio de 1903, 23 de marzo de 1904 y 17 de enero de 1905, que no han sido modificados por el presente.

Hecho, por duplicado, en la ciudad de México, a los quince días del mes de abril de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Aug. Genin.– Rúbricas.

Es copia. México, 19 de mayo de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Mayo 20 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. Joaquín Baranda Mac Gregor, para el arrendamiento de las salinas ubicadas en los cantones 4°, 6° y 10° del Estado de Jalisco.

Art. 1. El Ejecutivo de la Unión da en arrendamiento al Sr. Lic. Joaquín Baranda Mac Gregor las salinas de Ojo de Agua, Pozo Cuate, Temole, Chichiquila o los Charcos, ubicadas en el municipio de Amacueca, cantón del Estado de Jalisco; Culebrilla, Saucillo, Apazulco, Cerro Colorado, Nuevas, Tecoane, Careyes, Arroyo Seco, en el 6° cantón; Alpuyeque, Mismaloya, Bermeja, Blanquilla, Chamela, Coaxtecomate, Mezcales, Taibas, Aguatosa, Marismas del Real, Marismas de Ipala y laguna Patagona, en la municipalidad de Tomatlán, 10° cantón del mismo Estado.

Art. 2. Por el presente contrato de arrendamiento, el Sr. Joaquín Baranda Mac Gregor adquiere el derecho de explotar la sal y contrae la obligación de construir las obras necesarias para su cristalización.

Art. 3. El concesionario pagará en la jefatura de Hacienda del Estado de Jalisco cuarenta centavos ($0.40) por cada tonelada de sal que explote, comprometiéndose a explotar, por lo menos, un mil (1,000) toneladas anuales, a partir, del primer año de explotación.

Art. 4. El concesionario se compromete a presentar a la secretaría de Fomento, dentro de los seis meses de la fecha de este contrato, los planos de las obras que deba establecer para la cristalización de la sal; y dentro de los seis meses de la fecha de la aprobación de dichos planos, procederá a dar principio a la ejecución da las citadas obras, debiendo comenzar la explotación, a más tardar, a los siete meses de la misma fecha.

Art. 5. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente contrato, con un depósito de tres mil pesos ($3,000) en bonos de la

Deuda Nacional Consolidada, que deberá constituir en el Banco Nacional de México dentro de los treinta días de la promulgación de este contrato.

Art. 6. El concesionario no podrá alegar, en ningún tiempo, derecho alguno de posesión, de propiedad, de retención o cualquiera otra naturaleza, a las salinas existentes o a las que él establezca en los terrenos que se le arriendan, las cuales deberán volver a la posesión de la nación, sin demora alguna, a la terminación del plazo de arrendamiento.

Art. 7. El permiso que se concede por el presente contrato al señor Joaquín Baranda Mac Gregor, para él establecimiento y explotación de las salinas en el 4°, 6° y 10° cantones del Estado de Jalisco, no lo autoriza para efectuar ningún otro género de explotación.

Art. 8. El concesionario podrá traspasar el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que impone el presente contrato.

Art. 9. Por ningún motivo podrán traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero ni agente de ellos, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte en ese sentido, y caducando por sólo ese hecho, el presente contrato. Tampoco podrán traspasarlo a sociedades o compañías que no estén organizadas con arreglo a las leyes mexicanas.

Art. 10. El concesionario, así como los cesionarios, en su caso, serán siempre considerados como mexicanos, aun cuando todos o alguno de ellos fuesen extranjeros, y no tendrán más derechos y medios de hacerlos valer que los que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en los asuntos y actos relacionados con el presente contrato, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 11. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito de que habla el art. 5° dentro de la fecha que en el mismo se indica, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no hacer el pago de la cuota que se fija como precio del arrendamiento.

II. Por no explotar, por lo menos, un mil (1,000) toneladas anuales de sal.

III. Por no presentar los planos y dar principio a la ejecución de las obras y a la explotación en los plazos que se fijan en el art. 4°.

IV. Por traspasar este contrato sin la previa autorización de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero o agente de ellos, o por admitirlos como socios, así como por traspasarlo, en todo o en parte, a una sociedad, o compañía que no esté organizada conforme a las leyes mexicanas.

VI. Porque se compruebe al concesionario que defrauda los intereses fiscales.

La caducidad será declarada administrativamente, oyendo antes al concesionario, a quien se fijará el plazo de un mes para que exponga su defensa.

En todos los casos de caducidad el concesionario perderá el depósito de garantía, sin perjuicio de las demás penas en que hubiere incurrido; y en el caso del inciso V, además de la nulidad del acto y de la caducidad del contrato, el concesionario perderá todas las herramientas, utensilios y demás implementos relacionados con la explotación.

Art. 12. El plazo del arrendamiento es de diez años, contados desde la fecha de este contrato, en la inteligencia de qué el gobierno tiene facultad para vender en todo tiempo las salinas de que se trata, si así le conviene, en cuyo caso se concede al concesionario el derecho del tanto, o, si lo prefiere, un plazo de un año para hacer entrega de las mismas.

Art. 13. Las estampillas de este contrato serán expensadas por el interesado.

Hecho, por duplicado, en la ciudad de

México, a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– J. Baranda Mac Gregor.– Rúbricas.

Es copia. México, 11 de Junio de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Mayo 22 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. D. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. D. Luis Méndez, por "The Michoacán Power Company," reformando el celebrado el 19 de octubre de 1904, relativo al aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del rio Angulo, Estado de Michoacán.

Art. 1. Se reforma el artículo primero del contrato de fecha 19 de octubre de 1904, celebrado entre esta secretaría y el Sr. Gastón Larrieu, como apoderado del Sr. Ernesto Brunel, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Angulo, Estado de Michoacán, en los términos siguientes:

«Se autoriza a The Michoacán Power Company, cesionaria de los derechos del Sr. Ernesto Brunel, para que, sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias, para utilizar, como fuerza motriz, hasta la cantidad de 7,000 litros de agua por segundo, como máximum, del río Angulo o Zacapu del Estado de Michoacán, en el trayecto del río comprendido entre la presa o toma de Curimeo, hasta la toma de agua de la hacienda de Guadalupe, pudiendo construir en este trayecto una presa para almacenamiento de las aguas,»

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato que se reforma.

Art. 3. Las estampillas de este contrato se pagarán por los interesados.

México, a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– L. Méndez.– Rúbricas.

Es copia. México, 29 de mayo de 1908.– A. Aldosoro.– Rúbrica.

Mayo 27 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el C. licenciado Enrique Beltrán, en la del C. Ing. Félix Díaz, para la explotación de bosques y compraventa de terrenos nacionales ubicados en el Estado do san Luis Potosí.

Art. 1. Con fundamento de los arts. 18° y 19° de la ley de 26 de marzo de 1894, sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos y nacionales, se autoriza al C. Ing. Félix Díaz, para que por sí o por medio de la compañía que al efecto organice y que deberá ser mexicana y constituida conforme a las leyes de la república, pueda explotar los terrenos y bosques que se encuentran en una zona del terreno nacional ubicada en los partidos de ciudad del Maíz e Hidalgo, del Estado de san Luis Potosí, bajo los siguientes linderos: al Norte, terrenos de la Angostura y del Carrizal Grande; al Este, terrenos del Carrizal Grande, de san Nicolás de los Montes, de Carrizalillo de Moctezuma y de Agua Buena; al Sur, cañón de Tamazopo de por medio, terrenos de Estancita y Tamazopo, y al Oeste, terrenos de las haciendas de Cárdenas, del Sabino, de Martínez, ejidos del pueblo de Alaquines y río Alaquines de por medio, terrenos de Tomás Torres y de la hacienda de la Angostura.

Art. 2. Se exceptúan de la explotación los terrenos actualmente poseídos por los habitantes de las rancherías establecidas en los citados terrenos. Por ningún motivo se perjudicará a los poseedores cobrándoles arrendamientos o gabelas.

Art. 3. Cualquier aprovechamiento que el Sr. Díaz pretenda hacer de los productos del subsuelo, se concertará previamente con la secretaría de Fomento.

Art. 4. El concesionario pagará anualmente como precio del arrendamiento a que este contrato se refiere, el cinco por ciento sobre el importe del terreno calculado a razón de cinco pesos por hectárea, que es el que se fija más adelante para su venta. Se pagará en efectivo y por trimestres adelantados, debiendo hacer el pago del primer

trimestre, dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de este contrato.

Se calcula la extensión de la superficie del terreno para el pago de la renta, en 28,000 hectáreas.

Art. 5. Para las explotaciones a que este contrato se refiere, el concesionario se sujetará a las prescripciones reglamentarias vigentes para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales, y a las disposiciones que dicte la secretaría de Fomento con el fin de evitar la destrucción de los bosques y otros productos, y asegurar su conservación y mejoramiento.

Art. 6. El Ejecutivo vigilará por medio de sus inspectores, los trabajos de explotación que el concesionario establezca en los terrenos de que se trata.

El concesionario perseguirá y apresará por sí o por medio de sus agentes a los explotadores fraudulentos de los productos del terreno que se arrienda y los consignará a la autoridad judicial. En esos casos tendrá los mismos derechos que a los denunciantes de esos fraudes concede el reglamento vigente sobre explotación de bosques.

Art. 7. El concesionario se obliga a no traspasar este contrato sin previo permiso y aprobación del Ejecutivo federal. Bajo ningún concepto podrá traspasarlo a una compañía extranjera ni a un gobierno o Estado extranjero, ni admitirlos como socios, y será nula y de ningún valor ni efecto, toda estipulación que se pacte en ese sentido, caducando desde luego, por solo ese hecho, este contrato.

Art. 8. El concesionario remitirá anualmente a la secretaría de Fomento, un informe que contenga todos los datos estadísticos relativos de la explotación de los productos a que se refiere este contrato.

Art. 9. El concesionario podrá construir en los terrenos que se le arriendan, edificios para habitaciones de empleados y trabajadores, galeras y depósitos, previo aviso y aprobación de la secretaría de Fomento.

Art. 10. El Sr. Díaz garantizará el cumplimiento del presente contrato, con un depósito de tres mil pesos en títulos de la Deuda Pública, que perderá en los casos de caducidad que se mencionan adelante. Se constituirá en el Banco Nacional de México dentro de un mes contado desde la fecha de este contrato.

Art. 11. Las controversias que sobre el cumplimiento del presente contrato se susciten, serán siempre decididas por los tribunales federales de la república con arreglo a las leyes mexicanas, y en el caso de que este contrato sea traspasado a algún ciudadano o súbdito extranjero, éste no podrá alegar derechos de extranjería, aunque fuere por pretendida denegación de justicia.

Art. 12. En virtud de que los terrenos antes mencionados provienen del deslinde practicado por el señor Agustín R. Ortiz y los cuales pasaron a poder del gobierno, con fundamento del art. 41° de la ley antes citada, se autoriza igualmente al señor Félix Díaz:

I. A remedir dichos terrenos respetando a los poseedores los lotes que posean, según los informes que haya dado o diere el gobernador del Estado de san Luis Potosí, para lo cual recabará los informes e instrucciones necesarias de la secretaría de Fomento y del gobierno mencionado.

II. Al practicar la remedición se anotarán en el plano respectivo las superficies que cada uno de los poseedores señale como suyas, haciendo constar la conformidad de los colindantes.

Sólo se podrá dar el terreno en lugar distinto del que actualmente posean, siempre que ellos voluntariamente lo soliciten, mediante estipulaciones o arreglos privados con el Sr. Díaz.

Igualmente se levantarán planos particulares de cada uno de los lotes de los poseedores.

Art. 13. Los trabajos de remedición y fraccionamiento empezarán a los dos meses de promulgado este contrato y quedarán terminados en el plazo de dos años, a contar desde la misma fecha.

Art. 14. Una vez terminado el fraccio-

namiento y aprobados los planos, el Sr. Díaz tendrá derecho de preferencia para comprar los terrenos que queden libres, después de separadas las fracciones para los poseedores.

Art. 15. El precio de compra será a razón de cinco pesos hectárea, pagaderos en títulos de la Deuda Pública.

Art. 16. Los gastos de levantamiento de los planos, fraccionamiento y entrega de los lotes que correspondan a los poseedores, serán por cuenta exclusiva del Sr. Díaz, pero en el caso de adquirir la propiedad de los terrenos que se le conceden en arrendamiento, se le abonarán cincuenta centavos por cada hectárea de los lotes entregados a los poseedores. Este valor se deducirá del precio que resulte al liquidar los terrenos que se le adjudiquen en propiedad.

Art. 17. Una vez levantado el plano y hecho el reparto de las fracciones correspondientes a los poseedores, se hará la liquidación de los pagos de la renta estipulada, con relación a la extensión de terrenos que resulte. Si ésta fuere mayor del calculado para el pago del arrendamiento a que se refiere el art. 4°, el señor Díaz pagará la diferencia y se le devolverá ésta si la extensión resultare menor.

Art. 18. Si el concesionario, en ejercicio del derecho de compra, adquiere la propiedad del terreno, lo que hubiere pagado por arrendamiento, se le abonará en cuenta de su valor.

Art. 19. Un mes después de aprobados los planos generales del terreno, el Sr. Félix Díaz hará conocer a la secretaría de Fomento su resolución de ejercer el derecho de compra que le confiere este contrato. Si no lo hiciere en ese plazo, el gobierno quedará en libertad de vender dicho terreno.

Art. 20. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito a que se refiere el art. 10°, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no hacer el entero de las cantidades que señala el art. 4° en los plazos fijados en ese artículo.

II. Por no presentar el plano de los terrenos en el plazo de que habla el art. 13°.

III. Por no cumplir con lo que establece el art. 5°.

IV. Por traspasar este contrato sin el permiso y aprobación del Ejecutivo Federal.

V. Por traspasar la concesión a alguna compañía extranjera o a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio en la empresa.

Art. 21. La caducidad será declarada administrativamente por la secretaría de Fomento, previa audiencia, del concesionario, a quien se le fijará el término de treinta días para que alegue lo que a su derecho convenga.

Art. 22. En todos los casos de caducidad el concesionario perderá el depósito, sin perjuicio de la aplicación de las otras penas en que hubiere incurrido, quedando a favor del gobierno todas las obras, mejoras, maquinaria, etc., que hubiere en el terreno.

Art. 23. Todos los plazos son improrrogables. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de dichos plazos, solamente se suspenderán en caso de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directamente el cumplimiento de tales obligaciones.

La suspensión citada durará sólo por el tiempo que exista el impedimento que la motiva, debiendo el concesionario presentar al gobierno federal las pruebas del caso fortuito o de fuerza mayor dentro del término de dos meses de haber tenido éste lugar. Pasado ese plazo sin presentar tales pruebas, no podrá alegar ya el concesionario el caso fortuito o de fuerza mayor. Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reanudación de los trabajos.

Art. 24. La duración de este contrato será de cinco años, contados desde su fecha.

Art 25. Las estampillas necesarias para

legalizar el presente contrato, serán por cuenta del concesionario.

México, 27 de mayo de 1908.– O. Molina.– E. Beltrán.– Rúbricas.

Es copia. México, 28 de mayo de 1908.– A. Aldasoro.

Junio 2 de 1908.- Se aprueba el contrato fechado el once del corriente mes, celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. Rafael Elguero, en la de «The Oil Fields of México Company,» para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, existentes en los terrenos de propiedad de la misma Compañía en los Estados de Veracruz y Puebla.–

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato fechado el once del corriente mes, celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. Rafael Elguero, en la de «The Oil Fields of México Company,» para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, existentes en los terrenos de propiedad de la misma Compañía en los Estados de Veracruz y Puebla.–

J. Robles Linares, diputado presidente.– A. Arguinzóniz, senador vicepresidente.– Ramón Prida, diputado secretario.– Carlos Flores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a treinta de mayo de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- México, 2 de junio de 1908.– O. Molina.– Al....

El contrato a que se refiere el anterior decreto es el siguiente:

Estampillas por valor de quinientos cuarenta pesos ($ 540), debidamente canceladas.

CONTRATO

Celebrado entre el C. Lic. D. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. Rafael Elguero, en la de "The Oil Fields México Company," para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno existentes en los terrenos de propiedad particular de la misma Compañía, en los Estados de Veracruz y Puebla.

Art. 1. «The Oil Fields of México Company» se compromete, sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga a practicar exploraciones en el subsuelo del terreno de su propiedad denominado «Furbero,» ubicado en el cantón de Papantla, del Estado de Veracruz, y en los terrenos también de su propiedad, en el Estado de Puebla, con el fin de descubrir fuentes de petróleo, o, en general criaderos de carburos e hidrocarburos de hidrógeno o sus derivados.

Art. 2. «The Oil Fields of México Company» podrá llevar a cabo las explotaciones de las fuentes o criaderos de petróleo y carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados cuya exploración es motivo de este contrato.

Art. 3. La compañía concesionaria se

compromete a dar aviso a la secretaría de Fomento del descubrimiento que hiciere de alguna fuente o criadero de petróleo, cuando éste se encuentre en condiciones de explotación, designando su ubicación y dando noticia de la importancia del criadero, con especificación de la cantidad que sea susceptible de producir. Este aviso se dará dentro de los dos meses siguientes al descubrimiento del criadero o al principiar la explotación.

Art. 4. La compañía concesionaria podrá establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por terrenos de propiedad nacional o particular que no sean de su propiedad, en el Estado de Veracruz o en alguno de los Estados limítrofes, a fin de facilitar la venta de tales productos a cualquier punto de la costa del Golfo o del interior del Estado de Veracruz, con facultad de expropiación en los términos de la ley y como consecuencia necesaria de este derecho, el de establecer en los mismos terrenos tanques y estaciones para bombas, igualmente con facultad de expropiación del que para el efecto fuere necesario.

Art. 5. La compañía se obliga a presentar, en su caso, los planos de las instalaciones de que habla el artículo anterior, a la secretaría de Fomento para su aprobación, comprometiéndose a construir los puentes y pasos necesarios en los caminos y vías públicas, a fin de no interrumpir el tráfico ni dificultarlo.

Art. 6. Se autoriza igualmente a la compañía concesionaria para que construya un ferrocarril de uso exclusivo de la misma empresa, cuyo objeto único será emplearlo en el establecimiento y conservación de las líneas de tubería, tanques y estaciones de bombas, teniendo el derecho de expropiación con arreglo a la fracción IV del art. 10° de este convenio.

Art. 7. La compañía concesionaria se compromete a invertir en las exploraciones y en la explotación de criaderos de petróleo, carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados que lleve a efecto en el subsuelo de los terrenos que se mencionan en el art. 1°, la cantidad de cien mil pesos ($100,000), por lo menos, dentro de los siete años siguientes a la fecha de este contrato, cuya inversión la justificará a medida que vaya teniendo lugar, en la forma que acuerde la Secretaría de Fomento.

Art. 8. La compañía concesionaria se compromete a rendir anualmente un informe a la secretaría de Fomento, referente al año fiscal fenecido, sobre los gastos de la negociación, balance general, estadística de productos, y aquellos que designe oportunamente la misma secretaría. La falta de cumplimiento de esta obligación será penada con una multa de cien ($100) a quinientos pesos ($500), según la gravedad o frecuencia de las omisiones, a juicio de la secretaría.

Art. 9. La compañía concesionaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato con un depósito de cinco mil pesos ($5,000), que, en bonos de la Deuda Nacional Consolidada, deberá constituir en el Banco Nacional de México, dentro de los ocho días siguientes a la techa de la publicación de este contrato, y el cual le será devuelto al justificar la inversión de la cantidad que cita el art. 6°, cuando esta secretaría declare cumplidas las estipulaciones de aquél.

Art. 10. La Secretaría de Fomento tendrá el derecho de hacer inspeccionar las obras, libros y establecimientos de la compañía concesionaria, cuando lo juzgue conveniente, y en ese caso la misma compañía enterará en la tesorería general de la Federación las cantidades que indique la secretaría de Fomento para el pago de los gastos de inspección.

Art. 11. Para las exploraciones y explotaciones a que se refiere el artículo 6°, la compañía concesionaria gozará de las franquicias siguientes:

I. Podrá exportar, libres de todo impuesto, los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de la explotación.

II. Podrá importar, libres de derechos, por una sola vez y durante la vigencia de este contrato, las máquinas y sus accesorios para perforar los pozos, para refinar o elaborar toda clase de productos que tengan por base

el petróleo crudo, las tuberías necesarias para la industria, tuberías, bombas estanques de hierro o de madera, barriles de hierro o de madera, gasómetros, vías portátiles de ferrocarril con sus máquinas y carros de carga, y toda clase de materiales para los edificios destinados a la explotación, quedando sujetas estas importaciones a las disposiciones y reglamentos que dicte la secretaría de Hacienda. Para gozar de la exención que otorga esta cláusula, la compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento listas pormenorizadas de los efectos que pretenda introducir dentro de esta concesión, especificando en ellas el número, cantidad y calidad de dichos efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento. En caso necesario, la compañía concesionaria facilitará a la secretaría de Fomento todos los detalles y dibujos que sean necesarios para resolver las dudas que pueda tener al hacer la revisión de las listas mencionadas.

III. El capital invertido en las exploraciones y explotaciones de los terrenos que se mencionan en el art. 1°, así como los bonos y acciones que pueda emitir la compañía concesionaria, quedarán libres de todo impuesto federal durante la vigencia de este contrato, con excepción del que se causa por renta del Timbre. Igual exención tendrán los productos de la explotación mientras no pasen a ser propiedad de tercera persona.

IV. Igualmente tendrá la compañía el derecho de expropiación de conformidad con las reglas siguientes:

A. La compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento el plano de las obras que han de ocupar los terrenos que se pretenda expropiar, y todas aquellas otras que puedan servir para demostrar la necesidad de las primeras.

B. La misma secretaría, previo informe del Inspector que designe, teniendo en cuenta, si lo creyere necesario, los demás datos que en todo tiempo tiene derecho de recabar de las autoridades o de la compañía concesionaria y aun de los mismos dueños de los terrenos que pretenda expropiar, aprobará o no los planos presentados.

C. Si no fueren aprobados dichos planos, se harán a la compañía las observaciones conducentes, a fin de que sean debidamente modificados; y si esto no cabe, se considerará como improcedente la expropiación pretendida.

D. Si los planos fueren aprobados, con o sin modificación, se considerará, por sólo este hecho, como declarada y fundada administrativamente la expropiación de los terrenos respectivos que señale el o los planos aprobados.

E. Con estos planos y la constancia de su aprobación, la compañía concesionaria ocurrirá al juez de Distrito que corresponda, con respecto al lugar de la ubicación de los terrenos por expropiar, y entablará el juicio respectivo, de acuerdo con lo que se previene en el capítulo cuarto del Título II del Libro I del Código de Procedimientos Civiles Federales, teniendo la compañía expropiadora la personalidad que en dicha capítulo se concede a la autoridad, también expropiadora, y al Ministerio Público en su caso.

F. Si el dueño de la propiedad por expropiar fuere ausente o ignorado, se le hará la primera notificación en los términos que previene el art. 194 del Código de Procedimientos ya citado, y si no se presenta, el juicio se seguirá en su rebeldía, depositándose el importe de la indemnización necesaria, a juicio del Juez.

G. Si el dueño del terreno fuere incierto o dudoso, por cualquier motivo que sea, el juicio se seguirá con la o las personas que de hecho se presenten a oponerse, y el importe de la indemnización se depositará de la misma manera que previene la fracción anterior, para que en uno y en otro caso se entregue el depósito al que legalmente demuestre tener derecho a él.

H. Para la iniciación de esta clase de juicios, no es requisito necesario que la Compañía concesionaria haya procurado previamente tener algún arreglo con el o los dueños de los terrenos por expropiar.

V. La compañía concesionaria tendrá el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos. Para ejercitar este derecho, la compañía se sujetará a las reglas que establece el art. 4° de la ley de 24 de diciembre de 1901.

VI. Durante el período de la vigencia del presente contrato, ninguno podrá perforar pozos de exploración o explotación en un radio de tres kilómetros alrededor de los pozos abiertos por la compañía concesionaria, pudiendo ésta adquirir terrenos siempre que sean de propiedad nacional y al precio de tarifa, en una extensión de los mismos tres kilómetros alrededor de sus pozos.

Art. 12. La compañía concesionaria pagará en la tesorería general de la Federación un 7 por 100, y en la de los Estados de Veracruz y Puebla, respectivamente, un 3 por 100 de las utilidades líquidas en cada ejercicio fiscal, en la producción obtenida en los terrenos a que se refiere el art. 1°, y siempre que ésta sea de un millón cuatrocientos setenta mil (1.470,000) litros diarios. En caso de que la producción sea menor, dichos pagos se reducirán proporcionalmente.

Art. 13. La compañía podrá traspasar las concesiones que se le otorgan en el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, siempre que los cesionarios se comprometan a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que impone el presente contrato. Por ningún motivo podrá traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero o agente de ellos, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte en este sentido, caducando desde luego este contrato por ese solo hecho. Tampoco puede traspasarlo a sociedades o compañías que no estén organizadas con arreglo a las leyes mexicanas.

Art. 14. Las obligaciones que contrae la compañía respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará el tiempo que dure el impedimento, debiendo la compañía concesionaria dar aviso a la Secretaría de Fomento cuando ocurra algún caso fortuito o de fuerza mayor. Solamente se le abonará el tiempo que hubiere durado el impedimento o, a lo sumo, dos meses más sobre la duración del mismo.

Art. 15. La empresa será siempre mexicana, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros. Estará sujeta a los tribunales de la república ella y todos los extranjeros que tomaren parte en los negocios de la misma, ya sea como accionistas, empleados o con cualquier otro carácter, serán considerados como mexicanos. Nunca podrán alegar respecto de los títulos y negocios relacionados con la empresa, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier pretexto que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos las agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 16. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito de garantía dentro del plazo que se fija en él presente contrato, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no invertir la suma de cien mil pesos ($100,000) en los términos y plazos establecidos.

II. Por no hacer ninguna exploración dentro de los límites de los terrenos a que este contrato se refiere, durante seis meses consecutivos.

III. Por enajenar o hipotecar el presente contrato o alguna de las concesiones de él, sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por suspender la explotación, sin causa justificada, por seis meses consecutivos.

V. Por traspasar este contrato o alguna

de sus concesiones a algún gobierno o Estado extranjero, o admitirlo como socio.

VI. Por traspasar este contrato a una compañía que no esté organizada con arreglo a las leyes mexicanas.

VII. Por no hacer el pago a que se contrae el art. 12° en los términos que establece.

VIII. Porque la compañía defraude los derechos que debe pagar por la explotación.

Art. 17. La caducidad será declarada administrativamente. En todo caso, y antes de hacerse la declaración correspondiente, se concederá a la compañía concesionaria un término prudente para que exponga su defensa.

En todos los casos de caducidad, la compañía concesionaria perderá las concesiones que se le conceden y las instalaciones y útiles empleados en la explotación y el depósito de garantía.

Art. 18. La duración de este contrato será de diez años, contados desde la fecha de la publicación del mismo.

Art. 19. Este contrato se someterá a la aprobación de las Cámaras.

Art. 20. Las estampillas de este contrato serán pagadas por la compañía concesionaria.

Hecho por duplicado en la ciudad de México, a los once días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– R. Elguero.– Rubricas.

Es copia, México, 2 de junio de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Junio 2 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha veintisiete de marzo próximo pasado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Leví, en la del Sr. Alberto Terrazas, para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno existentes en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y aquellos cuyo título de propiedad hubiere expedido el gobierno de la Nación con reserva del subsuelo, en los Distritos de Iturbide y Camargo, en el Estado de Chihuahua.–

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado con fecha veintisiete de marzo próximo pasado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Leví, en la del Sr. Alberto Terrazas, para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno existentes en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y aquellos cuyo título de propiedad hubiere expedido el gobierno de la Nación con reserva del subsuelo, en los Distritos de Iturbide y Camargo, en el Estado de Chihuahua.–

J. Robles Linares, diputado presidente.– A. Arguinzóniz, senador vicepresidente.– J. R. Aspe, diputado secretario.– J. de J. Peña, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, Publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a dos de junio de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

México, 2 de junio de 1908.– O. Molina.– Al.....

El contrato a que se refiere el anterior decreto es el siguiente:

Estampillas canceladas por valor de quinientos treinta pesos ($530).

CONTRATO

Celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Manuel Leví, en la del Sr. Alberto Terrazas, para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, existentes en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y aquellos cuyo título de propiedad hubiere expedido el gobierno de la Nación con reserva del subsuelo, en los distritos de Iturbide y Camargo, en el Estado Chihuahua.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Alberto Terrazas para que por sí o por medio de la compañía que al efecto organice, con arreglo a las leyes mexicanas, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda practicar exploraciones en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y aquellos cuyo título de propiedad hubiere expedido el gobierno de la Nación con reserva del subsuelo, en los distritos de Iturbide y Camargo, en el Estado de Chihuahua, con el fin de descubrir fuentes de petróleo, o, en general, criaderos de carburos e hidrocarburos o sus derivados.

Art. 2. Se autoriza igualmente al Sr. Alberto Terrazas para que pueda llevar a cabo las explotaciones de las fuentes o criaderos de petróleo y carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados, cuya exploración es motivo de este contrato.

Art. 3. El concesionario se compromete a dar aviso a la secretaría de Fomento, del descubrimiento que hiciere de alguna fuente o criadero de petróleo, cuando este se encuentre en condiciones de explotación, designando su ubicación y dando noticia de la importancia del criadero, con especificación de la cantidad que sea susceptible de producir. Este aviso se dará dentro de los dos meses siguientes al descubrimiento del criadero o al principiar la explotación.

Art. 4. El concesionario se compromete a invertir en las exploraciones y en la explotación de carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados, que lleve a efecto en el subsuelo de los terrenos que se mencionan en el art. 1°, la cantidad de cien mil pesos ($100,000), por lo menos, dentro de los siete años siguientes a la fecha de la promulgación de este contrato, cuya inversión la justificará a medida que vaya teniendo lugar, en la forma que acuerde la secretaría de Fomento.

Art. 5. El concesionario se compromete a rendir anualmente un informe a la Secretaría de Fomento, referente al año fiscal fenecido, sobre los gastos de la negociación, balance general, estadística de productos, y aquellos que designe oportunamente la misma Secretaría. La falta de cumplimiento de esta obligación será penada con una multa de cien ($100) a quinientos pesos ($500), según la gravedad o frecuencia de las omisiones, a juicio de la secretaría.

Art. 6. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, con un depósito de cinco mil pesos ($5,000) que, en bonos de la Deuda Nacional Consolidada, deberá constituir en el Banco Nacional de México, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la publicación de este contrato, y el cual le será devuelto cuando la secretaría de Fomento declare que se ha cumplido con las estipulaciones de este contrato, al justificar la inversión de la cantidad a que se refiere el art. 4°.

Art. 7. La Secretaría de Fomento tendrá el derecho de hacer inspeccionar las obras, libros y establecimientos del concesionario, cuando lo juzgue conveniente, y en ese caso, el mismo concesionario enterará en la tesorería general de la Federación las cantidades que indique la secretaría de Fomento para el pago de los gastos de inspección.

Art. 8. Para las exploraciones y explotaciones a que se refiere el artículo 4°, el concesionario gozará de las franquicias siguientes:

I. Podrá exportar, libres de todo impuesto, los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de la explotación.

II. Podrá importar, libres de derechos, por una sola vez durante la vigencia de este contrato, las máquinas y sus accesorios para perforar los pozos, para retinar o elaborar toda clase de productos que tengan por base el petróleo crudo, las tuberías necesarias para la industria, bombas, estanques de hierro o de madera, barriles de hierro o de madera, gasómetros, vías portátiles de ferrocarril con sus máquinas y carros de carga, y toda clase de materiales para los edificios destinados a la explotación, quedando sujetas estas importaciones a las disposiciones y reglamentos que dicte la secretaría de Hacienda. Para gozar de la exención que hace esta cláusula, el concesionario presentará a la secretaría de Fomento listas pormenorizadas de los efectos que pretenda introducir dentro de esta concesión, especificando en ellas el número, cantidad y calidad de dichos efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda, así como la limitaciones que fije la de Fomento. En caso necesario, el concesionario facilitará a la secretaría de Fomento todos los detalles y dibujos que sean necesarios para resolver las dudas que pueda tener al hacer la revisión de las listas mencionadas.

III. El capital invertido en las exploraciones y explotaciones en los terrenos que menciona el art. 1° así como los bonos y acciones que pueda emitir el concesionario o la compañía o compañías que organice, quedarán libres de todo impuesto federal durante la vigencia de este contrato, con excepción del que se causa por renta del Timbre. Igual excepción tendrán los productos de la explotación, mientras no pasen a ser propiedad de tercera persona.

IV. El concesionario tendrá el derecho de comprar los terrenos nacionales necesarios para la explotación, al precio de tarifa de terrenos baldíos que esté vigente en la fecha en que comience la explotación, con derecho al subsuelo.

V. Igualmente tendrá el concesionario el derecho de expropiación de conformidad con las reglas siguientes:

A. El concesionario presentará a la secretaría de Fomento el plano de las obras que han de ocupar los terrenos que se pretenda expropiar, y todas aquellas otras que puedan servir para demostrar la necesidad de las primeras.

B. La misma secretaría, previo informe del Inspector que designe, teniendo en cuenta, si lo creyere necesario, los demás datos que en todo tiempo tiene derecho de recabar de las autoridades o del concesionario, y aun de los mismos dueños de los terrenos que pretenda expropiar, aprobará o no los planos presentados.

C. Si no fueren aprobados dichos planos, se harán al concesionario las observaciones conducentes, a fin de que sean debidamente modificados; si esto no cabe, se considerará como improcedente la expropiación pretendida.

D. Si los planos fueren aprobados, con o sin modificación, se considerará, por sólo este hecho, como declarada y fundada administrativamente la expropiación de los terrenos respectivos que señale el o los planos aprobados.

E. Con estos planos y la constancia de su aprobación, el concesionario ocurrirá al juez de Distrito que corresponda, con respecto al lugar de la ubicación de los terrenos por expropiar, y entablará el juicio respectivo, de acuerdo con lo que se previene en el capítulo 4° del título II del libro I del Código de Procedimientos Civiles Federales, teniendo el interesado expropiador la personalidad que en dicho capitulo se concede a la autoridad también expropiadora y al Ministerio público en su caso.

F. Si el dueño de la propiedad por expropiar estuviere ausente o fuere ignorado, se le hará la primera notificación en los términos que previene el art. 194° del Código de Procedimientos ya citado, y si no se presenta, el juicio se seguirá en su rebeldía, depositándose el importe de la indemnización necesaria, a juicio del juez.

G. Si el dueño del terreno fuere incierto o dudoso, por cualquier motivo que sea, el juicio se seguirá con las personas que de hecho se presenten a oponerse, y el importe de la indemnización se depositará de la misma manera que previene la fracción anterior, para que en uno y en otro caso se entregue el depósito al que legalmente demuestre tener derecho a él.

H. Para la iniciación de esta clase de juicios, no es requisito necesario que el concesionario haya procurado previamente tener algún arreglo con los dueños de los terrenos por expropiar.

VI. El concesionario tendrá el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta, y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos. Para ejercitar este derecho, el concesionario se sujetará a las reglas que establece el art. 4° de la ley de 24 de diciembre de 1901.

VII. Durante el período de la vigencia del presente contrato, ninguno podrá perforar pozos de exploración o de explotación en un radio de tres kilómetros alrededor de los pozos abiertos por el concesionario, pudiendo éste adquirir terrenos, siempre que sean de propiedad nacional y al precio de tarifa, en una extensión de los mismos tres kilómetros alrededor de sus pozos.

Art. 9. El concesionario pagará en la tesorería general de la Federación un siete por ciento, y en la del Estado de Chihuahua un tres por ciento, de las utilidades líquidas en cada ejercicio fiscal, sobre la producción obtenida en los terrenos a que se refiere el art. 1°, y siempre que ésta sea de un millón cuatrocientos setenta mil (1.470,000) litros diarios. En caso de que la producción sea menor, dichos pagos se reducirán proporcionalmente.

Art. 10. El concesionario podrá traspasar las concesiones que se le otorgan en el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que impone el presente contrato. Por ningún motivo podrá traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero o agente de ellos, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte en este sentido, caducando desde luego este contrato por ese solo hecho.

Art. 11. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará el tiempo que dure el impedimento, debiendo el concesionario dar aviso a la Secretaría de Fomento cuando ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor. Solamente se abonará al concesionario el tiempo que hubiere durado el impedimento, o a lo sumo dos meses más después.

Art. 12. La empresa será siempre mexicana, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros. Estará sujeta a los tribunales de la república; ella y todos los extranjeros que tomaren parte en los negocios de la misma, ya sea como accionistas, empleados o con cualquier otro carácter, serán considerados como mexicanos. Nunca podrán alegar respecto de los títulos y negocios relacionados con la empresa derecho alguno de extranjería, bajo cualquier pretexto que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 13. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito de garantía dentro del plazo que se fija en el presente contrato, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no invertir la suma de cien mil pesos ($100,000) en los términos y plazos establecidos.

II. Por no hacer ninguna exploración dentro de los límites de los terrenos a que este contrato se refiere, durante seis meses consecutivos, o suspender la explotación por

igual tiempo.

III. Por enajenar o hipotecar el presente contrato o alguna de las concesiones de él, sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar este contrato o alguna de sus concesiones a algún gobierno o Estado extranjero, o admitirlo como socio.

V. Por no hacer el pago a que se contrae el art. 9°, en los términos que establece.

VI. Porque el concesionario defraude los derechos que debe pagar por la explotación.

Art. 14. La caducidad será declarada administrativamente. En todo caso, y antes de hacerse la declaración correspondiente, se concederá al concesionario un término prudente para que exponga su defensa.

En todos los casos de caducidad, el concesionario perderá las franquicias que se le conceden, y las instalaciones y útiles empleados en la explotación y el depósito de garantía.

Art. 15. La duración de este contrato será de diez años, contados desde la fecha de la publicación del mismo.

Art. 16. Este contrato se someterá a la aprobación de las Cámaras.

Art. 17. Las estampillas de este contrato serán pagadas por el concesionario.

Hecho, por duplicado, en la ciudad de México, a los veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– M. Leví.– Rúbricas.

Es copia. México, 2 de junio de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Junio 4 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el día trece de mayo próximo pasado, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Sr. John William Hughes, para establecer y explotar en la república una o varias fábricas de lámina galvanizada, plana o acanalada, y otros artefactos que con ella puedan manufacturarse.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado el día trece de mayo próximo pasado, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Sr. John William Hughes, para establecer y explotar en la república una o varias fábricas de lámina galvanizada, plana o acanalada, y otros artefactos que con ella puedan manufacturarse.

Fernando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– J. R. Aspe, diputado secretario.– Carlos Flores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a cuatro de junio de mil novecientos ocho.- Porfirio Díaz.– Al Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.- México, 4 de junio de 1908.– O. Molina.– Al.....

El contrato a que se refiere el decreto anterior, es el siguiente:

Estampillas por valor de un mil cincuenta pesos ($1,050), canceladas debidamente.

CONTRATO

Que de acuerdo con la facultad que concede al Ejecutivo la ley de 14 de diciembre de 1908, se celebra entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. John William Hughes, para establecer y explotar en la república la industria de la fabricación de lámina galvanizada, acanalada o aplanada, hoja de lata estañada y utensilios que puedan elaborarse con ellas, usando de preferencia materia prima nacional cuando por su calidad y precio sea igual a la extranjera.

Art. 1. El Sr. John William Hughes o la compañía que organice conforme a las leyes mexicanas, a la que en su caso se reconocerá como cesionaria de este contrato, se obliga a establecer en la república la industria de la fabricación de lámina galvanizada, acanalada o aplanada, hoja de lata estañada, y si le conviniere, la de utensilios que puedan elaborarse con ellas, usando de preferencia materia prima nacional y explotando dicha industria durante la vigencia de este contrato, de manera que la producción de lámina galvanizada sea cuando menos de tres mil toneladas (3,000) anuales y la de lata estañada de dos mil toneladas (2,000) también anuales.

Art. 2. Son condiciones esenciales de este contrato:

I. Establecer en la república una fábrica para manufacturar lámina galvanizada, acanalada o aplanada, hoja de lata estañada y si conviniere al interesado, utensilios que puedan elaborarse con ellas, usando de preferencia materia prima nacional, con las instalaciones, dependencias y almacenes que fueren necesarios.

II. Invertir en el establecimiento e incremento de esta fábrica y sus anexos indispensables, cuando menos doscientos mil pesos ($ 200,000) durante el término de este contrato.

Art. 3. Dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se promulgue este contrato, el concesionario someterá a la aprobación de la secretaría de Fomento los proyectos de las instalaciones, edificios y dependencias de la fábrica, acompañados de memorias descriptivas que los ilustren suficientemente, e indicando en qué lugar del país la va a establecer.

Art. 4. La construcción de los edificios, almacenes y dependencias, principiará cuando menos a los diez y ocho meses y terminará a los dos años y medio, contados uno y otro plazo desde la fecha en que se aprueben los proyectos respectivos, estando obligado el concesionario a dar aviso a la secretaría de Fomento dos meses antes de emprender la construcción.

Art. 5. Queda entendido que la fábrica se erigirá con entera sujeción a las prevenciones del Código Sanitario, respecto a fábricas y establecimientos industriales, observándose siempre las prescripciones que a este respecto dictare la autoridad competente.

Art. 6. El concesionario se obliga a comprobar debidamente, a juicio de la secretaría de Fomento, la inversión del capital a que se refiere el inciso II del art. 2°.

Art. 7. El concesionario podrá establecer otras fábricas como la de que se trata, en los lugares de la república que conviniere a sus intereses; pero siempre recabará previamente la aprobación de la secretaría de Fomento.

Queda entendido que para que estas nuevas fábricas gocen de las mismas franquicias de este contrato, se garantizará la inversión en cada una, cuando menos, de cincuenta mil pesos ($50,000).

Para cada nueva fábrica que el concesionario pretenda establecer, de conformidad con lo que se estipula en este artículo, está obligado a presentar los proyectos, planos y memorias correspondientes, y a comenzar y terminar las construcciones a los doce meses y dos años, respectivamente, de haber sido aprobados aquellos proyectos.

Art. 8. Queda asimismo obligado el concesionario a admitir en sus fábricas y dependencias dos alumnos de las escuelas

nacionales, cada vez que el gobierno los designe para que hagan los estudios relativos a la fabricación de los objetos a que se refiere el artículo primero y a los métodos empleados, debiéndoles proporcionar todos los datos necesarios para su aprovechamiento. Admitirá igualmente las visitas periódicas que hagan a la fábrica y sus dependencias los alumnos de las escuelas nacionales cuando lo soliciten los directores respectivos por el conducto debido.

Art. 9. Si el gobierno necesitare para su uso de los productos de la fábrica, el concesionario se obliga a vendérselos con un descuento de un diez por ciento de los precios al por mayor para el público.

Art. 10. Queda igualmente obligado el concesionario a enviar a la Secretaría de Fomento los informes y datos estadísticos que dicha secretaría le pida sobre la negociación en general y procedimientos empleados en la fabricación.

Art. 11. La secretaría de Fomento tiene la facultad de inspeccionar los trabajos de construcción de los edificios, almacenes y dependencias de la fábrica y el establecimiento de las maquinarias; y al efecto comisionará un ingeniero inspector. Para el pago de honorarios y gastos inherentes al servicio de inspección, el concesionario contribuirá con la suma de mil doscientos pesos anuales ($1,200), que entregará en la tesorería general de la Federación, por semestres adelantados, comenzando desde que principien los trabajos de construcción.

Para hacer efectiva esta obligación, la tesorería usará de la facultad económico-coactiva, si fuere necesario.

Art. 12. El inspector certificará que los materiales de construcción, maquinaria y demás efectos que se importen por el concesionario, son adecuados al objeto a que se les destina, de acuerdo con este contrato, a fin de que se cancelen las fianzas que se otorguen al hacer la introducción.

Es obligación del concesionario, en su caso, proporcionar al inspector todos los datos y facilidades necesarias para que pueda efectuar el examen y estudio que requiera el desempeño de su cometido.

Art. 13. La intervención del inspector no cesa durante la vigencia de este contrato; pero el concesionario sólo estará obligado a contribuir para los gastos de inspección hasta que la fábrica o fábricas sean terminadas a satisfacción del gobierno.

Art. 14. Para garantizar las obligaciones a que se refiere el presente contrato, el concesionario depositará en el Banco Nacional de México, ocho días después de promulgado, la cantidad de cinco mil pesos, ($5,000) en títulos de la Deuda Nacional Consolidada.

Este depósito se devolverá cuando la secretaría de Fomento declare cumplidas las obligaciones que se estipulan en este contrato.

Art. 15. El concesionario tendrá siempre en esta capital un representante ampliamente facultado, para que el gobierno se entienda con él en todo lo relativo a este contrato.

Art. 16. En ningún caso, ni en tiempo alguno, podrá el concesionario traspasar, enajenar o hipotecar las concesiones del presente contrato a ningún gobierno ni Estado extranjero, ni admitirlo como socio.

Tampoco puede traspasarlo a sociedades o compañías que no estén organizadas con arreglo a las leyes mexicanas, pero puede emitir libremente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones.

Art. 17. El concesionario podrá importar libres de derechos, las máquinas, útiles y aparatos para el establecimiento de la industria propiamente dicha, y materiales de construcción necesarios para el establecimiento de la misma y erección de los edificios, así como por una sola vez, el material necesario para el alumbrado eléctrico de la fábrica y dependencias, y para extinción de incendios.

A este fin el concesionario presentará oportunamente a la secretaría de Fomento, de acuerdo con los modelos que ésta ha adoptado, una memoria triplicada y listas pormenorizadas de los efectos que dentro de

la concesión se pretenda introducir libremente para las construcciones y las instalaciones. En dicha memoria se especificará claramente el número, cantidad y calidad de los efectos, explicando el uso a que se destinan y el porqué de las cantidades que se piden. Se acompañarán dibujos, diseños y detalles de las maquinarias y aparatos, y la secretaría de Fomento, previo examen y calificación, determinará si dichos efectos, maquinaria y aparatos, son apropiados a su objeto, de conformidad con este contrato, y en este caso, fijará las cantidades que el concesionario puede importar libre de derechos. Esta resolución se comunicará a la secretaría de Hacienda para que en su oportunidad transmita las órdenes correspondientes a las aduanas por donde se haga la introducción, entendiéndose que sin la presentación de dicha memoria, la Secretaría de Fomento no aprobará ninguna introducción de efectos.

Para la importación libre de efectos amparados por esta concesión, el concesionario observará las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda; entendiéndose que la cancelación de fianzas que hubiere de otorgarse en las aduanas por donde se verifiquen las importaciones, se hará cuando se haya montado la maquinaria y se haya acreditado el empleo de los efectos, introducidos con el certificado del inspector, según lo previene el artículo 12° de este contrato.

Art. 18. El concesionario podrá asimismo introducir libremente, durante la vigencia de este contrato, carbón de piedra, hulla y zinc en barras o lingotes; pero si llegare a establecerse algún impuesto sobre estas materias, durante dicho término, se pagarán los derechos aduanales que correspondan, los cuales le serán devueltos cuando compruebe haberlos usado.

El concesionario podrá introducir, también mientras esté vigente este contrato y previo el pago de derechos aduanales, los siguientes artículos comprendidos en las fracciones que se expresan en la tarifa de la Ordenanza general de Aduanas vigente:

Láminas de hierro y acero lisas, no especificadas, sin pintar ni barnizar, de cualquier tamaño, aunque sean satinadas, comprendidas en la fracción 243.

Muriato o clorhidrato de amoníaco Fracción 528

Cloruro de zinc, Fracción 540

Estaño en lingotes, Fracción 217

Acero en barras, Fracción 228

Hierro en barras, Fracción 241

Hierro y acero en lingotes, Fracción 240

Art. 19. Los derechos aduanales y adicionales pagados al introducirse los anteriores productos, los considerará la aduana respectiva como un depósito y serán devueltos al concesionario cuando acredite haber empleado éstos en la fabricación de los productos, materia de este contrato, de conformidad con este artículo y los siguientes.

La dirección general de aduanas llevará una lista detallada de los productos que se importen con arreglo a este artículo, para el cual efecto deberá el interesado presentar a la aduana respectiva, cada vez que se haga una importación, un pormenor del peso y nombres comerciales de los artículos que consten declarados en el pedimento de despacho.

El mismo interesado llevará una lista igual a la anterior y asumirá la obligación de no disponer de dichos artículos más que para la fabricación de lámina galvanizada, acanalada o aplanada, hoja de lata estañada y utensilios que puedan elaborarse con ellas.

La comprobación del uso de los efectos introducidos se hará por medio de los libros de contabilidad, pedidos de los comerciantes, facturas de cobro o cualesquiera otros documentos fehacientes.

Art. 20. El interesado someterá a la aprobación de la secretaría de Fomento la lista de los materiales que se empleen en la fabricación de la lámina galvanizada y de hoja de lata estañada, usando para la denominación de dichos materiales su

nombre común y refiriéndolo al mismo tiempo a la nomenclatura de la Tarifa de importación de la Ordenanza general de aduanas. Una vez aprobada dicha lista por la secretaría de Fomento, la presentará a la de Hacienda para los efectos correspondientes del artículo siguiente:

Art. 21. Al concluirse la fabricación de determinada cantidad de lámina galvanizada u hoja de lata estañada, el inspector que nombre el gobierno certificará el hecho, y de conformidad con dicha certificación, la secretaría ordenará que se devuelvan íntegros los derechos de importación y adicionales correspondientes a los objetos que se hubieren empleado, según la lista a que se refiere el artículo anterior, en la inteligencia de que esa devolución la hará la aduana por donde se hubiere hecho la importación, según lo indique el certificado del referido inspector.

La certificación a que se refiere este artículo se hará de la misma manera que se indica en la parte final del art. 19°.

Art. 22. En ningún caso, ni por ningún motivo, estará el gobierno obligado a devolver mayor cantidad de derechos de la que el interesado hubiere depositado al hacer sus importaciones.

Art. 23. Los efectos para el establecimiento de la fábrica importados al amparo de la concesión, objeto de este contrato, no podrán ser vendidos por el concesionario sin autorización previa de la secretaría de Hacienda, y por lo mismo, la falta de observancia de esta prescripción, hará incurrir al interesado en el delito de contrabando y lo sujetará a las penas que señalen las leyes.

Art. 24. El inspector del gobierno puede exigir, en cualquier tiempo, que se proceda a la formación de un inventario para comprobar que existen en los almacenes de la empresa, los efectos importados al amparo de la concesión y que aún no hayan sido utilizados.

El mismo inspector tiene la facultad de examinar los libros de la contabilidad, los comprobantes y la correspondencia comercial, a efecto de averiguar los hechos que importe conocer al gobierno para la seguridad de los intereses fiscales.

Art. 25. Se autoriza al Ejecutivo para decretar que las cuotas que señalan a la hoja de lata en lámina las fracciones 244 y 245 de la tarifa de importación de la Ordenanza general de Aduanas, quedan refundidas en una sola que será la de seis pesos ($6) los cien kilogramos de peso bruto, cuando instalada la fábrica esté funcionando y por el cálculo de producción de las máquinas para hoja de lata en lámina, resulte a juicio del Ejecutivo que puede abastecer el mercado nacional.

Art. 26. Desde la promulgación de este contrato los capitales que se inviertan en la construcción, establecimiento y explotación de la industria, así como las acciones y bonos que emita el concesionario, gozarán de exención de todo impuesto federal directo, quedando sujeto el concesionario o la compañía al pago de los demás impuestos comprendidos en la renta federal del Timbre.

Art. 27. El concesionario o la compañía serán considerados como mexicanos en todo lo que a este contrato se refiere, aun cuando todos o alguno de sus miembros que la formen fueren extranjeros, y estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca se podrá alegar, respecto de los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28. Este contrato quedará insubsistente:

Por no hacer el depósito de que habla el art. 14° en los términos que el propio artículo previene, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no presentar los proyectos y

memorias descriptivas dentro del plazo que fija el art. 3°.

II. Por no comenzar las construcciones e instalaciones en el tiempo que fija el art. 4°.

III. Por suspender los trabajos de construcción e instalaciones, por más de seis meses, sin causa debidamente justificada.

IV. Por no invertir el capital que se estipula en el inciso II del art. 2°.

V. Por suspender la fabricación de las láminas galvanizadas y hoja de lata estañada, por más de seis meses, sin causa debidamente justificada.

VI. Por traspasar este contrato a una compañía o sociedad que no estén organizadas con arreglo a las leyes mexicanas.

VII. Por traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero, o admitirlo como socio.

Art. 29. Si la caducidad se declarare por cualesquiera de los motivos que expresan las fracciones I, II, III, IV, V y VI, el concesionario perderá el depósito, las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción VII, además de la nulidad del acto, el concesionario incurrirá en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso la caducidad se declara administrativamente; pero antes de hacer la declaración respectiva, la secretaría de Fomento concederá al concesionario el término de un mes para exponer su defensa.

Art. 30. Los plazos y condiciones señalados en este contrato se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose prorrogados por todo el tiempo que dure el impedimento y dos meses más. En cualquiera de dichos plazos, el concesionario presentará a la Secretaría de Fomento las noticias y pruebas de haber ocurrido un caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, en el término de tres meses de haber empezado el impedimento, comprobando asimismo, que desde luego ha procedido a remover las causas del impedimento.

Por el solo hecho de no presentar tales noticias y pruebas en el tiempo señalado, no podrá ya alegarse por el concesionario o la compañía, en tiempo alguno, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Art. 31. Este contrato terminará a los diez años, contados desde que se inaugure la primera fábrica.

Art. 32. Las estampillas de este contrato serán pagadas por el interesado.

Art. 33. Este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión.

Hecho, por duplicado, en la ciudad de México, a los trece días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– John William Hughes.– Rúbricas.

Es copia. México, 4 de junio de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Junio 4 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 22 de mayo de 1908, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Harold Walker, en la de la compañía denominada «Huasteca Petroleum Company,» para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y sus derivados, existentes en los terrenos de propiedad particular de la misma compañía, ubicados en los cinco cantones más septentrionales del Estado de Veracruz y en los distritos o partidos inmediatamente adyacentes de los Estados de Tamaulipas y de san Luis Potosí.–

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos

Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado con fecha 22 de mayo de 1908, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Harold Walker, en la de la compañía denominada «Huasteca Petroleum Company,» para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y sus derivados, existentes en los terrenos de propiedad particular de la misma compañía, ubicados en los cinco cantones más septentrionales del Estado de Veracruz y en los distritos o partidos inmediatamente adyacentes de los Estados de Tamaulipas y de san Luis Potosí.–

Fernando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– Daniel García, diputado secretario.– Carlos Flores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a cuatro de junio de mil novecientos ocho.- Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

México, 4 de junio de 1908.– O. Molina.

El contrato a que se refiere el anterior decreto, es el siguiente:

Estampillas por valor de dos mil quinientos veinte pesos ($2,520), debidamente canceladas.

CONTRATO

Celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Harold Walker, en la de la compañía denominada “Huasteca Petroloum Company," para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y sus domados existentes en los terrenos de propiedad particular de la misma compañía, en los cinco cantones más septentrionales del Estado de Veracruz, y en los distritos o partidos inmediatamente adyacentes de los Estados de Tamaulipas y san Luis Potosí.

Art. 1. Se autoriza a la compañía denominada «Huasteca Petroleum Company» para practicar exploraciones en la superficie y en el subsuelo de los terrenos que le pertenezcan o en los cuales pueda ejecutar esos trabajos por cualquier título legal, con el objeto de descubrir manantiales o criaderos de petróleo o aceite mineral, de carburos o hidrocarburos de hidrógeno, de gas natural combustible y demás derivados. La autorización a que se refiere este artículo se contrae exclusivamente a terrenos ubicados en los cinco cantones más septentrionales del Estado de Veracruz, y de los distritos o partidos inmediatamente adyacentes de los Estados de Tamaulipas y san Luis Potosí.

Art. 2. La compañía concesionaria explotará libremente los manantiales y criaderos a que se refiere el artículo anterior, y dispondrá de los productos de los mismos, sea en su estado natural, sea elaborados o transformados; pero se obliga a invertir en los trabajos de exploración o explotación, la suma mínima de quinientos mil pesos ($500,000) en el término de cinco años contados desde la promulgación del presente contrato. La compañía deberá justificar ante la secretaría de Fomento, y a satisfacción de ésta, la inversión indicada.

Art. 3. Se autoriza a la compañía concesionaria a establecer tuberías aéreas o terrestres, para conducir adonde le convenga, el petróleo o aceite mineral y los gases combustibles naturales o elaborados, y para conectar entre sí sus fuentes de producción y sus instalaciones.

Art. 4. Dentro del término de dos años contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, la compañía concesionaria comenzará los reconocimientos necesarios para localizar una línea de tubería destinada

a conducir petróleo, aceite o gases combustibles desde los puntos de producción de la compañía concesionaria hasta un lugar conveniente en la Mesa Central. La compañía concesionaria dará aviso a la Secretaría de Fomento, con quince días de anticipación, del día y lugar en que habrán de comenzarse los estudios sobre el terreno.

Art. 5. Dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que hayan empezado los reconocimientos a que se refiere el artículo anterior, la compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento los planos y perfiles de la obra, por duplicado y a escala métrica decimal, acompañados de una memoria descriptiva. Si la secretaría de Fomento aprobare dichos planos, devolverá un tanto de los mismos a la compañía concesionaria, con la nota correspondiente; pero si, a juicio de la secretaría, los planos debieren ser modificados, acordará lo que proceda previa audiencia del ingeniero de la compañía concesionaria.

Art. 6. Dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de la aprobación de los planos, la compañía concesionaria deberá comenzar los trabajos de construcción de la línea de tubería, a la Mesa Central, quedando obligada a construir veinte kilómetros, por lo menos, durante el primer año, y cincuenta kilómetros en cada uno de los años subsecuentes.

Art. 7. Se concede a la compañía un derecho de vía, cuya anchura será de veinte metros como máximum, según en cada caso lo determine la secretaría de Fomento, en vista de las circunstancias, para la instalación de la línea de tubería a que se refieren los tres artículos precedentes. La secretaría podrá autorizar la ocupación de mayor extensión de terreno, donde fuere necesario, para establecer depósitos, gasómetros, estaciones, plantas de bombas y otros accesorios destinados al servicio de la línea de tubería.

Art. 8. La compañía podrá construir en todo tiempo y en el plazo que le convenga, otras líneas paralelas a la que se menciona en el artículo anterior y siempre que queden instaladas dentro de la faja de veinte metros que marca el mismo artículo.

También podrá la misma compañía establecer otras líneas de tubería, paralelas a las que antes se indican, fuera de la faja de veinte metros; pero en ese caso, se instalarán a una distancia mínima de cien kilómetros unas de otras.

En todo caso se sujetarán a la aprobación de la secretaría de Fomento los planos correspondientes.

Art. 9. La compañía concesionaria queda obligada a construir los pasos y puentes que demande el tráfico general o local, cuando este tráfico fuere de alguna manera estorbado por el paso de la línea de tubería. A este efecto, la compañía concesionaria deberá presentar los planos de dichos pasos o puentes a la aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, o de la autoridad local que fuere competente.

Art. 10. Para el establecimiento y conservación de la línea de tubería a la Mesa Central, la compañía concesionaria tendrá el derecho de establecer los pasos o caminos que fueren necesarios y de construir y operar una línea de ferrocarril económico, exclusivamente destinado a las necesidades propias de la empresa.

Art. 11. Durante el término de la ejecución de los trabajos a que se refiere el art. 6°, la secretaría de Fomento tendrá el derecho de mandar inspeccionarlos cada vez que lo juzgue conveniente, a cuyo efecto, desde el principio de los trabajos hasta la terminación de la línea, la compañía concesionaria enterará en la tesorería general de la Federación la suma de trescientos pesos ($300) mensuales, para ayuda de gastos de inspección.

Art. 12. En todo tiempo en que la compañía concesionaria por convenirle así, pretenda modificar sus sistemas de tubería o extenderlos, tendrá derecho a hacerlo previa autorización de la Secretaría de Fomento y su aprobación posterior de los planos respectivos.

Art. 13. Para la ejecución de las obras y establecimientos de los servicios a que se refieren los arts. 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° y 12° del presente contrato, la compañía conce-

sionaria tendrá el derecho de ocupar los terrenos de propiedad nacional, pagando por ellos el precio que fije la respectiva tarifa para la enajenación de terrenos baldíos vigente en la fecha de la enajenación. La misma compañía queda autorizada a expropiar, para los fines indicados, los terrenos de propiedad particular, observándose a este efecto las siguientes reglas:

A. La compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento el plano de las obras con que se han de ocupar los terrenos cuya expropiación se pretenda, acompañando todas las explicaciones que puedan servir para mostrar la necesidad de dichas obras.

B. La Secretaría, previo informe del inspector que designe, y teniendo en cuenta los datos que tiene derecho a pedir a las autoridades, a la compañía concesionaria y a los propietarios de los terrenos que se pretenda expropiar, dictará su resolución respecto a la aprobación de los planos presentados.

C. Sí la resolución de la Secretaría fuere en el sentido de que los planos no son de aprobarse, hará a la compañía concesionaria las observaciones conducentes, a fin de que los planos sean debidamente modificados, si ello fuere posible; y en vista de la respuesta de la compañía concesionaria, la secretaría resolverá en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la expropiación.

D. Si los planos fueren aprobados, con modificación o sin ella, se considerará, por sólo este hecho, como declarada y fundada administrativamente la expropiación de los terrenos respectivos que se señalaren en el plano o planos aprobados.

E. Con estos planos y la constancia de su aprobación, la compañía concesionaria acudirá al juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción se encuentren los terrenos que se trate de expropiar. La compañía concesionaria, con la personalidad que en el Código de Procedimientos Federales se concede a la autoridad expropiadora y al ministerio público, en su caso, procederá a iniciar el respectivo procedimiento de expropiación, de acuerdo con lo que en el mismo Código se establece.

F. Si el dueño de la propiedad por expropiar fuere ausente o ignorado, se le hará la primera notificación en los términos que previene el art. 194 del Código de Procedimientos ya citado, y si no se presenta, el juicio se seguirá en su rebeldía depositándose el importe de la indemnización necesaria a juicio del juez.

G. Si el dueño del terreno fuere incierto o dudoso, por cualquier motivo que sea, el juicio se seguirá con la persona o personas que de hecho se presenten a oponerse, y el importe de la indemnización se depositará de la misma manera que se establece la fracción anterior, para que en uno y en otro caso se entregue el depósito al que demuestre tener derecho a él.

H. Para la iniciación de esta clase de juicios no será requisito necesario el que la compañía concesionaria haya procurado previamente tener algún arreglo con el dueño o dueños de los terrenos por expropiar.

Art. 14. La compañía concesionaria gozará por el término de diez años, contados desde la promulgación del presente contrato, las siguientes exenciones:

I. El capital invertido en las empresas a que se refiere este contrato, así como los productos que la compañía obtenga o elabore, mientras no pasen a ser propiedad de tercera persona, estarán exentos de todo impuesto federal, con excepción de los que se pagan en forma de timbre.

II. La compañía concesionaria podrá exportar libres de todo impuesto o derecho, los productos naturales, refinados o elaborados que procedan de las explotaciones a que se refiere el presente contrato.

III. La misma compañía podrá importar, libres de derechos, las máquinas y accesorios para perforar pozos, para producir, refinar o transformar toda clase de productos que tengan por base el petróleo, el gas combustible natural, los carburos o

hidrocarburos de hidrógeno o sus derivados; las tuberías necesarias para estas industrias y para las líneas de comunicación de la Mesa Central, así como los accesorios de una y otras; bombas y sus accesorios; tanques y barriles de hierro, acero o madera; gasómetros; materiales para los edificios destinados a la explotación y el material fijo y rodante para el ferrocarril económico de la empresa.

Art. 15. Para gozar de las exenciones que establece la fracción tercera del artículo anterior, la compañía concesionaria presentará, en cada caso, a la secretaría de Fomento, listas totales pormenorizadas de los electos que pretenda introducir, especificando el número, cantidad y calidad de dichos efectos y acompañando los dibujos y explicaciones complementarias. La secretaría de Fomento dictará la resolución que corresponda, en el concepto de que la compañía concesionaria se sujetará para hacer sus importaciones, a las disposiciones y reglas que dicte la secretaría de Hacienda.

Art. 16. Los efectos importados al amparo de la concesión, objeto de este contrato, no podrán ser vendidos por la compañía sin autorización previa de la Secretaría de Hacienda, y por lo mismo la falta de observancia de esta prescripción, hará incurrir al interesado en el delito de contrabando y le sujetará a las penas que señalan las leyes.

Art. 17. La compañía concesionaria garantizará el cumplimiento de sus obligaciones, con un depósito de veinte mil pesos ($20,000) en títulos de la Deuda Pública Nacional. Este depósito deberá constituirse en el Banco Nacional de México, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la promulgación de este contrato; y durante la subsistencia del mismo depósito, la compañía tendrá derecho de disponer de los cupones vencidos, anexos a los bonos.

Art. 18. El depósito a que se refiere, el artículo anterior, se perderá por la compañía concesionaria en caso de que se declare la caducidad de la presente concesión. Para la devolución del misino depósito, se observarán las reglas siguientes:

I. Al comprobar la compañía la inversión de la suma de quinientos mil pesos ($500,000) en los términos del art. 2°, se le devolverá el cincuenta por ciento de dicho depósito.

II. El cincuenta por ciento restante le será devuelto cuando la Secretaría de Fomento declare que la compañía ha cumplido con todas las estipulaciones de este contrato.

Art. 19. Si la compañía no terminare la construcción de la línea de tubería a la Mesa Central en el plazo señalado, perderá el cincuenta por ciento del depósito y espirará la autorización que otorga este contrato para construir la expresada línea de tubería.

Art. 20. Las obligaciones que contrae la compañía concesionaria respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán por caso fortuito o de fuerza mayor, que impida el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión subsistirá por el tiempo que dure el impedimento y dos meses más, debiendo la compañía concesionaria dar aviso a la secretaría de Fomento cuando ocurra el motivo de suspensión.

Art. 21. La compañía concesionaria tendrá siempre en esta capital un representante debidamente autorizado para tratar con el gobierno en todos los asuntos relativos a la presente concesión.

Art. 22. La compañía concesionaria podrá traspasar total o parcialmente las concesiones que otorga el presente contrato, a una o más compañías organizadas conforme a las leyes de la república mexicana. En todo caso, se requerirá la aprobación de la secretaría de Fomento para efectuar cualquiera de dichos traspasos. En ningún caso podrá hacerse el traspaso a un gobierno o Estado extranjero o admitirlo como socio, o agentes de éstos, siendo nula y de ningún valor ni efecto, cualquiera estipulación que se pacte en este sentido.

Art. 23. La compañía concesionaria está considerada como mexicana, estando sujetos, tanto la misma compañía cuanto los extranjeros que tomen parte en sus negocios en calidad de accionistas, empleados o con cualquier otro carácter, a las leyes y tri-

bunales de la república. Nunca podrán alegar, respecto de los títulos y negocios relacionados con la empresa, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier pretexto que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que los que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, consiguientemente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 24. Este contrato quedará insubsistente por no constituirse el depósito de garantía en los términos que fija el art. 17°, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no invertir la suma de quinientos mil pesos ($500,000) de acuerdo con el art. 2°.

II. Por enajenar o hipotecar algunas o todas las concesiones que otorga el presente contrato, en violación de lo estipulado en el art. 22°.

III. Por emplear el ferrocarril que construya, de acuerdo con el artículo 10°, en usos distintos de los que autoriza dicho artículo.

IV. Por traspasar este contrato o hipotecar alguna de sus concesiones a algún gobierno o Estado extranjero, o agente del mismo.

Art. 25. Si la caducidad se declarare por cualquiera de los motivos que expresan las fracciones I, II y III, la compañía perderá el depósito y concesiones y franquicias especiales que otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción cuarta, la compañía incurrirá en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

La caducidad será declarada administrativamente por la secretaría de Fomento. Antes de hacerse la declaración se concederá a la compañía concesionaria un término prudente, para que exponga sus defensas.

Art. 26. Este contrato durará diez años, contados desde su promulgación. Pasado dicho término, la compañía podrá continuar la explotación de sus instalaciones y demás propiedades conforme al derecho común.

Art. 27. Este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión.

Art. 28. Las estampillas de este contrato son pagadas por la compañía concesionaria.

Hecho en la ciudad de México, a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Harold Walker.– Rúbricas.

Es copia. México, 4 de junio de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Junio 5 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 25 de abril de 1908, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el C. Tomás Macmanus, en representación de la «Cananea, Compañía Consolidada de Cobre, S. A.,» relativo a la introducción de petróleo crudo, por el tiempo que sea necesario, para emplearlo exclusivamente como combustible, y libre del pago de derechos de importación o de cualquiera otro que actualmente o en lo futuro graven dicho artículo, con excepción de los correspondientes a la renta del Timbre, en el Distrito de Arizpe, Estado de Sonora.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado con fecha 25 de abril de 1908, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el C. Licenciado Olegario Molina,

secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el C. Tomás Macmanus, en representación de la «Cananea, Compañía Consolidada de Cobre, S. A.,» relativo a la introducción de petróleo crudo, por el tiempo que sea necesario, para emplearlo exclusivamente como combustible, y libre del pago de derechos de importación o de cualquiera otro que actualmente o en lo futuro graven dicho artículo, con excepción de los correspondientes a la renta del Timbre, en el Distrito de Arizpe, Estado de Sonora.

Fernando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– Daniel García, diputado secretario.– Carlos Flores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a cuatro de junio de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.– Presente. »

Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.- México, 5 de junio de 1908.– O. Molina.– Al....

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Una estampilla por valor de cinco pesos ($ 5.00), debidamente cancelada.

CONTRATO

Celebrado entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el C. Tomás Macmanus, en representación de la "Cananea, Compañía Consolidada de Cobre, S. A.,." para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Arizpe, Estado de Sonora, destinado únicamente como combustible para la explotación en grande escala del Mineral de la Negociación de la misma compañía, según contrato celebrado con la propia compañía, en veintitrés de marzo de mil novecientos cuatro.

Art. 1. Se concede a la «Cananea, Compañía Consolidada de Cobre, S. A.,» la franquicia de importar para los trabajos de dicha negociación, en el punto de su ubicación, en el distrito de Arizpe, del Estado de Sonora, el petróleo crudo que necesito para emplearlo exclusivamente como combustible, libre del pago de derechos de importación o de cualquiera otro que actualmente o en lo futuro graven dicho artículo, con excepción de los correspondientes a la renta del Timbre.

Art. 2. Esta franquicia se otorga por el tiempo que sea necesario para que la compañía pueda obtener en Cananea petróleo crudo nacional, en cantidad bastante para sus necesidades y al precio aproximado que el petróleo crudo extranjero tuviere en la fecha de la celebración de este contrato.

Art. 3. Cuando alguna persona o empresa ofrezca proveer a la «Cananea, Compañía Consolidada de Cobre, S. A.,» el petróleo crudo nacional en la cantidad y calidad convenientes para satisfacer las necesidades de la compañía, y ésta no estuviere conforme con las condiciones de la oferta, se someterá el asunto al conocimiento y resolución del Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda. Su decisión, en este caso, será definitiva e inapelable, y resultando contraria a la compañía, se tendrá por cumplida la condición de tiempo estipulada en el art. 2° de este contrato, y cesará desde luego la autorización que, para importar libre de derechos el petróleo crudo extranjero, se concede a la compañía.

Art. 4. La empresa podrá, en beneficio de la minería y bajo condiciones equitativas, dentro del propio distrito de Arizpe, vender energía eléctrica que genere en sus máquinas, a compañías o a particulares que la necesiten.

Art. 5. La secretaría de Hacienda podrá en todo tiempo mandar inspeccionar las operaciones de la empresa, para cerciorarse que el petróleo crudo que importe será solamente empleado como combustible, y ésta le facilitará los medios para que la inspección se verifique.

Art. 6. La empresa entregará a la tesorería general de la Federación, cada mes, la suma de trescientos cincuenta pesos ($350), con que contribuye para el fondo de inspección mientras dure esta concesión.

Art. 7. En el caso de que se justificare que esta empresa destina el petróleo crudo que se le permite introducir libremente a otros usos distintos de los que señala este contrato, quedará, por ese solo hecho, insubsistente, sin perjuicio del pago de los derechos sencillos y de los adicionales con que la Ordenanza general de aduanas castiga las importaciones fraudulentas, entendiéndose que en este caso la imposición de la pena será extensiva a la total cantidad introducida desde la vigencia del contrato hasta el día en que se descubra la infracción.

Art. 8. Este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión para que surta sus efectos; siendo de cuenta del concesionario las estampillas que lo autoricen.

Es hecho en la ciudad de México, y se extiende y firma en dos ejemplares, uno para cada parte contratante, el día veinticinco de abril de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Tomás Macmanus.– Rúbricas.

Es copia. México, 5 de junio de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Junio 6 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Manuel de la Peña, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas torrenciales del rio de san Juan del Rio, del Estado de Querétaro.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Manuel de la Peña para que, sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para aprovechar, según el convenio verificado con la compañía Hidro-Eléctrica Queretana, en el riego de los terrenos de la Hacienda de Tequisquiapan, municipalidad del mismo nombre, del Estado de Querétaro, la cantidad de dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil (2.435,000) metros cúbicos por año, de las aguas torrenciales del río de san Juan del Río, del Estado de Querétaro, tomando dichas aguas en un punto de la referida Hacienda, llamado «Los Paredones,» pudiendo derivar, con tal objeto, doscientos ochenta y un (281) litros por segundo, como máximum.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas los comenzará el concesionario dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la Secretaría de Fomento, con su memoria respectiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la Secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento, para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público,

presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la Secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Querétaro, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuarenta y dos pesos ($42) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que habla el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso del art. 3° de la ley de 6 de Junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias, a lo largo de sus instalaciones para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la Secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos,

quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que, si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se le otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17. El concesionario podrá igualmente emitir acciones comunes de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato, a algún gobierno o estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de mil pesos ($1,000), en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de reconstrucción de las obras y por no terminarlos en los plazos fijados en los artículos 2° y 3°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos, sin permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Sí la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la Secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá ya alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstanciado caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario será siempre considerado como mexicano y estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrá alegar respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrá los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los seis días del mes de junio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Manuel de la Peña.

Junio 17 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión y el Sr. Benigno Diez Salceda, por la Compañía Industrial de Atlixco, S. A., reformando el celebrado con el Sr. Luis Barroso Arias, el 27 de Agosto de 1900, que a su vez reformó los celebrados el 11 y 28 de enero de 1898, con los Sres. Luis Gómez Daza, Marcelino Zepeda y Ramón González, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río san Baltasar o Cantarranas, del Estado de Puebla.

Art. 1. Se reforma el art. 2° del contrato celebrado con el Sr. Luis Barroso Arias, como concesionario de los celebrados con los Sres. Luis Gómez Daza, Marcelino Zepeda y Ramón González, en la forma siguiente:

Dentro del plazo que termina el 11 de octubre de 1910, la Compañía Industrial de Atlixco, S. A., concluirá todas las obras hidráulicas proyectadas para utilizar las aguas del río san Baltasar o Cantarranas del Estado de Puebla.

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza todos los demás artículos del contrato que se reforma.

México, a los diez y siete días del mes de junio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– B. Diez Salceda.– Rubricas.

Es copia. México, 20 de junio de 1908.– Por orden del secretario: E. O. M., E. Martínez Baca.– Rúbrica.

Junio 18 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el día diez y nueve de mayo de mil novecientos ocho, entre el Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Sr. Román S. de Lascurain, prorrogando el plazo del contrato celebrado el diez y ocho de marzo de mil novecientos siete, entre el C. Ing. Andrés Aldasoro, subsecretario encargado del despacho de Fomento, Colonización e Industria, representando al Ejecutivo de la Unión, y el mencionado Sr. Román S. de Lascurain, para practicar una exploración minera en terrenos de la Hacienda de «Laguna Verde,» municipalidad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz.

El presidente de la república ha tenido a bien dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado el día diez y nueve de mayo de mil

novecientos ocho, entre el Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Sr. Román S. de Lascurain, prorrogando el plazo del contrato celebrado el diez y ocho de marzo de mil novecientos siete, entre el C. Ing. Andrés Aldasoro, subsecretario encargado del despacho de Fomento, Colonización e Industria, representando al Ejecutivo de la Unión, y el mencionado Sr. Román S. de Lascurain, para practicar una exploración minera en terrenos de la Hacienda de «Laguna Verde,» municipalidad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz.

Femando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– Daniel García, diputado secretario.– Carlos Flores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a once de junio de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y demás fines.- México, 18 de junio de 1908.– O Molina.– Al C…

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Estampilla por valor de cinco pesos ($5), debidamente cancelada.

CONTRATO

Celebrado entre el Ejecutivo Federal, representado por el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. Román S. de Lascurain, prorrogando el plazo del contrato celebrado el diez y ocho de marzo de mil novecientos siete, entre el C. Ing. Andrés Aldasoro, subsecretario encargado del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el mencionado Sr. Ramón S. de Lascurain, para practicar una exploración minera en terrenos de la Hacienda de «Laguna Verde,» municipalidad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz.

Art. 1. Se prorroga en todas sus partes y por un año más, que se contará desde el diez de junio de mil novecientos ocho, el contrato celebrado en diez y ocho de marzo de mil novecientos siete, entre el C. ingeniero Andrés Aldasoro, subsecretario encargado del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. Ramón S. de Lascurain, para practicar una exploración minera en terrenos de la Hacienda de Laguna Verde, municipalidad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz, cuyo contrato fue aprobado por el Congreso de la Unión y promulgado el diez de junio de mil novecientos siete.

Art. 2. Este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión, para que surta sus efectos legales.

Art. 3. Las estampillas de este contrato serán expensadas por el concesionario, y se extenderá por duplicado, uno para cada parte contratante.

Es hecho en la ciudad de México, a los diez y nueve días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Román S. de Lascurain.– Rúbricas.

Es copia. México, 20 junio de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Abril 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho do Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. William A. McLaren, en la del Sr. Federico Wainwright Perkins, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Hernández, del Estado de Veracruz.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Federico Wainwright Perkins, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como fuerza motriz,

hasta la cantidad de cincuenta y seis (56) litros de agua por segundo, como máximum, del río «Hernández,» en la municipalidad de Actopan, cantón de Jalapa, del Estado de Veracruz, en el trayecto del río comprendido entre un punto situado a quinientos cuarenta y cinco (545) metros arriba del nivel del mar y distante unos cuantos metros río abajo del camino que une los ranchos del Sr. Perkins y del Sr. F. C. Simons, y otro punto situado a cuatrocientos cincuenta y cinco (455) metros arriba del nivel del mar que está cerca de donde el río atraviesa el camino que va de los terrenos del Sr. Perkins a los del Sr. Ramón Martínez.

Art. 2. Para la transmisión de la energía eléctrica, el concesionario queda autorizado para establecer vías aéreas por medio de postes de siete (7) metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados de la manera más apropiada.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce (12) meses contados desde la misma fecha, presentará la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando su aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete (7) años, contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 6. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios, para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Veracruz, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección con la suma de diez pesos ($10) mensuales, que pagará adelantada a la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis (6) metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que habla el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular qué necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos,

dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos do que procede dicha expropiación.

Art. 12. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar, libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la Secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importancia de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzca el concesionario, serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. Queda el concesionario en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas los contratos y convenios que juzgue convenientes, para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose, para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la Secretaría de Fomento para su examen y aprobación, sin perjuicio de que el concesionario haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía hidráulica o eléctrica en industrias que sean de su propiedad.

Art. 17. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso en que dejare de utilizarlas en un periodo de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república; siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllas y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 19. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 20. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato, a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio,

siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 21. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 22. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de quinientos pesos ($500) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación; y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas o eléctricas.

Art. 23. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes;

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlos en los plazos fijados en los artículos quinto y sexto.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos, sin permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 24. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 25. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá ya alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 26. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 27. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la

república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los diez y nueve días del mes de junio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– William A. McLaren.– Rúbricas.

Es copia. México, 26 de abril de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Junio 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y do la otra el C. Luis Méndez, apoderado jurídico de la compañía Empacadora Nacional Mexicana, denominada antes la Compañía Empacadora de los Estados Unidos, The United States Packing Company, cesionaria del contrato celebrado el 4 de abril de 1903, con The North American Beef Company, para el establecimiento de dos fábricas de diversos productos, utilizando los desechos animales, y dos casas empacadoras de carnes; para reformar este contrato y los de reformas celebrados en 15 de noviembre de 1905, 17 de marzo y 24 de noviembre de 1906, 21 de junio de 1907 y 17 de enero de 1908.

Art. 1. Se prorrogan por seis meses contados desde el 1° de julio del presente año, los plazos señalados en los arts. 4° y 7° del contrato de 21 de junio de 1907, para que la compañía avise a la secretaría de Fomento el lugar que designe para erigir la fábrica y empacadora a que está obligada por el mismo contrato.

Art. 2. Quedan en todo su vigor y fuerza los demás artículos del contrato original de fecha 4 de abril de 1903, así como los de los contratos de reformas de fechas 15 de noviembre de 1905, 17 de marzo y 24 de noviembre de 1906, 21 de junio de 1907 y 17 de enero de 1908.

Art. 3. Las estampillas de este contrato se pagarán por la compañía.

Hecho por duplicado en la ciudad de México, a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– L. Méndez.– Rúbricas.

Es copia. México, 29 de junio de 1908.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Julio 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Leví, en la de la Humboldt, Compañía Agrícola y Colonizadora de Chihuahua, para el aprovechamiento, como riego y fuerza motriz, de las aguas del rio Conchos, del Estado de Chihuahua.

Art. 1. Se autoriza a la Humboldt, Compañía Agrícola Colonizadora de Chihuahua, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar como riego en terrenos de la hacienda de santa Rosalía, hasta la cantidad de ocho mil (8,000) litros, y para fuerza motriz hasta la de dos mil (2,000), ambas por segundo y como máximum, del río Conchos, en el distrito de Camargo, del Estado de Chihuahua, que derivará por medio de una presa existente en la misma hacienda de santa Rosalía y situada a medio kilómetro arriba del arroyo de Moyotes, devolviendo al río la cantidad empleada como fuerza motriz, en el punto llamado «El Molino,» situado en la casa de la hacienda Humboldt.

Art. 2. Para la transmisión de la energía eléctrica, la compañía concesionaria queda autorizada para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados de la manera más apropiada.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas,

los comenzará la compañía concesionaria dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá a la compañía concesionaria con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, la compañía concesionaria dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá a la compañía concesionaria el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas objeto de este contrato.

Art. 6. La compañía concesionaria podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligada a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Chihuahua, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7. La compañía concesionaria queda sujeta, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del Ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligada a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuatrocientos pesos ($400) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que la compañía concesionaria no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. La compañía concesionaria tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare la compañía concesionaria, en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular que necesitare la compañía concesionaria para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos qué incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12. Queda autorizada la compañía concesionaria para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en

los postes de la línea de la compañía concesionaria, quedando ésta sujeta a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. La compañía concesionaria podrá importar, libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

La compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzca la compañía concesionaria serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por la compañía concesionaria en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. Queda la compañía concesionaria en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas los contratos y convenios que juzgue convenientes, para el aprovechamiento de toda la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose para los precios a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento para su examen y aprobación, sin perjuicio de que la compañía concesionaria haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía hidráulica o eléctrica en industrias que sean de su propiedad.

Art. 17. La compañía concesionaria perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por la compañía concesionaria, las pagarán a ésta según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. La compañía concesionaria podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas, constituidas conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y en lo que se refiere al aprovechamiento como riego, sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión respectiva, siendo indispensable que los cesionarios acepten todas y cada una de las obligaciones impuestas a la compañía concesionaria.

Art. 19. La compañía concesionaria podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 20. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá la compañía concesionaria enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 21. La compañía concesionaria tendrá en esta capital un representante, ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 22. La compañía concesionaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las

obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 23. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija et artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras, y por no terminarlos en los plazos fijados en los artículos 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender la construcción de las obras durante un periodo de seis meses consecutivos sin permiso de la Secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 24. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, la compañía concesionaria perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, la compañía concesionaria incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

Art. 25. Las obligaciones que contrae la compañía concesionaria respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo la compañía concesionaria presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor, del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar, y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar la compañía concesionaria, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá la compañía concesionaria presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos se han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 26. La compañía concesionaria se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 27. La compañía concesionaria y la que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28. Las estampillas de este contrato se pagarán por la compañía concesionaria.

Ciudad de México, a los once días del mes de julio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– M. Leví.

Es copia. México, 13 de julio de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Julio 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. D. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Jesús García, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio de san Juan del Río, de los Estados de México, Querétaro e Hidalgo.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Jesús García, para que sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda aprovechar en el riego de los terrenos de la Hacienda de El Álamo, distrito de Jilotepec, municipalidad de Pololitlán, del Estado de México, la cantidad de cuarenta y seis litros por segundo como máximum, hasta completar trescientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y seis metros cúbicos por año, de las aguas torrenciales del río de san Juan del Rio, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, cuyas aguas se toman de las que se concedieron a la Sra. Ernestina Rubio, viuda de Isita, según contrato de 20 de diciembre de 1906 y de las cuales es cesionario el Sr. Miguel Peón. El concesionario construirá, al efecto, las obras hidráulicas necesarias en terrenos del rancho del Ruano, y en el lado derecho de la presa de Taxthó.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento, para su debida aprobación, y quedará obligado a construir por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales, algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos, y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. El concesionario queda sujeto en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cien pesos ($100), mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art.

3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dicten sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca el concesionario, serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario por el presente contrato.

Art. 17. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. El concesionario garantizará el

cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de $ 500 quinientos pesos en bonos de la Deuda Nacional Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 3° y 4°

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender los trabajos de construcción de las obras durante seis meses consecutivos, sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan, a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la Secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario en ningún tiempo la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario estará sujeto a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrá alegar, respecto de los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrá los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los once días del mes de julio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Jesús García.– Rúbricas.

Es copia. México, 16 de julio de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Julio 17 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Manuel Calero, en la de la señora Lorenza R., viuda de Braniff, para el enlame de las haciendas El Sabino, Jaltipa y Corregidora, con las aguas del río de Cuautitlán, del Estado de México.

Art. 1. Se autoriza a la Sra. Lorenza R., viuda de Braniff, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar en el enlame de las haciendas mencionadas, hasta la cantidad de (3,000), tres mil litros por segundo, como máximum, de las aguas torrenciales del río Cuautitlán, en el Distrito del mismo nombre del Estado de México, en un punto del río situado aproximadamente a dos kilómetros del pueblo llamado san Lorenzo, corriente abajo, haciéndose la derivación hacía la margen derecha del río.

Art. 2. La Sra. Lorenza R., viuda de Braniff, se compromete a respetar los derechos que el Sr. Guillermo de Landa y Escandón tiene al uso y aprovechamiento de las aguas, del río Cuautitlán, según su contrato de 10 de junio de 1906, y en tal virtud, sólo hará uso de las aguas después de cubierto el gasto de tres metros cúbicos por segundo, a que el Sr. Guillermo de Landa y Escandón tiene derecho.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará la concesionaria dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de esto contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá a la concesionaria, con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, la concesionaria dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá a la concesionaria el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas objeto de este contrato.

Art. 6. La concesionaria podrá construir sobre los canales que establezca los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligada a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de México, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7. La concesionaria queda sujeta, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligada a contribuir para ayuda de los gastos de inspección con la suma de ($290) doscientos noventa pesos mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que la concesionaria no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. La concesionaria tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad na-

cional que ocupare la concesionaria en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular que necesitare la concesionaria para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vidente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734° del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12. Queda autorizada la concesionaria para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea de la concesionaria, quedando ésta sujeta a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. La concesionaria podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

La concesionaria presentará a la secretaría de Fomento la lista general, por triplicado, pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzca la concesionaria serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por la concesionaria en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. La concesionaria podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas, constituidas conforme a la leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17. La concesionaria perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por la concesionaria, las pagarán a ésta según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. La concesionaria podrá emitir, igualmente, acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 19. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá la concesionaria enajenar o hipotecar las acciones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 20. La concesionaria tendrá, en esta capital, un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 21. La concesionaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de ($5,000) cinco mil pesos, en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 22. Este contrato quedará insubsistente, por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos, sin permiso de la Secretaría de Fomento.

IV. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la Secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se deriven a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 23. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, la concesionaria perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, la concesionaria incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará a la concesionaria un término prudente para exponer su defensa.

Art. 24. Las obligaciones que contrae la concesionaria respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo la concesionaria presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar la concesionaria en ningún tiempo la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá la concesionaria presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 25. La concesionaria se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 26. La concesionaria y la compañía mexicana que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer, que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 27. Las estampillas de este contrato se pagarán por la concesionaria.

México, a los diez y siete días del mes de julio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Manuel Calero.

Es copia. México, 14 de agosto de 1908.– A. Aldasoro.

Julio 24 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Carlos H. Cahan, en el de la compañía del servicio de aguas y drenaje de Monterrey, para el aprovechamiento, en el abasto y saneamiento de dicha Ciudad, de las aguas torrenciales del río de la Estanzuela, en el Estado de Nuevo León.

Art. 1. Se autoriza a la compañía del servicio de aguas y drenaje de Monterrey, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para almacenar y utilizar como abasto y saneamiento de la ciudad de Monterrey, hasta la cantidad de diez mil litros por segundo, como máximum, de las aguas torrenciales del río de la Estanzuela, en jurisdicción de Monterrey, del Estado de Nuevo León, en el trayecto del río limitado aguas abajo por el punto situado a cincuenta metros del lugar denominado «El Baño.»

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará la compañía concesionaria dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá a la compañía concesionaria con la nota de haber sido o no aprobado, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, la compañía concesionaria dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas a más tardar dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la Secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá a la compañía concesionaria el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5. La compañía concesionaria podrá construir sobre los canales y acueductos que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la Secretaría de Fomento para su debida aprobación y quedará obligada a construir también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Nuevo León, o ya de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

En caso de que hubiera un excedente de agua en los canales o tuberías o en el de que se haga una desviación del líquido, con motivo de reparaciones, la compañía concesionaria queda autorizada para arrojar esas aguas a los cauces de las corrientes de jurisdicción federal.

Art. 6. La compañía concesionaria queda sujeta, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento y obligada a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de ($400) cuatrocientos pesos mensuales que pagará adelantada en la tesorería general de la Federa-

ción, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que la compañía concesionaria no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. La compañía concesionaria tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales y acueductos a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare la compañía concesionaria en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare la compañía concesionaria para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizada la compañía concesionaria para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución, alguna uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea de la compañía concesionaria, quedando ésta sujeta a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. La compañía concesionaria podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

La compañía concesionaria presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca la compañía concesionaria, serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación; y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por la compañía concesionaria en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. La compañía concesionaria podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con el mismo objeto para el cual se ha otorgado la concesión, siendo indispensable que la parte cesionaria acepte respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas a la compañía concesionaria por este contrato.

Art. 16. La compañía concesionaria perderá el derecho al uso de las aguas que se le concede, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años conse-

cutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por la compañía concesionaria, las pagará a ésta, según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 17. La compañía concesionaria podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá la compañía concesionaria enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. La compañía concesionaria tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. La compañía concesionaria garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de ($5,000) cinco mil pesos en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlos en los plazos fijados en los artículos 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por interrumpir la construcción de las obras en un período de seis meses, sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, la compañía concesionaria perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, la compañía concesionaria incurrirá en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará a la compañía concesionaria un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae la compañía concesionaria respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo la compañía concesionaria presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá ya alegar la compañía concesionaria, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá la compañía concesionaria presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. La compañía concesionaria se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. La compañía concesionaria y la que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por la compañía concesionaria.

Hecho en la ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de julio de un mil novecientos ocho.– O. Molina.– Charles H. Cahan.

Es copia. México, 17 de septiembre de 1908.– A. Aldasoro.

Agosto 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y los señores Ismael G. Zúñiga y Antonio Pliego Pérez, para la compra-venta de una zona de terreno ubicada en el departamento de Comitán, del Estado de Chiapas.

Art. 1. El gobierno vende a los Sres. Ismael G. Zúñiga y Antonio Pliego Pérez, una zona de terreno ubicada en el departamento de Comitán, del Estado de Chiapas, cuya zona está actualmente arrendada al Sr. Pedro V. Rubio, por contrato de 23 de abril del presente año y se enajena a los referidos Sres. Zúñiga y Pliego Pérez, en virtud de que el arrendatario expresó no hacer uso del derecho del tanto que le concede el art. 10° del citado contrato de arrendamiento.

Dicha zona contiene una superficie aproximada de 60,460 hectáreas, y está limitada: al Norte, con terrenos del Sr. D. Claudio López Bru; al Sur, con la línea divisoria con la república de Guatemala; al Este, con la zona de ribera del río Salinas o Chixoy, y al Oeste, con las zonas de ribera de los ríos Lacantum y Chajul.

Art. 2. El precio de la venta, objeto de este contrato, es el de cinco pesos por hectárea, pagaderos en Títulos de la Deuda Pública, quedando entendidos de que la venta de que se trata es con exclusión del petróleo o carbón del subsuelo.

Para el pago del terreno se tomará por base la superficie antes mencionada de 60,460 hectáreas, que al precio estipulado de cinco pesos hectárea, produce un total de trescientos dos mil trescientos pesos ($302,300.00). Esta cantidad deberá enterarse al año de la fecha del presente contrato.

Art. 3. Los concesionarios se comprometen a levantar, por su cuenta, el plano del terreno, en el plazo de un año, contado desde la fecha de este contrato. Dicho plano será levantado por un perito titulado y con los requisitos que señalan los arts. 28°, 29° y 31° del reglamento de 5 de junio de 1894. Además, deberán presentarse vistas o fotografías de algunos puntos notables del terreno, así como la constancia de la conformidad de los colindantes respectivos.

Art. 4. El plazo de un año a que se refiere el artículo anterior, para presentar el plano y demás documentos, se considera como improrrogable.

Art. 5. Si aprobados los planos resulta una superficie mayor que la calculada en el artículo primero, los concesionarios pagarán el excedente, y si resultare menor, se les devolverá lo que hubieren pago de más.

Art. 6. Una vez firmado el contrato con los Sres. Zúñiga y Pliego Pérez, se notificará al arrendatario, Sr. Rubio, que desde esa

fecha empieza a contarse el plazo de seis meses para que entregue el terreno a los compradores, de acuerdo con lo estipulado en el art. 10° del contrato de arrendamiento.

Art. 7. Para garantizar el cumplimiento de las estipulaciones del presente contrato, los concesionarios se obligan a depositar, en el plazo de un mes, contado desde la fecha del mismo contrato, en el Banco Nacional de México, la cantidad de tres mil pesos ($3,000), en Títulos de la Deuda Pública.

Art. 8. Cuando la secretaría de Fomento comunique a los Sres. Zúñiga y Pliego Pérez, que ya pueden disponer del terreno y ejercer en él actos de dominio, dichos concesionarios deberán constituir en el Banco Nacional de México un depósito de cuarenta mil pesos ($40,000) en Títulos de la Deuda Pública, cuya cantidad se aplicará al pago del terreno, si cumplen los concesionarios con las estipulaciones del contrato, o la perderán en caso de caducidad.

Art. 9. Este contrato quedará insubsistente por no hacer el depósito a que se refiere el art. 7° y caducará por no presentar los planos y demás documentos relativos dentro del plazo de que habla el art. 3°, en cuyo caso los concesionarios perderán los depósitos de que hablan los arts. 7° y 8°.

Art. 10. Las estampillas necesarias para legalizar el presente contrato y el correspondiente título de propiedad, serán por cuenta de los concesionarios.

México, 7 de agosto de 1908.– O. Molina.– J. Antonio Pliego Pérez.– I. G. Zúñiga.– Rúbricas.

Agosto 13 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Tamborrel, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Conchos, del Estado de Chihuahua.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Manuel Tamborrel, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar como riego, en el predio rústico llamado Rancho del Padre, o Peñón Blanco, hasta la cantidad de mil (1,000) litros por segundo, como máximum, de las aguas del rio Conchos, en el Distrito de Hidalgo del Parral, del Estado de Chihuahua, haciendo la derivación de las aguas en el punto más conveniente situado en el trayecto del río comprendido entre los cerros de las Tetillas y el límite inferior de los terrenos del rancho del Padre o Peñón Blanco.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado, y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario, con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 5. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento, para su

debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Chihuahua, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del Ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de ciento veinticinco pesos ($125) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la Secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le

conceden en el caso de que dejare de utilizarlas en un periodo de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que, si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes

Art. 16. El concesionario podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas, constituidas conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de tres mil pesos ($3,000) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras, y por no terminarlas en los plazos fijados en los artículos 2° y 3°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Sí la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en

ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los trece días del mes de agosto de mil novecientos ocho.– O. Molina.– M. Tamborrel.

Agosto 13 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Carlos M. Harrison, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio Pánuco, del Estado de Veracruz.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Carlos M. Harrison para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar como riego, hasta la cantidad de mil quinientos (1,500) litros de agua por segundo, como máximum, del rio Pánuco, en el cantón de Ozuluama, del Estado de Veracruz, tomando el agua en el trayecto de río comprendido dentro de los límites de la finca de «La Herradura,» propiedad del concesionario, y para cuyos terrenos se destinan las aguas.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la Secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas y aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas objeto de este contrato.

Art. 5. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público,

presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Veracruz, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del Ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección con la suma de ciento ochenta y siete pesos ($187) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la Secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telefónicas y telegráficas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa la aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dictaren sobre construcción y explotación de las líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la Secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare da utilizarlas en un período de diez años consecutivos,

quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que, si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16. El concesionario podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero ni admitirlo, como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de tres mil quinientos pesos ($ 3,500) en bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, le será devuelto cuando haya terminado las obras.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 2° y 3°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasar el presente contrato a algún particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos sin permiso de la Secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa, la frac. V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato le suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar.

Igualmente deberá el concesionario

presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario o la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o alguno de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar respecto de los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Carlos M. Harrison.– Rúbricas.

Agosto 14 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Lic. Ángel López Negrete por sí y como apoderado del Sr. Eduardo Hartmann y el C. Lic. Salvador M. Cancino, como apoderado del Sr. Hiram C. Smith, para la compra-venta de terrenos nacionales ubicados en el Estado de Chiapas.

Art. 1. El gobierno concede en venta a los Sres. Ángel López Negrete, Eduardo Hartmann e Hiram C. Smith como cesionarios de los derechos del C. R. Dorantes el terreno nacional que éste conforme a su contrato solicitó en agosto de 1906, ubicado en el departamento de Chilón, del Estado de Chiapas, y con una superficie de 215,708 hectáreas, 05 áreas, 12 centiáreas.

Art. 2. El precio del terreno a que este contrato se refiere, es conforme a lo estipulado en los contratos del Sr. Dorantes, el de un peso la hectárea en títulos de la Deuda Pública y un depósito de veinticinco centavos plata, también por hectárea, haciendo un valor total de doscientos quince mil setecientos ocho pesos, seis centavos ($215,708.06), en Títulos de la Deuda Pública, y cincuenta y tres mil novecientos veintisiete pesos dos centavos ($53,927.02), en efectivo, que los concesionarios pagarán en cuatro anualidades en la forma siguiente:

En marzo de 1909, cuarenta y tres mil ciento cuarenta pesos sesenta y un centavos ($43,140.61) en títulos de la Deuda Pública y diez mil setecientos ochenta y cinco pesos cuarenta centavos ($10,785.40) en efectivo.

En marzo de 1910, cuarenta y tres mil ciento cuarenta y un pesos ($43,141) en títulos de la Deuda Pública y diez mil setecientos ochenta y cinco pesos cuarenta centavos ($ 10,785.40) en efectivo.

En marzo de 1911, sesenta y cuatro mil setecientos doce pesos cuarenta y dos centavos ($64,712.40) en títulos de la Deuda Pública y diez y seis mil ciento setenta y ocho pesos once centavos ($16,178.11) en efectivo.

En marzo de 1912, sesenta y cuatro mii setecientos doce pesos cuarenta y dos centavos ($64,712.42) en títulos de la Deuda Pública y diez y seis mil ciento setenta y ocho pesos once centavos ($16,178.11) en efectivo.

Art. 3. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato y para que los concesionarios puedan desde la fecha del mismo contrato ejecutar actos de dominio en el terreno de que se trata, se obligan a constituir en el Banco Nacional de México a los dos meses de firmado este contrato, un depósito de diez mil pesos..... ($10,000) en títulos de la Deuda Pública, cuyo importe en el caso de cumplir con dichas estipulaciones, se aplicará al pago de

la última anualidad en la parte que debe de cubrirse con títulos de la Deuda Pública o se perderá en los casos a que se refiere el art. 6° del presente contrato.

Art. 4. Los títulos de propiedad de los terrenos que se enajenan, se irán expidiendo a medida que se justifique ante la secretaría de Fomento, haber hecho en la tesorería general de la Federación, el entero Correspondiente a cada anualidad, a cuyo fin harán los concesionarios la designación de cada lote que deba de titulárseles, acompañando una nota informativa que contenga los datos necesarios para hacer las respectivas anotaciones en el plano general de los terrenos que ha sido aprobado por la secretaría de Fomento.

El referido plano levantado con motivo del deslinde que practicó el C. Luis Martínez de Castro, ha sido cedido por el gobierno a los concesionarios, a solicitud de ellos, eximiéndoles de la remedición del terreno, por resolución de 19 de marzo de 1907, mediante el pago de la cantidad de siete mil pesos ($ 7,000) en efectivo que enteraron en la tesorería general de la Federación, según aviso de la Secretaría de Hacienda de fecha 2 de mayo del mismo año.

Art. 5. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito de garantía de que habla el art. 3° dentro del plazo fijado, quedando, por tanto, insubsistente la promesa de venta, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no hacer en la tesorería general de la Federación el entero correspondiente a cada una de las cuatro anualidades, en la forma y plazos que establece el art. 2° de este contrato.

II. Por traspasar el presente convenio a compañías o particulares sin la anuencia previa del Ejecutivo de la Unión.

III. Por traspasar este contrato o los derechos que de él se derivan a una compañía extranjera,

IV. Por traspasar, enajenar o hipotecar los derechos del presente contrato a un gobierno o Estado extranjero o Agente de él, así como por admitirlo como socio en la Empresa.

Art. 6. Además de la pena de caducidad de que trata el artículo anterior, en cada uno de los casos a que el mismo se refiere, los concesionarios incurrirán en las penas siguientes:

1. En el caso a que se refiere el inciso I del art. 5°, los concesionarios perderán el depósito de garantía.

2. En el caso a que se refiere el inciso II del mismo artículo, además de la nulidad del acto, los concesionarios perderán el expresado depósito de garantía.

3. En el caso de caducidad a que se refiere el inciso III del propio artículo, además de la nulidad del acto los concesionarios perderán el depósito de garantía.

4. En el caso a que se refiere el inciso IV del expresado art. 5°, además de la nulidad del acto y pérdida del depósito de garantía, los concesionarios perderán todo derecho a los terrenos y demás propiedades que hubieren adquirido, así como a las obras que hubieren emprendido o ejecutado, todo lo cual pasará a ser propiedad del gobierno.

Art. 7. La caducidad será declarada administrativamente oyendo previamente a los concesionarios para su defensa.

Art. 8. Las cuestiones que sobre el cumplimiento de este contrato se susciten, serán siempre decididas por los tribunales Federales de la república con arreglo a las leyes mexicanas, y no podrán los concesionarios alegar derecho alguno de extranjería, aunque sea por pretendida denegación de justicia.

Art. 9. En caso de que los concesionarios pretendan formar alguna compañía, ésta deberá ser constituida con arreglo a las leyes mexicanas y domiciliadas en la república.

Art. 10. Las estampillas que por compra-venta de terrenos cause el presente contrato serán por cuenta de los concesionarios y se irán fijando en los títulos de propiedad a medida que éstos se vayan

expidiendo, autorizándose entretanto este contrato con las estampillas de simple documento.

México, 14 de agosto de 1908.– O. Molina.– Pp. Ed. Hartmann, A. L. Negrete, J. L. Negrete.– Salvador M. Camino.

Es copia. México, 7 de septiembre de 1908.– A. Aldasoro.

Agosto 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Lic. Emilio Pardo, en la del señor Eugenio J. Cañas, para el Aprovechamiento, como riego y fuerza motriz, de las aguas del rio Higuerón, del Estados de Morolos.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Eugenio J. Cañas para que, por sí o por medio de la Compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como riego, hasta la cantidad de tres mil litros de agua por segundo, como máximum, y como fuerza motriz hasta la de ocho mil litros también por segundo y como máximum, del río Higuerón, sito en el Distrito de Juárez, del Estado de Morelos, en el trayecto comprendido entre Tlaquiltenango y la confluencia del expresado río con el Amacusac, en el concepto de que esta concesión queda subordinada a las otorgadas con anterioridad por la secretaría de Fomento, sobre aprovechamiento de las aguas del río Higuerón.

Art. 2. Para la transmisión de la energía eléctrica, el concesionario queda autorizado para establecer vías aéreas por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados de la manera más apropiada.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas objeto de este contrato.

Art. 6. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la Secretaría de Fomento, para su debida aprobación y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando, la previa aprobación, ya sea de la Secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Morelos, o ya de la Secretaría de Comunicaciones, según el caso.

Art. 7. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuatrocientos pesos ($400) mensuales, que pagará adelantada en la

tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vidente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734° del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzca el concesionario serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, pues si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. Queda el concesionario en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los arreglos que juzgue convenientes para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica y del agua que se le concede para riego, sujetándose para los precios a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento para su examen y aprobación.

Art. 17. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el conce-

sionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. El concesionario podrá traspasar todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, siendo indispensable en el primer caso que aquéllos y éstas acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 19. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 20. En ningún tiempo ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato, a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 21. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 22. El concesionario garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, con el depósito de cinco mil pesos ($5,000), que, en bonos de la Deuda Pública Consolidada, hizo el señor Lic. Emilio Pardo, en representación del Sr. D. Eugenio J. Cañas, en el Banco Nacional de México, con fecha 3 de diciembre de 1907, como garantía del contrato celebrado con el mismo Sr. Eugenio J. Cañas, en 23 de octubre del año antes citado, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de aguas del río Higuerón, entre la toma de Tenayuca y la confluencia del Higuerón con el Amacusac; en la inteligencia de que el expresado depósito le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas y eléctricas a que se refiere el presente contrato.

Art. 23. Este contrato caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 24. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionadas con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 25. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar ya el concesionario en ningún tiempo la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 26. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 27. El concesionario y la compañía que en su caso organice aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar respecto a los asuntos relacionados con este contrato derecho alguno de extranjería bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28. Se refunde en el presente contrato el celebrado con el señor Eugenio J. Cañas en 23 de octubre de 1907, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Higuerón, del Estado de Morelos, en el trayecto comprendido entre la toma de Tenayuca y la confluencia del Higuerón con el Amacusac

Art. 29. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos ocho.– O. Molina.– E. Pardo.

Es copia. México, 3 de septiembre de 1908.– A. Aldasoro.

Agosto 29 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión y el señor Alberto Stein en la del Sr. Celedonio Corvera, presidente y primer vocal de la fábrica de Hilados y Tejidos «La Unión,» rescindiendo el contrato celebrado el 22 de Septiembre de 1906, entre el C. Ingeniero Andrés Aldasoro subsecretario de Fomento, como encargado de la secretaría del ramo, y el citado Sr. Stein, con la representación indicada, para el Aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio del Presidio, en el Estado de Sinaloa.

Art. 1. Se rescinde el contrato de fecha 22 de Septiembre de 1906, celebrado entre el C. Ingeniero Andrés Aldasoro, como subsecretario de Fomento, encargado de la secretaría del ramo y el Sr. Alberto Stein en representación del Sr. Celedonio Corvera, Presidente y Primer Vocal de la Fábrica de Hilados y Tejidos «La Unión,» para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río del Presidio, en el Estado de Sinaloa.

Art. 2. Como consecuencia de esta rescisión, se devolverá al Sr. Alberto Stein, por la fábrica mencionada, el depósito de tres mil pesos ($3,000), que en bonos de la Deuda Pública Consolidada y bajo certificado núm. 1,179 de 4 de Octubre de 1906, constituyó en el Banco Nacional de México, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato que se rescinde.

Art. 3. Las estampillas de este contrato, se pagarán por el representante de la fábrica expresada.

México, a veintinueve de agosto de un mil novecientos ocho.– O. Molina.– A. Stein.

Septiembre 21 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor José S. Longoria, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del Río Bravo del Norte, del Estado de Tamaulipas.

Art. 1. Se autoriza al Sr. José S. Longoria para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice conforme a las leyes de la república y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar como riego, en terrenos de su propiedad de la Villa de Reynosa del Estado de Tamaulipas, hasta la cantidad de quinientos litros de agua por segundo, como máximum, del Río Bravo del Norte, en el distrito y Estado referidos, tomando el agua en el trayecto del río que limita los terrenos de su propiedad para los cuales está destinada el agua y en la inteligencia de que la concesión se da sin perjuicio de las obligaciones que pudieran traer más tarde los Tratados con los Estados Unidos, sobre distribución de aguas del citado río, y de que en ningún caso podrá construir obras que alteren el libre curso de sus aguas.

Art. 2. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas los comenzará el concesionario dentro de seis meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la Secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

Un ejemplar de los planos se devolverá al concesionario, con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la Secretaría.

Art. 3. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación del presente contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años, contados desde la misma fecha.

Art. 4. Una vez concluidas las obras hidráulicas, aprobadas por la secretaría de Fomento, y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas objeto de este contrato.

Art. 5. El concesionario podrá construir sobre los canales que establezca los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la Secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Tamaulipas, o ya de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 6. El concesionario queda sujeto en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del Ingeniero que nombre la secretaría de Fomento, y obligado a contribuir para ayuda de los gastos de inspección con la suma de setenta pesos ($70) mensuales, que pagará adelantada en la tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 7. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros en toda la longitud de sus canales a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 8. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones de que se habla en el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de junio de 1894.

Art. 9. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las preven-

ciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 10. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 11. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa la aprobación de la secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 12. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dichas listas, el número, cantidad y calidad de los efectos y observando para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 13. Los efectos que introduzca el concesionario, serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenaré o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas, que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 14. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 15. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad para concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 16. El concesionario podrá traspasar a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, todas o parte de las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, y sólo cuando lo haga con las tierras para cuyo beneficio se otorga la concesión, siendo indispensable que los cesionarios acepten respectivamente todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 17. El concesionario podrá emitir, igualmente, acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 18. En ningún tiempo, ni por ningún motivo, podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 19. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 20. El concesionario garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, por medio del depósito de dos mil pesos ($2,000), que en bonos de la Deuda Pública Consolidada constituyó en el

Banco Nacional de México, con fecha 10 de septiembre de 1900, y bajo certificado núm. 1,414, cuyo depósito le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas.

Art. 21. Este contrato caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras y por no terminarlas en los plazos fijados en los artículos 2° y 3°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasarlo a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por suspender la construcción de las obras en un plazo de seis meses consecutivos, sin permiso de la secretaría de Fomento.

V. Por traspasar o hipotecar el contrato o concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 22. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II, III y IV, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción V, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género relacionados con éste contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 23. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar el concesionario, en ningún tiempo, la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 24. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 25. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o alguno de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio. Nunca podrán alegar, respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer, que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 26. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de septiembre de mil novecientos ocho.– O. Molina.– José S. Longoria.

Es copia. México, 23 de septiembre de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Septiembre 23 de 1908.- Se prorroga por un año, contado desde la fecha de la presente modificación, el plazo que para el establecimiento de las primeras quince familias, señala el art. 4° del contrato celebrado en diez y seis de agosto de mil novecientos seis, con el C. Federico Legazpi, en representación de la extinguida Compañía Colonizadora de Gómez Palacio, S. A., sobre colonización en el Estado de Durango, y modificado el trece de septiembre de mil novecientos siete.

El C. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el C. Federico Legazpi, como apoderado de la Asociación Momentánea formada por los señores ingenieros Federico Legazpi, Alberto Flores, Pedro C. Sánchez, Mr. Frederic F. Barker y Lic. Rodolfo Reyes, han convenido lo siguiente;

Primero. Se prorroga por un año, contado desde la fecha de la presente modificación, el plazo que para el establecimiento de las primeras quince familias, señala el art. 4° del contrato celebrado en diez y seis de agosto de mil novecientos seis, con el C. Federico Legazpi, en representación de la extinguida Compañía Colonizadora de Gómez Palacio, S. A., sobre colonización en el Estado de Durango, y modificado el trece de septiembre de mil novecientos siete; sin que se entienda por esto prorrogado también el término total que para el establecimiento del resto de las familias, fija el mismo art. 4°.

Segundo. Subsisten en todo su vigor y fuerza las demás estipulaciones del referido contrato de diez y seis de agosto de mil novecientos seis.

México, 23 de septiembre de 1908.– O. Molina.– F. Legazpi.

Es copia. México, 8 de octubre de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Octubre 3 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor D. Lorenzo González Treviño, en la de la Compañía Agrícola y Ganadera del Río de san Diego, Sociedad Anónima, subvencionando a esta Compañía para establecer las obras hidráulicas que tiene emprendidas, a fin de utilizar, como riego, las aguas de los ríos san Diego y Bravo del Norte, en el Estado de Coahuila.

Art. 1. El gobierno se obliga a ayudar a la Compañía Agrícola y Ganadera del Río de san Diego, Sociedad Anónima, anticipándole, sin interés, la suma de un millón de pesos de los fondos del Erario Nacional, y consiguiéndole en alguna institución de crédito, en calidad de préstamo, la suma de dos millones cuatrocientos mil pesos. Esta cantidad causará, cuando más, el rédito de seis y medio por ciento anual desde el día en que se efectúe el préstamo. Este rédito se pagará por semestres vencidos.

Art. 2. El millón de pesos que anticipa el gobierno general se entregará a la compañía por mensualidades de cincuenta mil pesos, comenzando a los treinta días de firmada la escritura de hipoteca respectiva. Se amortizará en dos anualidades de quinientos mil pesos cada una, debiendo pagarse la primera el treinta de septiembre de mil novecientos veinticuatro, y la segunda el 30 de septiembre de mil novecientos veinticinco.

Art. 3. Los dos millones cuatrocientos mil pesos que el gobierno se obliga a conseguir a la compañía se amortizarán en la forma siguiente.

Veinte mil pesos el treinta de septiembre de mil novecientos catorce.

Sesenta mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos quince

Cien mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos diez y seis.

Ciento cincuenta mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos

diez y siete.

Doscientos mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos diez y ocho.

Doscientos cincuenta mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos diez y nueve.

Trescientos mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos veinte.

Trescientos cincuenta mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos veintiuno.

Cuatrocientos treinta mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos veintidós.

Quinientos cuarenta mil pesos el día treinta de septiembre de mil novecientos veintitrés.

De modo que al decimoquinto año queden amortizados los dos millones cuatrocientos mil pesos.

Art. 4. La Compañía Agrícola y Ganadera del Río de san Diego, Sociedad Anónima, garantizará los dos préstamos citados con primera hipoteca de todas sus propiedades raíces, con la misma prelación y sin preferencia alguna en favor de cualquiera de los dos acreedores.

Ambas hipotecas se darán por vencidas anticipadamente a sus respectivos plazos, por el hecho de faltar la compañía a cualquiera de los vencimientos parciales de capital o réditos.

Esas hipotecas se sujetarán a la legislación del Distrito Federal, y en ellas se estipularán, entre otras cláusulas, las que faciliten el fraccionamiento de los terrenos.

Art. 5. El Sr. D. Lorenzo González Treviño, socio de la Compañía concesionaria, entregará al gobierno, al firmarse este contrato, la mitad y una más de sus acciones preferentes e igual cantidad de las comunes de la compañía, a fin de que pueda representarlo en las asambleas generales, con los derechos que corresponden a las aludidas acciones. El gobierno conservará en su poder las citadas acciones, hasta que la compañía haya satisfecho el total de los créditos a que se refiere este contrato. El Sr. D. Lorenzo González Treviño asume personalmente la obligación que antecede, y al efecto firma este contrato por su propio derecho.

Art. 6. La compañía concesionaria podrá amortizar las acciones de preferencia. En ese caso sólo quedarán en depósito la mitad y una más de las acciones comunes, y se devolverán al Sr. D. Lorenzo González Treviño las preferentes que haya depositado conforme al artículo anterior.

Art. 7. La compañía concesionaria destinará el millón de pesos que reciba del gobierno, precisamente a la conclusión de las obras hidráulicas a que se refiere el artículo siguiente, para lo cual la Secretaría de Fomento nombrará los ingenieros que juzgue necesarios, para inspeccionar y cuidar de que los abonos de cincuenta mil pesos mensuales citados no se distraigan de su objeto.

Cualquiera irregularidad que sobre este punto cometa la compañía concesionaria, originará la suspensión de los abonos, hasta que se justifique plenamente, a juicio de la Secretaría de Fomento, la inversión de los anteriores.

Art. 8. La compañía concesionaria se obliga a ejecutar las obras según los planos y presupuestos presentados y aprobados con esta fecha que se acumulan en el expediente.

Los planos comprenden:

Primero. La presa en el río de san Diego, para derivarlas aguas que surtan a los canales.

Segundo. La ampliación del canal de la Purísima, para un gasto de seis mil litros por segundo.

Tercero. La presa de la Azufrosa, en el Bajío de su nombre, con una capacidad de diez millones de metros cúbicos.

Cuarto. La presa o depósito de agua de san Miguel, en el Bajío de Bigotes, con una capacidad de diez millones de metros cúbicos.

Quinto. La presa de los Novillos, con

una capacidad de catorce millones de metros cúbicos.

Sexto. El canal de la presa de los Novillos, al punto denominado Los Balcones, con la capacidad necesaria para regar los terrenos que domine, a fin de desarrollar la fuerza necesaria para elevar del río Bravo hasta la cantidad de dos mil litros de agua por segundo.

Art. 9. Se faculta a la compañía concesionaria para construir en la margen izquierda del río de San Diego un nuevo un canal que substituya al de la Purísima, con el gasto mínimo de seis mil litros por segundo, hasta las presas de los Novillos y la Azufrosa, a cuyo efecto presentará dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la publicación de este contrato, los planos del proyecto con la memoria descriptiva, incluyendo el presupuesto y especificaciones correspondientes.

Art. 10. La compañía concesionaria se compromete a construir las obras hidráulicas necesarias para producir en el punto llamado Los Balcones la fuerza indispensable para elevar del río Bravo dos mil litros de agua por segundo, a que tiene derecho, según su concesión respectiva.

Art. 11. La compañía concesionaria queda obligada a presentar dentro de un año, contado desde la fecha de la publicación de este contrato, los proyectos, detalles, y presupuestos de la instalación productora de fuerza, citada en el artículo anterior.

Art. 12. La compañía concesionaria se compromete a continuar la construcción de las obras desde que reciba la primera mensualidad, a no suspender los trabajos de las mismas y a concluir todas aquellas a que se refiere este contrato en el término de dos años, contados desde la misma fecha.

Art. 13. La compañía concesionaria enterará en la tesorería general de la Federación la suma de trescientos pesos mensuales para compensar al gobierno de los gastos de inspección que se harán por virtud de este contrato. Esta obligación durará hasta que se hayan concluido y recibido las obras, de acuerdo con los planos aprobados por la secretaría de Fomento.

Art. 14. El gobierno tendrá durante diez años, contados desde la fecha de la constitución de la hipoteca, opción para adquirir hasta treinta mil hectáreas de los terrenos de la compañía con las obras hidráulicas que sean necesarias para su irrigación y con la cantidad de agua necesaria, de conformidad con lo que sobre este particular establezca el reglamento para la distribución de las aguas que formará la compañía, reglamento que fijará la cantidad de agua por hectárea y por año, según los distintos cultivos que se puedan hacer en la propiedad.

El gobierno podrá ejercer esta opción por todas las treinta mil hectáreas, o en fracciones no menores de un mil quinientas hectáreas, según le convenga, sin que la adquisición de una parte obligue a adquirir la totalidad.

La localización de las fracciones compradas por el gobierno se hará de tal modo que resulten contiguas hasta donde sea posible.

El precio de la adquisición de las tierras será el de ciento sesenta pesos por cada una de las primeras quince mil hectáreas, y doscientos veinticinco pesos por cada una de las demás.

El valor de los terrenos que vaya adquiriendo el gobierno se destinará a amortizar el millón de pesos que anticipa, siempre que la opción se ejerza por menos de treinta por ciento de los terrenos que estén irrigados en los momentos de ejercer la opción; pasando ese límite, el gobierno pagará el resto en efectivo.

Art. 15. La compañía concesionaria comprobará con las listas de raya, facturas y libros de contabilidad, la inversión de los abonos parciales de cincuenta mil pesos, a medida que vayan teniendo lugar.

Art. 16. Queda a la compañía concesionaria el derecho de elegir perfectamente las cinco mil hectáreas regables que no son objeto de la opción a que se refiere el art. 14° de entre las treinta y cinco mil hectáreas que

se someterán a riego.

La compañía hará la designación dentro del mes de notificada de que el gobierno desea hacer uso de la opción.

Art. 17. Los inspectores nombrados por la Secretaría permanecerán en el lugar de la construcción de las obras, verificarán las operaciones de campo, autorizarán con su presencia las rayas, y con su firma las facturas y demás documentos, y rendirán informes semanarios de los trabajos ejecutados, de los fondos invertidos y de los resultados obtenidos.

Además, tendrán la responsabilidad correspondiente por no dar aviso oportuno de que los abonos de cincuenta mil pesos que se citan en el art. 2° no se dedican a la construcción de las obras.

Art. 18. La compañía concesionaria no podrá traspasar el presente contrato ni las concesiones que de él se derivan a algún particular o compañía, sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

Por ningún motivo podrá traspasar este contrato ni las concesiones que de él se deriven a alguna compañía extranjera.

Art. 19. Por ningún motivo podrá la compañía concesionaria enajenar, traspasar o hipotecar este contrato ni las concesiones que de él se deriven a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 20. La compañía concesionaria someterá a la aprobación de la secretaría de Fomento el reglamento para la distribución de las aguas, a fin de que las tierras que adquiera el gobierno por virtud de la opción consignada en este contrato puedan disfrutar del agua necesaria, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 14°.

Art. 21. Queda a la compañía concesionaria, mientras dure este contrato:

Primero. El derecho de explotar por sí o por terceras personas el subsuelo de toda la propiedad en busca de petróleo.

Segundo. El derecho de explotar el petróleo que encuentre.

Art. 22. Los derechos conferidos por el artículo que precede terminarán en el caso de que se hagan efectivas las hipotecas, por llegar el caso previsto en el art. 27°, y cuando el gobierno haga uso de la opción que le confiere este contrato; pero llegados estos casos, si se hubiesen comenzado a perforar algunos pozos en busca de petróleo, se continuarán hasta su conclusión; y si se llega a obtener petróleo, el producto neto o la renta que la compañía obtenga por la explotación, se dividirá por mitad entre la compañía y el dueño del terreno.

Igual reparto se hará si hubiere pozos abiertos en explotación, llegado alguno de los casos de que se trata.

Art. 23. La compañía concesionaria gozará durante diez años, contados desde la fecha de este contrato, del derecho de importar, libres de derechos arancelarios, los aperos, útiles de labranza, herramientas, materiales de construcción, máquinas agrícolas, semillas y ganado reproductor.

La compañía concesionaria presentará a la secretaría, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observará para la importación de ellos las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento, previa opinión de la secretaría de Hacienda.

Art. 24. Los efectos que introduzca la compañía concesionaria serán exclusivamente para las construcciones y la explotación de los terrenos que se van a irrigar, pues si enajenare o aplicare a otros usos alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 25. El Sr. D. Lorenzo González Treviño, la compañía concesionaria o sus sucesores, podrán pagar anticipadamente los créditos a que se refiere este contrato. Una

vez efectuado el pago, cesarán las obligaciones que reporto la compañía, pero sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 14ª, de tal manera, que, hecha en su oportunidad la opción, la compañía estará obligada a traspasar al gobierno los terrenos que éste haya elegido, en idénticas condiciones a la que esta cláusula fija, es decir, con las obras hidráulicas y con la cantidad de agua que se requiera para su irrigación, obligándose la compañía a ejecutar o concluir las obras que para ellos fuesen necesarias, llegado el caso.

Art. 26. La compañía concesionaria tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 27. Este contrato caducará por la falta de cumplimiento de cualquiera de sus prevenciones y se harán efectivas las hipotecas correspondientes.

En caso de faltar al cumplimiento del art. 19°, la compañía incurrirá, además, en la pérdida de todos los bienes y propiedades de cualquier género relacionados con este contrato.

Art. 28. Las obligaciones que contrae la compañía concesionaria respecto de los plazos fijados en este contrato para la construcción de las obras, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones.

La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo la compañía concesionaria presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar; y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá ya alegar la compañía concesionaria en ningún tiempo la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá la compañía concesionaria presentar al gobierno general las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a los tres mencionados.

Art. 29. La compañía concesionaria, aun cuando todos o algunos de sus miembros fuesen extranjeros, estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrá alegar respecto de los asuntos relacionados con este contrato derecho alguno de extranjería bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrá los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos; no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 30. Las estampillas de este contrato se pagarán por la compañía concesionaria.

México, tres de octubre de mil novecientos ocho.– O. Molina.– L. Gonzales Treviño.– Rúbricas.

Es copia. México, 21 de octubre de 1908.– A. Aldasoro, subsecretario.

Octubre 31 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Licenciado Rodolfo Reyes, para la explotación de maderas en un porción de terreno nacional ubicado en el territorio de Quintana Roo.

Cláusula primera. Se autoriza al Sr. Rodolfo Reyes para que conforme a lo dispuesto en los arts. 18° y 19° de la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos y nacionales y sin perjuicio de tercero, pueda hacer la explotación de maderas de caoba, cedro, de tinte y de construcción y la extracción de gomas y resinas en una porción de terreno nacional en el territorio Federal Quintana Roo y en una superficie aproximada de ochenta y ocho

mil (80,000) hectáreas, cuyos linderos son los siguientes:

Una línea recta que partiendo del extremo Norte de la Laguna de Nohbec y siguiendo la colindancia con la concesión de la Compañía Colonizadora, llegue hasta el punto de unión de las concesiones de la citada Compañía Colonizadora de J. Ed. Plumer y de Mengel & Bros, a 25 kilómetros del extremo Norte de la Aguada Concepción: de este punto una línea recta siguiendo la colindancia de la concesión Mengel y Bros hasta el extremo Norte de la Laguna de san Felipe o Couchté: y de este punto siguiendo la colindancia con la concesión de Rodolfo Reyes una línea recta hasta el extremo Norte de la Laguna Nohbec, punto de partida.

Cláusula segunda. La duración de este contrato será hasta el 17 de octubre de 1912.

Cláusula tercera. El concesionario se obliga a respetar hasta su terminación todos los permisos que para la explotación de la zona que se arrienda haya concedido a otras personas la agencia de tierras respectiva durante el presente año.

Cláusula cuarta. Queda obligado el concesionario para la explotación a que este contrato se refiere, a dirigir sus operaciones de entera conformidad con las prescripciones del reglamento vigente para la explotación de bosques y terrenos baldíos y nacionales y demás disposiciones relativas que dicte la Secretaría de Fomento, con el fin de evitar la destrucción de los bosques nacionales, asegurando por el contrario su repoblación, conservando las plantas necesarias con semillas fértiles para asegurar la reproducción de las especies existentes en los mencionados terrenos.

Cláusula quinta. El concesionario se obliga a no cortar árboles de caoba o cedro que tengan en la base del tronco menos de dos metros de circunferencia, quedando entendido de que la falta de observancia de esta estipulación lo hará incurrir en las penas que fija el reglamento.

Cláusula sexta. El concesionario pagará como precio del arrendamiento a que este contrato se refiere:

I. La cuota de un peso cincuenta centavos ($1.50) en efectivo por cada árbol de caoba o cedro que corte o se proponga cortar.

II. La cuota de cincuenta centavos ($0.50) por cada árbol de madera de construcción.

III. La cuota de un peso ($1.00) por tonelada de leña.

IV. La cuota de dos pesos ($2.00) por cada tonelada de tinte o de otras maderas tintoreales.

V. La cuota de diez y ocho pesos ($18.00) por tonelada de chicle.

VI. La cuota de veinte y cuatro pesos ($24.00) por tonelada de hule.

VII. La cuota de un peso ($1.00) anual por cada hectárea de terreno que dedique al cultivo.

VIII. La cuota de cincuenta centavos ($0.50) anuales por cabeza de ganado que paste en la zona.

IX. La cuota de diez centavos ($0.10) anuales por cada hectárea que dedique a la explotación. Todas estas cuotas se pagarán adelantadas en la Aduana de Chetumal previo el aviso que se dará a la agencia de tierras en el territorio Federal Quintana Roo al principiar cada año natural, en el cual aviso ha de constar el número de hectáreas que debe someter a la explotación, el número de árboles que el concesionario se proponga cortar en el transcurso del año y la cantidad de gomas y resinas que pretende extraer.

Si cortare mayor o menor número de árboles o extrajese mayor o menor cantidad de gomas o resinas, que las designadas en el aviso, el concesionario lo avisará antes de que termine el año para que se haga la liquidación respectiva.

Cualquier otro aprovechamiento que se pretenda hacer, se concertará previamente por la secretaría de Fomento y se fijará el precio correspondiente.

Cláusula séptima. El concesionario queda obligado a someter a la explotación

una superficie mínima de 20,000 hectáreas durante cada uno de los cuatro años del contrato.

Cláusula octava. Si el concesionario no pudiere extraer en el transcurso del año natural las maderas designadas y cortadas durante el mismo, podrá hacerlo el año siguiente, siempre que hubieren sido marcadas en el anterior, en cuyo caso dará oportuno aviso a la agencia de tierras para que haga la liquidación correspondiente a cada año.

Cláusula novena. El concesionario se obliga a dar aviso con la debida oportunidad a la agencia de tierras de la madera cortada que trate de extraer, con el fin de que sea marcada con el martillo del subinspector de bosques respectivo, y conforme al art. 29° del reglamento vigente; se obliga igualmente a dar a conocer la marca que ha de usar y la cual se ha de poner a la madera antes de extraerla, quedando estipulado que sin esas marcas no podrá sacarse la madera de los bosques que se arriendan por este contrato.

Cláusula décima. El Ejecutivo, por medio de sus empleados federales, tendrá derecho de vigilar en todo tiempo los trabajos de explotación de maderas y de los otros productos y aprovechamientos de los montes que el concesionario establezca en los terrenos objeto de este contrato, haciéndole respetar, en la forma que determinen las leyes de la República, a cuyo efecto dictará, previo aviso del concesionario, las medidas necesarias para que sus derechos sean respetados cualquiera que sea la persona que pretenda violarlos, pudiendo el concesionario por sí o por medio de sus agentes, perseguir y apresar a los cortadores fraudulentos de madera o explotadores de otros productos de los bosques para consignarlos a la autoridad competente, otorgándose al concesionario los derechos que a los denunciantes de esos fraudes concede el reglamento vigente para la explotación de bosques.

Cláusula undécima. El concesionario se obliga a cumplir con las disposiciones que dictare la secretaría de Hacienda para vigilar los intereses fiscales, no pudiendo rehusarse tampoco a que la secretaría de Fomento haga inspeccionar los terrenos en que se verifique la explotación, a fin de cerciorarse de que se ejecutan conforme a las estipulaciones del presente contrato y a las prescripciones del reglamento vigente.

Cláusula duodécima. El gobierno podrá embarcar en todo tiempo en las embarcaciones que el concesionario ponga en movimiento para la explotación a que este contrato se refiere, agentes fiscales para la vigilancia de los trabajos, entendiéndose que no es obligación del concesionario reportar los gastos de manutención y otros que dichos agentes eroguen.

Cláusula décimo tercera. El concesionario pagará en las Aduanas respectivas los derechos de exportación de las maderas que desee extraer, sujetándose estrictamente en la exportación a la Ordenanza de Aduanas y demás leyes y disposiciones actualmente en vigor o que se expidan en lo de adelante.

Las faltas de observancia de dichas leyes y disposiciones serán castigadas con las penas que ellas mismas establecen, sin que pueda alegarse por el concesionario excepción alguna con motivo de las estipulaciones del presente contrato.

Cláusula décimo cuarta. El concesionario queda obligado a sujetarse a las medidas que la secretaría de Hacienda crea convenientes para la aplicación de las ordenanzas de Aduanas en aquellos lugares en que esto sea practicable, así como a las disposiciones que dictare la misma secretaría para aquéllos que es difícil o imposible la aplicación de dichas ordenanzas.

Cláusula décimo quinta. El concesionario se compromete a levantar por su cuenta el plano del perímetro de los terrenos arrendados dentro de un plazo de dos años contados desde la fecha de este contrato y a acotar los mismos terrenos con picaduras o brechas en aquellos lugares en que no tenga límites naturales, estableciéndose también en algunos puntos del perímetro las mojoneras correspondientes llenándose en el levantamiento del plano los requisitos marcados por los arts. 28°, 29° y 31° del

Reglamento de 5 de junio de 1894.

Con el plano del terreno o informe pericial deberá presentarse la conformidad de todos los colindantes en una de las formas que previene el inciso II del art. 39 de la ley de 26 de marzo de 1894.

Cláusula décimo sexta. El concesionario se obliga a no traspasar este contrato a algún particular o a alguna compañía sin previo permiso del Ejecutivo Federal. Bajo ningún concepto podrá traspasarlo a algún Gobierno o Estado extranjero ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto, cualquiera estipulación que se pacte en ese sentido, y caducando desde luego por ese solo hecho este contrato.

El concesionario, sin embargo, podrá celebrar contratos con otras personas que en calidad de agentes y bajo la responsabilidad y dependencia del mismo, exploten los productos a que este contrato se refiere.

Cláusula decimoséptima. El concesionario remitirá anualmente a la secretaría de Fomento un informe que contenga todos los datos necesarios para conocer la estadística de la explotación y de la exportación de las maderas y demás productos a que este contrato se refiere.

Cláusula décimo octava. El concesionario no podrá alegar en ningún tiempo derecho alguno de propiedad, de posesión o de cualquiera otra clase a los terrenos que se le arriendan por el presente contrato, los cuales volverán al gobierno sin demora alguna al terminar el plazo del arrendamiento.

Cláusula décimo novena. En los terrenos a que se refiere este contrato se comprenden todos los que no hayan sido adjudicados hasta la fecha del mismo, quedando exceptuados de la superficie total que comprenden los linderos marcados en la cláusula primera, los solicitados cuyos trámites se sigan para su adjudicación, así como los ejidos, fundo legal y demás pertenecientes a las municipalidades y los que hayan sido enajenados y respecto de los cuales tengan los individuos particulares derechos adquiridos conforme a las leyes.

Cláusula vigésima. Conforme a los arts. 18° y 19° de la ley vigente, el gobierno podrá enajenar los terrenos a que se refiere este contrato, a medida que los mismos sean solicitados por los particulares, debiendo ser entregados dichos terrenos por el concesionario a las personas que adquieran la propiedad de ellos a más tardar seis meses después de expedido el titulo correspondiente, concediéndose al concesionario el derecho de adquirir los mencionados terrenos por el tanto, cuando otro pida su enajenación, siempre que haga uso de ese derecho dentro de un término que no exceda de un mes y que indemnice al denunciante de los gastos que hubiere hecho en el denuncio, mensura y deslinde del terreno. El concesionario no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie por parte del gobierno ni de los particulares al decretarse la adjudicación de los terrenos que se arriendan.

Cláusula vigésimo primera. El concesionario podrá construir dentro de las zonas que se le arriendan, los edificios necesarios para habitaciones de los empleados y trabajadores, así como galeras o depósitos para el establecimiento de máquinas de aserrar, depósitos de víveres, de útiles y de maderas, previo aviso a la Secretaría de Fomento respecto de la superficie que se quiera utilizar y a la ubicación de dicho terreno.

A la conclusión del arrendamiento o en caso de enajenación de terreno a otra persona, podrá el arrendatario retirar los materiales que haya empleado en la explotación.

Cláusula vigésimo segunda. El concesionario permitirá que visiten las explotaciones que establezca en los montes que se arriendan, los alumnos de las escuelas nacionales siempre que vayan dirigidos por un profesor y que el objeto de la visita sea el imponerse de los procedimientos con que se hace la explotación.

Cláusula vigésimo tercera. El concesionario garantiza el cumplimiento de las estipulaciones del presente contrato con un depósito de un mil pesos ($ 1,000) en títulos

de la Deuda Nacional Consolidada, el cual perderá en los casos de caducidad que se mencionan adelante y que ha sido ya constituido en el Banco Nacional de México.

Cláusula vigésimo cuarta. Las dudas o dificultades que sobre el cumplimiento del presente contrato se susciten, serán siempre decididas por los tribunales Federales de la república con arreglo a las leyes de la misma, sin intervención extraña, no pudiendo el concesionario alegar derecho alguno de extranjería, aun cuando sea por pretendida denegación de justicia.

Cláusula vigésimo quinta. El concesionario será siempre considerado como mexicano, aun cuando él y los miembros de la compañía que organice sean extranjeros y estarán sujetos a jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio, sin intervención extraña, no pudiendo por consiguiente tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Cláusula vigésimo sexta. Este contrato caducará por cualquier, de las causas siguientes:

I. Por interrumpir la explotación más de seis meses sin causa debidamente justificada.

II. Por no hacer el entero de las cuotas que se fijan como precio del arrendamiento o porque se compruebe al concesionario que defrauda los derechos fiscales de explotación.

III. Porque se compruebe igualmente al concesionario, que destruye los bosques objeto de este contrato, por no sujetarse a las prescripciones impuestas para la explotación.

IV. Por no dedicar a la explotación el número de hectáreas que se fija en la cláusula séptima, excepto en el caso de que el gobierno enajene los terrenos y por lo mismo no haya superficie suficiente.

V. Por no levantar el plano del perímetro del terreno y por no presentarlo en el plazo fijado en la cláusula quince.

VI. Por traspasar este contrato sin las condiciones que establece la cláusula diez y seis.

VII. Por traspasar o admitir como socio a algún gobierno o Estado extranjero o agente de él.

Cláusula vigésimo séptima. La caducidad será declarada administrativamente por el Ejecutivo, oyendo previamente al concesionario para su defensa.

En todos los casos de caducidad, el concesionario perderá el depósito, sin perjuicio de las otras penas en que hubiere incurrido: y en caso del inciso VII, además de la nulidad del acto y la caducidad del contrato, el concesionario perderá las herramientas, máquinas y demás objetos empleados en la explotación.

Cláusula vigésimo octava. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, 31 de octubre de 1908.– O. Molina.– Rodolfo Reyes.

Es copia. México, 4 de noviembre de 1908.– A. Aldasoro.

Noviembre 5 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el 24 de julio de 1908, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. León S. Kuhn, como cesionario del Sr. Lic. Domingo Barrios Gómez, reformando el convenio de 20 de agosto de 1904, modificado a su vez por el de 22 de diciembre del mismo año, para el establecimiento de la industria de la fabricación de la malta.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos

Mexicanos, decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado el 24 de julio de 1908, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. León S. Kuhn, como cesionario del Sr. Lic. Domingo Barrios Gómez, reformando el convenio de 20 de agosto de 1904, modificado a su vez por el de 22 de diciembre del mismo año, para el establecimiento de la industria de la fabricación de la malta.

Gabriel Mancera, diputado presidente.– Joaquín D. Casasús, senador vicepresidente.– Genaro García, diputado secretario.– T. R, Retana, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a cinco de noviembre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- México, 5 de noviembre de 1908.– O. Molina.– Al.....

El contrato a que se refiere el anterior decreto es el siguiente.

Estampillas por valor de cincuenta centavos ($0.50), debidamente canceladas.

CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. León Kuhn, corno cesionario del Sr. Lic. Domingo Barrios Gómez, reformando él convenio de 20 de agosto de 1904, modificado a su vez por el de 22 del mismo año, para el establecimiento de la industria de la fabricación de la malta.

Art. 1. Se reforma el art. 16° del primero de los referidos contratos en los términos que siguen:

Art. 16. El concesionario o la compañía que organice, podrá importar libremente cebada propicia para la elaboración de malla, durante un plazo de diez años contados desde el primero de enero del año actual.

Es correlativa de esta franquicia, la obligación del concesionario de justificar que procura con empeño que sea cultivada y aclimatada en el país la cebada de que se trata, y al efecto, declarará con oportunidad los terrenos en que se hagan los plantíos, comprometiéndose asimismo a comprobar cada año fiscal, que la cebada importada que no haya sido utilizada como semilla para las siembras, ha sido empleada en la elaboración de la malta.

La justificación de que habla este artículo sobre la obligación del concesionario de procurar el cultivo y aclimatación de la cebada, se hará también anualmente por medio de documentos fehacientes, sin perjuicio de que la Secretaría de Fomento, cuando lo estime conveniente, nombre un inspector oficial para que visite los campos de cultivo de dicho cereal y compruebe la exactitud de los datos que se consignen en los mismos documentos.

Art. 2. Se reforma el art. 19° del mismo contrato en los términos siguientes:

Art. 19. Durante diez años qué se contarán desde el primero de enero del corriente año, los capitales que se inviertan en la construcción, establecimiento y explotación de la industria, cultivo y aclimatación de la cebada especial para la elaboración de la malta, si estos últimos fueren hechos por el concesionario, así como las acciones y bonos que éste emita o la compañía que organice con arreglo a las leyes mexicanas, gozarán de exención de todo impuesto federal directo, quedando sujetos el concesionario o la compañía al pago de los demás impuestos comprendidos en la renta federal del Timbre.

Art. 3. Este contrato se someterá en su oportunidad a la aprobación de las Cámaras Federales.

Hecho por duplicado en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de

julio de mil novecientos ocho.– O. Molina.– León S. Kuhn.

Es copia. México, 5 de noviembre de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Diciembre 15 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 24 de octubre de este año, entre el C. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. D. Luis Méndez, representante de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, y que se relaciona con los contratos de 4 de abril de 1903, 21 de junio de 1907 y sus relativos para el establecimiento de casas empacadoras y fábricas de productos procedentes de la matanza de ganado bovino, ovino y porcino, y el de 11 de febrero de 1908, para el establecimiento de almacenes refrigeradores y mercados.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado con fecha 24 de octubre de este año, entre el C. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. D. Luis Méndez, representante de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, y que se relaciona con los contratos de 4 de abril de 1903, 21 de junio de 1907 y sus relativos para el establecimiento de casas empacadoras y fábricas de productos procedentes de la matanza de ganado bovino, ovino y porcino, y el de 11 de febrero de 1908, para el establecimiento de almacenes refrigeradores y mercados.

J. B. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Lorenzo Elízaga, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a quince de diciembre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al ciudadano Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a usted para su inteligencia.- México, 15 de diciembre de 1908.– O. Molina.– Al....

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Estampillas por valor de quince pesos ($15.00,) debidamente canceladas.

CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. D. Luis Méndez, en representación de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, con relación a los Contratos de 4 de abril de 1903, 21 de junio de 1907 y sus relativos, para el establecimiento de empacadoras y fábricas de productos procedentes de la matanza de ganado bovino, ovino y porcino, y el de 11 de febrero de 1908 para el establecimiento de almacenes refrigeradores y mercados.

Art. 1. La empacadora y la fábrica de productos de desechos animales que la Compañía Empacadora Nacional Mexicana se obligó en el contrato de 21 de junio de 1907, a establecer en los Estados de Hidalgo, México o Querétaro, se establecerán en el Rastro Nuevo o Peralvillo de la ciudad de México.

Art. 2. El plazo de doce meses qué fija el referido contrato para la presentación de los planos de las dichas Empacadora y Fábrica, comenzará a correr desde la fecha en que el decreto aprobando el presente contrato, fuere promulgado.

Art. 3. Las disposiciones de los arts. 11° y 12° del contrato de 4 de abril de 1903, y del art. 11° del contrato de 21 de junio de 1907, se substituirán con las siguientes:

Art. 11. La Compañía podrá importar, libres de derechos arancelarios, los materiales, las máquinas, aparatos y herramientas necesarias para la erección de las empacadoras y fábricas que levante, de acuerdo con sus contratos, en esta capital y en los Estados de Veracruz, Nuevo León o Tamaulipas, para la refrigeración de sus productos, para su alumbrado eléctrico y para la extinción de incendios, siempre que las importaciones se hagan por una sola vez y se verifiquen dentro de los plazos fijados para la construcción.

A este fin la compañía presentará oportunamente a la secretaría de Fomento, de acuerdo con los modelos que ésta ha adoptado, una memoria y listas pormenorizadas triplicadas, de los efectos que dentro de esta concesión se pretenda introducir libremente para las instalaciones y la construcción. En dichas listas se especificará claramente el número, cantidad y calidad de dichos efectos, explicando el uso a que se destinan y el porqué de las cantidades que se piden. Se acompañarán dibujos, diseños y detalles de las maquinarias y aparatos, y la secretaría de Fomento, previos examen y calificación, determinará si dichos efectos, maquinaria y apáralos son apropiados a su objeto, de conformidad con este contrato, y en ese caso fijará las cantidades que la Compañía pueda importar libres de derechos. Esta resolución se comunicará a la secretaría de Hacienda para que en su oportunidad transmita las órdenes correspondientes a las Aduanas por donde se haga la introducción, entendiéndose que sin la presentación de estas listas y memorias, la secretaría de Fomento no aprobará ninguna introducción de efectos.

Se admitirá que durante dichas construcciones puedan presentarse listas complementarias de los efectos que hayan de ser importados, y que, con autorización de la secretaría de Fomento, pueda cambiarse el destino de cualquiera de los efectos importados a cualquiera otra de las empacadoras, fábricas o establecimientos de refrigeración con tal que estén amparadas por dichos contratos.

Para la importación libre de derechos de efectos amparados por esta concesión, la compañía observará las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la Secretaría de Hacienda; entendiéndose que la franquicia de importación de que se trata, sólo subsistirá durante el período de la construcción de los edificios e instalación de la maquinaria, y que la cancelación de fianzas que hubieren de otorgarse en las aduanas por donde se hagan las introducciones, se hará cuando se haya montado la maquinaria y se haya acreditado el empleo de los efectos importados, con el certificado del inspector, según lo previene el artículo siguiente:

Los efectos importados al amparo de la concesión objeto de este contrato, no podrán ser vendidos por la Compañía sin autorización previa de la secretaría de Hacienda, y por lo mismo, la falta de observancia de esta prescripción hará incurrir a la empresa en el delito de contrabando y la sujetará a las penas que señalan las leyes.»

El inspector del gobierno puede exigir en cualquier tiempo que se proceda a la formación del inventario para comprobar que existen en los almacenes de la Empresa los efectos importados al amparo de la concesión y que aún no hayan sido utilizados.

El mismo inspector tiene la facultad de examinar los libros de contabilidad, los comprobantes y la correspondencia comercial, a efecto de averiguar los hechos que importe conocer al Gobierno para la seguridad de los intereses fiscales.

Art. 12. Entre los efectos de libre importación se comprenderán, además, bajo las condiciones que en seguida se expresan:

I. La hoja de lata, las máquinas, útiles y aparatos necesarios para la fabricación de cajas de hoja de lata y otros envases de hoja de lata.

II. Soldadura en barra o en forma de alambre y alambre de hierro y acero.

Aquellos de estos efectos que durante la vigencia de los contratos respectivos se destinen a la fabricación de cajas y otros envases de hoja de lata, en que hayan de ser envasados los productos de las empacadoras y fábricas anexas, pagarán sus derechos al ser importados; pero la Aduana respectiva los recibirá como en depósito para ser devueltos a la compañía concesionaria cuando acredite haber empleado los efectos en la fabricación de las dichas cajas y envases de hoja de lata.

La dirección general de Aduanas llevará una lista detallada de los efectos que se importen con arreglo a este artículo, para lo cual deberá la compañía presentar a la Aduana respectiva, cada vez que haga una importación, un pormenor del peso y nombres comerciales de los artículos que consten declarados en el pedimento, de despacho.

La misma compañía llevará una lista igual a la anterior, y asumirá la obligación de no disponer de dichos artículos más que para la fabricación de los envases de su propio uso y consumo.

La comprobación del uso de los efectos se hará por medio de los libros de contabilidad, de almacenaje y de fábrica su documentación o cualesquiera otros comprobantes fehacientes.

La compañía someterá a la secretaría de Fomento, a medida que necesitare importarlos, la lista de los materiales que destine para la fabricación de envases. Una vez aprobada dicha lista se transmitirá a la secretaría de Hacienda para los efectos del inciso siguiente:

Al concluir la fabricación de determinada cantidad de envases, el inspector que nombre el gobierno, certificará el hecho; y de conformidad con dicha certificación, la secretaría ordenará que se devuelvan íntegros los derechos de importación correspondientes a los efectos que se hubieren empleado según la lista que se refiere el párrafo precedente, en la inteligencia de que esta devolución la hará la aduana por donde se hubiere hecho la importación, según lo indique el certificado del elegido inspector.

En ningún caso ni por ningún motivo estará el Gobierno obligado a devolver mayor cantidad de derechos de la que el interesado hubiere depositado al hacer sus importaciones.

La devolución de los derechos que le hubieren pagado por fas máquinas, útiles y aparatos necesarios para la fabricación de hoja de lata y envases de hoja de lata, se efectuará mediante el certificado del inspector del gobierno, de haber quedado instalados por la compañía y comenzado a funcionar. Estos electos no podrán ser vendidos por el concesionario sin previa autorización de la secretaría de Hacienda, y por lo mismo, la falta de observancia de esta prescripción hará incurrir a la compañía en el delito de contrabando, y la sujetará a la pena que señalen las leves si va se hubieren devuelto los derechos.

Art. 4. La compañía podrá establecer y explotar una casa empacadora con sus fábricas anexas de aprovechamiento de desechos, en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila, si le conviniere. Regirán respecto de esta casa y fábricas, las estipulaciones por las que hoy se rige la autorización otorgada a la compañía, para establecer una empacadora y fábricas anexas en uno de los Estados de Nuevo León o Tamaulipas. Dentro de un año contado desde la fecha de este contrato, manifestará la compañía al gobierno, si usa de la facultad que le da este artículo.

Art. 5. Las concesiones, franquicias y exenciones otorgadas a la Compañía Empacadora Nacional Mexicana en los contratos de 4 de abril de 1903 y 21 de junio de 1907, y 11 de febrero de 1908, y en el presente, respecto de casas empacadoras, fábricas de desechos de las mismas, almacenes de refrigeración, mercados y matanza en general, durarán hasta el 31 de diciembre de 1926, quedando en este sentido prorrogados dichos contratos.

Art. 6. La Compañía Empacadora Nacional Mexicana podrá ceder el todo o parte de sus concesiones o derechos según los contratos referidos, a The Bristish and

Mexican Trust Company Limited, la que gozará de las concesiones, franquicias y exenciones relativas a los derechos que se le cedan; pero para que esta cesión pueda tener lugar se requerirá que la compañía cesionaria asuma también todas las obligaciones correlativas. Para cualquier otro traspaso se requerirá la aprobación previa de la secretaría de Fomento.

Art. 7. El presente contrato, así como los contratos, que en él han sido prorrogados se han otorgado en el con repto de concesiones para el establecimiento de una industria nueva. En consecuencia en lo futuro ya no se considerará como tal industria nueva.

Art. 8. Los demás artículos de los contratos mencionados en este convenio, quedan en vigor en todo lo que no se opongan a los artículos anteriores.

Hecho por duplicado en la Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos ocho.– O. Molina.– L. Méndez.

Es copia. México, 16 de diciembre de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Diciembre 28 de 1907.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. José N. Macías, por el señor Cristóbal Pulido, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas de los ríos san Antonio, Salitre, Agua Blanca e Itzícuaro, del Estado de Michoacán.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Cristóbal Pulido, para que por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leyes de la república, y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda ejecutar las obras hidráulicas necesarias para utilizar, como fuerza motriz, hasta la cantidad de catorce mil (14,000) litros de agua por segundo, como máximum, de los ríos san Antonio, Salitre, Agua Blanca e Itzícuaro, en el Distrito de Uruapan, del Estado de Michoacán, en los puntos que a continuación se expresan: en uno del Arroyo de Agua Blanca, situado a 1,200 metros aguas arriba de su confluencia con el de san Antonio y el Salitre unidos; en otro del río unido de san Antonio el Salitre, a 134 metros aguas abajo de la confluencia de estos ríos v en otro punto del río Itzícuaro, situado en la confluencia de éste con los anteriores, y devolviendo el volumen total de agua al cauce del río Itzícuaro antes del punto denominado «Toma de agua de La Joya.»

Art. 2. Para la transmisión de la energía eléctrica, el concesionario queda autorizado para establecer vías aéreas, por medio de postes de siete metros de altura, por lo menos, y alambres con envoltura o sin ella, o bien vías subterráneas por medio de alambres y tubos instalados de la manera más apropiada.

Art. 3. Los reconocimientos del terreno para la localización de las obras hidráulicas, los comenzará el concesionario dentro de seis meses contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, y dentro del plazo de doce meses, contados desde la misma fecha, presentará a la Secretaría de Fomento, con su memoria descriptiva, los planos y perfiles relativos a dichas obras, por triplicado y a escala métrica decimal apropiada, solicitando la aprobación.

La ejemplar de los planos se devolverá al concesionario con la nota de haber sido o no aprobados, y los otros ejemplares quedarán en los archivos de la secretaría.

Art. 4. Dentro del plazo improrrogable de veinticuatro meses, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, el concesionario dará principio a la construcción de las obras, las que deberán quedar terminadas, a más tardar, dentro de los siete años contados desde la misma fecha.

Art. 5. Una vez concluidas las obras hidráulicas y eléctricas, aprobadas por la secretaría de Fomento y hecha por ésta la declaración correspondiente, se expedirá al concesionario el título que le asegure el derecho al uso y aprovechamiento de las aguas, objeto de este contrato.

Art. 6. El concesionario podrá cons-

truir sobre los canales que establezca, los puentes que juzgue necesarios para el tráfico particular, presentando previamente los planos a la secretaría de Fomento para su debida aprobación, y quedará obligado a construir, también por su cuenta, los puentes que demande el tráfico local o general, siempre que atraviese con sus canales algún camino, calzada o vía de uso público, presentando los planos respectivos y recabando la previa aprobación, ya sea de la secretaría de Fomento y del gobierno del Estado de Michoacán, o ya de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, según el caso.

Art. 7. El concesionario queda sujeto, en lo que se refiere al presente contrato, a la inspección del ingeniero que nombre la Secretaría de Fomento, y obligado a contribuir, para ayuda de los gastos de inspección, con la suma de cuatrocientos pesos ($400) mensuales, que pagará adelantada en la Tesorería general de la Federación, desde la fecha en que debe dar principio a la construcción de las obras, hasta la conclusión y entrega definitiva de las mismas.

En caso de que el concesionario no haga los pagos prevenidos en este artículo, se le aplicará la facultad económico-coactiva.

Art. 8. El concesionario tendrá el derecho de vía por la anchura hasta de seis metros, en toda la longitud de sus canales, a uno y otro lado de ellos, además del ancho de los mismos.

Art. 9. Los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario, en todas las extensiones de que habla el artículo anterior, y los que necesitare para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y otros edificios, los tomará gratuitamente, conforme al inciso III del art. 3° de la ley de 6 de julio de 1894.

Art. 10. Los terrenos de propiedad particular que necesitare el concesionario para el establecimiento de sus acueductos, dependencias, depósitos y estaciones, podrá expropiarlos de acuerdo con las prevenciones del Código vigente de Procedimientos Civiles Federales.

Art. 11. Para los efectos del artículo 734 del Código vigente de Procedimientos Federales, la secretaría de Fomento, al aprobar los planos que incluyan los terrenos por expropiar, hará la declaración administrativa y dará los fundamentos de que procede dicha expropiación.

Art. 12. Queda autorizado el concesionario para construir las líneas telegráficas y telefónicas que juzgue necesarias a lo largo de sus instalaciones, para el uso exclusivo de sus obras, previa la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, y el gobierno tendrá el derecho de mandar colocar libremente, y sin retribución alguna, uno o dos alambres telegráficos en los postes de la línea del concesionario, quedando éste sujeto a las leyes y reglamentos vigentes, o que en adelante se dieren sobre construcción y explotación de líneas telegráficas y telefónicas.

Art. 13. El concesionario podrá importar libres de derechos arancelarios, por una sola vez, todas las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las obras.

El concesionario presentará a la secretaría de Fomento, por triplicado, la lista general pormenorizada de los efectos que tenga que introducir para las instalaciones y la construcción, especificando en dicha lista el número, cantidad y calidad de los efectos, y observando, para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento.

Art. 14. Los efectos que introduzca el concesionario, serán para el uso exclusivo de sus obras y su explotación, y si enajenare o aplicare a otros usos, alguno o algunos de esos efectos, la secretaría de Hacienda exigirá el reintegro de los correspondientes derechos, sin perjuicio de las penas que para el caso de contrabando establecen las leyes.

Art. 15. Durante cinco años, contados desde la fecha de la promulgación de este contrato, los capitales invertidos por el concesionario en el trazo, construcción y reparación de las obras, gozarán de exención

de todo impuesto federal, con excepción de los del Timbre, que se causarán conforme a la ley relativa.

Art. 16. Queda el concesionario en libertad para celebrar con los particulares y corporaciones públicas y privadas, los contratos y convenios que juzgue convenientes para el aprovechamiento de la energía hidráulica o eléctrica, sujetándose para los precios, a las tarifas que con oportunidad se han de presentar a la secretaría de Fomento, para su examen y aprobación, sin perjuicio de que el concesionario haga uso de su derecho para aprovechar dicha energía hidráulica o eléctrica, en industrias que sean de su propiedad.

Art. 17. El concesionario perderá el derecho al uso de las aguas que se le conceden, en el caso de que dejare de utilizarlas en un período de diez años consecutivos, quedando el gobierno en libertad pura concederlas a otra u otras personas, las que si aceptan las obras hechas por el concesionario, las pagarán a éste según los precios que fijen los peritos nombrados por ambas partes.

Art. 18. El concesionario podrá traspasar todas o parte las concesiones hechas por el presente contrato, previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento, así como hipotecarlas a individuos o sociedades mexicanas constituidas conforme a las leyes de la república, siendo indispensable, en el primer caso, que aquéllos y éstas acepten, respectivamente, todas y cada una de las obligaciones impuestas al concesionario.

Art. 19. El concesionario podrá emitir igualmente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones, y disponer de ellos.

Art. 20. En ningún tiempo, ni por ningún motivo podrá el concesionario enajenar o hipotecar las concesiones otorgadas por el presente contrato a algún gobierno o Estado extranjero, ni admitirlo como socio, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte con ese objeto.

Art. 21. El concesionario tendrá en esta capital un representante ampliamente autorizado, para que se entienda con el gobierno en todo lo que se relacione con el presente contrato.

Art. 22. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este, contrato, constituyendo en el Banco Nacional de México un depósito de cinco mil pesos ($5,000), en Bonos de la Deuda Pública Consolidada, dentro de los ocho días de su promulgación, y le será devuelto cuando haya terminado las obras hidráulicas y eléctricas.

Art. 23. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito dentro del plazo que fija el artículo anterior, y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no comenzar los trabajos de reconocimiento y de construcción de las obras, y por no terminarlas en los plazos fijados en los arts. 3° y 4°.

II. Por no hacer uso de las aguas en un plazo de diez años consecutivos.

III. Por traspasar el presente contrato a un particular o compañía sin previo permiso y aprobación de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar o hipotecar el contrato o las concesiones que de él se derivan a algún gobierno o Estado extranjero, o por admitirlo como socio.

Art. 24. Si la caducidad se declarare por los motivos que expresan las fracciones I, II y III, el concesionario perderá el depósito y las concesiones y franquicias especiales que le otorga este contrato.

Si la caducidad se declarare por los motivos que expresa la fracción IV, el concesionario incurrirá, además, en la pérdida de todos los derechos, bienes y propiedades de cualquier género, relacionados con este contrato.

En todo caso, y antes de hacer la declaración de caducidad, la secretaría de Fomento otorgará al concesionario un término prudente para exponer su defensa.

Art. 25. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto a los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado, que impida directa y absolutamente el cumplimiento de tales obligaciones. La suspensión citada durará sólo por el tiempo que dure el impedimento que la motive, debiendo el concesionario presentar al gobierno general las noticias y pruebas de haber ocurrido el caso fortuito o de fuerza mayor del carácter mencionado, dentro del término de tres meses de haber éste tenido lugar, y sólo por el hecho de no presentar tales noticias y pruebas dentro de dicho término, no podrá alegar ya el concesionario, en ningún tiempo, el caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberá el concesionario presentar al gobierno Federal las noticias y pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de haber cesado el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la reanudación de los trabajos.

Art. 26. El concesionario se ha de sujetar a las leyes y reglamentos vigentes y que en lo sucesivo se expidan sobre policía, uso y aprovechamiento de las aguas.

Art. 27. El concesionario y la compañía que en su caso organice, aun cuando todos o alguno de sus miembros fuesen extranjeros, estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la república, en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca podrán alegar respecto a los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república concedan a los mexicanos; no pudiendo por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos, los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 28. Las estampillas de este contrato se pagarán por el concesionario.

México, diecisiete de diciembre de mil novecientos siete.– P. a. del secretario, A. Aldasoro.– José N. Macías.– Rúbricas.

Es copia. México, 28 de diciembre de 1907.– A. Aldasoro.– Rúbrica.

Diciembre 18 de 1908.- Se aprueba el contrato de 30 de mayo de este año, celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Diego Redo, relativo a la ejecución de obras hidráulicas para someter a cultivo de riego con aguas del río de san Lorenzo, del Estado de Sinaloa, diez mil hectáreas de terreno.

El C. presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato de 30 de mayo de este año, celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Diego Redo, relativo a la ejecución de obras hidráulicas para someter a cultivo de riego con aguas del río de san Lorenzo, del Estado de Sinaloa, diez mil hectáreas de terreno.

J. R. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Lorenzo Elízaga, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteli-

gencia y fines consiguientes.- México, 18 de diciembre de 1908.– O. Molina.– Al…

El contrato a que se refiere el decreto anterior, es el siguiente:

Estampillas por valor de cinco pesos debidamente canceladas.

CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Diego Redo, en la de la sucesión del Sr. D. Joaquín Redo, subvencionando las obras que tendrá que construir, según el contrato relativo, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río de San Lorenzo, del Estado de Sinaloa.

Art. 1. La sucesión del Sr. D. Joaquín Redo se compromete, por sí o por medio de la compañía mexicana que al efecto organice, conforme a las leves de la república, a ejecutar las obras hidráulicas para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río san Lorenzo, en la cantidad a que le da derecho el contrato de fecha 7 de julio de 1904.

Art. 2. La sucesión concesionaria se compromete a ejecutar todas las obras hidráulicas que fueren necesarias para someter a cultivo de riego una superficie de diez mil hectáreas en el plazo de diez años, a contar de la fecha de la promulgación del presente contrato.

Art. 3. La sucesión concesionaria se compromete a ejecutar las obras necesarias para que cada hectárea de terreno sometida a riego quede dotada de un volumen anual de 10,000 metros cúbicos.

Art. 4. Para la ejecución de las obras a que se refieren los artículos anteriores, la sucesión concesionaria se compromete, en los términos y condiciones que marca el contrato de concesión de aguas, a someter a la aprobación de la secretaría de Fomento los planos del proyecto de los terrenos por irrigar.

Art. 5. Por las obligaciones que contrae la sucesión concesionaria en virtud de este contrato, el Gobierno le pagará, como subvención, la suma de veinticinco pesos ($25), por cada hectárea de terreno que por la construcción de las obras, entregue cultivada, irrigada y provista del volumen de agua que expresa el art. 3°.

Art. 6. El pago de la subvención se hará a medida que se vayan terminando las obras de irrigación y se hayan sometido a cultivo los terrenos regados, previa recepción que haga la secretaría de Fomento.

Art. 7. El pago se hará por lotes de 500 a 1,000 hectáreas cultivadas, y recibidas por la Secretaría de Fomento a su entera satisfacción.

Art. 8. La subvención se limitará a las obras que quedaren terminadas, dentro del plazo de diez años contados desde la promulgación de este contrato.

Art. 9. Este contrato se someterá a la aprobación de las Cámaras.

Art. 10. Las estampillas de este contrato se pagarán por la sucesión concesionaria.

México, a los treinta días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– Diego Redo.– Rúbricas.

Es copia. México, 21 de diciembre de 1908.– Aldasoro.– Rúbrica.

Febrero 19 de 1908.- Se aprueba el contrato que con fecha veinte de mayo de mil novecientos ocho, celebró el C. Lic. Olegario Molina, Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, con el Sr. Carlos Vega Schiafino, para la exploración y explotación de fuentes de petróleo o criaderos de carburos e hidrocarburos gaseosos y sus derivados, en terrenos de la Costa Occidental de la Baja California.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed;

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato que con fecha veinte de mayo de mil novecientos ocho, celebró el C. Lic. Olegario Molina, Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, con el Sr. Carlos Vega Schiafino, para la exploración y explotación de fuentes de petróleo o criaderos de carburos e hidrocarburos gaseosos y sus derivados, en terrenos de la Costa Occidental de la Baja California, comprendidos en una zona desde 6,430 metros al Sur de la línea divisoria con los Estados Unidos, hasta el paralelo que pasa a 8,405 metros al Sur de la mojonera núm. 5 del rancho «El Descanso;» por el Este el límite de la Zona Federal, y por el Oeste una línea paralela a esta última distante 200 metros.

J. R. Azpe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– A. de la Peña y Reyes, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a diez y siete de diciembre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Olegario Molina, Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.

Y lo comunico a usted para su inteligencia.- México, 19 de diciembre de 1908.– O. Molina.– Al.....

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Estampillas por valor de quinientos veinte pesos, debidamente canceladas.

CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Carlos Vega Schiafino, para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y sus derivados, en una zona desde 6,430 metros al Sur de la línea divisoria con los Estados Unidos hasta el parolero que pasa a 8,405 metros al Sur de la mojonera del rancho «El Descanso,» en la Costa Occidental de la Baja California.

Art. 1. Se autoriza al Sr. Carlos Vega Schiafino, para que por sí o por medio de la compañía que al efecto organice con arreglo a las leyes mexicanas y sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, pueda practicar exploraciones en el subsuelo de los terrenos comprendidos en una zona desde 6,430 metros al Sur de la línea divisoria con los Estados Unidos hasta el paralelo que pasa a... 8,405 metros al Sur de la mojonera núm. 5 del rancho «El Descanso,» por el Este del límite de la Zona Federal, y por el Oeste una línea paralela a esta última y distante 200 metros, con el fin de descubrir fuentes de petróleo, o en general criaderos de carburo e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados.

Art. 2. Se autoriza igualmente al Sr. Carlos Vega Schafino, para que pueda llevar a cabo las explotaciones de las fuentes o criaderos de petróleo y carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados cuya exploración es motivo de este contrato.

Art. 3. El concesionario se compromete a dar aviso a la secretaría de Fomento del descubrimiento que hiciere de alguna fuente o criadero de petróleo, cuando éste se encuentre en condiciones de explotación, designando su ubicación y dando noticia de la importancia del criadero, con especificación de la cantidad que sea susceptible de producir. Este aviso se dará dentro de los dos meses siguientes al descubrimiento del criadero o al principiar la explotación.

Art. 4. El concesionario se compromete a invertir en las exploraciones y en la explotación de carburos e hidrocarburos de hidrógeno y sus derivados, que lleve a efecto en el subsuelo de los terrenos que se mencionan en el artículo primero, la cantidad de cien mil pesos ($100,000) por lo

menos, dentro de los siete años siguientes a la fecha de este contrato, cuya inversión la justificará a medida que vaya teniendo lugar, en la forma que acuerde la secretaría de Fomento.

Art. 5. El concesionario se compromete a rendir anualmente un informe a la Secretaría de Fomento, referente al año fiscal fenecido, sobre los gastos de la negociación, balance general, estadística de productos, y aquellos que designe oportunamente la misma Secretaría. La falta de cumplimiento de esta obligación será penada con una multa de cien ($100), a quinientos ($500) pesos, según la gravedad o frecuencia de las omisiones, a juicio de la secretaría.

Art. 6. El concesionario garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato, con un depósito de cinco mil pesos ($5,000) que en Bonos de la Deuda Nacional Consolidada, deberá constituir en el Banco Nacional de México, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la promulgación de este contrato, y el cual le será devuelto cuando la secretaría de Fomento declare que se ha cumplido con las estipulaciones de este convenio.

Art. 7. La secretaría de Fomento tendrá el derecho de hacer inspeccionar las obras, libros y establecimientos del concesionario cuando lo juzgue conveniente, y en este caso, el mismo concesionario enterará en la Tesorería general de la Federación las cantidades que indique la secretaría de Fomento para el pago de los gastos de inspección.

Art. 8. Para las exploraciones y explotaciones a que se refiere el artículo cuarto, el concesionario gozará de las franquicias siguientes:

I. Podrá exportar, libres de todo impuesto, los productos naturales, refinados o elaborados, que procedan de la explotación.

II. Podrá importar libres de derechos por una sola vez y durante la vigencia de este contrato, las máquinas y sus accesorios para perforar los pozos, para refinar o elaborar toda clase de productos que tengan por base el petróleo crudo, las tuberías y sus accesorios necesarios para la industria, bombas, estanques de hierro o de madera, barriles de hierro o madera, gasómetros, vías portátiles de ferrocarril con sus máquinas y carros de carga, y toda clase de materiales para los edificios destinados a la explotación, quedando sujetas estas importaciones a las disposiciones y reglamentos que dicte la secretaría de Hacienda.

Para gozar de la exención que hace esta cláusula, el concesionario presentará a la secretaría de Fomento listas pormenorizadas de los efectos que pretenda introducir dentro de esta concesión, especificando en ellas el número, cantidad y calidad de dichos efectos, y observando para la importación de ellos, las reglas dictadas y que en lo sucesivo dicte la secretaría de Hacienda, así como las limitaciones que fije la de Fomento. En caso necesario el concesionario facilitará a la secretaría de Fomento todos los detalles y dibujos que sean necesarios para resolver las dudas que pueda tener al hacer la revisión de las listas mencionadas.

III. El capital invertido en las exploraciones y explotaciones de los terrenos que menciona el artículo primero, así como los bonos y acciones que pueda emitir el concesionario o la compañía que organice, quedarán libres de todo impuesto federal durante la vigencia de este contrato, con excepción del que se causa por renta del Timbre. Igual excepción tendrán los productos de la explotación mientras no pasen a ser propiedad de tercera persona.

IV. Igualmente tendrá el concesionario el derecho de expropiación de conformidad con las reglas siguientes:

A. El concesionario presentará a la secretaría de Fomento el plano de las obras que han de ocupar los terrenos que se pretenda expropiar, y todas aquellas otras que puedan servir para demostrar la necesidad de las primeras.

B. La misma secretaría, previo informe del inspector que designe, teniendo en cuenta, si lo creyere necesario, los demás datos que en todo tiempo tiene derecho de

recabar de las autoridades o del concesionario y aun de los mismos dueños de los terrenos que pretenda expropiar, aprobará o no los planos presentados.

C. Si no fueren aprobados dichos planos, se harán al concesionario las observaciones conducentes, a fin de que sean debidamente modificados; si esto no cabe, se considerará como improcedente la expropiación pretendida.

D. Si los planos fueren aprobados con o sin modificación se considerará, por sólo este hecho, como declarada y fundada administrativamente la expropiación de los terrenos respectivos que señale el o los planos aprobados.

E. Con estos planos y la constancia de su aprobación el concesionario ocurrirá al juez de Distrito que corresponda, con respecto al lugar de la ubicación de los terrenos por expropiar y entablará el juicio respectivo de acuerdo con lo que se previene en el capítulo cuarto del título segundo del libro primero del Código de Procedimientos Civiles Federales, teniendo el interesado expropiador la personalidad que en dicho capítulo se concede a la autoridad, también expropiada y al Ministerio Público en su caso.

F. Si el dueño de la propiedad por expropiar fuere ausente o ignorado, se le hará la primera notificación en los términos que previene el articulo ciento noventa y cuatro del Código de Procedimientos ya citado, y si no se presenta, el juicio se seguirá en su rebeldía, depositándose el importe de la indemnización necesaria a juicio del juez.

G. Si el dueño del terreno fuere incierto o dudoso, por cualquier motivo que sea, el juicio se seguirá con la o las personas que de hecho se presenten a oponerse y el importe de la indemnización se depositará de la misma manera que previene la fracción anterior, para que en un uno y en otro caso, se entregue el depósito al que legalmente demuestre tener derecho a él.

H. Para la iniciación de esta clase de juicios, no es requisito necesario el que el concesionario haya procurado previamente tener algún arreglo con él o los dueños de los terrenos por expropiar.

V. El concesionario tendrá el derecho de establecer tuberías para conducir los productos de la explotación por los terrenos de propiedad particular que sean necesarios, a fin de facilitar su venta, y siempre que no sea con el objeto de establecer un servicio en el cual dichos productos sean consumidos. Para ejercitar este derecho el concesionario se sujetará a las reglas que establece el artículo cuarto de la ley de 24 de diciembre de 1901.

VI. Durante el periodo de la vigencia del presente contrato, ninguno podrá perforar pozos de exploración o de explotación, en un radio de tres kilómetros alrededor de los pozos abiertos por el concesionario, pudiendo éste adquirir terrenos, siempre que sean de propiedad nacional y al precio de tarifa, en una extensión de los mismos tres kilómetros alrededor de sus pozos.

Art. 9. El concesionario se obliga a respetar todas las concesiones dadas y que en lo futuro puedan darse para explotar los demás productos naturales.

Art. 10. El concesionario pagará en la Tesorería general de la Federación, un diez por ciento de las utilidades adquiridas en cada ejercicio fiscal en la producción obtenida en los terrenos a que se refiere el artículo primero, y siempre que ésta sea de un millón cuatrocientos setenta mil (1.470,000) litros diarios. En caso de que la producción sea menor, dichos pagos se reducirán proporcionalmente.

Art. 11. El concesionario podrá traspasar las concesiones que se le otorgan en el presente contrato, previo permiso de la secretaría de Fomento, siempre que los cesionarios se comprometan a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que impone el presente contrato. Por ningún motivo podrá traspasarlo a un gobierno o Estado extranjero o agente de ellos, siendo nula y de ningún valor ni efecto cualquiera estipulación que se pacte en este sentido, caducando desde luego este contrato por ese solo hecho. Tampoco podrá traspasarlo a

alguna sociedad o compañía que no esté organizada conforme a las leyes mexicanas.

Art. 12. Las obligaciones que contrae el concesionario respecto de los plazos fijados en este contrato, se suspenderán en todo caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de tales obligaciones.

La suspensión citada durará el tiempo que dure el impedimento, debiendo el concesionario dar aviso a la Secretaría de Fomento cuando ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor. Solamente se le abonará al concesionario el tiempo que hubiere durado el impedimento o a lo sumo dos meses más sobre la duración del mismo.

Art. 13. La empresa será siempre mexicana aun cuando tocios o alguno de sus miembros fuesen extranjeros. Estará sujeta a los tribunales de la república, ella y todos los extranjeros que tomaren parte en los negocios de la misma ya sea como accionistas, empleados o con cualquier otro carácter, serán considerados como mexicanos. Nunca podrán alegar respecto de los títulos y negocios relacionados con la empresa, derecho alguno de extranjería bajo cualquier pretexto que sea, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que los que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo por consiguiente, tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 14. Este contrato quedará insubsistente por no constituir el depósito de garantía dentro del plazo que se fija en el presente contrato y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

l. Por no invertir la suma de cien mil ($100,000), pesos en los términos y plazos establecidos.

II. Por no hacer ninguna exploración dentro de los límites de los terrenos a que este contrato se refiere, durante seis meses consecutivos.

III. Por enajenar o hipotecar el presente contrato o alguna de las concesiones de él, sin previo permiso de la secretaría de Fomento.

IV. Por traspasar este contrato o alguna de sus concesiones a algún gobierno o Estado extranjero, o admitirlo como socio, así como traspasarlo a alguna sociedad o compañía que no esté organizada conforme a las leyes mexicanas.

V. Por no hacer el pago a que se contrae el artículo noveno en los términos que establece.

Art. 15. La caducidad será declarada administrativamente.

En todo caso y antes de hacerse la declaración correspondiente se concederá al concesionario un término prudente para que exponga su defensa.

En todos los casos de caducidad, el concesionario perderá las concesiones que se le conceden y las instalaciones y útiles empleados en la explotación y el depósito de garantía.

Art. 16. La duración de este contrato será de diez años contados desde la fecha de la promulgación del mismo.

Art. 17. Este contrato se someterá a la aprobación de las Cámaras.

Art. 18. Las estampillas de este contrato serán pagadas por el concesionario.

Hecho por duplicado en la ciudad de México, a los veinte días del mes de mayo de mil novecientos ocho.– O. Molina.– C. Vega Schafino.

Diciembre 17 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha tres de diciembre de mil novecientos ocho, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco del Oro», en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitu-

cional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado con fecha tres de diciembre de mil novecientos ocho, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco del Oro», en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora.

J. R. Azpe, diputado presidente.– Emilio Rabasa senador vicepresidente.– Lorenzo Elízaga, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a diez y siete de diciembre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.– Presente.

Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.- México, 21 de diciembre de 1908.– O. Molina.– Al....

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Una estampilla por valor de cinco pesos ($5), debidamente cancelada.

CONTRATO celebrado cutre el Ejecutivo de la Unión, representado por el C. Lic. Olegario Molina, secretario de listado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. V. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco del Oro», en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora, destinado únicamente como combustible para la explotación en grande escala del mineral de la Negociación de la misma Compañía.

Art. 1. Se concede a la compañía Minera «Banco del Oro», la franquicia de importar para los trabajos de dicha Negociación en el punto de su ubicación en el Distrito de Magdalena, del Estado de Sonora, el petróleo crudo que necesite para emplearlo exclusivamente como combustible, libre del pago de derechos de importación o de cualquier otro que actualmente o en lo futuro graven dicho artículo, con excepción de los correspondientes a la renta del Timbre.

Art. 2. Esta franquicia que se otorga a la compañía «Banco del Oro,» cesará en la misma techa en que termine la de que para el mismo objeto, goza la «Cananea, Compañía Consolidada de cobre, S. A., según su contrato de fecha 25 de abril de 1908.

Art. 3. Cuando alguna persona o empresa ofrezca proveer a la compañía «Banco del Oro,» el petróleo crudo nacional en la cantidad y calidad convenientes para satisfacer las necesidades de la compañía y ésta no estuviere conforme con las condiciones de la oferta, se someterá el asunto al conocimiento y resolución del Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda. Su decisión, en este caso, será definitiva e inapelable, y resultando contraria a la compañía, se tendrá por cumplida la condición de tiempo estipulada en el art. 2° de este contrato, y cesará desde luego la autorización que, para importar libre de derechos el petróleo crudo extranjero, se concede a la compañía.

Art. 4. La empresa podrá, en beneficio de la Minería y bajo condiciones equitativas, dentro del propio Distrito de Magdalena, vender energía eléctrica que genere en sus máquinas, a compañías o a particulares que la necesiten.

Art. 5. La secretaría de Hacienda podrá en todo tiempo mandar inspeccionar las operaciones de la empresa, para cerciorarse que el petróleo crudo que importe será solamente empleado como combustible, y ésta le facilitará los medios para que la

inspección se verifique.

Art. 6. La empresa entregará a la Tesorería general de la Federación, cada mes, la suma de trescientos pesos, ($300), con que contribuye para el fondo de inspección mientras dure esta concesión.

Art. 7. En el caso de que se justificare que esta empresa destina el petróleo crudo que se le permite introducir libremente a otros usos distintos de los que señala este contrato, quedará, por este solo hecho, insubsistente, sin perjuicio del pago de los derechos sencillos y de los adicionales con que la Ordenanza general de Aduanas castiga las importaciones fraudulentas, entendiéndose que en este caso la imposición de la pena será extensiva a la total cantidad introducida desde la vigencia del contrato hasta el día en que se descubra la infracción.

Art. 8. Este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión para que surta sus efectos; siendo de cuenta del concesionario las estampillas que lo autoricen.

Es hecho en la Ciudad de México y se extiende y firma en dos ejemplares, uno para cada parte contratante, el día tres de diciembre de mil novecientos ocho.- O. Molina.– W. Z. Stuart.

Es copia. México, 21 de diciembre de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Noviembre 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y los Sres. Licenciados Lorenzo Elízaga y Luis Ibarra, sobre compra-venta y colonización de terrenos nacionales en el Estado de Guerrero.

Art. 1. El gobierno se obliga a vender y los Sres. Elízaga e Ibarra a comprar para ellos o para la compañía que al efecto organicen conforme a las leyes de la república y domicilien en la misma y a razón de cuatro pesos ($4) hectárea pagaderos en títulos de la Deuda Pública, hasta quinientas mil hectáreas que elegirán de los terrenos nacionales ubicados en el Estado de Guerrero, procedentes de los diversos deslindes practicados en dicho Estado. Los concesionarios respetarán los terrenos que estén ocupados o poseídos con título o sin él, por particulares o por pueblos, siempre que esa ocupación o posesión sean efectivas, y se obligan a procurar por los medios que estén a su alcance, que los poseedores u ocupantes de esos terrenos ocurran a la secretaría de Fomento a perfeccionar sus derechos con arreglo a las leyes.

La secretaría de Fomento proporcionará a los concesionarios los datos que tenga respecto de los terrenos nacionales del Estado.

Art. 2. El pago del valor de estos terrenos deberá ser hecho en cinco anualidades vencidas. Se tendrá por vencida la primera anualidad a los dos años y medio de la fecha de este contrato.

Art. 3. Dentro del plazo de diez y ocho meses, contados desde la fecha de este contrato, los concesionarios presentarán los planos de las quinientas mil hectáreas a que se refiere el artículo primero, en uno o varios lotes. En caso de que los concesionarios no cumplan con esa obligación y presenten planos por una extensión menor, el gobierno les titulará, previo pago y aprobación de los planos, el número de hectáreas que éstos comprendan, pero desde ese momento quedarán los mismos concesionarios privados del derecho de comprar las hectáreas que falten para completar las quinientas mil. Los planos serán levantados por perito titulado que designen los concesionarios y cuya designación apruebe la secretaría de Fomento; sujetándose los trabajos periciales a todos los requisitos que señalan las leyes para la enajenación de baldíos, presentándose el correspondiente informe pericial relativo a las operaciones de medición y la constancia de las conformidades que por escrito hayan otorgado los colindantes.

Art. 4. Una vez aprobados los planos y verificado el pago de la primera anualidad, se expedirá a los concesionarios el título de propiedad de las primeras cien mil hectáreas, y en cada uno de los siguientes años

seguirán titulándose cien mil hectáreas conforme vayan obrando en la secretaría de Fomento las constancias de haber sido pagadas las anualidades respectivas. Si los concesionarios pagaren anualidades, recibirán inmediatamente que el pago haya sido hecho, el título de propiedad que corresponda a la superficie pagada anticipadamente. Desde el momento en que los concesionarios reciban el título de propiedad, podrán disponer libremente de las tierras que ampare, siempre que garanticen a satisfacción de la secretaría de Fomento, el exceso de dos pesos por hectárea que deberán pagar en el caso de que se declare la caducidad del contrato, por no colonizar la parte que corresponda al número de hectáreas que comprenda el titulo expedido.

Art. 5. Los concesionarios se obligan a establecer en los citados terrenos, colonos de las nacionalidades que después se fijan, en la proporción de una familia por cada doscientas hectáreas que se les enajenan, instalando en el plazo de un año contado desde la expedición de cada título las familias correspondientes a las hectáreas tituladas entendiéndose por familia la compuesta de un hombre, una mujer y un hijo, por lo menos.

Art. 6. Para garantizar la obligación de colonizar, una vez que se hayan aprobado los planos, los concesionarios cada año, al verificar el pago de la anualidad correspondiente, depositarán en bonos de la Deuda Pública, en el Banco Nacional de México, la cantidad que resulte a razón de sesenta centavos por cada familia que deban establecer conforme al art. 5°.

Art. 7. Los concesionarios se obligan a establecer en sus terrenos las familias en la proporción siguiente: veinticinco por ciento de mexicanas, cuarenta por ciento de europeas, con la previa aprobación de la secretaría de Fomento respecto a las nacionalidades y treinta y cinco por ciento de canadienses, justificando la nacionalidad de éstas.

Art. 8. Los concesionarios se obligan a fraccionar y sanear los terrenos así como establecer obras de regadío a fin de proveer a los colonos del agua necesaria para el riego, señalando a cada uno el solar para habitación y el lote de sembradura que se le ha de enajenar. A cada colono se le asignará un lote de cinco hectáreas en propiedad, para pagarlo en diez anualidades, comenzando después del segundo año de establecido, a menos que los concesionarios pacten condiciones diversas con los colonos. Los solares que se entreguen a los colonos para habitación, deberán tener una superficie mínima de dos mil metros cuadrados.

Art. 9. Los concesionarios entregarán a cada jefe de familia al concederle un terreno un título provisional que ampare el lote de cultivo y el solar concedido, cuyo título será canjeado por el de propiedad definitiva al quedar cubierto en su totalidad el valor del terreno concedido al colono.

Art. 10. Los concesionarios deberán comprobar ante la secretaría de Fomento el establecimiento de los colonos con certificados de las autoridades políticas del lugar o de los agentes especiales que nombre el gobierno para inspeccionar las colonias.

Art. 11. Se entenderá por familias establecidas las que hayan construido su casa, comenzando a cultivar su terreno y que hayan permanecido durante dos años, por lo menos, en los lugares destinados para la colonia. Los extranjeros que con destino a la misma colonia entren a la república, o los mexicanos que en dicha colonia se establezcan, gozarán desde luego de las franquicias que concede el art. 18° de este contrato en la fracción III, siempre que tengan los certificados a que se refieren los arts. 5° y 6° de la ley de colonización vigente.

Los mismos concesionarios quedan obligados a comprobar ante la Secretaría de Fomento, que los colonos extranjeros que se hayan establecido, han permanecido en la colonia durante el término que marca la primera parte de este artículo y si no lo verifican pagarán al gobierno el importe de los derechos que hubieren causado los efectos importados por los colonos.

Art. 12. Queda a cargo de los concesionarios el transporte de los colonos hasta

el lugar a donde vengan a establecerse; pero se les concede el derecho de hacer uso, por una sola vez, de las líneas de vapores y de ferrocarriles subvencionados, disfrutando de las rebajas estipuladas en unos y otros en sus respectivos contratos, Al efecto, dichos concesionarios recabarán en cada caso las órdenes correspondientes de la secretaría de Fomento.

Art. 13. Los concesionarios tendrán en esta capital un representante ampliamente facultado para que el gobierno se entienda con él en todo lo relativo a este contrato.

Art. 14. Los concesionarios no podrán en ningún caso traspasar, enajenar o hipotecar las concesiones del presente contrato a ninguna compañía o empresa que no esté organizada con arreglo a las leyes mexicanas y domiciliadas en esta república.

Tampoco podrán traspasarlas ni enajenarlas a ningún gobierno ni Estado extranjero, ni admitirlo como socio.

Ningún traspaso a individuos o asociaciones particulares podrá hacerse sin el previo permiso y autorización de la secretaría de Fomento; pero pueden los concesionarios emitir libremente acciones comunes, de preferencia, bonos y obligaciones.

Art. 15. Quedan obligados los concesionarios a publicar periódicamente en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial del Estado de Guerrero las condiciones bajo las cuales venderán los terrenos.

Igualmente quedan obligados a dar a conocer a los colonos antes de que vengan a la república, las leyes vigentes sobre naturalización y extranjería y es de su responsabilidad la falta de cumplimiento de esta obligación.

Art. 16. Para garantizar las obligaciones a que se refiere el presente contrato, los concesionarios depositarán dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de este contrato, en el Banco Nacional de México, la cantidad de diez mil pesos en bonos de la Deuda Pública, que perderán en cualquiera de los casos de caducidad que después se citan.

Art. 17. Los colonos que establezcan los concesionarios deberán tener la condición legal de tales colonos y llenar los requisitos que fija la ley de colonización vigente en sus arts. 5° y 6°, y observar desde que entren al país todas las leyes de la república y las estipulaciones que les conciernen del presente convenio.

Art. 18. Los colonos que establezcan los concesionarios disfrutarán durante diez años, contados desde la fecha del establecimiento de cada colono, de las franquicias siguientes:

I. Exención del servicio militar.

II. Exención de toda clase de contribuciones, excepto de las municipales y del timbre.

III. Exención personal e intransmisible de los derechos de importación a los instrumentos de labranza, herramientas y enseres, maquinaria, materiales de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales de trabajo, de cría o de raza, todo con destino a las colonias.

La importación de dichos objetos y animales se sujetará a las prescripciones del reglamento de 17 de julio de 1899 y de la circular de la secretaría de Fomento de fecha 9 de junio de 1893.

IV. Exención personal e intransmisible de los derechos de exportación a los frutos que se cosechen.

V. Exención de los derechos de legalización de firmas y expedición de pasaportes que los agentes consulares otorguen a los individuos que vengan a la república con destino a la colonia.

Art. 19. Los colonos serán considerados con lodos los derechos y obligaciones que a los mexicanos y a los extranjeros en su caso concede e impone la Constitución Federal, gozando sin embargo, de las exenciones temporales enumeradas en el artículo que antecede y que les otorga la ley de colonización; pero en todas las cuestiones que se susciten sea de la clase que

fueren, quedarán sujetos a las decisiones de los tribunales de la república; sin que puedan intentar otros recursos que los conferidos por las leyes a los mexicanos.

Art 20. Los concesionarios y sus sucesores en lo tocante a este contrato, quedarán sujetos exclusivamente a las leyes mexicanas y a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio. Nunca podrán alegar respecto de los asuntos relacionados con este contrato, derecho alguno de extranjería, y sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer, que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo por consiguiente tener injerencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Art. 21. Este contrato quedará insubsistente por no constituirse el depósito de diez mil pesos ($10,000) dentro del plazo que señale el art. 16° de este contrato; y caducará por cualquiera de las causas siguientes:

I. Por no presentar los concesionarios los planos y demás documentos marcados en el art. 3° dentro del plazo que ese mismo artículo establece.

II. Por no establecer los colonos en el número y en los plazos estipulados en el art. 5°.

III. Por la falta de pago del valor de los terrenos en la forma y plazos fijados en el art. 1°.

IV. Por no verificar el depósito de garantía a que se refiere el artículo 6° en los plazos y condiciones fijadas por el mismo artículo.

V. Por no dar a los colonos los terrenos en la forma y términos prevenidos por los arts. 8° y 9°.

VI. Por presentar como colonos o considerarlos con ese carácter a sus operarios o peones.

VII. Por traspasar esta concesión a alguna compañía o a particulares sin la aprobación previa del gobierno.

VIII. Por traspasar, enajenar o hipotecar los derechos del presente convenio a un gobierno o Estado extranjero, así como por admitirlo como socio en la empresa.

Art. 22. En todos los casos de caducidad señalados en el artículo que antecede, los concesionarios perderán el depósito.

Art. 23. En los casos de caducidad de este contrato por no establecer los colonos en la proporción estipulada, la empresa pagará en bonos de la Deuda Pública dos pesos más por cada hectárea que se les hubiere titulado. El abono se hará a los diez días de declarada la caducidad y de no hacerse se hará efectiva la garantía que para tal caso establece el art. 4°.

Art. 24. En el caso de caducidad a que se refiere la Tracción segunda, la empresa, además de perder el depósito principal perderá el constituido conforme al art. 6°.

Art. 25. En el caso de caducidad a que se refiere la fracción VII, además de la pérdida del depósito, quedará nulo el acto de traspaso.

Art. 26. En el caso de caducidad expresada en la fracción VIII, además de la nulidad del acto y la pérdida del depósito, los concesionarios perderán todo derecho a las propiedades que hayan adquirido del gobierno y que todavía conserven en su poder y las obras que en ellas hubieren emprendido.

Art. 27. En todos los casos de caducidad, los colonos establecidos con anterioridad continuarán disfrutando de las franquicias que menciona el art. 18°.

Art. 28. Todos los plazos de este contrato son improrrogables. Las obligaciones que contraen los concesionarios respecto de dichos plazos, solamente se suspenderán por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificado a satisfacción de la secretaría de Fomento, que impida directamente el cumplimiento de tales obligaciones.

La suspensión citada durará sólo por

el tiempo que dure el impedimento que la motiva, debiendo los concesionarios presentar al gobierno las pruebas del caso fortuito o de fuerza mayor dentro del término de dos meses de haber éste tenido lugar. Pasado ese plazo sin presentar tales pruebas, no podrán ya alegar los concesionarios el caso fortuito o de fuerza mayor.

Igualmente deberán presentar los concesionarios las pruebas de que los trabajos han continuado en el acto de cesar el impedimento, haciendo la expresada presentación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reanudación de los trabajos.

Art. 29. Queda especialmente convenido que los terrenos que se enajenen a los concesionarios y a los colonos conforme al presente contrato, serán sin derecho al carbón al petróleo que puedan contener en su subsuelo.

Art. 30. El gasto de las estampillas que debe llevar esta concesión conforme a la ley del Timbre, así como el de las que deben adherirse a los títulos de propiedad de los terrenos que se adjudiquen conforme a esta misma concesión, serán por cuenta de los concesionarios.

México, 7 de noviembre de 1908.– O. Molina.– Luis Ibarra.– Lorenzo Elizaga.

Es copia. México, 26 de noviembre de 1908.– A. Aldasoro.

Noviembre 27 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y los Sres. B. F. Hoyt y compañía, S. en C. para la apertura de un pozo artesiano en terrenos de jurisdicción de Mapimi, Durango.

Art. 1. Los Sres. B. F. Hoyt y compañía, se obligan a perforar un pozo artesiano de agua brotante para el uso de la colonia Zarco, ubicada en jurisdicción de Mapimí, en el Estado de Durango. Este pozo se localizará al Occidente de la vía del Ferrocarril Central Mexicano, entre los kilómetros 1,174 y 1,178, a inmediaciones de la sierra, a efecto de obtener mayor altura sobre el plano de los terrenos de la Colonia Zarco.

Art. 2. Ambas partes contratantes, para los efectos de este contrato, convienen en llamar agua frotante aquella que, saliendo del interior del subsuelo, sube naturalmente hasta la superficie del terreno donde se comience la perforación y derrame libremente por presión hidrostática.

Art. 3. Para demostrar que, conforme a lo estipulado en el art. 2°, la presión que haga brotar el agua es hidrostática, los Sres. B. F. Hoyt y compañía, se obligan a que el agua brotará libremente por el pozo en cantidad que no sea inferior a cien litros por minuto, y que su gasto efectivo medio, durante el tiempo de observación del pozo, no sea menor del setenta y cinco por ciento del gasto que se obtenga en el primer aforo, el cual se hará cuando la compañía anuncie oficialmente a la secretaría que ha obtenido buen éxito en la perforación.

Para los efectos de este artículo se aforará el pozo mensualmente, durante un año, y se tomará el promedio de los seis últimos meses para compararlo con el del primer aforo, entendiéndose que, durante el tiempo de las observaciones, no se abrirá ningún otro pozo en una zona abarcada por un círculo de tres kilómetros de radio al rededor del pozo.

Art 4. Los Sres. B. F. Hoyt y compañía, se obligan a llevar la perforación hasta la profundidad de ochocientos (800) metros, para obtener el agua brotante, si no la hubieren obtenido a profundidad menor, pudiendo abandonar el pozo comenzado para abrir otro u otros que les ofrecieren mayores probabilidades de éxito, con tal de que no se separen de la zona que se les ha señalado para localizarlo.

Art. 5. Al comenzar la perforación se emplearán tubos cuyo diámetro interior será de treinta y tres centímetros, pero los Sres. B. F. Hoyt y compañía se obligan a que al encontrar el agua brotante, la perforación dé cabida a tubos del calibre indicado, ni tampoco a precisar la diminución del diámetro de la perforación por ser imposible

fijarla.

Art. 6. El plazo para entregar el pozo artesiano de agua brotante será el de dos años, contados desde la fecha de este contrato.

Art. 7. El precio de esta obra será el de cuarenta y cuatro mil pesos ($44,000), que la Secretaría de Fomento pagará a los Sres. B. F. Hoyt y compañía a los treinta días de entregado el pozo con agua brotante por presión hidrostática, siempre que dicha compañía garantice con un depósito de cuarenta y cuatro mil pesos ($44.000), en títulos del cinco por ciento de la Deuda Pública que constituirá en el Banco Nacional de México antes de pagarse la referida cantidad, que el agua del pozo no disminuirá durante un año de la cantidad estipulada en el artículo 3°.

Este pago se hará para cumplir el gobierno Federal con la obligación que le impone el art. 18° del contrato celebrado en 16 de agosto de 1906, entre el C. ingeniero Andrés Aldasoro, subsecretario encargado, en la citada techa, de la Secretaría de Fomento, en representación del Ejecutivo Federal, y el C. ingeniero Federico Legazpi, en la de la compañía colonizadora de Gómez Palacio, S. A., para el establecimiento de colonias en el Estado de Durango.

Art. 8. Los Sres. B. F. Hoyt y compañía darán aviso a la Secretaría de Fomento de la fecha en que comiencen los trabajos de perforación del pozo. Si dichos trabajos se paralizan por un tiempo mayor de treinta días consecutivos, pagará la compañía una multa de cien pesos por cada día que transcurra, durante la suspensión de la obra, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados ante la secretaría de Fomento.

Art. 9. Si los Sres. B F. Hoyt y compañía paralizan el trabajo y abandonan la obra por unos períodos mayores de cuarenta días consecutivos, salvo los casos de fuerza mayor debidamente comprobados, el contrato se declarará caduco, quedando a favor de la Nación el depósito de que habla el artículo siguiente.

Art. 10. Los Sres. B. F. Hoyt y compañía garantizan el cumplimiento de las obligaciones que contraen con un depósito de tres mil pesos en títulos del tres por ciento de la Deuda Pública, que ha sido va constituido en el Banco Nacional de México, cuyo depósito se les devolverá en el caso de cumplir con todas las estipulaciones del presente contrato.

Art. 11. Este contrato caducará:

I. Por paralizar los trabajos en el período a que se refiere el art. 9°.

II. Por no cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.

III. Por no resultar el agua del pozo brotante por presión hidrostática, de conformidad con el art. 3°.

Art. 12. En los casos de caducidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior, los señores B. F. Hoyt y compañía perderán el depósito de que habla el art. 10°.

Art. 13. En el caso de caducidad expresado en la fracción III del artículo 11°, los Sres. B. F. Hoyt y compañía, además de perder el depósito de ($3,000), tres mil pesos, se les exigirá la devolución de los... ($44,000), cuarenta y cuatro mil pesos que se les hubieren pagado, o perderán el depósito de ($44,000), cuarenta y cuatro mil pesos a que se contrae el art. 7°.

Art. 14. La caducidad se declarará administrativamente por la Secretaría de Fomento previa audiencia de la compañía, a la que se le señalará un plazo de treinta días para alegar lo que proceda en favor de sus derechos.

Art. 15. Los gastos de estampillas necesarias para legalizar este contrato, serán por cuenta de la compañía.

Hecho por duplicado en la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos ocho.– O. Molina.– B. F. Hoyt y C, S. en C.- Por poder, Gmo. E. Kelly.

Es copia. México, 28 de noviembre de 1908.– A. Aldasoro.

Diciembre 21 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 3 de diciembre de mil novecientos ocho, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco de Oro,» en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso, de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado con fecha 3 de diciembre de mil novecientos ocho, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco de Oro,» en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora.

J. R. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Lorenzo Elizaga, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a diez y siete de diciembre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria.– Presente.»

Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.

México, 21 de diciembre de 1908.– O. Molina.– Al....

El contrato a que se refiere el decreto anterior es el siguiente:

Una estampilla por valor de cinco pesos ($ 5), debidamente cancelada.

CONTRATO celebrado entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco del Oro,» en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora, destinado únicamente como combustible para la explotación en grande escala del Mineral de la Negociación de la misma compañía.

Art. 1. Se concede a la Compañía Minera «Banco del Oro,» la franquicia de importar para los trabajos de dicha Negociación en el punto de su ubicación en el Distrito de Magdalena, del Estado de Sonora, el petróleo crudo que necesite para emplearlo exclusivamente como combustible, libre del pago de derechos de importación o de cualquier otro que actualmente o en lo futuro graven dicho artículo, con excepción de los correspondientes a la renta del Timbre.

Art. 2. Esta franquicia que se otorga a la Compañía «Banco del Oro,» cesará en la misma fecha en que termine la de que para el mismo objeto, goza la «Cananea, Compañía Consolidada de cobre, S. A.,» según su contrato fecha 25 de abril de 1908.

Art. 3. Cuando alguna persona o empresa ofrezca proveer a la compañía «Banco del Oro,» el petróleo crudo nacional en la cantidad y calidad convenientes para satisfacer las necesidades de la compañía y ésta no estuviere conforme con las condiciones de la oferta, se someterá el asunto al conocimiento y resolución del Ejecutivo por conducto de la secretaría de Hacienda. Su decisión, en este caso, será definitiva e inapelable, y resultando contraria a la compañía, se tendrá por cumplida la condición de tiempo estipulada en el artículo 2° de este contrato, y cesará desde luego la autorización que, para importar libres de derechos el petróleo crudo extranjero, se concede a la compañía:

Art. 4. La empresa podrá, en beneficio de la Minería y bajo condiciones equitativas, dentro del propio Distrito de Magdalena, vender energía eléctrica que genere en sus máquinas, a compañías o a particulares que la necesiten.

Art. 5. La secretaría de Hacienda podrá en todo tiempo mandar inspeccionar las operaciones de la empresa, para cerciorarse que el petróleo crudo que importe será solamente empleado como combustible, y ésta le facilitará los medios para que la inspección se verifique.

Art. 6. La empresa entregará a la tesorería general de la Federación, cada mes, la suma de trescientos pesos, ($300), con que contribuye para el fondo de inspección mientras dure esta concesión.

Art. 7. En el caso de que se justificare que esta empresa destina el petróleo crudo que se le permite introducir libremente a otros usos distintos de los que señala este contrato, quedará, por este solo hecho, insubsistente, sin perjuicio del pago de los derechos sencillos y de los adicionales con que la Ordenanza general de Aduanas castiga las importaciones fraudulentas, entendiéndose que en este caso la imposición de la pena será extensiva a la total cantidad introducida desde la vigencia del contrato hasta el día en que se descubra la infracción.

Art. 8. Este contrato se someterá a la aprobación del Congreso de la Unión para que surta sus efectos; siendo de cuenta del concesionario las estampillas que lo autoricen.

Es hecho en la Ciudad de México, y se extiende y firma en dos ejemplares, uno para cada parte contratante, el día tres de diciembre de mil novecientos ocho.– O. Molina.– W. Z Stuart.

Es copia. México, 21 de diciembre de 1908.– El subsecretario, A. Aldasoro.

Enero 1º de 1908.- Reformas a la Convención sobre bultos postales entre México y Francia.

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.

Sección de Europa y África.

El señor presidente de la república ha tenido a bien dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que el día 28 de mayo del año de 1907 se concluyó y firmó en esta capital, por medio de los plenipotenciarios respectivos, una Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la república francesa: en la forma y del tenor siguientes.

Los infrascritos Ignacio Mariscal, secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Georges Chivot, encargado de negocios *ad interim* de la república francesa en México, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han convenido en reformar el artículo tercero y el párrafo primero del artículo quinto de la Convención para el cambio de bultos postales celebrada entre México y Francia el 10 de diciembre de 1891, y los han reformado en los términos que en seguida se expresan:

Artículo I.

El artículo tercero de la citada convención de diez de diciembre de mil ochocientos noventa y uno, queda substituido por el que sigue:

Artículo 3.

Por cada bulto expedido de México con destino a Francia o Argelia, la administración de Correos de México pagará a la de Francia:

Un derecho territorial de 20 centavos.

Por cada bulto expedido de Francia y de Argelia con destino a México, la administración de Correos de Francia pagará a la de México:

Un derecho territorial de 20 centavos.

Artículo II.

El párrafo primero del artículo quinto de la repetida convención de diez de diciembre de mil ochocientos noventa y uno, queda substituí-do por el que sigue:

Artículo 5.

I. El transporte entre la Francia continental por una parte, y Argelia y Córcega, por la otra, da lugar a un recargo de 10 centavos por bulto, a título de derecho marítimo, que se percibirá del remitente.

Todo bulto procedente de las localidades del interior de Córcega o de Argelia, o con destino a las mismas, da lugar también a un aumento de 10 centavos por bulto, igualmente, a cargo del que lo remita.

Estos recargos serán, llegado el caso, bonificados por la administración mexicana a la administración francesa.

Artículo III.

Las reformas a que se refieren los dos artículos anteriores, comenzarán a regir el día que lo convengan las administraciones de Correos de los dos países.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado la presente convención, poniéndole sus sellos.

Hecha en México en dos origina les, el día veintiocho del mes de mayo de mil novecientos siete.

L. S.– Firmado, Ignacio Mariscal.

L. S.– Firmado, Georges Chivot.

Que la precedente convención fue aprobada por la Cámara de senadores con fecha del 30 de mayo del mismo año.

Que igualmente fue aprobada por el gobierno de la república francesa, y ratificada por mí el día veintisiete del mes de diciembre del año referido.

Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital con fecha del veintiocho del mes y año antes citado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio Nacional de México, a primero de enero de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al señor Lic. D. Ignacio Mariscal, secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.

Y lo comunico a Ud. para los efectos consiguientes, reiterándole las seguridades de mi atenta consideración.– Mariscal.– Al...

Marzo 12 de 1908.- NOMBRAMIENTO del Sr. D. Federico Gamboa como subsecretario de Relaciones Exteriores.

Sección de Cancillería.

En atención a las circunstancias que en Ud. concurren, y a sus méritos, servicios e ilustración, el señor presidente de la república ha tenido a bien nombrarle subsecretario interino de Relaciones Exteriores, con ejercicio de decretos, y con el sueldo anual que señala a ese puesto la partida núm. 3,002 del presupuesto de egresos vigente.

Me es grato comunicarlo a Ud. para su satisfacción, y le reitero las protestas de mi distinguido aprecio.– Mariscal.

Señor D. Federico Gamboa, etc., etc., etc.– Presente.

Abril 3 de 1908.- DENUNCIA del Tratado de amistad, comercio y navegación con El Salvador.

Señor Ministro:

Con fecha del 24 de abril de 1893, se concluyó y firmó en esta ciudad, por medio de plenipotenciarios, un Tratado de amistad, comercio y navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y la república del Salvador, el cual entró en vigor desde el día 16 de noviembre del mismo año, fecha del canje de las ratificaciones.

Como la secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes ha encontrado dificultades en la práctica por lo que atañe al ejercicio de profesiones; y como por otra parte, ha expirado desde hace tiempo el

plazo de cinco años que se fijó para la vigencia de aquel convenio, sin que se haya renovado, el gobierno de México considera conveniente darle término; y en tal virtud, para los efectos de la segunda parte del artículo XXVI del mismo instrumento, tengo la honra de dirigirme a Vuestra Excelencia haciendo formal denuncia del referido Tratado de amistad, comercio y navegación, celebrado con el gobierno de la república de El Salvador.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi muy distinguida consideración.– (Firmado) Ignacio Mariscal.

A su Excelencia el ministro de Relaciones Exteriores de la república de El Salvador.– San Salvador.

Mayo 30 de 1908.- TRATADO de arbitraje obligatorio entre México o Italia.

Sección de Europa y África.

El señor presidente de la república ha tenido a bien dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el día diez y seis de octubre del año de mil novecientos siete, se concluyó y firmó en el Haya, por medio de plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado general de arbitraje obligatorio entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de Italia, en la forma y del tenor siguientes:

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el coy tic Italia, animados del deseo de estrechar los vínculos de amistad que existen entre los dos partes, inspirándose en los principios de la convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmada en el Haya el 29 de junio de 1899, y deseando consagrar, conformo al espíritu del artículo 19° de dicha convención, por un acuerdo general, el principio del arbitraje obligatorio en sus relaciones recíprocas, han resuelto celebrar una convención con este objeto, y han nombrado sita plenipotenciarios a sus delegados plenipotenciarios a la Segunda Conferencia de la Paz, a saber:

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

Al señor don Gonzalo A. Esteva, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, cerca de su Majestad el rey de Italia;

Al señor don Sebastián B. de Mier, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, cerca del presidente de la república francesa, y

Al señor don Francisco L. de la Barra, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, cerca de Su Majestad el rey de los Belgas y cerca de Su Majestad la reina de los Países Bajos.

Su majestad el rey de Italia:

A Su Excelencia el conde José Tornielli Brusati di Vergano, senador del reino, Su embajador cerca del presidente de la república francesa, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;

A Su Excelencia el señor Guido Pompilj, diputado al Parlamento Nacional, Su subsecretario para los Negocios Extranjeros, y

Al señor Guido Fusinato, diputado al Parlamento Nacional, Miembro del Consejo de Estado;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y de haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Artículo I.

Las altas partes contratantes se comprometen a someter al arbitraje todas las controversias que puedan surgir entre ellas y que no hubieren podido ser resueltas por la vía diplomática.

Sin embargo, cada una de ellas puede no someter al arbitraje las controversias que, según su juicio, afecten la independencia o el honor nacional.

En las cuestiones que fueren de la competencia de la autoridad judicial, según la ley territorial, las partes contratantes tienen el derecho de no someter el litigio al juicio arbitral, sino después que los tribunales locales hayan fallado definitivamente.

Artículo II.

Serán en todo caso sometidas al arbitraje, sin la reserva indicada en el párrafo 2 del artículo I, las controversias relativas a las cuestiones siguientes;

1. Reclamaciones pecuniarias procedentes de daños y perjuicios sufridos por uno de los Estados contratantes o por sus nacionales, por causa de actos ilícitos o por omisiones del otro Estado contratante, de sus autoridades públicas y de sus funcionarios;

2. Interpretación y aplicación de las estipulaciones que se refieran a materias de orden exclusivamente jurídico, administrativo, económico, de comercio y de navegación.

3. Denegación de justicia.

La cuestión de saber si una controversia constituye o no una diferencia expresamente prevista en los números 1, 2 y 3, será sometida también al arbitraje.

Artículo III.

En cada caso particular, las altas partes contratantes firmarán un compromiso especial que determine el objeto del litigio, y si hubiere lugar, el asiento del tribunal, el idioma de que haya de hacerse uso y los idiomas cuyo empleo quede autorizado ante él, el monto de la suma que cada parte tendrá que depositar de antemano para las costas, la forma y los plazos que deberán observarse para la constitución del tribunal y el canje de memorias y documentos, y, en general, todas las condiciones que fueren convenidas entre ellas.

A falta de compromiso, los árbitros, nombrados según las reglas establecidas en los artículos 4 y 5 del presente tratado, juzgarán sobre la base de las pretensiones que les sean, sometidas.

Además y a falta de acuerdo especial, serán aplicadas las disposiciones establecidas por la convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmada en el Haya el 29 de julio de 1899, salvo las adiciones y modificaciones contenidas en los artículos siguientes:

Artículo IV.

Salvo estipulación en contrario, el tribunal se compondrá de tres miembros. Cada parte nombrará un árbitro, y ambas se entenderán para la elección del tercer árbitro. Si no se llegare a un acuerdo acerca de este punto, las partes se dirigirán a una tercera potencia, para que ella haga esta designación, y, a falta de acuerdo aún en este punto, se dirigirá una petición con este fin a Su Majestad la reina de los Países Bajos o a sus sucesores.

El tercer árbitro será elegido en la lista de los miembros de la Corte permanente de arbitraje establecida por la citada convención de el Haya. Ni los árbitros, ni el tercer árbitro pueden ser nacionales de alguna de las partes, ni estar domiciliados o residir en sus territorios.

No podrá ser árbitro tercero la misma persona en dos asuntos sucesivos.

Artículo V.

Si las partes no se entendieren para la constitución del tribunal, las funciones de árbitro serán encomendadas a un árbitro único, el cual será nombrado, salvo estipulación contraria, conforme a las reglas establecidas en el artículo anterior para el nombramiento del tercer árbitro.

A falla de acuerdo en contrario, la cuestión prevista en el último párrafo del art. 2, será igualmente resuelta por un árbitro único, nombrado según las mismas reglas, y el cual, llegado el caso, continuará, como árbitro único o como árbitro tercero, para juzgar el litigio en cuanto al fondo.

Artículo VI.

La sentencia arbitral será dictada por mayoría de votos, sin que deba mencionarse

el disentimiento eventual de un árbitro.

La sentencia será firmada por el presidente y el actuario, o por el árbitro único.

Articulo VII.

La sentencia arbitral resuelve definitivamente y sin apelación la controversia.

Sin embargo, el tribunal o el árbitro que haya pronunciado la sentencia podrá, antes de que sea ejecutada, admitir la demanda para su revisión, en los siguientes casos:

1. Sí se ha descubierto un hecho nuevo, que hubiera podido ejercer una influencia decisiva en la sentencia, e ignorado, al terminar los debates, por el tribunal o por el árbitro y por la parte que ha solicitado la revisión.

2. Si el juicio se ha basado en documentos falsos o erróneos;

3. Si la sentencia estuviere viciada, total o parcialmente, por un error de hecho que aparezca en las actuaciones o documentos de la causa.

Artículo VIII.

Toda controversia que pueda surgir entre las partes respecto a la interpretación o a la ejecución de la sentencia, será sometida al juicio del tribunal o del árbitro que la haya pronunciado.

Artículo IX.

El presente tratado está redactado en los idiomas español, italiano y francés.

Las altas partes contratantes declaran que, en caso de duda, el texto francés hará fe.

Artículo X.

El presente tratado será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma a la mayor brevedad posible.

Permanecerá en vigor diez años, contados desde la fecha del canje de las ratificaciones. Si no fuere denunciado seis meses antes de su vencimiento, se entenderá renovado por un nuevo período de diez años, y así sucesivamente.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado y sellado el presente tratado.

Hecho y firmado por duplicado en el Haya, el 16 de octubre de mil novecientos siete.

(L. S.) G. A. Esteva. (L. S.) G. Tornielli. (L. S.) S. B. de Mier. (L. S.) G. Pompilj. (L. S) F. L. de la Barra. (L. S.) G. Fusinato.

Que el precedente tratado fue aprobado por la Cámara de senadores de la república mexicana con fecha dos del mes de diciembre del mismo año y ratificado por mí, con fecha del treinta y uno del mes y año citados;

Que igualmente fue aprobado y ratificado por Su Majestad el rey de Italia el día 7 de noviembre del mismo año;

Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Roma, con fecha del 7 de marzo del corriente año.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio Nacional de México, a los veintiocho días del mes de mayo del año mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al Señor licenciado don Ignacio Mariscal, secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.

Y lo comunico a usted para los efectos correspondientes, renovándole mi muy atenta consideración.– Mariscal.– Señor…

Junio 2 de 1908.- NOMBRAMIENTO del Sr. Lic. D. Joaquín D. Casasús, como Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje.

Sección de Europa y África.– Núm. 1,959.

De conformidad con lo estipulado en el art. 23 de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmad a en El Haya el 29 de junio de 1899, sobre que cada una de las potencias signatarias, entre las cuales se encuentra México, confiera a un número hasta de cuatro personas el carácter de miembros de la Corte

permanente de Arbitraje, el Señor presidente de la república, a fin de cumplir con esa estipulación y atendiendo a que en Ud. concurren las circunstancias que el citado artículo exige para formar parte de dicho tribunal, ha tenido a bien designarlo como uno de los árbitros mexicanos, en substitución del Sr. Lic. D. José Algara, quien falleció en esta ciudad el 10 de marzo último.

Me es grato comunicarlo a usted para su conocimiento, recomendándole se sirva manifestar si está dispuesto a aceptar dicho encargo.

Reitero a Ud. las seguridades de mi atenta consideración.– (Firmado) Mariscal.– Sr. Lic. D. Joaquín D. Casasús etc., etc., etc.– Presente.

Julio 1º de 1908.- Circular relativa a gastos en telegramas.

CIRCULAR RELATIVA A GASTOS EN TELEGRAMAS.

SECCIÓN DE CANCILLERÍA.– CIRCULAR NÚM. 1.

Con el objeto de dar cumplimiento a la regla XXXIV de la circular número 2, de 15 de septiembre de 1904, recordatoria de la número 14, de 31 de agosto de 1885, relativas una y otra al envío del resumen mensual de telegramas; y a fin de facilitar en esta secretaría la comprobación de los asuntos a que se refieran los mensajes anotados en las cuentas de gastos extraordinarios, remito a usted un estado para que de acuerdo con él formule las noticias mensuales que deberá acompañar a las cuentas documentadas de gastos extraordinarios, siempre que durante el mes a que tal cuenta corresponda haya dirigido mensajes a este ministerio.

Sírvase usted acusar recibo de esta circular y acepte las seguridades de mi atenta consideración.– Por orden del señor secretario: El subsecretario, F. Gamboa.– Señor.....

Julio 3 de 1908.- Tratado de Arbitraje entre México y los Estados Unidos de América.

Sección de América, Asia y Oceanía

El señor presidente de la república ha tenido a bien dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el día 24 de marzo del corriente año se concluyó y firmó en la ciudad de Washington, por medio de plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Arbitraje entre México y los Estados Unidos de América, en la forma y del tenor siguientes:

El gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos de América, signatarios de la Convención para el arreglo pacífico de las controversias internacionales, concluida en El Haya el 29 de julio de 1899;

Tomando en consideración que por el art. XIX de dicha convención las altas partes contratantes se reservaron el derecho de ajustar arreglos con la mira de someter a arbitramento todas las cuestiones que consideren susceptibles de tal procedimiento:

Han autorizado a los infrascriptos, respectivamente, para concluir el que sigue:

Artículo I.

Las diferencias que puedan suscitarse, ya sean de naturaleza jurídica o relativas a la interpretación de los tratados existentes entre las dos partes contratantes y que no hayan podido arreglarse por la diplomacia siempre que no se hubiere convenido en otro arbitraje, serán sometidas a la Corte Permanente establecida en El Haya por la Convención del 29 de julio de 1899, con tal que no afecten los intereses vitales, la independencia o el honor de alguna de las dos partes contratantes y que no perjudiquen intereses de tercero.

Artículo II.

En cada caso particular, las altas partes contratantes antes de apelar al Tribunal Permanente de Arbitraje, deberán concluir

un arreglo especial en que claramente se defina el asunto en cuestión, al alcance de las facultades de los árbitros y los términos que se fijen para la formación del Tribunal Arbitral y los diferentes trámites del procedimiento. Queda entendido que tales convenios especiales serán celebrados por los presidentes de uno y otro país contratante, con aprobación de los Senados respectivos.

Artículo III.

Las precedentes estipulaciones en ninguna manera derogan, sino antes bien puntualizan, confirman y dejan subsistentes las declaraciones y reglas contenidas en el artículo XXI del Tratado de paz, amistad y límites entre México y los Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de Guadalupe Hidalgo a dos de febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho.

Artículo IV.

La presente convención deberá ser ratificada por el gobierno de México, en conformidad con su Constitución y leyes; y por el presidente de los Estados Unidos de América, por y con el Consejo y el consentimiento del Senado de los mismos. Las ratificaciones deberán ser canjeadas en Washington tan pronto como fuere posible y la condición surtirá sus efectos en la fecha de dicho canje de las ratificaciones.

Artículo V.

El presente arreglo durará cinco años, que se contarán a partir de la fecha del canje de las ratificaciones.

Hecho, por duplicado, en la ciudad de Washington, en español y en inglés el 24 de marzo de 1908.

(L. S.) Firmado, José F. Godoy.

(L. S.) Firmado, Elihu Root.

Que el precedente tratado fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos de América el día dos de abril último, y ratificado por el presidente de aquella república con fecha del veintinueve de mayo siguiente.

Que igualmente fue aprobado por la Cámara de senadores de los Estados Unidos Mexicanos con fecha del cuatro de mayo último y ratificado por mí el día treinta del mismo mes.

Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Washington el día veintisiete de junio próximo pasado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio Nacional de México, a tres de julio de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al Señor licenciado don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.

Lo comunico a usted para su conocimiento, reiterándole mi atenta consideración.– Mariscal.– Señor....

Julio 11 de 1908.- Violación involuntaria de territorio británico por soldados mexicanos.

Sección de Europa y África.

Señor ministro:

Con referencia a mi nota anterior de 25 de julio de 1907, sobre la violación del territorio de Honduras Británica por soldados mexicanos, tengo la honra de manifestarle, mejor informado, que, aunque en efecto, parece que la violación se llevó al cabo por el teniente D. Serafín Holguín a la cabeza de un pelotón de soldados, ello se debió a que en el calor de la persecución que llevaba al cabo, de un desertor, no pudo a tiempo advertir que se hallaba en territorio extranjero. Puedo asegurar a Vuestra Excelencia, sin embargo, que este acto censurable cometido por el teniente Holguín, fue de su propia iniciativa y nunca por órdenes de sus superiores.

Si el teniente Holguín no hubiese fallecido, crea Vuestra Excelencia que, previo el esclarecimiento de los hechos, se le hubiera castigado en la medida de su responsabilidad.

La muerte del repetido teniente no es

un obstáculo para que el gobierno de México, como me complazco en manifestarlo por medio de la presente nota, exprese al gobierno de la Gran Bretaña, dignamente representado por Vuestra Excelencia, la pena que tal incidente le ha producido y la satisfacción que por el mismo presenta hoy.

Igualmente digo a Vuestra Excelencia que ya se ha ordenado por quien corresponde, a las autoridades militares superiores de aquella comarca, eviten en lo sucesivo la repetición de un hecho de esa naturaleza.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades reiteradas de mi muy distinguida consideración.

Firmado: Ignacio Mariscal.– A Su Excelencia Reginald Tower, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña.– Presente.

Julio 17 de 1908.- CIRCULAR relativa a la Ordenanza de Aduanas.

Sección Comercial.– Circular núm. 3.

México, 17 de julio de 1908.

Según ha comunicado a esta secretaría la de Hacienda, el señor presidente de la república tuvo a bien aprobar un dictamen en que la dirección general de Aduanas propuso, entre otras cosas, lo siguiente:

La guía práctica de la Ordenanza de Aduanas remitida por la secretaría de Relaciones a los cónsules, no es un documento oficial, y, por tanto, las prescripciones que en ella se dan, son únicamente apreciaciones más o menos fundadas de su autor, que no pueden tomarse en consideración para resolver cualquiera duda que se origine en la aplicación de la Ordenanza.

Y lo transcribo a usted para su conocimiento y efectos consiguientes.

Reitero a usted mi consideración.– P. O. del señor secretario: El subsecretario, F. Gamboa.–Señor...

Julio 25 de 1908.- C0NVENCIÓN entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán, en que se reforma el párrafo 1° del art. IV de la Convención de 24 mayo de 1892, sobre cambio do bultos postales.

Sección de Europa y África.

El señor presidente de la república ha tenido a bien dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos a sus habitantes sabed:

Los infrascritos Ignacio Mariscal, secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Guillermo de Radowitz, encargado de negocios *ad interim* del Imperio Alemán en México, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos han convenido en reformar nuevamente el párrafo primero del artículo cuarto de la Convención del 24 de mayo de 1892, referente al cambio entre México y Alemania de bultos postales sin valor declarado, y lo han reformado en los términos que en seguida se expresan:

Artículo I.

El párrafo primero del artículo cuarto de la referida Convención de veinticuatro de mayo de mil ochocientos noventa y dos, queda substituido por el que sigue, a saber:

Artículo 4.

I.– El porte de bultos de México a Alemania y viceversa, se cobrará en su totalidad, en estampillas del Correo del país de procedencia, en la proporción siguiente:

Por cada bulto enviado de México a Alemania, con peso hasta de cinco kilogramos, un peso veinte centavos en moneda mexicana.

Artículo II.

Las reformas a que se refiere el artículo anterior, comenzarán a regir el día que se fije por las administraciones de Correos de los dos países.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convención, poniéndole sus sellos.

Hecho en México en dos originales, et día veintiocho del mes de enero del presente año de mil novecientos ocho.

(L. S.) Firmado.– Ignacio Mariscal.

(L. S.) Firmado.– Wilhelm von Radowitz.

Que la precedente Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores de la República Mexicana con fecha veintisiete de abril del mismo año.

Que igualmente fue aprobada por el Gobierno del Imperio Alemán.

En tal virtud, yo, Porfirio Díaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me concede la fracción décima del artículo octogésimo quinto de la Constitución Federal, he aceptado y confirmado dicha Convención.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Federal. México, 23 de julio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al Señor Licenciado Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.

Y lo comunico a usted para los efectos consiguientes.- Reitero a usted mi atenta consideración.– Mariscal.– Señor.....

Agosto 20 de 1908.- Circular relativa a facturas consulares.

Sección Comercial.– Circular núm. 6.

En oficio de fecha 18 del mes actual, me dice la secretaría de Hacienda lo siguiente:

La aduana de Veracruz ha manifestado que con frecuencia recibe facturas consulares procedentes de diversos consulados mexicanos, en las que se indican, como único punto de destino de los efectos que amparan, lugares del interior del país, y como con esta práctica no se cumple con la prevención que contiene la parte final de la fracción I del art. 44° de la Ordenanza general de Aduanas, de que en las citadas facturas debe expresarse el puerto por el cual tienen que ser introducidas en la república las mercancías que las mismas amparen, he de merecer de usted que la secretaría de su digno cargo, si lo estima conveniente, se sirva recomendarles que, cuando se omita, exijan que se haga constar ese dato en las referidas facturas, así como todos los demás que señala la fracción I del mencionado art. 44°.

Y lo transcribo a usted para que, por su parte, cumpla con la recomendación contenida en ese oficio.

Reitero a usted mi consideración.– P. O. del señor secretario: El subsecretario, F. Gamboa.–Señor.....

Octubre 20 de 1908.- Numeración progresiva de las circulares.

Sección de Cancillería.– Núm. 7.

Para el mejor servicio del ramo, ha dispuesto esta secretaría que en lo sucesivo y a contar desde el presente año económico, la numeración de las circulares que la misma expida, sea progresiva en todos los años y no se corte en 30 de junio como ha sido práctica hasta hoy.

Reitero a usted mi atenta consideración.– Mariscal.– Señor.....

Octubre 26 de 1908.- Circular relativa a remisión de objetos pedidos por las Secretarias de Estado.

Sección de Cancillería.– Circular núm. 8.

Recomiendo a usted que, cuando haga la remisión de objetos, etcétera, pedidos por alguna de las secretarías de Estado, envíe, adjuntas a la nota de aviso respectiva, las facturas consulares correspondientes, para evitar demoras y dificultades en el despacho aduanal.

Reitero a usted mi atenta consideración.– Mariscal.– Señor.....

Octubre 28 de 1908.- Circular relativa a la dirección telegráfica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sección de Cancillería.– Circular núm. 9.

Comunico a usted, para sus efectos, que en lo sucesivo, la dirección de telegramas a este departamento será la siguiente: "Relaciones México;" la cual ha sido registrada en las oficinas telegráficas respectivas.

Reitero a usted mi atenta consideración.– Mariscal.– Señor.....

Febrero 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre la secretaría de Estado y del despacho de Gobernación y la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, para la inspección sanitaria de los productos elaborados en la Casa Empacadora establecida por dicha Compañía en el Estado de Michoacán.

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE GOBERNACIÓN.

SECCIÓN 1ª.

CONTRATO celebrado entre la secretaría de Estado y del despacho de Gobernación y la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, para la inspección sanitaria de los productos elaborados en la Casa Empacadora establecida por dicha Compañía en el Estado de Michoacán.

Cláusula 1ª. La secretaría de Gobernación nombrará un perito técnico que tendrá a su cargo la inspección sanitaria de los ganados destinados a la matanza en la Casa Empacadora que la compañía tiene establecida a inmediaciones de la ciudad de Uruapan, Estado de Michoacán, la de las carnes procedentes de esa matanza y la de los demás productos comestibles que se elaboren en dicha Casa.

Cláusula 2ª. Las atribuciones del Inspector serán:

I. Examinar, estando aún vivos, los animales destinados a la matanza y cerciorarse de su estado, disponiendo que no se mate a los que estuvieren enfermos;

II. Examinar las carnes y los demás productos alimenticios, frescos o preparados, y disponer que se esterilicen y destinen a otro uso que no sea nocivo a la salud aquellos que no se encuentren en buen estado y no sean propios para la alimentación;

III. Marcar con el sello que al efecto acuerde la compañía con el Consejo Superior de Salubridad, las carnes y productos que se encuentren en buen estado y propios para la alimentación conforme a las leyes y disposiciones sanitarias;

IV. Vigilar que el transporte de las carnes y productos se haga conforme a la cláusula 3ª;

V. Remitir los informes que le pida el Consejo Superior de Salubridad de México.

Cláusula 3ª. Las carnes frescas que se remitan a cualquiera parte de la república serán enviadas en cajas o carros refrigeradores. Los demás productos alimenticios serán también remitidos en cajas o carros refrigeradores, o en las condiciones que, conforme a su naturaleza, sean necesarias para su debida conservación.

Cláusula 4ª. El inspector dependerá del Consejo Superior de Salubridad de México, el cual decidirá las diferencias que surjan entre dicho inspector y la compañía. Esta podrá pedir a la secretaría de Gobernación la revisión de las decisiones del Consejo.

Cláusula 5ª. La inspección sanitaria practicada conforme a este contrato no exime a los productos de la Casa Empacadora de ser inspeccionados en el Distrito Federal, cuando sean importados a él para su consumo, a su llegada de la Casa Refrigeradora que la compañía tiene establecida en esta Capital y cuantas veces sea precedente conforme a las leves y reglamentos de salubridad vigentes.

Cláusula 6ª. Para pagar el sueldo del inspector, la compañía entregará por trimestres adelantados en la oficina que designe la secretaría de Gobernación, $3,600 tres mil seiscientos pesos anuales, que quedarán a disposición de la misma secre-

taría.

Cláusula 7ª. La compañía proporcionará al inspector habitación en la Casa Empacadora o cerca de ella.

Cláusula 8ª. Este contrato durará en vigor diez años contados desde su fecha.

Hecho por duplicado en México, a 7 de febrero de 1908.– Firmado: Ramón Corral.– p.p. Compañía Empacadora Nacional Mexicana.– L. Méndez.

Estampillas por valor de diez y nueve pesos, debidamente canceladas.

Es copia. México, 7 de febrero de 1908.– El subsecretario, Mig. S. Macedo.

8 de febrero de 1908.- En atención a que para comunicar la plaza de san Jacinto con la calle, del Dr. Gálvez (Colonia del Carmen), de la Villa de san Ángel, D. F., se hace indispensable la ocupación de la casa número 2 de la calle de Arteaga, se declara que es de utilidad pública y se acuerda la adquisición de dicha finca en cuanto sea necesario para el fin que se ha expresado.

Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial, para los efectos de la fracción III del art. 8° del decreto de 3 de junio de 1901, o sea para que quede nulo y de ningún valor todo contrato de venta, donación, arrendamiento, hipoteca, constitución de servidumbre o usufructo y, en general, toda estipulación que restrinja o altere los derechos del actual propietario o propietarios del predio arriba mencionado, y que se pacte de hoy en adelante.

Líbrense oficios a la Secretaría de Justicia para que se sirva ordenar que el Registro Público de la Propiedad remita copia de las inscripciones que se encuentren vivas con relación a dicho predio, y a la secretaría de Hacienda para que se sirva disponer que la Dirección general de Rentas informe acerca del valor con que el referido inmueble esté empadronado y de los productos sobre los cuales paga la contribución predial.

Comuníquese al Consejo Superior de gobierno para su conocimiento y como resultado de su oficio relativa.– Corral.

Mayo 22 de 1908.- Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed;

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Art. 1. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Art. 2. Las elecciones se verificarán el próximo mes de julio, en los días y forma prevenidos por la ley orgánica electoral de 18 de diciembre de 1901.

Art. 3. Cada uno de los funcionarios electos tomará posesión de su cargo el día que se designe al hacerse la declaración correspondiente; comenzando a correr desde esa fecha su periodo constitucional.

Juan Robles Linares, diputado presidente.– A. Arguinzóniz, senador vicepresidente.– Daniel García, diputado secretario.– A. Gavillo, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 22 de mayo de 1908.– Porfirio Días.- Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución. México, 22 de mayo de 1908.– Corral.– Al....

Mayo 22 de 1908.- Se prorroga el actual periodo de sesiones del Congreso general por el tiempo necesario, no excediendo del máximum que la Constitución permite, con objeto de que puedan ser despachadas en ambas Cámaras las iniciativas del Ejecutivo sobre reformas constitucionales e instituciones de crédito.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo único. Se prorroga el actual periodo de sesiones del Congreso general por el tiempo necesario, no excediendo del máximum que la Constitución permite, con objeto de que puedan ser despachadas en ambas Cámaras las iniciativas del Ejecutivo sobre reformas constitucionales e instituciones de crédito.

Juan Robles Linares, diputado presidente.– A. Arguinzóniz, senador vicepresidente.– Daniel García, diputado secretario.– M. Gaviño, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, duplique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 22 de mayo de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución. México, 22 de mayo de 1908.– Corral.– Al.....

22 de mayo de 1908.- A fin de que se haga con el debido orden la distribución de las asignaciones que para el ramo de Gobernación señale en cada año fiscal el presupuesto de egresos, y de que dichas asignaciones sean aplicadas a sus objetos de la manera más favorable a la satisfacción de las necesidades de los servicios públicos a que están destinadas, el presidente de la república se ha servido acordar que hasta nuevo acuerdo se observen las reglas siguientes:

1ª. El Consejo superior de gobierno del Distrito Federal remitirá a esta secretaría, antes del 15 de junio, un plan general para la inversión de las partidas generales del presupuesto de egresos relativas a servicios del Distrito, especificando las obras u objetos a que, según su opinión, deban destinarse, y presentando un cálculo aproximativo, pero tan exacto como fuere posible, de la distribución que a dichas partidas deba darse. Aprobado por la Secretaría dicho plan general, el Consejo de gobierno, así como los funcionarios que lo forman, procurarán normar a él su conducta, preparando y ordenando, en su oportunidad y con los requisitos debidos, la ejecución de las obras, trabajos u operaciones en él contenidas, sin consultar en los presupuestos mensuales autorizaciones de gastos para otros objetos, ni introducir modificaciones que no sean previamente consultadas a esta secretaría y aprobadas por ella.

El expresado plan se formará teniendo en consideración las obras o trabajos que ya estén emprendidos o acordados; y en cuanto a obras o trabajos nuevos, se procurará elegir los que satisfagan necesidades más urgentes y para cuya ejecución basten las asignaciones señaladas en el presupuesto del año fiscal en curso. Para el cálculo aproximativo del importe de los gastos, en la distribución de las partidas, se tomará en consideración el importe que hayan tenido en los dos años fiscales anteriores, así como la necesidad o conveniencia en que los gastos se reduzcan o se aumenten para el próximo ejercicio fiscal.

2ª. El presidente del Consejo Superior de Salubridad, el inspector general de la

Policía Rural, los comandantes del servicio auxiliar de la Policía Rural, el director general de la Beneficencia Pública y los jefes políticos de los territorios, presentarán también a esta secretaría, antes del 15 de junio o del 15 de julio, tratándose de los territorios de la Baja California y de Quintana Roo, un plan general para la inversión de las partidas generales del presupuesto de egresos destinadas a servicios de sus respectivos ramos, sujetándose a las mismas reglas establecidas en la fracción anterior.

3ª. Los directores del monumento a la Independencia y del Panteón Nacional presentarán a esta secretaría antes del 15 de junio un cálculo o estimación de las cantidades que con cargo a la respectiva partida del presupuesto de egresos sea posible y conveniente invertir en la construcción de las obras que tienen a su cargo, a efecto que esta secretaría fije las cantidades de que se deba disponer para cada una de dichas obras.

4ª. El director del Diario Oficial presentará también a esta secretaría, antes del 15 de junio, un proyecto de distribución de la asignación de la partida o partidas respectivas del presupuesto de egresos.

5ª. El Consejo Superior de gobierno, antes del día 20 de cada mes, someterá a la aprobación de esta secretaría, el presupuesto de las cantidades que hayan de invertirse, en el curso del mes siguiente, en cada uno de los servicios de las municipalidades del Distrito, comprendiendo en ese presupuesto los gastos que hayan de erogarse con cargo a la segunda parte del ramo 5° del presupuesto de egresos, o sea del servicio de salubridad, siempre que se trate de partidas destinadas al Distrito Federal, con sujeción a lo prevenido en el decreto de 24 de abril de 1903.

El presupuesto mensual de la Penitenciaría de México se incluirá en el general del Consejo de gobierno.

Los sueldos y los gastos menores de las oficinas detallados en el presupuesto de egresos, así como en general, cualesquiera partidas que tengan señalada cuota diaria o mensual, no necesitarán pormenorizarse en los presupuestos mensuales, bastando hacer constar en ellos su importe en conjunto.

Para los gastos que se incluyan en los presupuestos mensuales, con cargo a las partidas generales del presupuesto de egresos, se observarán las reglas siguientes:

I. Se comprenderán todos los gastos que puedan ser previstos, a efecto de que no haya necesidad de hacer adiciones o reformas al presupuesto en el curso del mes, sino en casos extraordinarios y urgentes;

II. No se consultará la autorización de ningún gasto que no se haya acordado previamente y que, además, no se considere probable erogar en el curso del mes, sino que sólo se consultarán los gastos que estuvieren ya autorizados y que se crea que tienen que hacerse en el mes. En consecuencia, como regla general, no se consultará la autorización de la duodécima parte de cada una de las partidas generales, reservando para más tarde consultar la autorización de los gastos que tales asignaciones deban representar, sino como ya se ha dicho, se procurará con todo empeño consultar solamente los gastos que de una manera cierta o por lo menos probable, se considere que han de hacerse en el mes;

III. En las asignaciones que se soliciten con cargo a las partidas generales del presupuesto de egresos, se especificará tan pormenorizadamente como sea posible, el objeto u objetos a que hayan de ser aplicadas, la persona a quien haya de hacerse el pago, y el motivo de éste, a fin de que cada una de las partidas del presupuesto mensual contenga todos los datos necesarios para ser considerada como una orden de pago que pueda ser cumplida por las oficinas del ramo de Hacienda, sin objeciones ni dificultades, bastando hacer a la secretaría de Hacienda la remisión del presupuesto mensual aprobado, y de los diversos contratos a que sus partidas se refieran, cuando se trate de obras, servicios u operaciones que se hayan contratado;

IV. Para fijar el monto de las asignaciones del presupuesto mensual, el Consejo

Superior de gobierno y los funcionarios que lo forman tomarán en consideración los sobrantes que hayan quedado de las asignaciones que con cargo a la misma partida del presupuesto de egresos se hayan autorizado en los presupuestos de los meses anteriores, de manera que, caso de existir tales sobrantes, no se consultará que se autorice en el respectivo presupuesto mensual, toda la cantidad que haya de gastarse en el mes, sino solamente la que fuere necesaria para que, unida a dichos sobrantes, se cubran los gastos del mes, puesto que la autorización de un gasto hecha en un presupuesto mensual, queda subsistente para todos los meses ulteriores del año fiscal.

6ª. El presidente del Consejo Superior de Salubridad y el director general de la Beneficencia Pública, presentarán también a esta secretaría, antes del día 20 de cada mes y sujetándose en todos las disposiciones contenidas en la regla anterior, presupuesto de los gastos que hayan de erogarse el mes siguiente con cargo a las partidas generales del presupuesto de egresos, que esta secretaría determine.

7ª. Los funcionarios dependientes de esta secretaría no consultarán la autorización de un pago sin que previamente se haya autorizado la operación que cause dicho pago. En los casos de suma urgencia y en que no sea posible recabar la previa autorización, porque la demora cause grave daño o trastorno, podrán acordar que se ejecute la operación; pero lo comunicarán a esta secretaría, por oficio o por telegrama, a más tardar el día siguiente de haber dictado su acuerdo.

8ª. Los contratos de compraventa o de cualquiera otra especie que se celebren para la aplicación de las partidas del presupuesto relativas a servicios del Distrito Federal, serán hechos precisamente por el gobernador, el director general de Obras públicas o el presidente del Consejo Superior de Salubridad, cada uno en sus respectivos ramos, de conformidad con lo prevenido en el art. 43° de la ley de organización política y municipal del Distrito.

9ª. Los funcionarios dependientes de esta secretaría, siempre que se trate de contratos u operaciones especiales y que no estén sujetos a bases previamente aprobadas o autorizadas por esta Secretaría, antes de celebrar el respectivo contrato, consultarán sus puntos principales, absteniéndose de tomar providencia alguna en lo relativo a dichos asuntos, antes de que sean aprobadas las respectivas bases.

10ª. Los funcionarios dependientes de esta secretaría, siempre que consulten la aprobación de algún gasto, tendrán cuidado de cifrar su importe exacto, o al menos con la mayor aproximación posible, exponiendo en este caso los fundamentos de su opinión, a efecto de que se pueda saber sí es posible o no autorizarlo, en vista del estado de la correspondiente partida del presupuesto de egresos, y no librar a la secretaría de Hacienda órdenes por cantidades indeterminadas.

11ª. Con el mismo objeto, los funcionarios dependientes de esta secretaría estipularán en todos los contratos que celebren, que los gastos de escritura o timbres sean por cuenta de la otra parte contratante y no aceptarán que el pago de esos gastos se haga, ni total ni parcialmente, por cuenta del gobierno.

12ª. Los funcionarios dependientes de esta secretaría, cuando un gasto aprobado no se llegue a erogar, o se erogue por una cantidad menor de la autorizada, tendrán cuidado do avisarlo a esta Secretaría. Esta regla se observará lo mismo cuando se trate de compras de efectos o de ejecución o construcción de obras, que cuando se trate de remuneración de servicios o trabajos, sea que esa remuneración consista en cantidad alzada, o sea que se haya señalado sueldo o gratificación por cuota diaria o mensual.

13ª. Las secciones de este secretaría, la inspección general de la Policía Rural y la dirección general de la Beneficencia, antes de dar cuenta de los oficios o informes en que se pida la autorización de gastos con cargo a partidas del presupuesto de egresos, presentarán esos oficios o informes al pagador de esta secretaría, a fin de que anote al pie de ellos y bajo su firma el saldo disponible que

tenga entonces la respectiva partida, a efecto de que, al dictarse el correspondiente acuerdo, se tome en consideración el monto de dicho saldo, evitándose así que se autoricen gastos de los que pueda resultar exceso sobre la correspondiente partida.

Respecto de los presupuestos a que se refieren las reglas 5ª y 6ª, no será necesario que el pagador anote el saldo de cada una de las partidas sobre las cuales se consulten gastos, bastando que asiente en una razón general cuáles sean las partidas de cuyo saldo disponible excedan las asignaciones que se consulten.

14ª. De todo libramiento que se expida, así como de todo presupuesto que se autorice, se dará conocimiento al pagador de la secretaría para que haga el correspondiente asiento en el libro a que se refiere la regla siguiente.

Los jefes de sección cuidarán especialmente de que el pagador les devuelva los presupuestos autorizados, con nota de haber tomado razón de ellos, y también de pasar a dicho pagador, el sábado de cada semana, el libro talonario de donde se tomen los libramientos que se expiden fuera de los presupuestos a que se refieren las reglas 5ª y 6ª, para que, en vista de los correspondientes talones, el pagador revise los asientos de su libro. El pagador pondrá constancia de haber hecho dicha revisión en el talón del último libramiento que se hubiere expedido durante la semana.

15ª. El pagador de esta secretaría llevará un libro en el que abrirá cuenta a cada una de las partidas del ramo 5° del presupuesto de egresos que no tenga señalada cuota diaria o mensual. En cada cuenta hará constar el importe de la partida y, tan luego como se le comunique, conforme a la regla anterior, haberse acordado que se libre alguna orden, procederá a asentarla, según queda dicho, haciendo constar, de una manera clara y precisa, el saldo exacto que quede disponible de la partida.

16ª. La dirección General de Obras públicas ordenará a todas sus secciones que comuniquen a la sección administrativa de la misma, todas las órdenes de pago que les sean comunicadas, a efecto de que se pueda llevar cuenta exacta a cada partida del presupuesto de egresos.

17ª. Cuando se hubiere autorizado algún gasto sin determinar su importe exacto, sino sólo aproximativo, una vez que se haya hecho dicho gasto, y en consecuencia se conozca exactamente su importe, el funcionario jefe del respectivo servicio, lo comunicará a esta Secretaría para que se conozca el estado exacto de la correspondiente partida, mediante el asiento complementario o de rectificación que haga su pagador en el libro a que se refiere la regla 15ª de este acuerdo.

18ª. No se autorizará el pago de sueldo o remuneración de ningún empleado, con anterioridad a la fecha de la respectiva protesta que acredite su toma de posesión, y previo el respectivo nombramiento. Sin embargo, en los casos de suma urgencia en que se trate dé substituir a empleados que por fallecimiento u otro motivo dejen abandonado un servicio que no pueda interrumpirse sin grave trastorno, el gobernador del Distrito, el presidente del Consejo Superior de Salubridad, el director general de Obras Públicas, el director general de la Beneficencia y los jefes políticos de los territorios, pueden solicitar de la Secretaría la aprobación de la designación que hayan hecho de alguna persona para que se encargue del servicio que haya quedado acéfalo y que se abone a dicha persona el sueldo desde el día en que haya comenzado a prestar sus servicios; pero en tal caso, la autorización de la Secretaría deberá ser pedida por oficio o por telegrama, a más tardar al día siguiente de aquel en que se haya hecho la designación. Los expresados funcionarios ordenarán a sus subalternos que se abstengan de encargar ningún servicio a personas que no estén previamente nombradas y hayan protestado, y que en los casos de urgencia que quedan designados, les comuniquen el hecho y soliciten su autorización el mismo día en que haya ocurrido el abandono, dando el aviso por telégrafo siempre que se encuentren a distancia en que no pueda llegar el respectivo aviso el mismo día de su fecha.

19ª. El gobernador del Distrito, el presidente del Consejo Superior de Salubridad, el director general de Obras públicas, el director general de la Beneficencia y los jefes políticos de los territorios federales, remitirán a esta Secretaría antes del 30 de junio, o del 15 de julio, tratándose de los territorios de la Baja California y de Quintana Roo, propuestas de los objetos en que hayan de ser invertidas las partidas del presupuesto de egresos que autoricen compras, obras u operaciones determinadas, y de la manera más conveniente para dicha inversión, acompañando en su caso, los proyectos y presupuestos a que haya lugar, o por lo menos las bases generales de ellos.

20ª. Para la aplicación de las partidas del presupuesto de egresos, relativas a conservación y reparación de mobiliario, útiles, instrumentos y edificios, se observarán las siguientes prevenciones:

I. Durante el primer semestre del año, solamente se consultarán los gastos necesarios para las reparaciones u obras de conservación que sean urgentes;

II. Las cantidades que no se hubieren invertido en el primer semestre, se distribuirán, previa consulta a esta secretaría, en el mes de enero de cada año, en las reparaciones y obras de conservación que sean convenientes, aunque no tengan el carácter de urgentes.

Comuníquese y publíquese.– Corral.

Mayo 27 de 1908.- Los presos federales que se encuentren en las mismas prisiones militares o en las locales de los Estados, recibirán alimentos de la misma calidad y en la misma cantidad que los demás presos que se hallen en la respectiva prisión.

CIRCULAR.

Habiéndose observado que en algunas prisiones locales de los Estados no se ministran alimentos a los presos federales que en ellas se encuentran, sino que las correspondientes oficinas de Hacienda entregan a dichos presos en efectivo el importe de los alimentos, lo cual indudablemente es contrario al orden y disciplina de las prisiones, y notándose, además, que de parte de los presos hay la marcada tendencia a considerar la cuota destinada a sus alimentos como un sueldo o a ver a que tienen derecho y deben recibir en efectivo, siendo así que lo único a que está obligado el poder público, es a que se les ministren alimentos en la misma cantidad y de la misma calidad que a los otros presos que se hallen en la propia cárcel, pues no hay motivo para que sean tratados los presos federales de diferente manera que los locales de los Estados o que los militares que se encuentren en la misma prisión.

Por tales motivos, el presidente de la república ha tenido a bien acordar que desde el 1° de julio próximo y hasta nueva orden, se observen las reglas siguientes:

1.– Los presos federales que se encuentren en las mismas prisiones militares o en las locales de los Estados, recibirán alimentos de la misma calidad y en la misma cantidad que los demás presos que se hallen en la respectiva prisión.

2.– El importe de los alimentos será cubierto por las jefaturas de Hacienda o por las otras oficinas que la secretaría de ese ramo tenga a bien designar, haciéndose los pagos a las autoridades o corporaciones que tengan a su cargo el sostenimiento de las respectivas prisiones.

La liquidación se hará abonándose, por cada reo federal que haya recibido alimentos, la misma cuota diaria que la autoridad o corporación que tenga a su cargo la respectiva cárcel pague por sus propios presos. Si el servicio se hiciere por administración, la cuota diaria que se pague será la que como costo de la ración alimenticia fije la autoridad o corporación encargada de la cárcel.

3.– La liquidación y pago del importe de dichos alimentos se hará mediante listas que formarán los comandantes, alcaldes o jefes de las prisiones donde hubiere reos federales, sujetándose en su formación, a las reglas que tenga a bien dictar la Secretaría de Hacienda para asegurar la debida exactitud.

4.– Todos los pagos por alimentos ministrados a reos federales del orden civil se harán con cargo a la partida del ramo de Gobernación destinada a gastos que ocasionen los presos civiles del orden federal (partida que en el presupuesto de egresos para el próximo año fiscal, lleva el núm. 4,021.)

Tratándose de las prisiones militares, el reembolso se hará descargando de la correspondiente partida del ramo de Guerra el importe de los alimentos ministrados a reos federales del orden civil y cargándolo a la expresada partida del ramo de Gobernación.

Tengo la honra de comunicarlo a usted para que, en lo que al gobierno de su muy digno cargo corresponde, si no tiene inconveniente, se sirva ordenar su cumplimiento.

Libertad y Constitución. México, 27 de mayo de 1908.– Corral.– Al.....

Mayo 29 de 1908.- Se aprueba en la parte relativa a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado el 30 de abril último entre la dirección general de Obras públicas y la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., para pavimentar con lámina de asfalto veinticinco calles de la ciudad de México.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta.

Artículo único. Se aprueba en la parte relativa a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado el 30 de abril último entre la dirección general de Obras públicas y la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., para pavimentar con lámina de asfalto veinticinco calles de la ciudad de México.

J. Robles Linares, diputado presidente.– A. Arguinzóniz, senador vicepresidente.– Ramón Prida, diputado secretario.– Carlos Flores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a 29 de mayo de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.

Lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, 29 de mayo de 1908.– Corral.– Al.....

El contrato a que se refiere el anterior decreto, es el siguiente:

CONTRATO celebrado entro el ingeniero Guillermo B. y Puga, como director general de Obras Públicas y la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., representada por su vicepresidente Sr. Luis Barroso y Arias y por su gerente don Leandro F. Payró, para la pavimentación de veinticinco calles de la ciudad de México, con lámina de asfalto sobre concreto de cemento.

Primera. La Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., se obliga a pavimentar con lámina de asfalto, sobre concreto de cemento, 25 calles de la ciudad de México y a conservar en buen estado los pavimentos que construye por el término de diez años, debiendo observar tanto para la construcción, cuanto en la conservación, las reglas que fija este contrato.

Segunda. Los pavimentos de las veinticinco calles a que se refieren este contrato, deberán ser construidos por la compañía durante el año fiscal de 1908-1909, pero la dirección general de Obras públicas podrá disponer que en dicho año solo se construyan 12 calles, reservándose para el siguiente año fiscal la construcción de las otras 13.

Tercera. Los pavimentos que construya la compañía serán de la clase «México

núm. 1» o «México núm. 2,» según designe la dirección general de Obras públicas para cada calle y conforme a las especificaciones que se señalan en las cláusulas siguientes.

Cuarta. Los pavimentos se compondrán de las siguientes capas: el «México núm. 1», de un cimiento de concreto hidráulico con base de cemento Portland de 177 milímetros de espesor y de una lámina de asfalto con un espesor de 51 milímetros. El «México núm. 2,» tendrá un cimiento de concreto hidráulico con base de cemento Portland de 152 milímetros y de una lámina de asfalto de 38 milímetros de espesor.

Quinta. El cimiento de concreto hidráulico con base de cemento Portland, deberá Formarse con los materiales y proporciones siguientes: una parte en volumen de cemento Portland; dos partes en volumen de arena, y seis partes en volumen de piedra triturada.

El cemento Portland que se use será de fraguado lento y no deberá iniciarse éste antes de tres horas ni terminarse después do veinte. Las briquetas que se hagan con cemento puro, deberán resistir después de estar seis días en el agua y uno en el aire, una tracción no menor de 24 kilogramos por centímetro cuadrado. El cemento que se use será fresco, contenido en buenos envases y dejará menos del 10 por 100 de residuo al hacerse pasar por un tanto de novecientas maltas por centímetro cuadrado. Todo el que emplee la compañía se sujetará por la dirección general de Obras públicas a una inspección y análisis rigurosos; y si resultare que éste no reúne las condiciones antes señaladas, será desechado; para esto, la compañía deberá tener en tiempo oportuno el cemento que va a emplear, a fin de que la dirección general de Obras públicas pueda mandar tomar de los almacenes las muestras que juzgue necesarias para que el análisis sea hecho sin dilación y no sufra demora la compañía en la ejecución de los trabajos. Si la provisión de cemento fuere en grande escala, la compañía deberá conservarlo en lugares abrigados y sin humedad, y los envases en alto, sobre zoquetes de madera.

La arena deberá ser gruesa, limpia y desprovista en lo absoluto de arcilla.

La piedra triturada que se emplee será de origen volcánico, deberá tener aristas vivas, y sus dimensiones serán tales que podrá pasar por un anillo que tenga seis centímetros de diámetro y no por uno que tenga dos centímetros de diámetro.

La mezcla del cemento con la arena, la piedra y el agua, se hará por medio de cajas apropiadas, o bien con mezcladores mecánicos, a satisfacción del ingeniero inspector, y una vez que esa mezcla se haya hecho lo más íntima posible, se procederá inmediatamente a extender sobre el terreno la capa de cemento, apisonando ésta lo necesario hasta que el mortero salga a la superficie y llene los intersticios. La superficie del concreto deberá quedar con la convexidad necesaria para que la lámina de asfalto, de grueso uniforme, de la curvatura definitiva de la calle. El concreto deberá ser protegido de la acción solar y del viento, manteniéndolo mojado, todo el tiempo que el ingeniero inspector lo juzgue necesario hasta que el fraguado se haya verificado por completo; mientras tanto, no deberá sujetarse a servicio de ninguna especie ni se podrá colocar la lámina de asfalto hasta que la base de concreto esté concluida y haya secado completamente.

Sexta. La lámina de asfalto se compondrá de asfalto refinado y residuo de petróleo, procedentes de El Ébano (san Luis Potosí,) que mezclados forman el cemento asfáltico; arena limpia y fina, enteramente desprovista de arcilla o cualquiera otra materia impropia y polvo de piedra caliza, debiendo mezclarse todos estos materiales en las proporciones siguientes;

Cemento asfáltico, 16 por 100. Arena, 74 por 100. Polvo de piedra caliza, 10 por 100.

Si por causa justificada hubiere necesidad de variar estas proporciones, la dirección general de Obras públicas podrá admitir dicha variante, siempre que no pase de la siguiente tolerancia:

4 por 100 para el cemento asfáltico; 9 por 100 para la arena; 5 por 100 para el

polvo de piedra caliza.

El asfalto refinado que se emplee deberá ser puro y libre de cualquiera otra materia extraña. El residuo de petróleo deberá estar libre de toda clase de impurezas y tendrá una densidad de 4 a 9 grados Baumé, debiendo resistir una prueba de fuego de 121 grados centígrados.

El cemento asfáltico se preparará con asfalto refinado de El Ébano, que haya sido aprobado por el ingeniero inspector, y residuo de petróleo que reúna las condiciones que se han expresado; estará a prueba de fuego de 121 grados centígrados y a la temperatura de 15 ½ grados; tendrá un peso específico de 1.19 y estará compuesto de 100 partes de asfalto puro y 12 a 20 partes de residuo de petróleo.

La arena que se use deberá probarla previamente el inspector, después de haberla examinado, y será de tales dimensiones que cuando menos el 25 por 100 pase por la criba número 80 y que el total pueda pasar por la número 10.

El polvo de piedra caliza deberá ser de tal finura, que el 15 por 100 en peso pase por la criba número 100 y que el total pueda pasar por la criba número 26.

Para hacer la mezcla del cemento asfáltico y la arena, se calentarán separadamente estos materiales a una temperatura de 150 grados centígrados.

El polvo de piedra caliza se mezclará en frío con la arena caliente en las proporciones antes indicadas; en seguida se mezclará el cemento asfáltico a la temperatura y proporciones dichas, haciendo uso para ello, de aparatos adecuados, a fin de que se obtenga una mezcla homogénea.

Al colocarse esta mezcla en la calle, tendrá una temperatura de 150 grados centígrados y se extenderá directamente sobre el concreto, cuando éste se encuentre ya perfectamente seco, de manera que se una a él, para lo cual se comprimirá hasta que se obtenga una superficie uniforme y regular.

La lámina de asfalto así tendida, deberá tener después de una compresión suficiente, un espesor de 51 milímetros para el pavimento «México número 1» y 38 milímetros para el «México número 2».

La compresión se verificará usando planchas calientes de fierro y rodillos de mano; después se espolvoreará el pavimento con cierta cantidad de cemento hidráulico seco, y se comprimirá la superficie con rodillo de vapor que pesará 45 kilogramos por centímetro lineal y que trabajará como mínimum seis horas por cada mil metros cuadrados de pavimento, o más si fuere necesario, hasta que la compresión no produzca impresiones en la indicada superficie.

Séptima. La designación de las 25 calles que deben pavimentarse por la Compañía Bancaría de Obras y Bienes Raíces, S. A., la hará la dirección general de Obras públicas por grupos de cinco calles, debiendo designar las cinco primeras, un mes después de la fecha en que se publique el decreto que apruebe este contrato; y los grupos subsecuentes los designará la dirección cuando falten por pavimentar dos calles del grupo anteriormente designado, salvo lo estipulado en la parte final de la cláusula segunda.

Octava. Recibidas que sean por la compañía las calles que debe pavimentar, removerá por su cuenta el empedrado o pavimento existente, y procederá desde luego a conformar el terreno, excavando lo que fuere necesario para darle la forma conveniente. Una vez terminado este trabajo, la compañía procederá a conformar el terraplén, haciendo uso para ello de rodillos de vapor que apisonarán dicho terraplén todo el tiempo que sea necesario, a juicio del ingeniero inspector. Toda materia esponjosa o vegetal que se encuentre, será removida y substituida por buen cascajo limpio. Si el rodillo no pudiere apisonar en algunas partes el subsuelo, éste será regado y comprimido con pisones de mano. Todo material que no sea susceptible de compresión satisfactoria, será removido y substituido por otro conveniente. La cama del subsuelo para ser comprimida, deberá estar regada.

Novena. Se entenderá por calle, para los efectos de este contrato, el tramo

comprendido entre dos cruceros o intersecciones de calles. Los tramos que siguiendo esta regla, resulten con una longitud que no llegue a ochenta metros, serán considerados como parte o continuación de la calle contigua; tanto estos tramos como los cruceros serán comprendidos como continuación de la calle que designe la dirección general de Obras públicas.

Décima. La compañía deberá fijar el día en que se propone comenzar la construcción del pavimento en cada una de las calles que previamente hubieren sido designadas por la dirección general de Obras públicas, dando aviso por escrito a esta última con quince días de anticipación.

Décimo-primera. Recibida por la compañía una calle para su pavimentación, procederá ésta a ejecutar los trabajos conducentes, quedando obligada a entregarla completamente terminada, en un plazo que no exceda de 22 a 30 días, que, para cada calle, señalará la dirección general de Obras públicas, teniendo en cuenta la superficie de la calle y las dificultades que pudiere ofrecer su pavimentación. La compañía podrá, sin embargo, construir el pavimento de una calle en menor tiempo del que hubiere fijado la dirección general de Obras públicas; pero en ningún caso podrá emprender a la vez el pavimento de más de cinco calles, y si éstas fueren en la misma línea, tan sólo podrá interrumpir simultáneamente dos cruceros, debiendo quedar entre ellos, uno al menos, libre para el tráfico.

Décimo-segunda. La compañía no construirá pavimentos de asfalto sobre cimientos de concreto desde el día 1° de julio hasta el 30 de septiembre de cada año.

Décimo-tercera. Cada vez que se termine la pavimentación de una calle, la compañía dará aviso por escrito a la dirección general de Obras públicas, a fin de que ésta ordene se proceda a recibir la calle dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere recibido el aviso. En la recepción intervendrá el representante o encargado de la compañía y se levantará una acta por cuadruplicado, acompañando un plano acotado en que se fije con claridad la superficie pavimentada, haciendo constar en la citada acta la clase de pavimento que se construyó, el número de metros cuadrados que tiene y si fue construido el pavimento, de acuerdo con lo prevenido en este contrato, o si tiene algunos desperfectos, que se detallarán con toda claridad. De los cuatro ejemplares, se entregará uno a la compañía para su resguardo.

Décimo-cuarta. La compañía conservará en perfecto estado y a su costa, por el término de diez años, los pavimentos que construya, debiendo contar ese período, para cada calle, desde el día en que ésta hubiere sido recibida por la dirección general de Obras públicas en la forma que expresa la cláusula anterior.

Décimo-quinta. Terminado ese período de diez años, la compañía continuará obligada a conservar y reparar los pavimentos que construya, de acuerdo con este contrato, por un nuevo término de cinco años, siempre que sea por la cantidad total que corresponda a los pavimentos de las veinticinco calles de que se trata, y que la dirección general de Obras públicas lo determine. Para este efecto, seis meses antes de que se termine el período de diez años para la calle o calles primeramente construidas, la compañía se dirigirá a la dirección general de Obras públicas, a fin de que ésta le comunique su resolución, sin perjuicio de que la misma dirección la haga saber a la compañía antes de ese término.

Décimo-sexta. La conservación y reparación a que se refieren las cláusulas precedentes, se ejecutarán de acuerdo con lo que previene este contrato, respecto de la construcción de los pavimentos, y con sujeción a las reglas siguientes:

I. Inmediatamente que se observe en la superficie del pavimento, depresión que sea de más de dos centímetros, o comience a desintegrarse la lámina, la compañía procederá a cortar o quemar la parte mala, y si el concreto se encontrare también en mal estado, se reconstruirá en ese lugar el pavimento desde sus cimientos, observando para las mezclas, materiales y ejecución de la obra, todo lo estipulado en este contrato,

para la construcción de pavimentos.

II. Las reparaciones que exija la conservación de los pavimentos, serán hechas con toda oportunidad sin que sea necesario que la dirección general de Obras públicas las ordene a la compañía, pues ésta deberá ejecutarlas tan luego como los pavimentos se deterioren.

III. La compañía se obliga a hacer toda clase de reparaciones que sean necesarias en los pavimentos de las calles que se contratan, a fin de tenerlos siempre en perfecto estado de conservación, debiendo ser dichas reparaciones por su exclusiva cuenta, excepto aquellas que provengan de obras subterráneas, para la ejecución de las cuales sea necesario romper los pavimentos, en cuyo caso el importe de las reparaciones correspondientes, será pagado por la dirección general de Obras públicas, si él trabajo hubiere sido ejecutado por ella o por las respectivas compañías o particulares, según quien hubiere ejecutado la obra que amerite la reparación.

Décimo-séptima. La compañía se obliga a construir, conservar y reparar la zona que sea a cargo de los ferrocarriles urbanos establecidos o por establecer, y cuyo pago deberá ser hecho por la compañía o empresa respectiva en los mismos términos y condiciones que este contrato expresa, no cobrando a dicha compañía o empresa, precios mayores que los fijados a la dirección general de Obras públicas, si el pago se verifica en dinero efectivo y al contado.

Décimo-octava. Las reparaciones a que hubiere lugar, por motivo de composturas, cambio de las vías férreas y deterioros causados en las entrevías y en las zonas de un metro a ambos lados, en razón del mal estado de las vías férreas, o porque, cedan al paso de los trenes, las hará la Compañía Bancaria; pero se le pagará el importe de ellas por la empresa o compañía dueña de las vías férreas siendo necesario para ese efecto que a juicio de la dirección general de Obras públicas y practicada por ella una inspección, antes de que se efectúe la reparación, el deterioro haya sido causado por el mal estado de la vía, sin cuyo requisito la Compañía Bancaria no tendrá derecho de hacer reclamación alguna por este motivo. Para el efecto de que la dirección decida si la reparación de que se trate debe ser pagada o no a la Compañía Bancaria, ésta deberá presentar un escrito al director general de Obras públicas a fin de que éste ordene que se verifique una inspección, a la cual se citará también al representante de la compañía dueña de la vía de ferrocarril.

Décimo-novena. La Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., transportará por su cuenta y oportunamente la piedra de los pavimentos que hubiere removido, al lugar que para el efecto le sea designado por la dirección general de Obras públicas, siempre que la distancia de la calle en que se ejecute el trabajo, al lugar designado, no exceda de mil metros.

Vigésima. Sin perjuicio de que los ingenieros de la dirección general de Obras públicas tengan en la ejecución de los trabajos que haga la compañía la injerencia que fija este contrato, durante la construcción, conservación y reparación de los pavimentos, podrá inspeccionar también libremente y en cualquier tiempo, todas las reparaciones a efecto de asegurarse de que la compañía da debido cumplimiento a las estipulaciones de este contrato.

Para esto, la compañía queda obligada a proporcionar a los ingenieros de la dirección, todos los datos y facilidades que necesiten, y les permitirá visitar los almacenes y fábricas a fin de que examinen la calidad de los materiales, inspeccionen su preparación y asistan a las operaciones de la pavimentación. Cualquiera diferencia técnica o pericial que sobre estos puntos llegue a surgir, será resuelta breve y sumariamente por dos peritos, uno por la dirección general de Obras públicas y el otro por la compañía. En caso de discordia, el tercer perito será designado por la secretaría de Gobernación. La propia secretaría nombrará el perito que debiere designar cualquiera de los interesados, cuando esto no se hubiere hecho después de ocho días de haber sido requerido para ello por la otra parte interesada.

Vigésimo-primera. Por la construcción

de los pavimentos y su conservación y reparación, por 10 años, la dirección general de Obras públicas pagará a la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., los precios siguientes:

Clase «México núm. 1» por metro cuadrado..... $ 9.00

Clase «México núm. 2» por metro cuadrado..... 8.00

Estas cantidades serán pagadas de la siguiente manera:

Clase «México núm. 1» $3 al contado y $6 en 120 mensualidades iguales.

Clase «México núm. 2» $3 al contado y $5 en 120 mensualidades iguales.

Los pagos que correspondan a la parte de contado serán hechos por la dirección general de Obras públicas dentro de los primeros cinco días correspondientes al segundo mes, a contar de la fecha en que hubiere sido levantada el acta de reposición del pavimento.

Las mensualidades se pagarán dentro de los primeros cinco días de cada mes, comenzando en el segundo mes a partir de la fecha en que la calle hubiere sido recibida por la dirección general de Obras públicas.

Vigésimo-segunda. Por la reparación de los pavimentos, ya sea que deba pagarse por la dirección general de Obras públicas o por otras empresas y particulares, la compañía cobrará los precios siguientes:

Clase «México núm. 1» concreto y lámina.....$ 7.50

Clase «México núm. 2» concreto y lámina..... 7.00

Clase «México núm. 1» lámina solamente..... 4.25

Clase «México núm. 2» lámina solamente..... 4.00

El importe de estas reparaciones se liquidará el día primero de cada mes, y su pago se hará efectivo dentro de los primeros días del mes siguiente.

Vigésimo-tercera. Para la reparación y conservación de los pavimentos a que se refiere este contrato, durante los cinco años adicionales que menciona la cláusula décimo quinta, la dirección general de Obras públicas pagará a la compañía la cantidad de $0.25 anuales, por cada metro cuadrado de pavimento haciendo estos pagos por mensualidades iguales dentro de los primeros cinco días de cada mes, empezando en el segundo mes del undécimo año, en que la calle hubiera sido recibida por la dirección general de Obras públicas, siempre que esta oficina conviniere que de la conservación de los pavimentos, continúe haciéndose cargo la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., durante los cinco años que se mencionan.

Vigésimo-cuarta. Antes de que la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., comience a remover el pavimento de una calle en la forma que previene la cláusula octava de este contrato, deberán ya estar arregladas y consolidadas las vías de ferrocarriles, a la altura conveniente y hechas en el subsuelo todas las obras que la dirección general de Obras públicas determine, registradas las cañerías de agua o gas, cables de trasmisión eléctrica y duelos, y ejecutadas todas las demás obras de ese género que fueren necesarias. Debidamente arreglada la calle, será entregada a la compañía por la dirección general de Obras públicas.

Vigésimo-quinta. La dirección general de Obras públicas podrá emplear para los usos que le convenga, la piedra que se encuentre en las calles cuyo pavimento de asfalto construya la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A.

Vigésimo-sexta. La dirección general de Obras públicas podrá disponer que cuando menos dos veces al año en los meses de abril y octubre y durante los diez años de la conservación de esos pavimentos, el ingeniero inspector de los trabajos de pavimentación, asociado con el delegado de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., procedan a reconocer el estado de las calles pavimentadas con asfalto, por virtud de este contrato, levantándose al efecto una acta en la que se indicará el estado

que guardan los pavimentos. Si apareciere por esta acta que alguna o algunas de las calles se encuentran en mal estado, la dirección general de Obras públicas tendrá derecho de exigir que la compañía haga desde luego y en el plazo que en cada caso le fijará, todas las reparaciones que sean necesarias, a fin de corregir las desperfectos que se hubieren anotado.

Vigésimo-séptima. La dirección general de Obras públicas dictará las medidas que juzgue necesarias a fin de proteger los pavimentos cuando haya alguna construcción de edificios, y el deterioro que resulte, con motivo, de esas construcciones, no será a cargo de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A. El costo de esas reparaciones, será pagado por la dirección general de Obras públicas, sin perjuicio de que ésta a su vez cobre el importe al propietario de la construcción que hubiere causado el deterioro.

Vigésimo octava. La dirección general de Obras públicas se obliga a que se ejecuten en cada calle con la oportunidad debida, las obras a que se refiere la cláusula vigésimo-cuarta, tales como el arreglo y consolidación de vías férreas y demás trabajos que previamente haya que ejecutar en el subsuelo, a fin de que no se interrumpan ni perjudiquen los trabajos de la compañía.

Si la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., sufriere demora por no estar concluidos dichos trabajos el día que la dirección general de Obras públicas hubiere fijado de acuerdo con la compañía para que ésta comience las obras de pavimentación de cada calle, la citada dirección indemnizará a la compañía por los perjuicios que hubiere sufrido con la cantidad de diez pesos por cada día que transcurra, sin que estuviere lista la calle, debiendo computarse dichos pagos en las liquidaciones mensuales. Para que se abonen estos diez pesos diarios, será necesario que la compañía compruebe ante la dirección general de Obras públicas que la demora sufrida en la construcción del pavimento dependió de que no estuvo lista la calle en el día fijado, por causas que puedan imputarse a la dirección.

Vigésimo-novena. La dirección general de Obras públicas impondrá a la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., por falta du cumplimiento a las obligaciones por ella contraídas en virtud de este contrato, las penas que en seguida se expresan;

I. Cuando la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., de acuerdo con lo prevenido en la cláusula décimo-primera de este contrato, no hubiere entregado el pavimento de una calle a la dirección general de Obras públicas en el plazo que ésta hubiere señalado, la citada compañía pagará una multa de $50 por cada día que dure la demora, con excepción del caso en que ésta hubiere provenido de casos fortuitos o de fuerza, mayor, debidamente comprobados.

II. Cuando la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., no hiciere oportunamente en los pavimentos de las calles construidas, las reparaciones que éstas exigieren, para su conservación, en la forma que previene la cláusula decimosexta, inciso II, de este contrato, será requerida por la dirección general de Obras públicas para que se hagan estas reparaciones en el plazo que al efecto se señale, y si la compañía no cumpliere con esto, incurrirá en una multa de $50 por cada día que transcurra, por cada una de las calles en que dejare de hacer las reparaciones, advirtiendo que la citada multa se hará efectiva por la dirección general de Obras públicas, descontando su importe de las cantidades que se deban abonar o pagar a la compañía.

Trigésima. Este contrato caducará:

I. Porque la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., no termine y entregue el pavimento de una calle a la dirección general de Obras públicas, treinta días después de vencido el plazo que, para la construcción del pavimento, le hubiere fijado la dirección, de acuerdo con lo que previene la cláusula décimo primera de este contrato.

II. Porque la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Maíces, S. A., no hubiere ejecutado las reparaciones que exija la reparación del pavimento, treinta días después de terminado el plazo que para el efecto

hubiere sido señalado por la dirección general de Obras públicas, de acuerdo con lo que previene el inciso II de la cláusula anterior.

III. Porque la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., no se sujete estrictamente, para la construcción de los pavimentos de las veinticinco calles contratadas, a lo prevenido en las especificaciones del presente contrato.

IV. Porque la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., no hubiere depositado en el Banco Nacional de México y en el plazo que para el efecto señala la cláusula trigésimo tercera, los $20,000 (veinte mil pesos) como garantía para el cumplimiento de este contrato.

Trigésimo primera. Cuando a juicio de la dirección general de Obras públicas, proceda declarar la caducidad, así lo manifestará a la secretaría de Gobernación, siendo atribución de ésta hacer la declaración respectiva. Procederá la caducidad salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuando hayan pasado los plazos que este contrato señala para la construcción o reparación de los pavimentos, debiendo, además, aplicar las multas en que haya incurrido la compañía.

Trigésimo-segunda. Declarada la caducidad, el contrato no surtirá efecto alguno en lo sucesivo y se suspenderá el pago de las mensualidades, lomando de ellas la cantidad que fuere necesaria para hacer el pago del importe de la conservación y reparación del pavimento, durante el tiempo que faltare para completar el período de diez años en que la compañía debe ejecutar a su costa este servicio; entendiéndose que la dirección General de Obras Públicas tendrá la más amplia libertad para ejecutar esos trabajos en la forma y a los precios que crea convenientes.

Trigésimo-tercera. La Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., garantizará el cumplimiento de sus obligaciones que le impone el presente contrato, depositando en el Banco Nacional de México y en bonos de la Deuda Pública Consolidada la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos) a disposición de la tesorería general de la Federación, debiendo ser constituido este depósito por la citada compañía dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se común que a la compañía que ha sido aprobado este contrato por decreto del Congreso de la Unión. La compañía recibirá cada seis meses los cupones vencidos de los bonos depositados, siempre que la compañía, hubiere cumplido hasta entonces, todas sus obligaciones. Este depósito subsistirá en el Banco Nacional de México hasta que hubieren transcurrido seis meses a contar de la fecha en que la dirección general de Obras Públicas hubiere recibido la última calle de las veinticinco a que se refiere este contrato.

Trigésimo-cuarta. Este contrato será sometido en la parte que se refiere a pagos, a la aprobación del Congreso de la Unión y surtirá sus efectos, desde el día que se publique en el Diario Oficial el decreto de aprobación.

Trigésimo-quinta. Este contrato se extenderá por cuadruplicado, llevando dos de los ejemplares estampillas por valor de $0.50 por foja, las cuales serán por cuenta de la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A.

México, 30 de abril de 1908.– Guillermo B. Puga.– Luis Barroso Arias.– Leandro F. Payró.

Junio 2 de 1908.- Se convoca a los pueblos de los Estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro u elección extraordinaria de un segundo senador propietario por cada uno de dichos Estados y un segundo senador suplente por cada uno de los de Guanajuato y Jalisco, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que signe:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Senado de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Senado de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fracción IV, letra C del art. 72° de la Constitución Política de la República, decreta:

Art. 1. Se convoca a los pueblos de los Estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro u elección extraordinaria de un segundo senador propietario por cada uno de dichos Estados y un segundo senador suplente por cada uno de los de Guanajuato y Jalisco, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910.

Art. 2. Estas elecciones se verificarán juntamente con las ordinarias que deben efectuarse conforme a la ley orgánica electoral de 18 de diciembre de 1901, para la renovación del Congreso.

Dado en el salón de sesiones del Senado, en México, a primero de junio de mil novecientos ocho.

Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– Carlos Flores, senador secretario.– J. de J. Peña, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 2 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.»

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 2 de junio de 1908.– Al.....

Junio 10 de 1908.- Se convoca al pueblo del Estado de Veracruz a elección extraordinaria de un segundo senador, suplente, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el secreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Senado de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Senado de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fracción IV, letra C del art. 72° de la Constitución Política de la república, decreta:

Art. 1. Se convoca al pueblo del Estado de Veracruz a elección extraordinaria de un segundo senador, suplente, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910.

Art. 2. Esta elección se verificará juntamente con las ordinarias que deben efectuarse conforme a la ley orgánica electoral de 18 de diciembre de 1901, para la renovación del Congreso.

Dado en el salón de sesiones, en México, a nueve de junto de mil novecientos ocho.

Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– A. Gaviño, senador secretario.– Tomás Mancera, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 10 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado v del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 10 de junio de 1908.– Al…

Junio 15 de 1908.- Se aprueba el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes y Zacatecas para delimitar sus territorios entre los distritos de Pinos y Ocampo en los ranchos del «Hepazote» y «La Gloria.»

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único.– Se aprueba el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes y Zacatecas para delimitar sus territorios entre los distritos de Pinos y Ocampo en los ranchos del «Hepazote» y «La Gloria.» La línea divisoria entre ambos Estados, en los puntos mencionados será: sobre el lindero de Ciénega Grande y Agostadero, a inmediaciones de Ojo Zarco, partiendo de una mojonera provisional que quedó situada a 316 metros a la izquierda del camino nacional que va para la hacienda de los Campos, se trazó una línea recta que termina en la mojonera muy conocida de la Soledad, dejando para el lado de Aguascalientes los ranchos de «La Gloria» y del «Limbo;» de la mojonera de la Soledad, sigue la nueva línea divisoria por los linderos de Ciénega Grande y rancho de san Rafael con Agostadero, hasta llegar al camino nacional ya citado; de este punto y entrando en los terrenos del rancho del Tulillo, la línea divisoria entre los dos Estados sigue siendo como antes el camino nacional hasta llegar a la hacienda de Pilotos, donde sus linderos con el Tulillo y Agostadero, formados por cercas, vallados y potreros bien definidos, hacen la división entre los dos Estados, hasta llegar a los terrenos de la hacienda de los Campos, donde se encuentra la mojonera divisoria de las tres grandes propiedades de Pilotos, Agostadero y los Campos.

Fernando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– J. R. Aspe, diputado secretario.– Tomás Mancera, sanador secretario.»

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 15 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 15 de junio de 1908.– Corral.– Al…

Junio 18 de 1908.- En vista de haberse recibido noticia oficial de la existencia de la peste bubónica en el puerto de Hong Kong, Asín, el presidente de la república ha tenido a bien declarar infestado el puerto de Hong Kong.

DECLARACIÓN.

En vista de haberse recibido noticia oficial de la existencia de la peste bubónica en el puerto de Hong Kong, Asia; el presidente de la república ha tenido a bien declarar infestado el puerto de Hong Kong.

Publíquese esta declaración en el Diario Oficial para conocimiento de las autoridades sanitarias y del público.

Libertad y Constitución. México, 18 de junio de 1908.– Corral.

Junio 18 de 1908.- Se aprueba en la parte relativa a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado entre la dirección general de Obras públicas y la International Asphalt C°, S. A., el 29 de abril anterior, para pavimentar con lamina de asfalto sobre concreto de cemento, cinco calles de la ciudad de México.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba en la parte relativa a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado entre la dirección general de Obras públicas y la International Asphalt C°, S. A., el 29 de abril anterior, para pavimentar con

lamina de asfalto sobre concreto de cemento, cinco calles de la ciudad de México.

Fernando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– Ramón Prida, diputado secretario.– Tomás Mancera, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a 18 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.- Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.»

Lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 18 de junio de 1908.– Corral.– Al....

El contrato a que se refiere el anterior decreto, es el siguiente:

CONTRATO celebrado entre el C. ingeniero Guillermo Beltrán y Puga, como director general de Obras públicas, y la Internacional Asphalt C°, S, A. representado por su presidente el Sr. Samuel W. Ridor, para la pavimentación de cinco calles de la ciudad de México, con lámina de asfalto, sobre concreto de cemento.

Primera. La «internacional Asphalt C°, S. A.» se obliga a pavimentar con lámina de asfalto, sobre concreto de cemento, cinco calles de la ciudad de México y a conservar en buen estado los pavimentos que construya, por el término de diez años, debiendo observar, tanto para la construcción, cuanto para la conservación, las reglas que fija este contrato.

Segunda. Los pavimentos de las cinco calles a que se refiere este contrato, deberán ser construidos por la compañía durante el año fiscal de 1908 a 1909.

Tercera. Los pavimentos que construya la compañía, serán de la clase «México número 1» o «México número 2» según designe la dirección general de Obras públicas para cada calle y conforme a las especificaciones que se señalan en las cláusulas siguientes.

Cuarta. Los pavimentos se compondrán de las siguientes capas: el «México número 1» de un cimiento de concreto hidráulico, con base de cemento «Portland» de ciento cincuenta y dos milímetros y una lámina de asfalto de treinta y ocho milímetros de espesor.

Quinta. El cimiento de concreto hidráulico con base de cemento «Portland» deberá formarse con los materiales y proporciones siguientes:

Una parte en volumen de cemento «Portland.»

Dos partes en volumen de arena.

Seis partes en volumen de piedra triturada.

El cemento «Portland» que se use será del país, tendrá un fraguado lento, y no deberá iniciarse éste antes de tres horas, ni terminarse después de veinte. Las briquetas que se hagan con cemento puro, deberán resistir, después de estar seis días en el agua y uno en el aire, una tracción no menor de veinticuatro kilos por centímetro cuadrado. El cemento que se use será fresco, contenido en buenos envases y dejará menos de 10 por 100 de residuo al hacerse pasar por un tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado. Todo el cemento que emplee la compañía, se sujetará por la dirección general de Obras públicas a una inspección y análisis riguroso; y si resultare que éste no reúne las condiciones antes señaladas, será desechado; para esto la compañía deberá tener en tiempo oportuno el cemento que va a emplear, a fin de que la dirección general de Obras públicas, pueda mandar tomar de los almacenes las muestras que juzgue necesarias para que el análisis sea hecho sin dilación, y no sufra demora la compañía en la ejecución de los trabajos. Si la provisión de cemento fuere en grande escala, la compañía deberá conservarlo en lugares abrigados y sin húmeda y los envases en alto sobre zoquetes de madera.

La arena deberá ser gruesa, limpia y desprovista en lo absoluto de arcilla.

La piedra triturada que se emplee será de origen volcánico, deberá tener aristas vivas, y sus dimensiones serán tales que podrá pasar por un anillo que tenga seis centímetros de diámetro.

La mezcla del cemento con la arena, la piedra y el agua, se hará por medio de cajas apropiadas, o bien con mezcladores mecánicos, a satisfacción del ingeniero inspector, y una vez que esa mezcla se haya hecho lo más íntima posible, se procederá inmediatamente a extender sobre el terreno la capa de cemento, apisonando ésta lo necesario hasta que el mortero salga a la superficie y llene los intersticios.

La superficie del concreto deberá quedar con la convexidad necesaria para que la lámina de asfalto de grueso uniforme de la curvatura definitiva de la calle. El concreto deberá ser protegido de la acción solar y del viento, manteniéndolo mojado todo el tiempo que el ingeniero inspector lo juzgue necesario, hasta que el fraguado se haya verificado por completo; mientras tanto no deberá sujetarse a servicio de ninguna especie, ni se podrá colocar la lámina de asfalto, hasta que la base de concreto esté concluida y se haya secado enteramente.

Sexta. La lámina de asfalto se compondrá de asfalto natural, procedente de los manantiales que existen en las haciendas de «Tumbaderos,» Sierra Vieja,» «Chapopotes,» y otras ubicadas en el puerto de Tuxpan, (Estado de Veracruz), y arena limpia y enteramente desprovista de arcilla o cualquiera otro material impropio, debiendo mezclase los materiales antes mencionados en las siguientes proporciones:

Asfalto natural..... 15 a 20 por 100

Arena fina y limpia... 85 a 90 por 100

El asfalto que se emplee deberá ser puro y libre de cualquiera otra materia extraña.

La arena que se use deberá aprobarla previamente el ingeniero inspector, después de haberla examinado y será de tales dimensiones, que cuando menos el 25 por 100 pase por la criba núm. 80 y que el total pueda pasar por la núm. 10.

Para hacer la mezcla del asfalto natural y la arena, se calentarán separadamente estos materiales a una temperatura de 150 grados centígrados debiendo hacerse la revoltura de los expresados materiales en aparatos adecuados, a fin de obtener que la mezcla sea homogénea.

Al colocarse esta mezcla en la calle, tendrá una temperatura de 150 grados centígrados y se extenderá directamente sobre el concreto, cuando éste se encuentre ya perfectamente seco, de manera que se una a él, para lo cual se comprimirá hasta que se obtenga una superficie uniforme y regular. La lámina de asfalto así tendida, deberá tener después de una compresión suficiente, un espesor de 51 milímetros para el pavimento «México núm. 1» y 38 milímetros de espesor para el «México núm. 2»

La compresión se verificará usando planchas calientes de fierro y rodillos de mano, después se espolvoreará el pavimento con cierta cantidad de cemento hidráulico seco, y se comprimirá la superficie con rodillo de vapor que pesará 45 kilogramos por centímetro lineal y que trabajará como mínimum seis horas por cada mil metros cuadrados de pavimento o más si fuere necesario, hasta que la compresión no produzca impresiones en la indicada superficie.

Séptima. La designación de las cinco calles que deban pavimentarse por la «Internacional Asphall Co., S. A.,» la hará la dirección general de Obras públicas, un mes después de la fecha en que se publique en el Diario Oficial el decreto que apruebe este contrato.

Octava. Recibidas que sean por la compañía las calles que deba pavimentar, removerá por su cuenta el empedrado o pavimento existente, y procederá desde luego a conformar el terreno, excavando lo que fuere necesario para darle la forma conveniente. Una vez terminado este trabajo, la compañía procederá a consolidar el terraplén, haciendo uso para ello de rodillos de vapor que apisonarán dicho terraplén todo el tiempo que sea necesario, a juicio del

ingeniero inspector. Toda materia esponjosa o vegetal que se encuentre, será removida y substituida por buen cascajo limpio. Si el rodillo no pudiere apisonar en algunas partes el subsuelo, éste será regado y comprimido con pisones de mano. Todo material que no sea susceptible de compresión satisfactoria, será removido y substituido por otro conveniente. La cama del subsuelo para ser comprimida deberá estar mojada.

Novena. Se entenderá por calle para los efectos de este contrato, el tramo comprendido entre dos cruceros o intersecciones de calle. Los tramos que siguiendo esta regla resulten con una longitud que no llegue a 80 metros, serán considerados como parte o continuación de la calle contigua, y tanto estos tramos, como los cruceros, serán comprendidos como continuación de la calle que designe la Dirección general de Obras públicas.

Décima. La compañía deberá fijar el día en que se propone comenzar la construcción del pavimento de cada una de las calles que previamente hubieran sido designadas por la Dirección general de Obras públicas, dando aviso por escrito a esta última con quince días de anticipación.

Décimo-primera. Recibida por la compañía una calle para su pavimentación, procederá ésta a ejecutar los trabajos conducentes, quedando obligada a entregarla completamente terminada en un plazo que no excederá de 22 a 30 días, que, para cada calle señalará la Dirección general de Obras públicas, teniendo en cuenta la superficie de la calle y las dificultades que pudiera ofrecer su pavimentación. La compañía podrá sin embargo construir el pavimento de una calle en menor tiempo del que hubiere fijado la Dirección general de Obras públicas, pero en ningún caso podrá emprenderá la vez el pavimento de más de tres calles y si éstas fueren en la misma línea, tan solo podrá interrumpir simultáneamente dos cruceros, debiendo quedar entre ellos, uno al menos libre, para el tráfico.

Décimo-segunda. La compañía podrá comenzar las trabajos de pavimentación a que este contrato se refiere, el 1° de octubre de 1908.

Décimo-tercera. Cada vez que se termine la pavimentación de una calle, la compañía dará aviso por escrito a la Dirección general de Obras públicas a fin de que esta ordene se proceda a recibir la calle dentro de los cinco días siguientes a aquel en hubiere recibido el aviso. En la recepción intervendrá el representante o encargado de la compañía y se levantará una acta por cuadruplicado, acompañando un plano acotado en el que se fije con claridad la superficie pavimentada, haciendo constar en la citada acta la clase de pavimento que se construyó, el número de metros cuadrados que tiene y si fuere construido el pavimento de acuerdo con lo que prevenido en este contrato o si tiene algunos defectos que se detallarán con toda claridad. De los cuatro ejemplares, se entregará uno a la compañía para su resguardo.

Decimo-cuarta. La compañía conservará en perfecto estado y a su costa, por el término de diez años, los pavimentos que construya, debiendo contarse este período, para cada calle, desde el día en que ésta hubiere sido recibida por la Dirección general de Obras públicas, en la forma que lo expresa la cláusula anterior.

Decimo-quinta. Terminado ese periodo de diez años, la compañía continuará obligada a conservar y reparar los pavimentos que construya, de acuerdo con este contrato, por un nuevo término de cinco años, siempre que sea por la Cantidad total que corresponda a los pavimentos de las cinco calles de que se trata, y que la Dirección de Obras públicas, lo determine. Para este efecto seis meses antes de que termine el periodo da diez años para las calles o calle primeramente construidas, la compañía se dirigiré a la Dirección general de Obras públicas, a fin de que ésta le comunique su resolución, sin perjuicio de que la misma Dirección la haga saber a la compañía antes de este término.

Décimo-sexta. La conservación y reparación a que se refieren las cláusulas precedentes, se ejecutarán de acuerdo con lo que previene este contrato, respecto de la

construcción de los pavimentos, y con sujeción a las reglas siguientes:

I. Inmediatamente que se observe en la superficie del pavimento, depresión que sea de más de dos centímetros, o comience a desintegrarse la lámina, la compañía procederá a cortar o quemar la parte mala, y si el concreto se encontrase también en mal estado, se reconstruirá en ese lugar el pavimento desde su cimiento, observando para las mezclas, materiales y ejecución de la obra, todo lo estipulado en este contrato para la construcción de pavimentos.

II. Las reparaciones que exija la conservación de los pavimentos, serán hechas con toda oportunidad sin que sea necesario que la Dirección general de Obras públicas, las ordene a la compañía, pues ésta deberá ejecutarlas, tan luego como los pavimentos se deterioren.

III. La compañía se obliga a hacer toda clase de reparaciones que sean necesarias en los pavimentos de las calles que se contratan, a fin de tenerlos siempre, en perfecto estado de conservación, debiendo ser dichas reparaciones por su exclusiva cuenta, excepto aquellas que provengan de obras subterráneas, para la ejecución de las cuales sea necesario romper los pavimentos, en cuyo caso el importe de las reparaciones correspondientes, será pagado por la Dirección general de Obras públicas si el trabajo hubiera sido ejecutado por ella; o por las empresas o particulares que hubieren ejecutado la obra que amerite la reparación.

Décimo-séptima. La compañía se obliga a construir, conservar y reparar la zona que sea a cargo de los Ferrocarriles Urbanos establecidos o por establecer, y cuyo pago deberá ser hecho por la compañía o empresa respectiva en los mismos términos y condiciones que este contrato empresa, no cobrando a dicha compañía o empresa precios mayores que los fijados a la Dirección de Obras públicas, si el pago se verifica en dinero efectivo y al contado.

Décimo-octava. Las reparaciones que tuvieren lugar con motivo de compostura, cambio de las vías férreas, y deterioros causados en las entrevías y en las zonas de un metro a ambos lados, en razón del mal estado de las vías férreas, o porque cedan al paso de los trenes, las hará la «International Asphalt Co., S. A.,» pero se le pagará el importe de ellas por la compañía dueña de las vías férreas siempre que, la Dirección de Obras públicas considere que el deterioro es causado por mala condición de la vía. Si la Dirección no lo considera así, las reparaciones se harán por cuenta de la «International Asphalt Co., S. A.» Las inspecciones que se verifiquen para determinar a quién le corresponde pagar las reparaciones en el caso de este artículo, serán promovidas ante la Dirección por la compañía pavimentadora y concurrirá a ellas algún representante de la Empresa del Ferrocarril.

Décimo-novena. La «International Asphalt Co., S. A.,» transportará por su cuenta y oportunamente la piedra de los pavimentos que hubiere removido, al lugar que para el efecto le sea designado por la Dirección general de Obras públicas, siempre que la distancia de la calle en que se ejecute el trabajo a lugar designado, no exceda de mil metros.

Vigésima. Sin perjuicio de que los ingenieros de la Dirección general de Obras públicas tengan en la ejecución de los trabajos que haga la compañía, la injerencia que fija este contrato, durante la construcción, conservación y reparación de los pavimentos, podrán inspeccionar también libremente y en cualquier tiempo todas las reparaciones a efecto de asegurarse que la compañía da debido cumplimiento a las estipulaciones de este contrato.

Para esto la compañía queda obligada a proporcionar a los Ingenieros de la Dirección todos los datos y facilidades que necesiten, y les permitirá visitar los almacenes y fábricas a fin de que examinen la calidad de los materiales, inspeccionen su preparación y asistan a las operaciones de la pavimentación. Cualquiera diferencia técnica o pericial que sobre estos puntos llegue a surgir será resuelta breve y sumariamente por dos peritos nombrados; uno por la Dirección general de Obras públicas y otro

por la compañía. En caso de discordia el tercer perito será designado por la secretaría de Gobernación. La propia secretaría nombrará el perito que debiere designar cualquiera de los interesados, cuando esto no se hubiere hecho después de ocho días de haber sido requerido para ello por la otra parte interesada.

Vigésimo-primera. Por la construcción de los pavimentos y su conservación y reparación por diez años, la Dirección general de Obras públicas pagará a la «International Asphalt Co., S. A.» los siguientes precios:

Clase «México núm. 1» por metro cuadrado..... $ 9.00

Clase «México núm. 2» por metro cuadrado..... $ 8.00

Estas cantidades serán pagadas de la siguiente manera:

Clase «México núm. 1:» $3.00 al contado y $6 en ciento veinte mensualidades iguales.

Clase «México núm. 2:» $ 3.00 al contado y $ 5.00 en ciento veinte mensualidades iguales.

Los pagos que correspondan a la parte de contado serán hechos dentro de los primeros cinco días correspondientes al segundo mes, a contar de la fecha en que hubiere sido levantada el acta de recepción del pavimento.

Las mensualidades se pagarán dentro de los primeros cinco días de cada mes, comenzando en el segundo mes a partir de la fecha en que la calle hubiere sido recibida por la Dirección general de Obras públicas.

Vigésimo-segunda. Por la reparación de los pavimentos ya sea que deban pagarse por la Dirección general de Obras públicas o por otras Empresas y particulares, la compañía cobrará los siguientes precios por metro cuadrado.

Clase «México núm. 1» incluyendo concreto y lámina.....$ 7.50

Clase «México núm. 2» incluyendo concreto y lámina..... 7.00

Clase «México núm. 1» lámina solamente..... 4.25

Clase «México núm. 2» lámina solamente..... 4.00

El importe de estas reparaciones se liquidará el día primero de cada mes y su pago se hará efectivo dentro de los primeros días del mes siguiente:

Vigésimo-tercera. Por la conservación y reparación de los pavimentos a que se refiere este contrato, durante los cinco años adicionales que menciona la cláusula décimo quinta, la Dirección general de Obras públicas, pagará a la compañía la cantidad de $0.25 anuales, por cada metro cuadrado de pavimento, haciendo estos pagos por mensualidades iguales dentro de los primeros cinco días de cada mes, empezando el segundo mes del undécimo año, en que la calle hubiere sido recibida por la Dirección general de Obras públicas.

Vigésimo-cuarta. Antes que la «International Asphalt C°, S. A.,» comience a remover el pavimento de una calle en la forma que previene la cláusula octava de este contrato, deberán estar ya arregladas y consolidadas las vías de ferrocarriles, a la altura conveniente y hechas en el subsuelo todas las obras que la Dirección general de Obras públicas determine, registradas las cañerías de agua o gas, cables de transmisión eléctrica y ductos, y ejecutadas todas las demás obras de ese género que fueren necesarias. Debidamente arreglada la calle, será entregada a la compañía por la Dirección general de Obras públicas.

Vigésimo-quinta. La Dirección general de Obras públicas podrá emplear para los usos que le convengan, la piedra que se encuentre en las calles cuyo pavimento de asfalto construya la «International Asphalt Co., S. A.»

Vigésimo-sexta. La Dirección general de Obras públicas podrá disponer cuando menos dos veces al año en los meses de abril y octubre y durante los diez o quince de la conservación de esos pavimentos, que el

ingeniero inspector de los trabajos de pavimentación, asociado con el delegado de la «International Asphalt Co. S. A.» procedan a reconocer el estado de las calles pavimentadas con asfalto por virtud de este contrato, levantando al efecto una acta en la que se indicará el estado que guardan los pavimentos. Si apareciere por esta acta que alguna o algunas de las calles se encuentran en mal estado, la Dirección general de Obras públicas tendrá derecho de exigir que la compañía haga desde luego y en el plazo que en cada caso le fijará, todas las reparaciones que sean necesarias a fin de corregir los desperfectos que se hubieren notado.

Vigésimo-séptima. La Dirección general de Obras públicas dictará las medidas que juzgue necesarias, a fin de proteger los pavimentos cuando haya alguna construcción de edificios, y el deterioro que resulte, con motivo de esas construcciones no será a cargo de la «International Asphalt Co., S. A.» El costo de esas reparaciones será pagado por la Dirección general de Obras públicas sin perjuicio de que ésta a su vez cobre el importe al propietario de la construcción que hubiere causado el deterioro.

Vigésimo-octava. La Dirección general de Obras públicas se obliga a que se ejecuten en cada calle, con la oportunidad debida, las obras a que se refiere la cláusula vigésimo-cuarta, tales como el arreglo y consolidación de las vías férreas y demás trabajos que previamente haya que ejecutar en el subsuelo, a fin de que no se interrumpan ni perjudiquen los trabajos de la compañía.

Si la compañía sufriere demora por no estar concluidos dichos trabajos el día que la Dirección general de Obras públicas hubiere fijado de acuerdo con la compañía para que ésta comience las obras de pavimentación en cada calle, la citada Dirección indemnizará a la compañía por los perjuicios que hubiere sufrido con la cantidad de diez pesos por cada día que transcurra sin que estuviere lisia la calle, debiendo computarse dicho pago en las liquidaciones mensuales. Para que se abonen estos diez pesos diarios, será necesario que la compañía compruebe ante la Dirección general de Obras públicas que la demora sufrida en las construcciones del pavimento, dependió, de que no estuvo lista la calle en el día fijado, por causas que puedan imputarse a la Dirección.

Vigésimo-novena. La Dirección general de Obras públicas impondrá a la compañía por falta de cumplimiento a las obligaciones por ella contraídas, en virtud de este contrato, las penas que en seguida se expresan:

I. Cuando la «International Asphalt Co., S. A,», de acuerdo con lo prevenido en la cláusula decimonovena de este contrato, no hubiere entregado el pavimento de una calle a la Dirección general de Obras públicas en el plazo que ésta le hubiere señalado, la citada compañía pagará una multa de cincuenta pesos $50.00 por cada día que demore la entrega, con excepción del caso en que ésta hubiere provenido de casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados.

II. Cuando la «International Asphalt Co., S. A.», no hiciere oportunamente en los pavimentos de las calles construidas, las reparaciones que éstas exigieren para su conservación, en la forma que previene la cláusula décimo-sexta, inciso segundo de este contrato, será requerida por la Dirección general de Obras públicas para que haga esas reparaciones en el plazo que al efecto le señale, y si la compañía no cumpliere con esto, incurrirá en una multa de $50.00 por cada día que transcurra, por cada una de las calles en que dejare de hacer la reparación advirtiendo qué la citada multa se hará efectiva por la Dirección general de Obras públicas, descontando su importe de las cantidades que se deban abonar o pagar a la compañía.

Trigésima. Este contrato caducará:

I. Porque la «International Asphalt Co., S. A.», no termine y entregue el pavimento de una calle a la Dirección general de Obras públicas, treinta días después de vencido el plazo que para la construcción del pavimento, le hubiere fijado la Dirección de acuerdo con lo que previene la cláusula décimo primera de este contrato.

II. Porque la «International Asphalt Co., S. A.», no hubiere ejecutado las repara-

ciones que exija la conservación del pavimento, treinta días después de terminado el plazo que para el efecto hubiere sido señalado por la Dirección general de Obras públicas, de acuerdo con lo prevenido en el inciso segundo de la cláusula anterior.

III. Porque la «International Asphalt Co., e. A.», no se sujete estrictamente, para la construcción de los pavimentos de las cinco calles contratadas, a lo prevenido en las especificaciones del presente contrato.

IV. Porque la «International Asphalt Co., S. A.», no hubiere depositado en el Banco Nacional de México y en el plazo que para el efecto le señala la cláusula trigésimo tercera los $5,000.00 (cinco mil pesos) como garantía por el cumplimiento de este contrato.

Trigésimo-primera. Cuando a juicio de la Dirección general de Obras públicas proceda declarar la caducidad, así lo manifestará a la Secretaría de Gobernación, siendo atribución de ésta hacer la declaración respectiva, procederá la caducidad, salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuando hayan pasado los plazos que este contrato señala para la construcción o reparación de los pavimentos, debiendo además aplicar las multas en que haya incurrido la compañía.

Trigésimo-segunda. Declarada la caducidad, el contrato no surtirá efecto alguno en lo sucesivo y se suspenderá el pago de las mensualidades, tomándose de ellas la cantidad que fuere necesaria para hacer el pago del importe de la conservación y reparación en los pavimentos, durante el tiempo que fallare para el período de diez o quince años en que la compañía debe ejecutar a su costo este servicio; entendiéndose que la Dirección general de Obras públicas tendrá la más amplia facultad, para ejecutar esos trabajos en la forma y a los precios que crea convenientes.

Trigésimo-tercera. La «International Asphalt Co., S. A.», garantizará el cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente contrato, depositando en el Banco Nacional de México y en bonos de la Deuda Pública Consolidada la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos) a disposición de la Tesorería general de la Federación, debiendo ser constituido este depósito por la citada compañía, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se comunique a la compañía que el contrato ha sido aprobado por decreto del Congreso de la Unión. La Compañía recibirá cada seis meses los cupones vencidos de los Bonos depositados, siempre que haya cumplido todas sus obligaciones.

Este depósito subsistirá en el Banco Nacional de México hasta que hubieren transcurrido seis meses a contar de la fecha en que la Dirección general de Obras públicas hubiere recibido la última calle de las cinco a que se refiere esté contrato.

Trigésimo-cuarta. Este contrato será sometido en la parte que se refiere a pagos, a la aprobación del Congreso de la Unión, y surtirá sus efectos desde el día en que se publique en el Diario Oficial el decreto de aprobación.

Trigésimo-quinta. Este contrato se extenderá por duplicado llevando ambos ejemplares estampillas por valor de $0.25 por hoja las cuales serán por cuenta de la «International Asphalt Co., S. A.»– Guillermo B. Puga.– Por la «International Asphalt Co., S. A. », Samuel W. Rider, presidente.

Es copia que certifico ser sacada de su original. México, abril 29 de 1908.– L. Salazar.

Es copia. México, 18 de junio de 1908.– El subsecretario, Mig. S. Macedo.

Junio 20 de 1908.- El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 127 de la Constitución Federal, y en virtud de la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara adicionada la fracción XXII del art. 72° de la misma Constitución.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue;

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido

a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 127 de la Constitución Federal, y en virtud de la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara adicionada la fracción XXII del art. 72° de la misma Constitución en los términos siguientes:

Fracción XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; para definir, determinar cuáles son las aguas de jurisdicción federal y expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las mismas.

Fernando Vega, diputado por el 14 Distrito del Estado de Guanajuato, presidente.– Luis C. Curiel, senador por el Estado de Yucatán, vicepresidente.– Alonso Rodríguez Miramón, diputado por el 4° Distrito electoral del Estado de Puebla, 1er. vicepresidente.– Manuel Domínguez, senador por Zacatecas, vicepresidente.– V. Salado Álvarez, diputado por el 3er. Distrito electoral del Estado de Tabasco, vicepresidente.–

Por el Estado de Aguascalientes: diputados, Ignacio Canseco, F. G. de Cosío. Senadores, Rafael J. Gutiérrez, I. T. Chávez.–

Por el Territorio de la Baja California: diputado, Antonio Salinas y Carbó.–

Por el Estado de Campeche: Senador, Francisco S. Carbajal.–

Por el Estado de Coahuila: diputados, Rafael R. Arizpe, Manuel Garza Aldape. Senadores, B. Gómez Farías, Venustiano Carranza.–

Por el Estado de Colima: senadores, R. Pimentel, Antonio Mercenario.–

Por el Estado de Chiapas: diputados, S. Contreras, José Echeverría Jesús M. Rábago, Enrique Torres Torija. Senadores, José Castellot, Antonio V. Hernández.–

Por el Estado de Chihuahua: diputados, P. Parra, B. Urueta, Antonio Ramos Pedrueza, José M. Gamboa, Juan Sánchez Azcona, Simón Parra. Senadores, Eduardo Villada, M. Sánchez Mármol.–

Por el Distrito Federal: diputados, Andrés Sánchez Juárez, Heriberto Barrón, E. R. García, Luis G. Labastida, José Romero. Senadores S. Camacho, Dr. Manuel Ortega Reyes.–

Por el Estado de Durango: diputados, Luis A. Aguilar, Nicolás Menocal. M. de Zamacona Inclán. Senadores, M. A. Mercado, Miguel F. Martínez.–

Por el Estado de Guanajuato: diputados, por el 5° Distrito electoral, Lorenzo Elízaga, Francisco Fernández Ibarra, J, Chapital, Jesús Morales, Luis A. Vidal y Flor, Jesús Loera, Juan de Dios Peza, José Bribiesca Saavedra, Francisco Fernández Castelló. Senador Francisco Albíztegui.–

Por el Estado de Guerrero; diputados, A. Fenochio, Francisco Alfuro, Juan de Pérez Gálvez, Pedro Laclau, Ramón Reynoso. Senadores, Francisco Sosa, T. R. Retana.–

Por el Estado de Hidalgo: diputados, Carmen de Ita, Luis Hernández, Fidencio Hernández, José Peón del Valle, Francisco Romero Ignacio Sánchez, Juan A. Mateos, M. Mirus, Gabriel Mancera. Senador, Francisco de P. del Río.–

Por el Estado de Jalisco: diputados, E. Pazos E. Ramón Corona, J. E. Monjarás, Francisco Magro, M. Martínez del Río, Lucio I. Gutiérrez, Genaro Pérez. Juan de Dios Rodríguez, Juan de Dios Orozco, L. Velasco Rus, M. Algara, J. M. Rincón Gallardo.–

Por el Estado de México: diputados, J. Villarreal, Carlos Casasús, Manuel F. Villaseñor, Emilio Ruiz y Silva, Antonio de la Peña y Reyes, Ignacio G. Heras, Ramón Márquez Galindo, Enrique Landa, Benjamín Bolaños. Manuel Cervantes, E. Henkel. Senador, G. Enriquez.–

Por el Estado de Michoacán: diputados, Juan de la Torre, Francisco de Landa y Escandón, José N. Macías, Luis B. Caballero, Agustín Aragón, Enrique González, Enrique de Olavarría y Ferrari, S. Fernández, A. González de León. S. Vega Limón. Senador, Carlos Sodi.–

Por el Estado de Morelos: diputado, Antonio Tovar. Senadores, Román S. de

Lascurain, José M. Romero.–

Por el Estado de Nuevo León: diputados, Tomás Macmanus, J. Robles Linares, Lorenzo Sepúlveda, José M. García Ramos, José López Portillo y Rojas. Senador, Carlos F. Ayala.–

Por el Estado de Oaxaca: diputados, Ignacio M. Luchichí, R. Aguilar, Luis C. Curiel, Jr. Honorato Bolaños, Benito Juárez, J. N. Castellanos, Enrique A. Fenochio, Rosendo Pineda, Francisco T. Carrere, Manuel Escobar. Senadores, A. Valdivieso, F. González Mena.–

Por el Estado de Puebla: diputados, C. Garza Cortina, F. Camacho, Hmero A. Bandala, Juan Zayas Guarneros, Manuel Carrascosa, R. L. Hernández, D. Salazar, Carlos Pereyra, P. de Azcué, Guillermo Pous, Constancio Peña Idiáquez, R. Manterola. Senador, Feliciano García.–

Por el Estado de Querétaro; diputados, Félix M. Alcérreca, Prisciliano Maldonado. Senador, A. Arguinzóniz.–

Por el Territorio de Quintana Roo; diputado, Vicente Villada Cardoso.–

Por el Estado de San Luis Potosí: diputados, Alberto L. Palacios, José W. de Landa y Escandón, Alonso Fernández, Carlos M. Saavedra, Alberto López Hermosa, V. Luengas, Arturo Paz, I. G. Zúñiga. Senador, José Ramos.–

Por el Estado de Sinaloa: diputados, José R. Portilla, Javier Algara, L. Pérez Castro, Ricardo N. del Río. Senadores, Emilio Rabasa, Ramón Alcázar.–

Por el Estado de Sonora: diputados, Sergio Bonilla. Senadores, R. Dondé, Alejandro Prieto.–

Por el Estado de Tabasco: diputado, Ceráreo Garza. Senadores, J. Castañeda, A Castañares.–

Por el Estado de Tamaulipas: diputados, Pedro Rendón, Antonio Maza. Senador, M. Bolaños Cacho.–

Por el Territorio de Tepic; diputado, C. Aldasoro.– Por el Estado de Tlaxcala: diputados, Francisco Dehesa, Modesto R. Martínez. Senadores, E. Pardo, J. F. Ugarte.–

Por el Estado de Veracruz; diputados, G. Mendizábal, E. d'Oleire, Diódoro Batalla, R. Rodríguez Talavera, F. J. Ituarte, M. L. Herrera, M. Leví, Leopoldo Rincón. Senadores, M. S. Herrera, F. P. Aspe.–

Por el Estado de Yucatán: diputados, Julio S. Novoa, Salvador Dondé, F. Duret, Manuel Sierra Méndez. Senador, Francisco Martínez, de Arredondo.–

Por el Estado de Zacatecas: diputados, Alonso Mariscal y Pina, Ignacio L. de la Barra, E. Cervantes, Genaro García, Álvaro Rodríguez. Senador, Alonso Mariscal.–

Daniel García, diputado por el 4° Distrito electoral del Estado de Durango, secretario.– Ramón Prida, diputado por el 1er, Distrito electoral del Estado de Tamaulipas, secretario.– J. R. Canal, diputado por el 6° Distrito electoral del Estado de San Luis Potosí, secretario.– J. R. Aspe, diputado por el 10° Distrito electoral del Estado de Jalisco, secretario R. Martínez Freg, diputado por el 1er. Distrito electoral del Estado de Tlaxcala, prosecretario.– Luis Riba, diputado por el 10° Distrito electoral del Estado de Puebla, prosecretario.– José M. Garza Ramos, diputado por el 1er. Distrito electoral del Estado de Guanajuato, prosecretario.– Carlos Flores, senador por el Estado de Jalisco, secretario.– J. de J. Peña, senador por el Estado de Tamaulipas, secretario.– Tomás Mancera, senador por el Estado de Puebla, secretario.– A Gaviño, senador por el Estado de México, secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 20 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución. México, 20 de junio de 1908.– Corral.– Al....

Junio 20 de 1908.- Sobre establecimientos penales en México.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Art. 1. En el Distrito Federal habrá los siguientes establecimientos penales:

I. Una Penitenciaría en la ciudad de México;

II. Una cárcel general en la misma ciudad;

III. Cárceles municipales en Azcapotzalco, Tacubaya, Tlalpan y Xochimilco;

IV. Una cárcel de detención en cada una de las cabeceras de las Municipalidades foráneas en que no deba haber cárcel municipal conforme a la fracción anterior;

V. Una casa de corrección para varones menores y otra pare menores mujeres.

Art. 2. En las islas Marías, del Océano Pacífico, habrá una colonia penal, para los efectos del art. 15 de este decreto.

Art. 3. La penitenciaría de México se destinará exclusivamente a la extinción de las condenas de los reos varones que en seguida se expresan:

I. Los condenados a prisión extraordinaria;

II. Los reincidentes condenados a prisión ordinaria;

III. Los condenados a prisión ordinaria por el tiempo que fije el reglamento de la Penitenciaría;

IV. Los condenados a prisión, a quienes se haga efectiva la retención que establecen los arts. 71° al 73° del Código Penal;

V. Los condenados a prisión, que, por su incorregible mala conducta en otra cárcel del Distrito, sean consignados a la penitenciaría por los respectivos Alcaldes, con aprobación o por acuerdo del gobierno del Distrito.

Art. 4. La cárcel general se dividirá en cinco departamentos:

I. Uno destinado a la detención y arresto de los responsables de faltas;

II. Otro destinado a detenidos y encausados;

III. Otro destinado a condenados a arresto;

IV. Otro destinado a los sentenciados a prisión ordinaria por delitos;

V. Otro destinado a los reos responsables de delitos que merezcan la pena de reclusión simple.

Cada uno de estos departamentos se subdividirá en dos: uno para hombres y otro para mujeres.

Art. 5. En el primer departamento de la cárcel general, sufrirán su detención y arresto menor los reos de faltas de la competencia de las autoridades administrativas de la capital.

Art. 6. En el segundo departamento de la misma cárcel, sufrirán su detención y prisión preventiva todos los inculpados por delitos que no sean militares y de cuyos procesos conozcan las autoridades residentes en la ciudad de México.

Art. 7. En el tercer departamento de la misma cárcel extinguirán sus condenas los reos sentenciados a arrestos menor y mayor por las autoridades judiciales residentes en la ciudad de México.

Art. 8. En el cuarto departamento de la Cárcel General, extinguirán sus condenas los reos sentenciados a prisión que no deban ingresar a la Penitenciaría o que, debiendo ingresar a ella, no puedan ser trasladados desde luego por falta de celdas disponibles.

Art. 9. Las Cárceles municipales tendrán por objeto:

I. La detención de los individuos aprehendidos por faltas y la de los aprehendidos por cualquiera clase de delitos, durante la práctica de las primeras diligencias de la instrucción por las autoridades a quienes correspondan conforme a la ley, siempre que éstas residan en la cabecera de la municipalidad respectiva;

II. La detención y prisión preventiva de los inculpados de cuyos procesos conozca el juez de la instancia de la municipalidad;

III. La extinción de las condenas de arresto menor y arresto mayor, impuestas por las autoridades judiciales o administrativas de la respectiva municipalidad.

Art. 10. Las cárceles de detención de las municipalidades foráneas tendrán por objeto:

I. La detención de los individuos aprehendidos por faltas, o la de los aprehendidos por cualquiera clase de delitos en las respectivas demarcaciones, durante la práctica de las primeras diligencias de la instrucción por las autoridades a quienes corresponda conforme a la ley;

II. La detención y prisión preventiva de los inculpados de cuyos procesos conozcan los jueces menores y de paz de las respectivas demarcaciones;

III. La extinción de las condenas de arresto mayor y menor impuestas por las autoridades judiciales o administrativas de las respectivas demarcaciones.

Art. 11. Cada una de las casas de corrección para menores se dividirá en tres departamentos: uno destinado a la educación correccional, otro a la reclusión por vía de corrección penal y otro para los menores encausados.

Art. 12. En el departamento de educación correccional recibirán ésta:

a. Los menores de catorce años que por haber delinquido sin discernimiento sean sometidos a esa medida preventiva conforme al Código Penal;

b. Los menores que sean consignados por medida administrativa dictada de oficio o a solicitud de los padres, tutores o encargados de los menores.

En el departamento de corrección penal extinguirán sus condenas los menores sentenciados a esa corrección.

En el departamento de encausados sufrirán su detención y prisión preventiva, los menores de cuyos procesos conozca cualquiera autoridad del Distrito.

Art. 13. En los departamentos de educación correccional podrá establecerse una sección especial en que sean recibidos, mediante pago de pensión, los menores consignados a solicitud de sus padres, tutores o encargados.

Art. 14. La casa de corrección para mujeres continuará establecida en Coyoacán y la casa de corrección para varones, establecida actualmente en la ciudad de México, podrá ser trasladada a cualquiera de las municipalidades foráneas cuando el Ejecutivo lo juzgue conveniente.

Los jueces correccionales, de instrucción y cualesquiera otros que tengan jurisdicción penal, podrán trasladarse a las casas de corrección para la práctica de diligencias con los menores reclusos que en ellas se encuentren, aun cuando se trate de jueces cuyo distrito jurisdiccional no incluya el lugar de ubicación de la respectiva casa de corrección.

Art. 15. Los reos condenados a la pena de relegación por los Tribunales Federales o por los del Distrito y de los territorios de la Baja California y de Tepic, sufrirán sus condenas en la colonia penal establecida en las Islas Marías, del Océano Pacífico.

Art. 16. Los establecimientos penales del Distrito dependerán de la secretaría de Gobernación, quedando al cargo inmediato del gobierno del Distrito. La Colonia Penal dependerá directamente de la secretaría de Gobernación.

Art. 17. El gobierno del Distrito cuidará de que, con la debida oportunidad, sean remitidos a cada uno de los establecimientos penales a que este decreto se refiere, los presos que conforme a sus

preceptos deban estar en ellos, sin que sea necesario orden especial del Ejecutivo.

Las jefaturas Políticas de los Distritos Sur y Norte del Territorio de la Baja California y la del Territorio de Tepic, harán lo mismo por lo que se refiere a la colonia penal.

Art. 18. El Ejecutivo podrá, en todo tiempo, disponer por orden especial, que determinados presos permanezcan en un establecimiento penal distinto del señalado en este decreto, siempre que lo exijan así la seguridad pública o el número de presos que haya en el establecimiento.

Art. 19. Se autoriza al Ejecutivo para la construcción, en la ciudad de México, de una nueva cárcel en que extingan sus condenas de arresto, prisión ordinaria o reclusión simple, todos los sentenciados por los tribunales que no deban ir a la penitenciaría, a efecto de que la actual cárcel general quede exclusivamente destinada a los detenidos, encausados o condenados a arresto por faltas.

Art. 20. Igualmente se autoriza al Ejecutivo para que, en los edificios que se construyan para inspecciones o comisarías de policía en la ciudad de México, se comprendan pequeñas cárceles, a efecto de que en ellas permanezcan los presos que estén a disposición de los juzgados correccionales que se establezcan en las mismas inspecciones o comisarías, para conocer de los delitos de su competencia cometidos en el correspondiente cuartel o demarcación de la municipalidad de México.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Queda derogado el decreto de 13 diciembre de 1897 relativo a establecimientos penales del Distrito Federal.

Fernando Vega, diputado presidente. Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– José R. Aspe, diputado secretario.– Tomás Mancera, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio Nacional de México, a 20 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y efectos correspondientes.

Libertad y Constitución. México, 1º de junio de 1908.– Corral.– Al.....

Junio 22 de 1908.- La importancia adquirida en los últimos tiempos por la inmigración de la república, ha determinado al ejecutivo a fijar su atención en todo lo que a ella se refiere, a efecto e estar en posibilidad de dictar en oportunidad las disposiciones que a interés nacional reclame, sea para obtener de la inmigración todo el provecho deseable, sea para evitar que se introduzcan al país elementos que desde luego o en el transcurso del tiempo, por su aglomeración o por otros motivos, puedan ser nocivos.

Para conocer la marcha de la inmigración, se hace indispensable, como primera operación, registrar el número y condiciones de los individuos que entran, operación que tiene que efectuarse en el momento mismo de llegada a la república.

En tal virtud, el señor presidente ha acordado que los delegados sanitarios, que por sus funciones son los primeros en ponerse en contacto con los individuos que llegan, sean los designados para este trabajo recomendándoles que, al practicar la visita de sanidad, practiquen a la vez el interrogatorio que contiene el modelo que se acompaña y del que por separado se remiten a usted ejemplares a fin de que dicha labor comience el 1° de julio próximo.

De los cuestionarios que diariamente sean llenados, sacará usted una copia en los mismos esqueletos, que revisará y cotejará, a fin de subsanar oportunamente los errores u omisiones en que se pueda haber incurrido; y estas copias serán las que se remitan a esta secretaría los días 16 y 1° de cada mes, por lo correspondiente a la quincena inmediata anterior, conservando en su archivo los originales cronológicamente ordenados y en

forma de que se facilite su consulta, entretanto se dispone su destrucción.

Se debe procurar que las preguntas que contiene el cuestionario sean contestadas con toda claridad y precisión, y, en auxilio de ello, se ha puesto la explicación del reverso, para evitar omisiones o ambigüedades, y cuya lectura se recomienda a fin de que haya uniformidad en las contestaciones, requisito importante para la totalización de los datos.

Se darán casos en que a usted le sea necesario acudir en auxilio del pasajero con preguntas auxiliares; cuando esto suceda, no excuse la mayor prudencia y tino para evitar que el pasajero, creyéndose fiscalizado, eluda la verdad en sus respuestas.

En todo lo relativo a este servicio, se entenderá usted directamente con esta secretaría.

Espero que se penetrará usted de la importancia que la eficacia y la exactitud tienen en este caso, y por ello no dudo que se servirá poner al servicio dé su encargo toda la eficacia y buena voluntad que se requiere.

Libertad y Constitución. México, 22 de junio de 1908.– Al delegado sanitario.....

Junio 24 de 1908.- Sobre la consulta del comandante militar de Veracruz, relativa a gastos de los presos civiles del orden federal existentes en la prisión militar de Veracruz y Ulúa.

Se recibió en esta secretaría el oficio de usted núm. 74,436, girado por la sección segunda en 6 del actual, en el que se sirve transcribir la consulta del comandante militar de Veracruz, relativa a gastos de los presos civiles del orden federal existentes en la prisión militar de Veracruz y Ulúa.

En contestación, tengo la honra de manifestar a usted que lo dispuesto en el oficio de esta secretaría, núm. 7,399, del 27 del último mayo sobre ministración de alimentos a los presos federales del orden civil, que se encuentran en la prisión militar de Veracruz y Ulúa, comprende a todos los presos de dicho orden, tanto a los procesados cómo a los condenados, y que respecto de los otros gastos que los reos condenados causan, además de su alimentación, y que consisten en alumbrado, lavado, corte de pelo y barba, vestuario y equipo, si no se habló de ellos en el referido oficio de 27 del próximo pasado mayo, fue tan sólo porque generalmente no se dan a los presos sino alimentos, y no se tomaron en consideración las ministraciones especiales que se hacen a los reos militares; pero como el principio fundamental aceptado por esta secretaría en su repetido acuerdo, es el de que los presos federales del orden civil se encuentren en las mismas condiciones que los demás presos que se hallen en la propia cárcel, se resuelve que por los sentenciados que estén extinguiendo sus condenas en la prisión militar de Veracruz y Ulúa, se abone la misma cuota diaria de veinticinco centavos que se paga por los sentenciados militares, a efecto de que los primeros reciban iguales servicios y tratamiento que los segundos.

Reitero a usted mi atenta consideración.- Libertad y Constitución. México, 24 de junio de 1908.– Corral.– Al secretario de Guerra y Marina.– Presente.

Junio 25 de 1908.- La institución de beneficencia privada denominada "Sociedad Italiana de Mutuo Socorro y Fraternidad." fundada por acta que se otorgó en esta capital a 8 de Junio de 1908, por ante el notario Ramón Ruiz, goza de personalidad jurídica para el objeto de su instituto y de las franquicias que concede la ley de 23 de agosto de 1904.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que de conformidad con lo prevenido en el art. 20° de la ley de Beneficencia Privada para el Distrito y territorios federales, de 23 de agosto de 1904, y en virtud de haberse llenado los requisitos exigidos por dicha ley, he tenido a bien decretar:

Artículo único. La institución de beneficencia privada denominada "Sociedad Italiana de Mutuo Socorro y Fraternidad." fundada por acta que se otorgó en esta capital a 8 de Junio de 1908, por ante el notario Ramón Ruiz, goza de personalidad jurídica para el objeto de su instituto y de las franquicias que concede la ley de 23 de agosto de 1904.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a 25 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.- Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente."

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 25 de junio de 1908.– Corral.– Al.....

Junio 29 de 1908.- Disposiciones reglamentarias provisionales sobre la pena de relegación, con referencia al decreto de adiciones al Código Penal del 20 del actual.

Habiéndose expedido con fecha 20 del actual, por conducto de la secretaría de Justicia, el decreto de adiciones al Código Penal, que crea la pena de relegación, se hace necesario organizar esa colonia penal con entera sujeción al decreto que se ha citado, por lo que esta secretaría ha acordado que a ese efecto se observen por esa dirección, con el carácter de disposiciones reglamentarias provisionales, las siguientes:

1. A la llegada de cada reo, se le abrirá en el libro que habrá de llamarse registro general, su correspondiente partida, en la cual se harán constar:

I. Fecha del ingreso;

II. Nombre, apellidos paterno y materno y sobrenombres o apodos;

III. Nombres y apellidos del padre y de la madre;

IV. Nacionalidad y lugar del nacimiento, con especificación del Distrito y del Estado o Nación a que corresponda;

V. Estado civil;

VI. Oficio, profesión u ocupación habitual;

VII. Edad exacta o aproximada;

VIII. Religión;

IX. Clase social;

X. Raza;

XI. Grado de instrucción;

XII. Delito o delitos por que hubiere sido condenado;

XIII. Tribunal que hubiere pronunciado la sentencia irrevocable.

Al hacer constar los expresados datos, se observarán las reglas establecidas en los arts. 120 y 126 del reglamento general de establecimientos penales, en cuanto fueren aplicables.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 4° del decreto de adiciones al Código Penal, de 20 del corriente, todo reo, al ser recibido en la colonia, será destinado al primer período, que será de prisión celular con incomunicación parcial, esto es, incomunicación con los demás presos, y con trabajo (art. 2° decreto citado). El primer período durará, por lo menos, un noveno de la condena; pero en el concepto de que, si dicho noveno excediere de tres meses, este tiempo será la curación mínima del período (art. 3° decreto citado).

3. El día último de cada mes se anotará a cada uno de los reos existentes en la colonia, en sus respectivas partidas del registro general, la conducta que durante el mes hubieren observado y, caso de que se hubieren resistido a trabajar o hubieren cometido otra falta disciplinaria o algún delito, así se expresará en la correspondiente anotación, especificando la falta o delito cometido.

4. Los reos que durante su permanencia en el primer período observen buena conducta durante el tiempo que como mínimum hayan de estar en dicho período,

sin interrumpir esa buena conducta cometiendo alguna falta o delito, serán pasados al segundo período.

5. El segundo período de conformidad con lo prevenido en el artículo 3° del citado decreto, durará, por lo menos, el tiempo necesario para que, unido al que conforme a la primera parte de dicho artículo, se hubiere fijado como mínimum para el primer período, iguale al cuarto de la condena; pero sin que pueda bajar de un mes ni exceder de seis.

Los reos permanecerán en este segundo período hasta que hayan observado buena conducta durante el tiempo que como mínimum les corresponda, y sin haber interrumpido ese tiempo cometiendo alguna falta o delito.

6. Los reos que, estando en el segundo período, se resistieren a trabajar, cometieren alguna otra falta grave, a juicio del director de la colonia, o cometieren algún delito, serán retrocedidos al primer período, en el que de nuevo habrán de permanecer el tiempo fijado en la regla segunda de este acuerdo.

7. Los reos que hayan permanecido ya en el segundo período el tiempo que como mínimum les corresponda y hayan observado, durante él, buena conducta, serán puestos por la dirección en libertad preparatoria, debiendo residir en la colonia penal todo el tiempo que les falte para extinguir su condena. Durante ese tiempo gozarán de libertad, sin más restricciones que las que sean indispensables para el buen orden y la disciplina de la colonia en los términos que rijan los respectivos reglamentos o acuerdos; pero, sí observaren mala conducta, volverán a ser colocados en el segundo período o aún en el primero, según la gravedad de la falta que cometieren. Los que cometieren algún delito serán retrocedidos precisamente al primer período.

8. Respecto de los reos que, al extinguir el tiempo de su condena, se encuentren en los períodos primero o segundo por haber tenido mala conducta durante la segunda mitad de su condena, el director, en cumplimiento de lo prevenido en la ley reglamentaria de 8 de diciembre de 1897, treinta días antes de que el reo haya de extinguir su condena, lo comunicará al tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoria, informando sobre la conducta observada por el reo durante la expresada segunda mitad de su condena, con especificación de los delitos y faltas que haya cometido, así como de las penas o castigos que se le hayan impuesto.

Si al concluir el término de la pena, no se hubiere comunicado a la dirección el fallo relativo a la retención del reo, éste será puesto inmediatamente en libertad, si no estuviere encausado por otro delito, ni debiera extinguir otra pena, dándose aviso a esta secretaría.

9. Los reos que, conforme a las reglas precedentes, deban salir de la colonia penal, serán remitidos al puerto de san Blas en el primer viaje que haga a dicho puerto el vapor de servicio de la colonia.

Al salir de la colonia, se les entregará por el director un salvo conducto, en el que se hará constar que han extinguido su condena y, en su caso, la correspondiente retención y que han sido puestos en libertad.

10. A los liberados que lo quisieren se les entregarán $3 por la dirección de la colonia, al salir de ella para que hagan el viaje del puerto de san Blas a la ciudad de Tepic si no es que quisieren quedarse en dicho puerto o dirigirse a otro lugar que no sea el de su procedencia al ser remitidos a la colonia.

11. Al desembarcar en el puerto de san Blas, los reos se presentarán a la prefectura política a efecto de que se les vise el pasaporte expedido por la dirección.

12. Los liberados que llegaren a Tepic se presentarán a la prefectura política de ese lugar y, si quisieren continuar su viaje rumbo al Distrito Federal, recibirán allí $6 en efectivo y un billete de pasaje de segunda clase de san Marcos, Jalisco, a la ciudad de México. (Ferrocarril Central Mexicano.)

13. La parte que del producto de su

trabajo corresponda a los reos conforme al art. 85 del Código Penal reformado por decreto de 5 de septiembre de 1896, permanecerá depositada en la dirección de la colonia hasta que salgan de ella, observándose, en su caso, lo previsto en el art. 88° del Código Penal reformado por dicho decreto y ministrándose a los reos que estén en libertad preparatoria las cantidades que la dirección juzgue indispensables.

El resto de su fondo les será entregado al ser puestos en libertad.

14. Los reos que, después de extinguida su condena y la retención, en su caso, quisieren permanecer en la colonia, podrán hacerlo, sujetándose a los reglamentos y acuerdos respectivos.

15. La dirección dará aviso a esta secretaría de todos los reos que sean puestos en libertad.

16. Las disposiciones de este acuerdo relativas a translación de reos a la ciudad de México, se entienden solo respecto de los reos procedentes del distrito Federal. Los procedentes del Territorio de Tepic sólo recibirán el auxilio de $3 que se les ministre al salir de la colonia para que del puerto de san Blas se dirijan al punto de su procedencia.

Respecto de los que proceden de la Baja California se dictarán en cada caso las medidas a que haya lugar.

Lo que tengo la honra de comunicar a usted para su conocimiento.

Libertad y Constitución. México. 29 de junio de 1908.– Corral.– Al director de la colonia penal en las islas Marías.– Isla María Madre.

Disposiciones que se citan en el acuerdo anterior.

Reglamento general de los Establecimientos Penales del Distrito Federal.– (14 de septiembre de 1900).

Art. 120. La noticia de calidades personales de los entrados, llevará por rúbrica: "Nombre del establecimiento.– Número de los individuos que entraron durante el mes de.....de 19..... con expresión de sus calidades personales," y contendrán las siguientes columnas: Días de la semana; Días del mes; Sexo, distinguiendo Hombres y mujeres; Edad, distinguiendo Menores de 9 años, De 9 a 14 años, De 14 a 18 años, De 18 a 21 años, De 21 a 30 años, De 30 a 40 años, De 40 a 50 años, De 50 a 60 años y mayores de 60 años; Estado civil distinguiendo Solteros, Casados y Viudos; Nacionalidad, distinguiendo Mexicanos del Distrito Federal, Mexicanos de fuera del Distrito Federal y extranjeros; Oficios, profesión u ocupación principal, comprendiendo Zapateros, Sastres, Albañiles, Carniceros, Carreros, Operarios, Empleados, Carpinteros, Peones, Sin ocupación, y las columnas en blanco que se juzguen necesario para las ocupaciones no especificadas; Grado de instrucción, distinguiendo; No saben leer, Saben leer, Saben leer y escribir, Tienen instrucción primaria completa y Tienen instrucción superior; Clase social, distinguiendo: Primera clase (individuos de buena posición que visten saco o levita), Segunda clase (individuos de condición media que visten de blusa o chaqueta y pantalón) y Tercera clase (individuos de condición inferior que visten ordinariamente de camisa y calzón); Religión; distinguiendo Católicos, Protestantes, Otras Religiones y Sin Religión; y Raza de los mexicanos, distinguiendo Indígenas, Mestizos, Blancos y Otras razas.

En la última línea horizontal de esta noticia se expresará el total de cada calidad.

Art. 126. En la formación de dichas noticias se observarán, además de las reglas establecidas en los artículos que preceden, las siguientes:

I. La clasificación de las causas de entrada (faltas y delitos) se hará sujetándose a la nomenclatura legal y especialmente a la del Código Penal. En los casos dudosos, en el encabezado de la columna en que se haga el asiento se inscribirá textualmente la causa de entrada que indique el parte u orden respectivo, y si fuere necesario se copiará el parte u orden en nota especial;

II. La edad será registrada conforme a la declaración que hagan los individuos de quienes se trate, pero si manifestaren ignorarla o declararen una edad que notoriamente esté desmedida por su aspecto, el empleado que haga el asiento inscribirá la que según su juicio tengan;

III. Para la clasificación del estado civil, se atenderá exclusivamente al matrimonio civil y no al canónico ni al estado de concubinato. En consecuencia se anotará como solteros a todos los individuos que no estén ni hayan estado casados civilmente;

IV. El oficio, profesión u ocupación principal, se asentarán atendiendo al trabajo quedé a la persona los principales medios de subsistencia al ser aprehendida, y en consecuencia sólo se anotará la de las personas que vivan de su trabajo, registrándose como sin ocupación a los que no tengan ocupación retribuida.

V. En lo que no estuviere previsto en este reglamento ni en los acuerdos e instrucciones del gobierno del Distrito, se obrará conforme a las reglas establecidas en las leyes y reglamentos de estadística general, para que entre ésta y la estadística carcelaria haya la mayor unidad posible.

Ley reglamentaria de la libertad preparatoria y de la retención. (8 de diciembre de 1897).

CAPÍTULO III.

DE LA RETENCIÓN

Art. 28. Treinta días antes de que un reo haya de extinguir su condena, la Dirección de la Penitenciaría o el jefe de la prisión lo comunicará al tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoria, informando sobre la conducta observada por el reo durante la segunda mitad de su condena, con especificación de los delitos y faltas que haya cometido, así como de las penas o castigos que se le hayan impuesto.

Art. 29. Recibido el informe se citará al ministerio público y al reo a una audiencia que tendrá lugar dentro de ocho días. Las partes, al ser citadas, pueden promover las pruebas que crean convenientes, y si lo hicieren, se recibirán las que promuevan, dentro de un término que no pase de ocho días.

Art. 30. El día de la audiencia, se dará cuenta del expediente y se concederá la palabra primero al ministerio público y después al reo o a su defensor, para que expongan lo que a su derecho convenga, pronunciándose el fallo dentro de tercero día de concluida aquella. Contra esa resolución no se admitirá ningún recurso.

Art. 31. La resolución a que se refiere el artículo anterior, se comunicará en el término de veinticuatro horas a la dirección de la penitenciaría o al jefe de la prisión, para que ponga en libertad al reo el día en que cumpla su condena, si se declara que no ha lugar a la retención, o para que haga efectiva ésta en caso contrario.

Art. 32. Si al concluir el término de la pena no se hubiere comunicado el fallo a la dirección de la penitenciaría o al jefe de la prisión, el reo será puesto inmediatamente en libertad, si no estuviere encausado por otro delito ni debiere extinguir otra pena, dándose aviso a la autoridad política o militar de quien dependa la prisión. El que infringiere esta disposición incurrirá en las penas determinadas en el art. 980 del Código Penal.

Art. 33. Si un reo reportare varias condenas con calidad de retención, la declaración de si es o no de hacerse efectiva la correspondiente a cada una de ellas, se hará a medida que vaya extinguiéndolas; y cuando se declare que ha incurrido en alguna retención, ésta se considerará como una nueva pena que debe sufrir después de extinguidas las anteriores, observándose lo dispuesto en el art. 23°.

Art. 34. Las declaraciones que hagan los tribunales respecto de la retención, serán comunicadas a la secretaría de Justicia.

Julio 2 de 1908.- Que conforme al art. 6° del decreto de 20 del actual sobre organización de los Establecimientos penales del Distrito Federal y de la colonia Penal, no pueden ser detenidos en la cárcel general, los inculpados por delitos militares y que no habiendo prisiones de esta clase para las mujeres responsables de delitos del orden militar, solicita que éstas sean detenidas en la mencionada cárcel general.

SECCION 2ª.- NÚMERO 240.

La secretaría de Guerra se ha dirigido a esta de mi cargo, expresando que conforme al art. 6° del decreto de 20 del actual sobre organización de los Establecimientos penales del Distrito Federal y de la colonia Penal, no pueden ser detenidos en la cárcel general, los inculpados por delitos militares y que no habiendo prisiones de esta clase para las mujeres responsables de delitos del orden militar, solicita que éstas sean detenidas en la mencionada cárcel general.

En vista de lo expuesto esta secretaría ha acordado que en razón de no existir prisiones militares para mujeres, se sirva ese gobierno disponer sean admitidas en la cárcel general las mujeres procesadas por los delitos de aquel orden, que continúen en ella las que ahora están; y que, en la propia prisión, extingan su pena las que fuesen condenadas, en el concepto de que se les colocará en los departamentos que les correspondan, considerándolas como encausadas o condenadas por autoridad judicial.

Libertad y Constitución. México, 2 de julio de 1908.– Corral.– Al Gobernador del Distrito.– Presente.

Agosto 20 de 1908.- Toda persona que, viniendo del extranjero, llegue a la república, cualquiera que sea su nacionalidad, sexo o edad, y cualquiera que sea también el vehículo, medio de transporte o manera con que llegue, será sometido a interrogatorio a fin de recoger, respecto de él, los datos que constan en la boleta que se acompañó a la circular de 22 de junio último.

SECCIÓN 4ª.- CIRCULAR.

En el desempeño de las funciones que confiere a usted la circular de esta Secretaría de 22 de junio último, deberá proceder con sujeción a las bases siguientes:

Primera. Toda persona que, viniendo del extranjero, llegue a la república, cualquiera que sea su nacionalidad, sexo o edad, y cualquiera que sea también el vehículo, medio de transporte o manera con que llegue, será sometido a interrogatorio a fin de recoger, respecto de él, los datos que constan en la boleta que se acompañó a la circular de 22 de junio último, (forma núm. 1).

Solamente se exceptúan de esta disposición:

I. Los residentes en las poblaciones extranjeras fronterizas que vengan a poblaciones fronterizas mexicanas sin el propósito de permanecer en ellas, o lo que es lo mismo, que solo vienen por algunas horas o cuando más, por algunos días;

II. Los cocheros, mozos, postillones, maquinistas, conductores, garroteros, marineros y demás individuos del servicio de los vehículos en que lleguen pasajeros a la república, siempre que aquellos individuos no hayan de quedarse en el país, sino que hayan de volver al extranjero con los vehículos en cuyo servicio estén empleados;

III. Los individuos que procedan de un puerto o de algún lugar de la república y que lleguen a otro puerto o lugar de la misma, aun cuando hayan hecho escala en puertos extranjeros o hayan atravesado territorio extranjero, siempre que su permanencia en dicho puerto o territorio haya sido de simple tránsito para llegar a territorio mexicano.

Segunda. Cuando llegue a un puerto mexicano un buque procedente de puerto extranjero, que conduzca pasajeros que hayan de desembarcar, el delegado sanitario del puerto de llegada, al mismo tiempo que practique al barco la visita a que se refiere el art. 8° del Reglamento de sanidad marítima, someterá a cada pasajero procedente del extranjero al interrogatorio contenido en la respectiva boleta, (forma núm. 1.)

El delegado sanitario no declarará admitido a libre práctica al buque hasta no estar contestado el cuestionario por todos los pasajeros que deben desembarcar en el puerto.

Tercera. Cuando un buque procedente de puerto extranjero tenga que tocar dos o más puertos mexicanos, se someterá al cuestionario en cada uno de éstos a los pasajeros que en él hayan de desembarcar.

Cuarta. Los pasajeros que lleguen a la república por las fronteras terrestres, cruzando la línea divisoria con los Estados Unidos del Norte, Guatemala u Honduras Británica, también deberán ser examinados conforme al interrogatorio (forma número 1), por él delegado sanitario.

Quinta. Por cada pasajero, incluso los niños de pecho, se llenará una boleta, examinándolo personalmente. Cuando se trate de menores que no puedan contestar directamente, el interrogatorio será contestado por los padres, parientes o personas que acompañen al menor.

Cuando por ignorar el idioma castellano no pudiere contestar un pasajero, se le presentará el cuestionario redactado en inglés y si ni en ese idioma pudiere contestar, se buscará a bordo del buque o del tren persona que sirva de intérprete.

Sexta. En las poblaciones fronterizas a donde llega ferrocarril internacional, el delegado sanitario o, los agentes que tenga a sus órdenes, deberán encontrarse a bordo de los trenes que crucen la línea divisoria para interrogar a los pasajeros. Si fuere necesario para el buen servicio, los agentes podrán continuar a bordo de los trenes hasta alguna de las estaciones inmediatas, a efecto de no retardar el tráfico y desempeñar debidamente su cometido.

Séptima. En los puertos y poblaciones fronterizas en que se hubieren nombrado agentes auxiliares para el servicio de vigilancia de la inmigración, dichos agentes estarán a las órdenes del delegado sanitario.

Octava. En los puertos y lugares donde no hubiere delegado sanitario, las funciones a que se refieren la circular de 22 de junio último y la presente serán desempeñadas por el jefe de puerto o quien haga sus veces.

Lo digo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.- Libertad y Constitución, 20 de Agosto de 1908.– Al.....

Septiembre 1º de 1908.- Que no se permita que ningún individuo que forme parte de la policía rural se encargue, en los lugares en que se encuentre de destacamento y muy especialmente en las estaciones de ferrocarril, fábricas, minas y haciendas, de desempeñar trabajo alguno que no le corresponda por sus funciones y que tenga por objeto el servicio de particulares o de compañías.

ACUERDO.

El presidente de la república, para el buen servicio de la policía rural, ha tenido a bien dictar las siguientes disposiciones:

1.– Que no se permita que ningún individuo que forme parte de la policía rural se encargue, en los lugares en que se encuentre de destacamento y muy especialmente en las estaciones de ferrocarril, fábricas, minas y haciendas, de desempeñar trabajo alguno que no le corresponda por sus funciones y que tenga por objeto el servicio de particulares o de compañías.

2.– Que tampoco se permita a individuo alguno de la policía rural que reciba gratificaciones de las compañías o particulares a quienes pertenezcan las estaciones, fábricas, minas o haciendas en que se encuentren establecidos los destacamentos de que forme parte, pues sólo se autoriza que, para facilitar el servicio, dichas personas o compañías ministren gratis el alojamiento que se necesite para el personal de los destacamentos y las cuadras para sus caballos, y que ministren, sea gratis, sea a precios reducidos, los forrajes que consuma la caballada del destacamento. Siempre que se haga ministración de forrajes en las condiciones dichas, el jefe del destacamento lo comunicará al comandante del Cuerpo, a efecto de que sólo se le remita la cantidad que efectivamente se le cobre por forrajes, o

que no se le haga remisión alguna, si la ministración fuere gratuita. En todo caso, la economía que en virtud de dicha ministración resulte, será en favor de los Fondos Económicos de la institución.

3.– Que tampoco se permita que ningún individuo de la policía rural acepte o desempeñe cargos oficiales en la administración pública local, sea de los Estados o de los municipios, a menos que hubiere obtenido previamente autorización especial de esta secretaría. El hecho de aceptar algún cargo sin autorización será motivo para ordenar la baja del responsable.

4.– Que no se ordene que los guardas marchen a otro lugar dejando sus caballos, pues en todo caso deben encontrarse montados.

Publíquese en el Diario Oficial, y comuníquese por la inspección general, a cuyo cargo especial queda el cumplimiento de las precedentes disposiciones.– Corral.

Octubre 10 de 1908.- Se convoca al pueblo del Estado de Aguascalientes a elección extraordinaria de un primer senador propietario, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910

El presidente de la república, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que el Senado de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar lo siguiente:

La Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 72°, fracción III, letra C, inciso IV, de la Constitución Federal, decreta:

Art. 1. Se convoca al pueblo del Estado de Aguascalientes a elección extraordinaria de un primer senador propietario, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910.

Art. 2. La elección primaria se verificará el último domingo (25) del mes actual y la secundaria el segundo domingo (8) del próximo noviembre.

Salón de sesiones del senado. México, a 10 de octubre de 1908.

Joaquín D. Casasús, senador vicepresidente.– A. Castañares, senador secretario.– J. F. Uriarte, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 12 de octubre de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución, México, 12 de octubre de 1908.– Corral.– Al....

Octubre 17 de 1908.- No existiendo ley que castigue con alguna pena la resistencia a ministrar los datos que se piden a los pasajeros que lleguen a la república, no es posible, por ahora, dictar medida alguna contra los que se nieguen a darlos, por lo cual debe procurarse obtenerlos solamente por la persuasión, haciendo ver al pasajero que, de darlos, no resultará ningún daño, y que, de negarse a ello, será visto por las autoridades como individuo que se niega a someterse a las reglas establecidas en la república.

SECCIÓN 4ª.- CIRCULAR.

A consulta formulada por el delegado sanitario de ciudad Juárez, Chihuahua, acerca de algunos puntos relativos a cumplimiento de las circulares de esta secretaría, de 22 de junio y 20 de agosto últimos sobre estadística de inmigración, se ha resuelto:

1. No existiendo ley que castigue con alguna pena la resistencia a ministrar los datos que se piden a los pasajeros que lleguen a la república, no es posible, por ahora, dictar medida alguna contra los que se nieguen a darlos, por lo cual debe procurarse

obtenerlos solamente por la persuasión, haciendo ver al pasajero que, de darlos, no resultará ningún daño, y que, de negarse a ello, será visto por las autoridades como individuo que se niega a someterse a las reglas establecidas en la república.

2. No se puede negar la entrada a las prostitutas por solo el hecho de serlo, supuesto que no existe por ahora precepto legal que les vede la entrada en el territorio nacional.

3. En caso de que el delegado o los agentes sean ofendidos por algún pasajero o tengan con él dificultad que importe la comisión de una falta o delito, o que por cualquier motivo exija la intervención de la autoridad, deberán solicitar auxilio de la policía local, dirigiéndose a ella verbalmente y desde luego y dando a conocer su carácter de empleados federales en ejercicio de sus funciones.

Lo que comunico a usted para norma de sus procedimientos en ese lugar, recomendando le se sirva acusarme recibo.

Libertad y Constitución. México, 17 de octubre de 1908.– Al…

Octubre 22 de 1908.- CONTRATO celebrado entre la secretaría de Estado y del despacho de Gobernación y la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, ampliando el de 7 de febrero de 1908, relativo a la inspección satinaría de los productos elaborados en la casa empacadora establecida por dicha compañía en el Estado de Michoacán.

Cláusula 1. La compañía se obliga a tener en la ciudad de México, por lo menos, diez expendios para la venta al menudeo de carne de ganado bovino, ovino y porcino.

Igualmente se obliga a tener siempre provistos de carne refrigerada dichos diez expendios para la venta al menudeo y a que el precio de venta, tanto para dicha carne como para la fresca, no exceda de veinte centavos por kilogramo sobre el costo de dicha carne.

Para cumplir lo dispuesto en esta cláusula, se conviene en que la dirección general de Obras públicas podrá ejercer por medio de inspectores la vigilancia necesaria sobre los referidos expendios, y, además, en que cada seis meses entre el director de Obras públicas y el gerente de la compañía, se fijará el costo medio que durante el semestre anterior hayan tenido las carnes según los libros de la compañía, computándose todos los gastos, y ese costo medio servirá de base para los precios de venta en el semestre.

Cláusula 2. La compañía se obliga a proveer de carne y de los otros productos de sus casas empacadoras a los establecimientos del gobierno y también al ejército, con un descuento de diez por ciento sobre los precios que tengan fijados para sus ventas por mayor al público. Los precios y las demás condiciones serán ajustados de común acuerdo al celebrarse los contratos respectivos.

Cláusula 3. Para pagar el sueldo del inspector, a que se refiere el contrato de 7 de febrero de 1908, la compañía entregará por trimestres adelantados, en la oficina que designe la secretaría de Gobernación... $6,600.00, seis mil seiscientos pesos anuales, que quedarán a disposición de la misma secretaría.

Cláusula 4. Este contrato, así como el de 7 de febrero último, durarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 1926.

Cláusula 5. Continuarán en todo su vigor y fuerza las estipulaciones contenidas en las cláusulas 1ª a 5ª y 7ª del contrato de 7 de febrero de 1908.

Hecho, por duplicado, en México, a 22 de octubre de 1908.– Firmados: Ramón Corral.– L. Méndez.

Es copia. México, 22 de octubre de 1908.– El subsecretario, Mig. S. Macedo.

Octubre 23 de 1908.- Siendo necesario regularizar el trazo de la plaza del Hipódromo de la colonia de la Condesa, completando hacia el sudoeste su forma circular, conforme al plano aprobado por la dirección general de Obras públicas, se declara que es de utilidad pública llevar a cabo esa operación.

SECCIÓN 2ª.- ACUERDO.

Siendo necesario regularizar el trazo de la plaza del Hipódromo de la colonia de la Condesa, completando hacia el sudoeste su forma circular, conforme al plano aprobado por la dirección general de Obras públicas, se declara que es de utilidad pública llevar a cabo esa operación; y como para esto se necesita ocupar los terrenos de propiedad particular situados al sudoeste de dicha plaza, que poseen el Club Hípico Alemán y el Sr. Eugenio Motz, se decreta la expropiación de esos terrenos en la parte que sea necesaria, para e objeto de que se trata, bajo el concepto de que los linderos de dichos predios son los siguientes:

Terreno que posee el Club Hípico Alemán.– Al sudoeste, el terreno que posee el Sr. Eugenio Motz; al noroeste, terrenos del Jockey Club; al noreste, vía pública (prolongación de la calle de Juan de la Barrera); al sudeste, vía pública, (prolongación de la avenida Oaxaca) y al este un *pan-coupé*, vía pública.

Terreno que posee el Sr. Eugenio Motz.– Al noreste, el terreno que se acaba de deslindar; al sudoeste, calle en proyecto (prolongación de la de Juan Escutia); al sudeste, avenida en proyecto (prolongación de la avenida Oaxaca); y al noreste terreno del Jockey Club.

Publíquese este acuerdo en Diario Oficial para los efectos de la fracción tercera del art. 8° del decreto de 3 de junio de 1901, o sea para que quede nulo y de ningún valor todo contrato de venta, donación, arrendamiento, hipoteca, constitución de servidumbre o usufructo y, en general, toda estipulación que restrinja o altere los derechos de los actuales propietarios de los predios de que se trata y que se pacte de hoy en adelante.– Comuníquese.– Corral.

Noviembre 12 de 1908.- Se reforman los arts. 11° y 72°, fracción XXI, y adicionado el art. 102 de la misma Constitución.

SECCIÓN 1ª.-

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el art. 127 de la Constitución Federal y previa la aprobación de las veintisiete Legislaturas de los Estados, declara reformados los arts. 11° y 72°, fracción XXI, y adicionado el art. 102 de la misma Constitución, en los siguientes términos:

Art. 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la república, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto, u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial y administrativa, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga la ley sobre emigración e inmigración y salubridad general de la república.

Art. 72. El Congreso tiene facultad;

XXI. Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la república.

Art. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garantías individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los tribunales de la Federación, después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación.

México, 27 de octubre de 1908.– Gabriel Mancera, diputado por el 8° distrito del Estado de Hidalgo, presidente.– Emilio Álvarez, diputado propietario por el 5° distrito electoral del Estado de Chiapas, vicepresidente.– Joaquín D. Casasús, senador por el Estado de Veracruz, vicepresidente.– Mauro S. Herrera, senador por el Estado de Guanajuato, vicepresidente.–

Por el Estado de Aguascalientes: Diputado: F. G. de Cosío. Senador: J. N. García.–

Por el Estado de Campeche: Diputados: José Aréchiga, Melesio Parra: Senador: Julio Zarate.–

Por el Estado de Coahuila: Diputados: Alfredo E. Rodríguez, Rafael L. Arizpe. Senador: B. Gómez Farías.–

Por el Estado de Colima: Senadores: R. Pimentel, Antonio Mercenario.–

Por el Estado de Chiapas: Diputados: J. Echeverría, Eduardo Vims, Jesús M. Rábago. Senador: José Castellot.–

Por el Estado de Chihuahua: Diputados: Porfirio Parra, José I. Gamboa, B. Urueta. Senadores: M Sánchez Mármol, Eduardo Villada.-

Por el Distrito Federal: Diputados: Francisco M. de Olaguíbel, Guillermo Fitzmaurice, Ricardo R. Guzmán, José Romero, Andrés Sánchez Juárez. Senador: S. Camacho.–

Por el Estado de Durango: Diputados: Luis A. Aguilar, Daniel García, A. Gutiérrez. Senadores: M. A. Mercado, Miguel F. Martínez.–

Por el Estado de Guanajuato: Diputados: José María Garza Ramos, Jesús Morales, Francisco Fernández L. M. Romero Ibáñez, M. Zapata Vera, José Bribiesca Saavedra, Jesús Loera, Fernando Vega, J. Chapital, Juan de Dios Peza.–

Por el Estado de Guerrero: Diputados: Francisco Alfaro, Ramón Reynoso, Juan de Pérez Gálvez, Pedro Laclau. Senador: Francisco Sosa.–

Por el Estado de Hidalgo: Diputados: A. Ruiz y Silva, José Peón del Valle, Carmen de Ita, Fidencio Hernández, Juan A. Mateos, Senador: Nicolás López Garrido.–

Por el Estado de Jalisco: Diputados: Querido Moheno. Pedro Argüelles (hijo), Juan de Dios Rodríguez, Antonio de Juambelz y Redo, L. Velasco Rus, Ed. Delhumeau, M. Martínez del Río, Francisco Magro, R. Zubarán. Juan de Dios Orozco, M. Albira, J. R. Aspe. Cenadores: E. Pazos, E. Maqueo Castellanos.–

Por el Estado de México: Diputados. Emilio Ruiz y Silva, A. Cárdenas hijo, Aurelio Melgarejo. Manuel Fernández Verna, Enrique Lauda, Manuel Cervantes, Ing G. Heras, Benjamín Bolaños, E. Henkel. Senadores: J. Baranda, G. Enriquez.–

Por el Estado de Michoacán: Diputados: Juan de la Torre, Jacobo Mercado, S. Contreras, José N. Macías, Manrique Moheno, Agustín Aragón, Alfonso Garay, S. Vega Limón, A. González de León. Senador: S. Fernández.–

Por el Estado de Morelos: Diputado: Antonio Tovar. Senador: José M. Romero.– Por el Estado de Nuevo León: Diputados: José M. Garla Ramos, Carlos Herrera, J. Robles Linares. Senadores: Carlos F. Avala, José López Portillo y Rojas.–

Por el Estado de Oaxaca: Diputados: J. Ignacio Álvarez, Luis Curiel hijo, Manuel H. San Juan. F. M. Ortigosa, Manuel Escobar. J. N. Castellanos, Francisco Carrere. Ignacio M. Luchichí, Benito Juárez, R. Aguilar. Senador: A. Valdivieso.–

Por el Estado de Puebla: Diputados: P. de Azcué, Alberto L. Palacios, F. Camacho, F. Hernández. C. S. Aguilar, J. R. Ávila, Juan E. Zayas Guarneros, C. Garza Cortina, Constancio Peña Idiáquez, Carlos P. Martínez,

D. Salazar, Manuel Carrascosa. Senadores: Tomás Mancera, Feliciano García.

Por el Estado de Querétaro: Diputados: D. Barrios Gómez, Prisciliano Maldonado, Félix M. Alcérreca. Senador: A. Arguinzóniz.–

Por el Estado de San Luis Potosí: Diputados: Carlos M. Saavedra, Arturo Paz, José de J. A naya, J. R. Carral. Senador: José Ramos.–

Por el Estado de Sinaloa: Diputados: José R. Portilla, Javier Algara, Luis Martínez de Castro.– Por el Estado de Sonora: Diputados: Eduardo Castelazo, Sergio Bonilla. Senadores: Alejandro Prieto, R. Dondé.–

Por el Estado de Tabasco: Diputados: Cesáreo Garza, V. Salado Álvarez. Senador: J. Castañeda.– Por el Estado de Tamaulipas: Diputados: Pedro Rendón, Ignacio Durán, Ramón Prida. Senadores: J. de J. Peña, Miguel Bolaños Cacho.–

Por el Estado de Tlaxcala: Diputados: Modesto R. Martínez, R. Martínez Freg, Francisco Dehesa. Senador: E. Pardo.–

Por el Estado de Veracruz: Diputados: Julio Monteverde, Samuel García, Ignacio Muñoz, M. L Herrera, Manuel Calero, M. Leví, Adalberto A. Esteva. Senador: F. P. Aspe.–

Por el Estado de Yucatán: Diputados: Julio S. Novoa, Manuel Sierra Méndez. Senador: Luis C. Curiel.–

Por el Estado de Zacatecas: Diputados: J. Antonio Pliego Pérez, Ignacio L. de la Barra. Senador: Manuel Domínguez.–

Por el territorio de la Baja California: Diputado: Antonio Salinas y Carbó.–

Por el territorio de Tepic: Diputados: G. Aldasoro, S. Chousal.–

Por el 5° distrito electoral del Estado de Guanajuato: Lorenzo Elízaga, secretario.–

Por el 5° distrito electoral del Estado de Zacatecas: Jenaro García, Diputado Secretario.–

Por el 10° distrito electoral del Estado de México: Antonio de la Peña y Reyes, Diputado Secretario.–

Por el 17° distrito electoral del Estado de Puebla: Guillermo Pous, Diputado Secretario.–

Por el 8° distrito electoral de Estado de Guanajuato: Francisco Fernández Castelló, Diputado Prosecretario.–

Por el 10° distrito electoral del Estado de Puebla: Rafael L. Hernández, Diputado Prosecretario.–

Enrique Torres Torrija, Diputado por el 4° distrito electoral de Chiapas, Prosecretario.–

Por el 1er. distrito electoral del Estado de Sinaloa: Manuel R. Uruchurtu, Prosecretario.–

Adolfo Castañares, por el Estado de Tabasco, Senador Secretario.–

Tomás Reyes Retana, Senador por el Estado de San Luis Potosí, Secretario.–

J. F. Uriarte, Senador por el Estado de Tlaxcala, Secretario.–

Carlos Sodi, Senador por el Estado de Michoacán, Prosecretario.–

Francisco Albízteguí, Senador por el Estado de Guanajuato, Prosecretario.–

Alonso Mariscal, Senador por el Estado de Zacatecas, Prosecretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 12 de noviembre de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución. México, 12 de noviembre de 1908.– Corral.– Al...

Diciembre 14 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el veintidós de octubre de mil novecientos ocho, entre la dirección general de Obras públicas y la compañía denominada Rastro de la Ciudad de México, S. A., por el cual se reforman los contratos de catorce de noviembre de mil novecientos tres y cuatro de septiembre de mil novecientos siete, sobre construcción y explotación del rastro y del mercado de carnes de esta capital.

SECCIÓN 2ª.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

El Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el contrato celebrado el veintidós de octubre de mil novecientos ocho, entre la dirección general de Obras públicas y la compañía denominada Rastro de la Ciudad de México, S. A., por el cual se reforman los contratos de catorce de noviembre de mil novecientos tres y cuatro de septiembre de mil novecientos siete, sobre construcción y explotación del rastro y del mercado de carnes de esta capital.

J. R. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Lorenzo Elízaga, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a 14 de diciembre de 1908.– Porfirio Días.- Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.

Lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y constitución. México, 14 de diciembre de 1908.– Corral.- Al…

El contrato a que se refiere el anterior decreto, es el siguiente:

CONTRATO que celebran la dirección general de Obras públicas del Distrito Federal y la compañía denominada Rastro de la Ciudad de México, S. A., cesionaria de La Internacional, S. A., y actual propietaria de las concesiones relativas a la administración y explotación del rastro de esta capital.

Cláusula primera. La compañía Rastro de la Ciudad de México, S. A., adquirirá a título de compraventa:

I. La manzana de la Colonia del Rastro en que está construido el Rastro de la Ciudad de México, conocido también con el nombre de Nuevo Rastro de Peralvillo, frente a la plaza de la dicha Colonia, con los edificios que pertenecen a la nación, con sus entradas, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas;

II. Las manzanas de la misma Colonia números treinta y seis y treinta y tres a que se refieren las cláusulas primera y tercera del contrato celebrado entre la dirección general de Obras públicas del Distrito Federal y La Internacional, S. A., aprobado por decreto del Congreso de la Unión promulgado el 17 de diciembre de 1903.

Cláusula segunda. Las propiedades vendidas se transmitirán a la compañía compradora libres de toda hipoteca, censo y gravamen.

Cláusula tercera. El precio convenido es el de $228,500 doscientos veintiocho mil quinientos pesos que la compañía compradora pagará en efectivo en el acto de firmarse la correspondiente escritura de venta.

Cláusula cuarta. Supuesto el contrato contenido en las cláusulas precedentes se conviene en modificar, en los términos que en seguida se expresan, los contratos de 14 de noviembre de 1903 y de 4 de septiembre de 1907, aprobados respectivamente por decretos del Congreso de la Unión 17 de diciembre de 1903 y de 9 de diciembre de 1907.

Cláusula quinta. La compañía Rastro

de la Ciudad de México, S. A., queda liberada de la obligación de entregar al gobierno el 31 de diciembre de 1826 el Rastro con todos sus departamentos y accesorios.

Cláusula sexta. El Rastro continuará teniendo el carácter de único rastro público de la municipalidad de México hasta el 31 de diciembre de 1926, y durante ese tiempo la compañía continuará prestando todos los servicios estipulados en los citados contratos de 14 de noviembre 1903 y de 4 de septiembre de 1907, y percibiendo, como remuneración, las cuotas en los mismos contratos establecidas. En consecuencia, la compañía hará por su cuenta y con la debida oportunidad, todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias, a juicio de la dirección general de Obras públicas, para mantener el Rastro en las debidas condiciones de comodidad e higiene y no podrá ejecutar obra alguna que modifique o altere las actuales condiciones de los edificios y de su distribución, sin la aprobación previa de la Dirección general.

Cláusula séptima. Si la compañía llegare a establecer dentro del perímetro del Rastro alguna casa empacadora, ésta se dispondrá de manera que sus operaciones no entorpezcan el servicio de la matanza para el público, y a este efecto los planos relativos se someterán a la aprobación de la dirección general de Obras públicas.

Cláusula octava. Dentro del término de un año contado desde hoy, la compañía podrá comunicar a la dirección general de Obras públicas su resolución de construir el mercado de carnes a que se refiere el contrato de 4 de septiembre de 1907, debiendo, en tal caso, comenzar y concluir esa construcción dentro de los términos que fija la cláusula tercera de dicho contrato.

Si la compañía no diere, dentro del plazo fijado, el aviso a que se refiere el párrafo anterior, la dirección general de Obras públicas, dentro del término de un año contado desde que haya expirado el concedido a la compañía, decidirá si ésta ha de llevar a efecto la construcción del mercado o si dicha construcción no ha de llevarse a efecto, en razón de no ser de utilidad pública.

Si la Dirección resolviere que se lleve a efecto la construcción, la compañía deberá presentar los planos de la obra dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le hubiere comunicado la resolución, dar principio a la construcción dentro de los tres meses de haber sido aprobados dichos planos, y dejar concluido el mercado dentro del año siguiente a la fecha de esa aprobación. La cantidad que la compañía tiene obligación de invertir en la construcción del mercado, no será inferior a $100,000.00 cien mil pesos ni excederá de $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos.

Si la Dirección resolviere que no se lleve adelante la construcción del mercado o transcurra, sin que se dicte resolución alguna en el año a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, la compañía pagará desde luego como compensación la cantidad de $ 50,000.00 cincuenta mil pesos y quedará libre de toda obligación de construir el mercado de carnes.

Cláusula novena. La compañía podrá importar libres de derechos, por una sola vez y dentro de los plazos fijados respectivamente para la construcción del mercado de carnes y de la casa empacadora anexa al Rastro, las máquinas, aparatos, útiles y materiales de construcción necesarios para la erección de dichos edificios, para su alumbrado eléctrico y para el servicio de extinción de incendios en ellos.

A este fin la compañía presentará oportunamente a la secretaría de Gobernación, una memoria y listas pormenorizadas triplicadas de los efectos que dentro de esta concesión se pretenda introducir libremente. En dichas listas se especificará claramente el número, cantidad y calidad de los efectos, explicando el uso a que se destinan y el porqué de las cantidades que se piden. Se acompañarán dibujos, diseños y detalles de las maquinarias y aparatos y la secretaría de Gobernación, previo informe de la dirección general de Obras públicas, determinará si dichos efectos, maquinarias y aparatos son apropiados a su objeto y de conformidad con este contrato; y en este caso, fijará las cantidades que la compañía puede importar

libres de derechos. Esta resolución se comunicará a la Secretaría de Hacienda para que, en su oportunidad, transmita las órdenes correspondientes a las aduanas por donde se haga la introducción, entendiéndose que sin la presentación de esas listas y memorias de la secretaría de Gobernación no aprobará ninguna introducción de efectos.

Aun cuando la libre importación de los artículos a que se refiere esta cláusula se concede por una sola vez para realizar la construcción del mercado de carnes y de la casa empacadora, se admitirá que durante la construcción de esos edificios, puedan presentarse listas complementadas de los efectos que hayan de importarse con el fin de que con los requisitos establecidos en este contrato, puedan introducirse libres de derechos.

Cláusula décima. Para la introducción libre de derechos a que se refiere la cláusula anterior, la compañía observará las reglas dictadas o que en lo sucesivo se dicten por la secretaría de Hacienda, entendiéndose que la franquicia de importación de que se trata, solo subsistirá durante el período de construcción de los edificios o de instalación de maquinaria y que las fianzas otorgadas en las aduanas por donde se hagan las importaciones serán canceladas cuando se haya montado la maquinaria y se haya acreditado con certificados de la dirección general de Obras públicas el empleo de los efectos introducidos.

Cláusula décimo primera. Entre los efectos de libre importación se comprenderán además, bajo las condiciones que en seguida se expresan:

I. La hoja de lata, las máquinas, útiles y aparatos necesarios para la fabricación de cajas de hoja de lata y otros envases de la misma materia.

II. Soldadura en barra o en forma de alambre y alambre de hierro y acero.

Aquellos de estos efectos que durante la vigencia de este contrato se destinen a la fabricación de cajas y otros envases de hoja de lata para los productos de la casa empacadora y fábricas anexas, pagarán sus derechos al ser importados; pero la aduana respectiva los recibirá en calidad de depósito para ser devueltos a la compañía concesionaria cuando acredite haber empleado los efectos en la fabricación de dichas cajas y envases de hoja de lata.

La dirección general de Aduanas llevará una lista detallada de los efectos que se importen con arreglo a esta cláusula, para lo cual deberá la compañía presentar a la aduana respectiva, cada vez que haga una importación, un pormenor del peso y nombres comerciales de los artículos que consten declarados en el pedimento de despacho.

La misma compañía llevará una lista igual a la anterior y asumirá la obligación de no disponer de dichos artículos más que para la fabricación de los envases de su propio uso y consumo.

La comprobación del uso de los efectos se hará por medio de los libros de contabilidad, del almacenaje y de fábrica, su documentación o cualquier otro comprobante fehaciente.

La compañía someterá a la secretaría de Gobernación, a medida que necesitare importarlos, la lista de los materiales que destine para la fabricación de envases. Una vez aprobada dicha lista se transmitirá a la Secretaría de Hacienda para los efectos del inciso siguiente.

Al concluirse la fabricación de determinada cantidad de envases, el director general de Obras públicas, certificará el hecho, y de conformidad con dicha certificación, la secretaría de Hacienda ordenará que se devuelvan íntegros los derechos de importación correspondientes a los objetos que se hubieren empleado según la lista a que se refiere el párrafo precedente, en la inteligencia de que esta devolución la hará la aduana por donde se hubiere hecho la importación, según lo indique el certificado del director general de Obras públicas.

En ningún caso ni por ningún motivo estará obligado el gobierno a devolver mayor cantidad de derechos de la que se hubiere

depositado al hacer las importaciones.

La devolución de los derechos que se hubieren pagado por las máquinas, útiles y aparatos necesarios para la fabricación de hoja de lata y envases de hoja de lata, se efectuará mediante el certificado del director general de Obras públicas de haber quedado instalada por la compañía y comenzado a funcionar.

Cláusula décimo segunda. Los efectos importados al amparo de este contrato, no podrán ser vendidos por la compañía sin la autorización previa de la secretaría de Hacienda y la falta de observancia de esta prescripción hará incurrir a la empresa en las penas y responsabilidades que determinan las leyes.

Cláusula decimotercera. El director general de Obras públicas podrá exigir en cualquier tiempo se proceda a la formación del inventario para comprobar que existen en los almacenes de la empresa los efectos importados al amparo de este contrato y que aún no hayan sido utilizados.

El mismo director tendrá la facultad de examinar los libros de contabilidad, los comprobantes y la correspondencia comercial, a efecto de averiguar los hechos que importe conocer al gobierno para la seguridad de los intereses fiscales.

Cláusula decimocuarta. Hasta el 31 de diciembre de 1926 estarán exentos de todo impuesto federal directo, los inmuebles a que se refiere este contrato; la casa empacadora que en ellos se estableciere, así como sus fábricas anexas el capital social de la compañía o compañías que explotaren el Rastro y la dicha casa empacadora y las, utilidades que obtuvieren; pero de la exención se excluirán los impuestos llamados de Ramos Municipales en el Distrito Federal y el de la Renta Federal del Timbre.

Cláusula decimoquinta. Los impuestos que en la tarifa general de rentas e impuestos municipales de la ley de 28 de enero do 1897 están comprendidos bajo el capítulo «Rastros,» no excederán de un centavo y un cuarto el kilogramo para la carne de res, la de cerdo y los productos de estos animales, ni de dos centavos kilogramo para la carne y productos de chivos y carneros: entendiéndose que los tales impuestos se computarán en la forma que expresa dicha ley y se causarán solo por las carnes y productos que se consuman en el Distrito Federal; pero no se causarán cuando fueren exportados o sacados del Distrito Federal, ya sea para el abastecimiento de otros lugares de la república que disten más de 50 kilómetros de la capital, ya para el extranjero, al cual efecto la empresa manifestará a la subdirección de Ramos Municipales del Distrito las carnes y productos destinados para la exportación. Esta deberá efectuarse por ferrocarril precisamente, dentro de los veinte días siguientes a la manifestación, pena de pagarse el impuesto sobre tales efectos, aunque después se exporten, la exportación se comprobará con las cartas de porte que expida el ferrocarril.

Cláusula decimosexta. The British and Mexican Trust Company Limited, cuyo representante, Sr. William Frederic Haynes Smith firma también este contrato, toma a su cargo el pago de los impuestos que puedan haberse causado y estén pendientes de pago, o que se cansaren hasta el 10 de abril de 1913 por la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, por las importaciones e introducciones de los productos beneficiados del ganado bovino, ovino, porcino y caprino que haya hecho o hiriere a esta capital y los cuales impuestos deban ser pagados conforme a la ley general de ingresos de las municipalidades de México y foráneas del Distrito Federal, de 20 de enero de 1897 o las leyes que la modificaren, según lo convenido en la cláusula 15ª de este contrato, quedando entendido que la obligación de pago que aquí contrae The British and Mexican Company Limited, es sin perjuicio de los derechos del gobierno para cobrar a la compañía empacadora o cualquier otra persona directamente obligadas a hacer el pago.

Cláusula decimoséptima. La compañía Rastro de la Ciudad de México, S. A., podrá traspasar este contrato, así como las obligaciones y derechos que subsisten de los contratos que por el presente se reforman.

Ese traspaso podrá hacerse en todo o en parte sin necesidad de previa autorización del gobierno, a la Compañía Empacadora Nacional Mexicana o a The British and Mexican Trust Company Limited pero si se hiciere a alguna otra persona o compañía, se requerirá previa autorización del gobierno. En todo caso el cesionario aceptará todas las obligaciones relativas.

Cláusula decimoctava. Quedarán sin efecto las estipulaciones contenidas en los contratos de 14 de noviembre de 1903, y de 4 de septiembre de 1907, en cuanto se opongan a las del presente, quedando en vigor todas las demás.

Cláusula decimonovena. La compañía Rastro de la Ciudad de México, S. A, o las otras a quienes este contrato llegue a traspasarse serán consideradas como mexicanas en todo lo que se refiera a este mismo contrato y a los otros que con éste estén relacionados, aun cuando todos o algunos de los miembros de dichas compañías sean extranjeros. Estará siempre sujeta la empresa a la jurisdicción de los tribunales de la república en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio.

Nunca se podrá alegar, respecto de los asuntos relacionados con este contrato derecho alguno de extranjería, bajo cualquier forma que sea, y solo se tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la república conceden a los mexicanos, no pudiendo, por consiguiente, tener injerencia alguna en estos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros.

Cláusula vigésima. Este contrato durará hasta el 31 de diciembre de 1926, excepto en las estipulaciones que tengan expresamente señalada otra duración.

Cláusula vigesimoprimera. El presente contrato será sometido a la aprobación del Congreso de la Unión, para que surta sus efectos legales.

Cláusula vigesimosegunda. La escritura pública a que debe reducirse la compraventa a que se refieren las cláusulas 1ª a 3ª, será otorgada por la secretaría de Hacienda o por la oficina subalterna que ella designe, una vez que este contrato haya sido aprobado por el Congreso de la Unión.

En dicha escritura se consignarán la ubicación y linderos de las tres manzanas vendidas, agregándose además un plano firmado por ambas partes.

Cláusula vigesimotercera. Todos los gastos que requiera la legalización de este contrato, incluso el impuesto del Timbre serán a cargo de la compañía contratante.

Subscriben el presente contrato el Sr. John Wasley De Kay, por la compañía Rastro de la Ciudad de México, S. A., en virtud del poder especial que dicha compañía le confirió al efecto en esta capital a 16 del corriente octubre, por ante el notario número 1, Sr. Rafael Pérez Gallardo, y el Sr. William Frederick Haynes Smith, por The British and Mexican Trust Company Limited, en virtud del poder general que esta compañía le confirió en Londres (Inglaterra), a 4 de septiembre último, por ante el notario Sr. John Dalton Ven, protocolizado en 16 del corriente octubre en esta capital, en los registros del notario número 31, Sr. Francisco Diez de Bonilla.

Cláusula vigesimocuarta. El presente contrato va legalizado con estampillas íntegras de diez pesos y de cincuenta centavos por cada foja, que corresponden según el inciso segundo de la fracción treinta y uno de la tarifa de la ley de la renta federal del Timbre y el inciso 4° y párrafo a del mismo inciso de la fracción 29, y estampillas talonarias por valor de $ 50.00, cincuenta pesos que se causan conforme al párrafo b., inciso 1° de la fracción 31, sobre la cantidad de $50,000.00, cincuenta mil pesos, que con carácter de compensación recibirá el gobierno si no se lleva al cabo la construcción del mercado de carnes. De las estampillas talonarias se fija en un ejemplar del contrato la parte principal y en el otro el talón respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 228 de la expresada ley.

El impuesto del Timbre que se cause por virtud de la adquisición que hará la compañía Rastro de la Ciudad de México, S. A., se cubrirá cuando se otorgue la escritura

respectiva en los términos de la cláusula 3ª de este contrato.

México, 22 de octubre do 1908.– Guillermo B. y Puga.– John Wesley De Kay.– William Frederick Haynes Smith.

Es copia. México, 11 de enero de 1909.– El subsecretario, Mig. S. Macedo.

Diciembre 15 de 1908.- Durante el próximo receso de las Cámaras los senadores podrán aceptar las comisiones que el Ejecutivo les confiare en la Administración Pública.

Un sello que dice: Secretaría de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.– Sección tercera.– Número 36.

El Senado en sesión de ayer tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:

Durante el próximo receso de las Cámaras los senadores podrán aceptar las comisiones que el Ejecutivo les confiare en la Administración Pública.

Tenemos la honra de transcribirlo a usted para conocimiento del señor presidente de la república y le reiteramos las seguridades de nuestro particular aprecio.

Libertad y Constitución. México, a 15 de diciembre de 1908.– T. R. Retana, senador secretario.– A. Castañares, senador secretario.– Al secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Diciembre 18 de 1908.- Se aprueba en lo relativo a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado en 21 de noviembre último por la dirección general de Obras públicas del Distrito Federal con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., para el servicio de alumbrado público en la ciudad de Tacubaya, Distrito Federal.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los listados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único.– Se aprueba en lo relativo a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado en 21 de noviembre último por la dirección general de Obras públicas del Distrito Federal con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., para el servicio de alumbrado público en la ciudad de Tacubaya, Distrito Federal.

J. R. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Guillermo Pons, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a 18 de diciembre de 1908.– Porfirio Díaz.– Al ciudadano Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 18 de diciembre de 1908.– Corral.– Al....

El contrato a que se refiere el anterior decreto, es el siguiente.

CONTRATO celebrado entro el Sr. ingeniero Guillermo Beltrán y Puga como director general de Obras públicas del Distrito Federal y el señor R. F. Hayward como gerente de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. (The Mexican Light and Power Company Limited) para ministrar el alumbrado público de Tacubaya, D. F.

Primera. La dirección general de Obras públicas del Distrito Federal y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., (The Mexican Light and Power Company Limited) cesionaria de la Compañía Mexicana de

Electricidad, S, A., convienen en refundir en el presente contrato los diversos convenios celebrados para la ministración del alumbrado público en la ciudad de Tacubaya hasta esta fecha.

Segunda. La compañía tendrá la obligación de conservar durante el plazo del presente contrato, en perfecto estado la instalación de dinamos, calderas, motores y demás maquinaria actualmente existente en Nonoalco, en la ciudad de México, o se proporcionará otra instalación semejante en algún lugar coreano a dicha ciudad a fin de que en el evento de que la instalación hidroeléctrica que posee la compañía en Necaxa, Estado de Puebla, sufra algún desperfecto o interrupción, éste no afecte el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público objeto de este contrato. La capacidad de la instalación de vapor en Nonoalco, u otro lugar, será suficiente para desarrollar toda la energía necesaria para el alumbrado público a que este contrato se refiere y en caso de accidente ocurrido a las obras hidroeléctricas de la compañía, deberá ésta hacer funcionar sin pérdida de tiempo la instalación de vapor prevista como refacción, a fin de seguir ministrando la corriente eléctrica, debiendo ser el servicio de alumbrado público preferente a cualquier otro que no esté relacionado con los servicios públicos.

Tercera. La compañía se obliga a establecer y conservar tanto las líneas transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica como las demás instalaciones que sean necesarias para suministrar el alumbrado público de Tacubaya, debiendo reponer y reparar las lámparas cada vez que ellas no funcionen regularmente.

Cuarta. El alumbrado público objeto de este contrato se hará por medio de lámparas de arco voltaico del tipo abierto de diez y siete amperes de treinta y tres voltios, consumiendo en corriente eléctrica efectiva quinientos sesenta vatios, cuyas lámparas serán del mismo modelo usado en las ya existentes, sin que pueda ser cambiado sin previa aprobación de la Dirección.

Quinta. Las lámparas serán diferenciales de arco con carbones de 0m 270 milímetros de largo y de un diámetro de 16 milímetros para el inferior y de 14 milímetros para el superior por lo menos, cuya duración sea suficiente para que, aun en el caso de duración máxima del alumbrado no se haga necesario refaccionarlo interrumpiendo el servicio; tendrán un reflector para la mejor distribución do la luz hacia abajo, y que resguarde el mecanismo de la lámpara en tiempo de lluvias y su aparato de seguridad de cierra-circuito, y además otro que permita separar cada lámpara sin que se interrumpa el servicio en las demás por un solo instante sin riesgo alguno para el operario, Igualmente estarán provistas de un globo esférico totalmente apagado pero bastante transparente para evitar la pérdida de luz.

Sexta. La luz ha de ser fija y la intensidad de cada lámpara será aproximadamente de mil quinientas bujías electivas bajo el ángulo de intensidad mayor, medidas sin el globo de vidrio.

Séptima. La unidad fotométrica que sirva para apreciar la intensidad luminosa, será la bujía Hefner, adoptada en el Congreso Internacional de Electricistas que tuvo lugar en el mes de agosto del año de mil ochocientos noventa y seis en la ciudad de Ginebra, con las correcciones barométricas de altura correspondientes a la ciudad de México.

Octava. La compañía se obliga a verificar la intensidad luminosa de las lámparas a que este contrato se refiere en el laboratorio fotométrico establecido en México por virtud del contrato de alumbrado eléctrico para esta ciudad. Las verificaciones podrán hacerse por procedimientos fotométricos, o indirectamente, apreciando la intensidad y voltaje de la corriente que alimenta las lámparas. Los resultados serán aceptables con una tolerancia de un quince por ciento.

Novena. El número de lámparas destinado al servicio del alumbrado público de Tacubaya será de doscientas, de las cuales ciento cincuenta y dos están ya instaladas. Las cuarenta y ocho restantes, se instalarán por cuenta de la compañía en los lugares y en

el tiempo que designe la dirección de Obras públicas.

Décima. Las lámparas se instalarán por regla general en circuitos de treinta y cuarenta cada uno a no ser que en casos especiales la dirección autorice la instalación de mayor o menor número en cualquier circuito, en el concepto de que la distancia de las lámparas entre si no será mayor de doscientos metros.

Décima primera. El cable de fierro que sostenga la lámpara en medio de la calle irá apoyado en las paredes de las casas por medio de ganchos; pero en caso de que esto no pueda verificarse, los conductores y lámparas que nuevamente establecerá la compañía irán sostenidos en postes de fierro según lo apruebe la dirección, o con soportes metálicos de forma y dimensiones apropiadas para que no obstruyan el paso por las calles ni sea fácil el acceso a los conductores, debiendo tener cierta uniformidad en su figura, dimensiones y color, lo cual se observará para todos los postes o soportes que instale la compañía y los que sostengan las lámparas, siempre estarán provistos de los accesorios necesarios para subir y bajar las lámparas para su limpieza y provisión de carbones.

Décima segunda. La instalación de los alambres distribuidores y conductores será aérea.

Decimotercera. La corriente que empleará la compañía será de tres fases, sin exceder de tres mil trescientos voltios, cuidando de adoptar respecto de la cubierta aisladora de los conductores y del aislamiento de los postes, las medidas que sean necesarias para la seguridad del público, atendiendo a la tensión que se emplee.

Los accidentes que puedan sobrevenir por la falta de esta prevención serán de la exclusiva responsabilidad de la compañía, y la dirección podrá dictar las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad.

Decimocuarta. El mínimo de duración del alumbrado que se contrata será de tres mil horas anuales distribuidas conforme al horario que dará la dirección; pero la compañía queda obligada a aumentar el número de horas correspondientes a años fiscales siempre que la dirección le dé aviso en el mes de marzo anterior al año fiscal en el cual debe hacerse el aumento.

Décima quinta. Cuando la dirección necesite algún servicio extraordinario del alumbrado podrá pedirlo con la anticipación conveniente a la compañía, y ésta debe proporcionarlo mediante las condiciones que al efecto se estipulen si se trata de un aumento de número de foco, pero cuando el número de éstos que pida la dirección no pueda ser proporcionado por la compañía, estará ésta obligada solamente a arreglar los circuitos e instalar algunos focos de los que pertenezcan a la ciudad, en el lugar que se le designe; siempre que sea por donde pasen los conductores, pagando la dirección sólo los gastos que origine este cambio temporal.

Decimosexta. La dirección se compromete a pagar a la compañía por el alumbrado objeto de este contrato, la suma de nueve centavos por cada lámpara por hora.

Decimoséptima. El precio del alumbrado se pagará por meses vencidos dentro de los primeros diez días del mes siguiente haciéndose la liquidación por las horas que consten en los registros de la dirección, deduciéndose la suma que importen las multas en que haya incurrido la compañía conforme a este contrato.

Decimoctava. Las cuentas relativas a las horas de servicio de alumbrado, a las multas y a las cantidades que unas y otras importan, las llevará el inspector de la dirección y con el «Conforme» de este, el «V° B°» del Ingeniero de la municipalidad y del Prefecto Político y el «Páguese» del Director general de Obras públicas, serán cubiertas por la Tesorería general de la Federación.

Si hubiere diferencia entre la compañía y la Prefectura al computarse estas cantidades será resuelta por el señor Director general de Obras públicas.

Décima novena. Se autoriza a la compañía para instalar libre de gastos por la misma Dirección y por el término del presente contrato los aparatos que fueren

necesarios para conectar o desconectar por separado los circuitos de corriente eléctrica en la pieza de la biblioteca Romero Rubio situada en la calle de Juárez y que actualmente ocupa para el mismo fin sin que la compañía tenga derechos de propiedad sobre la pieza referida.

Vigésima. Igualmente se permitirá a la compañía ejecutar en las calles y plazas públicas, previo el permiso respectivo, las obras necesarias para el objeto de este contrato, así como para colocar los postes y kioscos destinados a transformadores y corta-circuitos en los lugares que la compañía estime conveniente, de acuerdo con los reglamentos y disposiciones que estuvieren en vigor a efecto de no entorpecer el tráfico y sujetándose para ello a las disposiciones de la Dirección.

Vigésima primera. La compañía puede colocar en los postes a que se refiere este contrato, alambres especiales para el servicio de alumbrado particular y fuerza motriz.

Vigésima segunda. La dirección podrá nombrar un inspector que examinará en cualquier tiempo el estado de las instalaciones a que se refiere este contrato y será obligación de la compañía facilitar los elementos necesarios para que se haga la inspección, así como ministrar al Inspector todos los datos que pidiere relativos al alumbrado público objeto de este contrato, pudiendo hacer esas mismas labores el Ingeniero de Obras públicas de la municipalidad de Tacubaya.

Vigesimotercera. Si la Dirección creyere necesario, para facilitar la inspección del alumbrado, colocar en los circuitos algunos aparatos automáticos que permitan rectificar los datos proporcionados por los empleados de la compañía, ésta está obligada a colocarlos conforme a las indicaciones de la Dirección.

Vigésima cuarta. La Dirección, a solicitud de la compañía podrá autorizar cualquier cambio en la clase, modelo y tipo de cualquiera de las instalaciones de cables, líneas, postes, alambres, lámparas y carbones en uso, siempre que con dichos cambios mejore el servicio del alumbrado público en la ciudad.

Vigésima quinta. La duración del presente contrato será hasta el día veinte de noviembre de mil novecientos veintitrés.

Vigésima sexta. Cualquier retardo en las horas de encender indicado por el horario que dará la Dirección o cualquier interrupción en alguno o todos los focos, será motivo para que la compañía incurra en la pena de mulla conforme a las siguientes condiciones:

I. Por retardo en las horas de encender siempre que sea más de diez minutos y menos de quince, se descontará el importe que según el precio estipulado en este contrato corresponda al tiempo que dure la falta de alumbrado adicionando las sumas que resulten con un diez por ciento de su valor.

II. Por una interrupción total o parcial superior a quince e inferior a veinticinco minutos se hará el mismo cómputo respecto al precio que corresponda al tiempo que dure la falta pero el aumento será del quince por ciento sobre la suma que resulte.

III. Si el retardo o la interrupción pasan de los límites indicados en los incisos anteriores además del valor del alumbrado la multa será del veinte por ciento de dicho valor dentro de las dos primeras horas en que se produzca la falta y si pasare de este tiempo la multa crecerá a razón del diez por ciento por cada hora sobre las correspondientes a las dos primeras horas.

Vigésima séptima. La falta de intensidad luminosa será penada con multas que se calcularán de manera que además de descontarse el importe de la falta de luz, se descuente también un tanto por ciento sobre el importe total de las luces defectuosas de la manera siguiente:

I. Por una falta de intensidad que esté comprendida entre el 10 y el 20 por ciento de la intensidad convenida descontando la tolerancia a que se refiere la cláusula octava, cinco por ciento del importe total de las lámparas defectuosas durante el tiempo del

defecto.

II. Por una falla de intensidad comprendida entre el veinte y cincuenta por ciento, el descuento correspondiente a la falta de luz y un recargo del quince por ciento computado como antes se dijo.

Pasando la diminución de la luz del cincuenta por ciento o repitiéndose las faltas al grado de que las multas lleguen durante un mes al diez por ciento del costo total del alumbrado y esto en dos meses consecutivos, la secretaría de Gobernación tendrá el derecho de declarar administrativamente la caducidad del contrato.

Vigesimoctava. Las multas de que hablan las cláusulas vigésima sexta y vigésima séptima no serán aplicables cuando la falta provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado.

Vigésima novena. Este contrato caducará:

I. Por no conservar la compañía en buen estado la instalación de vapor de que trata la cláusula segunda. Si dicha instalación se destruyere o se deteriorase por casos fortuitos o de fuerza mayor, la compañía deberá reponerlo en el menor tiempo posible que se fijará por la Dirección general de Obras públicas según las circunstancias y si no lo hiciere así podrá declararse la caducidad.

II. Porque la compañía traspase este contrato sin el consentimiento de la Secretaría de Gobernación.

La caducidad será declarada administrativamente por la secretaría de Gobernación previa audiencia de la compañía a la que se concederá cuando menos un término de treinta días para que disponga y compruebe sus descargos.

Trigésima. Para todos los efectos de este contrato la compañía se tendrá y reputará como mexicana y por lo mismo queda sujeta en todo a las leyes de la república sin poder invocar derechos de extranjería.

Trigésima primera. Toda cuestión que se suscite con motivo de la inteligencia y ejecución del presente contrato será resuelta por los tribunales competentes de la Federación, En cuanto a las cuestiones de carácter puramente técnico o científico que puedan ocurrir, se resolverán precisamente por el único y exclusivo medio de dos peritos nombrados uno por cada parte contratante y en caso de no estar de acuerdo los dos peritos se nombrará un tercero por la secretaría de Gobernación.

Cuando requerida una de las partes por la otra para nombrar su perito no lo hiciere en el término de ocho días, será nombrado por un juez de Distrito de la ciudad de México, a pedimento del que promueva y previo requerimiento a la otra parle. En el mismo orden se procederá si la secretaría de Gobernación no hace el nombramiento del tercero. En caso de necesitarse recurrir al juicio de los peritos, la Dirección y la compañía fijarán claramente a estos cuáles son los puntos que deben decidir. Las resoluciones conformes de los peritos o la del tercero en su caso, son inapelables y contra ellas no se admitirá recurso de ninguna ciase.

Trigésima segunda. Si durante la vigencia de este contrato se redujeren las cuotas que por contribución de postes fija la ley de 20 de enero de 1897, la compañía se obliga a disminuir proporcionalmente el precio del alumbrado, de manera de que en el caso de que los postes para transmisiones eléctricas queden exceptuados de tal impuesto, dicho precio será de ocho centavos por hora y por lámpara.

Trigésima tercera. Todo el material instalado en la ciudad de Tacubaya y que se emplearé en la misma para el alumbrado materia de este contrato, quedará afecto como garantía del cumplimiento del mismo, debiendo conservar la compañía dicho material en buen estado por todo el tiempo que dure este convenio.

Trigésima cuarta. El presente contrato surtirá sus efectos desde el 21 del presente mes de noviembre hasta el 30 de junio de 1909 y si fuere aprobado por el Congreso de la Unión, durará el resto del tiempo estipulado en la cláusula vigesimoquinta.

Trigésima quinta. El presente contrato está escrito por duplicado y lleva estampillas talonarias expensadas por la compañía por valor de $205.20 conforme a la fracción 31 del artículo 14 y los artículos 128 y 219 de la Ley del Timbre vigente, fijándose la matriz de las estampillas en el principal y los talones en el duplicado.

México, noviembre 21 de 1908.– Guillermo B. Puga.– R.F. Hayward.

Diciembre 19 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado en doce de agosto último por la dirección general de Obras públicas con los señores Veyán, Jean y compañía, para utilizar dentro de los límites del distrito federal, con excepción de las municipalidades de Tacuba, Tacubaya y Guadalupe Hidalgo la energía eléctrica obtenida en las caídas de agua del rio dé la alameda, estado de México, en virtud de la concesión que para el aprovechamiento de esas aguas, les otorgó la Secretaría de Fomento.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único.– Se aprueba el contrato celebrado en doce de agosto último por la dirección general de Obras públicas con los señores Veyán, Jean y compañía, para utilizar dentro de los límites del distrito federal, con excepción de las municipalidades de Tacuba, Tacubaya y Guadalupe Hidalgo la energía eléctrica obtenida en las caídas de agua del rio dé la alameda, estado de México, en virtud de la concesión que para el aprovechamiento de esas aguas, les otorgó la Secretaría de Fomento.

J. R. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Guillermo Pous, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a 19 de diciembre de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.

Lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 19 de diciembre de 1908.– Corral.– Al…

El contrato a que se refiere el anterior decreto es el siguiente:

CONTRATO celebrado entre el ingeniero Guillermo Beltrán y Puga. Director General de Obras Públicas del Distrito Federal y los señores Veyán, Jean y compañía, Sucesores de Dunnadicu, Veyán y Compañía, para que aquellos señores o la compañía que organicen, puedan utilizar y explotar dentro de los límites del Distrito Federal, con excepción de las municipalidades de Tacubaya, Tacuba y Guadalupe Hidalgo, la energía eléctrica que obtengan de las caídas del rio de la Alameda. Estado de México, en virtud de la concesión que para aprovechar esas aguas les tiene hecha la secretaría de Fomento.

Cláusula primera. La dirección general de Obras públicas autoriza a los señores Veyán, Jean y compañía, S. en C., para que dentro de los límites del distrito federal, con excepción de las municipalidades de Tacubaya, Tacuba y Guadalupe Hidalgo, exploten la energía eléctrica que desarrollen con las caídas de agua del rio de la Alameda, en el Estado de México, según los contratos que con tal fin tienen celebrados con la secretaría de Fomento, y al efecto los concesionarios, como se les llamará en lo de adelante, podrán establecer dentro del distrito federal las estaciones de transformadores y las líneas de transmisión, distribución y ministración de energía para alumbrado, fuerza motriz, calefacción o cualquiera otro uso industrial, en la forma y bajo las obligaciones que se estipulan en el presente contrato.

CAPÍTULO I.

Estaciones receptoras y transformadoras.

Cláusula segunda. Las estaciones receptoras y transformadoras de energía eléctrica que establezcan los concesionarios estarán sujetas a las restricciones siguientes:

A que respecto a la ciudad de México, dichas estaciones quedarán fuera del perímetro que se señala en el plano adjunto, a saber:

Partiendo del punto en que la calzada de la Verónica encuentra el río de los Morales, se sigue hacia el oeste por todo el curso del río de este nombre hasta encontrar la línea divisoria entre las municipalidades de México y Tacubaya, la cual línea se sigue hacia el sur hasta encontrar el camino de Madereros; sigue por este camino hasta su intersección con la calzada de Tacubaya y después por esta calzada al suroeste hasta la hacienda de la Condesa; de este punto sigue al este y después al sur la línea divisoria ya indicada, hasta encontrar el rio de la Piedad; de este punto signe al este recorriendo dicho río hasta encontrar la calzada de la Piedad; de este punto sigue al norte por la propia calzada hasta la prolongación de la Avenida 50; sigue por toda esta Avenida hasta la calzada de San Antonio Abad; de este punto sigue por la calzada del Chabacano y su prolongación hasta la calzada de la Coyuya; de este punto vuelve al norte y sigue toda la calzada de la Coyuya hasta el lindero Sur de los terrenos del Ferrocarril interoceánico; allí se inclina hacia el sureste hasta encontrar la calzada del Peñón, dirigiéndose después hacia el norte, como a unos doscientos cincuenta metros atrás de la Penitenciaría, hasta un punto situado en una línea que sería prolongación de la calle de Ignacio Hernández; sigue al oeste por la expresada prolongación hasta encontrar el Ferrocarril de Cintura; continúa hacia el norte hasta el canal del mismo nombre, el cual recorre hacia el este como en unos mil cien metros; prosigue hacia el norte pasando por la calle de la espalda del Rastro Nuevo hasta el río del Consulado; sigue por éste hacia el noroeste hasta el límite de la Colonia del Nuevo Rastro, en una extensión aproximada de trescientos metros; continúa por el límite de esta Colonia en dirección hacia el suroeste en una extensión como de mil doscientos treinta metros, dirigiéndose hacia el norte hasta encontrar de nuevo el rio del Consulado, siguiendo hacia el este por dicho rio hasta encontrar el ferrocarril Mexicano; de esto punto sigue al sur hasta la ex-garita de Peralvillo; de este punto sigue al oeste por la prolongación del canal del norte, siguiendo hacia el sur de este mismo canal hasta encontrar la calzada de Nonoalco y continúa por ésta hasta el Puente de los Gallos; en seguida se desvía hacia el sur recorriendo esta calzada; continua por la calzada de la Verónica hasta el punto donde ésta encuentra el rio de los Morales, punto de partida.

B. Que respecto a las demás poblaciones del Distrito quedarán fuera de los perímetros que para cada población fije la dirección general de Obras públicas, de acuerdo con los concesionarios y teniendo en cuenta la densidad e importancia de las poblaciones respectivas.

Las dos aceras de las calles y los dos acotamientos de las calzadas que se mencionan en este artículo, quedan comprendidos dentro de la zona.

Cláusula tercera. Se permite a los concesionarios que la transmisión de las plantas de energía en el río de la Alameda a las estaciones receptoras y transformadoras se haga con potencial de 60,000 voltios.

Cláusula cuarta. En el caso de que con autorización de la dirección general de Obras públicas se establezcan estaciones receptoras y transformadoras en puntos poblados de las poblaciones del Distrito Federal, los concesionarios se obligan a que las líneas aéreas de llegada se colocarán en zonas cerradas inaccesibles para el público, de 30 metros de ancho por lo menos, debiendo estar las estaciones distantes de las construcciones más próximas, cuando menos veinte metros, excepto cuando los concesionarios tropezaren con dificultad sería para la adquisición del área necesaria, en cuyos casos se podrá reducir dicha distancia, previa autorización de la Dirección general

de Obras públicas.

Cláusula quinta. Los concesionarios quedan autorizados para usar dentro de los límites del Distrito Federal un potencial que no exceda de 6,600 voltios para la distribución y transmisión de energía eléctrica desde las estaciones transformadoras hasta los puntos de consumo; y sólo podrán usar de un potencial o voltaje superior al antes mencionado previa autorización especial de la Dirección general de Obras públicas y con las condiciones que al efecto les imponga ésta.

CAPÍTULO II.

Instalaciones aéreas.

Cláusula sexta. Los concesionarios podrán establecer y conservar conductores aéreos en todas las calles de la ciudad de México que están fuera del perímetro que con tinta azul se señala en el plano adjunto, así como en las demás poblaciones de las Municipalidades comprendidas en este contrato.

El perímetro para la ciudad de México es el siguiente:

Partiendo del crucero de las calles novena de la Luna y décima de Aldama, antes décima de Nonoalco, sigue hacia el oeste por la novena de la Luna, y primera y siguientes de Carpió hasta la novena inclusive; de este punto sigue hacia el sur por las calles sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera del Cedro, antes calles de Cervantes, primera a séptima de Manuel Contreras inclusive, y continúa con ligera inclinación hacia el suroeste por la calle del Duero, antes calzada sin nombre, frente a la fachada principal de la fábrica de la Teja, hasta encontrar la tercera calle del Nazas, antes Avenida Reforma 5, la cual recorre, hacia el suroeste, y la cuarta de este nombre hasta la calle tercera del Tibor, antes calle Reforma 12 norte, en donde da vuelta hacia el sureste recorriendo las calles tercera, cuarta y quinta del Tiber; rodeando por la parte suroeste la glorieta de la Independencia en el Paseo de la Reforma; y sigue por las calles primera, segunda, tercera y cuarta de Florencia, antes calle reforma 12 sur; cruza la Avenida Chapultepec hasta encontrar la primera calle de Monterrey, antes calle Reforma 12 sur; continúa por esta y por la segunda, tercera y cuadra del mismo nombre hasta las de Colima, antes Avenida Reforma 15, por donde da vuelta en dirección hacia el noreste recorriendo las calles de la octava a la primera de Colima; da vuelta hacia el norte por la calzada de la Piedad hasta encontrar la Avenida Chapultepec, la cual sigue hacia el noreste hasta encontrar las calles de los Arcos de Belem; continúa por estas calles, Sallo del Agua, Don Toribio, calle Verde, calle de San Miguel, Garrapata hasta al Cacahualal; da vuelta hacia el norte por el Puente de San Pablo, sigue por esta calle hacia el oriente hasta la primera calle de Cuevas, por donde da vuelta al norte, siguiendo por esta calle, la Quemada, Ciegos y siguientes hasta la plazuela de San Sebastián; da vuelta hacia el oeste hasta el callejón de Cantarilos; sigue por éste hasta la calle de Ignacio Hernández; da vuelta al oeste hasta las calles de la Florida; sigue por éstas hasta la prolongación de Granadilas; da vuelta al oeste por esta prolongación, la calle de Granaditas, y la cuarta, tercera, segunda y primera Avenida Allende inclusive; da vuelta hacia el norte por las calles tercera, cuarta y quinta y parte de la sexta de Santa María la Redonda hasta la primera de la Camelia; da vuelta por esta calle y sigue al oeste por ella y la segunda, tercera, cuarta, etc., hasta la novena de la Camelia; da vuelta al norte por la novena y décima de Aldama, hasta encontrar la novena calle de la Luna en el punto de partida.

Cláusula séptima. No obstante lo estipulado en la cláusula anterior, los concesionarios quedan obligados a retirar sus postes y líneas aéreas en todas o cualesquiera de las calles en que el gobierno obligue a las demás compañías o individuos que exploten la energía eléctrica a establecer conductores subterráneos; comprometiéndose los Sres. Verán Jean y Compañía a que dentro del plazo prudente que se les fije en tal caso por la dirección general de Obras públicas, llevarán a cabo la remoción de sus líneas aéreas y la ejecución de las obras que sean necesarias para la conversión de sus sistemas de distribución de energía.

Cláusula octava. Si, a juicio de la Secretaría de Gobernación, la práctica demostrare que el empleo del voltaje de 6,600 voltios en las líneas aéreas, dentro de los límites de las poblaciones del distrito federal, causa perjuicio al público, se ordenará a los Sres. Veyán, Jean y compañía que reduzcan el voltaje en las calles que se les designen, hasta donde sea necesario, a juicio de peritos, para que el público no sufra perjuicio ni esté expuesto apeligro alguno. Si llegare este caso, antes de dictar resolución alguna, la secretaría de Gobernación oirá a los Sres. Veyán, Jean y compañía para ver si logra un acuerdo, y si éste no fuere posible, se someterá el caso a juicio de tres peritos nombrados, uno por la dirección general de Obras públicas, otro por los concesionarios y el otro por el director de la Escuela Nacional de Ingenieros. Estos peritos resolverán respecto del voltaje que deberá usarse y del plazo en que se ha de hacer la reducción de él, y sus resoluciones se ejecutarán sin recurso alguno. Si los Sres. Veyán, Jean y compañía prefieren conservar un voltaje superior al señalado por los peritos sin exceder de 6,600 voltios lo podrán hacer convirtiendo la instalación aérea en subterránea.

Cláusula novena. Las instalaciones aéreas se establecerán conforme, a los planos respectivos que los concesionarios someterán a la dirección general de Obras públicas, para cada calle o línea de calles que vayan a hacer, pudiendo esta oficina modificarlos; pero si no lo hace en el término de un mes se tendrán por aprobados los planos y los Sres. Veyán, Jean y compañía podrán ejecutar sus trabajos de conformidad con ellos.

Dichos trabajos se ejecutarán previas las licencias respectivas para cada calle o línea recta de calles, que otorgará la dirección general de Obras públicas, de acuerdo con los reglamentos y disposiciones que estuvieren en vigor a efecto de no entorpecer el tráfico.

Cláusula décima. Los postes para sostener las líneas aéreas de transmisión serán metálicos y del modelo que sea aprobado por la dirección general de Obras públicas. Los puntos de suspensión de los conductores se encontrarán a una altura sobre el nivel del suelo no menor de nueve metros, excepto en los casos en que la dirección general de Obras públicas no encontrare inconveniente para autorizar una altura menor, que nunca bajará de cinco metros.

Cláusula undécima. Los postes tendrán las dimensiones y condiciones de estabilidad y firmeza bastantes para su objeto, teniendo al efecto dentro de tierra la penetración suficiente.

Cláusula duodécima. La colocación de los postes se subordinará siempre a la línea de las guarniciones de las banquetas, y si esa línea fuere alterada después de la instalación de un poste, los Sres. Veyán, Jean y compañía harán a su costa el cambio oportuno, según aviso y orden de la dirección general de Obras públicas. Su distribución, a lo largo de la línea que sigan, se hará de manera que ningún poste quede frente a las puertas de los edificios.

Cláusula décima tercera. Si los concesionarios tuviesen que instalar sus líneas aéreas en calles que tengan ocupadas ambas banquetas con postes ya instalados, pertenecientes a otras compañías o a servicios públicos, establecerán a su costa en una de las banquetas sus nuevos postes, y éstos serán del tamaño y resistencia necesarios para soportar sus propias líneas y para que puedan trasladarse a ellos las líneas de las otras empresas o servicios públicos existentes en las mismas banquetas, cuando el gobierno lo determine. Las obras de translación de las instalaciones y remoción de los postes, serán a costa de la compañía, con quien se celebra el presente contrato.

Cláusula décima cuarta. En ningún caso los conductores aéreos se establecerán a distancia menor de un metro respecto de los de las otras empresas o servicios;

Cláusula décima quinta. Deberá evitarse todo contacto entre conductores que se crucen, procurándose que el conductor de la luz eléctrica pase preferentemente por encima de los otros; y si no fuere posible

colocarlo en esta forma se colocarán dos hilos de protección paralelos, a una altura cuando menos de un metro y a setenta y cinco centímetros de uno y otro lado del hilo protegido, siendo el costo de estas líneas protectoras, por cuenta de la empresa que coloque sus líneas con posterioridad.

Cláusula décima sexta. Los conductores que penetren en el interior de los edificios, estarán debidamente aislados y colocados de manera que las personas no puedan tener contacto casual con ellos.

Cláusula décima séptima. En las calles de la ciudad de México y de las demás poblaciones del Distrito Federal las distancias entre dos puntos de suspensión nunca serán mayores de cien metros en el mismo circuito, y los postes, por regla general, se colocarán a una distancia no menor de treinta y cinco metros y en los lugares que apruebe la dirección general de Obras públicas.

Cláusula décima octava. Cuando en la calle donde vayan a establecerse postes no existan banquetas o sean muy angostas, de modo que los alambres quedasen a tal distancia de los edificios que pudieren ser alcanzados con la mano desde las azoteas, balcones o ventanas, los concesionarios deben ocurrirá la dirección general de Obras públicas para que determine lo conveniente.

Cláusula decimonovena. Con sujeción a los reglamentos que se expidan y a los artículos que preceden, los Sres. Veyán Jean y compañía quedan autorizados para cruzar con alambres las calles de las poblaciones del Distrito Federal, en donde no puedan establecerse postes, siempre que obtengan el permiso de los propietarios de las fincas respectivas, para hacer pasar dichos alambres por las azoteas o para apoyarlos en los muros de las fachadas.

CAPÍTULO III.

Instalaciones subterráneas.

Cláusula vigésima. Los concesionarios podrán instalar y conservar conductores subterráneos en todas o en cualesquiera de las calles de la ciudad de México y de las otras poblaciones del Distrito Federal, previo el permiso de la dirección general de Obras públicas, y siempre que no haya inconveniente por virtud de derechos adquiridos con anterioridad por otras empresas o compañías.

Cláusula vigésima primera. Los cables que se empleen en la instalación subterránea serán blindados y colocados directamente dentro de tierra o estarán cubiertos con plomo u otro material protector, y colocados en conductos completos de barro u otro material adecuado, prohibiéndose en las líneas de alto voltaje el sistema de conductos sólidos; esto es, el de medias canales llenas de plomo o de cualquiera otra substancia que se solidifique. En todo caso, los cables serán aprobados de antemano por la dirección general de Obras públicas; y para ese efecto, los concesionarios le presentarán muestras de dichos cables, acompañadas del certificado de la fábrica de donde procedan, en que conste que han resistido satisfactoriamente un potencial del doble, por lo menos, del que deben soportar en el servicio normal, expresando también la resistencia de su capa aisladora.

Cláusula vigésima segunda. Los trabajos para las instalaciones subterráneas en las calles, se ejecutarán conforme al plano que apruebe la dirección general de Obras públicas, de acuerdo con la cláusula vigésima-cuarta y de la siguiente manera:

Cada semestre, los concesionarios recabarán de la dirección general de Obras públicas y ésta les proporcionara una noticia escrita de las calles en que deban ejecutarse las instalaciones subterráneas durante el semestre siguiente, fijándoles un plazo prudente para cada calle. La dirección podrá determinar que los plazos sean comunes para las demás empresas, si las hubiere, que hayan de hacer instalaciones subterráneas, a fin de que todos trabajen simultáneamente en las mismas calles.

Si pasado el plazo que para el objeto se les señalare, los concesionarios no ejecutaren las obras correspondientes en algunas de las calles designadas, no podrán ya hacer en ellas las obras de instalación, si no es con

un nuevo permiso de la dirección general de Obras públicas.

Si abierta una calle para hacer en ella una instalación subterránea no se terminase ésta en el plazo que se hubiere designado, los concesionarios sufrirán una multa de cincuenta pesos diarios por el tiempo que exceda del que se les concedió.

Cláusula vigésima tercera. Cuando se vaya a pavimentar una callo donde deban establecerse líneas, la dirección general de Obras públicas dará aviso por escrito a los concesionarios para que éstos puedan colocar sus instalaciones subterráneas dentro del plazo prudente que les señale, antes de que se construyan los nuevos pavimentos.

Cláusula vigésima cuarta. Las instalaciones subterráneas se harán conforme al plano respectivo que los concesionarios someterán a la Dirección, la que podrá modificarlo; pero si no lo hace en el plazo de un mes, se tendrá por aprobado el plano y la compañía concesionaria podrá ejecutar sus trabajos de conformidad con él. Dichos trabajos se ejecutarán previas las licencias respectivas que otorgará la Dirección de acuerdo con los reglamentos y acuerdos que estuvieren en vigor, a efecto de no entorpecer el tráfico. Los planos que debe someter la compañía para obtener las licencias de que se habla antes, comprenderán: las banquetas, los postes, coladeras, tomas de agua, etc., que existen en las calles, y estarán acompañados de una o más secciones transversales de la propia calle, señalándose en ella la atarjea, tubos para el agua y demás instalaciones subterráneas que hubiere. La dirección general de Obras públicas se obliga por su parte a suministrar los datos relativos a las atarjeas y tubos de agua, que fueren necesarios para formar dichas secciones transversales.

La presentación de dichos planos y secciones no será necesaria para las conexiones de las instalaciones de casas o edificios.

Cláusula vigésima quinta. La dirección cuidará de que la colocación de los cables sea tal, que se evite la acción electrolítica sobre las cañerías del agua y del saneamiento, siendo a costa de la compañía concesionaría las obras que a ese efecto hayan de efectuarse.

Cláusula vigésima sexta. Las cepas o excavaciones que se practiquen para la instalación de conductos subterráneos, no quedarán abiertas sino el tiempo necesario para la ejecución de los trabajos; en la inteligencia de que el pavimento de la calle o banqueta, en su caso, serán repuestos por la dirección general de Obras públicas o por la empresa que ésta designe, a costa de la compañía concesionaria, quien pagará la proporción que le corresponda, o en su caso, el costo total. Igualmente serán por cuenta de ésta todas las obras o reparaciones que se hagan con motivo de sus instalaciones. La compañía pagará el importe de las obras de reposición de pavimentos a la persona o empresa que las hubiere ejecutado por orden de la dirección general de Obras públicas, para lo cual bastará que la persona o empresa que haya hecho la reposición presente a la compañía sus cuentas autorizadas por la Dirección.

Cláusula vigésima séptima. La compañía concesionaria tomará todas las precauciones necesarias a fin de que las uniones de los cables principales y secundarios estén debidamente hechas, de tal manera, que impidan eficazmente el acceso de la humedad a tales uniones.

Clausula vigésimo octava. Las cajas de distribución, corta-circuitos y registros que se establezcan para uso y conservación de los cables, estarán dispuestos de tal modo que al mismo tiempo que reúnan las condiciones técnicas que demanden, garanticen también la seguridad pública, no sólo respecto al perfecto aislamiento eléctrico, sino también respecto a la resistencia del tráfico que tengan que soportar. Dichas cajas se establecerán al nivel de la superficie del pavimento y estarán dispuestas de modo que puedan abrirse solamente por medio de un instrumento especial. Las mismas cajas deberán estar al abrigo de las invasiones del agua, y sus cubiertas serán de asfalto en las calles pavimentadas con ese material, o de fierro.

Cláusula vigésima novena. Los circuitos que se formen con la red de conductores estarán dispuestos de tal manera que en cualquier momento se puedan separar uno de otro. La dirección general de Obras públicas, cuando lo considere oportuno, podrá exigir que se hagan las pruebas conducentes a éste efecto, proporcionando la compañía concesionaria los elementos necesarios para hacerlas.

Cláusula trigésima. Los cables y conductores subterráneos se establecerán de manera que no interrumpan nunca el servicio de los conductores do agua o de las otras instalaciones.

Cláusula trigésima primera. Llegado el caso de que el gobierno establezca un servicio de duelos subterráneos y determine que en ellos se alojen todos los nuevos conductores que establezcan las diversas compañías o individuos que exploten energía eléctrica, los concesionarios también alojarán sus nuevas líneas en esos ductos, siempre que reúnan las condiciones necesarias y apropiadas para dicho servicio; y pagarán la cuota o impuesto que fije la ley o reglamento que sea igualmente aplicable a las demás compañías o individuos particulares que usen los referidos duelos.

La prevención anterior no comprende las instalaciones subterráneas que los concesionarios tengan ejecutadas antes del establecimiento de ductos.

Cláusula trigésima segunda. Al hacerse las instalaciones subterráneas para otros servicios públicos, la dirección general de Obras, públicas procederá que no se modifiquen las instalaciones de la compañía concesionaria; pero si esto fuera indispensable, dichas modificaciones se ejecutarán por la compañía a su costa, y en el plazo prudente que de común acuerdo se fije.

Cláusula trigésima tercera. La Dirección facilitará el uso del agua de la ciudad, para las obras que los señores Veyán, Jean y compañía ejecuten en las vías públicas de la capital.

CAPÍTULO IV.

Cláusula trigésima cuarta. La compañía concesionaria se obliga, durante el término de veinte años, a vender dentro de los límites del Distrito Federal, en las zonas donde tenga o tuviere en lo sucesivo instalaciones transmisoras, y siempre que los centros de consumo estén a una distancia no mayor de cinco kilómetros de las estaciones receptoras y transformadoras del alto voltaje, a que se refieren las cláusulas segunda y tercera, el caballo de energía eléctrica de 736 vatios segundo ministrado todos los días durante doce horas consecutivas al día, a precios que no excedan de los siguientes;

Para motores de 200 caballos o más: $90 anuales por caballo.

Para motores de menos de 200 caballos, pero no menos de 100: $100 anuales por caballo.

Para motores de menos de 100 caballos, pero no menos de 50: $110 anuales por caballo.

Para motores de menos de 50 caballos, pero no menos de 5: $180 anuales por caballo.

Para motores de menos de 5 caballos, el precio máximo será el mismo que para los servicios de alumbrado y calefacción.

En el caso de que los puntos de consumo ubicados en el Distrito Federal estén a una distancia mayor de cinco kilómetros de las estaciones receptoras y trasformadoras del alto voltaje, los precios antes expresados podrán aumentarse en una cantidad que no exceda de cinco por ciento sobre el costo que tenga las líneas transmisoras o instalaciones adicionales, que la compañía concesionaria haya de establecer para la ministración de la energía. Para el servicio de alumbrado y calefacción, la compañía concesionaria cobrará como máximo dos centavos por hectovatio.

Cláusula trigésima quinta. En el evento de que las compañías vendieren energía eléctrica a otra persona o empresa, para que éstas ministren esa misma energía al público, ya sea por cuenta propia o por cuenta de la

compañía concesionaria, para alumbrado, cale facción, fuerza motriz u otros usos, las cuotas o precios que por dichos servicios hayan de cobrarse a los consumidores, en ningún caso excederán de los que expresa la cláusula que precede, y así se hará constar en los respectivos contratos.

Cláusula trigésima sexta. Los concesionarios se obligan a que pasados los veinte años que deben estar en vigor las tarifas de que habla la cláusula anterior, las nuevas tarifas que fijen serán con la aprobación de la dirección general de Obras públicas.

Cláusula trigésima séptima. La compañía concesionaria se obliga a proporcionar alumbrado y fuerza a los edificios federales o de beneficencia pública del Distrito Federal, siempre que estuvieren ubicados en calles en que la compañía tenga hechas sus instalaciones, con una rebaja de veinte por ciento sobre el precio que cobre a los particulares, haciendo, sin costo alguno para el gobierno, la instalación de los cables alimentadores y de los transformadores y medidores con sus conexiones correspondientes entre los mismos, y quedando todos los materiales de la propiedad de la compañía. Por su parte, la autoridad competente concederá gratuitamente a la compañía concesionaria en los edificios o lugares pertenecientes al gobierno, los locales necesarios para las instalaciones de los transformadores y demás aparatos, tanto para el servicio del edificio de que se trate, como para el servicio público en el circuito respectivo.

Cláusula trigésima octava. La compañía tendrá obligación de dar aviso oportuno por escrito a la Dirección del lugar en que vaya a ejecutar sus obras, para que dicha Dirección pueda inspeccionar debidamente la colocación, de los cables, cajas de distribución, corta circuitos y demás instalaciones existentes ya.

Cláusula trigésima novena. El gobierno podrá examinar en cualquier tiempo el estado de las instalaciones de la compañía concesionaria, la que estará obligada a facilitar los elementos necesarios para dicha inspección.

Cláusula cuadragésima. La compañía será exclusivamente responsable, en los términos de la ley, de los perjuicios que resientan, ya sea el público o las otras instalaciones de cualquiera clase, a consecuencia de las deficiencias de la compañía; la cual queda obligada a ejecutar las obras de reparación necesarias para prevenir o remediar tales deficiencias a juicio de peritos, en los términos de la cláusula octava.

Cláusula cuadragésima primera. La compañía concesionaria se sujetará a los reglamentos expedidos y que se expidan relativos a instalaciones eléctricas y obras en las vías públicas; que sean igualmente aplicables a las otras empresas o individuos que exploten energía eléctrica, siempre que dichos reglamentos no sean contrarios a las disposiciones de esta concesión.

Cláusula cuadragésima asegunda. La compañía concesionaria quedará sujeta al pago de los impuestos aplicables a las demás empresas que exploten la energía eléctrica.

Cláusula cuadragésima tercera. La compañía concesionaria queda obligada a suministrar constantemente y durante la vigencia del presente contrato, cuando menos ocho mil caballos de fuerza en el Distrito Federal, no permitiéndose en ningún caso la introducción de menor cantidad de energía eléctrica.

CAPÍTULO V.

Prevenciones generales y penas.

Cláusula cuadragésima cuarta. Tanto las concesiones y franquicias que se otorgan a los concesionarios como las obligaciones que se les imponen por este contrato, sin más excepción que la que menciona la cláusula trigésima cuarta, durarán noventa años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1997.

Al expirar los noventa años, los señores Veyán, Jean y compañía retirarán todas sus instalaciones, excepto los conductos y rejas de mampostería, dejando las calles y sitios públicos que hubieren ocupado, enteramente libres y en perfecto estado a satisfacción de la dirección general

de Obras públicas.

Cláusula cuadragésima quinta. La presente concesión no podrá ser traspasada sin previa autorización del gobierno, sin que esto entrañe prohibición para que pueda ser incluida en las hipotecas o gravámenes que la compañía estableciere sobre el conjunto de sus propiedades.

Cláusula cuadragésima sexta. La infracción de cualquiera de las obligaciones impuestas a los concesionarios por las cláusulas quinta, sexta, duodécima, décima cuarta, vigésima primera y trigésima séptima, será causa de que la dirección general de Obras públicas les imponga multas desde veinte hasta quinientos pesos, según la gravedad de la infracción. Sí, no obstante la imposición de la mulla, la compañía no diere cumplimiento a la obligación infringida en el plazo que se le señale, la dirección general de Obras públicas podrá ejecutar las obras o adoptar las medidas necesarias para remediar la infracción, haciéndolo a costa de la compañía.

Cláusula cuadragésima séptima. Dentro del término de un año los concesionarios darán principio a las obras a que este contrato se refiere; entendiéndose que queda cumplida esta obligación cuando tengan hechas sobre el terreno, dentro del Distrito Federal, obras cuyo importe sea, cuando menos, de veinte mil pesos, lo cual se comprobará a juicio de la dirección general de Obras públicas.

Cláusula cuadragésima octava. Dentro del plazo de cinco años estarán terminadas las obras y funcionando a satisfacción de la Dirección, en términos de poder suministrar para el servicio público la energía eléctrica correspondiente cuando menos a los ocho mil caballos de fuerza a que se refiere la cláusula cuadragésima tercera.

Cláusula cuadragésima novena. Para garantizar las obligaciones que le imponen las dos cláusulas anteriores, la compañía depositará en la tesorería general de la Federación, antes de firmar este contrato, veinte mil pesos en bonos de la Deuda Pública Nacional.

Cláusula quincuagésima. La presente concesión caducará:

I. Por traspasarla a otra persona o compañía sin la previa autorización del gobierno;

II. Por suspender durante dos meses consecutivos el servicio en conjunto de las líneas conductoras que la compañía tuviere establecidas;

III. Por no dar principio a las obras o no terminarlas en los plazos y condiciones que expresan las cláusulas cuadragésima séptima y cuadragésima octava;

IV. Por no cumplir la compañía con lo que dispone la cláusula cuadragésima tercera.

La declaración de caducidad será hecha administrativamente por la Secretaría de Gobernación, la que fijará previamente a la compañía concesionaria un plazo de treinta días para ser oída. Declarada la caducidad, la compañía no tendrá derecho alguno para abrir las calles, con objeto de retirar sus instalaciones subterráneas, y se obliga expresamente, respecto de las instalaciones aéreas, a retirarlas en los plazos y lugares que fije la dirección general de Obras públicas, haciendo en los pavimentos o banquetas las obras necesarias para reparar los desperfectos que cause dicha remoción, previa garantía del pago correspondiente; y si no lo hiciere, la dirección general de Obras públicas podrá mandar ejecutarlas a costa de la compañía concesionaria, cubriéndose de los gastos consiguientes con el producto de la venta de los objetos que formen las instalaciones, sin perjuicio de su derecho para cobrar a la compañía lo que faltare.

En cuanto a las instalaciones subterráneas los concesionarios podrán retirar los cables dentro del término de un año siempre que ello pueda hacerse sin romper los pavimentos, quedando los duelos a beneficio de la ciudad, así como los cables que no hubieren sido retirados en dicho plazo.

Si la caducidad fuere declarada por algunas do las causas que expresa la fracción III de esta cláusula, la compañía conce-

sionaria perderá en favor del gobierno los veinte mil pesos en bonos que haya depositado en la tesorería general de la Federación, según lo estipula la cláusula cuadragésima novena.

Cláusula quincuagésima primera. Para todos los efectos de este contrato, la compañía concesionaria es considera mexicana, y domiciliada en la ciudad de México, donde tendrá siempre un representante legalmente acreditado. Si no lo hiciere, los acuerdos y determinaciones que el gobierno tenga que comunicarle surtirán sus efectos con el único requisito de que sean publicados en el Diario Oficial.

Cláusula quincuagésima segunda. Los términos a que se refiere este contrato se contarán desde el día de la publicación del decreto que lo apruebe.

Cláusula quincuagésima tercera. Para que este contrato surta sus efectos, es necesario que sea aprobado por el Congreso de la Unión. Este contrato queda extendido por duplicado y legalizadas cada una de las hojas, tanto del principal, cuanto las del duplicado, con timbres de $5.00 cinco pesos que ministran los concesionarios, conforme a lo dispuesto en el inciso I de la fracción 29 de la tarifa de la ley de la renta federal del Timbre fecha 1° de junio de 1906, y además con un timbre de $1.00, un peso en cada una de las hojas del principal y también las del duplicado, según lo previene el párrafo b del inciso IV de la fracción 29 ya citada.

México, 12 de agosto de 1908.– Guillermo B. Puya.– Veyán Jean y compañía, S. en C.–Rúbricas.

Mayo 1º de 1908.- Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre los gobiernos de Oaxaca y Puebla y ratificado por las Legislaturas de las mismas entidades federativas.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta.

Art. 1. Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre los gobiernos de Oaxaca y Puebla y ratificado por las Legislaturas de las mismas entidades federativas.

Art. 2. Es parte integrante de los límites de los Estados de Oaxaca y Puebla, entre los distritos de Teotitlán y Coixlahuaca, del primero, y de Tehuacán, del segundo, la línea que partiendo de la mojonera llamada Petlanco, va de Oriente a Poniente, con ligera inclinación al Sur, hasta encontrar una segunda mojonera llamada Portezuela de Petlanco; de allí a la mojonera de Cihualtepec hasta tocar el Río Hondo; y de allí, siguiendo por en medio del cauce de todo ese Río contra su corriente y pasando por San Gabriel Despoblado, y llega hasta Vestigios de Salinas.

J. M. Rincón Gallardo, diputado vicepresidente.– M. A. Mercado, senador vicepresidente.– Ramón Prida, diputado secretario.– Carlos Plores, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 30 de abril de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 1° de mayo de 1908.– Corral.

Diciembre 22 de 1908.- Disposiciones sobre la entrada de extranjeros.

El Presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

CAPÍTULO I.

Disposiciones generales.

Art. 1. Los extranjeros que vengan a la república, solamente podrán entrar en ella:

I. Por los puertos de altura;

II. Por los lugares fronterizos habilitados para el comercio internacional o que especialmente designe el Ejecutivo.

Art. 2. Todo extranjero que pretenda entrar en el territorio nacional, será sometido a reconocimiento, para determinar si puede ser admitido conforme a esta ley.

Igualmente serán reconocidos los mexicanos, con objeto de tomar las precauciones necesarias en el caso de que padezcan enfermedades transmisibles.

Art. 3. No tendrán derecho a entrar los extranjeros comprendidos en las siguientes clases:

I. Los enfermos de peste bubónica, cólera, fiebre amarilla, meningitis cerebro-espinal, fiebre tifoidea, tifo exantemático, erisipela, sarampión, escarlatina, viruela, difteria, o de cualquiera otra enfermedad aguda que deba considerarse transmisible, en virtud de declaración del Ejecutivo;

II. Los enfermos de tuberculosis, lepra, beriberi, tracoma, sarna egipcia o de cualquiera otra enfermedad crónica que deba considerarse transmisible, en virtud de declaración del Ejecutivo;

III. Los epilépticos y los que padecen enajenación mental;

IV. Los que, por ancianos, raquíticos, deformes, cojos, mancos, jorobados, paralíticos, ciegos, o de otro modo lisiados, o por cualesquiera defectos físicos o mentales, sean inútiles para el trabajo y hayan de convertirse en una carga para la sociedad;

V. Los niños menores de diez y seis años que no vengan bajo la dependencia de otro pasajero, ni consignados a persona residente en el país y que haya de tomarlos a su cargo;

IV. Los prófugos de la justicia y los que hubieren sido condenados por delito que, conforme a las leyes mexicanas, debiera castigarse con pena corporal de más de dos años, con excepción, para unos y otros de los delitos políticos o meramente militares.

VII. Los que pertenezcan a sociedades anarquistas, o que propaguen, sostengan o profesen la doctrina de la destrucción violenta de los gobiernos o el asesinato de los funcionarios públicos;

VIII. Los mendigos y personas que de cualquier modo vivan de la caridad pública;

IX. Las prostitutas y los individuos que intenten introducirlas en el país para comerciar con ellas o vivir a sus expensas.

Art. 4. Los extranjeros comprendidos en las fracciones II, III y IV del artículo anterior, podrán entrar y permanecer en el país por concesión especial del Ejecutivo, siempre que otorguen la caución que éste considere suficiente para garantizar, según fuere el caso, que a sus propias expensas se pondrán en curación, manteniéndose aislados en el local adecuado al objeto, o que no se convertirán en una carga social.

Art. 5. Si un extranjero que hubiere fijado su residencia en la república y declarado en forma autorizada por la ley su intención de naturalizarse mexicano, hiciere venir a su esposa, a sus padres o a sus hijos menores, y alguno de ellos padeciere enfermedad de las comprendidas en las fracciones II y III del art. 3°, el Ejecutivo podrá permitir la entrada del enfermo, fijando las condiciones a que haya de estar su jeto, en los términos del reglamento de esta ley.

Art. 6. Los extranjeros que hayan residido en la república por más de tres años y que vuelvan a ella sin haber estado ausentes más de uno, serán equiparados a los mexicanos, para los efectos de esta ley.

Art. 7. Cuando se encuentre un extranjero que haya entrado durante la vigencia de esta ley y con violación de sus preceptos, el

Ejecutivo podrá ordenar que sea remitido al país de su procedencia, si el extranjero no tuviere más de tres años de residencia en la república al ser detenido. La expulsión se hará en buque o ferrocarril de la misma empresa a que pertenezca aquel en que haya venido al país, y si esto no fuere posible, en otro buque o ferrocarril a costa de dicha empresa.

Art. 8. El Ejecutivo podrá suspender, con los requisitos que en cada caso estime convenientes, la expulsión de algún extranjero entrado con violación de esta ley, sí a su juicio fuere necesario su testimonio en alguna causa penal.

Art. 9. Las compañías navieras y las de inmigración, son pecuniariamente responsables de las violaciones de esta ley, cometidas por sus empleados y agentes; en consecuencia, cuando el comandante de un buque o el médico de a bordo no cubran las multas que se les impusieron, se harán efectivas en bienes de la correspondiente empresa.

Art. 10. Los preceptos de esta ley no son aplicables a los agentes diplomáticos extranjeros, ni a sus familias y séquitos, ni a las personas exceptuadas de la jurisdicción territorial, conforme a las reglas de Derecho Internacional.

Art. 11. La secretaría de Gobernación dictará los reglamentos necesarios para el exacto cumplimiento de esta ley, y por medio de acuerdos y disposiciones generales resolverá las dudas que en su aplicación puedan suscitarse.

CAPÍTULO II.

DE LA ENTRADA DE PASAJEROS POR PUERTOS DE MAR.

Art. 12. A la llegada de un buque que conduzca pasajeros que hayan de desembarcar en la república, se observarán las reglas siguientes:

I. El comandante del buque presentará al inspector de inmigración listas por duplicado, de todos los pasajeros, numeradas ordinalmente y expresando respecto de cada uno el nombre y apellido, sexo, edad, estado civil, nacionalidad, raza, oficio u ocupación, grado de instrucción, última residencia en el extranjero, puerto de embarque y punto de final destino en el país. Las listas serán cuantas fueren necesarias para que ninguna comprenda más de treinta pasajeros;

II. En las listas se anotará con toda claridad y precisión cuáles sean los pasajeros que vengan enfermos, con expresión de su enfermedad, bajo la fe del médico de a bordo, quien las firmará en unión del comandante, protestando que son exactas las noticias que contienen;

III. Cada pasajero deberá tener una tarjeta que le dará el comandante del buque, expresando el nombre completo de aquel y el número que le corresponda en la lista respectiva, para que pueda ser fácilmente identificado;

IV. También anotará el comandante en las listas, todos los informes que tenga respecto de los pasajeros, para determinar si algunos de ellos no deben ser admitidos en la república;

V. Cada pasajero será sometido a un reconocimiento médico, para investigar si está enfermo o si tiene algún defecto que motive su expulsión.

El comandante del buque que infringiere cualquiera de las disposiciones de este artículo, o que dejare de hacer constar en las listas el verdadero estado de personas comprendidas en cualquiera de los casos que menciona el art. 3°, será castigado administrativamente, con la pena de cien a quinientos pesos de multa. La misma pena se impondrá al médico de abordo si autorizare con su firma declaraciones falsas.

Art. 13. El desembarque deberá efectuarse, precisamente, en el sitio y a la hora que hubiere señalado el inspector de inmigración, observándose todas las precauciones que éste disponga para impedir cualquier desorden o que entren personas que no tengan derecho de hacerlo.

El desembarque que se hiciere en sitio en hora que no sean los señalados por el inspector, se considerará ilegal, y todas las personas que hubieren llegado a tierra serán

reembarcadas inmediatamente, aplicándose al comandante del buque la pena de cien a mil pesos de multa, o la de arresto mayor, o ambas a juicio del juez.

Art. 14. Cuando lo permitiere la capacidad de la estación sanitaria, a la llegada del buque serán recibidos en ella los pasajeros, para ser sometidos a los reconocimientos que fueren necesarios, a efecto de determinar acerca de su admisión o de las precauciones a que hayan de sujetarse conforme a esta ley sus reglamentos.

Los pasajeros que no deban ser admitidos, serán reembarcados desde luego.

Si la estación sanitaria no tuviere capacidad suficiente, los reconocimientos se harán a bordo del buque.

Art. 15. Los pasajeros que a su arribo se encuentren enfermos de alguna enfermedad transmisible de las que expresa la fracción 1 del artículo 3°, serán aislados en el lazareto del puerto, hasta que estén sanos. Los gastos de asistencia y curación serán por cuenta del pasajero mismo; y si éste careciere de recursos, de la empresa que lo haya conducido. Cuando se trate de mexicanos insolventes, los gastos serán a cargo de la administración pública.

Art. 16. A los extranjeros que a su arribo se encuentren enfermos de una enfermedad transmisible de las comprendidas en la fracción II del art. 3°, no se les permitirá que desembarquen, a no ser que hayan obtenido concesión especial del Ejecutivo conforme al art. 4°.

Art. 17. A los mexicanos enfermos de alguna enfermedad transmisible de las que expresa la fracción II del art. 3°, se les permitirá que desembarquen y se les consignará para su aislamiento y curación, al correspondiente hospital, a no ser que otorguen caución suficiente para garantizar que a sus expensas se pondrán en curación y se mantendrán aislados, observando en su caso las disposiciones de las leyes sanitarias.

Art. 18. Cuando llegare a desembarcar algún extranjero que tenga enfermedad de las comprendidas en la fracción II del art. 3°, o que resulte con alguno de los motivos de exclusión que señalan las fracciones III a IX del mismo artículo, se le hará reembarcar desde luego en el mismo buque y si éste hubiere ya salido, en el buque de la misma empresa que salga inmediatamente después para el país de procedencia o en cualquiera otro que salga con ese destino, sí la empresa no despachare alguno en el término de un mes.

Los pasajeros que hayan de ser reembarcados permanecerán bajo custodia en la estación sanitaria o en otro lugar que designe el inspector de inmigración, por cuenta de la empresa que los haya transportado a la república.

Art. 19. Cuando el comandante del buque se negare a cumplir una orden para el reembarque de extranjeros, se le impondrá administrativamente una multa de cien a quinientos pesos y el buque no será despachado mientras no se cumpla dicha orden. La empresa pagará también una multa igual a la que se imponga al comandante, y a su costa se hará la remisión del extranjero o extranjeros en otro buque.

Si el buque que condujo a los extranjeros expulsados hubiere ya salido, la orden de reembarque se dará a la empresa que los hubiere transportado y a ella se impondrá la pena fijada en el párrafo anterior, si no obedeciere.

CAPÍTULO III.

DE LOS INMIGRANTES TRABAJADORES Y DE LA EMPRESA DE INMIGRACIÓN.

Art. 20. Para los efectos de esta ley, se considerarán como inmigrantes trabajadores, los extranjeros que vengan a la república para dedicarse, temporal o definitivamente, a un trabajo corporal. Bajo la misma denominación se comprende a las personas que constituyan la familia de un inmigrante trabajador.

Respecto a la entrada de inmigrantes-trabajadores, se observarán las disposiciones de este capítulo y del anterior.

Art. 21. La entrada de inmigrantes-trabajadores, cuando vengan en número

mayor de diez en el mismo buque, solamente se permitirá por los puertos señalados al efecto por el Ejecutivo.

Art. 22. Las empresas navieras cuyos buques estén destinados exclusivamente al transporte de inmigrantes-trabajadores, o que de ordinario traigan más de diez de ellos en cada uno de sus viajes, estarán obligadas:

I. A dotar sus buques de los aparatos y útiles necesarios para hacer su desinfección en términos que aseguren la destrucción de los gérmenes patógenos;

II. A que haya siempre en cada buque un médico de a bordo;

III. A tener en los puertos para donde conduzcan inmigrantes, sí el gobierno no tuviere establecimientos sanitarios con capacidad suficiente, estaciones destinadas al aislamiento y observación de aquellos y a la asistencia de los que resulten enfermos, con capacidad para alojar el máximum de los que traigan en un viaje y conforme a los reglamentos y acuerdos que dicte el Ejecutivo;

IV. A mantener y atender en todo, por su cuenta y en los términos que ordene el Ejecutivo, a los inmigrantes que hayan transportado, mientras permanezcan en los lazaretos o lugares de observación;

V. A conducir de regreso en sus buques y por su cuenta, a los inmigrantes que no sean admitidos conforme a esta ley y a los que fueren expulsados por haber entrado ilegalmente, siempre que unos u otros hayan venido en buques de la empresa;

VI. A tener en la ciudad de México, un representante con facultades bastantes para tratar de los asuntos que se ofrecieren y a quien se puedan hacer efectivas las responsabilidades en que incurra la empresa y otro representante con esas mismas calidades en cada uno de los puertos para donde conduzcan inmigrantes sus buques;

VII. A otorgar caución suficiente, a satisfacción del Ejecutivo, de que cumplirán con las obligaciones que les impone esta ley, y a reponer esa caución siempre que sea necesario.

Art. 23. Las empresas que no dieren cumplimiento a las obligaciones que señalan las fracciones I, II y VII del artículo anterior, serán requeridas por el Ejecutivo para hacerlo, y si no lo verificaren en el término que se les señale, no les será admitido en los puertos mexicanos, buque alguno que traigan con inmigrantes.

Cuando una empresa no cumpliere con las obligaciones que imponen las fracciones IV y V del precedente artículo, se hará efectiva en la cantidad que fuere necesaria, la caución a qué se refiere la fracción VII del mismo artículo, o usando de la facultad económico-coactiva, se exigirá a la empresa el pago de la suma debida, si dicha caución no estuviere constituida o no fuere bastante.

Art. 24. Cuando un buque traiga mayor número de inmigrantes que el que puedan contener, la estación sanitaria del gobierno y la que tenga la respectiva empresa, sólo se podrá autorizar el desembarque del número que quepa en dichas estaciones; los demás sufrirán su reconocimiento y, en su caso, el período de observación o de curación a bordo del buque.

Cuando llegare un buque sin tener estación sanitaria ni haber arreglado disponer de la de otra empresa para sus inmigrantes, y no hubiere estación del gobierno o no se pudiere disponer de ella, los inmigrantes que conduzca permanecerán a bordo y sufrirán en el buque su reconocimiento y, en su caso, el período de observación o de curación que se les impusiere.

Art. 25. Cuando se trate de buques que traigan en cantidad considerable inmigrantes-trabajadores contratados para el servicio de empresas mineras, industriales o agrícolas, el Ejecutivo podrá permitir el desembarquen puertos que no sean de los autorizados para la entrada ordinaria de inmigrantes, observándose en cada caso las precauciones que al efecto determine el Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de esta ley.

Art. 26. Cuando en un mismo buque vengan pasajeros comunes e inmigrantes-trabajadores, las listas que de éstos deban

formarse con arreglo al art. 12° serán por separado.

Art. 27. Además de las listas generales que previene el art. 12°, se formarán listas especiales de los enfermos.

Art. 28. Cuando no hubiere enfermos infecciosos entre los inmigrantes, ni los hubiere habido durante los últimos diez días de la travesía, ni tampoco hubiere tocado el buque puerto sospechoso o infestado, los inmigrantes quedarán en completa libertad para entrar e internarse en el país, luego que hubiere terminado su reconocimiento.

Art. 29. Los inmigrantes–trabajadores podrán ser sometidos a un período de observación hasta de diez días, cuando hubiere entre ellos individuos enfermos o sospechosos de alguna enfermedad transmisible, o los hubiere habido durante la travesía y, en general, en cualquier otro caso en que lo disponga el Ejecutivo.

Art. 30. Si durante el período de observación se descubrieren inmigrantes en quienes concurra alguno de los motivos de exclusión enumerados en el art. 3°, serán reembarcados en los términos del art. 18°.

Art. 31. Los inmigrantes que no estén vacunados, lo serán en la estación sanitaria.

Art. 32. Las estaciones sanitarias de las empresas de inmigración, así como el personal que las sirva, estarán a las órdenes y bajo la vigilancia del delegado sanitario del puerto.

Art. 33. Los gastos que se originen en el sostenimiento de las estaciones sanitarias de las empresas de inmigración, sus reparaciones, mueblaje, útiles y enseres, alimentación de los inmigrantes, medicinas, sueldos de médicos y del personal necesario, serán por cuenta de la empresa respectiva.

CAPÍTULO IV.

DE LA ENTRADA DE PASAJEROS POR VÍAS TERRESTRES.

Art. 34. La entrada de pasajeros por vías terrestres, se sujetará a las reglas siguientes:

I. El reconocimiento que prescribe el art. 2°, se hará a bordo de los trenes de ferrocarril;

II. El inspector de inmigración recogerá de cada pasajero, por medio de boletas, los datos que enumera la fracción I del art. 12°;

III. Para no detener por largo tiempo los trenes de ferrocarril, se enviarán agentes que a bordo de los carros reconozcan a los pasajeros y recojan de ellos los datos necesarios;

IV. Cuando los pasajeros no lleguen por ferrocarril, podrán ser de tenidos en los lugares de entrada el tiempo necesario para examinarlos y recoger los datos que previene la fracción I del art. 12°;

V. Los trenes de ferrocarril que conduzcan exclusivamente inmigrantes-trabajadores o en que vengan más de treinta de éstos, serán detenidos a su entrada al territorio nacional, con objeto de que desde luego se haga el reconocimiento de los inmigrantes y se recojan de ellos los datos correspondientes;

VI. Los extranjeros enfermos de alguna enfermedad transmisible, serán excluidos desde luego y sólo se les permitirá la entrada mediante la caución que previene el art. 4°;

VII. A los extranjeros sospechosos de padecer de una enfermedad transmisible, se les permitirá que permanezcan en el lugar de entrada aislados y en observación, siempre que aseguren el pago de su asistencia.

Los pasajeros que hicieren declaraciones falsas serán castigados administrativamente con multa de cinco a veinticinco pesos, o arresto de tres a quince días.

Art. 35. El inspector de inmigración podrá fijar horas y sitio para la entrada de pasajeros que no vengan por ferrocarril. También podrá fijar horas para la entrada de trenes extraordinarios con pasajeros.

La entrada que se haga a hora o por sitios no autorizados, será castigada imponiendo a los conductores, maquinistas, cocheros y demás empleados a cuyo cargo

esté el tren y a los que hubieren ordenado su entrada, la pena de cien a mil pesos de multa, o la de arresto mayor, o ambas a juicio del juez.

Sí la entrada no se hubiere hecho por ferrocarril, los pasajeros legalmente entrados serán castillados con multa de diez a cien pesos o con arresto mayor hasta dos meses.

CAPÍTULO V.

DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

Art. 36. Todo lo relativo a inmigración dependerá de la secretaría de Gobernación, la que administrará el ramo por medio de los funcionarios y Cuerpos siguientes:

I. Inspectores de inmigración, que se establecerán en los puertos y lugares fronterizos por los cuales esté autorizada la entrada de pasajeros procedentes del exterior;

II. Agentes auxiliares que, en los términos que dispongan los reglamentos o los acuerdos que dicte el Ejecutivo, bajo las órdenes y vigilancia del respectivo inspector, auxiliarán a éste en sus labores, y desempeñarán las funciones que les llegue;

III. Consejos de inmigración, que se establecerán en cada uno de los lugares en que hubiere inspectores y que se compondrán de tres personas especialmente nombradas al efecto, o si no se hicieren nombramientos especiales, del delegado sanitario, del administrador de la aduana o jefe de la sección aduanera y de otro empleado federal que de común acuerdo designen los dos expresados.

Art. 37. En los lugares donde no hubiere inspector de inmigración los delegados sanitarios desempeñarán las funciones que a aquel corresponden.

Art. 38. Las resoluciones de los inspectores relativas a admisión, exclusión o expulsión serán revisadas por los consejos de inmigración siempre que lo pida el mismo individuo interesado, el comandante del buque o su consignatario, el representante de la empresa que haya conducido al pasajero, o el delegado sanitario.

Las resoluciones se harán constar por escrito bajo la firma del inspector o de los miembros del Consejo que las dicte.

Art. 39. Corresponde a los inspectores de inmigración imponer las penas administrativas que fija esta ley. Sus determinaciones serán revisadas por la secretaría de Gobernación, la cual tendrá la facultad de confirmarlas, derogarlas o modificarlas.

Si las penas fueren pecuniarias, se exigirá su inmediato pago y su importe quedará en depósito entretanto la secretaría de Gobernación revisa la pena.

Si la pena que debe imponerse fuere corporal, el responsable será detenido inmediatamente, dándose cuenta a la secretaría de Gobernación por telégrafo.

CAPÍTULO VI.

DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN LO CONCERNIENTE A ESTA LEY.

Art. 40. Los tribunales federales son competentes para conocer de todos los casos de violación de la presente ley.

Art. 41. En los lugares en donde no resida juez de Distrito, los jueces del fuero común practicarán, en auxilio de la justicia federal, las primeras diligencias y podrán dictar el auto de prisión formal y aun poner el negocio, con autorización del tribunal federal competente, en estado de sentencia. Para este efecto y en tocio caso, darán aviso al juez de Distrito que corresponda, siempre que tomen conocimiento de un negocio de este género.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Se derogan el art. 49. Del Código Sanitario, y, en general, todas las disposiciones que se opongan a los preceptos de esta ley, que comenzará a regir el primero de marzo de mil novecientos nueve.

J. R. Aspe, diputado presidente.– Emilio Rabasa, senador vicepresidente.– Guillermo Pous, diputado secretario.– A. Castañares, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publi-

que, circule y se le dé el debido cumplimiento,

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 22 de diciembre de 1908.–Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución, México, 22 de diciembre de 1908.– Al...

Mayo 2 de 1908.- Se aprueban les arreglos sobre límites celebrados entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y aprobados por las Legislaturas de dichos Estados el 27 de noviembre de 1907 y 14 de enero del año en curso.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congrego de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Art. 1. Se aprueban les arreglos sobre límites celebrados entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y aprobados por las Legislaturas de dichos Estados el 27 de noviembre de 1907 y 14 de enero del año en curso.

Art. 2. La línea divisoria entre uno y otro Estado queda integrada como se expresa en la siguiente descripción, advirtiendo que el signo positivo que está al lado de cada latitud, indica que ésta es Norte, y las iniciales E. o W. que van a continuación de cada longitud significan que éstas se encuentran al Este o al Oeste del meridiano que pasa por la cruz de la torre Este de la Catedral de México, a la cual están referidas todas las situaciones geográficas de cada monumento que marcan sobre el terreno la citada divisoria.

La dirección de cada línea parcial divisoria está contada partiendo del Norte siguiendo por el Oeste, Sur y Este hasta completar los 360 grados de la circunferencia; por consiguiente, la dirección que sea menor de 90 grados indica que se encuentra en id cuadrante Noroeste, mayor de 90 grados está en el cuadrante Suroeste, mayor de 180 grados en el cuadrante Sureste y mayor de 270 grados en el cuadrante Noreste.

1ª. Línea recta con dirección de 126°30'29" 15 y magnitud de 25,140m00, del monumento número 1, sobre la margen mexicana del Rio Bravo, situado a la latitud de 27°40'45°24 y a la longitud de..... 0°35'33"33W, al monumento número 2 que se haya a la latitud de 27°32´40”92+ y a la longitud de 0°47'51"72W.

2ª. Línea recta con dirección de 182°39'46"92 y magnitud de 6,896m46, del monumento número 2 ya definido, al monumento número 2 bis, situado a la latitud de 27°28'57"09+ y a la longitud de.. 0°47'40"04W.

3ª. Línea recta con dirección de 251°36’32"74 y magnitud de 16,800m69, del monumento número 2 bis, al monumento número 3 situado a la latitud de 27°26'05"+12 y a la longitud de 0°37'59"03 W.

4ª. Línea recta con dirección de 186°36'24”78 y magnitud de 17,757m11, del monumento número 3 al monumento número 4, localizado cerca de la loma de la Pita, a la latitud de 27°16'32"00+ y a la longitud de 0°36'44"63 W.

Estas cuatro líneas divisorias pertenecen a los arreglos de límites que se trazaron por la Comisión que deslindó el Estado de Nuevo León con el de Coahuila; pero la Comisión Geográfica Exploradora, con objeto de poder tener completa divisoria entre Nuevo León Tamaulipas, porque los tratados comienzan desde el monumento número 4, mandó determinar las posiciones astronómicas de estos cuatro monumentos, que son las antes ya expresadas.

5ª. Línea recta con dirección de

200°23´12"36 y magnitud de 19,668m90 del monumento número 4 al monumento número 6, puesto en la loma del Divisadero a la latitud de 27°06'33"00+ y a la longitud de… 0°32'35"47W.

En esta línea está colocado el monumento número 5 en la loma de la Alegría a la latitud de 27°13'35"66+ y a la longitud de 0°35´31"31 W.

6ª. Línea recta con dirección de 231°58'55"65 y magnitud de 2,341m16, del monumento número 6 al monumento número 7, colocado en la loma de la Espía, a la latitud de 27°05'46"15+ y a la longitud de 0°31'28"50W.

7ª. Línea recta con dirección de 198°40'52"75 y magnitud de 3.242m47, del monumento número 7 al monumento número 9, colocado en un punto medio entre la loma de la Espía y el alto de la Pendencia, a la latitud de 27°04'06"35+ y a la longitud de 0°30'50"79 W. Sobre esta línea se encuentra el monumento número 8 en la Ceja de la Retama, a la latitud de 27°04'38"90+ y a la longitud de 0°31'03"10 W.

8ª. Línea recta con dirección de 153°43'39"47 y magnitud de 18,414m63, del monumento número 9 al monumento número 14, colocado en la Mesa del Coyote, a la latitud de 26°55´09”89+. Y a la longitud de 0°35'46"65 W. Sobre esta línea se encuentran los monumentos: el número 10, en la cabecera de la Ceja del Águila, a la latitud de 27°00'24"89+ y a la longitud de 0°32'19"80 W; el número 11, en el Alto de los Mirasoles y la latitud de 27°00'47”74+ y a la longitud de 0°32'40"47 W, el número 12, en el alto de las Cabeceras del Freno, a la latitud de 26°59´16''71+ y a la longitud de 0°33'30"69 W, y el número 13, en la loma de la Canoa, a la latitud de 26°56'47"65+ y a la longitud de 0°34'52"81 W.

9ª Línea recta con dirección de 76°51'45"85 y magnitud de 3,554m70; del monumento número 14 al monumento número 16, en la esquina N. O. del Potrero del Rancho de Laguna de San Miguel, a la latitud de 26°55'36"16+ y a la longitud de 0°37'52"13 W. Sobre esta línea está colocado el monumento número 15, en la Mesa del Coyote, a la latitud de 26°55’14"52+ y a la longitud de 0°36'08"69 W.

10. Línea recta con dirección de 184°37'01"18 y magnitud de 3.871m81, del monumento número 16 al monumento número 17, colocado en la margen izquierda del Pao Salado en el Puso de las Palmitas a la latitud de 26°53'36’’76+ y a la longitud de 0°37'40"83 W.

11. Del monumento 17 al 18, colocado en la confluencia del Río Salado con el de Sabinas, la divisoria es el eje o línea más profunda del cauce del citado Río Salado, teniendo el desarrollo de este eje..... 12,000m00 y siendo la posición del monumento 18, en latitud de 26°50’51’’20+ y en longitud de 0°26'51"58W.

12. Del monumento 18 al monumento 19, colocado en la margen derecha del Río Sabinas, la divisoria es también el eje o la línea más profunda del cauce del Río Sabinas, teniendo un desarrollo de 13,000m00 y estando situado el monumento 19 a la latitud de 26°40'21"31+ y a la longitud de 0°31'13"04 W.

13. Línea recta con dirección de 264°41’11"13 y magnitud de 1,818m47, del monumento número 19 al monumento número 20 colocado en la loma de la Corcova a la latitud de 26°40'15"85+y a la longitud de 0°30'07"55 W.

14. Línea recta con dirección de 266°15'17’’38 y magnitud de 8.683m50, del monumento número 20 al monumento número 23, colocado en la antigua mojonera del Niño a la latitud de 26°39'57"51 + y a la longitud de 0°24'64"14 W. Sobre esta línea están colocados los monumentos: el número 21, en el frontón de la Cadillosa a la latitud de 26°40'01"05+ y a la longitud de 0°25'50"72 W: y el número 22 en el Derramadero de la Cadillosa, a la latitud de 26°40'00"17+y a la longitud de 0°25'35"21 W.

15. Línea recta con dirección de 270°29'46’’41 y magnitud de 1.482m46, del monumento número 23 al monumento número 24, colocado en el Alto de en medio

en la antigua mojonera de Paras, a la latitud de 26°39'57"93+y a la longitud de..... 0°24'00"52 W.

16. Línea recta con dirección de 24°50'01''74 y con magnitud de..... 16,027m60, del monumento número 24 al monumento número 28, colocado en la esquina N. E. del sendero de Paras, a la latitud de 26°35'52"35+ y a la longitud de... 0°15'29"47W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el número 25, en el Alto de la Lobera a la latitud de 26°38'27"31+ y a la longitud de 0°20'51"92 W; el número 26, en la Loma de las Mujeres, a la latitud de 26°36'19"97+ y a la longitud de 0°16'27"35 W, y el número 27, en lugar sin nombre especial a la latitud de 26°35'59"34+ y a la longitud de 0°15'44''57 W.

17. Línea recta con dirección de 174°48'16"66 y magnitud de 2,542m49, del monumento número 28 al monumento número 31, en el Alto de los Encinitos, a la latitud de 26°34'30"07+y a la longitud de... 0°15'37"80W. Sobre esta línea están colocados los monumentos: el número 29, a la latitud de 26°35'48"95+ y a la longitud de.. 0°15'29"68 W; y el número 30 a la latitud de 26°35'29"34+ y a la longitud de 0°15'31"91 W.

18. Línea recta con dirección de 175°52'33''61 y con magnitud de..... 9,761m84 del monumento número 31 al monumento número 32, situado a la latitud de 26°29'13"67+ y a la longitud de 0°16'03"17 W.

19. Línea recta con dirección de 174°47'51"93 y con magnitud de 4,700m8, del monumento número 32 al monumento número 34, en el paso de las Lajitas, según los vecinos de Paras, a la latitud de..... 26°26'41"57+y a la longitud de 0°16'18"56 W. Sobre esta línea se encuentra el monumento número 33, situado a la latitud de..... 26°27'01"64+ y a la longitud de 0°16'16"48 W.

20. Del monumento número 34 al monumento 35, colocado en el paso de las Lajitas, según los vecinos de Tamaulipas, la divisoria es el eje o la línea más profunda del cauce del Río del Álamo, teniendo un desarrollo de 350m00, encontrándose situado el monumento 35 a la latitud de 26°26'45''13+y a la longitud de 0°16'26"94 W.

21. Línea recta con dirección de 171°24'33"97 y con magnitud de 10,400m30 del monumento número 35 al monumento número 39, colocado en el Arroyo de la Palma a latitud de 26°21'10"96+ y a la longitud de 0°17'23"02 W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el número 36 en la margen izquierda del Arroyo de Pajuelas, a latitud de 26°26'22"13+ y a la longitud de 0°16'30"81 W; el número 37, frente al rancho Malahueco, a la latitud de 26°24'45"96+ y a la longitud de 0°16'46"93 y el número 38 en el Alto de Juachin, a la latitud de 26°22'53"40+ y a la longitud de 0°17'05"89W.

22. Línea recta con dirección de 206°32'51"20 y con magnitud de..... 5,870m23, del monumento número 39 al monumento número 42, en la margen izquierda del Rio Sosa, a la latitud de 26°18'20"32+ y a la longitud de 0°15'48"39W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el número 40, a la latitud de 26°20'31"36+ y a la longitud de 0°17'01"60W; el número 41 a la latitud de 26°19'09"51+ y la longitud de 0°16'17"33 W, y el número 42 a la latitud de 26°18'20"32+ y a la longitud de 0°15'48"39 W.

23. Del monumento 42 al 44, en la margen derecha del Río de Sosa, la divisoria es el eje o línea más profunda del cauce del citado Rio, teniendo un desarrollo de 6,572m00, estando situado este último a la latitud de 26°19'47''84+ y a la longitud de 0°13'35"40 W.

Sobre esta línea divisoria, y en la margen izquierda del citado Río, se encuentra colocado el monumento número 43 a la latitud de 26°19'28"00+ y a la longitud de 0°14'10"93 W.

24. Línea recta con dirección de 230°47'21"09 y magnitud de 13,300m66, del monumento número 44 al monumento 47,

colocado en el punto medio del rancho de Charquitos y la Guadiana, a la latitud de 26°15'14"73+ y a la longitud de 0°07'23"75W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el número 45 a la latitud de 26°18'47"48+ y a la longitud de 0°12'12"81 W; y el número 46 a la latitud de 26°16'06"05+y a la longitud de 0°08'33"29 W.

25. Línea recta con dirección de 275°46'21"50 y magnitud de 6,181 m19 de monumento número 47 al monumento número 49, en el lugar llamado "Los Cojos," a la latitud de 26°15'34"98+ y a la longitud de... 0°03'42"11 W. Sobre esta línea se colocó el monumento número 48 a la latitud de 26°15'18"30+ y a la longitud de 0°06'44"54 W.

26. Línea recta con dirección de 189°01'35"46 y magnitud de 20,344m56, del monumento número 49 al monumento número 54, colocado en la margen izquierda del Río de San Juan en el punto llamado «Morteritos,» a la latitud de… 26°04'42"04+y a la longitud de… 0°01'47"07W. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 50, a la latitud de 26°13'36"31 + y a la longitud de 0°03'20"86W; el número 51 en el Alto del Abra, a la latitud de 26°10'39"75+ y a la longitud de 0°02'49"90W; el número 52, en el Alto de Tierritas Blancas, a la latitud de 26°06'15"18+ y a la longitud de 0°02'03"57 W; y el número 53 en otro Alto de Tierritas Blancas, a la latitud de 26°05'40"72+ y a la longitud de 0°01'57"35W.

27. Del monumento número 54 al monumento número 55, colorado en la margen derecha del Río de San Juan, junto al Rancho de los Chorros, la divisoria es el eje o línea más profunda del cauce del citado río, con un desarrollo de 18,000m00, a la latitud de 26°06'23"40+y a la longitud de 0°06'45"88E.

28. Línea recta con dirección de 219°14'59"12 y magnitud de 19,517m00 del monumento número 55 al monumento número 58, colocado en la antigua mojonera de Arujo, a la latitud de 25°58'12"44+ y a la longitud de 0°14'10''35 E. Sobre esta línea se coloraron los monumentos: el 56 en el Alto del Toro Muerto, a la latitud de 26°03'25''45+ y a la longitud de 0°09'26"44 E., y el número 57 en la Abra de la Canela, a la latitud de 26°00'43"57+y a la longitud de 0°11'53"36E.

29. Línea recta con dirección de 318°34'47"55 y magnitud de... 11,683m36, del monumento número 58 al monumento número 60, colocado en la antigua mojonera de la Pata de Gallo a la latitud de 26°02'57"22+ y a la longitud de..... 0°18'48"24E. Sobre esta línea se colocó el número 59 en el Alto de los Mezquites, a la latitud de 26°01'49"85+ y a la longitud de..... 0°17'42"39 E.

30. Línea recta con dirección de 262°07'25"29 y magnitud de 24.066m78, del monumento número 60 al monumento número 70, en la intersección de esta línea con el sendero de Sauteño, a la latitud de 26°01'10"75+y a la longitud de 0°33'05"82 E. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 61, a la latitud de 26°02'55"50;+ y a la longitud de 0°19'02"16 E., el número 62 a la latitud de..... 26°02'30"54+y a la longitud de... 0°22'24"23 E.: el número 63, en la esquina N. O. del rectángulo que se formó para dejar el rancho del Huizache en jurisdicción de Tamaulipas, rompiendo esta línea perpendicularmente con las magnitudes 200m00 para el lado menor y de 750m00 para el lado mayor, encontrándose este monumento a la latitud de 26°02'22"82+y a la longitud de..... 0°23'26"33 E.; el número 64, en la esquina S. O. del rectángulo del Huizache, a la latitud de 26°02'12"62+y a la longitud de 0°23'24"78 E.; el número 65, a la latitud de 26°02'08"86+ y a la longitud de 0°23'55"08 E.; el número 66 a la latitud de 26°02'19''07+y a la longitud de 0°23'56"63 E; el número 67 en la Ceja del Becerro, a la latitud de 26°0'50"81+y a la longitud de 0°27'44"86 E.; el número 68 en la antigua mojonera de Buena Vista, a la latitud de..... 23°01'20'158+y a la longitud de..... 0°31'46"85 E.; y el número 69 en la Loma de la Cal a la latitud de 26°01'18"50+y a la longitud de 0°32'43"74 E.

31. Línea recta con dirección de 179°35'19"80 y con magnitud de.....…. 58,357m90, del monumento número 70 al monumento número 77, colocado sobre el sendero del Saulozó para dejar el caserío y servidumbre del Rancha de las Cuatitas, en jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación del monumento número 77 en latitud de 25°29'34''23+ y en longitud de 0°32'50"76 E. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 71, a latitud de..... 26°00'34''70+y a la longitud de… 0°33'05"56 E.; el número 72, a latitud de 25°49'09"00+ y a la longitud de 0°33'00"16 E.; el número 73, en la Loma de las Borregas a la latitud de 25°48'38"54+ y a la longitud de 0°32'59"85 E.; el número 74, a la latitud de..... 25°40’29"92+ y a la longitud de 0°32'55"94 E.; el número 75, a la latitud de..... 25°38'16"74+ y a la longitud de 0°32'54"88 E ; y el número 76, a la latitud de..... 25°29'46"95 + y a la longitud de..... 0°32'50"82 E.

32. Paralelo de latitud con dirección de 269°57'57’’91 y con magnitud de..... 15,875m07, del monumento número 77, al número 80, situado en la intersección del meridiano que se trajo en el monumento 82 en la Loma de la Virola, siendo la posición del monumento 80 en la latitud de..... 25°29'34''23+ y longitud de 0°42'17"93 E. Sobre este paralelo se colocaron los monumentos: el número 78, a la latitud de..... 25°29'34"23+ y a la longitud de… 0°39'05"04 E.; y el número 79, a la latitud de 25°29'34"23+y a la longitud de 0°40'49"83 E.

33. Sección meridiana con dirección de 180°00'18"21 y magnitud de 4,747m07, del monumento número en la intersección con el paralelo de latitud de 25°29'34"23+ que se tramero 80 al monumento número 82 situado en la Loma de la Virola, a la latitud de 25°27'02"08+ y a la longitud de 0°42'17"95 E. Sobre esta sección meridiana se colocó el monumento número 81, a la latitud de 25°29'19''20+ y a la longitud de 0°42'17"95 E.

34. Línea recta con dirección de 128°44'16"68 y magnitud de..... 64,447m70, del monumento número 82 al monumento número 95, colocado en la margen izquierda del Río de Conchos, en el lugar que antiguamente ocupó el rancho del Ballo Rosillo, a la latitud de..... 25°05'14"39+ y a la longitud de.. 0°12'18"40 E. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 83, en la abra del muleto a la latitud de 25°23'35'67+ y a la longitud de 0°37'35"09 E.; el número 84 en la labor de Bartolo, a la latitud de 25°20'41"45+ y a la longitud de 0°33'36"57 E.; el monumento 85 en la esquina N. E, del rectángulo que se formó rompiendo la línea perpendicularmente, en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 para el lado mayor, con el objeto de dejar el caserío y servidumbre del Rancho de Pedro Dávila, vulgarmente denominado San Pedro, en la jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación geográfica de este monumento número 85, en latitud de 25°20'10’'45+y en longitud de 0°32'52"55 E.; el número 86, en la esquina N. O. del rectángulo del Rancho de San Pedro, a la latitud de 25°20'14"25+ y a la longitud de 0°32'49"19 E.; el número 87 en la esquina S. O. rectángulo del Rancho de San Pedro a la latitud de 25°20'08"05+ y a la longitud de... 0°32'40"68 E.; el número 88, en la esquina S. E. del rectángulo de San Pedro, a la latitud de 25°20'04"25+ y a la longitud de 0°32'44"05 E.; el número 89 en la Mesa de las Abejas, a la latitud de 25°15'06"21 + y a la longitud de 0°25'52"50 E.; el número 90 en la Mesa de las Abejas, a la latitud de 25°14’24"70+ y a la longitud de 0°24'55"00 E.; el número 91, en la Loma del Sesteadero de Barrera a la latitud de 25°09'19"28+ y a la longitud de 0°17'53"73 E.; el número 92, en la Mesa del Mezquite a la latitud de 25°08'53"32+ y a la longitud de 0°17'18"15 E.; el número 93, en la Mesa del Mezquite, a la latitud de 25°08'23"22+ y a la longitud de 0°16'36"92 E.; el número 94, en la Mesa Larga, a la latitud de 25°07'16"13+ y a la longitud de 0°15'05"05 E.

35. Del monumento número 95 al monumento número 96 situado sobre el Río de Conchos, en la boca del Arroyo del Venadito, con un desarrollo de 45,000m00 la divisoria es el eje o línea más profunda del

cauce del citado Rio; siendo la situación de este último monumento en la latitud de 25°01'00"43+ y a la longitud de 0°03'09"62 W.

36. Línea recta con dirección de 192°31'04"13, con magnitud de..... 10,669m75, del monumento número 96 al monumento 100, situado en el Rancho del Venadito a la latitud de 24°55'21'88+ y a la longitud de.. 0°01'47"13 W. Sobre esta línea están colocados los monumentos: el número 97 en la Loma de las Animas, a la latitud de 25°00'50"18+ y a la longitud de 0°08'07"07 W; el número 98, en la Loma del Balcón, a la latitud de 24°57'26"76+ y a la longitud de 0°02'17"79 W, y el número 99, en la misma Loma del Balcón, a la latitud de..... 24°56’37’’61+ y a la longitud de 0°02'05"66 W.

37. Línea recta con dirección de 140°58'50"84, y magnitud de 7,819m74, del monumento número 100 al monumento número 101, colocado en el Cerro Gordo a la latitud de 24°52'01"44+ y a la longitud de 0°04'42"61 W.

38. Línea recta con dirección de 205°39'37"96 y con magnitud de..... 11,940m84 del monumento número 101 al monumento número 103, colocado en la Loma de Chayotillo, a la latitud de 24°46'14"64+ y a la longitud de 0°01’38"38 W. Sobre esta línea se colocó el monumento número 102 en el Alto de la Chiripa, a la latitud de 24°49'22"54+ y a la longitud de 0°03'15"80 W.

39. Línea recta con dirección de 73°46'54"89 y magnitud de..... 14,329m09, del monumento número 103 al número 105, colocado en la margen del Río de Conchos, o anegados en el Paso llamado de la Jabonera, a la latitud de 24°48'24"94+ y a la longitud de 0°09'48"19 W. Sobre esta línea se colocó el monumento número 104 a la latitud de 24°46'39"10+ y a la longitud de 0°03'11"66 W.

40. Del monumento número 105 al monumento 106, situado en la antigua mojonera de los Aguacates, a los 268m50 del Arroyo del mismo nombre, en el sendero divisor que parte del propio Arroyo y termina en la cumbre del Cerro de la Guitarra o del Botellón, la divisoria es el eje o línea más profunda del cauce del Rio de Conchos, con un desarrollo de 42,000m00 estando situado este último monumento a latitud de 24°37'11"29+ y a la longitud de... 0°28'59"38 W.

41. Línea recta con dirección de 118°22'23"13 y con magnitud de..... 10,316m22 del monumento número 106 al monumento 107, colocado en la cumbre del Cerro de la Guitarra a latitud de 24°34’32"05+y a longitud de 0°34'22"12 W.

42. Línea recta con dirección de 117°59'15"89 y con magnitud de..... 2,269m99, del monumento 107 al monumento 108, colocado en el Cerro de la Cresta del Diablo, a la latitud de 24c33'57"42+ y a la longitud de 0°35'33"37 W.

43. Línea recta con dirección de 145°50'43"97 y con magnitud de..... 1,732m39, del monumento número 108 al monumento 109, colocado en la antigua Mojonera del Convenio, a la latitud de 24°33'10"83+ y a la longitud de 0°36'07"94 W.

44. Línea recta con dirección de 186°55'34"89 y con magnitud de..... 7,932m29 del monumento número 109 al monumento 110, colocado en la cresta del Cerro del Barranco Colorado, a la latitud de 24°28'54"88+ y a la longitud de... 0°35'33"95 W.

45. Línea recta con dirección de 286°20'55"26 y con magnitud de..... 9,840m16 del monumento número 110 al monumento natural 111, que lo constituye el punto más alto de la cresta del Cerro del Pilón, encontrándose a la latitud de 24°30'25’'01+ y a la longitud de 0°29'58"58 W.

46. Línea recta con dirección de 190°15'04"76 y magnitud de 1,814m08 del monumento natural clasificado con el número 111 al monumento número 112, situado sobre otra cresta de la Sierra del Pilón, a la latitud de 24°29'26"99+ y a la longitud de 0°29'47"11 W.

47. Línea recta con dirección de 201°09'18"80 y con magnitud de..... 4,779m09 del monumento número 112 al monumento 113, colocado en la cresta del Cerro de San Antonio, a la latitud de 24°27'02"12+ y a la longitud 0°28'45"89 W.

48. Línea recta con dirección de 172°15'12"81 y con magnitud de..... 1,360m57, del monumento número 113 al monumento 114, situado sobre otra cresta del Cerro de San Antonio, a la latitud de 24°26'18"30+ y a la longitud de 0°28'52"36 W.

49. Línea recta con dirección de 200°13'48"52 y con magnitud de..... 7,966m95 del monumento número 114 al monumento 115, colocado en el Cerro de Magueyes, a la latitud de 24°22'15"32+y a la longitud de 0°27'14"54 W.

50. Línea recta con dirección de 172°43'55"03 y con magnitud de..... 2,515m84 del monumento número 115 al 116, situado en el Cerro del Naranjillo, a la latitud de 24°20'54"20+y a la longitud de 0°27'25"85 W.

51. Línea recta con dirección de 157°59'58'61 y con magnitud de..... 15,843m28 del monumento número 116 al monumento 117 en el Cerro de la Ventana, a la latitud de..... 24°12'56"86+ y a la longitud de… 0°30'56"43 W.

52. Línea recta con dirección de 175°06'53"18 con magnitud de 11,114m18 del monumento número 117 al monumento 118 en el Cerro de la Vieja, a la latitud de..... 24°06'5"690+ y a la longitud de..... 0°31'29"98 W.

53. Línea recta con dirección de 225°05'18"27 y con magnitud de..... 24,865m04, del monumento número 118 al monumento 119, colocado en el Puerto de Zapateros, a la latitud de 23°57'26"60+ y a la longitud de 0°21'06"61 W. '

54. Línea recta con dirección de 186°00'53"99 y con magnitud de..... 2,107m02, del monumento número 119 al monumento 120, colocado en el puerto de Revilla, a la latitud de 23°56’18"49+ y a la longitud de 0°20’58’’80 W.

55. Línea recta con dirección de 196°49'50"86 y con magnitud de..... 8,617m68, del monumento número 120 al monumento 121, colocado sobre el Picacho de Chinas, a la latitud de 23°51'50"30+ y a la longitud de 0°19'30"55 W.

56. Línea recta con dirección de 69°34'52"66 y con magnitud de... 4,007m08 del monumento número 121 al monumento, 122, colocado en el Puerto del Tulillo, a la latitud de 23°52'35''85+ y a la longitud de 0°21'43"29 W.

57. Línea recta con dirección de 143°32'19"75 y magnitud de… 14,195m87 del monumento número 122 al monumento 123 sobre el Cerro de la Muralla, a la latitud de 23°46'24"79+ y a la longitud de..... 0°26'41"52 W.

58. Línea recta con dirección de 111°52'09’’21 y magnitud de 4,704m27 del monumento número 123 al monumento 124 colocado en el Puerto de Portales, a la latitud de 23°45'27"98+ y a la longitud de..... 0°29'15"73 W."

59. Línea recta con dirección de 74°30'06"67 y magnitud de 8,345m10 del monumento número 124 al monumento 125, colocado en el punto medio de los Ranchos de A. Guzmán y B. Guzmán, a la latitud de 23°46'40"54 + y a la longitud de 0°33'59"75 W.

60. Línea recta con dirección de 92°02'12"46 y magnitud de 16,528m38, del monumento número 125 al monumento 126, colocado sobre la cumbre del Cerro de Peña Nevada, a la latitud de..... 23°46'21"75+ y a la longitud de 0°43'43"23 W.

61. Línea recta con dirección de 156°30’32”15 y magnitud de 26,155m77 del monumento número 126 ni monumento 127, situado en la antigua mojonera del Mamaleón sobre la falda del cerro del mismo nombre, a la latitud 23°33'22"07+ y a la longitud de 0°49'51’’50 W.

62. Línea recta con dirección de 191°08'06"93 y magnitud de 20,153m53 del monumento número 127 al monumento 132

situado en el sendero que viene del Cerro del Madero, a la latitud de 23°22'37"79+ y a la longitud de 0°47'34''30 W. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 128 en la esquina N. E. del rectángulo que se formó rompiendo perpendicularmente esta línea en una extensión de 150m00 para el lado menor, y de 300m00 para el lado mayor, para dejar la servidumbre del antiguo Rancho de San Juanito en jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación del monumento 128 en la latitud de 23°24'30"09+ y en longitud de 0°47'58"06 W, el monumento 129 en la esquina N. O. del rectángulo citado a la latitud de 23°24'29"46+ y a la longitud de 0°48'01"52 W; el número 130 en la esquina S. O. del mismo rectángulo a la latitud de 23°24’23''72+ y a la longitud de 0°48'00"30 W; y el número 131 colocado en la esquina S. E. del propio rectángulo a la latitud de 23°24'24"33+ y a la longitud de 0°47'56"97 W.

63. Línea recta con dirección de 76°30'37"45 y magnitud de 6,244m95 del monumento, número 132 al monumento 133, en el Rancho de la Cardoncita, a la latitud de 23°23'25"19+ y a la longitud de.. 0°51'08’’16 W.

64. Línea recta con dirección de 87°55'50"52 y magnitud de 2,558m14 del monumento número 133 al monumento 134 en el puerto de la Taponcita ya la latitud de 23°23'28"20+ y a la longitud de 0°52'38"20 W.

65. Línea recta con dirección de 86°43'33"98 y magnitud de 7,256m46 del monumento 134 al monumento 135, colocado en la antigua mojonera del Junco, a la latitud de 23°23'41"33+y a la longitud de 0°56'53"36 W.

66. Línea recta con dirección de 134°47'37"08 y magnitud de 5,478m69 del monumento número 135 al monumento 136, colocado en el rancho del Jabalí, a la latitud de 23°21’36"26+ y a la longitud..... 0°59'10"30 W.

67. Línea recta con dirección de 130°43'25"58 y magnitud de 3,574m50 del monumento número 136 al monumento 137, colocado en la antigua mojonera de Aldana, a la latitud de 23°20'20"46+ y a la longitud de 1°00'45''69 W.

68. Línea recta con dirección de 241°24'19"26 y magnitud de 7,946m26 del monumento número 137 al monumento 138, colocado en la antigua mojonera del Batre a la latitud de 23°18'16"87+ y a la longitud de 0°56'40"05 W.

69. Línea recta con dirección de 162°12'03"37 y magnitud de 8,376m02 del monumento número 138 al monumento 139, colocado en el Picacho de Matancillas, punto final de la divisoria donde se encuentra la colindancia de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, con el de San Luis Potosí, siendo la situación geográfica de este último monumento en la latitud de 23°13'57"16+ y en longitud 0°58'10''17 W.

J. M. Rincón Gallardo, diputado vicepresidente.– M. A. Mercado, senador vicepresidente.– Ramón Prida, diputado secretario.– Carlos Plores, senador secretario.– Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo Federal, en México, a 2 de mayo de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Ramón Corral, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 2 de mayo de 1908.– Corral.– Al....

Marzo 9 de 1908.- Que se haga saber a los notarios y jueces cartularios, que el citado artículo 115 no los autoriza para cobrar un peso por cada una de las rúbricas que pongan al margen de los testimonios que expidan.

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE JUSTICIA

Circular núm. 165.

El C. presidente de la república, te-

niendo en consideración que, por los términos mismos en que está concebido el artículo 115 de la ley de 19 de diciembre de 1901, se viene en conocimiento de que esa disposición legal se refiere a las rúbricas que deben poner los notarios en los documentos a que aluden la fracción VII del artículo 50 y la fracción III del artículo 51 de la misma ley, ha tenido a bien acordar se haga saber a los notarios y jueces cartularios, que el citado artículo 115 no los autoriza para cobrar un peso por cada una de las rúbricas que pongan al margen de los testimonios que expidan.

Lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 9 de marzo de 1908.– Fernández.– Al C.....

Marzo 25 de 1908.- Se establece un juzgado menor en Coyoacán, Distrito Federal, cuya jurisdicción comprenderá la municipalidad del mismo nombre.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que en uso de la facultad que me concede el artículo 198 de la ley de organización judicial, de fecha 9 de septiembre de 1903, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un juzgado menor en Coyoacán, Distrito Federal, cuya jurisdicción comprenderá la municipalidad del mismo nombre.

Artículo 2. La planta de empleados de dicho juzgado, será la siguiente:

	Cuota diaria.
Un juez.....	$ 6.25
Un secretario.....	3.00
Un escribiente.....	2.00
Un comisario.....	1.80
Gastos de oficio, cada mes.....	10.00

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo en México, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia.- Libertad en la Constitución. México, 25 de marzo de 1908.– Fernández.

Marzo 27 de 1908.- Que se haga saber a los notarios y jueces cartularios del Distrito Federal, que deben abstenerse de poner en los testimonios que expiden la razón de legalización de su sello y firma, porque esa razón debe ser asentada por la mesa del notario y registro público de la propiedad, en esta secretaría.

Mesa del Notariado y Registro Público.

Circular núm. 166.

El C. presidente de la república ha tenido a bien acordar se haga saber a los notarios y jueces cartularios del Distrito Federal, que deben abstenerse de poner en los testimonios que expiden la razón de legalización de su sello y firma, porque esa razón debe ser asentada por la mesa del notario y registro público de la propiedad, en esta secretaría.

Lo comunico a Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 27 de marzo de 1908.– Fernández.– Al C. notario.....

Abril 29 de 1908.- Que, como adición a la circular número 164 de 22 de febrero del presente año, se haga saber a los notarios y jueces cartularios, que deben abstenerse de hacer al final de las escrituras hipotecarias, la declaración de que la hipoteca quedó constituida en la fecha y hora en que firman la escritura los otorgantes, cuando éstos no han pactado expresamente por cláusula especial, constante en la misma escritura, que en esa fecha se tenga por constituida la hipoteca;

Mesa del Notariado y Registro Público.

Abril 29 de 1908.- Circular núm. 167.

El C. presidente de la república ha tenido a bien acordar que, como adición a la circular número 164 de 22 de febrero del presente año, se haga saber a los notarios y jueces cartularios, que deben abstenerse de hacer al final de las escrituras hipotecarias, la declaración de que la hipoteca quedó constituida en la fecha y hora en que firman la escritura los otorgantes, cuando éstos no han pactado expresamente por cláusula especial, constante en la misma escritura, que en esa fecha se tenga por constituida la hipoteca; en razón a que esa declaración, hecha sólo por el notario, es contraria a lo prescripto en los artículos 1856 del Código Civil, 50, fracción III y 56 de la ley de 19 de diciembre de 1901 y a lo dispuesto en la citada circular número 164.

Lo comunico a Ud. para su debido cumplimiento.- Libertad y Constitución.– México, 29 de abril de 1908.– Fernández.– Al C. notario.....

Mayo 15 de 1908.- Que, en lo sucesivo, las citaciones y conducción de correspondencia del juzgado de su cargo, se hagan precisamente, y en su respectivo caso, por los comisarios.

Sección de Justicia.

Circular número 168.

Ha llegado a conocimiento de esta secretaría de Justicia, que en algunos juzgados del ramo penal, se viene observando la práctica irregular de que todas las citaciones de personas que deben presentarse para la práctica de diligencias, se entregan a los gendarmes para que, por cordillera, sean remitidas a su destino, lo cual se observa también al hacerse la remisión de la correspondencia de los mismos juzgados a la inspección general y a las demás oficinas de policía.

Como esta práctica es sin duda perjudicial para la pronta administración de justicia, supuesto que con ese sistema llegan los citatorios y las comunicaciones con bastante retardo a los lugares de su consignación; y como, por otra parte, es además contraria a lo prevenido en los artículos 156, 157, 158 y 159 del Código de Procedimientos Penales, el presidente de la república ha tenido a bien acordar se dirija a usted la presente circular, recomendándole que, en lo sucesivo, las citaciones y conducción de correspondencia del juzgado de su cargo, se hagan precisamente, y en su respectivo caso, por los comisarios.

Lo comunico a usted para su cumplimiento.- Libertad y Constitución.– México, 15 de mayo de 1903.– Al C. juez.

Mayo 22 de 1908.- Que se haga saber a los notarios y jueces cartularios, actuantes con este carácter, que no están autorizados para recibir las declaraciones a que alude el dictamen, de la mesa del notariado y registro público, de fecha 14 de agosto de 1907 y que se publicó en el número 49, tomo XCI del Diario Oficial, correspondiente al lunes 26 de agosto del mismo año y, por lo mismo, deben abstenerse de extender actas haciendo constar dichas declaraciones, lo cual podría importar una usurpación de funciones, prevista y penada por el Código de la materia.

Mesa del Notariado y Registro Público.

Circular número 169.

No teniendo los notarios en el Distrito Federal y territorios más facultades que las señaladas en el artículo 12 de la ley de 19 de diciembre de 1901, como lo expresa terminantemente el informe inserto en el dictamen de la mesa del notariado y registro público, de fecha 14 de agosto de 1907 y que se publicó en el número 49, tomo XCI del Diario Oficial, correspondiente al lunes 26 de agosto del mismo año, el C. presidente de la república ha tenido a bien acordar se haga saber a los notarios y jueces cartularios, actuantes con este carácter, que no están autorizados para recibir las declaraciones a que alude el expresado dictamen, y, por lo mismo, deben abstenerse de extender actas haciendo constar dichas declaraciones, lo cual podría importar una usurpación de

funciones, prevista y penada por el Código de la materia.

Lo comunico a Ud. para su inteligencia y efectos consiguientes.- Libertad y Constitución.– México, 22 de mayo de 1908.– Fernández.– Al C. notario.....

Mayo 27 de 1908.- Que, dentro de veinte y cuatro horas de haberse pronunciado una sentencia ejecutoria en procesos seguidos por delitos de robo y falsificación de moneda, o dentro de igual término después de recibida del superior respectivo esa ejecutoria, si la sentencia hubiere sido recurrida, remita a esta secretaría de Justicia la copia de dicha resolución.

Circular núm. 170.

El presidente de la república ha tenido a bien acordar se recomiende a Ud. que, dentro de veinte y cuatro horas de haberse pronunciado una sentencia ejecutoria en procesos seguidos por delitos de robo y falsificación de moneda, o dentro de igual término después de recibida del superior respectivo esa ejecutoria, si la sentencia hubiere sido recurrida, remita a esta secretaría de Justicia la copia de dicha resolución, en las mismas condiciones y con los propios datos que lo verifica Ud. actualmente, haciendo constar con toda exactitud y muy particularmente si el reo es menor de diez y ocho años, la fecha desde la cual debe comenzar a contarse la pena que se le haya impuesto, el oficio o medios de vivir con que cuente, el estado de salud en que se encuentre y su complexión.

Asimismo le recomiendo, por acuerdo del mismo primer magistrado de la república, que en todos los casos en que los reos, por sí, o por medio de sus defensores, pidan a ese juzgado de su cargo una copia de la sentencia pronunciada en su contra, con el objeto de solicitar conmutación de pena corporal por pecuniaria, o cualquiera clase de indulto, al expedir dicha copia y al calce de ella, hagan una historia sucinta de los hechos que constituyeron el delito, haciendo constar, además, la profesión o medios de subsistencia con que cuente el sentenciado, y si la sentencia causó ejecutoria, anotando, por último, si el reo quedó o no sujeto a responsabilidad civil.

Lo comunico a Ud. para su debido cumplimiento.- Libertad y Constitución. México, 27 de mayo de 1908.– Fernández.

Junio 12 de 1908.- Se establece un juzgado en esta capital, que se denominará juzgado sexto de lo civil y cuya jurisdicción y competencia serán las mismas que las de los juzgados de primera instancia de lo civil de México.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed;

Que en uso de la facultad que me concede el artículo 198 de la ley de organización judicial de fecha 9 de septiembre de 1903, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un juzgado en esta capital, que se denominará juzgado sexto de lo civil y cuya jurisdicción y competencia serán las mismas que las de los juzgados de primera instancia de lo civil de México.

Artículo 2. La planta de empleados de dicho juzgado, será la siguiente:

	Cuota diaria.
Un juez.....	$ 14.00
Un secretario.....	6.50
Un oficial mayor.....	5.00
Dos escribanos de diligencias....	5.00
Dos escribientes de primera.....	2.50
Tres escribientes de segunda.....	2.00
Un comisario.....	1.80
Gastos de oficio, cada mes.....	10.00

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo,

en México, a los once días del mes de junio de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia.– Presente.»

Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 12 de junio de 1908.– Fernández.– Al.....

Junio 14 de 1908.- Que diariamente, a las doce y cuarenta y cinco minutos, se sirva remitir al director del «Boletín Oficial» las listas de los acuerdos del día, dictados en ese juzgado de su cargo, así como todo lo demás, que debe publicarse en dicho periódico.

Circular núm. 171.

El presidente de la república ha tenido a bien acordar se recomiende a usted, como lo hago por medio de la presente, que diariamente, a las doce y cuarenta y cinco minutos, se sirva remitir al director del «Boletín Oficial» las listas de los acuerdos del día, dictados en ese juzgado de su cargo, así como todo lo demás, que debe publicarse en dicho periódico.

Lo comunico a usted para su debido cumplimiento.- Libertad y Constitución.– México, 14 de junio de 1908.– Fernández.– Al C. juez..... Presente.

Junio 20 de 1908.- ADICIONES al Código Penal para el Distrito y territorios federales, sobre delitos del fuero común, y para toda la república, sobre delitos contra la Federación.

SECCIÓN DE JUSTICIA.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

ADICIONES

Al Código Penal para el Distrito y territorios federales, sobre delitos del fuero común, y para toda la república, sobre delitos contra la Federación.

Art. 1. Se establece la pena de relegación, la cual se hará efectiva en colonias penales establecidas en islas o en lugares que sean de difícil comunicación con el resto del país.

Art. 2. La pena de relegación tendrá dos períodos:

El primero será de prisión celular, con incomunicación parcial y con trabajo.

El segundo será también de prisión, pero con trabajo en común, dentro o fuera de la cárcel, bajo custodia inmediata. Durante la noche, los reos estarán incomunicados entre sí, o, por lo menos, divididos en grupos no mayores de diez, en cada aposento.

Art. 3. El primer período durará un noveno de la condena; pero si dicho noveno excediere de tres meses, ésta será la duración del período, salvo lo dispuesto en los dos artículos siguientes.

El segundo período durará el tiempo necesario para que unido al que, conforme a la primera parte de este artículo, se hubiere fijado para el primero, iguale al cuarto de la condena; pero sin que pueda bajar de un mes ni exceder de seis, salvo lo dispuesto en los dos artículos siguientes.

Art. 4. Todo reo, al ser recibido en la colonia, será destinado al primer período, y sólo que observare buena conducta en los términos que prevenga el reglamento interior, pasará al segundo, y de éste a la libertad preparatoria.

Art. 5. Los reos que cometieren nuevos delitos o faltas, aun cuando sólo sean disciplinarías, serán castigados en los términos que fije el reglamento de la colonia, volviéndoseles al período anterior, o aumentándoseles el tiempo que hayan de permanecer en el periodo en que se encuentren, sin perjuicio de que se les aplique la pena del nuevo delito o falla.

Art. 6. Respecto del producto del trabajo, y, en general, en los demás puntos no determina los en este decreto, regirán para la pena de relegación las mismas reglas que para la de prisión.

Art. 7. Los reos condenados a relegación a quienes se conceda la libertad preparatoria, deberán residir todo el tiempo de ésta en la colonia penal.

Art. 8. La pena de relegación se entiende impuesta con calidad de retención por una mitad más de tiempo, y así se expresara en la sentencia, para el caso de que el reo tenga mala conducta durante la segunda mitad de su condena, cometiendo algún delito, resistiéndose a trabajar o incurriendo en fallas graves de disciplina, o en graves infracciones de los reglamentos.

Los reos que salgan de la colonia serán trasladados por cuenta de la administración pública al lugar en que residían antes de ser aprehendidos.

Art. 9. En las colonias penales se permitirá que continúen residiendo los reos que hayan extinguido sus condenas, y que se establezcan en ellas las familias de los mismos y otras personas libres, todo en los términos que dispongan los reglamentos.

Art. 10. La pena de relegación se aplicará en substitución de la de arresto mayor y de las de reclusión en establecimientos de corrección penal o prisión que no excedan de dos años:

I. Cuando la condena sea por robo, vagancia, mendicidad o fabricación o circulación de moneda falsa.

II. Cuando el reo sea reincidente o cuando de las constancias del proceso aparezca que es delincuente habitual y que hay motivo fundado para creer que para su enmienda, es necesario que cambie de medio y de género de vida.

Art. 11. La substitución de las penas de arresto, reclusión o prisión, por la de relegación, se hará computándose a razón de dos días de ésta por cada una de aquéllas. Si del cómputo resultare un término inferior a seis meses, se aplicará, sin embargo, la relegación por todo ese tiempo.

TRANSITORIO.

Esta ley comenzará a regir el primero de agosto próximo.

Fernando Vega, diputado presidente.– Luis C. Curiel, senador vicepresidente.– J. R. Aspe, diputado secretario.– Tomás Mancera, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a 15 de junio de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia.»

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 20 de junio de 1908.– Fernández.– Al C...

Julio 2 de 1908.- Que los originales que envían los juzgados para su publicación en el "Boletín Judicial", sean escritos con toda claridad y sin ninguna clase de abreviaturas.

Circular núm. 172.

Habiendo llegado a conocimiento de esta secretaría de Justicia que los originales que envían algunos juzgados para su publicación en el «Boletín Judicial» son, en su mayor parte, incomprensibles tanto por los pésimos caracteres de letra, como por las caprichosas abreviaturas que se emplean, el presidente de la república ha tenido a bien acordar se dirija a usted la presente circular, recomendándole que en lo sucesivo cuide muy especialmente de que dichos originales sean escritos con toda claridad y sin ninguna clase de abreviaturas, exigiendo usted, del empleado que los haga, que éste ponga al margen de ellos su nombre y apellido, a fin de poder determinar con precisión quién incurre en dichas faltas; en el concepto de que, la primera omisión que se advierta, dará lugar a la destitución inmediata del empleado que la cometa.

Lo comunico a usted para su debido cumplimiento.

Libertad y Constitución. México, 2 de julio de 1908.– Fernández.– C. juez.....

Julio 11 de 1908.- Que el gobierno del Distrito cuide de que, con la debida oportunidad, sean remitidos a cada uno de los establecimientos penales los reos que deben estar en ellos, sin que sea necesaria orden especial del Ejecutivo.

Circular núm. 173.

El decreto de organización de establecimientos penales, que comenzó a regir el día 20 de junio último, determina cuál es el establecimiento penal que a cada clase de presos corresponde, disponiendo, en su artículo 17, que el gobierno del Distrito cuide de que, con la debida oportunidad, sean remitidos a cada uno de los establecimientos penales los reos que deben estar en ellos, sin que sea necesaria orden especial del Ejecutivo.

Como, por otra parte, el decreto de adiciones al Código Penal, que creó la pena de relegación, comenzará a regir el día 1° del próximo mes de agosto, ya no serán necesarios a esta secretaría los avisos que los juzgados vienen dando relativos a la pena impuesta a los reos de robo, a la complexión de los mismos, a su edad, a las circunstancias en que cometieron el delito y a los demás informes que sobre el particular se daban.

Por las razones expuestas, y por acuerdo del presidente de la república, manifiesto a usted que, en lo sucesivo, ya no deberá enviar los referidos avisos, limitándose a remitir puntualmente y con toda actividad al gobierno del Distrito o a la autoridad política respectiva, en su caso, así como a esta propia secretaría, una copia íntegra de la sentencia pronunciada con el carácter de irrevocable.

Lo comunico a usted para su debido cumplimiento, recomendándole me acuse el recibo correspondiente.

Libertad y Constitución. México, 11 de julio de 1908.– Fernández.– Al C.....

Julio 14 de 1908.- Que se recomiende a los notarios y jueces cartularios, que, al dar cumplimiento a lo prescripto en la fracción III del art. de 30 de la ley de 19 de diciembre de 1901, cuiden de expresar, no sólo la vecindad en general, sino también el número de la casa y nombre de la calle en que tienen su domicilio los otorgantes y demás personas a quienes se refiere la citada disposición legal.

Mesa del Notariado y Registro Público.- Circular núm. 174.

El presidente de la república ha tenido a bien acordar se recomiende a los notarios y jueces cartularios, que, al dar cumplimiento a lo prescripto en la fracción III del art. de 30 de la ley de 19 de diciembre de 1901, cuiden de expresar, no sólo la vecindad en general, sino también el número de la casa y nombre de la calle en que tienen su domicilio los otorgantes y demás personas a quienes se refiere la citada disposición legal.

Lo digo a usted para su conocimiento y efectos consiguientes.- Libertad y Constitución.– México, a 14 de julio de 1908.– Fernández.

Agosto 10 de 1908.- Con el objeto de que se tengan todos los datos estadísticos que suministran las escrituras autorizadas por los CC. Notarios y jueces que actúan como notarios y ejercen sus funciones en el Distrito Federal, el C. presidente de la república ha tenido a bien acordar, que los mencionados funcionarios remitan mensualmente a esta secretaría un estado relativo a las escrituras que ante ellos se hayan otorgado.

MESA del Notariado y Registro Público.– Circular núm. 175.

Con el objeto de que se tengan todos los datos estadísticos que suministran las escrituras autorizadas por los CC. notarios y jueces que actúan como notarios y ejercen sus funciones en el Distrito Federal, el C. presidente de la república ha tenido a bien acordar, que los mencionados funcionarios remitan mensualmente a esta secretaría un estado relativo a las escrituras que ante ellos se hayan otorgado y que, con arreglo a las

leyes, no deban inscribirse en las oficinas del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, expresándose en dichos estados el día en que fue otorgada la escritura, el número de ella, la materia de la misma y los valores que en ella se hicieron constar.

Lo comunico a Ud. para su debido cumplimiento, remitiéndole al efecto los ejemplares adjuntos.- Libertad y Constitución. México, 10 de agosto de 1908.– Fernández.– Al notario C…Presente.

Agosto 10 de 1908.- Disposiciones a fin de evitar los inconvenientes que para la administración de justicia tiene el que los jueces foráneos del Distrito Federal se trasladen frecuentemente a esta capital o a Tlálpam, cada vez que sea necesario practicar alguna diligencia con menores que se encuentran recluidos en las escuelas correccionales.

SECCIÓN de Justicia.– Circular Núm. 176.

A fin de evitar los inconvenientes que para la administración de justicia tiene el que los jueces foráneos del Distrito Federal se trasladen frecuentemente a esta capital o a Tlálpam, cada vez que sea necesario practicar alguna diligencia con menores que se encuentran recluidos en las escuelas correccionales, el presidente de la república ha tenido a bien acordar, que en los casos expresados, los jueces foráneos de primera instancia dirigirán al primero de instrucción de esta capital el exhorto conducente, y los menores, al C. juez octavo correccional, también de esta capital, cuando se trate de recluidos que se encuentren procesados; y al de primera instancia de Tlálpam o al menor de Coyoacán, cuando se trate de menores condenados y recluidos en esas poblaciones.

Lo comunico a Ud. para su debido cumplimiento.

Libertad y Constitución. México, 10 de agosto de 1908.– Fernández.– Al C. juez…

Agosto 17 de 1908.- Que se prevenga a los jueces que pronuncien sentencias que contengan condena a la pena de relegación, que esas sentencias se redacten en términos claros y precisos, de tal modo que no dejen lugar a duda acerca del tiempo de relegación que se imponga.

SECCIÓN de Justicia.– Circular Núm. 177

El secretario de Gobernación me ha dirigido un oficio que dice:

El presidente de la república se ha servido acordar que me dirija a usted, como tengo la honra de verificarlo, a fin de que, por conducto de la secretaría de su digno cargo, se prevenga a los jueces que pronuncien sentencias que contengan condena a la pena de relegación, que esas sentencias se redacten en términos claros y precisos, de tal modo que no dejen lugar a duda acerca del tiempo de relegación que se imponga.– Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.– Libertad y Constitución. México, 15 de agosto de 1908."

A dicha comunicación recayó el acuerdo siguiente:– "Transcríbase a los jueces."

Y lo transcribo a usted en cumplimiento de dicho acuerdo.- Libertad y Constitución. México, 17 de agosto de 1908.– Fernández.– Al C…

Agosto 17 de 1908.- Que se reduzca a la forma concreta indispensable los edictos y originales, a fin de evitar el gasto inútil y pérdida de tiempo que demandaría la práctica viciosa de insertar en el periódico documentos innecesarios o resoluciones que no requieran publicación.

SECCIÓN DE JUSTICIA

Circular número 178.

Habiéndose observado que, en las listas que los juzgados remiten para su publicación en el "Boletín Judicial," se insertan asuntos en que se despachan requerimientos de pago en juicios ejecutivos, lanzamientos en juicios de desocupación, depósitos de

personas, juicios de divorcio y otros análogos, con lo cual se contraviene la expresa disposición contenida en el art. 29 del reglamento de la ley orgánica de tribunales de fecha 9 de septiembre de 1903, que prohíbe tales publicaciones, el presidente de la república ha tenido a bien acordar se dirija a Ud. la presente circular, recomendándole que en lo sucesivo, al remitir las listas para que se publiquen en el mencionado "Boletín Judicial," cuide Ud. de que se cumpla lo prevenido en el citado artículo 29 y de que la redacción breve y expedición de las minutas, se ajuste a los preceptos de la ley, reduciendo a la forma concreta indispensable los edictos y originales, a fin de evitar el gasto inútil y pérdida de tiempo que demandaría la práctica viciosa de insertar en el periódico documentos innecesarios o resoluciones que no requieran publicación.

Lo comunico a Ud. para su debido cumplimiento.- Libertad y Constitución.– México, 17 de agosto de 1908.– Fernández.– C. juez.....

Agosto 19 de 1908.- Se establece un juzgado mixto de primera instancia en la sección de Mexicali, del partido Norte de la Baja California, con la siguiente planta de empleados.

SECCIÓN DE JUSTICIA.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me concede el artículo 198 de la ley de organización judicial de fecha 9 de septiembre de 1903, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se establece un juzgado mixto de primera instancia en la sección de Mexicali, del partido Norte de la Baja California, con la siguiente planta de empleados:

	Cuota fija diaria.
Un juez.....	$ 10.00
Un secretario.....	5.00
Un escribiente para el registro público de la propiedad.....	2.80
Un escribiente.....	2.50
Un comisario.....	1.80
Gastos de oficio, cada mes.....	10.00

Art. 2. La residencia del juzgado será la población fronteriza de Mexicali, y los límites de su jurisdicción los siguientes: por el Norte, la línea divisoria con la república de los Estados Unidos de Norte América; por el Este, el río Colorado; por el Sur, una línea que, partiendo de la desembocadura del río Colorado en el Golfo de California y con rumbo al Oeste, toque las caídas del desierto; y por el Poniente, las caídas del desierto.

Art. 3. Como lo dispone el art. 84 de la ley de organización judicial, respecto del juzgado de primera instancia del partido Norte de la Baja California y del de Quintana Roo, el de Mexicali a que se refiere el presente decreto, estará sujeto al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Art. 4. El juzgado de primera instancia de Mexicali, tendrá a su cargo, dentro de los límites de su jurisdicción, el registro público de la propiedad, y el ejercicio del notariado, con arreglo a las leyes vigentes en la materia.

Artículo transitorio. El presente decreto, comenzará a regir el día primero de noviembre del presente año, quedando, por lo mismo, según él, desde esa fecha, limitada la jurisdicción territorial del juzgado de primera instancia de la Ensenada, a la parte de lo que es el distrito Norte de la Baja California, no comprendida en los límites expresados en este mismo decreto.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo, en México, a los diez y nueve días del mes de agosto de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia."

Y lo comunico a usted para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución.– México, 24 de agosto de 1908.– Fernández.

Septiembre 29 de 1908.- Son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los ciudadanos Manuel García Méndez, Francisco Belmar, Alonso Rodríguez Miramón, Carlos Flores y Francisco S. Carbajal.

SECCIÓN DE JUSTICIA.

El presidente de- la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que la Cámara de diputados, erigida en colegio electoral, se ha servido dirigirme la siguiente declaración:

La Cámara de diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el inciso I de la fracción A del artículo 72 de la Constitución, declara:

Art. 1. Son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los ciudadanos Manuel García Méndez, Francisco Belmar, Alonso Rodríguez Miramón, Carlos Flores y Francisco S. Carbajal.

Art. 2. En conformidad con lo que preceptúa el artículo 92 de la Constitución Federal, los ministros a que se hace referencia en el artículo anterior, durarán, en el desempeño de sus funciones, seis años, que comenzarán a contarse desde la fecha en que presten la protesta constitucional, la cual se verificará el día 3 de octubre próximo.

Salón de sesiones de la Cámara de diputados del Congreso general. México, 28 de septiembre de 1908.– G. Mendizábal, diputado presidente.– Antonio de la Peña y Reyes, diputado secretario.– Lorenzo Elízaga, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Dado en el palacio nacional de México, a 29 de septiembre de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia.

Y lo comunico a usted para los fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 29 de septiembre de 1908.– Fernández.

Octubre 22 de 1908.- Se traslada el juzgado 6° correccional, que actualmente se encuentra en el Palacio de Justicia del ramo penal, al edificio construido para la 6° inspección de policía, situado en la esquina que forman las calles de "Revillagigedo" y "Las Verdes".

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad que me concede el artículo 198 de la ley de organización judicial de fecha 9 de septiembre de 1903, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se traslada el juzgado 6° correccional, que actualmente se encuentra en el Palacio de Justicia del ramo penal, al edificio construido para la 6° inspección de policía, situado en la esquina que forman las calles de "Revillagigedo" y "Las Verdes".

Art. 2. La jurisdicción territorial del juzgado 6° correccional queda limitada a la parte de la ciudad de México comprendida en la 6° demarcación de policía; sin perjuicio de la jurisdicción que le corresponde, con arreglo a la ley, en los casos de recusación o excusa de otros jueces correccionales.

Art. 3. El juzgado 6° correccional no quedará sujeto al servicio de turnos, sino que serán sometidos a su conocimiento, diariamente y sin demora alguna, los asuntos de su competencia que ocurran dentro de los límites de dicha demarcación.

Art. 4. El procurador de justicia, conforme a lo prescripto en la ley de 12 de septiembre de 1903, y en uso de sus facul-

tades legales, dictará los acuerdos económicos conducentes a expeditar, en vista de este decreto, la acción del ministerio público en el juzgado 6° correccional.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a veintidós de octubre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia.– Presente.

Y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes.- Libertad y Constitución. México, de 22 de octubre 1908.– Fernández– Al.....

Octubre 29 de 1908.- Se aprueba el uso que el Ejecutivo de la Unión ha hecho por medio de la ley de 28 de diciembre de 1907, de las facultades que, por decreto de 11 de diciembre del mismo año, le concedió el Congreso de la Unión para reformar la ley de organización judicial en el Distrito y territorios federales y la ley transitoria de procedimientos del fuero común, para el mismo Distrito y territorios.

El presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo único. Se aprueba el uso que el Ejecutivo de la Unión ha hecho por medio de la ley de 28 de diciembre de 1907, de las facultades que, por decreto de 11 de diciembre del mismo año, le concedió el Congreso de la Unión para reformar la ley de organización judicial en el Distrito y territorios federales y la ley transitoria de procedimientos del fuero común, para el mismo Distrito y territorios.–

Gabriel Mancera, diputado presidente.– M. S. Herrera, senador vicepresidente.– Antonio de la Peña y Reyes, diputado secretario.– Tomás Reyes Retana, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unión, en México, a veintinueve de octubre de mil novecientos ocho.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, secretario de Estado y del despacho de Justicia.– Presente.»

Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.- Libertad y Constitución. México, 29 de octubre de 1908.– Fernández.– Al.....

Diciembre 16 de 1908.- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El C. presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed;

Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión, por decretos de 24 de mayo de 1906 y 13 de diciembre de 1907, he tenido a bien expedir la siguiente

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

CAPÍTULO I.

Del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 1.

El Poder Judicial de la Federación se ejerce por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito.

CAPÍTULO II.

De la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 2.

La Suprema Corte de Justicia, com-

puesta de quince ministros, funcionará en tribunal pleno o en salas.

Artículo 3.

El Tribunal Pleno se formará de todos los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia; pero bastará la presencia de nueve de ellos, para que funcione.

Artículo 4.

La Suprema Corte de Justicia se dividirá en tres salas: la primera, de cinco ministros, y la segunda y tercera, de tres cada una.

Artículo 5.

Tendrá la Suprema Corte un presidente, que lo será también del Tribunal Pleno y de la Primera Sala.

Artículo 6.

La segunda y tercera salas tendrán también cada una su presidente.

Artículo 7.

La falta de los ministros que forman las salas, se suplirá por los que hayan quedado sin adscripción a ellas, en el orden de su elección. Agotados éstos, el Presidente de la Corte designará al ministro o ministros que deban suplir la falta, de entre los que formen las otras salas, sin perjuicio de que éstos continúen integrando la de su primitiva adscripción.

Artículo 8.

El Presidente de la Suprema Corte será suplido en sus faltas temporales o accidentales, que no excedan de quince días, por los demás ministros en el orden de su elección. En las faltas que excedan de quince días, la Corte, en acuerdo pleno, elegirá al ministro que deba suplir dicha falta.

Artículo 9.

Cada sala tendrá un secretario y un oficial mayor. Estos empleados deberán ser ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos, abogados y mayores de veinticinco años. El secretario de la Primera Sala lo será a la vez de acuerdos del Tribunal Pleno.

Artículo 10.

La Suprema Corte tendrá la planta de empleados que le asigne la ley.

CAPÍTULO III.

De los tribunales de circuito.

Artículo 11.

Los tribunales de circuito serán unitarios y tendrán cada uno de ellos un secretario, un escribano de diligencias y los empleados subalternes que determine la ley.

Artículo 12.

Para ser magistrado de circuito se necesita: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años y abogado.

El secretario deberá ser mayor de veinticinco años, abogado o escribano y ciudadano, mexicano en ejercicio de sus derechos.

Artículo 13.

El nombramiento de los magistrados de circuito y sus secretarios, se hará por el Ejecutivo, a propuesta en terna de la Suprema Corte; y por ésta el de los empleados subalternos del tribunal, mediante terna del magistrado respectivo.

La Suprema Corte y los magistrados de circuito remitirán las ternas dentro del término de quince días, contados desde la fecha en que se les pidan, y si no lo hicieren, el Ejecutivo y la Suprema Corte, en su caso, harán libremente los nombramientos.

Artículo 14.

Para substituir al magistrado propietario en sus faltas absolutas mientras no se cubra la vacante, o en las temporales o accidentales, el Ejecutivo nombrará, en la misma forma en que nombra al propietario, tres magistrados suplentes que tengan los mismos requisitos que los propietarios.

Artículo 15.

Los suplentes substituirán al propietario en el orden numérico de su

nombramiento.

Artículo 16.

Cuando por cualquier motivo estuvieren impedidos para conocer de determinado negocio, así el magistrado propietario como los respectivos suplentes, pasará su conocimiento al tribunal de circuito que lo siga en número

Artículo 17.

La falta de los secretarios, escribanos de diligencias y demás empleados de los tribunales de circuito, si excede de dos meses, se cubrirá por interinos que serán nombrados en la misma forma que los propietarios; la de menor tiempo o en negocio determinado, se suplirá por el que nombre el magistrado de circuito, quien inmediatamente dará aviso a la Suprema Corte y al Ejecutivo para los erectos correspondientes.

Artículo 18.

Los magistrados de los tribunales de circuito y sus secretarios, durarán en el ejercicio de su encargo cuatro años, contados desde la fecha de su nombramiento; y no podrán ser removidos sino por causa justificada y previa el juicio correspondiente.

Artículo 19.

El territorio de la república se divide en tres circuitos, cuyos tribunales residirán en la ciudad de México.

Artículo 20.

El Ejecutivo podrá variar la residencia de los tribunales de circuito, instruyendo al efecto un expediente justificativo de su resolución.

CAPÍTULO IV.

De los juzgados de distrito.

Artículo 21.

El personal de cada uno de los juzgados de distrito, se compondrá de un juez, un secretario, un escribano de diligencias y los empleados subalternos que determine la ley.

Artículo 22.

Para ser juez de distrito se necesita haber cumplido veinticinco años, ser abogado y ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.

El secretario deberá ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años y abogado o escribano. Podrá, sin embargo, la Suprema Corte dispensar el requisito profesional, en los casos en que se dificulte-hallar personas con esos títulos para secretarios de los juzgados de distrito de los Estados y territorios.

Artículo 23.

El nombramiento de los jueces de distrito y sus secretarios, se hará por el Ejecutivo a propuesta en terna de la Suprema Corte; y por ésta, el de los empleados subalternos del juzgado, mediante terna del juez respectivo.

La Suprema Corte y los jueces de distrito remitirán las ternas dentro del término de quince días, contados desde la fecha en que se les pidan, y si no lo hicieren, el Ejecutivo y la Suprema Corle, en su caso, harán libremente los nombramientos.

Artículo 24.

En cada juzgado de distrito habrá tres jueces suplentes, que tendrán los mismos requisitos que los propietarios; y que serán nombrados por el Ejecutivo a propuesta en terna de la Suprema Corte y que por el orden numérico de su elección suplirán al juez propietario en sus faltas accidentales, en las temporales y en las absolutas, mientras se cubre la vacante.

Podrá dispensarse a los jueces suplentes el requisito profesional exigido a los propietarios en los casos en que se dificulte hallar personas tituladas para proveer a los juzgados de distrito de los Estados y territorios.

Artículo 25.

Cuando el juez propietario y los suplentes no puedan conocer de determinado negocio, pasará éste al conocimiento de otro juez de distrito residente en el mismo lugar;

y no habiéndolo, al juez que resida en el lugar más inmediato del mismo circuito.

Artículo 26.

La falta de los secretarios de los juzgados de distrito, será suplida en la misma forma que respecto de los secretarios de los tribunales de circuito establece el artículo 17, por nombramiento o propuesta del juez de distrito.

Artículo 27.

Los jueces de distrito y sus secretarios, durarán en el ejercicio de sus respectivos encargos, cuatro años contados desde la fecha en que fueron nombrados, y no podrán ser removidos sino por causa justificada, previo el juicio correspondiente.

Artículo 28.

Los circuitos se dividen en los treinta y tres Distritos que se expresan a continuación:

Primer Circuito que comprende los siguientes:

Juzgado Primero de Distrito del Distrito Federal, con residencia en la ciudad de México.

Juzgado de Distrito del Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca.

Juzgado de Distrito de Querétaro, con residencia en la ciudad de Querétaro.

Juzgado de Distrito de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Guanajuato.

Juzgado de Distrito de San Luís Potosí, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí.

Juzgado de Distrito de Aguascalientes, con residencia en la ciudad de Aguascalientes.

Juzgado de Distrito de Durango, con residencia en la ciudad de Durango.

Juzgado de Distrito do Chihuahua, con residencia en el Paso del Norte, o sea Ciudad Juárez.

Juzgado de Distrito de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey.

Juzgado de Distrito de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, o San Ciudad Porfirio Díaz.

Juzgado de Distrito de Zacatecas, con residencia en la ciudad de Zacatecas.

Segundo Circuito que comprendo los distritos siguientes:

Juzgado Segundo de Distrito del Distrito Federal, con residencia en la ciudad de México.

Juzgado de Distrito de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Pachuca.

Juzgado de Distrito de Tlaxcala, con residencia en la ciudad de Tlaxcala.

Juzgado de Distrito de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla.

Juzgado de Distrito de Veracruz, con residencia en el puerto de Veracruz.

Juzgado de Distrito de Chiapas, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Juzgado de Distrito de Tabasco, con residencia en la ciudad de San Juan Bautista.

Juzgado de Distrito de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida.

Juzgado de Distrito de Campeche, con residencia en la ciudad de Campeche.

Juzgado Primero de Distrito de Tamaulipas, con residencia en el puerto de Tampico.

Juzgado Segundo de Distrito de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo.

Tercer Circuito que comprende los distritos siguientes:

Juzgado de Distrito de Guerrero, con residencia en el puerto de Acapulco.

Juzgado de Distrito de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca.

Juzgado de Distrito de Michoacán, con residencia en la ciudad de Mordía.

Juzgado de Detrito de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara.

Juzgado de Distrito de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca.

Juzgado de Distrito de Colima, con residencia en la ciudad de Colima.

Juzgado de Distrito de Sinaloa, con residencia en el puerto de Mazatlán.

Juzgado de Distrito de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales.

Juzga lo de Distrito de Tehuantepec, con residencia en la ciudad de Tehuantepec.

Juzgado de Distrito de Tepic, con residencia en la ciudad de Tepic

Juzgado de Distrito de la Baja California, con residencia en la Ensenada de Todos Santos.

Artículo 29.

La jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de distrito, tiene los límites que en seguida se expresan:

La de los juzgados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morolos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, se extiende respectivamente a todo el territorio de cada uno de los Estados de su nombre.

El de Oaxaca comprende todo el territorio de dicho Estado, menos los distritos de Juchitán y Tehuantepec. El de Veracruz comprende todo el territorio del Estado, menos los cantones de Minatitlán y Acayucan.

El de Tampico, con jurisdicción en los distritos del Sur, Centro y Cuarto de Tamaulipas, quedando reservada al de Nuevo Laredo la del Distrito Norte de dicho Estado.

Los juzgados de la capital de la república ejercen jurisdicción en todo el Distrito Federal.

Los juzgados de distrito de Tepic y Baja California, ejercen jurisdicción dentro de los límites del territorio respectivo.

La jurisdicción del Juzgado de Distrito de Tehuantepec, comprende los distritos de Juchitán y Tehuantepec, del Estado de Oaxaca, y los cantones de Minatitlán y Acantean del Estado de Veracruz.

El Juzgado de Distrito de Yucatán, ejerce en jurisdicción en el Estado del mismo nombre y en el territorio de Quintana Roo.

Artículo 30.

El Ejecutivo podrá variar la residencia de los juzgados de distrito, instruyendo, en cada caso, expediente justificativo de su resolución.

Artículo 31.

En los lugares donde no resida juez de distrito y aun en los lugares donde resida, sí faltase por cualquiera causa sin dejar en funciones al suplente respectivo, los jueces del fuero común practicarán las diligencias que les encomiende la ley en los asuntos de la competencia federal, en auxilio de la justicia de este fuero.

CAPÍTULO V.

De la competencia de los tribunales federales.

Artículo 32.

Corresponde a los tribunales de la Federación, conocer:

I. De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, excepto en el caso de que la aplicación sólo afecte intereses de particulares;

II. De las que versen sobre derecho marítimo;

III. De aquellas en que la Federación fuere parte;

IV. De las que se susciten entre dos o más listados;

V. De las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro;

VI. De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados

celebrados con las potencias extranjeras;

VII. De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

Artículo 33.

Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro y de aquellas en que la Unión fuere parte.

Conocerá, también, desde la primera instancia, de las causas de responsabilidad de los magistrados de circuito y del Procurador General de la República, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 34.

Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia, dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados, o entre los de un Estado y los de otro.

Artículo 35.

En los demás casos comprendidos en el artículo 32, la Suprema Corte de Justicia será tribunal de apelación; o bien de última instancia, conforme a la graduación que hace esta ley de las atribuciones de los tribunales de circuito y de distrito.

Artículo 36.

Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales;

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.

Artículo 37.

Los tribunales no podrán hacer declaraciones generales en autos, aclarando, modificando o derogando las leyes vigentes.

Artículo 38.

Los tribunales de circuito y juzgados de distrito, despacharán los negocios de su competencia, sin dirigirse en caso alguno, por vía de consulta, a sus superiores.

CAPÍTULO VI.

De la competencia de la Suprema Corte en Tribunal Pleno.

Artículo 39.

Corresponde al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia:

I. Conocer en revisión de las controversias a que se refiere el artículo 36 de esta ley;

II. Substanciar el recurro de indulto necesario en el fuero federal;

III. Conocer de las excusas de los ministros de la Corte en asuntos de la competencia del Tribunal Pleno.

CAPÍTULO VII.

De las atribuciones de la Suprema Corte en Tribunal Pleno.

Artículo 40.

Son atribuciones de la Suprema Corte en Tribunal Pleno:

I. Elegir a mayoría absoluta de votos entre los ministros que la formen, un presidente que durará un año en el ejercicio de su encargo, no pudiendo ser reelecto sino después de un año de haber cesado en sus funciones;

II. Elegir inmediatamente después, a los ministros que conforme al artículo 4° deben formar las salas y cuyo período será también de un año, pero pudiendo ser reelectos;

III. Nombrar los secretarios y empleados del Tribunal Pleno y de las salas;

IV. Nombrar los empleados subalternos de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, a propuesta en terna de

los magistrados o jueces respectivos;

V. Proponer terna al Ejecutivo para el nombramiento de magistrados de circuito, jueces de distrito, y de los secretarios respectivos;

VI. Conceder licencias, con arreglo a la ley, a los magistrados, jueces, secretarios y empleados subalternos de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, y a los secretarios y demás empleados de la Corte;

VII. Admitir las renuncias que hagan los secretarios y empleados de la Corte, y los empleados subalternos de los tribunales y juzgados de la Federación;

VIII. Suspender en su empleo a los magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios y empleados subalternos de los tribunales federales, por los delitos oficiales en que incurran, consignándolos al juez respectivo;

IX Destituir a los secretarios y empleados de la Suprema Corte y a los empleados subalternos de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, por causa del mal servicio o conducta irregular, consignando al responsable, en su caso, al juez competente;

X. Tomar en caso de queja, por falta grave en el despacho de los negocios, la providencia que fuere más oportuna;

XI. Resolver las reclamaciones que se hagan contra las providencias y acuerdos del Presidente de la Suprema Corte en el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Proponer al Ejecutivo el cambio de residencia de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, y dar al mismo Ejecutivo los informes que pidiere, para los efectos expresados en los artículos 20 y 30;

XIII. Autorizar a los jueces federales para que salgan del lugar de su residencia a práctica de diligencias;

XIV. Acordar las visitas que deban hacerse a los tribunales de circuito y juzgados de distrito por medio de alguno de los ministros, del Procurador General de la República o de la persona a quien nombre la misma Corte;

XV. Formar el reglamento interior de la Suprema Corte y nombrar los ministros que deban desempeñar las comisiones que sean necesarias o convenientes para el mejor servicio público;

XVI. Conceder licencias que excedan de quince días, con arreglo a la ley, a sus propios ministros;

XVII. Determinar en cada año los periodos de vacaciones para los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación.

CAPÍTULO VIII.

De las atribuciones del Presidente de la Suprema Corte.

Artículo 41.

Son atribuciones del Presidente de la Suprema Corte:

I. Recibir quejas o informes de palabra o por escrito; sobre demoras, excesos o faltas en el despacho de los negocios. Si las faltas fueren leyes, dictará las providencias oportunas para su corrección o remedio; si fueren graves, dará cuenta al Tribunal Pleno para que éste dicte el acuerdo correspondiente;

II. Designar los ministros que deban suplir las faltas de los ausentes o impedidos, según las disposiciones de esta ley;

III. Turnar entre las secretarías del tribunal los negocios de amparo, a fin de que hagan la relación de ellos en el día que se señale para la vista, designando el ministro que deba revisar los extractos y redactar la sentencia respectiva;

IV. Promover de oficio el nombramiento de los funcionarios y empleados judiciales en el caso de vacante, a fin de que estén siempre expeditos los tribunales para administrar justicia;

V. Conceder licencias hasta por quince días con arreglo a la ley, a los ministros de la Suprema Corte y a los demás funcionarios y empleados judiciales del ramo federal, con excepción de los que forman el Ministerio Público;

VI. Ejercer las atribuciones económicas que le asigne el reglamento interior de la Suprema Corte.

CAPÍTULO IX.

De la competencia de las Salas de la Suprema Corte.

Artículo 42.

La Primera Sala de la Suprema Corte conocerá:

I. De las competencias que se susciten entre los tribunales del fuero federal, entre éstos y los tribunales de los Estados, Distrito Federal o territorios; entro los de dos o más Estados y entre los de éstos y los del Distrito o territorios federales, siempre que la controversia verse sobre asuntos del ramo civil;

II. De los impedimentos y excusas de los ministros de la Sala, en los negocios de su competencia.

Artículo 43.

La Segunda Sala de la Suprema Corte conocerá:

I. De las competencias a que se refiere la fracción I del artículo anterior, en asuntos que no sean del orden civil, o que se susciten con tribunales del fuero militar;

II. De los impedimentos y excusas de los ministros de la Sala en los negocios de su competencia;

III. En segunda instancia:

a). De las controversias que se susciten entre dos o más Estados;

b). De las controversias en que la Federación fuere parte;

c). De las causas de responsabilidad de los magistrados de circuito y del Procurador General de la República, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 44.

La Tercera Sala de la Suprema Corte conocerá:

I. En primera instancia, de los negocios expresados en la fracción III del artículo anterior;

II. En segunda instancia, de los negocios de que hayan conocido en primera los tribunales de circuito;

III. De los impedimentos y excusas de los ministros de la Sala, en los negocios de su competencia;

IV. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los magistrados de circuito.

Artículo 45.

Las Salas Segunda y Tercera conocerán, por turno, de la revisión de expedientes en que la sentencia de los tribunales de circuito haya causado ejecutoria, siempre que esos expedientes no versen sobre materia civil.

CAPÍTULO X.

De la competencia de los tribunales de circuito.

Artículo 46.

Los tribunales de circuito conocerán en primera instancia:

I. De los juicios que se promuevan entre un Estado y uno o más vecinos de otro;

II. De las controversias del orden civil o penal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras;

III. De los delitos de violación de inmunidad de que trata el capítulo II, título XV, libro ni del Código Penal;

IV. De los delitos y faltas oficiales cometidos en el ejercicio de sus funciones por los agentes diplomáticos y cónsules mexicanos;

V. De los delitos cometidos por los cónsules extranjeros residentes en la república;

VI. De los delitos comunes cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos mexicanos o por el personal oficial de las

legaciones de la República;

VII. De los delitos comunes cometidos en el extranjero por los cónsules mexicanos, siempre que no hayan sido juzgados o castigados en el país en que delinquieren;

VIII. De los juicios de responsabilidad que se promuevan contra los jueces de distrito, sus secretarios, los de los tribunales de circuito y los agentes del Ministerio Público, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;

IX. De la calificación de las excusas y recusaciones de los jueces de distrito.

Artículo 47.

Los tribunales de circuito conocerán:

I. En segunda instancia, de los negocios sujetos en primera a los jueces del distrito y que, conforme a la ley, admitan apelación.

II. De la revisión de las sentencias pronunciadas por los jueces de distrito, en los casos en que la ley la establezca;

III. Del recurso de denegada apelación y del incidente de apelación mal admitida.

CAPÍTULO XI.

De la competencia de los jueces de distrito.

Artículo 48.

Los jueces de distrito conocerán en primera instancia de las controversias que se susciten sobre las materias siguientes:

I. Naturalización y derechos de extranjería;

II. Asuntos del orden civil que afecten a los agentes diplomáticos y extranjeros residentes en la República, o que estén de paso en ella, en los casos permitidos por el derecho internacional;

III. Amparo por violaciones, infracciones e invasiones determinadas en el artículo 101 de la Constitución, con la limitación establecida en la adición al artículo 102 del texto constitucional:

IV. Expropiación por causa de utilidad pública;

V. Terrenos baldíos;

VI. Colonización;

VII. Privilegios exclusivos, cuando se trate de la existencia, nulidad, legitimidad o extensión del título:

VIII. Correos:

IX. Telégrafos y teléfonos federales;

X. Vías generales de comunicación;

XI. Impuestos, rentas, productos, derechos y acciones de la Federación;

XII. Fianzas, idoneidad y supervivencia de fiadores en asuntos federales;

XIII. Donaciones, herencias y legados a la Hacienda federal;

XIV. Responsabilidades de empleados de la Federación;

XV. Bienes nacionales y nacionalizados;

XVI. Lotería Nacional;

XVII. Multas que se impongan por autoridades federales;

XVIII. Reintegro de alcances o liquidaciones de cuentas en oficinas federales;

XIX. Contratos celebrados con los empleados o agentes del Gobierno Federal, para algún objeto del servicio público;

XX. Extradición, en los casos previstos por la ley;

XXI. Robo de caudales, valores o vienes de la Federación;

XXII. Destrucción, deterioro o daños causados por incendio, otros medios, en propiedad nacional y delitos cometidos contra la seguridad, integridad o explotación de las vías generales de comunicación;

XXIII. Delitos cometidos a bordo de embarcaciones mercantes nacionales o extranjeras, en aguas territoriales o en los ríos navegables que forman el límite de la República, y en los ríos, lagos y canales

interiores de comunicación ya con el mar, ya con varios Estados, siempre que en estas vías esté permitida la navegación de buques extranjeros;

XXIV. Siniestros marítimos en aguas territoriales; los que acaecieren en alta mar respecto de buques nacionales y los accidentes que tuvieren lugar en las aguas interiores de que trata la fracción anterior, cuando el conocimiento de estos casos no corresponda al fuero militar;

XXV. Demandas civiles que provengan de los casos enumerados en la fracción anterior, aunque ellos pertenezcan al fuero de guerra;

XXVI. Casos de corso y presas marítimas;

XXVII. Denuncios de embarcaciones o efectos abandonados en mares territoriales o aguas navegables de la Federación;

XXVIII. Buceo de perlas en aguas nacionales y demás explotaciones que en dichas aguas se hagan, aunque la controversia emane de alguna disposición municipal;

XXIX. Todos los casos de derecho marítimo, cuyo conocimiento no esté sometido al fuero de guerra;

XXX. Falsificación y alteración de moneda y circulación de la falsa o alterada;

XXXI. Falsificación de obligaciones u otros documentos de crédito público del Tesoro Federal y de cupones de intereses o dividendos de esos títulos;

XXXII. Falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones y marcas de la Federación;

XXXIII Falsificación de documentos expedidos por oficinas, o funcionarios de la federación;

XXXIV. Falsificación de certificaciones expedidas por funcionarios o empleados federales;

XXXV. Usurpación de funciones públicas en el ramo federal;

XXXVI. Quebrantamientos de sellos puestos por funcionarios o empleados federales en ejercicio de sus funciones;

XXXVII. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos ordenados por funcionarios o empleados federales en el ejercicio de sus funciones;

XXXVIII. Delitos oficiales de asentistas y proveedores del ejército o marina nacional, cuando estos delitos no sean del fuero militar;

XXXIX. Desobediencia y resistencia de los particulares a las determinaciones de los funcionarios federales.

XL. Ultrajes y atentados contra funcionarios del ramo federal;

XLI. Evasión de presos consignados a los tribunales federales;

XLII. Quebrantamiento de condena impuesta por los tribunales de la Federales;

XLIII. Delitos cometidos en las elecciones federales;

XLIV. Delitos de los funcionarios y empleados federales en el ejercicio de sus funciones, con excepción de los casos previstos en el artículo 103 de la Constitución;

XLV. Delitos contra la seguridad exterior de la Nación;

XLVI. Delitos contra la seguridad interior de la Nación, conforme al Código Penal;

XLVII. Delitos contra el derecho de gentes;

XLVIII. Contrabando, infracciones a la Ordenanza General de aduanas y demás leyes fiscales de la Federación;

XLIX. Delitos cometidos en los casos previstos por los artículos 185, 186, 187 y 189 del Código Penal y que no correspondan al fuero de guerra;

L. Delitos que el Código Sanitario y la ley de 14 de diciembre de 1874 declaran de la competencia federal.

LI. Cualquier otro asunto del fuero

federal cuya primera instancia no esté encomendada a la Suprema Corte o a los tribunales de circuito.

CAPÍTULO XII.

Disposiciones complementarias.

Artículo 49.

Los magistrados de circuito otorgarán la protesta constitucional ante la Suprema Corte, los jueces de distrito ante el magistrado de circuito respectivo, si estuvieren en la capital, y, fuera de ésta, ante el Gobernador del Estado o la primera autoridad política del lugar.

Los secretarios y empleados de la Suprema Corte de Justicia, la otorgarán ante el Presidente de la misma Corte, y los demás empleados del Poder Judicial ante el jefe de su respectiva oficina.

De toda acta de protesta se remitirá un duplicado a la Secretaría de Justicia por conducto de la Suprema Corte, cuando se trate de funcionarios y empleados que dependan de ella.

Artículo 50.

Ningún funcionario o empleado de los tribunales de la Federación, puede abandonar la residencia del tribunal a que esté adscripto, ni dejar de desempeñar las funciones de su empleo o encargo, sin previa licencia otorgada en los términos de ley.

Artículo 51.

Cuando el personal de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito tenga que salir del lugar de su residencia para práctica de diligencias en casos urgentes, podrá hacerlo, siempre que la ausencia no exceda de tres días, dando aviso en el acto a la Suprema Corte, con expresión del objeto y naturaleza de la diligencia, así como de su regreso.

Artículo 52.

Los jueces de distrito, cuando tengan que practicar diligencias fuera del lugar de su residencia, podrán encomendarlas a los jueces locales; y en el orden penal, podrán autorizar a éstos para dictar el auto de formal prisión y desahogar todas las demás diligencias que fueren necesarias hasta poner la causa en estado de sentencia.

Artículo 53.

Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación están impedidos:

I. Para desempeñar otro cargo o empleo de la Federación, de los Estados: Distrito o Territorios Federales, a excepción de los de enseñanza;

II. Para ser apoderados o albaceas judiciales, síndicos, árbitros, arbitradores o asesores y ejercer el notariado y las profesiones de abogado o agente de negocios.

Esta disposición no comprende a los suplentes, mientras no se hagan cargo del juzgado.

Artículo 54.

Los suplentes, en las faltas accidentales en determinado negocio, de los magistrados o jueces propietarios legalmente impedidos, serán remunerados por el Erario con los honorarios que el arancel vigente asigne a los jueces de primera instancia.

Artículo 55.

Los magistrados y jueces suplentes que no sean abogados, consultarán con asesor, siendo la remuneración de éste, por cuenta del juez asesorado.

Artículo 56.

El Ejecutivo de la Unión calificará y admitirá las renuncias que de sus cargos hicieren los magistrados de circuito, jueces de distrito y sus respectivos secretarios.

Artículo 57.

Todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación, disfrutarán cada año de un período de vacaciones que será de un mes para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y de quince días para todos los demás. Los suplentes e

interinos, sólo disfrutarán de este derecho, cuando hayan funcionado sin interrupción al menos por un año.

La Suprema Corte de Justicia establecerá cada año el tiempo y forma en que las vacaciones se disfruten, conservando siempre expedita la administración de justicia.

Artículo 58.

Los ministros o sacerdotes de cualquier culto, no podrán desempeñar cargo o empleo alguno en el Poder Judicial de la Federación.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Esta ley comenzará a regir el 5 de febrero de 1909.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 16 de diciembre de 1908.– Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Justino Fernández, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia.– Presente.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, diciembre 16 de 1908.– Fernández.– Al C…

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE JUSTICIA.– México.

El C. Presidente de la República, haciendo uso de la autorización que le confirió el decreto de fecha 24 de mayo de 1906, ha expedido la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la cual tengo la honra de enviar adjunto un ejemplar; y en cumplimiento de lo que previene el art. 2° del decreto de fecha 13 de diciembre de 1907, que prorrogó el término de aquella autorización, el mismo C. Presidente ha tenido a bien acordar que, por conducto de esta Secretaría de Justicia, se rinda al H. Congreso de la Unión el informe siguiente:

Hasta aquí, todas las disposiciones pertinentes a la organización y régimen de los tribunales de la Federación, se hallaban consignadas en el título preliminar del Código Federal de Procedimientos Civiles; pero es evidente que esos preceptos, por su naturaleza especial y por su peculiar objeto, debían constituir un solo cuerpo homogéneo, propio, y distinto de los demás ordenamientos.

Esta fue la razón principal que determinó se formara la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, objeto del presente informe.

Al reunir en esta Ley todas las disposiciones relativas, se han creado los preceptos que fueron necesarios para llenar los vacíos que existían en aquel título preliminar reformado, se han corregido algunos artículos en el sentido que lo aconsejó la experiencia, y se han suprimido otros que eran inútiles o redundantes.

Asimismo se han separado todas las disposiciones referentes a la institución del Ministerio Público, para que obren incorporadas, como deben estarlo, en la ley correspondiente.

En tal virtud, la presente no es una novedad completa; en su mayor parte se han conservado las disposiciones anteriores, porque ellas están arregladas a los principios jurídicos que rigen nuestras instituciones, y porque, en la práctica, su aplicación no ha reclamado que se modifiquen en manera alguna.

Por tanto, el art. 1° de la presente ley no es otro que el art. 1° del título preliminar del Código reformado, y que por sí solo forma un capítulo. Se ha conservado intacto, no obstante que en el fondo es una disposición expresa de la Constitución Política de la República, porque este artículo, de igual manera que el 2°, viene a ser como base de inferencia en que necesariamente se apoyan varías de las disposiciones subsecuentes.

No puede conceptuarse lo mismo de

los arts. 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del expresado título preliminar reformado, porque ellos están literalmente consignados en el texto de la Constitución, no tendría objeto repetirlos y resultarían superfluos en la Ley Orgánica de que se trata.

En los arts. 3°, 4°, 5° y 6° de la presente se han conservado los preceptos de la anterior y no requieren, por lo misino, explicación particular.

Ha ocurrido con frecuencia que al faltar un miembro de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, no se le ha podido suplir por los ministros sin adscripción permanente, porque éstos se encontraban supliendo a otros magistrados, o estaban ausentes por cualquiera causa; en tales casos, no previstos por la ley anterior, se ha tenido que recurrir a alguna disposición económica del Presidente de la Corte, para no dejar incompleta aquella Sala y en suspenso el curso de la administración de justicia. Como este vacío de la ley anterior no debe quedar a merced de disposiciones económicas, porque entraña jurisdicción, y ésta emana esencialmente de la ley el art. 7° prevé la falta de ministros, con adscripción o sin ella; y previene que dentro del número de los que existan, y a que pueda quedar reducida la Suprema Corte de Justicia, sean cubiertos todos los casos en que por falta de un ministro deba ser integrada cualquiera de las Salas.

El art. 8° contiene una notable diferencia respecto de las disposiciones anteriores, porque éstas daban lugar a dudas e irregularidades de suma importancia.

En efecto, para suplir las faltas del Presidente de la Suprema Corte, la ley establecía que hubiera un primer vicepresidente, y para suplir a éste, un segundo vicepresidente; pero ocurriendo simultáneamente la falta accidental del presidente y la de los vicepresidentes, aunque esto haya acontecido rara vez, el hecho ha sido que entonces no pudo reunirse la Corte en acuerdo pleno y que en esa ocasión ha estado acéfala, lo cual de por si es bastante grave.

Por otra parte, cuando el primer vicepresidente cubría la alta del presidente, otro ministro presidía la 2ª Sala; y como a este último cargo era anexo el carácter de vicepresidente, se presentaba este dilema: o el que presidia accidentalmente la 2ª Sala no era vicepresidente de la Corte contra el tenor de lo que disponían los arts. 13° y 14° del título preliminar del Código reformado; o si lo era, resultaba en absoluto nugatorio el carácter del segundo vicepresidente por laño interrumpida existencia del presidente de la 2ª Sala.

Si se interpretaban en diverso sentido los mencionados artículos, surgían igualmente anomalías de otra índole.

Estos inconvenientes desaparecen restituyendo, en parte, antiguas disposiciones, por virtud de las cuales solamente debe haber un presidente de la Corte, cuyas faltas deban cubrirse por un magistrado; pero en vez de ser designado para este cargo el más antiguo, lo cual podría dar margen a dudas y vacilaciones por haber varios ministros que el mismo día comenzaron a prestar sus servicios, se establece que la falta del presidente sea suplida por los demás ministros en el orden de su elección.

Y aunque esté procedimiento resulta bueno y aceptable para suplir una falta accidental y breve, es a todas luces inadecuado si la permanencia en un puesto de tan alta consideración política ha de ser un tanto duradera. En tal caso no debe quedar confiada la designación a un medio tan incierto y eventual, sino que debe fundarse en conveniencias de orden público y de patriótica selección, que sólo puede encontrarse en la deliberada voluntad de los miembros que forman la Suprema Corte de Justicia. Por eso el art. 8° de la ley nueva establece que las faltas del presidente de la Corte serán suplidas por los otros ministros según el orden de su elección, siempre que la falta no exceda de quince días; y que en caso de mayor tiempo, la Corte, en acuerdo pleno, deberá elegir al ministro que haya de suplir esa falta.

Como el número de empleados que debe tener la Suprema Corte depende de causas eventuales, no ha sido conveniente

fijarlo en la Ley Orgánica, sino remitir ese punto a las disposiciones del presupuesto, que por su misma naturaleza está sujeto a más frecuentes alteraciones. Esto no obstante ha sido necesario determinar en la ley a los principales empleados que ejercen funciones públicas, como son los secretarios y los oficiales mayores; de esto se ocupan los arts. 9° y 10°.

En el capítulo III que traía de los tribunales de circuito no se hace alteración respecto de la ley anterior.

El art. 22°, que corresponde al capítulo IV «De los juzgados de distrito,» introduce la reforma de facultar a la Corte para dispensar el requisito profesional a los secretarios de los juzgados de distrito de los Estados y Territorios Federales.

La razón obvia de esta reforma es la extrema escasez que hay de esta clase de profesionales en algunas entidades políticas, haciéndose la dificultad verdaderamente insuperable, atenta la categoría y la remuneración de estos empleos, por no encontrarse abogados o notarios que acepten ir a desempeñarlos.

En estas mismas razones se funda la disposición del último párrafo del art. 24°, disposición que latente existía ya en la ley anterior.

Al enumerarse en el art. 28° los distritos que corresponden a cada circuito, se ha incluido el distrito de Tehuantepec que se creó por ley posterior al Código que se reforma; y al determinarse en el art. 29° la jurisdicción de cada uno de los juzgados de distrito, se fija al de Tehuantepec la misma que se le señaló al establecerse, o sea, comprendiendo los distritos de Juchitán y Tehuantepec, del Estado de Oaxaca y los cantones de Minatitlán y Acayucan, del Estado de Veracruz, quedando aquellos distritos y estos cantones segregados, respectivamente, de la jurisdicción de los juzgados de distrito de Oaxaca y Veracruz.

El territorio de Quintana Roo se agrega a la jurisdicción del juzgado de distrito de Yucatán, por ser el más inmediato, no creándose allí un nuevo juzgado, porque no lo reclama: aún las necesidades de ese territorio.

En el capítulo V, «De la competencia de los tribunales federales,» se ha mantenido el texto del Código anterior con insignificantes modificaciones que no alteran sus preceptos. Tales son: haberse incluido en este capítulo, por ser donde corresponde, la competencia de la Corte para conocer de la responsabilidad del Procurador General de la República; y haberse suprimido el art. 51° del citado Código, que se refiere al procedimiento y no a la organización de los tribunales, y que, por lo tanto, se ha trasladado a su lugar correspondiente en el código respectivo.

En el capítulo VI de la presente ley, que trata de la competencia de la Suprema Corte en Tribunal Pleno, figuran dos nuevos incisos. El primero es de todo punto indispensable, porque su falta en las leyes anteriores, así como la falta del correspondiente procedimiento, tenía sin aplicación posible la ley sustantiva que otorga el recurso de indulto necesario. En cuanto al segundo inciso, no existiendo antes una disposición precisa acerca de este punto de competencia, la Suprema Corte había podido suplirlo por medio de los acuerdos que la práctica sugirió. La ley consigna ahora estas disposiciones llenando el vacío del Código anterior, y en el lugar debido de otra ley respectiva se detallará el procedimiento.

A raíz de la competencia de la Suprema Corte, trata la ley, en su capítulo VII, de las atribuciones del mismo tribunal, para que no haya solución de continuidad entre todo lo que compete y atañe exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia en Tribunal Pleno.

Este capítulo establece algunas reformas. Es la primera la que corresponde a la parte final del artículo 8°, sobre elección de presidente de la Corte, en los casos de faltas que excedan de quince días. La segunda se refiere a las visitas que deban hacerse a los tribunales de circuito y a los juzgados de distrito. La disposición anterior resultó poco eficaz en este punto, porque estando restringido el carácter de visitador a un

magistrado de la misma Corte o al Procurador General de la República, difícilmente podía alguno de estos funcionarios desprenderse de sus cotidianas ocupaciones en el lugar de su residencia para trasladarse a lugares lejanos a practicar una visita, si no era en casos de suma importancia. Y en verdad que no llegó a practicarse ninguna de estas visitas durante la vigencia del Código anterior, sino solamente en Veracruz y en Tlaxcala, que por su proximidad a esta capital y por su fácil vía de comunicación, pudieron ser visitados durante un corto número de días. La ley actual deja a la discreción de la Suprema Corte la facultad de nombrar un visitador, sin que precisamente deba serlo alguno de sus ministros o el Procurador; y de esta suerte, la disposición sobre visitas será, sin duda alguna, más fácil de llevarse a la práctica en todas las veces que sea necesario. Por último, en esta parte de la ley se consignó, como atribución de la Corte, la de fijar cada año los períodos de vacaciones de que deben disfrutar los funcionarios y empleados en la Administración de Justicia federal; disposición que concuerda con el precepto que creó esas vacaciones que más adelante aparece.

El capítulo 8° trata de las atribuciones del Presidente de la Suprema Corte, y en él no se ha hecho otra innovación que la de suprimir el voto de calidad de que gozaba este funcionario.

En materia judicial se considera como la mayor injusticia que en un tribunal un magistrado tenga doble voto. Los votos deben ser todos iguales, y dar al presidente del tribunal un voto doble equivale a investirlo con la representación de dos magistrados y a poner en sus manos la resolución de cuestiones que parecerán como definidas por una mayoría que en realidad no existe; lo cual no es legitimó ni conveniente.

Y es aún más grave el caso, si el Presidente de la Corte, en uso de sus facultades, se reserva el estudio y despacho de algún negocio para presentarlo al acuerdo cuando una ocasión propicia le permita hacer prevalecer determinado fallo, mediante la calidad de su voto.

La manera de proceder en los casos de empate podría ser la de retirar el asunto para sujetarlo de nuevo a votación cuando haya un número impar de magistrados, o escogiendo otro medio cualquiera, que resuelva la dificultad, lo cual se ofrece desde luego como materia del reglamento.

El capítulo IX, que define la competencia de las Salas de la Suprema Corte, contiene varias reformas.

En primer lugar, se dividieron el conocimiento y decisión de las competencias que antes correspondían exclusivamente a la 1ª Sala, entre ésta y la 2ª. Según la ley anterior, la 1ª Sala tenía a su cargo casi todas las decisiones que se referían al despacho de la Suprema Corte en Salas, y quedaban asignados a la 2ª y a la 3ª aquellos asuntos que muy rara vez ocurren, según lo atestigua la práctica de muchos años. La división del trabajo es una de las condiciones más eficaces para la prontitud y acierto en la administración de justicia, y por esta razón se distribuyó la decisión de las competencias entre las Salas 1ª y 2ª. Se asignaron a la 1ª las competencias del orden civil, porque siendo las cuestiones que en este ramo se suscitan más complexas y de mayor estudio, debían encomendarse a la Sala que tiene mayor número de ministros; y se reservaron para la 2ª Sala las competencias del orden penal, que están sujetas a reglas más sencillas, y en que la ley el criterio judicial y la práctica, ofrecen mayor facilidad para resolver con toda justificación estas cuestiones.

Al tratar de las competencias cuyo conocimiento queda sujeto a la 2ª Sala, se incluyó el de las que se susciten con tribunales del fuero militar, que no existía en la ley anterior, y que es innegable que debe estar expresamente consignado, para evitar que este género de competencias quedara sin solución por falta de tribunal que legalmente pudiera dirimirlas, o que se resolvieran mediante una facultad que, por más lógica y racional que se la suponga, no deriva categóricamente de la ley.

La ley anterior confería a la 1ª Sala, de una manera general, la facultad de calificar

las excusas y recusaciones de los ministros de la Corte, pero esto se prestaba a interpretaciones poco regulares tratándose del tribunal pleno o de cada una de las Salas, y hacía consiguientemente confusa su aplicación.

La ley actual comete a cada Sala, como es adecuado, la facultad de calificar los impedimentos y excusas de sus respectivos miembros, integrándose, para hacer la calificación, en la forma que la ley previene en otro lugar.

En el inciso b) de la fracción III del artículo 43° se ha suprimido la parte final del precepto anterior, en que se explicaba cómo debía entenderse la Constitución Política de la República para fijar el carácter y condiciones en que la Federación es parte en las controversias en que interviene. Tal explicación, lejos de responder a su objeto, era causa de las más divergentes aplicaciones, porque sin embargo de ella, se ha visto a diario ventilarse en los juzgados de distrito asuntos en que la Federación es parte, y que, en la práctica, solamente se ha ocurrido a la Suprema Corte desde la 1ª instancia, cuando se ha interpuesto demanda contra la Federación y no cuando ella exige el cumplimiento de alguna obligación o contrato. Para evitar restricciones indebidas, por inciertas y complexas, el Ejecutivo cree que debe omitirse en la ley aquella interpretación, y dejar al criterio de la Corte, que fije, en cada caso, según sus genuinas atribuciones, la aplicación de un texto constitucional.

Se atribuyó a la 3ª Sala, en este capítulo, la facultad de calificar los impedimentos, excusas y recusaciones de los magistrados de circuito, lo cual no estaba previsto en la ley anterior.

Por último, en el artículo 45° se encarga a las Salas 2ª y 3ª conocer por turnos en la revisión de expedientes, que antes sólo correspondía a la 3ª; y se expresó con toda claridad a qué clase de expedientes se refiere este precepto, porque los asuntos de orden puramente civil no pueden ameritar una revisión de oficio.

En el capítulo X, «De las competencias de los tribunales de circuito» aparecen importantes diferencias respecto de la ley anterior.

Los delitos de violación de inmunidad que consigna el capítulo II, título XV, libro III del Código Penal, no podían tener menor consideración, por lo que mira a la competencia, que los casos que la misma ley colocaba en el conocimiento de los tribunales de circuito tratándose de los cónsules extranjeros residentes en la República. Por otra parte, la materia a que corresponden esos delitos, tanto por su delicadeza, como por el interés que en ellos pueden tener las relaciones diplomáticas con las naciones extranjeras, debe ser encomendada a tribunales superioras, que en su elevada esfera sientan más de cerca, por decirlo así, la alta consideración que estas relaciones merecen. Por eso el Ejecutivo ha creído que estos casos deben caer bajo la competencia de los tribunales de circuito, y así lo estableció en la fracción III del artículo 46° de la ley a que este informe se refiere.

En la fracción V de este mismo artículo quedó suprimida la parle de la anterior ley que dice: "…y de las controversias del orden civil en que los mismos sean parle, por razón de sus funciones". Esta supresión obedece, por una parte, a que no hay causal alguna que aliente aquella disposición, y por otra, a que de subsistir, resulta del todo irregular. Las gestiones judiciales que a un cónsul atañen, en casi todos los casos, consisten en promociones como representante de los súbditos de su nación; sea un ejemplo: gestionar en los juicios de sucesión y en las tutelas cuando no se presentan personalmente los interesados; y estas gestiones son de tal naturaleza, que a pesar de la prevención anterior vigente, que hoy se ha suprimido, nunca se llevó uno solo de estos asuntos al conocimiento de los magistrados de circuito; quedando todos los casos que ocurrieron, y debiendo continuar bajo la jurisdicción del fuero común, que es la que les compete.

La fracción II del artículo 47° restringe la jurisdicción para la revisión de sentencias,

a los casos solamente en que la ley la establezca, porque en otros expedientes no cabe, conforme a la misma ley, hacer de oficio esa revisión.

El capítulo XI establece la competencia de los jueces de distrito; y en esta materia ha sido indispensable hacer varias reformas y adiciones.

En la fracción III del art. 48 se ha cuidado de concordar y sancionar, respecto del juicio de amparo, la limitación establecida en la adición que últimamente se hizo al artículo 102 de la Constitución Federal.

La fracción VII precisa el sentido y las condiciones en que los jueces de distrito deben conocer de los privilegios exclusivos, que la ley anterior designaba de una manera general. De aquel modo, se llevaban, o podían llevarse, al conocimiento de la autoridad federal, conflictos meramente particulares, en los que no tenía interés alguno la Federación; sea, por ejemplo, el que surge entre el dueño del privilegio y un tercero que sin título hace uso del mismo. La prevención se explica como de la competencia federal, cuando se trata de la existencia, nulidad, legitimidad o extensión del título, porque en todos estos casos se halla complicada la autoridad que lo concedió, es decir, se pone a discusión su acto como autoridad federal, y es evidente que entonces no puede el juez ordinario conocer de la controversia. En este sentido lo aclara, en la presente ley, la fracción aludida.

Se han suprimido las fracciones XX y XXI del art. 61 del Código anterior, la primera, porque está comprendida en la última fracción del art. 48 de la nueva ley, y la segunda, porque lo está igualmente en las nuevas fracciones XXVI, XXVII y XXIX.

Las fracciones XXIV y XXV de la ley anterior, quedaron refundidas en la fracción XXII del art. 48 de la actual, porque la unidad de su objeto y la identidad de su razón lo exigen claramente.

La fracción XXIII encierra una importante novedad; se funda en la preferencia que a la nación, como un solo ser político, compete en estos casos. Su seguridad, su decoro y sus relaciones diplomáticas están en ellos vivamente interesados, para dejarlos a merced de autoridades locales, aun de la más ínfima categoría, sin una posibilidad perfectamente legal que permita la intervención de sus autoridades en el ramo judicial.

También se tuvo presente, al redactar esta fracción, lo que expresa, en la parte conducente y aplicable, el acuerdo que el Ejecutivo de la Unión dictó con motivo de la competencia para conocer del delito de heridas causadas a Nicolo Gervasio, marinero del bergantín goleta italiano «Margarita,» surto en el puerto de Veracruz; acuerdo dictado por conducto de la secretaría de Justicia a cargo entonces del Sr. Lic. D. Ignacio Mariscal, el día 19 de marzo de 1869, y que obra inserto bajo el número 6560, en la página 557 del tomo X de la Colección de Leyes ordenada por los licenciados Manuel Dublán y José María Lozano.

Por otra parte, es innegable que la navegación en ríos, lagos y canales interiores de comunicación, ya con el mar, ya con varios Estados, si en estas vías está permitida la navegación de buques extranjeros, corresponde a la Federación. Los siniestros, los abordajes, los naufragios, los delitos cometidos por la tripulación, por sus capitanes, y una multitud de actos cometidos en todos estos buques, muy particularmente si son extranjeros, caen bajo la jurisdicción federal conforme a las fracciones I y II del art. 97 y a la fracción XV del art. 72 de la Constitución General de la República. Estos actos serian causa de innumerables dificultades en conflictos de jurisdicción entre varios Estados, si a éstos les correspondiera; faltaría unidad en las leyes y en su aplicación no sólo por la nacionalidad del buque, sino también por el lugar vago e inseguro en que el acto se hubiere cometido.

Bien es cierto que hay delitos en que parece que no debe admitirse la jurisdicción federal, como son aquellos que sólo se persiguen a instancia de parte: adulterio, rapto, estupro, injurias, etc.; pero, entre un extremo y otro, es preferible dejar asegurada la jurisdicción federal que entrar en distin-

ciones y excepciones que complicarían la jurisdicción en general. Puédase citar en apoyo de lo dicho la ejecutoria que se dictó con motivo de un conflicto habido en el rio Grijalva entre los vapores «Fénix» y «Frontera.» fecha 26 de agosto de 1880.

Además, la citada fracción I del art. 97 de la Constitución atribuye a los tribunales federales el conocimiento de las controversias que se susciten sobre aplicación de leyes federales, salvo cuando se trate solamente de intereses particulares; que la fracción segunda del mismo artículo de la competencia a los mismos tribunales sobre cuestiones de derecho marítimo, y por último que la fracción XIV del art. 72 faculta al Congreso de la Unión muy ampliamente para legislar sobre derecho marítimo; de todo lo cual se desprende claramente lo fundado de la competencia federal sobre los puntos que la expresada fracción XXIII del art. 48 comprende y determina.

Las fracciones XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX son las correspondientes de la ley anterior que se hallaban comprendidas en la clase genérica de «Derecho marítimo,» y que ha sido conveniente detallar para evitar cuestiones de competencia que dilatan y perjudican las resoluciones judiciales sustantivas.

En la fracción XXX se agregó un punto, callado en la ley anterior, y que daba lugar a que los jueces de distrito se avocasen el conocimiento de los delitos de circulación de moneda falsa, sin fundamento claro y explícito en la ley.

La fracción XXXII hace una rectificación a su correspondiente anterior. Esta daba la competencia a los juzgados de distrito en todos los casos de falsificación de sellos, cuños, troqueles, punzones y marcas creados o establecidos por la ley federal; y esto podría dar lugar a graves errores, porque es posible que existan sellos, marcas, etc., creados por ley federal para uso de empresas o de particulares, cuya falsificación no tendría por qué corresponder a la competencia de un juez de distrito. Otra cosa bien distinta es, que esos sellos, marcas, etc., pertenezcan o sean de la Federación; y en este sentido queda definida la disposición de la antigua ley.

La fracción XXXVIII estaba igualmente expresada en términos inadmisibles. De ella resultaba que toda clase de delitos, oficiales o no, cometidos por los asentistas y proveedores del ejército o de la marina nacional, debería ser del conocimiento del juez federal. La exposición se halla ahora limitada por su texto, como sin duda lo estaba por su espíritu en la anterior ley, a los delitos oficiales, y siempre que no sean del fuero militar, cuya jurisdicción debe, a su vez, ser respetada.

En la fracción XLIX se ha omitido la citación del artículo 188° del Código Penal, que se expresaba en la ley anterior, por ser en absoluto inconducente, y porque, sin duda, obraba allí por algún error involuntario.

La última disposición de este artículo se ha conservado de su anterior relativa, comprendiendo en sus términos cualquiera otro asunto del fuero federal en cuya omisión se pudiere haber incurrido, y a la vez la disposición del artículo 62 de la ley anterior, que se refería a los asuntos de jurisdicción voluntaria y que resultaba verdaderamente superfina; porque si la ley encomienda alguno de esos asuntos al conocimiento del juez de distrito, con ella sola basta para sancionar la competencia.

El capítulo XII encierra varias disposiciones complementarias transcritas en su mayoría de la ley anterior. Figura en él como novedad, un precepto en que se prevé el caso de que un magistrado de circuito o juez de distrito tenga que salir urgentemente del lugar de su residencia para la práctica de diligencias que reclamen su intervención inmediata. En estos casos, y siempre que la ausencia no exceda de tres días, bastará un aviso a la Suprema Corte con expresión del objeto y naturaleza de la diligencia, para que este tribunal pueda conocer y juzgar acerca de la necesidad del hecho. Cuando aquellos funcionarios no vieran necesaria su intervención directa en las diligencias que hayan de practicarse fuera del lugar de su residencia, podrán encomendarlas a los jueces locales, autorizándolos en materia

penal, para instruir la causa hasta ponerla en estado de sentencia. En esto se ocupan los artículos 51° y 52° de la ley.

El art. 53°, que por razones de palpable conveniencia para el buen servicio de la administración de justicia, prohíbe a los funcionarios y empleados judiciales de la Federación desempeñar determinados cargos y profesiones, hace una excepción, no contenida en la ley anterior, respecto de los suplentes de los magistrados o jueces propietarios; excepción que, además de ser justa, es impuesta por las circunstancias; porque sin ella sería en extremo difícil encontrar abogados que quisieran aceptar aquel carácter.

Igualmente se consignó la debida excepción para los empleos o cargos de enseñanza, que son, sin duda, a los que debe con traerse el privilegio, en provecho de la enseñanza misma; pero no se ha hecho uso de la frase; «instrucción pública,» porque existen bajo esa comprensión varios empleos a los cuales no puede referirse la ley que establece la excepción, porque carecen de razón para gozarla; como ejemplo: los encargados de llevar contabilidad, o de hacer pagos, o en general de atribuciones que no constituyen la enseñanza.

El art. 57° introduce en el ramo judicial del fuero federal una disposición justa y bien recibida ya en el fuero común; tal es la que establece un período de vacaciones cada año para los funcionarios y empleados, sin perjuicio de quedar siempre expedita la administración de justicia, como lo ordena y reclama la Constitución Política de la República.

El art. 58°, que es el último de la ley, contiene la prohibición de que los ministros o sacerdotes de cualquier culto no podrán desempeñar cargo o empleo alguno en el poder judicial de la Federación. La causa de este precepto enraíza en la más sana política; porque los sacerdotes de cualquiera religión no se hallan libremente en condiciones de cumplir y hacer cumplir reglas que pueden estar en conflicto con sus creencias y prácticas rituales, y la ley debe establecer, independientemente de todo culto, su imperio soberano.

El Ejecutivo estima que es notoria a todas luces la radical trascendencia que encierran los preceptos de esta ley orgánica, por cuanto procuran la perfecta ejecución de una ley constitucional, de importancia suma, dándole el desenvolvimiento necesario; que los puntos de novedad que se han instituido, reclamaban particular sanción legal, después que se hubieron revelado en las más variadas formas los hechos y las causas que constituyen su origen y fundamento; y, por último, que para hacer en todo eficaces aquellas disposiciones, sugeridas por un cuidadoso estudio, y algunas robustecidas ya por la práctica, era debido reunirías en un solo cuerpo homogéneo y propio, procurando siempre su perfeccionamiento.

De esta manera, el Ejecutivo se ha esforzado en satisfacer la necesidad imperiosa que motivó la autorización del decreto de fecha 24 de mayo de 1906.

Al dar cuenta con este informe a esa H. Cámara, ruego a ustedes se sirvan hacerle presente y aceptar para sí, mi atenta y distinguida consideración.

Libertad y Constitución. México, 28 de abril de 1909.– Fernández.-

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.– Presentes.

Diciembre 18 de 1908.- Ley de Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentos de sus Funciones.

SECCIÓN 1ª.- El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión, por decretos de 24 de mayo de 1906 y 13 de diciembre de 1907, he tenido a bien expedir la siguiente

Ley de Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentos de sus Funciones.

TÍTULO PRELIMINAR.

De las funciones del Ministerio Público Federal.

Artículo 1.

El Ministerio Público Federal es una institución encargada de auxiliar la administración de justicia en el orden federal; de procurar la persecución, investigación y represión de los delitos de la competencia de los tribunales federales; y de defender los intereses de la Federación ante la Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito.

Artículo 2.

El Ministerio Público auxiliará al Poder Judicial de la Federación en el ejercicio de sus funciones, haciendo las promociones que sean conducentes tanto en el orden civil como en el penal, con arreglo a la ley.

Representará también al Ejecutivo, ejercitando las acciones que a éste correspondan y defendiéndolo, en los casos en que fuere demandado. Esto último se entiende, ya sea que la demanda se entable contra alguno de los secretarios de Estado o resoluciones dictadas en su nombre, o por contratos celebrados en su representación; ya sea que la acción se dirija contra jefes de oficinas que dependan inmediatamente de algún ministerio, con motivo de los ramos del servicio público para que están constituidas y que hayan estado autorizadas para celebrar contratos o ejecutar los actos que sean materia de la demanda o del ejercicio de la acción.

Artículo 3.

El Ministerio Público Federal intervendrá también en las controversias a que se refieren los artículos 97 y 101 de la Constitución, en los casos y formas que determine la ley.

Artículo 4.

Vigilará que tengan exacto cumplimiento las resoluciones o sentencias dictadas por los tribunales federales, para lo que hará las promociones que estime procedentes, ya sea ante las autoridades judiciales, ya ante las administrativas.

Artículo 5.

El Procurador general de la República así como los funcionarios del Ministerio Público, dependen inmediata y directamente del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Justicia.

Las otras Secretarias de Estado serán igualmente conducto para comunicarle los acuerdos e instrucciones que el Presidente de la República dictare en los asuntos de sus respectivos ramos.

TÍTULO I.

DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO PÚBLICO.– DE SU NOMBRAMIENTO.– REQUISITOS PERSONALES QUE DEBEN TENER.– NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES.– MODO DE LLENAR LAS FALTAS.– PROTESTAS.

CAPÍTULO I.

Reglas generales.

Artículo 6.

El Ministerio Público se compone de un Procurador General de la República, jefe del Ministerio Público, de un agente substituto, primer adscripto, de dos agentes auxiliares, segundo y tercer adscriptos y de los agentes necesarios para que cada tribunal de circuito y cada juzgado de distrito tenga un adscripto.

El Ejecutivo, en casos especiales, podrá nombrar otros agentes cuando lo juzgue necesario.

La oficina del Ministerio Público tendrá, además, los empleados que determine la ley.

Artículo 7.

El Procurador General de la República será nombrado y removido libremente por el Ejecutivo. Los agentes serán nombrados por éste, a propuesta en terna del Procurador; y de la misma manera los demás empleados de

su oficina, salvo en todo caso la facultad consignada en la fracción II del art. 85° de la Constitución.

Artículo 8.

Para ser Procurador de la República se necesita ser mayor de treinta años, abogado, mexicano por nacimiento, ciudadano en el ejercicio de sus derechos y pertenecer al estado seglar.

Artículo 9.

Para ser agente del Ministerio Público se requiere ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, mayor de Veinticinco años y abogado.

Artículo 10.

Las fallas absolutas o accidentales del personal que forma el Ministerio Público Federal se suplirán de la manera siguiente;

I. Las del Procurador de la República, por el substituto y por los agentes auxiliares, según el orden numérico de su adscripción;

II. Las de los agentes auxiliares del Procurador, las de los agentes adscriptos a los tribunales de circuito y juzgados de distrito en el Distrito Federal, recíprocamente, o según la designación que en cada caso haga el Procurador de la República;

III. Las de los demás agentes adscriptos a los juzgados de distrito, por un agente interino, o por los jefes de Hacienda, los administradores de la Renta del Timbre o los del ramo de Correos, en el orden de esta enumeración.

Artículo 11.

En los lugares donde no resida juez de distrito y en que los jueces locales tengan que auxiliar a la justicia federal, las funciones del Ministerio Público, si fueren necesarias, se ejercerán por el administrador del Timbre y en su defecto por el de Correos.

Artículo 12.

Los funcionarios del Ministerio Público otorgarán, antes de tomar posesión de su cargo, la protesta constitucional de la manera siguiente:

Ante la Secretaría de Justicia la otorgará el Procurador de la República; ante éste los agentes del Ministerio Público residentes en esta capital, y los de fuera de ella, ante la primera autoridad política del lugar en que tengan que ejercer sus funciones.

Artículo 13.

De toda acta se remitirán dos ejemplares a la Secretaría de Justicia para los efectos legales; el tercero, en su caso, a la oficina del Procurador General de la República.

CAPÍTULO II.

Atribuciones y deberes del Procurador de la República y de los agentes del Ministerio Público Federal.

Artículo 14.

El Procurador General de la República es el Jefe del Ministerio Público y el conducto ordinario del Ejecutivo respecto del personal de dicho Ministerio. Tendrá bajo sus órdenes inmediatas a los agentes que lo componen y a los que los suplen en su caso.

Artículo 15.

Son atribuciones del Procurador general de la república:

I. Cuidar de que la justicia federal se administre pronta y exactamente, promoviendo lo que estime conducente al efecto;

II. Demandar, contestar demandas y formular los pedimentos procedentes en los negocios en que deba intervenir ante la Suprema Corte;

III. Promover por sí o por medio del auxiliar que designe:

a). En los negocios civiles y penales de la competencia de los tribunales federales;

b). En las competencias a que se refiere el Código de Procedimientos Federales;

c). En las controversias determinadas en el art. 100 de la Constitución Política de la República, cuando lleguen a conocimiento de

la Suprema Corte;

IV. Cumplir las instrucciones que reciba del Ejecutivo por conducto de las secretarías de Estado; pedírselas cuando lo estime necesario; darlas en igual caso a los agentes; expedir a éstos circulares de observancia general y dictar todas las medidas económicas y disciplinarias que crea convenientes para uniformar la acción del Ministerio Público.

Cuando en concepto del procurador de la República, las instrucciones dadas por los respectivos ministerios no estuvieren arregladas a derecho, hará las observaciones convenientes por escrito, sin perjuicio de llevar adelante todas las gestiones oportunas para que no se perjudiquen los derechos e intereses de la Federación. Si el Ejecutivo insistiere en su parecer, el Procurador las ejecutará fielmente o mandará que las ejecute el agente a quien se las trasmita.

Cuando el procurador o los agentes hayan pedido instrucciones en determinado asunto, o autorización para desistirse de cualquiera acción o excepción a alguna secretaría de Estado y transcurra el término de quince días, o el que la ley señale, sin haberlas recibido, el Procurador o agente, que haya pedido los unas o solicitado la otra, procederá a formular su pedimento como lo juzgue procedente, con arreglo a derecho, en el primer caso, y tendrá por concedida la autorización en el segundo;

V. Encomendar a cualquiera de los agentes de la capital, independientemente de sus adscripciones, el despacho de determinado negocio;

VI. Intervenir personalmente en todo o en parte en determinados negocios, cualquiera que sea el tribunal federal que conozca de ellos, cuando lo juzgue conveniente o cuando lo acuerde el Ejecutivo;

VII. Designar a cualquiera de sus auxiliares para que lo represente en los negocios que tenga que despachar;

VIII. Alegaren los juicios de amparo, ante la Suprema Corte, por si o por medio de sus agentes, en los casos que lo estime necesario;

IX. Rendir informe sobre los asuntos en que esté interviniendo, cuando se lo pida el Ejecutivo o cuando lo crea necesario para la mejor inteligencia del negocio, o para solicitar instrucciones de la secretaría de Estado correspondiente;

X. Recabar de todos los tribunales y oficinas públicas, sean federales o locales, los informes, datos, noticias o copias simples o certificadas que creyere necesarios para el ejercicio de sus funciones;

XI. Cuidar de que los funcionarios del Ministerio Público desempeñen con exactitud los deberes de su empleo y proponer a la Secretaría de Justicia las medidas que crea conducentes a la mejor disciplina del Ministerio Público y a la unidad y eficacia de su acción;

XII. Remitir con oportunidad ternas al Ejecutivo, para cubrir las faltas absolutas o temporales de los agentes del Ministerio Público y proponer a los empleados de su dependencia, cuando se produzcan faltas de la misma naturaleza;

XIII. Pedir que se haga efectiva la responsabilidad en que hayan incurrido los magistrados de circuito, jueces de distrito, jueces locales, cuando funcionen en auxilio de la justicia federal, sus respectivos secretarios, escribanos de diligencias y los agentes del Ministerio Público, en los negocios en que hayan intervenido;

XIV. Imponer las correcciones disciplinarias, de que habla esta ley, a los agentes y empleados subalternos del Ministerio Público por las faltas que cometieren en el desempeño de su encargo y dar cuenta al Ejecutivo de aquellas que crea que ameriten su separación;

XV. Calificar las excusas que tuvieren los agentes para intervenir en determinado negocio;

XVI. Otorgar licencias que no excedan de quince días a los agentes y empleados del Ministerio Público Federal, dando aviso a la Secretaría de Justicia.

XVII. Examinar los estados de negocios que mensualmente deben remitirle los agentes y proceder a lo que corresponda en defensa de los intereses fiscales;

XVIII. Iniciar ante la Secretaría de Justicia las leyes y reglamentos que considere necesarios para la buena administración do justicia;

XIX. Las demás que le encomienden las leyes; y las que se le prevengan por la Secretaría de Justicia.

Artículo 16.

Son atribuciones y deberes de los agentes del Ministerio Público:

I. Demandar, contestar demandas y formular los pedimentos procedentes en los negocios de la competencia de los tribunales o juzgados a que estén adscriptos;

II. Ejercitar la acción penal desde las primeras diligencias de investigación;

III. Sujetarse a las instrucciones que reciban del Procurador de la República y pedirle las que estime necesarias para el despacho de determinados negocios. Cuando las instrucciones que reciban del Procurador para promover, formular pedimentos o conclusiones difieran de su opinión personal, dirigirán al expresado funcionario por escrito, dentro del tiempo legal, las observaciones que crean oportunas. Si el Procurador de la República insistiere en su parecer, y éste les fuere dado por escrito, se sujetarán a él los agentes;

IV. Interponer y proseguir en tiempo y forma los recursos que procedieren;

V. Dar al Procurador de la República una noticia mensual de todos los negocios que se sigan en el tribunal o juzgado de su adscripción, expresando el estado que guarden e indicando las dificultades que presenten para su despacho;

VI. Dar aviso de la iniciación de los procesos y negocios civiles que se promuevan en el tribunal o juzgado en que funcionen;

VII. Formar expedientes con los oficios, circulares, instrucciones y documentos que reciban y que no sean de los que tengan que presentar en los tribunales, haciendo un inventarío de ellos;

VIII. Manifestar al Procurador los motivos de excusa que tuvieren para intervenir en los negocios en que se consideren impedidos;

IX. Concurrir a las diligencias judiciales, audiencias y visitas de cárcel que practiquen los tribunales o juzgados a que están adscriptos, e informar del resultado de la visita al Procurador de la República;

X. Dar parte al mismo funcionario de las irregularidades y deficiencias que noten en la administración de justicia federal;

XI. Cumplir exactamente las instrucciones que reciban del Procurador;

XII. Observar las demás disposiciones que las leyes les encomienden.

Artículo 17.

Tanto el Procurador como los agentes, al pedir instrucciones a cualquiera Secretaría de Estado, deberán exponer el caso y emitir la opinión que sobre él hayan formado con los elementos de derecho que sean pertinentes. Lo mismo harán los agentes cuando pidan instrucciones al Procurador.

Cuando la urgencia del caso lo requiera, usarán de la vía telegráfica, y el Procurador o el agente que designe se presentará a la Secretaría de Estado que corresponda para recabar las instrucciones, que podrán darse verbalmente.

Artículo 18.

El Ministerio Público, en los casos de delito infraganti, puede dar a los individuos de la policía judicial las órdenes de aprehensión que procedan, y todas las que conduzcan a dar eficacia a la acción pública de que está encargado. En estos casos, hará sin demora la consignación del hecho a la autoridad judicial competente.

Artículo 19.

El Ministerio Público, al formular sus pedimentos ante los tribunales, hará una

exposición metódica y sucinta de los hechos conducentes, propondrá las cuestiones de derecho que de ellos surjan, emitiendo su juicio y terminará por medio de proposiciones claras y precisas en las que citará las leyes aplicables que las fundan.

Artículo 20.

El Ministerio Público, como representante de la Administración Fiscal, no podrá entablar demandas del orden civil federal, ni confesarlas, sin expresa instrucción de la Secretaría de Estado correspondiente; pero tiene el derecho de indicar al Ejecutivo las acciones que crea deben ejercitarse en provecho de la Federación o del Fisco.

Artículo 21.

En los casos en que esté interesado el Fisco; ni el Procurador ni los agentes podrán, sin instrucción expresa de la Secretaría de Hacienda o de la que corresponda:

I. Desistir de las demandas o acciones civiles entabladas;

II. Pedir el sobreseimiento, aun cuando a su juicio no se encuentre plenamente comprobada la existencia del delito o la culpabilidad de la persona o personas a quienes se atribuye;

III. Dejar de interponer los recursos procedentes contra las resoluciones judiciales desfavorables a la hacienda pública;

IV. Desistirse de una acción penal o de algún recurso interpuesto.

V. Pedir que se conceda la libertad o que se declare la irresponsabilidad del inculpado.

TÍTULO II.

Incompatibilidades, Impedimentos, Licencias, Residencia de los funcionarios.

Correcciones disciplinarías.

CAPÍTULO I.

Incompatibilidades. Impedimentos. Licencias.

Artículo 22.

El Procurador General de la República y los agentes del Ministerio Público Federal estarán impedidos:

I. Para desempeñar otro cargo o empleo de la Federación, de los Estados, Distrito o Territorios Federales, salvo lo que disponga la Ley de Presupuestos;

II. Para ser apoderados judiciales, síndicos, árbitros de derecho, notarios, agentes de negocios o asesores y aun para ejercer la profesión de abogado ante los tribunales, excepto en causa propia.

Artículo 23.

El Procurador y sus agentes están en el deber de excusarse en lodos los casos en que conforme a los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales estén impedidos para poder intervenir.

Artículo 24.

La calificación de las excusas de los agentes del Ministerio Público, la hará el Procurador General de la República, quien dará en todo caso aviso inmediato de aquélla a la Secretaría de Justicia.

Si el Procurador calificare como buena la excusa que se le hubiere presentado, lo comunicará al agente, al juez o tribunal a que esté adscripto y a quien deba substituirlo.

Artículo 25.

Cuando el Procurador de la República se considerare impedido para conocer de algún negocio, lo pondrá en conocimiento de la Secretaría de Justicia para que ésta determine quién deba substituirlo.

Artículo 26.

Los funcionarios o empleados del Ministerio Público Federal no pueden abandonar el lugar de su residencia, ni dejar de desempeñar las funciones de su encargo o empleo sin la licencia previa correspondiente. Cuando el Procurador General de la República tuviere que hacerlo, por omisión del Ejecutivo, o con otro motivo de sus funciones, dará previamente aviso a la Secretaría de Justicia para que ésta determine si

ha de llevarse o no a efecto su separación.

Artículo 27.

Las licencias que se concedan por el Ejecutivo a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Federal, se regirán por lo dispuesto en la ley respectiva.

Artículo 28.

Cuando el Ejecutivo nombre en comisión, para algún ramo del servicio público, a cualquiera de los funcionarios del Ministerio Público Federal, se entenderá concedida la licencia con goce de sueldo por el tiempo que dure la comisión, si ésta no fuese retribuida.

CAPÍTULO II.

Residencia de los funcionarios del Ministerio Público.

Artículo 29.

El Procurador de la República, sus auxiliares y empleados, así como los agentes adscriptos a los tribunales de circuito y juzgados de distrito en el Distrito Federal, residirán en la capital de la República. Los demás agentes residirán en el lugar de sus respectivas adscripciones.

Artículo 30.

El Procurador General de la República, cuando el mejor servicio público lo exija, consultará a la Secretaría de Justicia el cambio de adscripción de los agentes.

CAPÍTULO III.

Correcciones disciplinarias.

Artículo 31.

El Procurador de la República podrá imponer a los funcionarios y empleados del Ministerio Público, por sus faltas y según la naturaleza de ellas, las correcciones siguientes:

I. Apercibimiento o amonestación;

II. Multa que no exceda de cien pesos;

III. Suspensión de sueldo y empleo que no excedan de un mes.

Artículo 32.

Para la imposición de toda corrección disciplinaria se instruirá el expediente respectivo que contenga el motivo de ella.

Artículo 33.

El funcionario o empleado, a quien se impusiere alguna de dichas correcciones, será oído en justicia, si lo solicitare al notificarle o comunicarle la imposición de ella.

Al efecto, elevará dentro de tres días un escrito alegando lo que crea conveniente a su defensa y acompañando, si hubiere hechos que justificar, los comprobantes que estime oportunos.

Artículo 34.

Los tribunales y juzgados, en caso de tener conocimiento de alguna falta de los agentes, no penada por la ley, darán parte al Procurador General de la República para que la corrija.

Artículo 35.

Si la falta fuere de palabra o por escrito al juzgado o tribunal ante quien ejerzan sus funciones, éstos remitirán copia de lo conducente o del acta de la audiencia, en que se harán constar las ofensas, para que el Procurador General de la República imponga la corrección que proceda, o dé parte al Ejecutivo cuando considere grave dicha falla.

Artículo 36.

De toda corrección disciplinaria que imponga el Procurador de la República, dará aviso a la Secretaría de Justicia, en el término de tres días.

TÍTULO III.

Responsabilidades. Disposiciones generales.

CAPÍTULO I.

Responsabilidades.

Artículo 37.

El Procurador General de la República, el agente substituto primer adscripto, el segundo y tercero auxiliares y los demás agentes del Ministerio Público son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, por los delitos oficiales y por las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo.

Artículo 38.

Si los delitos fuesen del orden común, tanto el Procurador como los agentes, quedarán sujetos a los tribunales ordinarios que fueren competentes; pero al proceder contra ellos se dará aviso a su superior jerárquico.

Artículo 39.

Los juicios de responsabilidad por delitos oficiales que se sigan contra el Procurador General de la República y agentes del Ministerio Público, se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para los funcionarios judiciales.

CAPÍTULO II.

Disposiciones generales.

Artículo 40.

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público Federal concurrirán a la oficina durante las horas de despacho de los tribunales ante los cuales funcionen, sin perjuicio de hacerlo todas las horas útiles del día, cuando la urgencia de los negocios así lo exija, a juicio del Procurador.

Artículo 41.

Al Procurador General de la República, se le entregarán los autos para su despacho, bajo conocimiento.

Artículo 42.

Los agentes del Ministerio Público, además de los libros que acuerde el Procurador, llevarán los siguientes:

I. De registro de causas y expedientes civiles, con expresión de número de orden, fecha de iniciación, extracto del objeto del juicio, estado que guarde, fechas y observaciones;

II. De correspondencia;

III. De copias de pedimentos.

Artículo 43.

Los agentes adscriptos a los juzgados de distrito, cuando interpongan el recurso de apelación, se dirigirán oportunamente al agente del circuito que corresponda, expresando sucintamente los motivos que hubieren tenido para interponerlo.

Artículo transitorio.

Esta ley comenzará a regir el 5 de febrero de 1909.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 16 de diciembre de 1908.– Porfirio Díaz.- Al C. Lic. Justino Fernández, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia.– Presente.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 16 de diciembre de 1908.– Fernández.– Al C.....

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo en relación a la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal.

En virtud de la facultad conferida al Ejecutivo de la Unión por decreto de 24 de mayo de 1906, el Presidente de la República expidió la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, de la cual tengo la honra de remitir adjunto un ejemplar; y en cumplimiento de lo que previene el art. 2° del decreto de 13 de diciembre de 1907, que prorrogó el término de aquella autorización,

el mismo C. Presidente ha tenido a bien acordar que, por conducto de esta Secretaría de Justicia, se rinda al H. Congreso de la Unión el informe siguiente:

El Ministerio Público es considerado, dentro de la sana doctrina científica, como un ramaje del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial, de donde emana la necesidad de que tenga una existencia propia, independiente y enteramente separada de los Tribunales, cuya misión de administrar justicia, de dar a cada uno lo que es suyo y de definir el derecho, es bien diversa. El Poder Judicial ejerce una función coactiva de administrar y aplicar las leyes para terminar las contenciones que surgen entre los miembros de la colectividad; y los jueces, que son los órganos de la ley, no hacen el derecho, sino que lo declaran, lo aplican juzgando, en tanto que el Ministerio Público es un litigante que ejercita el derecho de petición en nombre de la sociedad y del Estado. No pueden confundirse ni reglamentarse por la misma ley; y los preceptos que establecen y rigen el Ministerio Público, deben ser distintos, formar un conjunto separado, de los que establecen y rigen el poder encargado de administrar justicia.

Era impropio, pues, que el mismo cuerpo de leyes creara y desarrollara estas dos instituciones tan diversas entre sí, y esa impropiedad era perjudicial, porque es sabido que uno de los elementos de interpretación es el sistemático, que tiene por objeto el lazo íntimo que une las instituciones y reglas del derecho en el seno de una vasta unidad, según las palabras de Savigny; e interpretando, por sólo el hecho de estar unidas las dos leyes, los preceptos de una por los de la otra, se podían cometer errores trascendentales.

Todas estas consideraciones tuvo presentes el Ejecutivo, y a ellas obedece fundamentalmente la reforma que contiene la ley que acaba de expedirse.

Fijado en tesis general el objeto de la nueva ley, debe ser examinado, aunque sea a grandes rasgos, para saber el porqué de las disposiciones que contiene.

La ley anterior establecía al Ministerio Público sin detenerse a indicar su misión y el papel importantísimo que desempeña en el organismo social; la actual ha llenado este vacío y en el título preliminar expresa claramente cuáles son sus funciones y sus relaciones con los poderes públicos. Le asigna como misiones principales: auxiliar al Poder Judicial, procurar que el Estado ejercite la facultad de penar para defender la existencia del cuerpo social y los intereses de la nación ante los tribunales. Al explicar en detalle, en los cinco artículos que lo forman, cómo lleva a cabo estas funciones, no hace más que aplicar la doctrina de que el Ministerio Público es una derivación del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial para integrar la acción pública latente en toda controversia ante los tribunales.

El título primero, al establecer el Ministerio Público, los requisitos que su personal debe tener y el modo de llenar sus faltas, sólo introduce las reformas que como necesarias han impuesto el tiempo y la experiencia y que son tan pequeñas que no vale la pena ocuparse en ellas; pero ha completado las disposiciones ya existentes al designar quién debe recibir la protesta constitucional a los miembros del Ministerio Público y quién debe representarlo en los lugares en donde no residan jueces de distrito, cuando la justicia común obre en auxilio de la federal.

Además, como el Procurador General de la República es el jefe del Ministerio Público, moralmente es responsable de los actos de ese cuerpo colegiado y, por otra parte, es también quien puede apreciar mejor la aptitud de los abogados que han de colaborar con él, secundando sus labores; en consecuencia, se le da la facultad de proponer ternas al Ejecutivo para el nombramiento de agentes, que eran, según la ley anterior, nombrados libremente por el mismo Ejecutivo.

Tampoco olvidó la nueva ley a los empleados secundarios del Ministerio Público, colaboradores de sus funciones y a los que debe nombrárseles de la misma manera que a los agentes.

El capítulo segundo del mismo título primero se ocupa en la delicadísima tarea de señalar las atribuciones y deberes de los representantes del Ministerio Público. En este punto se creyó conveniente, dado el principio de derecho público que establece que las autoridades no pueden hacer sino aquello para lo que la ley las faculta expresamente, detallar hasta donde fuera posible todas y cada una de las atribuciones así del Procurador General de la República, como de los agentes, entrando en pormenores que hacen ya innecesario un reglamento y que dejan llenadas las exigencias que la práctica ha demostrado.

El Procurador General de la República no es únicamente adscripto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que, como Jefe del Ministerio Público, interviene en todos los negocios que, por su importancia, reclamen su intervención; tendrá todos los datos necesarios para unificar la acción del cuerpo que preside y para hacer que esa acción sea eficaz, expedita y propia para contribuir al desarrollo del plan político y económico que al Ejecutivo sugieren las necesidades públicas; y podrá salvar su responsabilidad, haciendo observaciones a las diversas Secretarías, cuando, en su concepto, las instrucciones que reciba de ellas no sean arregladas a derecho. Esta novedad es de gran importancia, tanto porque tiende a buscar el mayor acierto en la acción del representante del poder administrativo ante la justicia nacional, cuanto porque era notoriamente injusto obligar al Procurador de la República a que hiciera algo contra sus convicciones, contrayendo acaso responsabilidad moral y hasta jurídica. Si ahora se diera el caso de que el Ministerio Público obrara fuera de la órbita de sus atribuciones o contrariando las leyes que nos rigen, si en vez de velar por los intereses públicos hiciera promociones que los perjudicaran, la responsabilidad moral y jurídica de estos hechos, le heriría de lleno, salvo el caso de que se le hubiera obligado a obrar así por orden expresa y terminante de una Secretaría de Estado, lo que indudablemente no acontecerá, porque las observaciones que haga serán estimadas con criterio sereno y en su justo valor.

Por último, profundamente imbuido en el ánimo del legislador el papel que debe desempeñar el alto funcionario de que se habla y la colectividad que dirige, establece relaciones íntimas de subordinación con el Ejecutivo y le ordena que rinda informes, pida autorizaciones en casos especiales y delicados, proponga medidas para mejorar el Ministerio Público e inicie leyes y reglamentos a Secretaría. En una palabra, la nueva ley hace al Procurador General de la República verdadero jefe el Ministerio Público, aunque subordinado, como es lógico, al Ejecutivo, del que forma parte.

Al enumerar las atribuciones de los agentes, la ley completa, siguiente el mismo sistema, el cuadro que plaza el párrafo anterior; y por eso también su responsabilidad cuando obran por instrucción expresada del Procurador contra sus convicciones jurídicas o morales; les impone la obligación de ministrar a su jefe datos, informes, etc., etc., para que éste conozca perfectamente la marcha de los negocios en que interviene el Ministerio Público y pueda llevar la dirección de todos los asuntos.

Resulta así el Ministerio Público un cuerpo homogéneo, disciplinado; de acción uniforme, eficaz y benéfica, y con todas las condiciones que debe reunir la acción administrativa: rapidez, energía y unidad. El Ejecutivo cuenta con un poderoso auxiliar; y la práctica demuestra que este sistema, seguido por las naciones más cultas, es a las veces, el más adecuado para establecer el punto de contacto que debe existir entre las esferas de acción del Ejecutivo y el Judicial, separadas sabiamente por nuestra Constitución para conservar la libertad política.

Nada hay va que decir respecto al título segundo, que reproduce en sus tres capítulos las disposiciones que estaban vigentes, reglamentándolas con mayor amplitud, ni del título tercero, que consigna las responsabilidades de los miembros del Ministerio Público, como salvaguardia de las libertades individuales.

Por lo demás, en esta ley sólo se han

trasladado las disposiciones que ya existían en el antiguo título preliminar del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativas a la organización del Ministerio Público.

El Ejecutivo cree cumplido, con lo expuesto, el deber que tiene de informar al Congreso acerca del uso que hizo de las facultades que se sirvió conferirle.

Al dar cuenta con este informe a esa H. Cámara, ruego a ustedes se sirvan hacerle presente, y aceptar para sí, mi atenta y distinguida consideración.

Libertad y Constitución, México a 28 de abril de 1909.– Fernández.

CC. Sres. de la H. Cámara de Diputados.– Presentes.

Diciembre 16 de 1908.- Código Federal de Procedimientos Penales.

El C. Presidente Constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DÍAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión, por decretos de 24 de Mayo de 1906 y 13 de Diciembre de 1907, he tenido a bien expedir el siguiente:

Código Federal de Procedimientos Penales.

TÍTULO I.

Reglas generales.

CAPÍTULO I.

De la policía judicial.

Artículo 1.

La investigación de los delitos del fuero federal, la reunión de sus pruebas y el descubrimiento de sus autores, cómplices y encubridores, constituye el objeto de la policía judicial de la Federación; y el ejercicio de ella corresponde a los funcionarios y agentes que designa el presente Código, en el grado y forma que el mismo establece.

Artículo 2.

Ejercen la policía judicial de la Federación:

I. Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero;

II. Los capitanes, maestres y patrones de embarcaciones mexicanas;

III. Los administradores de aduanas, los comandantes de la gendarmería fiscal y los jefes de secciones aduaneras;

IV. Los pilotos mayores de los puertos;

V. Los empleados públicos que en el Distrito y Territorios Federales, o en los Estados, desempeñen las funciones de policía judicial en el fuero común, quienes obrarán como auxiliares de la federal;

VI. Los representantes del Ministerio Público Federal;

VII. Los jueces de Distrito;

VIII. Los magistrados de circuito cuando a ellos corresponda la instrucción de un proceso; y

IX. Todos los funcionarios a quienes por disposición de la ley esté encomendada una instrucción.

Artículo 3.

Los agentes de la policía judicial, enumerados en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo anterior, procederán a prevención; y al incoar sus procedimientos, darán cuenta inmediatamente, o en primera oportunidad, al juez de distrito o magistrado de circuito que corresponda.

Artículo 4.

Los agentes de la policía judicial requerirán directamente el auxilio de la fuerza pública, siempre que lo estimen necesario para el ejercicio expedito de sus funciones.

CAPÍTULO II.

De las competencias de jurisdicción.

Artículo 5.

Es juez competente para conocer de un proceso, el del lugar en que se comete el delito.

Artículo 6.

En caso de que los delitos previstos en el artículo 184 del Código Penal se hayan cometido en territorio extranjero, y el responsable se halle en la República Mexicana, será competente el juez de Distrito del lugar en que fuere aprehendido el acusado. Si éste se hallare en el extranjero, será juez competente para pedir la extradición, instruir y fallar el proceso el de distrito de la capital de la República ante quien promueva el Ministerio Público.

Artículo 7.

Si los delitos de que hablan las fracciones I y II del artículo 189 del Código Penal, se cometieren en buque mexicano, conocerá de ellos el juez de distrito del primer puerto nacional a donde arribe el buque.

Artículo 8.

La competencia que en materia penal corresponde conforme a la ley a los tribunales de circuito, la ejercerán en su respectivo territorio jurisdiccional; y cuando éste no deba servir de base, la ejercerán por riguroso turno que llevará el magistrado del primer circuito.

Artículo 9.

De los delitos continuos conocerá el juez del lugar en que haya sido sorprendido infraganti el reo; y, no mediando esta circunstancia, el que, de entre los competentes, hubiere prevenido.

Si no hubiere prevención o el que previno careciere de competencia en el caso, ésta se decidirá en favor del juez a cuya jurisdicción correspondan los hechos más graves en razón de la pena; y si no fuere posible determinar la mayor gravedad, se decidirá en favor del juez en cuyo territorio se hubieren comenzado a ejecutar actos que por sí solos constituyen el o los delitos imputados.

Artículo 10.

En caso de acumulación, se estará a lo dispuesto en el capítulo relativo de este Código.

Artículo 11.

Para la decisión de las competencias se observarán las siguientes reglas:

I. Las competencias que puedan promoverse entre juzgados de distrito o entro tribunales de circuito, se decidirán según el orden establecido en los artículos anteriores de este capítulo;

II. Las que puedan promoverse en los tribunales de la Federación y los de los Estados, Distritos o Territorios, se resolverán declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción;

III. Las que se promuevan entre los jueces y tribunales de un Estado y los de otro, o entre éstos y los del Distrito Federal y Territorios, si las leyes de dichos Estados, Distrito o Territorios cuyos jueces compiten, tienen la misma disposición respecto del punto jurisdiccional controvertido, conforme a ella se decidirá la competencia. En caso contrario, las competencias se decidirán con arreglo a los artículos que preceden.

Artículo 12.

En materia penal no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción.

Artículo 13.

Ningún juez puede promover competencia a su superior jerárquico; y en caso de que un juez federal inferior se arrogue atribuciones propias de un superior, o éste las de aquél, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante queja de alguno de los dos, decidirá la cuestión sin más trámites que los informes de ambos y la audiencia del Procurador General de la República.

Artículo 14.

En todas las controversias sobre competencia, será oído el Ministerio Público.

Artículo 15.

Cuando los delincuentes fueren reclamados por autoridades de dos o más Entidades Federativas y no hubiere conformidad entre los Estados requirentes y el requerido, la declaración de preferencia se hará por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. La misma Sala Primera de la Corte resolverá lo procedente, en el caso de que la autoridad requerida se niegue a obsequiar un exhorto, de acuerdo con lo dispuesto por la ley orgánica del artículo 113 de la Constitución Federal.

CAPÍTULO III.

De las acciones.

Artículo 16.

La infracción de las leyes penales da lugar a dos acciones: la penal y la civil.

Artículo 17.

El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público.

Artículo 18.

La acción civil puede intentarse por el perjudicado o por su representante. Si fueren varios los que la deduzcan, deberán nombrar un representante común; y, de no hacerlo, el juez o tribunal lo nombrará de entre los mismos perjudicados.

Artículo 19.

La acción penal y la civil pueden deducirse conjunta o sucesivamente.

Artículo 20.

Cuando el ofendido no deduzca la acción civil en el juicio criminal, podrá deducirla en el civil que corresponda y ante la autoridad que fuere competente.

Artículo 21.

Para entablar el juicio civil, no será obstáculo que el acusado haya muerto antes o después de que se le condene.

Tampoco lo será el que haya sido absuelto en el juicio criminal, excepto el caso en que la absolución se funde en una de estas circunstancias:

I. Que el hecho u omisión imputados no hayan existido;

II. Que en ellos no haya tenido participación el acusado;

III. Que este haya obrado con derecho.

Artículo 22.

La acción civil puede intentarse esté o no incoado el procedimiento penal; pero mientras éste se halle pendiente, no podrá dictarse sentencia.

Esta disposición deja a salvo lo que prevengan las leyes fiscales sobre facultad económico-coactiva.

CAPÍTULO IV.

De las excepciones.

Artículo 23.

Las excepciones que extinguen la acción, conforme al título VI, libro I, del Código Penal, pueden ser alegadas en cualquier estado del proceso, y se substanciarán por cuerda separada sin suspender los procedimientos de la instrucción.

Artículo 24.

Una vez opuestas, el juez citará a una audiencia con término de ocho días, durante los cuales podrán las partes rendir las pruebas que estimen convenientes. En ella el juez oirá las alegaciones que se hagan y pronunciará la resolución que corresponda.

Artículo 25.

Si la excepción propuesta fuere declarada improcedente en primera instancia, y de tal resolución se hubiere apelado, se suspenderá el procedimiento al concluirla instrucción, en espera de la ejecutoria.

Artículo 26.

Aunque los acusados no aleguen las

excepciones a que se refiere el artículo 23, los jueces las suplirán de oficio, siempre que resulten del proceso.

Artículo 27.

Las demás excepciones perentorias se decidirán en la sentencia definitiva.

Artículo 28.

Las defensas que no afecten la acción penal en el fondo y las cuestiones previas que no deban decidirse en la sentencia definitiva, serán propuestas al concluir la instrucción, antes de abrirse el juicio; y se substanciarán como excepciones dilatorias, en la forma de incidentes, salvo lo que se dispone sobre la competencia por inhibitoria.

El efecto de estas defensas será que no se obligue al procesado a contestar la acusación, mientras aquellas no fueren declinadas improcedentes.

Artículo 29.

La falta de excitativa del Gobierno en el caso previsto en la fracción II del artículo 658 del Código Penal, la de la declaración del Congreso Federal en los casos determinados por el artículo 104 de la Constitución, y la inmunidad diplomática, pueden oponerse en cualquier estado del proceso como excepciones dilatorias.

Los jueces están obligados a suplir de oficio estas excepciones, tan luego como tengan conocimiento de ellas, cualquiera que sea el estado del proceso; y deberán asimismo suspender el procedimiento, únicamente por lo que se refiere a los individuos a quienes favorezcan dichas excepciones.

CAPÍTULO V.

De las formalidades judiciales.

Artículo 30.

Los tribunales, cuando lo exija la urgencia del caso, actuarán los domingos y días de fiesta nacional, sin necesidad de habilitación previa.

Artículo 31.

Las actuaciones deberán asentarse en papel que tenga al margen el sello del tribunal. Los secretarios foliarán exactamente los cuadernos y rubricarán todas las fojas en el centro de lo escrito; pondrán además el sello del tribunal o juzgado en el fondo del pliego, de manera que queden selladas las dos caras, y cuidarán de que se usen las estampillas que prevenga la ley relativa.

Artículo 32.

En el caso de que la parte civil sea representada jurídica o legalmente por otra persona, acompañará, precisamente a la primera promoción, el documento que acredite su personalidad.

Artículo 33.

Cuando se dé vista de la causa al procesado, el juez tomará las precauciones que crea convenientes para que no la destruya.

Artículo 34.

Los secretarios de los tribunales y juzgados harán constar las promociones, asentando en el expediente respectivo el día y la hora en que las partes se presenten a hacerlas.

Artículo 35.

Los secretarios de los tribunales y juzgados darán cuenta de las promociones; dentro de veinticuatro horas, bajo la pena de diez pesos de multa y sin perjuicio de lo demás que proceda conforme a la ley.

Artículo 36.

En los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito, los magistrados y jueces verán por sí mismos las actuaciones para dictar autos o sentencias. En la Suprema Corte de Justicia darán cuenta los secretarios, sin perjuicio de que se imponga personalmente de las actuaciones el ministro en turno, designado en el reglamento de la misma Corte.

Artículo 37.

El acuerdo será reservado. Las diligen-

cias dé prueba y las vistas serán públicas, salvo que en concepto del tribunal o juzgado convenga que sean secretas por algún motivo justificado.

Artículo 38.

En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose al fin, con toda precisión, el error cometido. Todas las fechas y cantidades se escribirán precisamente con letra y número.

Artículo 39.

Los expedientes nunca se sacarán de la Secretaría, quedando en ella a disposición de las partes para que se impongan de su contenido.

Artículo 40.

Los expedientes que se perdieren serán repuestos a costa del culpable, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 41.

Los secretarios de los tribunales y juzgados cotejarán las copias o testimonios de constancias judiciales que el tribunal o el juez manden expedir, y las autorizarán con su firma y el sello correspondiente.

Artículo 42.

Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas por el funcionario público a quien corresponda firmar, dar fe o certificar el acto.

CAPÍTULO VI.

De las notificaciones.

Artículo 43.

Las resoluciones contra las cuales este Código concede el recurso de apelación, deberán ser notificadas al Ministerio Público, al procesado, su defensor o defensores y a la parte civil si la hubiere.

También se notificarán a los peticionarios los acuerdos que recaigan a sus promociones.

Artículo 44.

Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las motiven.

Artículo 45.

Las notificaciones se harán por el secretario o actuario del juzgado o tribunal; en ellas se hará constar el día y la hora en que se verifiquen; se leerá integra la resolución y se dará al interesado, si la pidiere, copia de la parte resolutiva.

Artículo 46.

Las notificaciones se harán personalmente al procesado o reo, y a los demás interesados, por medio de cédula que se fijará en la puerta del juzgado; en ella se insertará la parte resolutiva; y si el interesado; dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se fijó la cédula, comparece a pedir notificación personal, se le hará así. Esta disposición comprende al Ministerio Público.

Artículo 47.

Para notificar cualquiera determinación judicial a personas no interesadas en el proceso, se las llamará al juzgado por medio de cédula dirigida a domicilio y con término fijo señalado por el juez. Si la persona citada no se presenta al primer llamamiento, se le hará comparecer por medio de los agentes de policía.

Artículo 48.

Si la persona a quien deba notificarse alguna resolución no residiere en el territorio jurisdiccional del juzgado, la diligencia se practicará por medio de exhorto; y el juez requerido observará lo dispuesto en los artículos anteriores de este capítulo.

Artículo 49.

Cuando haya de notificarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, pero dentro del territorio del juzgado de distrito, hará la notificación el juez del lugar en que aquélla residiere, para lo cual se le

dirigirá el oficio que corresponda.

Artículo 50.

Si se probare que no se hizo una notificación decretada, el que debió practicarla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta, y se le juzgará con arreglo a la ley si obró con dolo; en caso contrario, se le impondrá alguna corrección disciplinaria.

Artículo 51.

Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código previene, la persona que debió ser notificada se mostrare en el proceso sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación.

Artículo 52.

Las notificaciones hechas contra lo dispuesto en este capítulo, serán nulas, excepto en el caso del artículo anterior.

CAPÍTULO VII.

De los exhortos y requisitorias.

Artículo 53.

Cuando tuviere que practicarse una diligencia judicial, fuera del lugar del juicio, se encargará su cumplimiento, por medio de exhorto o requisitoria al juez de distrito, o, a falta de éste, al del fuero común de la localidad en que dicha diligencia deba practicarse.

Se empleará la forma de exhorto, cuando se dirija a un juez o tribunal igual o superior en grado, y la de requisitoria, cuando se dirija a un inferior.

Artículo 54.

Se dará entera fe y crédito a los exhortos y requisitorias que libren los jueces y tribunales de la Federación, debiendo, en consecuencia, cumplimentarse, siempre que llenen las condiciones fijadas por este Código.

Artículo 55.

Los exhortos y requisitorias contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza de la diligencia que se haya de practicar; irán firmadas por el juez de distrito, magistrado de circuito o el ministro de la Suprema Corte que designe el reglamento de estar y el respectivo secretario; llevarán, además, el sello del tribunal o juzgado correspondiente.

Artículo 56.

En casos urgentes se podrá usar del telégrafo; pero en el mensaje sé expresarán con toda claridad la diligencia de que se trate, los nombres de los litigantes, el fundamento de la providencia y el aviso de que se mandará por el primer correo el exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje.

Artículo 57.

Los exhortos a los tribunales extranjeros se remitirán por la vía diplomática al lugar de su destino. Las firmas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el Secretario de Justicia y la de este funcionario, por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.

No será necesaria la legalización, si las leyes o prácticas del país a cuyo tribunal se dirija el exhorto, no establecen ese requisito para los documentos de igual clase.

Artículo 59.

Respecto de las naciones cuya legislación lo autorice, el exhorto se remitirá directamente por el tribunal o juez exhortante de la República al exhortado, sin más legalización que la exigida por las leyes del país en el cual se deba cumplir.

Los exhortos que de esas naciones se dirijan a los tribunales de la República, podrán también enviarse directamente por el tribunal o juez exhortante al exhortado, y bastará que sean legalizados por el ministro o cónsul mexicanos residentes en la nación o lugar del tribunal exhortante.

Artículo 60.

La práctica de diligencias en países

extranjeros podrá también encomendarse a los secretarios de legación y a los agentes consulares de la República, si lo pidiere la parte que las promueve; y, en tal caso, el exhorto legalizado por la Secretaría de Justicia se remitirá a su destino por conduelo de la de Relaciones.

Artículo 61.

El tribunal o juez que recibiere un exhorto o requisitoria extendidos en debida forma, acordará su cumplimiento dentro del plazo que se hubiere fijado en el mismo exhorto, o lo más pronto posible en raso diverso; y lo devolverá cumplimentado.

Artículo 62.

Si el juez exhortado o requerido creyere que no debe cumplimentar el exhorto, por interesarse en ello su jurisdicción, o si tuviere dudas sobre este punto, oirá al Ministerio Público v resolverá dentro de tres días; y promoverá, en su caso, la competencia, conforme a las leyes establecidas en este Código.

Artículo 63.

La resolución dictada por el juez requerido, ordenando la práctica de la diligencia, no admite recurso alguno.

Artículo 64.

Cuando un tribunal o juez no pudiere practicar por sí mismo en todo o en parte las diligencias que se le encarguen, podrá encomendar su ejecución al juez local, remitiéndole el exhorto original o un oficio con las inserciones necesarias, si aquél no pudiere mandarse.

Artículo 65.

Cuando el juez no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitorio, por hallarse en otra jurisdicción la persona o los bienes que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al juez del lugar en que aquélla o éstos se encuentren, y lo hará saber al requirente.

Artículo 66.

No se notificarán, al que presentare un exhorto o requisitoria, las providencias que se dicten para su cumplimiento, sino cuando se prevenga así en el mismo despacho.

Artículo 67.

Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto o requisitoria, se recordará su despacho por medio de oficio. Si a pesar de esto continuare la demora, el juez requirente lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del requerido, y dicho superior apremiará al moroso, obligándolo a la devolución del exhorto y exigiéndole la responsabilidad en que pueda haber incurrido.

Artículo 68.

Los jueces o tribunales, al dirigirse a autoridades o funcionarios que no sean judiciales, lo harán por medio de oficio.

Artículo 69.

Los edictos y convocatorias que deban publicarse en el extranjero y que no ameriten práctica de diligencias judiciales, se enviarán para su publicación, por conducto de las Secretarias de Justicia y Relaciones Exteriores, a la legación o consulado mexicanos que correspondan. Los jueces prevendrán a los interesados que ministren oportunamente, en la mencionada Secretaría de Relaciones, los gastos necesarios.

CAPÍTULO VIII.

De los términos judiciales.

Artículo 70.

Los términos judiciales son improrrogables, y empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. No se incluirán en ellos los domingos ni los días de fiesta nacional, salvo que se trate de tomar al procesado su declaración preparatoria o de pronunciar el auto de formal prisión.

Artículo 71.

Los términos se contarán por días naturales, excepto los que se refieran a la declaración preparatoria o al auto de formal prisión, que correrán de momento a momento y desde que el procesado se halle a

disposición de la autoridad judicial.

CAPÍTULO IX.

De las resoluciones judiciales.

Artículo 72.

Las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, sentencias y autos: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto principal controvertido; y autos, en cualquier otro caso.

Artículo 73.

Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

Los decretos se reducirán a expresar el trámite.

Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.

Las sentencias contendrán:

I. El lugar en que se pronuncien;

II. El nombre y apellido del acuerdo, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, su edad, su estado civil, su residencia o domicilio y profesión;

III. Extracto de los hechos conducentes al objeto de la sentencia, en párrafos numerados que comiencen con la palabra RESULTANDO;

IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sentencia que se pondrán en orden numérico bajo la palabra CONSIDERANDO;

V. Los fundamentos de hecho y de derecho correspondientes a la responsabilidad civil en su caso;

VI. La condenación o absolución en la parte penal;

VII. La condenación o absolución en lo relativo a la responsabilidad civil;

VIII. La declaración que corresponda respecto de los instrumentos, objetos y productos del delito.

Artículo 74.

Los decretos deberán dictarse dentro de veinticuatro horas, los autos dentro de tres días y las sentencias dentro de ocho, salvo lo que la ley disponga para casos especiales. Los dos primeros términos se contarán a partir de la promoción que motive el decreto o auto, y el tercero desde la citación para definitiva.

Cuando el juez o tribunal, para mejor proveer, decrete la práctica de alguna diligencia, quedará en suspenso el término para la resolución, el que volverá a correr cuando aquélla se haya practicado.

Artículo 75.

Las resoluciones se redactarán por los respectivos jueces o magistrados, y serán firmadas por ellos y por el secretario.

Artículo 76.

Se necesita la presencia de todos los ministros que forman una Sala, para que ésta pueda dictar sentencias o autos, y la validez de tales resoluciones requiere, cuando menos, el voto de la mayoría de dichos ministros.

Artículo 77.

Todos los cambios de personal que ocurran en las Salas, se harán saber a las partes.

Artículo 78.

Recogida la votación, las Salas fijarán desde luego los puntos resolutivos que deba contener la sentencia o auto.

Artículo 79.

El ministro que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, expresando sucintamente los fundamentos principales de él. Este voto se agregará al expediente.

Artículo 80.

Los jueces y tribunales no pueden, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir

ni negar la resolución de las cuestiones que legalmente hayan sido sometidas a su conocimiento.

Artículo 81.

No podrán los jueces modificar ni variar sus sentencias después de firmadas, ni las Salas después de haberlas votado. Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio del recurso de aclaración de sentencia, introducido por las partes en los términos señalados por este Código.

Artículo 82.

Las resoluciones judiciales no se entienden consentidas, sino cuando, notificada la parte, contesta expresamente de conformidad, o deja pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda.

CAPÍTULO X.

De la corrección disciplinaria y del apremio.

Artículo 83.

Son correcciones disciplinarias:

I. El apercibimiento;

II. La multa de diez a doscientos pesos;

III. La suspensión hasta por un mes.

Artículo 84.

Las correcciones disciplinarias podrán imponerse de plano en el acto de cometerse la falta, o después, en vista de lo consignado en el expediente o en la certificación que de aquélla hubiere extendido el secretario por orden del tribunal.

Artículo 85.

Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio:

I. La multa de cinco hasta cien pesos.

II. El auxilio de la fuerza pública;

III. El arresto hasta por quince días.

Sí fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.

TÍTULO II.

De la instrucción.

CAPÍTULO I.

De la incoación del procedimiento.

Artículo 86.

El procedimiento del orden penal tiene dos periodos, el de instrucción, que comprende la serie de diligencias que se practican con el fin de averiguar la existencia del delito, y, determinar las personas que en cualquier grado aparezcan responsables; y el del juicio propiamente tal, que tiene por objeto definir la responsabilidad del inculpado o inculpados, y aplicar la pena correspondiente.

Artículo 87.

La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de ocho meses cuando el término medio de la pena señalada al delito no baje de cinco años, y de cinco meses en todos los demás casos.

Cuando por motivos excepcionales el juez necesitare mayor término, lo pedirá al superior inmediato indicando la prórroga que necesite. La falta de esta petición no anula las diligencias que se practiquen,-pero amerita una corrección disciplinaria y el pago de daños y perjuicios a los interesados.

Artículo 88.

Todos los funcionarios de la policía judicial están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia, excepto en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de delitos contra la reputación, atentados al pudor, estupro, violación, rapto y adulterio, respecto de los cuales se requiere la queja del ofendido;

II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.

Artículo 89.

En los casos de querella necesaria, se entenderá que el ofendido es aquél contra quien directa o personalmente se haya

cometido el delito.

Artículo 90.

El desistimiento del ofendido no impedirá que continúe el procedimiento criminal que se hubiere incoado, a no ser que se trate de los delitos de rapto, estupro, adulterio o violación de inmunidad. El desistimiento en estos casos, producirá el efecto de cosa juzgada, se mandará poner en libertad al acusado y se archivará el proceso.

Artículo 91.

Todo funcionario o empleado público que con motivo de sus funciones tenga noticia de la existencia de un delito que pueda perseguirse de oficio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los comprobantes o datos que tuviere, para que este proceda conforme a sus atribuciones, excepto en el caso que dicho funcionario sea el mismo juez que debe practicar la averiguación, pues entonces sólo dará al Ministerio Público la intervención que la ley establece.

Artículo 92.

El ofendido y toda persona que haya sido testigo presencial de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del juez competente o de algún representante del Ministerio Público, y en caso de urgencia, de cualquier agente de la policía judicial.

Artículo 93.

Las revelaciones que se hagan por escrito, serán firmadas por su autor, sí supiere hacerlo; y sí éste no es empleado o funcionario público, ratificará el escrito ante el juez o agente del Ministerio Público a quien se presente, lo mismo hará cuando no supiere firmar.

Artículo 94.

Toda persona que se considere con derecho para exigir la responsabilidad civil, puede presentar su querella al Ministerio Público o al juez, en la cual pedirá que se abra la averiguación.

Artículo 95.

Las primeras diligencias de la instrucción comprenderán precisamente: la declaración del querellante o denunciante si lo hubiere; la del inculpado si se hallare presente por cualquier motivo; la inspección ocular del lugar en que el delito se cometió, si éste fuere de los que pueden dejar huellas materiales de su existencia, la descripción de las huellas que el delito haya podido dejar en la persona ofendida, con intervención de peritos cuando fuere necesario; el aseguramiento de la cosa materia del delito.

Cuando estas diligencias deban efectuarse a bordo de un buque conforme al artículo 189 del Código Penal, el juez encargado de desahogarlas dará previamente aviso, bien al cónsul o bien a la autoridad militar correspondiente, según el caso de que se trate.

Artículo 96.

Cuando el delito que se persiga sea el de tráfico de esclavos, cuidará el juez que practique las primeras diligencias de poner en libertad a las personas que hayan llegado al territorio con el carácter de esclavos.

Artículo 97.

Al practicar una inspección ocular se examinará a las personas presentes, a cuyo efecto se les podrá prohibir que abandonen el lugar, usando en su caso de los medios de apremio que concede la ley.

Artículo 98.

En el Distrito Federal el agente que practique las primeras diligencias, si no es competente para seguir conociendo de ellas, las remitirá al juez de distrito con los detenidos y los objetos inventariados, precisamente dentro de treinta y seis horas de haberlas comenzado.

En los Estados y Territorios se hará la misma remisión, en el plazo antes dicho, al juez de distrito, si residiere en la misma municipalidad. En caso contrario, la remisión se hará al juez de primera instancia a que corresponda la localidad, el cual tendrá la obligación de avisarlo al de distrito, sin

perjuicio de seguir practicando las diligencias que requiera la averiguación; y en estado ésta, dará cuenta al mismo juez federal.

Artículo 99.

Siempre que los jueces del fuero común, en auxilio de la justicia federal, inicien o prosigan diligencias de las que deberán dar aviso inmediato al juez de distrito, como está prevenido, éste a su vez, lo hará saber al agente del Ministerio Público.

Estas prevenciones se observarán por los mismos agentes de la policía judicial, inclusive los jueces de distrito en los casos en que practiquen diligencias en auxilio de los tribunales de circuito, cuando éstos conozcan desde la primera instancia en los casos determinados por la ley.

Artículo 100.

El juez de distrito, con vista del aviso a que se refiere el artículo anterior, podrá dar a la autoridad que practica las primeras diligencias, las instrucciones que juzgue necesarias; trasladarse al lugar, con autorización de la Suprema Corte, para practicarlas personalmente; o bien pedirlas desde luego, o en su oportunidad, según lo estime conveniente.

Artículo 101.

Luego que el juez recibiere las primeras diligencias, practicará, sin demora alguna, todas aquellas que juzgue necesarias, así como las que promuevan el Ministerio Público, los inculpados y el querellante o la parte civil, si fueren conducentes.

Artículo 102.

Cuando un juez federal se avoque el conocimiento de una causa que haya empezado a substanciarse en el fuero común, o cuando reciba diligencias por cualquier motivo autorizadas por algún agente de policía judicial de la Federación, no necesitará que se repitan ante él para su validez; pero puede, si lo estima conveniente, ordenar la ratificación.

Artículo 103.

Todas las diligencias se practicarán personalmente por el juez, a menos que deban verificarse fuera del lugar donde resida el juzgado, pero dentro de su territorio jurisdiccional; pues entonces podrán encomendarse al juez del fuero común respectivo.

Artículo 104.

Las diligencias que hayan de practicarse fuera del territorio jurisdiccional del juez, se encomendarán, por medio de exhorto, al juez de distrito que corresponda, quien podrá encomendarlas al juez del fuero común del lugar en que deban practicarse.

Artículo 105.

Para todas las diligencias que se practiquen fuera del juzgado, se citará al representante del Ministerio Público, quien podrá presenciarlas y pedir que se amplíen en el sentido que juzgare conveniente.

Artículo 106.

Las personas que tomaren parle en una diligencia, firmarán el acta respectiva; si no supieren o no quisieren hacerlo, se hará constar esa circunstancia,

CAPÍTULO II.

De la comprobación del cuerpo del delito.

Artículo 107.

La existencia de un hecho u omisión que la ley repute delito, será la base del procedimiento penal. Luego que estén justificados los elementos que constituyen el hecho delictuoso, según lo define la ley penal, se tendrá por comprobado el cuerpo del delito.

Artículo 108.

Cuando exista el objeto materia del delito, se le describirá, minuciosamente expresando con toda claridad los caracteres, señales o vestigios que éste haya dejado, el instrumento o medio con que haya podido cometerse y la manera como aparezca que se ha hecho uso de ese medio o instrumento. Se

fijarán también todas las circunstancias de situación y localidad y aquéllas que puedan servir para el buen éxito de la averiguación.

Artículo 109.

Además de la descripción, se levantará una acta de inventario en la que se harán constar todos los objetos que puedan tener relación con el delito, describiéndose cada uno de manera que en cualquier tiempo puedan identificarse.

También se anotarán aquéllos que por cualquier motivo deban asegurarse.

Artículo 110.

Todos los objetos inventariados, conforme al artículo anterior, deberán depositarse y guardarse dentro de una cubierta, caja, pieza o algún recipiente, según la naturaleza del objeto depositado; y el juez tomará las precauciones que estime convenientes para asegurar la conservación e identidad de estos objetos.

Artículo 111.

En los casos de contrabando, el juez dictará las disposiciones conducentes para asegurar los objetos en que pueda tener algún derecho el Fisco, y los remitirá al administrador de la aduana respectiva, juntamente con una copia de las actas de inventario y descripción, para que surtan los efectos a que haya lugar en los procedimientos administrativos que deban seguirse conforme a la Ordenanza General de Aduanas.

Artículo 112.

En los delitos contra el pudor, la descripción se hará por peritos, y para ese efecto, podrán ser requeridos los médicos de cárceles, los de comisaría, los médicos legistas o los que hubiere en el lugar.

Artículo 113.

Siempre que sea necesario tener a la vista alguna de los objetos inventariados, se comenzará la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado en que estaba al ser depositado; y si ha sufrido alteración voluntaria o accidental, se expresarán los signos o señales que la hagan presumir.

Artículo 114.

Cuando se trate de homicidio o lesiones, además de la descripción que hará el agente de la policía judicial que practique las primeras diligencias, la harán también los peritos.

En el caso de lesiones, los peritos las clasificarán legalmente. En el de homicidio, practicarán la autopsia, y expresarán con claridad, en el certificado respectivo, las causas que originaron la muerte.

Artículo 115.

Los cadáveres deberán ser siempre identificados por medio de testigos, y si esto no fuere posible, se harán fotografías, de las cuales se agregará a la averiguación un ejemplar, y se pondrán otros en los lugares públicos, juntamente con todos los datos que puedan servir para que aquéllos sean reconocidos; y se exhortará a todos los que hubieren conocido al occiso para que se presenten ante el juez a declarar la identidad.

Los vestidos se describirán minuciosamente en la causa, y se conservarán en depósito seguro para que puedan ser presentados a los testigos de identidad.

En las poblaciones donde haya lugar apropiado para el depósito de cadáveres, se exhibirán para su identificación los que sean objeto de una causa, por tanto tiempo cuanto sea posible, sin poner en peligro la salubridad pública.

Artículo 116.

En los casos de homicidio, en que no sea posible a ver el cadáver, se tendrá por justificado el delito, cuando haya prueba plena acerca de los elementos que lo constituyen, conforme al artículo 540 del Código Penal.

Artículo 117.

En el caso del artículo anterior, el juez procurará dejar comprobado en el proceso el carácter del occiso; sus costumbres; si

padecía alguna enfermedad; el último lugar y la última fecha en que fue visto, así como la posibilidad o probabilidades de que el cadáver haya podido ser ocultado o destruido, expresando los testigos, si este fuese el medio de prueba empleado, los motivos que tengan para suponer la existencia del homicidio.

Artículo 118.

Cuando no pudiere ser habidos peritos en el lugar en que se sigue la instrucción, se remitirá exhorto al juez del lugar en que los haya, para que éstos hagan la clasificación legal del caso, a cuyo efecto se insertarán en el exhorto todas las constancias que puedan servir para ilustrarlos.

Artículo 119.

Cuando se trate de una enfermedad cualquiera, que se sospeche haya sido ocasionada por un delito, los peritos emitirán su opinión sobre las causas de ellas, describirán minuciosamente todos los síntomas que el enfermo presente, y harán la clasificación legal correspondiente.

Artículo 120.

En los casos de aborto o infanticidio, se procederá como está prevenido en los artículos anteriores para el homicidio; pero en el primero, además, reconocerán los peritos a la madre, describirán las lesiones que presente ésta, y darán su opinión sobre si ellas pudieren ser la causa del aborto. En uno y otro caso expresarán la edad de la víctima, si nació viable o no, y todo aquello que pueda servir para fijar la naturaleza del delito.

Artículo 121.

En los casos de envenenamiento, se recogerán cuidadosamente las vasijas y demás objetos, que haya usado el enfermo, los restos de los alimentos, bebidas y medicinas que hubiere tomado, las deyecciones y vómitos que hubiere tenido, todo lo cual será depositado con las precauciones necesarias para evitar su alteración, y se describirán todos los síntomas que presente el individuo intoxicado. A la mayor brevedad posible serán llamados los peritos para que reconozcan al enfermo, hagan el análisis de las substancias recogidas y emitan su opinión sobre las cualidades tóxicas que tengan éstas y si han podido causar la enfermedad de que se trate.

En caso de muerte, cuando hubiere presunciones de delito, practicarán, además, la autopsia del cadáver.

Artículo 122.

En los casos de robo, se hará constar en el acta de descripción, todas aquellas señales que puedan servir para determinar si hubo escalamiento, horadación o fractura, o se emplearon llaves falsas, haciendo, cuando fuere necesario, que peritos competentes emitan su opinión sobre estas circunstancias.

Artículo 123.

En los casos de robo, el juez procurará desde luego investigar:

I. Si el acusado en cuyo poder se encuentre la cosa que se dice robada, la ha podido adquirir legítimamente;

II. La preexistencia, propiedad y falta posterior de la cosa robada;

III. Si la persona ofendida se hallaba en situación de poseer la cosa materia del delito; si ha hecho alguna gestión judicial o extrajudicial para recobrarla; y si dicha persona es digna de fe y crédito.

Recabará, además, todos los datos que en cada caso sea posible, y que conduzcan a la comprobación de los elementos del delito.

Artículo 124.

En los casos de incendio, el juez dispondrá que los peritos determinen, en cuanto fuere posible, la causa, modo, lugar y tiempo en que se efectuó, las circunstancias por las cuales pueda conocerse que haya sido intencional, y la posibilidad de que haya habido un peligro para la vida de las personas o para la propiedad, así como los perjuicios y daños que se hayan causado.

Artículo 125.

Si el delito fuere de Falsificación de documento, se hará una minuciosa descrip-

ción de éste y se depositará en lugar seguro, a juicio del juez. Al proceso se agregará una copia certificada del documento argüido de falso y una fotografía del mismo, si fuere conducente.

Artículo 126.

Cualquiera persona que tenga en su poder un documento público o privado sobre el cual recaigan sospechas de falsedad, tiene obligación de presentarlo al juez tan luego como sea requerido para ello.

Artículo 127.

En general, siempre que se trate de delitos en que se haga un daño o se ponga en peligro a las personas o la propiedad ajena, de un modo diferente de los previstos en los artículos anteriores, el juez deberá comprobar la calidad de la fuerza o astucia que se haya empleado, los medios o instrumentos de que se haya hecho uso, la importancia del daño causado o que se haya pretendido causar, e igualmente la gravedad del peligro para la propiedad, la vida, la salud o la seguridad de las personas.

Artículo 128.

Para la comprobación del cuerpo del delito, el juez gozará de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta.

CAPÍTULO III.

Del aseguramiento del acusado.

Artículo 129.

El delincuente infraganti, podrá ser aprehendido, sin necesidad de orden alguna, por cualquiera persona, la cual deberá presentarlo inmediatamente al agente de la autoridad más próximo.

Artículo 130.

Cuando se sospeche que una persona tiene responsabilidad en un delito que merezca pena corporal, se procederá a su detención. Sí se trata de algún empleado o funcionario público de los que no gocen fuero constitucional, el auto en que se ordene la aprehensión, se comunicará sin demora al superior jerárquico respectivo.

Artículo 131.

Cuando haya que reducir a prisión a un empleado público que tenga a su cargo y bajo su responsabilidad intereses del Fisco, no podrá ser separado de su oficina, ni de las labores que en ella desempeña, hasta que la Secretaría de Hacienda haya designado persona que deba recibir la caja, valores y demás documentos que aquél tenga a su cargo por razón de su empleo, sin perjuicio de que la autoridad judicial respectiva dicte, entretanto, las medidas preventivas que juzgue oportunas para evitar la desaparición del presunto culpable.

Artículo 132.

La detención trae consigo la incomunicación, si no se expresa lo contrario en la orden relativa, durante el término de tres días. Para prolongarla por más tiempo, se requiere mandamiento escrito y motivado que se comunicará al alcaide o encargado de la prisión. Esta incomunicación no podrá exceder en caso alguno de veinte días.

Las posteriores que se dictaren en el curso de la instrucción, sólo se decretarán cuando sean absolutamente necesarias, siempre por escrito, motivadas, y sin exceder del término de diez días.

Artículo 133.

La autoridad encargada de una aprehensión, inmediatamente que la verifique, la comunicará al juez que corresponda, a cuya disposición deberá quedar desde luego el detenido.

Artículo 134.

Inmediatamente que el alcaide o encargado de una prisión reciba a algún detenido, lo avisará al juez a cuya disposición deba quedar.

Artículo 135.

La detención o la prisión, cuando

deban tener lugar en cárceles que no dependan del Gobierno Federal, se sujetarán a los reglamentos de éstas, sin perjuicio de que el juez dicte las órdenes que crea convenientes respecto del preso o detenido.

Artículo 136.

Cuando la aprehensión deba hacerse en jurisdicción territorial distinta de la del juez que conoce del proceso, se llevará a efecto por medio del exhorto correspondiente.

CAPÍTULO IV.

De la declaración preparatoria.

Artículo 137.

La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere. Se le examinará sobre los hechos que se le imputen, para lo cual adoptará el juez la forma, términos y demás circunstancias que estime convenientes y adecuados al caso, a fin de esclarecer el delito y las circunstancias de tiempo, lugar, etcétera, con que se concibió y llevó a término. Además, impondrá al reo del motivo de su detención, le hará conocer la querella si la hubiere, y le hará saber el nombre de su acusador o acusadores.

Artículo 138.

Las contestaciones del acusado podrán ser redactadas por él; si no lo hace, las redactará el juez, procurando interpretarlas con la mayor exactitud posible sin omitir detalle alguno, que pueda servir de cargo o descargo.

Artículo 139.

Terminado el interrogatorio, se hará saber al detenido que puede nombrar defensor, y se le indicarán los nombres de los de oficio. Hecho el nombramiento se le notificará a la persona nombrada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la designación.

Artículo 140.

No pueden ser defensores los que se hallen presos, ni los ausentes que, por el lugar en que se encuentren, no puedan acudir ante el juez dentro del término correspondiente a la notificación del nombramiento; pero el defensor ausente que comparezca en el curso del proceso, será admitido.

Artículo 141.

Recibida que sea la declaración preparatoria, el juez evacuará las citas que resulten, verificará los careos necesarios tanto con el inculpado y testigos, como con éstos entre sí, y practicará cuantas diligencias crea conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

CAPÍTULO V.

Del auto motivado de prisión.

Artículo 142.

El auto de formal prisión deberá dictarse precisamente dentro de 72 horas, contadas desde que el inculpado se halle a disposición de su juez; ese auto solamente se dictará cuando de lo actuado aparezcan llenados los tres requisitos siguientes:

I. Que esté comprobada la existencia de un hecho ilícito que merezca pena corporal;

II. Que al detenido se le haya tomado declaración preparatoria e impuesto de la causa de su prisión, y de quién es su acusador, si lo hubiere;

III. Que contra el inculpado haya datos suficientes, a juicio del juez, para suponerlo responsable del hecho.

Artículo 143.

Para motivar la prisión en los casos de robo, se tendrán por cumplidos los requisitos consignados en la primera y tercera fracciones del artículo anterior:

I. Cuando el acusado confiese el robo que se le impute, si se encuentra en su poder la cosa robada;

II. Cuando haya prueba de que el inculpado ha tenido en su poder alguna cosa que por sus circunstancias personales no sea verosímil que haya podido adquirir legítimamente, si no justifica la procedencia de aquélla, y, además, hay quien le impute el robo.

En este caso, para devolver el objeto robado a quien se diga su dueño, deberá éste probar la existencia anterior, propiedad y desaparición posterior de aquél; o que se hallaba en situación de poseer dicho objeto, que disfruta de buena opinión, y que ha hecho alguna gestión judicial o extra judicial para recobrarlo.

Artículo 144.

Luego que se haya dictado el auto de prisión preventiva contra alguna persona, se procederá a retratarla y se tomarán, además, las precauciones que se estimen convenientes para asegurar su identificación.

Artículo 145.

El auto de formal prisión se notificará al procesado, a su defensor y al representante del Ministerio Público.

Hechas las notificaciones, el juez continuará la instrucción practicando cuantas diligencias estime necesarias para perfeccionarla.

Artículo 146.

El mandamiento de prisión preventiva, deberá contener el nombre del juez, el del acusado, y el delito que se persigue, y se comunicará por escrito al alcaide del establecimiento. La prisión preventiva deberá sufrirse precisamente en el local destinado en cada lugar para este objeto.

Cuando sea declarado bien preso un militar o algún empleado público, se comunicará también el mandamiento al superior jerárquico respectivo.

CAPÍTULO VI.

De las visitas domiciliarias.

Artículo 147.

La visita domiciliaria en una casa, lugar cerrado o edificio público, no podrá practicarse, sino en virtud de mandamiento escrito, motivado y legalmente fundado, y por el juez o magistrado que lo dicte, o por algún jefe de la policía que será designado en el mandamiento.

El motivo será que haya indicio de encontrarse allí el presunto reo o efectos, o instrumentos del delito, o libros, o papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación.

Si el morador de la casa o lugar cerrado pidiere la visita a un agente de la policía, éste podrá practicarla sin necesidad de orden escrita.

Artículo 148.

Para los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se reputarán edificios o lugares públicos:

I. Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil de la Nación, Estado, Territorio o Municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar;

II. Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo;

III. Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren la habitación de un particular;

IV. Los buques nacionales.

Artículo 149.

Para la entrada y registro en la residencia o despacho de cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya sea de la Federación o de los Estados, el juez o magistrado recabará la autorización de quien corresponda.

Artículo 150.

Las visitas domiciliarias deberán practi-carse durante el día, desde las seis de la mañana hasta las seis de la larde, a no ser que se trate de flagrante delito, o si la urgencia lo hiciere necesario, lo cual se hará constar en el mandamiento.

Artículo 151.

En las visitas domiciliarias se observarán las reglas siguientes:

I. Si el acusado en cuya habitación o domicilio se practique la visita se encontrare allí, podrá asistir a la diligencia; si estuviere detenido, podrá designar persona que lo represente;

II. Si la visita debiere hacerse en casa diversa de la del inculpado, la diligencia se entenderá con el dueño o encargado si se encontraren presentes. En caso contrario, se llamará a dos parientes o vecinos, y si tampoco los hubiere, se llevará, sin embargo, adelante la diligencia;

III. Si se trata de delito flagrante, el juez o funcionario procederá a la visita sin demora, asociándose en el momento de la diligencia con dos testigos.

Artículo 152.

Cuando la visita hubiere de hacerse en la casa de algún miembro del cuerpo diplomático, el juez pedirá instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a menos que el diplomático pida la visita, lo que se hará constar en el proceso.

Artículo 153.

Lo dispuesto en el artículo anterior se observará cuando un prófugo se refugie en un buque de guerra extranjero, surto en aguas territoriales de la Nación.

Cuando hubiere de practicarse una visita en buques mercantes extranjeros, se estará a lo que prevengan las leyes y reglamentos marítimos.

Artículo 154.

Toda inspección domiciliaria se dirigirá y limitará a la comprobación del hecho que la motive, y de ningún modo se extenderá a indagar delitos o faltas, a manera de pesquisa general.

Artículo 155.

En las casas que estén habitadas, la visita se verificará sin causar vejaciones a los habitantes de ellas, ni más molestias que las indispensables para el objeto de la diligencia.

Artículo 156.

Si de una visita domiciliaria resultare casualmente el descubrimiento de un delito que no haya sido objeto directo de ella, se procederá a practicar la instrucción correspondiente, siempre que el delito fuere de los que se persiguen de oficio.

Artículo 157.

A excepción de los objetos que tengan relación con el proceso que motive el registro o con el nuevo que se incoare en el caso del artículo anterior, todos los objetos quedarán a disposición de su dueño.

Artículo 158.

El funcionario que practique el registro, recogerá los instrumentos y efectos del delito y podrá recoger también los libros, papeles, o cualesquiera otras cosas que se hubieren encontrado, si esto fuere conducente al buen éxito de la averiguación. De todos los objetos que se recojan se formará un inventario.

Artículo 159.

Si el acusado estuviere presente, se le mostrarán los objetos secuestrados, para que los reconozca y pongan en ellos su firma o rúbrica, cuando de ello sean susceptibles. Si no lo fueren, se unirá a ellos una tira de papel que se sellará en la juntura de los dos, y se invitará al acusado a que firme o rubrique. Si no sabe o no quiere firmar, se hará mención de esta circunstancia.

Artículo 160.

Siempre que se proceda al secuestro de cartas o pliegos del correo, se observará lo dispuesto en las leyes y reglamentos del ramo.

Artículo 161.

En la misma forma que determina este capítulo, se procederá cuando mediare requisitoria de otro tribunal o funcionario competente para la visita domiciliaria.

CAPÍTULO VII.

De los peritos.

Artículo 162.

Siempre que para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.

Artículo 163.

Por regla general, los peritos que se examinen deberán ser dos o más; pero bastará uno cuando sólo éste pueda ser habido. En este caso se librará el exhorto de que habla la segunda parte del artículo 172.

Artículo 164.

El Ministerio Público, el procesado por sí o por medio de su defensor y la parte civil, tienen derecho de nombrar cada uno un perito.

Artículo 165.

Cuando se trate de una lesión o enfermedad proveniente de delito, y la persona lesionada o enferma sé encontrare en algún hospital, los médicos de éste se tendrán por nombrados como peritos, a reserva de que el juez nombre otros, si lo creyere conveniente, para que, asociados a los primeros, dictaminen sobre la lesión o enfermedad y hagan su clasificación legal.

Artículo 166.

La autopsia de los cadáveres de personas que hayan fallecido en un hospital, la practicarán los médicos de éste; salvo la facultad del juez para encomendarla a otros.

Artículo 167.

Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores, el reconocimiento o autopsia se practicará por los peritos médico-legistas oficiales, o por los que designe el juez.

Artículo 168.

Los peritos que acepten el cargo, tienen obligación de presentarse al juez para que se les tome la protesta legal, y para que les fije el tiempo en que deban desempeñar su encargo.

Artículo 169.

Transcurrido ese tiempo, si no emiten su opinión, o si legalmente citados, una vez aceptado el cargo, no concurrieren a prestar su declaración, podrán ser apremiados por el juez, del mismo modo que los testigos y con iguales penas.

Si a pesar del primer apremio el perito no se allanare a presentar su dictamen o a rendir su declaración, será procesado por el delito previsto en el artículo 904 del Código Penal.

Artículo 170.

Siempre que los peritos nombrados discordaren entre sí, el juez los citará a una junta, en la que se discutirán los puntos de diferencia que hubiere, y se asentará en el acta de la diligencia el resultado de la discusión.

Artículo 171.

Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual han de dictaminar, sí la profesión o arte están legalmente reglamentados; en caso contrario, se podrá nombrar a personas prácticas, a juicio del juez.

Artículo 172.

También podrán ser nombrados peritos prácticos, cuando no hubiere titulados en el lugar en que se forme la instrucción; pero en tal caso se librará exhorto al juez del lugar en que los haya, para que, en vista de la declaración de los prácticos, emitan su opinión.

Artículo 173.

Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos; tendrán las propias condiciones que éstos, y estarán

sujetos a iguales causas de impedimento.

Artículo 174.

El juez hará a los peritos todas las preguntas que crea oportunas; les dará, por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los datos que tuviere, y hará constar estos hechos en el acta de la diligencia.

Artículo 176.

Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera, y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión.

Artículo 176.

El juez, cuando lo juzgue conveniente, asistirá al reconocimiento que los peritos hagan de las personas o de los objetos.

Artículo 177.

Los peritos emitirán su opinión por escrito que ratificarán en diligencia especial ante el juez.

Artículo 178.

Cuando las opiniones de los peritos discordaren, y no hubiere mayoría, el juez nombrará un tercero en discordia.

Artículo 179.

Para los efectos del artículo anterior, cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, los jueces no permitirán que se verifique el primer análisis, sino cuando más sobre la mitad de las substancias, a no ser que su cantidad sea tan escasa, que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirlas todas, lo cual se hará constar en el acta respectiva.

Artículo 180.

El nombramiento de peritos, cuando lo haga el juez de oficio o a pedimento del Ministerio Público, deberá recaer en las personas que desempeñen este empleo por nombramiento oficial, y a sueldo fijo.

Si no hubiere peritos oficiales, se nombrarán de entre las personas que desempeñen el profesorado del ramo correspondiente en las escuelas nacionales, o bien de entre los funcionarios o empleados de carácter técnico en establecimientos o corporaciones dependientes del Gobierno.

Si no hubiere peritos de los que menciona el párrafo anterior, o el juez lo estimare conveniente, podrá nombrar otros. En ambos casos los honorarios se cubrirán según lo que se pague por costumbre en los establecimientos particulares del ramo de que se trate, a los empleados permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que los peritos debieron ocupar en el desempeño de su comisión.

Artículo 181.

Los honorarios de los peritos que nombre la parte civil, serán pagados por ella, sin perjuicio de su derecho a ser reembolsada por quien corresponda.

Artículo 182.

Cuando los peritos que gocen sueldo del Erario emitan su dictamen sobre puntos decretados de oficio o a petición del Ministerio Público, no podrán cobrar honorarios.

Artículo 183.

Los peritos serán examinados en la misma forma que los testigos; pero cuando el juez lo creyere conveniente, podrá ordenar que asistan a alguna diligencia y que se impongan de toda la instrucción o parte de ella.

Artículo 184.

Los peritos médico-legistas y los médicos de hospital, no necesitan ratificar sus dictámenes o certificados.

CAPÍTULO VIII.

De los testigos.

Artículo 185.

Durante la instrucción, el juez no podrá dejar de examinar a los testigos presentes cuya declaración se solicite o resulte indicada por cualquier motivo.

Artículo 186.

También mandará examinar, según corresponda a los testigos ausentes, sin que esto estorbe la marcha de la instrucción, ni la facultad del juez, para darla por terminada cuando haya reunido los elementos bastantes.

Artículo 187.

No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grados, y en la colateral hasta el tercero inclusive; pero si estas personas tuvieren voluntad, se les recibirá su declaración y se hará constar la circunstancia.

Artículo 188.

Los testigos darán siempre la razón de su dicho, que se hará constar en esa diligencia.

Artículo 189.

Cuando los testigos que deban ser examinados no estuvieren presentes, serán citados por medio de cédula.

Artículo 190.

La cédula contendrá:

I. La designación legal del juzgado o tribunal ante quien deba presentarse el testigo;

II. El nombre, apellido y habitación del testigo, si se supieren; en caso contrario, los datos necesarios para identificarlo;

III. El día, hora y lugar en que deba comparecer;

IV. La pena que se le impondrá si no compareciere;

V. La media firma del juez y la firma entera del secretario del juzgado.

Artículo 191.

La citación puede hacerse en persona al testigo, donde quiera que se encuentre, o en su habitación aun cuando no estuviere en ella; pero en este caso se hará constar el nombre de la persona a quien se entregue la cédula. Si aquélla manifestare que el citado está ausente, dirá donde se encuentra, desde que tiempo y cuándo se espera su regreso; y todo esto se hará constar para que el juez dicte las providencias que fueren procedentes.

Artículo 192.

Si el testigo fuere militar o empleado en algún ramo del servicio público, la citación se hará por conducto del superior jerárquico respectivo; a menos que la eficacia de la averiguación exija lo contrario.

Artículo 193.

Si el testigo se hallare fuera de la población, pero en el distrito jurisdiccional, se comisionará al juez del fuero común para que lo examine.

Artículo 194.

Si el testigo se hallare fuera del territorio jurisdiccional, se le examinará por medio de exhorto dirigido al juez de su residencia.

Artículo 195.

Si el testigo se hallare en la misma población, pero tuviera imposibilidad física para presentarse al juzgado, el juez, asistido de su secretario, se trasladará a la casa del testigo a recibirle su declaración.

Artículo 196.

Fuera del caso de enfermedad o imposibilidad física, todas las personas están obligadas a presentarse al juzgado cuando sean citadas. Sin embargo, cuando haya que examinar a altos funcionarios de la Federación, el juez se trasladará a la habitación u oficina de dichas personas.

En los casos en que el juez lo estime conveniente, por circunstancias especiales, podrá examinar a cualquier testigo en su casa.

Artículo 197.

Cada testigo debe ser examinado separadamente por el juez, en presencia del secretario. A ninguna otra persona, con

excepción del representante del Ministerio Público, se le permitirá que asista a la diligencia, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando el testigo sea ciego;

II. Cuando ignore el castellano o sea sordo o mudo.

Artículo 198.

En el caso de la fracción I del artículo anterior, el juez designará, para que acompañe al testigo, a otra persona, que firmará la declaración después de que aquella hubiere ratificado. En el caso de la fracción II, se procederá conforme al artículo 210.

Artículo 199.

Antes de que los testigos comiencen a declarar, el juez los instruirá de las penas que el capítulo VII, título IV, libro III del Código Penal, impone a los que se producen con falsedad. Esto podrá hacerse hallándose reunidos todos los testigos.

Artículo 200.

Después de tomarle la protesta de decir verdad, se preguntará, a cada testigo su nombre, apellido, edad, vecindad, habitación, estado, profesión o ejercicio; si se halla ligado con el inculpado o el querellante por vínculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros; y si tiene algún motivo de odio o rencor contra alguno de ellos.

Artículo 201.

Los testigos declararán de viva voz, y podrán consultar las notas o documentos que llevaren, cuando para ello no hubiere inconveniente a juicio del juez.

Artículo 202.

Las declaraciones se redactarán con claridad, empleando, hasta donde sea posible, las mismas palabras empleadas por los testigos.

Artículo 203.

Si la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, después de interrogar al testigo, sobre las señales que caracterizan dicho objeto, se le manifestará para que lo reconozca y firme sobre él, si fuere posible.

Artículo 204.

Si la declaración es relativa a un hecho que hubiere dejado vestigios permanentes en un lugar, el testigo podrá ser conducido a él, para que haga las explicaciones convenientes.

Artículo 205.

Concluida la diligencia se leerá al testigo su declaración o la leerá él mismo, si quisiere, para que la ratifique o la enmiende, y después de esto será firmada por el testigo y su acompañante, si lo hubiere.

Artículo 206.

Siempre que se tome declaración a un menor de edad, a un pariente del acusado, o a cualquiera otra persona que por circunstancias especiales sea sospechosa de falta de veracidad o de exactitud en su dicho, se hará constar esto en el acta.

Artículo 207.

A los menores de catorce años, en vez, de exigírseles protesta de decir verdad, se les exhortará para que la digan.

Artículo 208.

Si de la instrucción apareciere que algún testigo se ha producido con falsedad, será detenido; se mandarán compulsar las piezas conducentes para la averiguación de este delito; y se formará el proceso correspondiente, sin que esto sea motivo para que se suspenda la causa.

Artículo 209.

Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar a cerca del delito, de sus circunstancias o de la persona del inculpado; el juez, a pedimento del Ministerio Público o de alguna de las partes interesadas, podrá arraigar al testigo por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración, el testigo tendrá derecho de exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios que con el arraigo se le causen.

CAPÍTULO IX.

De los intérpretes.

Artículo 210.

Cuando el acusado, los testigos o peritos no hablen el idioma español, el juez nombrará de oficio uno o dos intérpretes, mayores de edad, que protestarán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir.

Cuando no pudiere ser habido un intérprete mayor de edad, podrá nombrarse a un menor que haya cumplido catorce años.

Artículo 211.

Las partes podrán recusar al intérprete, motivando la recusación; y el juez resolverá de plano y sin recurso.

Artículo 212.

Los testigos no podrán ser intérpretes.

Artículo 213.

Si el acusado o algún testigo fuere sordomudo, el juez nombrará para intérprete a una persona que pueda comprenderlo, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 214.

A los sordos y a los mudos que sepan leer y escribir se les interrogará por escrito, y se les prevendrá que contesten del mismo modo.

CAPÍTULO X.

De la confrontación.

Artículo 215.

Toda persona que tuviere que referirse a otra en su declaración, lo hará de un modo claro y distinto, mencionando, si le fuere posible, el nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla.

Artículo 216.

Cuando el que declara no pueda dar esta noticia exacta de la persona a quien se refiera, pero exprese que podría reconocerla si se le presentara, se procederá a practicar una confrontación.

Lo mismo se hará cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce.

Artículo 217.

En la confrontación se observarán las reglas siguientes:

I. Que la persona que sea objeto de ella, no se disfrace ni desfigure en manera alguna;

II. Que se presente acompañada con otros individuos que vistan ropas semejantes;

III. Que los individuos que la rodean sean aproximadamente de su misma clase social.

Artículo 218.

Si el Ministerio Público o alguna de las partes interesadas solicitare que se observen mayores precauciones que las prevenidas en el artículo anterior, podrá el juez acordarlas, si las estima convenientes.

Artículo 219.

El que deba ser confrontado, puede elegir el punto en que quiera colocarse con relación a los que le acompañen, y pedir que se excluya del grupo a cualquiera persona que le parezca sospechosa. El juez podrá limitar prudentemente el uso de este derecho cuando lo crea malicioso.

Artículo 220.

La diligencia de confrontación se preparará colocando en una fila a la persona que deba ser confrontada y a las que hayan de acompañarla. Se tomará al declarante la protesta de decir verdad, y se le interrogará:

I. Si persiste en su declaración anterior;

II. Si conocía con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la conoció en el momento de ejecutarlo;

III. Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar o porque motivo y con qué objeto.

Se le llevará frente a las personas que formen el grupo, se le permitirá mirarlas detenidamente, y se le prevendrá que toque con la mano a la de que se trate.

Artículo 221.

Cuando la pluralidad de las personas amerite varias confrontaciones, éstas se verificarán en actos separados.

CAPÍTULO XI.

De los careos.

Artículo 222.

Los careos de los testigos entre sí o con el procesado, y los de aquéllos y éste con el ofendido, deberán practicarse durante la instrucción.

Artículo 223.

En todo caso se careará un solo testigo con otro testigo, con el inculpado o con el ofendido; y no concurrirán a la diligencia otras personas que las que deban ser careadas y los intérpretes, si fueren necesarios.

Artículo 224.

Los careos se practicarán dando lectura, en lo conducente, a las declaraciones que se reputen contradictorias; y llamando la atención de los careados, sobre sus contradicciones, a fin de que discutan entre si y pueda aclararse la verdad.

Artículo 225.

Cuando alguno de los que deban ser careados no fuere habido o resida en otra jurisdicción, se practicará el correspondiente careo supletorio.

CAPÍTULO XII.

De la prueba documental.

Artículo 226.

El juez recibirá las pruebas documentales que le presenten las partes durante la instrucción, las agregará al proceso y asentará razón de ello en el mismo.

Artículo 227.

Siempre que alguno de los interesados pidiere copia o testimonio de algún documento que obre en los archivos públicos, los otros interesados tendrán derecho de pedir que se adicione con lo que crean conducente del mismo documento.

Artículo 228.

Los documentos existentes fuera de la jurisdicción del juzgado o tribunal en que se siga el proceso, se compulsarán a virtud de exhorto que se dirija al juez del lugar en que aquéllos se encuentren.

Artículo 229.

Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados que se presenten por el otro, se reconocerán por aquél.

Con este objeto se le manifestarán originales, y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma.

Artículo 230.

Cuando el Ministerio Público creyere que pueden encontrarse pruebas del delito que motiva la instrucción, en la correspondencia que se dirija al inculpado, pedirá al juez, y éste ordenará que dicha correspondencia se recoja. El juez podrá también decretarlo así de oficio.

Artículo 231.

La correspondencia recogida por el juez se abrirá por éste en presencia del secretario, del Ministerio Público y del inculpado, si estuviere en el lugar.

En seguida leerá para sí la correspondencia; si no tuviere relación con el hecho que se averigua, la devolverá al inculpado; en el supuesto contrario, la mandará agregar al proceso. En todo caso, levantará acta de la diligencia.

Artículo 232.

El juez podrá ordenar que por cual-

quiera administración de telégrafos se le faciliten copias de los telegramas por ella trasmitidos, si pudiera esto contribuir al esclarecimiento del delito.

Artículo 233.

El auto motivado que se dicte en los casos de los tres artículos que preceden, determinará con exactitud la correspondencia epistolar o telegráfica que haya de ser examinada.

CAPÍTULO XIII.

De la suspensión del procedimiento.

Artículo 234.

Iniciado el procedimiento en averiguación de un delito, no se podrá suspender sino en los casos siguientes:

I. Cuando el responsable está substraído a la acción de la Justicia;

II. Cuando la ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento.

Artículo 235.

Lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior, se entiende sin perjuicio de que se practiquen las diligencias que tiendan a comprobar la existencia del delito, la responsabilidad del prófugo, y a lograr la captura de éste.

La falta de un inculpado no impedirá la continuación del proceso respecto de los demás responsables que se hallaren a disposición del juez.

Artículo 236.

Lograda la captura del prófugo, el proceso continuará su curso sin que se repitan las diligencias ya practicadas, a menos que el juez lo estime indispensable.

Artículo 237.

Cuando el tribunal de apelación tuviere noticia de que un juez ha dejado indebidamente de actuar en un proceso, dictará las medidas que estime legales, previo informe del juez y con audiencia del Ministerio Público.

TÍTULO III.

Del juicio en general.

CAPÍTULO I.

Del juicio.

Artículo 238.

Luego que el juez considere agotada la averiguación, mandará poner el proceso a la vista del Ministerio Público y de la parte civil, por tres días, y por otros tres, a la del acusado y su defensor, para que tomen apuntes.

Artículo 239.

Si al expirar el término concedido en el artículo anterior, o antes, el Ministerio Público, el acusado, su defensor o la parte civil juzgaren necesario aclarar algún punto dudoso de hecho, lo harán constar en el proceso. En este caso, el juez mandará abrir un término de prueba que no exceda de quince días, comunes para ambas partes.

En caso contrario, al expirar los tres días, mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por cinco días para que formulé sus conclusiones por escrito. Lo mismo ordenará al expirar el término de prueba.

Artículo 240.

Sólo serán admisibles las pruebas que puedan practicarse dentro de los quince días que concede el artículo anterior, y se recibirán con citación de las partes.

Artículo 241.

El escrito o comparecencia en que el Ministerio Público formule sus conclusiones, deberá contener un extracto breve del proceso, en lo que sea conducente para fundarlas.

Dichas conclusiones deberán referirse precisamente a uno de estos dos puntos: ha lugar a la acusación, o bien: no ha lugar a la acusación.

Artículo 242.

En el primer caso del artículo anterior, deberá fijar, en proposiciones concretas, los

hechos punibles que atribuya al acusado, y citará las leyes que los castiguen. Estas proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del delito y todas las circunstancias que deban tomarse en cuenta para imponer la pena.

Artículo 243.

En el caso de que el pedimento sea en el sentido de no haber lugar a la acusación, el agente del Ministerio Público expondrá los motivos en que se funde, y el juez remitirá el proceso al Procurador General de la República, quien, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, resolverá bajo su responsabilidad, en el término de ocho días, si es de confirmarse dicho pedimento, o si debe someterse a juicio al inculpado, y expresará, en este último caso, el delito por el cual debe formularse la acusación y el grado de responsabilidad con que debe considerarse al acusado.

Artículo 244.

Si el Procurador confirma el pedimento del agente del Ministerio Público, el acusado será puesto en libertad absoluta y se mandarán archivar las diligencias. En caso contrario se procederá como se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 245.

Cuando el agente formule conclusiones de acusación, se harán conocer al acusado y su defensor, dándoles vista de todo el proceso, que quedará a su disposición en la secretaria, para que, en el término de cinco días, contesten el escrito de acusación, y formulen, a su vez, las conclusiones que crean procedentes. Cuando los acusados fueren varios, a los cinco días señalados se aumentarán dos por cada uno de aquéllos, y el término será común para todos.

Artículo 246.

El mismo día que expire el término señalado en el artículo anterior, el juez citará a una audiencia que deberá verificarse precisamente dentro de los cinco días siguientes. En ella expondrán lo que les convenga el Ministerio Público, el defensor y el reo, si quisiere hacerlo. La parte civil podrá alegar también, por lo relativo a la acción que le compete.

Artículo 247.

Si al concluir el término a que se refiere el artículo 245, el reo o su defensor no han presentado conclusiones, se tendrá por formulada la de inculpabilidad, y se mandará, en el mismo auto que así lo declare, citar para la audiencia de que trata el artículo precedente.

Artículo 248.

La citación para la audiencia expresada, produce los efectos de citación para sentencia, y el juez fallará dentro de los ocho días siguientes.

Artículo 249.

Los términos señalados en este capítulo, que excedan de tres días, se reducirán a la mitad, aumentándose las horas necesarias para hacer día completo si el término es de un número impar de días, en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de procesos por circulación de moneda falsa, cualquiera que sea la pena que haya de imponerse;

II. Cuando el delito tenga señalada una pena que no exceda del término de un año, y dicha pena consista en suspensión de algún derecho civil, de familia o político; suspensión de empleo o cargo; inhabilitación para obtener determinados cargos u honores; inhabilitación para toda clase de empleos, cargos u honores; suspensión en el ejercicio de alguna profesión, o inhabilitación por ejercerla; destierro del lugar, Distrito o Estado, o confinamiento.

III. Cuando el proceso se siga por delitos que tengan señalada como pena apercibimiento, multa de primera o segunda clase, arresto o reclusión.

CAPÍTULO II.

Del valor de las pruebas.

Artículo 250.

No puede condenarse al acusado, sino cuando se haya probado que existió el delito y que él tuvo en su comisión alguna de las responsabilidades penales fijadas por la ley.

Artículo 251.

Los jueces y tribunales, en los negocios de su competencia, apreciarán la prueba con sujeción a las reglas contenidas en este capítulo.

Artículo 252.

En caso de duda debe absolverse.

Artículo 253.

El que afirma está obligado a probar; también lo está el que niega, cuando su negación es contraria a una presunción legal, o envuelve la afirmación de un hecho.

Artículo 254.

La ley reconoce como medios de prueba:

I. La confesión judicial;

II. Los instrumentos públicos y solemnes;

III. Los documentos privados;

IV. El juicio de peritos;

V. La inspección judicial;

VI. Las declaraciones de testigos;

VII. Las presunciones.

Artículo 255.

La confesión judicial hará prueba plena, cuando concurran las circunstancias siguientes:

I. Que esté plenamente comprobada la existencia del delito;

II. Quesea hecha por persona mayor de catorce años, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;

III. Que sea hecha ante el juez o tribunal de la causa, o ante el funcionario de policía judicial que obre en auxilio de la justicia federal;

IV. Que no haya otras pruebas que, a juicio del juez, la hagan inverosímil.

Artículo 256.

La confesión judicial calificada se estimará en el sentido que aparezca más verosímil por los datos que arroje el proceso. Si no existen datos, o los que haya no ministran probabilidades o verosimilitudes en ningún sentido, se aceptará la confesión íntegra.

Artículo 257.

Son documentos públicos:

I. Los testimonios de escrituras autorizadas por los notarios, escribanos o jueces, conforme a las leyes del Distrito Federal, del Estado o Territorio respectivo;

II. Los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;

III. Los libros de actas, registros, catastros y demás documentos que se hallen en los archivos públicos dependientes de la Federación, de los Estados y del Distrito o Territorios Federales;

IV. Las certificaciones de constancias existentes en los mismos archivos;

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales que se refieran a actas del estado civil, que hubieren sido expedidas con anterioridad al establecimiento del Registro Civil; o dentro del período a que se refiere el decreto de 5 de diciembre de 1867;

VI. Las certificaciones a que se refiere la fracción anterior, expedidas con anterioridad al establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o juez que haga sus veces;

VII. Las certificaciones de actas del estado civil dadas por los encargados del Registro, respecto de constancias existentes en los libros del mismo;

VIII. Las actuaciones judiciales;

IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley, y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código de Comercio y con referencia al libro de registro de sus respectivas operaciones, en los términos y con las solemnidades legales.

Artículo 258.

Los instrumentos públicos hacen prueba plena, salvo siempre el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos.

Artículo 259.

Los documentos privados sólo harán prueba plena contra su autor, cuando fueren judicialmente reconocidos por éste. Los provenientes de un tercero, serán estimados como presunciones.

Artículo 260.

Los documentos privados subscriptos por testigos, se considerarán como prueba testimonial, siempre que éstos hayan ratificado el contenido de aquéllos ante la autoridad judicial.

Artículo 261.

La inspección judicial hará prueba plena, cuando se haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos.

Artículo 262.

La fuerza probatoria de todo juicio pericial, incluso el cotejo de letras, será calificada por el juez o tribunal, según las circunstancias.

Artículo 263.

No serán admitidas como testigos las personas de uno u otro sexo que no hayan cumplido catorce años, ni las que hayan sido condenadas en juicio criminal, por delito que no sea político, a cualquiera de las penas siguientes: muerte o prisión extraordinaria; suspensión de algún derecho civil o de familia; suspensión, destitución o inhabilitación para algún cargo, empleo u honor, o, en general, para toda clase de empleos, cargos u honores; y sujeción a la vigilancia de la autoridad política.

Sin embargo, cuando las circunstancias de la causa lo exigieren, por haber sido cometido el delito en una cárcel y sin más testigos que los mismos condenados a alguna de las penas referidas, éstos podrán ser admitidos como tales testigos.

En los demás casos, salvo disposición expresa de este código, los comprendidos en el párrafo primero de este artículo serán examinados:

I. Si ninguna de las partes se opusiere;

II. Si, aun cuando haya oposición, el juez cree necesaria la declaración para el esclarecimiento de los hechos; pero en tal caso se hará constar esta circunstancia.

Artículo 264.

Dos testigos, que no sean inhábiles por alguna de las causas expresadas en este Código, harán prueba plena, si concurren en ellos los siguientes requisitos:

I. Que convengan no sólo en la sustancia, sino en los accidentes del hecho que refieren;

II. Que hayan oído pronunciar las palabras de que se trate, o visto el hecho material sobre que depongan.

Artículo 265.

También harán prueba plena dos testigos que convengan en la substancia y no en los accidentes, siempre que éstos, a juicio del juez o tribunal, no modifiquen la esencia del hecho.

Artículo 266.

Para apreciar la declaración de un testigo, el juez o tribunal tendrá en consideración las circunstancias siguientes:

I. Qué el testigo no sea inhábil por cualquiera de las causas señaladas en este Código;

II. Que por su edad, capacidad o instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto;

III. Que por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

IV. Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otras personas;

V. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales;

VI. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

El apremio judicial no se reputa fuerza.

Artículo 267.

Si por ambas partes hubiere igual número de testigos en pro y en contra del acusado, el tribunal se decidirá por el dicho de los que merezcan mayor confianza. Si todos la merecen igual y no hay otra prueba, se absolverá al acusado.

Artículo 268.

Si por una parte hubiere mayor número de testigos que por la otra, el juez o tribunal se decidirá por la mayoría, siempre que en todos concurran los mismos motivos de confianza. En caso contrario, obrará como le dicte su conciencia, fundando especialmente esta parte del fallo.

Artículo 269.

Producirán solamente presunción:

I. Los testigos que no convinieren en la substancia, los de oídas, y la declaración de un solo testigo;

II. Las declaraciones de testigos singulares que versen sobre actos sucesivos referentes a un mismo hecho;

III. La fama pública.

Artículo 270.

Los tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones, hasta el grado de poder considerar que su conjunto forma prueba plena. Igual valor podrán dar los tribunales a los elementos probatorios que allegue el juez conforme al artículo 128.

CAPÍTULO III.

De la sentencia irrevocable.

Artículo 271.

Son irrevocables las sentencias que causan ejecutoria.

Artículo 272.

Causan ejecutoria:

I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia, cuando se hayan consentido expresamente, o cuando, expirado el término que fija la ley para interponer algún recurso, no se haya interpuesto;

II. Las sentencias contra las cuales no dé la ley recurso alguno.

CAPÍTULO IV.

De la revisión de oficio.

Artículo 273.

Los procesos de que conozcan los jueces de distrito, serán revisados por el tribunal de circuito respectivo, cuando la sentencia que en aquéllos se pronuncie, causé ejecutoría. La revisión tendrá por objeto declarar si hay o no méritos para exigir al juez responsabilidad.

Artículo 274.

Para los fines que índica el artículo anterior, los jueces, luego que hayan ejecutado su sentencia, remitirán el proceso original al tribunal de circuito respectivo.

Artículo 275.

Recibido el proceso por el tribunal, se mandará dar vista al Ministerio Público, por

el término de ocho días, para que pida lo que corresponda.

Artículo 276.

Devuelto el proceso, el tribunal, sin más substanciación, resolverá si hay o no méritos para exigir al juez responsabilidad. En el primer caso, se procederá en la forma que este Código establece para los juicios de responsabilidad. En el segundo, se limitará a declarar revisado el expediente y lo devolverá al juez.

Artículo 277.

Los procesos de que conozcan en primera instancia los tribunales de circuito, serán revisados por la Sala respectiva de la Suprema Corte de Justicia, conforme a lo dispuesto en este capítulo, cuando la sentencia que en ellos se pronuncie cause ejecutoria.

CAPÍTULO V.

De la ejecución de las sentencias.

Artículo 278.

La ejecución de las sentencias irrevocables en materia penal, corresponde al Poder Ejecutivo, el que designará el lugar en que deba sufrir el reo la pena corporal. Será, sin embargo, deber del Ministerio Público practicar todas las diligencias conducentes a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas; y lo hará así, ya gestionando cerca de las autoridades administrativas lo que proceda, o ya requeriendo en los tribunales la represión de todos los abusos que aquéllas o sus subalternos cometan, cuando se aparten de lo prevenido en las sentencias, en pro o en contra de los individuos que sean objeto de ellas.

Artículo 279.

El Ministerio Público cumplirá con el deber que le impone el artículo anterior, siempre que, por queja del interesado o de cualquiera otra manera, llegue a su noticia que la autoridad encargada de la ejecución de la sentencia se aparta de lo ordenado en ella; pero los agentes del Ministerio Público no gestionarán en tales casos ante la autoridad administrativa o ante los tribunales, sino en virtud de instrucción expresa y escrita del Procurador General de la República.

Artículo 280.

Pronunciada una sentencia condenatoria irrevocable, el juez o tribunal que la pronuncie remitirá dentro de tres días, testimonio de ella a la Secretaría de Justicia, la que, en su caso, la remitirá a quien corresponda; y mandará copia de la parte resolutiva de la propia sentencia al alcaide o encargado de la cárcel en que se halle el reo.

Artículo 281.

La pena corporal se contará desde la fecha del auto de formal prisión, incluyéndose solamente el tiempo que el acusado haya permanecido privado de su libertad.

Si el proceso hubiere sufrido demora por culpa del acusado o su defensor, se observará lo prevenido en los artículos 192, 198 y 194 del Código Penal.

Artículo 282.

En los casos de conmutación de la pena capital, la que se imponga se contará desde la fecha de la sentencia de primera instancia o de la ejecutoria, a juicio del Ejecutivo, según las circunstancias del delito y del delincuente.

Artículo 288.

La pena de muerte se ejecutará en la forma prevenida en los artículos 248 y 251 del Código Penal. El juez se limitará a hacer la identificación y entrega del reo a la autoridad política; y agregará al proceso la certificación a que se defiere el artículo siguiente, y el acta que la autoridad ejecutora debe levantar de la ejecución de la pena.

Artículo 284.

A la ejecución asistirá, cuando menos, un médico, el que, en el misino día, remitirá al juez de la causa certificado en que hará constarla muerte del reo.

En el Distrito Federal concurrirán a las ejecuciones dos médicos legistas, o de cárcel

en defecto de aquéllos, que designará el Gobernador.

Artículo 285.

En los lugares donde no hubiere médico, asistirá un práctico.

Artículo 286.

No será necesaria la autopsia de los cadáveres de los individuos que hubieren sufrido la pena capital.

Artículo 287.

La ejecución de la pena de muerte no se suspenderá por la averiguación de otro delito cometido por el mismo reo, sino en el caso en que, a juicio del juez que conozca de la nueva instrucción, sea indispensable la presencia del sentenciado a muerte, para esclarecer los hechos relativos a la responsabilidad de tercero en el mismo delito.

Tan luego como ya no sea indispensable la presencia del condenado a muerte, el juez lo avisará a la autoridad a quien lo hubiere pedido, y lo pondrá a su disposición para que se ejecute la pena.

Artículo 288.

Para la ejecución de las demás penas, las autoridades se sujetarán a lo prevenido en el Código Penal y en los reglamentos administrativos.

TÍTULO IV.

De los incidentes.

CAPÍTULO I.

De la substanciación de las competencias.

Artículo 289.

Las cuestiones de competencia pueden promoverse por declinatoria o por inhibitoria. La declinatoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y que remita las actuaciones al juez que se le indique como competente. La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se crea competente, para que éste dirija oficio al que estuviere conociendo del asunto de que se trate, pidiéndole que se inhiba y le remita el proceso.

Cuando se hubiere optado por uno de estos medios, no se podrá abandonar para recurrir al otro, ni emplear los dos sucesivamente; pues se deberá pasar por el resultado de aquél que se hubiere preferido. Aunque se haya intentado la declinatoria, los jueces podrán promover de oficio la inhibitoria para reclamar su jurisdicción.

Artículo 290.

La declinatoria no puede oponerse durante la instrucción. Si se opusiere concluida ésta, se substanciará como excepción dilatoria en la forma establecida para los incidentes; y la resolución que se pronuncie, será apelable en ambos efectos.

Artículo 291.

La inhibitoria puede promoverse por el Ministerio Público, por el acusado o su defensor y aun de oficio por el juez.

Artículo 292.

La excepción de incompetencia j por inhibitoria, se substanciará por cuerda separada. Se continuarán las diligencias que haya empezado a practicar cada uno de los jueces competidores, para acumularlas en su oportunidad.

Artículo 293.

Terminada la instrucción, los jueces competidores suspenderán sus procedimientos, hasta que se les comunique la ejecutoria que decida la controversia jurisdiccional.

Artículo 294.

El que promueva la inhibitoria puede desistirse de ella antes de que sea aceptada por los jueces o tribunales, más una vez que éstos la acepten, continuará substanciándose hasta su decisión.

Artículo 295.

Promovida la controversia y presentado el pedimento del Ministerio Público en el término de tres días que al efecto se

señalarán, el juez, sin otro trámite, dirigirá el oficio inhibitorio indicando la competencia, o resolverá que no ha lugar al requerimiento de inhibición.

Artículo 296.

Luego que el juez o el tribunal requerido reciba la inhibitoria, señalará dos días al Ministerio Público y otros tantos al reo, a fin de que se impongan de lo actuado; los citará para una audiencia verbal que se verificará dentro de las veinticuatro horas siguientes, concurran o no los citados, y, no promoviéndose prueba, dictará su resolución dentro de los tres días siguientes sosteniendo la competencia o desistiéndose de ella.

Si se promoviere prueba, se concederá el término de ocho días para rendirla.

Artículo 297.

Contraía resolución en que se declare que no lía lugar a expedir el oficio inhibitorio, o se reconozca la jurisdicción del juez o tribunal requirente, cabe el recurso de apelación.

Artículo 298.

Consentido o ejecutoriado el auto de inhibición, se remitirá el proceso, con citación de las partes, al juez o tribunal que hubiere propuesto la inhibitoria.

Artículo 299.

Si el Juez requerido se negare a inhibirse, lo comunicará al requirente; y si éste insistiere en la inhibitoria, ambos remitirán, dentro de veinticuatro horas, a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sus respectivas actuaciones originales, y un oficio en que cada juez funde su competencia.

Artículo 300.

El juez requerido o el requirente que no reciba contestación oportuna a alguno de los oficios que, con arreglo a los artículos anteriores, hubiere librado al otro juez, ocurrirá en queja a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que dicte las medidas conducentes.

Artículo 301.

Luego que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia reciba las actuaciones e informes de los tribunales competidores, los pasará al Ministerio Público para que presente su pedimento en el término de tres días, transcurridos los cuales, mandará que por igual término queden los autos en la Secretaría para que se impongan de ellos las partes. En seguida se fijará día para la vista, que deberá verificarse dentro de los ocho siguientes; y, dentro de igual término, la Sala pronunciará su fallo, en el que podrá imponer multa de diez a quinientos pesos al juez o tribunal que haya sostenido con notoria temeridad su competencia.

Artículo 302.

La resolución que se dicte, será comunicada a los jueces competidores y se enviarán las actuaciones al que haya sido declarado competente, para que continúe el procedimiento.

Artículo 303.

El juez o tribunal que se estime incompetente para conocer de una causa, después de haber practicado las diligencias más urgentes y de haber dictado, si procediere, el auto de formal prisión, remitirá de oficio las actuaciones, previa audiencia del Ministerio Público, a la autoridad que juzgue competente.

Si la autoridad a quien se remita el proceso, a su vez se estimare incompetente, lo elevará a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que, con arreglo al artículo 301, se dicte la resolución que corresponda, y se imponga la inulta al que temerariamente sostenga su incompetencia.

Artículo 304.

Todos los términos señalados para la substanciación de las competencias son improrrogables; una vez transcurridos, se proveerá de oficio el trámite que corresponda.

CAPÍTULO II.

De los impedimentos y recusaciones.

Artículo 305.

Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, deben inhibirse del conocimiento de los negocios en que tengan impedimento.

Son impedimentos:

I. El parentesco con el procesado o su defensor.

a) En la línea recta, sin limitación de grados;

b) En la colateral por consanguinidad, hasta el cuarto grado inclusive;

c) En la colateral por afinidad, en el segundo grado;

II. Tener notorias y estrechas relaciones de afecto con el procesado o su defensor;

III. Haber seguido el juez o magistrado, su cónyuge o sus parientes en los grados a que se refiere la fracción I de este artículo, algún proceso criminal contra cualquiera de las partes;

IV. Seguir el juez o magistrado a las personas a quienes se refiere la fracción anterior, un juicio civil con alguno de los interesados en el proceso, al incoarse éste, o no llevar un año de terminado el que antes hubiere seguido;

V. Asistir durante el proceso a convite que diere o costeare alguno de los interesados, o vivir en familia con alguno de ellos;

VI. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;

VII. Hacer promesas a los procesados o sus defensores, o amenazar de algún modo a cualquiera de ellos;

VIII. Haber sido sentenciado en virtud de acusación hecha por el procesado;

IX. Tener interés directo o indirecto en el proceso, o que lo tenga su cónyuge, o sus parientes en los grados que expresa la fracción i de este artículo;

X. Tener pendiente un proceso igual al de que se trate, o que lo tengan sus parientes expresados en la fracción anterior;

XI. Ser, al incoarse el procedimiento, acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal del procesado;

XII. Ser o haber sido tutor o curador del procesado, o administrar por cualquiera causa sus bienes;

XIII. Ser heredero, legatario, donatario, deudor o fiador del acusado;

XIV. El hecho de que la esposa o alguno de los hijos del juez o magistrado sean, al incoarse el procedimiento, acreedores, deudores o fiadores del procesado.

XV. Haber sido magistrado o juez en otra instancia, perito, procurador o abogado en el negocio de que se trate, o haber desempeñado el cargo de defensor del acusado.

Siempre que hubiere parte civil, el juez o magistrado se entenderá impedido si con ésta lo ligare alguna de las relaciones arriba expresadas con referencia al procesado, o estuviere para con ella en las mismas condiciones que constituyen impedimento respecto del inculpado.

Artículo 306.

Las causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las partes. Los magistrados de circuito y jueces de distrito que no se excusen en los casos enumerados en el anterior artículo, serán castigados como lo previene el 1052 del Código Penal.

Artículo 307.

El impedimento se calificará por el superior a quien correspondería juzgar de una recusación, en vista del informe que, dentro de tres días, rinda el juez o magistrado; y contra la resolución que se dicte no habrá recurso alguno.

Artículo 308.

Cuando los magistrados o jueces no se inhibieren, a pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procederá la

recusación.

Artículo 309.

No proceden las recusaciones, durante la instrucción, ni después de que se haya citado para sentencia en primera instancia o para la vista en los tribunales superiores.

Artículo 310.

Si después de la citación ocurriese cambio en el personal del tribunal o juzgado, será admisible la recusación, siempre que se proponga dentro de los tres días siguientes al en que se notifique el auto o decreto proveído por el nuevo personal.

Artículo 311.

Tienen derecho de recusar el Ministerio Público y el acusado por sí o por medio de su defensor. La parte agraviada tiene derecho de recusar, únicamente cuando conforme a la ley no pueda incoarse el procedimiento sin su querella. En todo caso, debe expresarse concreta y claramente la causa en que se funda la recusación

Artículo 312.

Si concurren varias causas de recusación, se propondrán al mismo tiempo, salvo el caso en que se trate de alguna causa superveniente.

Artículo 313.

Los jueces o magistrados desecharán de plano toda recusación que no estuviere propuesta en tiempo y forma, o que sea improcedente.

Artículo 314.

Cuando el magistrado de circuito o el juez de distrito, estimen cierta y legal la causa de recusación, sin audiencia de la parte contraria se declararán inhibidos; y mandarán que pase el proceso a quien corresponda.

Si el recusado es un ministro de la Suprema Corte, reconoce como cierta la causa, y la Sala la estima legal, ésta dictará auto teniéndolo por inhibido.

Artículo 315.

Cuando el funcionario recusado no estimare como cierta o legal la causa alegada, señalará al recusante el término de cuarenta y ocho horas para que ocurra ante el superior que deba conocer de la recusación.

Si el tribunal que debe conocer de la recusación estuviere en diferente lugar del en que reside el funcionario recusado, además de las cuarenta y ocho horas indicadas, se concederá otro término, computado conforme a la disposición relativa de este Código.

El término de que trata este artículo es improrrogable, y si dentro de él no se presenta el recusante, se le tendrá por desistido.

Artículo 316.

Admitido un impedimento o calificada como legal la causa de una recusación, el impedido o recusado quedará definitivamente separado del conocimiento del proceso, del cual conocerá el juez o tribunal que corresponda conforme a la ley.

Desde que el impedimento se proponga, hasta que se acepte o deseche se suspenderá la secuela de la causa, a menos que se trate de providencias urgentes.

Artículo 317.

El juez, magistrado o sala que deban decidir de la recusación, resolverán dentro de los tres días siguientes al en que reciban el expediente o a aquel en que quede integrada la sala, si es legal la causa alegada. Si la resolución es afirmativa, y la causa se funda en hechos que no estén justificados, se abrirá el incidente a prueba por un término que no exceda de diez días.

Artículo 318.

Concluido dicho término, serán citadas las parles a una audiencia, que se verificará dentro de tres días; y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se pronunciará la resolución, contra la que no cabrá recurso alguno.

Artículo 319.

Cuando se deseche la recusación, se

condenará al recusante a una multa de diez a cien pesos, que hará efectiva la oficina de Hacienda que corresponda.

Artículo 320.

En los impedimentos y recusaciones de los asesores, se observará lo dispuesto en este capítulo respecto de los magistrados de circuito y jueces de distrito.

Artículo 321.

Los secretarios y los oficiales mayores de los tribunales y juzgados quedan comprendidos en lo dispuesto en este capítulo, con las modificaciones que determinan los siguientes artículos.

Artículo 322.

Alegado el impedimento o admitida la recusación, el secretario u oficial mayor pasará la causa a quien deba substituirlo conforme a la ley.

Artículo 323.

De estos incidentes conocerá el tribunal o juez con quien actúe el empleado impedido.

Artículo 324.

Reconocida por éste como cierta la causa de recusación, o admitido como legítimo el impedimento, el magistrado o el juez declarará, sin más trámites, impedido para actuar en el proceso al empleado de quien se trate.

Artículo 325.

Si se declara que el impedimento o la recusación no es legal, el secretario u oficial mayor continuará actuando en la causa. Las resoluciones que se dicten en este caso no son apelables.

Artículo 326.

No son recusables los magistrados y jueces:

I. Al cumplimentar exhortos;

II. En los incidentes de competencia;

IIL En la calificación de los impedimentos o recusaciones.

Artículo 327.

No son admisibles las recusaciones sin causa.

Artículo 328.

Los funcionarios del Ministerio Público están impedidos para intervenir en los casos a que se refieren las fracciones I, IX. XI, XII y XIII del artículo 305 de este Código.

CAPÍTULO III.

De la acumulación de procesos.

Artículo 329.

La acumulación tendrá lugar:

I. En los casos del artículo 27 del Código Penal;

II. En los procesos que se instruyan en averiguación de delitos conexos;

III. En los que se sigan contra los autores, cómplices y encubridores de un mismo delito;

IV. En los que se sigan separadamente, en averiguación de un mismo delito, contra diversas personas.

No procederá la acumulación si se trata de diversos fueron.

Artículo 330.

Los delitos son conexos:

I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas;

II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque sea en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas;

III. Cuando se ha cometido un delito para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

Artículo 331.

La acumulación sólo podrá decretarse cuando todos los procesos se encuentren en estado de instrucción.

Artículo 332.

Cuando alguno de los procesos ya no estuviere en estado de instrucción, pero tampoco estuviere fenecido, el juez o tribunal cuya sentencia cause ejecutoria, lo remitirá en copia al juez o tribunal que conozca del otro proceso, para los efectos expresados en el libro I, título V, capítulo IV del Código Penal.

Artículo 333.

La acumulación se decretará de oficio, o a pedimento del Ministerio Público, del procesado o su defensor, y de la parte civil en cuanto se refiera a su interés.

Artículo 334.

Es competente para conocer de los procesos que deben acumularse; el juez que conociere de las diligencias más antiguas; y si estas se comenzaron en la misma fecha, el que designare el Ministerio Público.

Artículo 336.

La acumulación debe promoverse ante el juez que, conforme al artículo anterior, sea competente para conocer de todos los procesos; y el incidente a que dé lugar, se substanciará por cuerda separada.

Artículo 336.

Promovida la acumulación, el juez oirá en audiencia verbal, que se verificará dentro de tres días, al Ministerio Público y a los interesados que ante él litiguen, y sin más trámite, resolverá dentro de otros tres días.

Artículo 337.

Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el incidente se substanciará conforme a los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Civiles Federales. Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, el incidente se substanciará y resolverá en la forma y términos establecidos para las competencias por inhibitoria; pero será tribunal dirimente el que establecen los artículos 72 y 74 del Código citado.

CAPÍTULO IV.

De la separación de procesos.

Artículo 338.

El juez o tribunal que conozca de los procesos acumulados, puede ordenar la separación de éstos no obstante lo dispuesto en el capítulo anterior, siempre que concurran todas las circunstancias siguientes:

I. Que la separación sea pedida por el Ministerio Público, por el inculpado o su defensor, antes de que esté concluida la instrucción.

II. Que la acumulación se haya decretado en razón de que los procesos se sigan contra una sola persona por delitos diversos e inconexos;

III. Que el juez o tribunal estime que, de seguir acumulados los procesos, la averiguación se demoraría o se dificultaría gravemente, con perjuicio del interés público o del procesado.

Artículo 339.

Contra el auto en que se declare no haber lugar a la separación de procesos, no se da recurso alguno; pero dicho auto no pasará en autoridad de cosa juzgada, mientras no esté concluida la instrucción.

Artículo 340.

Sí se decretare la separación, conocerá de cada proceso el juez que, conforme a la ley, conocía de él antes de haberse verificado la acumulación. Dicho juez, si fuere diverso del que decretó la separación, no podrá en ningún caso rehusarse a conocer del proceso separado que se le remita.

Artículo 341.

El incidente sobre separación de procesos, se substanciará por cuerda separada y en la misma forma que el de acumulación, sin suspender el curso del proceso.

Artículo 342.

Cuando varios jueces u tribunales conocieren de procesos cuya separación se hubiere decretado, el que primero pronuncie

sentencia ejecutoria la comunicará a los otros, los cuales, al dictar su fallo, tendrán presente lo que disponen los capítulos III del título I, y IV del título V del libro I del Código Penal.

CAPÍTULO V.

De los incidentes criminales en los juicios civiles.

Artículo 343.

Si en un juicio civil apareciere un incidente criminal, el juez lo hará saber al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda. El juicio civil se suspenderá, sí el incidente criminal fuere de tal naturaleza, que la sentencia que en éste se dicte, deba necesariamente influir en la acción deducida.

Artículo 344.

Cuando el juez estimare que puede perjudicarse la administración de justicia por no comenzar desde luego la averiguación, practicará las diligencias que no admitan demora, y podrá mandar aprehender al inculpado y tomarle su preparatoria; y en seguida pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público como lo dispone el artículo anterior.

Artículo 345.

Si en un juicio civil se arguye de falso algún documento, el juez lo hará desglosar de los autos, y dejará en ellos una copia certificada, para formar con el original el incidente respectivo, que se seguirá por cuerda separada.

Artículo 346.

En el caso que expresa el artículo anterior, se requerirá a la parte que haya presentado el documento que se arguye de falso, para que diga si pretende que se tome en consideración o no; en el primer evento, sé suspenderá el juicio en el estado en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en et incidente sobro falsedad; y en el segundo, sin suspender el curso de los autos civiles, se substanciará el incidente criminal.

CAPÍTULO VI.

De la libertad absoluta del acusado.

Artículo 347.

Procede la libertad absoluta de los procesados en los casos siguientes:

I. Si al cumplirse el término constitucional de la detención, no hubiere méritos suficientes para decretar la prisión formal, sin perjuicio de lo que proceda por los nuevos datos que arroje el proceso;

II. Si al cumplirse el término expresado, apareciere plenamente comprobada alguna circunstancia ex culpante de las enumeradas en el artículo 34 del Código Penal.

III. Si apareciere que, por el delito que se persigue, no puede imponerse pena corporal;

IV. Si resultare que la acción penal se ha extinguido;

V. Si de las diligencias que se practiquen después de dictado el auto de formal prisión, quedare indiscutiblemente demostrada la existencia de alguna circunstancia que excluya la responsabilidad criminal;

VI. Cuando se pronuncie sentencia absolutoria;

Artículo 348.

Las partes, en el caso de la fracción V del artículo anterior, podrán pedir la libertad del procesado, y el juez la decretará previa la substanciación de un incidente.

CAPÍTULO VII.

De la libertad provisional bajo protesta.

Artículo 349.

En cualquier estado del proceso en que aparezca que se han desvanecido los fundamentos que hayan servido para decretar la prisión preventiva, podrá decretarse la libertad bajo protesta, con audiencia del Ministerio Público, a la que no podrá éste dejar de asistir.

Artículo 350.

Cuando a solicitud del interesado se promueva éste incidente, el juez citará a las partes a una audiencia verbal, la que se verificará dentro de cinco días; dentro de los tres siguientes se pronunciará el fallo que corresponda.

Artículo 351.

El fallo favorable en este incidente no será obstáculo para que se libre nueva orden de prisión o detención contra el procesado, si en el curso del proceso aparecieren motivos suficientes para ello.

Artículo 352.

También podrá decretarse la libertad bajo protesta, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

I. Que la pena corporal que deba imponerse no exceda de cinco meses de arresto mayor;

U. Que el inculpado tenga domicilio fijo y codecido en el lugar en que se siga el proceso.

Este requisito es dispensable por motivos suficientemente fundados a juicio del juez, previa la conformidad expresa del Ministerio Público;

III. Que tenga buenos antecedentes de moralidad;

IV. Que tenga profesión, oficio o modo honesto de vivir;

V. Que no haya sido condenado en otro juicio criminal;

VI. Que a juicio del juez no haya temor de que se fugue.

Artículo 363.

Será igualmente puesto en libertad bajo protesta el acusado, cuando cumpla la pena impuesta en primera instancia estando pendiente el recurso de apelación. El juez de distrito acordará de oficio la libertad de que trata este artículo.

Artículo 354.

Es aplicable a la libertad bajo protesta, lo que dispone el artículo 364, con excepción de su inciso IV.

CAPÍTULO VIII.

De la libertad provisional bajo caución.

Artículo 355.

Toda persona detenida o presa por un delito cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, podrá obtener su libertad bajo caución, siempre que llene las condiciones que fija el artículo 352 en sus fracciones de la II a la VI.

Artículo 356.

La libertad bajo caución puede pedirse por el interesado o su defensor, o por el legítimo representante de aquél, en cualquier estado del proceso, después de rendida la declaración indagatoria.

Artículo 357.

Hecha la promoción, el juez o tribunal substanciará el incidente por cuerda separada y sin que se suspenda en ningún caso el procedimiento criminal. En este incidente se recibirán, con citación del Ministerio Público, las pruebas que ofrezca el interesado.

En el auto en que se manden recibir las pruebas, se citará a las partes para una audiencia, qué se verificará dentro de tres días; y en ella se pronunciará la resolución que corresponda, la cual será apelable en el efecto devolutivo.

Artículo 358.

Cuando concurran todas las circunstancias que expresa el art, 355, el juez decretará la libertad bajo caución por la cantidad que estime conveniente.

Artículo 359.

Para fijar la cantidad por la que deba prestarse la caución, el juez tomará en cuenta la fortuna, clase y antecedentes de la persona detenida o presa; la gravedad y circunstancias del delito, y el mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en substraerse a la acción de la justicia. En

ningún caso la caución será menor de cien pesos.

Artículo 360.

La caución podrá prestarse depositando el inculpado en el Banco Nacional o en el establecimiento destinado al efecto, sí lo hay, o en caso contrario donde el juez lo ordene, la cantidad que éste señale, o constituyendo por ella prenda u otorgando hipoteca sobre bienes cuyo valor Ubre sea cuando menos igual al importe de la caución, más una mitad de ésta.

Artículo 361.

También se podrá prestar la caución dando fianza de persona de probidad y arraigo notorios, en quien concurran las circunstancias que para ser fiador judicial exige el Código Civil del Distrito Federal. El fiador se obligará a presentar al inculpado, siempre que el juez lo ordene, y a pagar, si no cumple esa obligación, la cantidad que se hubiere fijado.

Artículo 362.

Si el inculpado hubiere sido puesto en libertad bajo caución antes de cumplirse el término constitucional de setenta y dos horas, y el juez o tribunal no comprobase dentro de ese término la existencia de un hecho ilícito que merezca pena corporal, o no hubiese datos suficientes de culpabilidad, o apareciese plenamente comprobada alguna circunstancia excluyente de culpabilidad, dictará un auto motivado y fundado de libertad absoluta, en el cual dispondrá que quede sin efecto la caución y que se hagan, en consecuencia, las cancelaciones o devoluciones que procedan.

Si, por el contrario, las diligencias arrojan elementos bastantes para dictar el auto motivado de prisión, el juez o tribunal procederá a dictarlo en los términos legales, sin que por eso se revoque la libertad bajo caución, que disfrute el inculpado.

Artículo 363.

Si la resolución que se dicte fuere denegatoria de la libertad provisional, no pasará en autoridad de cosa juzgada; y podrá repetirse de nuevo la instancia por causas supervenientes o nuevos datos que se adquieran.

Artículo 364.

La libertad bajo caución se revocará en los casos siguientes:

I. Cuando el inculpado desobedeciere, su causa justa y probada, la orden de presentarse al juez o tribunal que conozca de su proceso;

II. Cuando cometiere, antes de que la causa en que se le concedió la libertad esté concluida por sentencia ejecutoria, un nuevo delito que merezca pena corporal;

III. Cuando amenazare a la parte ofendida o a algún testigo de los que hayan depuesto o tengan que deponer en su causa, o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos;

IV. Cuando lo presente el fiador y pida que se le releve de la fianza;

V. Cuando lo solicite el mismo inculpado y se presente a su juez;

VI. Cuando en el curso del proceso apareciere que al inculpado le corresponde una pena que no permita otorgar la libertad;

VII. Cuando el juez o tribunal abrigue temor fundado de que se fugue u oculte el inculpado,

Artículo 365.

En el caso de la fracción I del artículo anterior, se decretará la pérdida de la suma importe de la caución, y lo comunicará el juez a la oficina federal de Hacienda de mayor categoría en el lugar de su residencia, para que proceda a hacerla efectiva como corresponda.

Artículo 366.

En los casos de las fracciones II, III, VI y VII, se librará orden de aprehensión; y, no lográndose ésta en el término de tres días, se procederá como lo previene el artículo anterior.

Si se lograre la aprehensión, se devolverá desde luego la prenda o depósito,

o se mandará cancelar la fianza o hipoteca.

Artículo 367.

Lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, se observará cuando el acusado sea absuelto por sentencia ejecutoria; cuando sea condenado y se presente a cumplir su condena; y en el caso de muerte del procesado estando pendiente el proceso.

Artículo 368.

Las órdenes que se expidieren para que comparezca la persona puesta en libertad bajo de fianza, se entenderán con su fiador. Si éste no pudiere desde luego presentar a su fiado, el juez podrá otorgarle un plazo que no exceda de un mes y librará orden para la aprehensión del inculpado.

Artículo 369.

Si al expirar el plazo concedido al fiador, no se hubiere logrado la comparecencia del inculpado, se hará efectiva la fianza. En este caso, el acusado no tendrá derecho a que se le otorgue de nuevo el beneficio de libertad bajo caución, ni en la misma causa ni en otra.

Artículo 370.

Al incidente de libertad se agregará el comprobante relativo a la constitución del depósito, de la prenda o de la hipoteca. La fianza podrá extenderse *apud acta*.

Artículo 371.

No se pondrá en libertad bajo caución o protesta al procesado sin dejar en la causa un ejemplar de su retrato, y sin las demás precauciones conducentes a su identificación.

CAPÍTULO IX.

De la responsabilidad civil.

Artículo 372.

La acción civil puede ejercitarse al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conoce de la penal; pero deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del fuero común cuando haya recaído sentencia irrevocable en el proceso sin haberse intentado dicha acción, siempre que el que intenta aquella acción fuere un particular. Esto último se observará también cuando, concluida la instrucción, no hubiere lugar al juicio por falta de acusación del Ministerio Público, y se promueva posteriormente la acción civil.

Cuando promovidas las dos acciones hubiere concluido el proceso sin que el incidente de responsabilidad civil esté en el estado de sentencia, continuarán conociendo de él los tribunales federales.

Artículo 373.

Todos los juicios sobre responsabilidad civil que se sigan ante los tribunales federales, se tramitarán y decidirán conforme a lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles para los juicios sumarios v tendrán todos los recursos que según su cuantía, se concedan en dichos juicios.

Artículo 374.

Si el juicio llega a estado de alegar antes de que se concluya la instrucción criminal, se suspenderá hasta que ésta se encuentre en estado de sentencia, la que se pronunciará resolviendo a la vez sobre el juicio penal y sobre la responsabilidad civil.

Artículo 375.

En los casos en que el inculpado se encuentre prófugo, el emplazamiento para contestar la demanda civil se hará por medio de cédula en su domicilio, si es conocido, o por medio de los periódicos en caso contrario si se ignorare aquél.

Artículo 376.

En el caso de hallarse prófugo el inculpado, el juicio se seguirá en rebeldía conforme a las reglas que para este caso señala el Código Federal de Procedimientos Civiles, pronunciándose la sentencia cuando el juicio tenga este estado sin esperar la conclusión de la instrucción criminal. Si se hubiere elegido el procedimiento marcado en el artículo siguiente, la devolución se decretará, si procede, como en él se previene.

Artículo 377.

Cuando la acción civil se reduzca a la devolución de la cosa objeto del delito del interesado podrá seguir ésta acción por todos sus trámites, o limitarse a pedir en !a causa dicha devolución, que el juez ordenará, si procede, una vez que esté comprobado el cuerpo del delito, y sin más trámites que una audiencia del inculpado y del que haga la reclamación.

El auto en que se ordene o niegue la devolución será apelable en ambos efectos.

Artículo 378.

Las providencias precautorias que pudiere intentar la parle civil, se regirán por lo que sobre ellas dispone el capítulo XV, título I del Código de Procedimientos Civiles Federales, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden al Fisco para asegurar su interés.

CAPÍTULO X.

De los incidentes no especificados.

Artículo 379.

Los inciden les cuyos procedimientos no se detallen en este Código y que, a juicio del juez, no puedan resolverse de plano sin suspender el curso del proceso, se substanciarán por cuerda separada y del modo siguiente. Se dará vista de la promoción del incidente a las parles, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente. Si el juez lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de cinco días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los tres siguientes Concurran o no las partes el juez fallará desde luego el incidente.

TÍTULO V.

De los recursos.

CAPÍTULO I.

De la revocación.

Artículo 380.

Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por la misma autoridad que los dictó.

Artículo 381.

Interpuesto el recurso, lo cual deberá hacerse en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el juez o tribunal ante quien se interponga lo admitirá o desechará de plano, si no creyere que deba oír a las partes. En caso de que crea deber oírlas, las citará a audiencia verbal, que se verificará dentro de los tres días siguientes y en ella dictará su resolución, contra la que no se da recurso alguno.

CAPÍTULO II.

De la aclaración de sentencia.

Artículo 382.

El recurso de aclaración procede únicamente tratándose de sentencias, definitivas, y sólo una vez puede pedirse respecto de cada una.

Artículo 383.

El recurso se interpondrá ante el juez o tribunal que haya dictado la sentencia, dentro del término de tres día3 contados desde la notificación, y expresando claramente la contradicción, ambigüedad, obscuridad o deficiencia de que, en concepto del recurrente, adolezca la sentencia.

Artículo 384.

Del escrito o comparecencia en que se haya promovido el recurso, se dará vista a las otras partes por tres días para que expongan lo que estimen procedente.

Artículo 385.

El juez o tribunal resolverá, dentro de tres días, si es de aclararse la sentencia, y en

qué sentido; o si es improcedente la aclaración.

Artículo 386.

En ningún caso se alterará, a pretexto de aclaración, el fondo de la sentencia recurrida.

Artículo 387.

La resolución en que se aclara una sentencia, se reputará parte integrante de ella.

Artículo 388.

De la resolución que se dicte otorgando o negando la aclaración, no procede recurso alguno.

Artículo 389.

El recurso de aclaración interrumpe el término señalado para la apelación.

CAPÍTULO III.

De la apelación.

Artículo 390.

Son apelables en ambos efectos:

I. Las sentencias definitivas en las que se imponga alguna pena;

II. Las que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal.

III. El auto en que se conceda la suspensión del proceso;

IV. El auto que niegue la libertad bajo caución;

V. Las sentencias que resuelvan los incidentes de libertad preparatoria y de retención

Artículo 391.

Son apelables en el efecto devolutivo:

I. Las sentencias definitivas que absuelvan al acusado, o la resolución que se dicte en el caso de la fracción V del artículo 347, cuando esa resolución conceda la libertad pedida;

II. Ei auto en que se niegue la suspensión de un proceso;

III. El en que se conceda o niegue la acumulación;

IV. El en que se decrete la separación del proceso;

V. El en que se resuelva alguno de los incidentes a que se refiere el artículo 379;

VI. El de formal prisión;

VII. El que conceda la libertad bajo caución.

Artículo 392.

Serán apelables también las resoluciones respecto de las cuales así lo disponga expresamente la ley; y lo serán en el efecto o efectos que ella determine.

Artículo 393.

En los procesos instruidos por delitos que la ley castigue con apercibimiento, multa menor de quinientos pesos, arresto, reclusión o cualquiera otra de tiempo determinado que no exceda de cinco meses, no cabe el recurso de apelación.

Tampoco procede contra resoluciones no comprendidas en los tres artículos anteriores.

Artículo 394.

La apelación se interpondrá dentro de cinco días, si se trata de sentencia definitiva, o de tres días, si se interpone contra alguna otra resolución.

Artículo 395.

El Ministerio Público, el acusado, su defensor, y la parte civil, tienen el derecho de apelar en todos los casos en que este Código conceda ese recurso; excepto de la resolución en que se conceda la libertad bajo protesta o caución, de la cual no podrá apelar la parte civil.

Artículo 396.

Aunque sólo el reo apelare, podrá ser condenado en segunda instancia a sufrir una pena mayor o menor que la impuesta en la sentencia apelada, si ésta no estuviere

arreglada a derecho.

Artículo 397.

La reposición del procedimiento no se decretará de oficio. Cuando se pida, deberá expresarse el agravio en que se apoya la petición; y no podrá alegarse aquél con el que la parte agraviada se hubiere conformado expresamente, o contra el que no se hubiere intentado el recurso que la ley concede.

Artículo 398.

Al notificarse una sentencia definitiva apelable, se hará saber al procesado el término que la ley concede para interponer el recurso de apelación; lo que se hará constar en el proceso.

Artículo 399.

Interpuesto el recurso dentro del término legal, et juez lo admitirá o lo desechará de plano, según que sea o no procedente conforme a la ley.

Artículo 400.

Contra el auto que admita la apelación, no hay recurso alguno.

Contra el que la deseche, procede el de denegada apelación.

Artículo 401.

Admitida la apelación en ambos efectos, se remitirá original el proceso al tribunal de alzada respectivo. En el caso de que sean varios los acusados y la apelación sólo se refiera a alguno o algunos de ellos, el juez se reservará testimonio de la sentencia, para ejecutarla respecto de los que la hubieren consentido. Cuando la apelación se admita en el efecto devolutivo, se remitirá testimonio de lo que las partes designen y de lo que el juez estime conducente.

En todo caso el juez prevendrá a los acusados apelantes que designen defensor para la segunda instancia.

Artículo 402.

Recibido el proceso o el testimonio en su caso, el tribunal lo pondrá a la vista de las partes por el término de tres días; y si dentro de ellos no promovieren prueba, se señalará día para la vista, que se verificará dentro de los treinta siguientes a la conclusión del primer término. Para ella serán citados el Ministerio Público, el acusado, si estuviere en el lugar, el defensor nombrado por el inculpado, y la parte civil. Si los acusados no hubieren nombrado defensor para la instancia, el tribunal lo nombrará de oficio, a fin de que esté presente el día de la audiencia.

Artículo 403.

Las partes podrán tomar en la secretaría del tribunal, los apuntes que necesiten para informar.

Artículo 404.

La parte que promueva alguna prueba, expresará el objeto y naturaleza de la misma; el tribunal dentro de tres días de hecha la promoción, decidirá sin más trámite, si es de admitirse o no.

Cuando se admita la prueba, se rendirá dentro del término de ocho días. Denegada o pasado el término que se concedió para rendirla, se citará para la vista de la causa.

Artículo 405.

Si la prueba hubiere de rendirse en lugar distinto de aquél en que se encuentre el tribunal, éste concederá el término que crea prudente, según las circunstancias del caso.

Artículo 406.

El día señalado para la vista, comenzará la audiencia con la relación que del proceso hará el secretario se oirá en seguida al apelante a continuación a las otras partes, en el orden que designe el presidente de la sala o el magistrado de circuito.

Si fueren tíos o más los apelantes, usarán de la palabra en el orden que designe el presidente de la audiencia. En todo caso podrá hablar en último término el procesado o su defensor.

Artículo 407.

Los instrumentos públicos son admisibles mientras no se declare vista la causa.

Artículo 408.

Declarado visto el proceso, quedará, cerrado el debate, y el tribunal pronunciará su fallo dentro de ocho días, a más lardar, confirmando, revocando o reformando la resolución apelada.

Si se tratare del auto de formal prisión, podrá cambiar la clasificación del delito, y encargar la prisión por el que aparezca probado.

Artículo 409.

Cuando el tribunal, después de la vista, creyere necesaria para ilustrar su criterio, la práctica de alguna diligencia, podrá decretarla para mejor proveer.

Artículo 410.

Cuando la apelación haya sido | mal admitida, el tribunal, de oficio o a petición de parte, lo declarará así después de la vista; y sin revisar la sentencia o auto apelado, devolverá la causa con la ejecutoria respectiva al juzgado de su origen, o sólo la ejecutoria, si no se hubiere elevado original la cansa.

Artículo 411.

Notificada la sentencia del tribunal de segunda instancia, se devolverá el proceso al de primera, con testimonio de la resolución, para su cumplimiento.

Artículo 412.

Si al revisar una sentencia, encuentra el tribunal revisor que se ha violado la ley ya en el procedimiento, ya en el fondo, llamará sobre tal hecho la atención del juez, o le impondrá alguna corrección disciplinaria, siempre que esa violación no importe un delito, pues en este último caso se procederá como se dispone en el título VII.

CAPÍTULO IV.

De la denegada apelación.

Artículo 413.

El recurso de denegada apelación procede cuando ésta se haya negado, y cuando se conceda sólo en el efecto devolutivo, siendo procedente en ambos.

Artículo 414.

El recurso se interpondrá verbalmente o por escrito, dentro de los tres días siguientes al en que se notifique la resolución del auto contra el cual se recurra.

Artículo 415.

Interpuesto el recurso, el juez, sin más substanciación, mandará expedir, dentro de tres días, certificado, en el que brevemente expondrá la naturaleza y estado del proceso, el punto sobre que recayó el auto apelado o insertará éste a la letra, como el que lo haya declarado inapelable.

Artículo 416

Cuando el juez no cumpliere con lo prevenido en el artículo anterior, el interesado podrá ocurrir en queja ante el tribunal a quien corresponda conocer de la apelación, el cual mandará que el juez expida el certificado dentro de veinticuatro horas, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Artículo 417.

Recibido por el promovente el certificado, deberá presentarlo ante el tribunal respectivo dentro del improrrogable término de tres días contados desde que se le entregue, si el tribunal reside en el mismo lugar. Si reside en otro, el juez señalará, además de los tres días, el término que sea necesario, atendidas las distancias y los medios de comunicación, sin que el término total pueda exceder de un mes.

Artículo 418.

Ei tribunal citará para sentencia y pronunciará ésta dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

Artículo 419.

Si la apelación se declara admisible, se pedirá la causa, o el testimonio en su caso, al tribunal de la instancia, para substanciar la segunda.

TÍTULO VI.

Disposiciones reglamentarias del Código Penal.

CAPÍTULO I.

De la libertad preparatoria.

Artículo 420.

A los reos que extingan su condena en la Penitenciaría de México, se les concederá la libertad preparatoria conforme a los artículos 74 del Código Penal, reformado por decreto de 5 de septiembre de 1896, y 75 y 99 del propio Código.

Artículo 421.

Luego que un reo ingrese al tercer período penitenciario, conforme al artículo 136 y demás relativos del Código Penal reformado, la Dirección de la Penitenciaría investigará, por los medios que estén a su alcance v los que el mismo reo le proporcione, si posee bienes o recursos pecuniarios bastantes para subsistir honradamente. Si resultare que el reo no posee tales bienes o recursos, la Dirección le prevendrá que proponga persona solvente que se obligue a proporcionarle el trabajo necesario para subsistir, hasta que se le otorgue la libertad definitiva. La misma Dirección calificará la idoneidad de la persona propuesta y hará que ésta subscriba el documento correspondiente.

Artículo 422.

La Dirección de la Penitenciaria, un mes antes de que el reo haya de cumplir el tiempo que le corresponda permanecer en el tercer periodo, dará aviso al juez o tribunal que haya pronunciado la sentencia que causó ejecutoria, y se remitirá un informe en que conste lo siguiente: la condena o condenas del reo; el tiempo que haya permanecido en cada uno de los períodos; si posee bienes raíces o recursos para subsistir honradamente, o si ha quedado extendida la obligación a que se refiere la segunda parte del artículo anterior; y el lugar que el reo solicite que se te fije para su residencia. Con el informe se remitirá un retrato fotográfico de perfil y la signación antropométrica del reo.

Artículo 423.

Recibido el informe, se pasará al Ministerio Público para que pida dentro de tres días lo que corresponda. El juez o tribunal resolverá, sin más substanciación, si es o no de concederse la libertad preparatoria.

Artículo 424.

Si del informe aparece que el reo ha pasado sucesivamente por los tres periodos penitenciarios y que ha permanecido en cada uno de ellos el tiempo que le corresponde conforme a la ley; que posee bienes o recursos para subsistir honradamente, y que, a falta de éstos, ha quedado subscripta la obligación a que se refiere el artículo 421, el tribunal o juez; con este único fundamento, otorgará la libertad preparatoria, sin entrar en ninguna otra clase de apreciaciones.

Artículo 425.

El reo comenzará a disfrutar la libertad preparatoria, cuando hubiere cumplido el tiempo de ley en el tercer período y llenado los requisitos que determine el Reglamento de la Penitenciaría para salir de dicho período.

Artículo 426.

Si después de remitido al tribunal o juez el informe que previene el artículo 422, el reo cometiere algún delito o falta que, según el Reglamento de la Penitenciaría, amerite su retroceso al segundo o primer período, la Dirección lo comunicará inmediatamente al tribunal o juez para que suspenda el curso del expediente, o para que se revoque la concesión de la libertad, si va se hubiere otorgado, devolviendo en su caso, el salvoconducto para que se inutilice.

Artículo 427.

Los reos que extingan su condena en un establecimiento diverso de la Penitenciaría de México, podrán obtener la libertad preparatoria conforme a los artículos 74,75 y 99 del Código Penal de 1871, según lo prevenido en el artículo 3o transitorio del decreto de 5 de septiembre de 1896.

Artículo 428.

Para obtenerla, los reos presentarán una solicitud a la junta de vigilancia de la cárcel donde se hallaren extinguiendo su condena, o al jefe de la prisión donde no haya junta, pidiendo que se informe acerca de su conducta, en los términos del artículo 99 del Código Penal, y se remite el expediente al tribunal o juez respectivo. En dicha solicitud, los I reos propondrán persona solvente que se obligue a proporcionarles trabajo durante el tiempo de la libertad preparatoria. La persona propuesta firmará la misma solicitud en prueba dé aceptación.

Artículo 429.

Recibido el expediente, el tribunal o juez lo pasará al Ministerio Público, para que pida dentro de tres días. El Ministerio Público y el reo podrán solicitar que se les reciba prueba sobre los hechos que quieran justificar.

Artículo 430.

Con el pedimento del Ministerio Público y, en su caso, con las pruebas rendidas, el tribunal o juez decidirá si es de concederse la libertad preparatoria.

Artículo 431.

El tribunal o juez calificará la idoneidad de la persona propuesta por el reo para los electos de la fracción III del artículo 99 del Código Penal, practicando al efecto las diligencias que juzgue necesarias.

Artículo 432.

Concedida la libertad preparatoria, se extenderá un salvoconducto para el reo, y se remitirá al jefe de la respectiva prisión.

Artículo 433.

El tribunal o juez que conceda la libertad preparatoria, señalará el lugar en que deba residir el agraciado; y, al hacer esta designación, preferirá la localidad en que el reo pueda proporcionarse trabajo y en que su permanencia no sea un obstáculo para su enmienda.

Artículo 434.

Concedida la libertad preparatoria, se extenderá al reo un salvo conducto que será firmado por el presidente de la sala, por el magistrado de circuito o por el juez, respectivamente; y además, en todo caso, por el secretario que corresponda.

Artículo 435.

El salvoconducto se remitirá a la Dirección de la Penitenciaria o al jefe de la prisión, para que lo entregue al reo, al ponerlo en libertad, y en este acto le hará subscribir, previamente, una acta en que conste que recibe dicho salvo conducto y que se obliga a no separarse, sin permiso de la autoridad que le concede la libertad preparatoria, del lugar que aquélla le haya señalado para su residencia.

En caso de que el agraciado con la libertad preparatoria obtenga permiso para cambiar de residencia, se presentará a la autoridad política del lugar adonde vaya a radicarse, y exhibirá, ante ella, el documento que justifique haber dado aviso del cambio a la autoridad política de su anterior domicilio.

Artículo 436.

La Dirección de la Penitenciaria o el jefe de la prisión, al poner a un reo en libertad preparatoria, lo comunicarán al tribunal o juez que la hubiere concedido, y a la primera autoridad política del lugar señalado como residencia del mismo reo, para los efectos del artículo 99 del Código Penal. Si el lugar no estuviere en el Distrito o Territorios Federales, el aviso se dará a la Secretaría de Gobernación, a fin que, por su conducto, se comunique a la autoridad que corresponda.

Artículo 437.

Cuando el agraciado incurriere en alguna de las faltas expresadas en el artículo 100 del Código Penal, la autoridad política, dará parte al tribunal o juez que concedió la libertad, a fin de que, oyendo previamente al reo y at Ministerio Publico y recibiendo las pruebas que ofrezcan, decida si aquélla debe o no revocarse. Cuando el agraciado cometiere un nuevo delito, el juez de la causa

remitirá copia certificada de la sentencia que cause ejecutoria, al juez o tribunal que otorgó la libertad, quien de plano decretará la revocación.

Artículo 438.

Revocada la libertad preparatoria, se recogerá el salvoconducto al reo que la disfrute.

Artículo 439.

El reo que durante el término de la libertad preparatoria no haya dado ningún motivo para revocarla, quedará, al vencimiento de aquél, en absoluta libertad; y podrá ocurrir al tribunal o juez que la concedió, para que éste haga de plano la declaración correspondiente, la cual se comunicará a la autoridad política y a la Dirección de la Penitenciaría o al jefe de la respectiva prisión.

Artículo 440.

El reo presentará el salvo conducto de libertad preparatoria, siempre que sea requerido para ello por un magistrado, juez o agente superior de la policía; y si no lo hiciere, será castigado con un mes de arresto, pero sin revocar a la libertad preparatoria.

Artículo 441.

Los reos condenados a varias penas, aunque sea por diversas sentencias, serán considerados, para todo lo concerniente a la libertad preparatoria, como condenados a una sola pena, formada ésta de la suma de todas las condenas, y se calcularán sobre dicha suma todos los términos.

En este caso, conocerá de la libertad preparatoria el juez o tribunal que hubiere impuesto la mayor pena de prisión.

Artículo 442.

Las penas impuestas por las autoridades judiciales de los Estados, del Distrito Federal o Territorios, no se tomarán en consideración por los tribunales federales para decidir sobre la libertad preparatoria; pero, cuando la concedan, no se llevará a efecto, sino después de que el reo haya cumplido la condena impuesta por los primeros, o de otorgada por los mismos la libertad preparatoria.

Artículo 443.

La facultad de permitir a los reos que salgan de la prisión conforme a lo prevenido en el artículo 136 del Código Penal, es exclusiva de las autoridades administrativas, las cuales la ejercerán en los términos que dispongan los reglamentos respectivos.

Artículo 444.

La concesión de la libertad preparatoria, así como su revocación, se comunicarán a la Secretaría de Justicia.

CAPÍTULO II.

De la retención.

Artículo 445.

Treinta días antes de que un reo extinga su condena, la Dirección de la Penitenciaría o el jefe de la prisión lo comunicará al tribunal o juez que hubiere dictado la sentencia ejecutoria, y le informará sobre la conducta observada por el reo durante la segunda mitad de su condena, con especificación de los delitos y faltas que haya cometido, así como de las penas o castigos que se le hayan impuesto.

Artículo 446.

Recibido el informe, se citará al Ministerio Público y al reo a una audiencia, que tendrá lugar dentro de ocho días. Las parles, al ser citadas, pueden promover las pruebas que crean convenientes; y si lo hicieren, se recibirán las que promuevan, dentro de un término que no pase de ocho días. Si el reo no se hallare en el lugar donde resida el tribunal que deba decidir sobre la retención, se encomendará la práctica de las diligencias al juez del lugar donde se encuentre el reo.

Artículo 447.

El día de la audiencia, se dará cuenta del expediente y se concederá la palabra, primero al Ministerio Público y después al reo o a su defensor, si estuvieren presentes,

para que expongan lo que a su derecho convenga; y se pronunciará el fallo dentro de tres días contados desde que concluya dicha audiencia. Contra esta resolución no se admitirá recurso alguno.

Si el reo no tuviere defensor, se le indicarán los nombres .de los de oficio, donde los hubiere, para que elija de entre ellos; o se le nombrará por el juez en los lugares donde no haya defensores de oficio,

Artículo 448.

La resolución a que se refiere el artículo anterior, se comunicará desde luego a la Dirección de la Penitenciaria o al jefe de la prisión, para que ponga en libertad al reo el día en que cumpla su condena, si se declara que no ha lugar a la retención, o para que haga efectiva ésta en caso contrario.

Artículo 449.

Sí al concluir el término de la pena no se hubiere comunicado el fallo a la Dirección de la Penitenciaria o al jefe de la prisión, el reo será puesto inmediatamente en libertad, si no estuviere encausado por otro delito ni debiere extinguir otra pena, y se dará aviso a la autoridad política o militar de quien dependa la prisión. El que infringiere esta disposición incurrirá en las penas determinadas en el artículo 980 del Código Penal.

Artículo 450.

Si un reo reportare varias condenas con calidad de retención, la declaración de si es o no de hacerse efectiva la correspondiente a cada una de ellas, se hará a medida que vaya extinguiéndolas; y cuando se declare que ha incurrido en alguna retención, ésta se considerará como si fuera una nueva pena que debe sufrir después de extinguidas las anteriores.

Artículo 451.

Las declaraciones que hagan los tribunales respecto de la retención, serán comunicadas a la Secretaría de Justicia.

CAPÍTULO III.

De la conmutación y de la reducción de las penas.

Artículo 452.

El que haya sido condenado por sentencia irrevocable y se encontrare en alguno de los casos del artículo 241 del Código Penal, puede ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Justicia, solicitando la conmutación de la pena que le haya sido impuesta.

A su solicitud acompañará testimonio de la sentencia. Si aquélla se funda en la fracción II de dicho artículo, acompañará el documento o documentos que acrediten que se halla en el caso de la citada fracción.

Artículo 453.

Si la conmutación se funda en el artículo 43 del mismo Código, se pedirá por conducto del tribunal que haya pronunciado la sentencia irrevocable. Este, con las conclusiones del Ministerio Público y con el testimonio del fallo ejecutoriado, emitirá el informe a que se refiere la segunda parte de dicho artículo 43.

Artículo 454.

La conmutación se otorgará por el Ejecutivo, el que observará las reglas de los artículos 241 y 242 del Código Penal, y lomará del Ministerio Público los informes que creyere convenientes, en los casos a que se refiere la última parte del artículo anterior.

Artículo 455.

La reducción de la pena se solicitará cuando se haya dictado la sentencia que cause ejecutoría, presentando escrito al tribunal que la hubiere pronunciado.

Artículo 456.

El tribunal, oído el Ministerio Público, elevará la instancia, con el informe respectivo y testimonio del fallo, a la Secretaría de Justicia, para que se tome en consideración por el Poder Ejecutivo.

Artículo 457.

La reducción de pena se concederá con sujeción a lo dispuesto en el artículo 243 y reglas relativas del Código Penal y sólo en los casos a que aquel artículo se contrae.

Ni la solicitud de conmutación ni la de reducción de penas suspenden la ejecución de la sentencia, a no ser que se trate de la pena capital o de destierro.

CAPÍTULO IV.

Del indulto necesario

Artículo 458.

El recurso de indulto necesario sólo se interpondrá de sentencia irrevocable, y cuando por la ley no esté expresamente prohibido concederlo,

Artículo 459.

En el caso previsto en la última parle de la regla primera del artículo 287 del Código Penal, el condenado que se repute con derecho para pedir el indulto, ocurrirá por escrito a la Suprema Corte de Justicia, alegando la causa o causas en que funde el recurso y que deberá ser alguna de las siguientes:

I. Que la sentencia se haya fundado en documentos o declaraciones de testigos que, después de ella, se declaren falsos en juicio;

II. Que después de la sentencia aparezcan documentos que invaliden la prueba en que descanse aquélla;

III. Que, condenada alguna persona por homicidio de otra que haya desaparecido, se compruebe que ésta vive;

IV. Que el reo haya sido juzgado por el mismo hecho a que la sentencia se refiere, en otro juicio anterior en que también haya recaído sentencia irrevocable;

V. Que dos reos hayan sido condenados por un mismo delito, y sea imposible que los dos lo hayan cometido.

La Suprema Corte de Justicia recibirá las pruebas que se soliciten para justificar los hechos a que este artículo se refiere.

Artículo 460.

Cuando las pruebas no se rindan ante la Suprema Corte, el condenado acompañará a su instancia los justificantes de la causa o causas en que funde su inocencia, o protestará exhibirlos oportunamente.

Artículo 461.

Sólo será admisible en estos casos la prueba documental, a excepción del caso previsto en la fracción III del artículo 459.

Artículo 462.

Interpuesto el recurso, la Suprema Corte pedirá inmediatamente el proceso o procesos, según corresponda, al encargado del archivo en que se encuentre; y si se hubiere solicitado prueba, la recibirá dentro del término que estime indispensable, atendidas las circunstancias. En seguida citará al reo o reos y sus defensores, así como al Ministerio Público, para la vista del recurso, la cual tendrá lugar dentro de ocho días.

Artículo 463.

El día designado para la vista, dará cuenta el secretario; en seguida informará el defensor del reo y por último el Ministerio Público. El tribunal declarará visto el recurso.

La vista tendrá también lugar aun cuando no concurran las partes.

Artículo 464.

Dentro de ocho días, la Suprema Corte declarará en su concepto, es fundada o no la solicitud del reo.

En el primer caso remitirá con su informe las diligencias originales a la Secretaría de Justicia, para que se otorgue el indulto por el Ejecutivo.

En el segundo caso, mandará archivar las diligencias.

CAPÍTULO V.

Del indulto por gracia.

Artículo 465.

Cuando se solicite el indulto por gracia, en los casos previstos por el Código Penal, el condenado ocurrirá al Ejecutivo con su instancia y el justificante de los servicios importantes prestados a la Nación.

Al reo que se halle extinguiendo una condena de reclusión que no exceda de diez y ocho meses, o de prisión cuyo término no admita la libertad preparatoria, o bien de arresto, el Ejecutivo podrá otorgarle el indulto, si llena los requisitos siguientes:

I. Que haya sufrido tres quintos de su pena;

II. Que durante ese tiempo haya tenido buena conducta continua y acreditado su enmienda en la forma que exige la fracción I del artículo 99 del Código Penal;

III. Que haya cubierto su responsabilidad civil, o dado caución de cubrirla, o acreditado que se halla en absoluta insolvencia.

En estos casos, el condenado, al presentarse al Ejecutivo, además del testimonio de la sentencia, acompañará el comprobante de que ha cubierto o ha asegurado la responsabilidad civil, o de que se halla en estado de insolvencia, y un certificado de la junta de vigilancia de cárceles, si la hubiere, con el que compruebe el tiempo que haya sufrido de la pena y su buena conducta y enmienda.

En los lugares en que no hubiere junta de vigilancia, el certificado se obtendrá de la primera autoridad política o municipal, en su caso.

Artículo 466.

El Ejecutivo, si considera bastantes esos recados para formar juicio, otorgará o denegará la gracia; en caso de que no los considere bastantes, los remitirá al juez o tribunal que haya pronunciado la sentencia ejecutoria, para que oyendo al Ministerio Público, informe sobre la petición adhiriéndose o no al indulto, y teniendo siempre presente, para hacerlo, si el delito por el que fue condenado el reo se comete frecuentemente en su territorio jurisdiccional y si produjo gran sensación o escándalo cuando se perpetró; y concluirá por indicar cuál será la impresión probable que produzcala denegación o concesión de la gracia.

Artículo 467.

Instruido así el expediente, se devolverá al Ejecutivo para que dicte la resolución que corresponda. Esta se publicará en el «Diario Oficial» sí fuere favorable al reo, y se comunicará a la respectiva sala o tribunal, para que se anote el proceso.

Artículo 468.

El Ejecutivo concederá el indulto de una manera absoluta o con las restricciones que juzgue convenientes.

Artículo 469.

El que hubiere sido indultado por un delito y reincidiere, no podrá ser indultado de nuevo.

CAPÍTULO VI.

De la rehabilitación.

Artículo 470.

Le rehabilitación en los derechos civiles o de familia no procede mientras el reo esté extinguiendo una pena que lo prive de la libertad.

Artículo 471.

Extinguida esta pena o pasado el término que señala el artículo siguiente, puede ocurrir el condenado al juez o tribunal que pronunció la ejecutoria, solicitando se le rehabilite en los derechos de que se le privó, o en cuyo ejercicio estuviere suspenso, y acompañará a su ocurso:

I. El testimonio de la sentencia en que fue condenado irrevocablemente;

II. Un certificado de la autoridad respectiva, que acredite que sufrió la pena

privativa de la libertad que le fue impuesta, o la conmutada o reducida, o que se le concedió el indulto;

III. Otro certificado de la primera autoridad política del lugar donde hubiere residido desde pie comenzó a sufrir la inhabilitación o suspensión, y una información recibida con audiencia del Ministerio Público, que demuestren que el peticionario ha observado buena conducta continua desde que comenzó a sufrir su pena, y que hadado pruebas de haber contraído hábitos de orden, trabajo y moralidad, y, muy particularmente, que ha dominado la pasión e inclinación que lo indujo al delito.

Artículo 472.

Cuando la pena impuesta al reo haya sido de inhabilitación o de suspensión por seis o más años, no podrá ser rehabilitado antes de que pasen tres años contados desde que la comenzó a sufrir; pero cuando el reo haya sido suspenso por menos de seis años, podrá pedir su rehabilitación cuando haya sufrido la mitad de su pena.

Artículo 473.

El tribunal o juez llamará a la vista el proceso, y con audiencia del Ministerio Público, dispondrá que la solicitud se publique por dos meses en el «Diario Oficial.» Recibirá a petición del Ministerio Público o de oficio, si lo creyere necesario, cuantas pruebas juzgue pertinentes a esclarecer la conducta que haya observado el reo.

Artículo 474.

Transcurridos los dos meses de la publicación, el tribunal o juez, oyendo al Ministerio Público y al peticionario, y teniendo presentes las nuevas diligencias, si algunas se practicaron, declarará si es fundada o no la solicitud del reo.

En el primer caso, remitirá con su informe las diligencias originales a la Secretaría de Justicia, para que el Ejecutivo otorgue la rehabilitación y mande publicar la resolución en el «Diario Oficial.»

En el segundo caso, al denegarse la rehabilitación, se dejará al reo expedito su derecho, para que, pasados dos años, pueda solicitarla de nuevo, substanciándose el expediente de la misma manera.

Artículo 475.

Al que una vez se haya concedido la rehabilitación, no se le concederá otra si volviere a ser condenado por nuevo delito.

Artículo 476.

En los casos previstos en el artículo 459, si el penado hubiere fallecido antes de haber obtenido el indulto, el cónyuge supérstite, los ascendientes o los descendientes del sentenciado podrán solicitar la rehabilitación de la memoria del difunto, para que la sentencia no perjudique a su honra. Si la resolución fuere favorable, se publicará diez veces consecutivas en el Diario Oficial.

TÍTULO VII.

CAPÍTULO ÚNICO.

De la responsabilidad oficial.

Artículo 477.

Los funcionarios judiciales de la Federación son responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Igualmente lo son los del orden común cuando obren en auxilio de aquéllos.

Artículo 478.

Cuando se exija responsabilidad a alguno de los altos funcionarios de la Federación, se observará lo dispuesto en la ley reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Federal.

Artículo 479.

Cuando se exija responsabilidad a algún funcionario judicial de los no comprendidos en el artículo anterior, se presentará escrito de acusación por el agraviado o por el Ministerio Público, al tribunal competente, quien pedirá informe justificado al funcionario y le señalará, para rendirlo, un término que no podrá exceder de ocho días

Artículo 480.

Rendido el informe, se correrá traslado al Ministerio Público y al quejoso, si se hubiere presentado, por el término de tres días a cada uno.

Artículo 481.

Si el Ministerio Público, el quejoso o el acusado, solicitaren pruebas, se recibirán en un término que no exceda de diez días. Cuando la prueba hubiere de rendirse fuera del lugar, se agregará a ese término el tiempo que tarde el correo en ida y vuelta, y tres días más.

Artículo 482.

Transcurridos los términos que fijan los dos artículos anteriores, según que haya habido o no prueba, se citará para la vista, que se verificará dentro de ocho días y a la cual podrán concurrir las partes.

Artículo 483.

Dentro de los tres días siguientes, se dictará la resolución en que se declare si hay lugar o no a formación de causa.

Artículo 484.

Nunca será bastante la sola aserción del quejoso o acusador, para declarar que hay lugar a proceder contra el acusado.

Artículo 485.

Cuando los justificantes acompañados al informe o las pruebas rendidas desvanezcan la imputación, se declarará no haber lugar a procedimiento ulterior. En caso contrario, se declarará haber lugar a formación de causa y, por el mismo hecho, quedará el acusado separado de su cargo y a disposición del tribunal competente.

Artículo 486.

Cuando el presunto responsable quede separado de sus funciones, se fijará, en la misma resolución que lo suspenda, la parte de sueldo que deba disfrutar, y que en ningún caso podrá exceder de la mitad del asignado al empleo en la ley de presupuestos.

Artículo 487.

De las declaraciones que se pronuncien conforme al artículo 485, se dará aviso al superior jerárquico del acusado.

Artículo 488.

Cuando el funcionario acusado estuviere prófugo o no rindiere el informe a que se refiere el artículo 479, se seguirá el procedimiento en rebeldía, hasta hacer la declaración de haber o no lugar a formación de causa.

Artículo 489.

Practicado lo que establecen los artículos anteriores, si hubiere de continuarse el procedimiento, se seguirá conforme a las reglas que establece este Código.

TRANSITORIOS.

Artículo 1º.

Este Código comenzará a regir el día 5 de febrero de 1909.

Artículo 2º.

Los procesos pendientes en esa fecha, se sujetarán, en su tramitación subsecuente, a las prescripciones de este Código.

Artículo 3º.

Los recursos interpuestos antes de la misma fecha, se admitirán o no, según lo disponga la ley vigente al interponerse, y se substanciarán con arreglo a este Código; pero el de casación, se sujetará en todo a la ley que lo estableció.

Artículo 4º.

Los términos que, en la misma fecha, ya hayan comenzado a correr, se computarán conforme a la ley más favorable al procesado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 16 de diciembre de 1908.- Porfirio Díaz.- Al C. Lic. Justino Fernández, Secretario

de Estado y del Despacho de Justicia.- Presente.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución.- México, 16 de diciembre de 1908.- Fernández.- Al C.....

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo, referente al Código Federal de Procedimientos Penales.

La materia de procedimientos en asuntos penales del orden federal, se ha encontrado durante muchos años en un verdadero caos. Se han aplicado en ella disposiciones de la legislación española y numerosas leyes mexicanas especiales en las que nunca se tuvo por objeto que su conjunto llegara a constituir un todo armónico o un sistema de enjuiciamiento. No obstante la institución del Ministerio Público, continuaba tomando a los acusados la confesión con cargos, lo que venía a constituir un jai-anómalo, del todo irregular.

Las consecuencias perjudiciales de este estado de cosas, traducían en embrollo del procedimiento, falta de garantías para el acusado y lentitud en la formación de los procesos. Estos males deben cesar con la codificación de las leyes que han de regir la instrucción criminal, codificación que aunque careciera de otro mérito, tendrá siempre el indiscutible de ser la primera que se ha formado para llevar el orden a aquella materia tan importante del derecho.

Los defectos que tenga, los dará a conocer la experiencia y al corregirlos en lo sucesivo, no se tropezará ya con el grave obstáculo que presenta siempre la falta de antecedentes en un asunto.

Se quiso que el Código Federal de Procedimientos Penales quedara compuesto de un corto número de preceptos y que la redacción de éstos fuese clara, breve y sencilla. Se tomó como base para su formación, el del orden común, tanto porque las disposiciones de éste consignan en general las reglas admitidas en los países más adelantados para la instrucción criminal, como por realizar el propósito de uniformar la legislación patria hasta donde sea posible. El Código de Procedimientos Penales expedido para el Distrito y Territorios Federales tiene varios años de estar en vigor y sus disposiciones son bien conocidas. Sería, pues, superfluo dar la razón de ellas al aceptarlas, en términos idénticos o análogos, para que rijan en los negocios federales y, por lo mismo, esta sucinta exposición sólo se referirá a los preceptos que sean nuevos y a aquellos que revisten un carácter propio, por razón de la materia federal a qué se refieren y que no tienen similares en el orden común.

TÍTULO I.

La clase de obligaciones que tienen a su cargo los funcionarios y agentes enumerados en el artículo 2º, explica por qué se les impone el ejercicio de la policía judicial de la Federación; todos ellos, en el cumplimiento de sus deberes oficiales, pueden encontrarse en el caso de descubrir un delito y de tener a su disposición los medios de hacerlo constar y no debe ponerse a las autoridades administrativas fuera de contacto con las judiciales, sino antes bien, conviene que aquéllas comuniquen a éstas los elementos de que dispongan y que deben formar parte de la instrucción criminal. De otro modo puede perderse la oportunidad de una información perfecta, pueden desaparecer las huellas de un delito o sustraerse el delincuente a la acción de la justicia. Los cónsules y vicecónsules mexicanos en el extranjero, tienen principalmente el carácter de agentes comerciales; pero algunas de sus obligaciones justifican que ejerzan la policía judicial. Entre esas obligaciones pueden señalarse las siguientes: cuanto llegare a su noticia o con fundamento sospechen que se trata de introducir contrabando en la República, informarán al Gobierno y al administrador o administradores de las aduanas mexicanas a donde probablemente se dirija, de los preparativos que se hagan con tal intento y de todas las circunstancias del caso, a efecto de que pueda impedirse el fraude; deben matricular a las personas que se les presenten como mexicanos; pero si des-

cubren que la prueba en cuya virtud se hizo el registro, es falsa, tienen que consignarlo así y la matrícula queda nulificada; en los casos de avería y otros accidentes de mar, reciben las declaraciones, protestas e informes que les dirijan los capitanes y patrones de buques mexicanos; requieren la asistencia de las autoridades locales a fin de buscar, arrestar, detener y encarcelar a los desertores de buques mercantes de la marina mexicana, los cuales desertores serán remitidos a los buques de cuyo servicio desertaron o a otros de la República. En los casos anotados, puede haber infracciones de ley que constituyan delito, y las diligencias practicadas por los cónsules y vicecónsules serán de gran valor, para la instrucción.

Cuando se trate de un delito que, a pesar de haber sido cometido en el extranjero, puede ser castigado en la República, o de un delito perpetrado a bordo de un buque, en los términos previstos en los artículos 184 y 189 del Código Penal, no es posible aplicar la regla general que declara juez competente para conocer de un proceso, el del lugar en que se comete el delito; por lo que ha sido necesario dictar las disposiciones especiales contenidas en los artículos 6 y 7.

Al tratarse de la acciones en el capítulo 3º, sólo se da al perjudicado con el delito, el derecho de deducir la acción civil, pues en cuanto a la penal se consigna que corresponde al Ministerio Público. Hay algunos delitos, llamados antes privados y que ahora se persiguen por querella que es necesaria, en los cuales, aunque la autoridad tenga conocimiento de ellos, no procede a castigarlos, si no es que lo pitia el ofendido; pero romo los delitos se persiguen por interés público y no en interés privado, desde el momento en que la ley conceptúa que los hechos aludidos son delitos, establece que en su: represión hay un interés público; más teniendo en cuenta que en muchos casos, la publicidad consecuencia del proceso, puede ser justamente repugnada por el ofendido, la ley lo faculta para que denuncie o no el delito; pero hecho lo primero, el interés social queda encomendado al Ministerio Público para que lo defienda ante los tribunales, sin perjuicio de que en los delitos de rapto, estupro, adulterio o violación de inmunidad, el desistimiento del ofendido ponga fin al proceso, corno más adelante lo determina el artículo 90.

Los delitos de injurias, difamación o calumnia, cometidos contra una nación o gobierno extranjero o contra sus agentes diplomáticos en nuestro país, no pueden ser perseguidos sino por excitativa previa del Gobierno; luego si ésta falta, debe suspenderse el procedimiento que se hubiere incoado; y esto misino debe hacerse cuando no exista la declaración del Congreso Federal en los casos determinados por el artículo 104 de la Constitución y cuando el acusado tenga inmunidad diplomática. Así so consigna el artículo 29, porque en los tres supuestos de referencia, hay para el ejercicio de la acción, un obstáculo legal, que por tener este carácter debe ser sancionado.

El capítulo relativo a exhortos y requisitorias es una reproducción del relativo del Código Federal de Procedimientos Civiles; en vez de hacer una simple referencia a éste, se prefirió insertarlo para que la materia estuviese completa y para evitar la necesidad de tener a la vista ambos Códigos. Igual armonía entre éstos se ha establecido a propósito de las resoluciones judiciales y de las correcciones disciplinarias, y sólo se agregó en el artículo 85 y para suplir una deficiencia actual, los medios de apremio que pueden emplear los jueces para hacer cumplir sus determinaciones.

TÍTULO II.

Es muy grande y bien conocido el interés social que hay para que los procesos sean substanciados y terminados con brevedad, en términos de que mientras esto no se consiga, la administración de justicia nunca responderá a los fines que el Estado persigue; pero también es difícil en el más alto grado, y a veces imposible, exigir de los jueces la conclusión de un juicio en un término fijado de antemano, y tampoco conviene dejarlo al arbitrio de los tribunales, lo que equivaldría a hacerlo indefinido. Por

estas razones se ha dictado el artículo 87 que señala el máximum de ocho meses para la instrucción cuando el término medio de la pena señalada al delito no baje de cinco años, y de cinco meses en todos los demás casos; no, ciertamente, para que los jueces tengan el derecho de emplear estos términos, sino para que de ellos tomen el tiempo absolutamente preciso, como lo prescribe la primera par te del artículo, que dice la instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible. Puede suceder, no obstante, que en algunos casos como los términos señalados no sean suficientes para que la instrucción concluya; se ordena entonces que el juez pida a su superior la prórroga que necesite. A primera vista parece ociosa, y así se dijo en la discusión, la facultad dada al superior, puesto que éste nunca dejará de conceder la prórroga, porque de otro modo autorizaría la terminación de un proceso incompleto; pero el precepto es prácticamente moralizador y eficaz, porque obliga al juez a dar cuenta de no haber terminado un proceso y a justificar las razones que para ello tenga, razones que si no son convincentes harán dudar cuando menos de la aptitud del funcionario, el cual preferirá siempre proceder con la actividad que le sea dable, más bien que ocurrir al superior en demanda de una prórroga del término, la que, por otra parte, cuando es in-fundada amerita una corrección.

La disciplina de guerra exige que no se pase a practicar diligencias a bordo de un buque que esté bajo las órdenes Je una autoridad militar sin permiso de ésta. Cuando el resultado de las diligencias pueda perjudicar a algún extranjero, por ejemplo, el apoderamiento de mercancías, la presencia del cónsul respectivo es una garantía para el interesado y un elemento de orden para evitar a la República reclamaciones diplomáticas. Tales son los motivos de la segunda parte del artículo 95.

Las disposiciones especiales de la Ordenanza de Aduanas que pueden determinar la formación de un expediente administrativo, explican el precepto consignado en el artículo 111.

No puede ponerse en duda que la justificación de los elementos constitutivos de un delito, es la prueba de éste; por lo que, al tratarse del de robo, el artículo 123 sólo expresa lo que el juez debe procurar investigar desde luego, como un medio para llegar a la comprobación del hecho criminal. La más importante novedad en esta materia se encuentra en la disposición del artículo 128 que faculta al juez para emplear con toda libertad cuantos medios de investigación crea conveniente, sin más limitación que el que tales medios no sean contrarios a la ley. No debe despreciarse ningún medio racional de llegar al conocimiento de la verdad, ni es posible, dado el progreso actual y el que se anuncia de las ciencias y las artes, que la ley los prevea todos y los reglamente en detalle.

Se ha puesto el articulo 135 porque careciendo en general el Gobierno de la Unión de cárceles propias, hace uso de las de los Estados, cuyos reglamentos deben ser respetados; pero como de hecho el juez federal es quien tiene bajo su autoridad a las personas por el procesadas, el respeto a tales reglamentos no debe extremarse hasta el grado de privará dicho juez de facultades que le son propias por razón de sus funciones.

En los artículos 137 y 141 se sostiene el sistema de consagrar la prudente libertad del juez para determinar la forma en que ha de interrogar al acusado y para practicar las diligencias que conduzcan a establecer la verdad de los hechos que investiga, libertad que al paso que enaltece las funciones judiciales es una garantía, la más eficaz, del resultado de una instrucción criminal.

A propósito de las visitas domiciliarias, se ha previsto que puede estar indicada su práctica en la casa de algún miembro del cuerpo diplomático o en un buque de guerra extranjero surto en aguas territoriales de la Nación. Por la consideración debida a los países extranjeros y en acatamiento a las reglas de derecho internacional, se dispone que en estos casos el juez pida instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Después de eximir a los altos funcio-

narios de la Federación de la obligación de presentarse al juzgado para rendir sus declaraciones como testigos, se ha facultado al juez, al final del artículo 196, para examinar a cualquier testigo en la casa de éste. Se comprende que así lo justifican circunstancias especiales, según lo dice la ley, corno el ejercicio de funciones públicas diversas de las expresadas.

La presencia del Ministerio Público, prevenida en el artículo 231 para abrir la correspondencia dirigí-da al inculpado, es una seguridad más de que el registro no se extenderá sino a lo que sea absolutamente preciso para los fines de la averiguación; lo que así debe ser, supuesta la inviolabilidad de la correspondencia, establecida como regla por la Constitución.

TÍTULO III.

Nada esencial falta en la reglamentación del juicio y, no obstante, ella es muy sencilla. En el artículo 243 se manda que el pedimento de no acusación formulado por un Agente del Ministerio Público, sea revisado por el Procurador General de la República, que ejerce la dirección superior de la acción pública; porque se consideró que dar aquella facultad a los tribunales, tiende a confundir en éstos los papeles de acusador y de juez, que deben permanecer independientes, como independientes son el Ministerio Público y la Magistratura. Y cuando se confirma el pedimento de no acusación, el procesado debe ser puesto luego en libertad absoluta y las diligencias terminadas como lo dispone el artículo 244, por que donde no hay demanda, no puede haber juicio.

Es común que en el procedimiento penal se establezca un juicio más breve que el ordinario, cuando se trata de delitos de menor gravedad, porque de otro modo resulta que las molestias que sufre el acusado durante el proceso pueden ser más graves que la pena que se le impondría si procediera. Aunque se estuvo de acuerdo en esta idea, pareció, sin embargo, más adecuado, en lugar de poner varias especies de juicio, reglamentar uno solo; pero abreviando el procedimiento, según el artículo 249, para los delitos de menor gravedad, considerándose como tales, aquellos que están castigados con penas menos severas, penas que señala el artículo de que se trata. Entre esos delitos se designa expresamente el de circulación de moneda falsa; para hacerlo así, se tuvo en cuenta que cuando la circulación se hace de acuerdo con el falsificador, se castiga como falsificación y por esto no está ya comprendida en el artículo 249, el cual solo comprende la circulación que se hace sin acuerdo con el falsificador, delito que se castiga con la pena impuesta al fraude o al robo sin violencia, conforme a los artículos 422 y 674, en su última parte, del Código Penal.

El artículo 257 que enumera cuáles documentos son públicos, expresa, en la fracción 6ª, que lo son las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales que se refieran a actos del estado civil, expedidas con posterioridad al establecimiento del registro civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o juez. Conviene hacer notar que no se intenta dar validez a las actas parroquiales extendidas después del establecimiento del registro civil, sino a las certificaciones que, aunque sean posteriores, se refieran a un acto anterior a la institución del registro. Otra cosa habría sido contraria a los preceptos constitucionales y a uno de los objetos del registro civil.

La parte final del artículo 270 que se refiere a la prueba presuncional, es la legítima consecuencia de la libertad que da a los jueces el 128, para emplear en la investigación de los delitos los medios conducentes.

El artículo 281 establece la regla de que la pena corporal se cuente desde la fecha del auto de formal prisión. La justicia de esta disposición es manifiesta. Teóricamente, ningún hombre debería entrar a la cárcel sino declarado culpable; mas ya que la imperfección de la justicia social no lo consiente por ahora, cuando menos en los casos en que resulte condenado, nada más equitativo que abonarle el tiempo que real y

verdaderamente ha estado privado de su libertad. En hora buena que cuando el acusado es absuelto, para que no se crea desprestigiado y para evitarle consecuencias perjudiciales, se diga que no se reputa pena la detención que ha sufrido durante el procedimiento; pero no debe extremarse tal concepto en contra del que es condenado y que conduce a aumentar el castigo que se le impone, con el que tiene ya sufrido desde que se le declaró formalmente preso.

No es lo mismo cuando se conmuta la pena capital; porque entonces el reo recibe una gracia y el Ejecutivo, conforme al artículo 282, debe tomar en consideración la gravedad del delito, sus circunstancias y las del delincuente.

TÍTULO IV.

Sancionadas las reglas generalmente admitidas para la substanciación de las competencias, se dispone en el artículo 291 que la inhibitoria pueda ser promovida no sólo por las partes, sino aún de oficio por el juez, porque es de derecho público la jurisdicción en asuntos de orden diverso y, por consiguiente, los tribunales deben defenderla.

Por razón también de orden público, una vez aceptada la inhibitoria por las autoridades judiciales, es preciso que se continúe la controversia hasta que sea decidida, aunque se desista el que la hubiere promovido, porque en ella las partes son en realidad los jueces contendientes y no las personas que ante ellos litigan. Tal es la razón del artículo 294.

El 303 reglamenta las competencias negativas, que de hecho se presentan en la práctica y que se hace necesario sean decididas. Prohibir esta especie de competencias tiene por consecuencia obligar a un juez a conocer de asuntos para los cuales no tiene jurisdicción; y cuando se rehúsa a conocer, si bien queda el medio de acudir al superior, éste no puede poner en actividad al juez, si no es resolviendo que es competente y decidiendo, por lo mismo, la cuestión jurisdiccional negativa, con el grave inconveniente, de hacerlo sin audiencia de quien tenga intereses opuestos.

El Código Penal establece la acumulación de delitos y faltas, cuyo efecto es que se imponga una sola pena, aunque agravada, y no tantas cuantos sean los hechos que se castigan. Para hacerla efectiva nada más conveniente, como lo expresa la fracción 1ª del artículo 329, que la acumulación misma de los procesos para que se dicte una sola sentencia; mas para esto es indispensable que el estado de dichos procesos lo permita, esto es, que se encuentren en instrucción. Pero si no es así, no por eso deben dejarse de observar los preceptos del Código citado relativos a la aplicación de las penas en caso de acumulación, y para esto se previene en el artículo 332 que el juez o tribunal, cuya sentencia cause ejecutoria, la remita en copia al juez o tribunal que conozca del otro proceso.

Los capítulos 4º, 5º y 6ºdel título IV, se refieren a la libertad del acusado, ya absoluta, ya provisional bajo protesta o bajo caución, y están inspirados en un criterio de la mayor equidad y de respeto a la libertad individual. La fracción 1ª del artículo 347, consagra el acatamiento debido al artículo 19 constitucional y es una sanción de la observancia de los requisitos que señala la ley para que proceda el auto de formal prisión. En los demás casos previstos en el mismo artículo 347, es cierto que no podrá, imponerse pena alguna al acusado, o cuando menos que no se le impondrá pena corporal, y por consiguiente sería injusto restringir su libertad y más aún mantenerlo en prisión. La comprobación de algunas de las circunstancias que excluyen de responsabilidad criminal, exige a veces pruebas laboriosas, y en previsión del caso, dispone el artículo 348 la substanciación previa de un incidente; pero en otras ocasiones, la existencia de la circunstancia ex culpante es tan clara que desde luego revela que carece de objeto llevar hasta el fin y por todos sus trámites, el procedimiento penal. Citose en la discusión el caso de una persona declarada en estado de interdicción por causa de enajenación mental y confinada en un manicomio, acusada de homicidio; y el de un niño de

cinco años a quien se imputase cualquier delito, casos cuya simple enunciación repugna que se dicte auto de prisión.

La libertad provisional, ya sea bajo protesta o ya bajo caución, supone al acusado sometido al proceso, cuyo resultado puede ser una sentencia condenatoria; por lo que ha sido necesario reglamentarla cuidadosamente. Se establece que el requisito de que el inculpado tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en que se siga el proceso, es dispensable; porque la circunstancia de que el acusado sea transeúnte lo pondría en la imposibilidad de salir de la prisión, por más que se creyere conveniente concederle la libertad. Al efectuarse el examen del proyecto, se hizo alusión a un caso ocurrido de colisión de un buque con otro, siendo el buque abordarte, así como su capitán, de nacionalidad extranjera; el capitán fue detenido y la dificultad para que se le pusiera libre provino de que tenía su domicilio en el país de su origen. México se halla en desarrollo creciente y cada día en mayor contacto con ciudadanos o súbditos de otras naciones, y conviene evitar conflictos que pueden desdecir del buen nombre y del progreso de nuestro país.

Con relación a la responsabilidad civil, sólo se hará notar que se da competencia a los tribunales del fuero común para conocer de ella, cuando la acción se intente después de haberse dictado sentencia en el proceso o de que éste haya terminado por no haber habido acusación, y siempre que el que intente la acción sea un particular; porque en tales casos existen las condiciones que someten losados jurídicos al fuero común, ya que el interés social representado por la Federación está satisfecho con el resultado del proceso.

TÍTULO V.

La existencia del juicio de amparo ha motivado que se suprima en el orden federal el recurso de casación. Uno y otro proceden por violación de la ley y se ha creído que no se debe multiplicar, sin absoluta necesidad, juicios o recursos; porque es superior la ventaja que se obtiene con la terminación breve de los negocios judiciales que la que consiste en la esperanza de un mejor acierto en su resolución, esperanza de escaso valor, pues diversas decisiones pronunciadas en un mismo asunto, más bien producen el resultado de arruinar la verdad, fuera de que engendran la falta de respeto y amenguan la autoridad de la administración de justicia. En el caso de optar entre el amparo y la casación, la elección no es dudosa; porque siendo la casación una acción de nulidad contra una sentencia ejecutoria, por cuya estabilidad se interesa el orden público, tiene que ser reglamentada de una manera estricta y rigurosa, en tanto que el amparo, atendiendo más bien al grande interés general de la sociedad para que las autoridades permanezcan, se mantengan y funcionen regularmente en los límites que a sus poderes marca la Constitución, tiene que ser reglamentado de modo más amplio y accesible.

TÍTULO VI.

Nada hay que decir acerca de las disposiciones de este título, porque sus dos primeros capítulos reproducen la ley de 9 de diciembre de 1897, vigente tanto en el orden común como en el federal y que sólo se insertó para que la materia del Código estuviese completa; y los otros capítulos son iguales a los correspondientes del Código de Procedimientos del Distrito y Territorios, cuyos preceptos no se encontró motivo para alterar.

TÍTULO VII.

Se consigna en el art. 477 que los funcionarios judiciales de la Federación son responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, y que lo son igualmente los del orden común cuando obran en auxilio de aquellos. Esta última parte corresponde a la necesidad de establecer de una manera ciará cuáles deben ser los tribunales que conozcan de la responsabilidad de los jueces del fuero común, cuando incurran en ella obrando en auxilio de fa justicia federal y evitar las dificultades que se han suscitado con la pretensión de que los tribunales que conozcan en tales casos sean los locales.

Imputado a un funcionario judicial un hecho que puede constituir un delito, nada más justo que poner al acusador en posibilidad de confirmar su imputación y al acusado en la de justificar su conducta y a tal fin se permite un término de prueba; pero como puede suceder que la acusación no se encuentre corroborada con algún elemento probatorio y que tampoco el funcionario inculpado se halle en posibilidad de desvanecerla, el tribunal se encuentra para dictar su decisión, entre la afirmación del quejoso por una parte y la sola negativa, por otra, del funcionario acusado. En estas condiciones la imputación criminal realmente no está desvanecida, y sin embargo, sería injusto procesar a un funcionario, sólo por solicitud de una persona, lo que, de generalizarse, conduciría a que la estabilidad de los funcionarios judiciales quedara con frecuencia al arbitrio de cualquier individuo, lo que es inadmisible. Por estas razones se dictó el artículo 484, que en los casos apuntados servirá de fundamento legal para la resolución de los tribunales que conozcan de las diligencias de responsabilidad oficial.

El Ejecutivo, al rendir este informe a esa H. Cámara, por conducto de la Secretaría de Justicia, abriga la esperanza de haber realizado, dentro de lo posible, la aspiración que encerraba el decreto fecha 24 de mayo de 1906, que lo autorizó para expedir el Código Federal de Procedimientos Penales, del cual tengo el honor de enviar adjunto un ejemplar.

Queda, pues, cumplida la disposición del decreto de 13 de diciembre de 1907, que prorrogó el plazo de aquella autorización, y réstame sólo hacer presente a esa H. Cámara, rogando a ustedes se sirvan también aceptar para sí, mi atenta y distinguida consideración.

Libertad y Constitución. México, a 28 de abril de 1909.- Fernández.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.

Diciembre 24 de 1908.- Que se haga cumplir a los notarios lo que establece el artículo 95 de la ley de 19 de diciembre de 1901 que impone a los Notarios del Distrito Federal la obligación de remitir al archivo General de Notarías de esta ciudad los protocolos que sean de fecha anterior a los últimos seis años.

MESA DEL NOTARIADO Y REGISTRO PÚBLICO.- Circular Núm. 179.

El artículo 95 de la ley de 19 de diciembre de 1901 impone a los Notarios del Distrito Federal la obligación de remitir al archivo General de Notarías de esta ciudad los protocolos que sean de fecha anterior a los últimos seis años, que deben contarse, según lo prescripto en el artículo 45 de la propia ley, desde la fecha en que se les entregaron los volúmenes respectivos; y como hasta esta fecha no han depositado varios de los mencionados funcionarios los protocolos que recibieron en el mes de abril de 1902, el C. Presidente de la República ha tenido a bien acordar se les excite por medio de la presente a fin de que procedan desde luego a hacer la entrega de dichos protocolos, evitando así que esta Secretaría haga uso de los medios que la ley establece para que tengan puntual cumplimiento sus preceptos.

Lo digo a Ud. para su inteligencia y efectos consiguientes.- Libertad y Constitución. México, 24 de diciembre de 1908, Fernández.- Al Notario C.....Presente.

Diciembre 26 de 1908.- Código Federal de Procedimientos Civiles.

El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

PORFIRIO DIAZ, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión, por decretos de 24 de mayo de 1906 y 13 de diciembre de 1907, he tenido a bien promulgar el siguiente

Código Federal de Procedimientos Civiles.

TÍTULO I.

Reglas generales.

CAPÍTULO I.

De la personalidad de los litigantes.

Artículo 1º.

Toda persona que, conforme a la lev, esté en el ejercicio de sus derechos civiles, puede comparecer en juicio, por sí o por apoderado, ante los Tribunales Federales.

Por los incapacitados y los ausentes comparecerán sus representantes legítimos.

Artículo 2º.

La Federación comparecerá por medio del Ministerio Público en los términos que dispone la ley; las partes integrantes de la Unión, por los funcionarios que designen sus leyes locales, y las demás personas que gozan de entidad jurídica, por sus representantes legalmente constituidos.

Artículo 3º.

Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan una misma excepción, deberán litigar unidas y tener un solo representante común, que elegirán ellas mismas. ,

Si dentro de los tres días siguientes a su primera comparecencia, no hicieren et nombramiento, lo hará el juez, designando a cualquiera de los mismos interesados.

El representante nombrado tendrá todas las facultades necesarias para cumplir su encargo.

Artículo 4º.

En las informaciones de pobreza y en los juicios cuyo interés no exceda de mil pesos, bastará que se acredite la representación con carta-poder autorizada con la firma de dos testigos o ratificada ante el juez. En tos demás casos será indispensable el poder apud acta o el mandato por escritura pública.

Artículo 5º.

El apoderado, al aceptar el poder queda obligado:

I. A seguir el juicio por todas las instancias mientras no haya cesado en su encargo;

II. A pagar todos los gastos que se causen a su instancia, salvo su derecho de ser indemnizado por el mandante;

III. A ejecutar los demás actos inherentes al mandato.

Artículo 6º.

Cesará el apoderado en su cargo:

I. Por revocación expresa o nombramiento posterior de otro apoderado para el mismo negocio;

II. Por la renuncia del apoderado, puesta judicialmente en conocimiento del poderdante con la anticipación debida. Mientras no se acredite la renuncia en autos, el apoderado no podrá abandonar la representación que tiene;

III. Por haber el mandante transmitido a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión produzca sus efectos legales y se haga constar en el expediente;

IV. Por haber terminado la personalidad del poderdante;

V. Por la declaración de ausencia del poderdante, hecha en la forma que determinen las leyes respectivas;

VI. Por la muerte o interdicción del mandante. El apoderado acreditará en forma el fallecimiento o la interdicción en su caso, y si no presentare nuevo poder de los herederos del finado o del tutor del incapacitado, el juez o tribunal acordará que se cite a aquéllos, para que dentro del plazo que se les fije, nombren nuevo apoderado o acepten la personalidad del anterior.

Artículo 7º.

Los emplazamientos, citas y notificaciones qua se hicieren al apoderado tendrán la misma fuerza y validez que si se

hubieren hecho al poderdante, exceptuándose las diligencias que, por disposición de la ley, deban practicarse personalmente con los mismos interesados.

Artículo 8º.

Si el apoderado abandonare el juicio, se notificará el abandono al poderdante, sin suspender por ello el procedimiento.

Artículo 9º.

El poderdante puede ratificar en cualquier tiempo lo que el apoderado hubiere hecho excediéndose del poder, y la ratificación surtirá los efectos legales del mandato.

Artículo 10.

El apoderado no necesita bastantear el poder que acredite su representación.

Artículo 11.

Los poderes otorgados fuera de la República, una vez legalizados, deberán protocolizarse para que surtan sus efectos con arreglo a la ley.

Artículo 12.

La gestión judicial no es admisible para representar al actor; lo será para representar al demandado, siempre que el gestor dé fianza de que el interesado pasará por lo que hiciere, pagará lo juzgado y sentenciado, resarcirá los daños e indemnizará los perjuicios causados por la gestión. La fianza debe ser calificada por el juez con audiencia del colitigante, y en ella, el fiador renunciará los beneficios de orden y excusión;

CAPÍTULO II.

De la habilitación para litigar por causa de pobreza.

Artículo 13.

El que pretenda la habilitación por causa de pobreza, ocurrirá al juez ante quien ha de litigar, usando desde la primera petición del timbre especial señalado por la ley para estos casos, a reserva de reponerlo con el correspondiente, si su solicitud fuere desechada.

Artículo 14.

La habilitación puede pedirse también durante el juicio y en cualquiera de sus instancias, sin que el incidente suspenda el curso del negocio principal.

Artículo 15.

El solicitante rendirá prueba sobre su falta de recursos para litigar, la que será recibida dentro de tercero día con citación del representante del Ministerio Público.

Artículo 16.

Al día siguiente de haber concluí-do el término de prueba, el juez pronunciará su resolución, que sólo es apelable en el efecto devolutivo.

Artículo 17.

La habilitación únicamente surtirá su electo en el juicio para que haya sido concedida, y dejará de producirlo si el Ministerio público rindiese prueba de que ha llegado a mejor fortuna el que la había obtenido.

El auto que en este caso Se pronuncie, es apelable en el efecto devolutivo.

Artículo 18.

Si el habilitado por causa de pobreza obtuviere un fallo favorable, integrará la cuota del timbre fijada por la ley, al notificarse la ejecutoria pronunciada en el juicio para el que obtuvo la habilitación.

CAPÍTULO III.

De las competencias.

Artículo 19.

Todo juicio debe promoverse y seguirse ante juez competente. Es juez competente:

I. El de la localidad en donde debe aplicarse la ley;

II. El del lugar que el deudor haya designado para ser reconvenido judicial-

mente de pago;

III. El del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación.

Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no sólo por la ejecución o cumplimiento del contrato, sino por su rescisión o nulidad.

IV. El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles;

V. El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción real sobre bienes muebles o de una acción personal;

VI. En los juicios hereditarios, el juez en cuya comprensión haya tenido su último domicilio el autor de la herencia; a falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que formen la herencia, y si estuvieren en varios distritos, el juez de cualquiera de ellos, a prevención;

VII. En el caso de que el Erario Federal sea el legatario y se suscite alguna controversia sobre este motivo, conocerá de ella el juez de distrito de la localidad en que este radicado el juicio de sucesión;

VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, es juez competente el del domicilio del que promueva; pero si se tratare de bienes raíces, lo será el juez del lugar en que estén ubicados.

Artículo 20.

Las cuestiones de tercería deben substanciarse y decidirse por el juez o tribunal que sea competente para conocer del asunto principal.

Artículo 21.

Si el demandado o demandados tuvieren varios domicilios, será competente el juez de cualquiera de ellos, a elección del actor.

Artículo 22.

Para determinar el domicilio de una persona, se estará a lo dispuesto por el Código de Comercio o por el Código Civil del Distrito Federal, en su caso.

Artículo 23.

Si las cosas, objeto de la acción real, fueren varias y estuvieren ubicadas en distintos lugares, será juez competente el del lugar de la ubicación de cualquiera de ellas donde hubiere ocurrido el demandante.

Artículo 24.

Para los actos preparatorios del juicio, será competente el juez que lo fuere para el negocio principal.

Artículo 25.

En las diligencias precautorias regirá lo dispuesto en el artículo anterior. Si los autos estuvieren en segunda instancia, será competente para dictar la providencia precautoria el juez que conoció de ellos en primera. En caso de urgencia, puede dictarla el juez del lugar donde se hallen el demandante o la cosa que debe ser asegurada.

Artículo 26.

Para decretar la cancelación de un registro, cuando la acción que se entable no tenga más que este objeto, es competente el juez del lugar en que se hizo el registro.

CAPÍTULO IV.

De las competencias entre tribunales federales.

Artículo 27.

La competencia entre dos o más tribunales federales se decidirá observándose el orden determinado en el capítulo anterior.

Artículo 28.

Cuando en el lugar en que haya de seguirse el juicio hubiere dos tribunales federales, será competente el que elija el actor.

CAPÍTULO V.

De las competencias entre los tribunales federales y los de los Estados.

Artículo 29.

Las competencias entre los tribunales federales y los de los Estados, se decidirán declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción, y se remitirán los autos al juez o tribunal que hubiere obtenido.

Artículo 30.

Esta resolución no impide que otro u otros jueces del fuero a que pertenezca el que obtuvo, le puedan iniciar competencia para conocer del mismo negocio.

CAPÍTULO VI.

De las competencias entre los tribunales de dos o más Estados.

Artículo 31.

Cuando las leyes de los Estados, cuyos jueces compiten, tengan la misma disposición respecto del punto jurisdiccional controvertido, conforme a ella se decidirá la competencia.

Artículo 32.

En caso de que aquellas leves estén en conflicto, las competencias que promuevan los jueces de un Estado a los de otro, se decidirán con arreglo al capítulo III de este título.

CAPÍTULO VII.

De la substanciación de las competencias.

Artículo 33.

Las competencias pueden promoverse.

I. Entre los juzgados de distrito;

II. Entre los tribunales de circuito;

III. Entre las salas de la Suprema Corte de Justicia;

IV. Entre los juzgados o tribunales de la Federación y tos juzgados o tribunales de los Estados, Distrito o Territorios;

V. Entre los jueces y tribunales de un Estado y los de otro, y entre éstos y los del Distrito y Territorios;

VI. Entre tribunales militares y los federales o los de los Estados, del Distrito y Territorios.

Artículo 34.

Ningún juez puede promover competencia a su superior jerárquico; pero sí a otro juez o tribunal federal local, respectivamente, aunque sea superior en categoría.

Artículo 35.

Si un juez federal inferior se arroga atribuciones propias de su superior, o éste las de aquél, la cuestión se decidirá mediante queja de alguno de los dos ante la respectiva sala de la Suprema Corte de Justicia, sin más trámite que los informes del superior y el inferior y la audiencia del Procurador General de la República.

Artículo 36.

Las cuestiones de competencia pueden promoverse por declinatoria o por inhibitoria. La declinatoria se propondrá ante el juez a quien se considere incompetente, pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio. La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se crea competente, pidiéndole que dirija oficio al que estuviere conociendo, para que se inhiba y remita los autos.

Cuando se hubiere optado por uno de estos medios, no se podrá abandonarlo para recurrir a otro, ni emplear los dos sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquél a que se haya dado la preferencia. Aunque se haya promovido la declinatoria a instancia de parte, podrá promoverse de oficio la inhibitoria en los casos de competencia entre jueces federales y locales, o entre jueces de diversos Estados, cuando se trate de intereses fiscales de alguno de ellos, y en el caso del artículo 39

Artículo 37.

La declinatoria de jurisdicción se substanciará, como excepción dilatoria, en la

forma establecida por este Código para los incidentes.

Artículo 38.

La inhibitoria puede promoverse por los litigantes, por el Ministerio Público y aun decretarse de oficio por los jueces.

Artículo 39.

Los tribunales federales iniciarán a los locales, a instancia de parte y aun de oficio, las competencias que tengan por objeto sostener la jurisdicción que les confieran la Constitución y leyes federales.

Artículo 40.

En toda cuestión de competencia se oirá siempre al Ministerio Público, que deberá pedir dentro de tercero día lo que proceda conforme a derecho.

Artículo 41.

El juez o tribunal, dentro de los tres días siguientes a aquel en que el Ministerio Público hubiere presentado su pedimento, mandará librar oficio inhibitorio o decretará no haber lugar al requerimiento de inhibición.

Artículo 42.

Contra el auto en que se inicie la competencia no hay más recurso que el de responsabilidad; contra el que declare no haber lugar al requerimiento, se admitirá en ambos efectos la apelación que se interponga por los litigantes o por el Ministerio Público,

Artículo 43.

En el oficio inhibitorio se insertará copia del escrito en que se haya propuesto la inhibitoria, de lo expuesto por el Ministerio Público, del auto en que se hubiere dictado y de lo demás que se estime conducente para fundar la competencia.

Artículo 44.

Luego que el juez o tribunal requerido reciba la inhibitoria, suspenderá todo procedimiento, mandará dar conocimiento de ella, por el término de tres días, a cada una de las partes litigantes, y en caso de no promoverse prueba, decidirá dentro de tercero día.

Si se promoviere prueba, se concederá un término de ocho días para rendirla; se oirá al Ministerio Público por otros tres días, y dentro de igual término, el juez o tribunal pronunciará su auto inhibiéndose o rehusando la inhibitoria.

Artículo 45.

El auto en que el juez requerido se inhiba del conocimiento del negocio, es apelable en ambos efectos.

Artículo 46.

Contra los autos que dicten los tribunales superiores, declarando que no ha lugar al requerimiento de inhibición, o reconociendo la jurisdicción del juez o tribunal requirente, no hay más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 47.

Las apelaciones de que tratan los artículos 42 y 45 se substanciarán sin más trámites que la vista o informe de las partes y del Ministerio Público, y se decidirán en el plazo de diez días contados desde que el superior respectivo reciba los autos.

Artículo 48.

Si el juez requerido demorare su contestación al requirente, después que hayan transcurrido los plazos señalados, la parte que propuso la inhibitoria, el Ministerio Público, en su caso, y el juez federal cuando proceda de oficio, puede dirigirse en queja a la Suprema Corte.

Artículo 49.

Los litigantes pueden desistirse de la competencia antes de que ésta sea aceptada por los jueces o tribunales.

Artículo 50.

Consentido o ejecutoriado el auto en que los jueces o tribunales se hayan Inhibido del conocimiento de un negocio, se remitirán los autos al juez o tribunal que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes, para que dentro del término que se les señale puedan usar de su derecho.

Artículo 51.

Si el juez o tribunal requirente insistiere en la inhibitoria, lo comunicará al requerido, y ambos remitirán, por el primer correo, sus respectivas actuaciones originales a la correspondiente sala de la Suprema Corte, exponiendo las razones en que funden su competencia.

Artículo 52.

Si se negare la inhibición, se comunicará el auto al juez que la hubiere propuesto, insertando en el oficio los escritos de los interesados y del Ministerio Público, la prueba rendida en su caso y el auto del juez requerido.

Artículo 53.

Recibido el oficio expresado, el juez o tribunal requirente, sin más substanciación, dictará auto dentro de tercero día, insistiendo en la inhibitoria o desistiéndose de ella, y comunicará su resolución al juez requerido.

Artículo 54.

Una vez aceptada la competencia por los jueces o tribunales competidores, continuará substanciándose hasta su decisión.

Artículo 55.

Estando ya en poder de la sala de la Suprema Corte las actuaciones e informes de los jueces o tribunales competidores o los de uno solo en el caso del artículo 48, se pasarán al Ministerio Público para que en el término de seis días presente su pedimento.

Artículo 56.

Si las partes se hubieren presentado ante el superior, se les pondrán de manifiesto los autos en la Secretaría, por seis días, transcurrido los cuales, se señalará la vista, que se verificará dentro de los ocho siguientes.

Artículo 57.

La sala pronunciará su sentencia dentro de ocho días, contados desde el último de la vista.

Artículo 58.

La sala, al fallar sobre la competencia, impondrá una mulla de 10 a 500 pesos al juez o tribunal, y al litigante que la hubiese promovido o impugnado con notoria temeridad.

Artículo 59.

Notificado el fallo, se remitirá testimonio de él a los jueces o tribunales que hayan sostenido la competencia, y se enviarán las actuaciones al juez declarado competente, a fin de que continúe sus procedimientos.

Artículo 60.

Todos los términos de la substanciación de las competencias son improrrogables; y el juez o tribunal a quien corresponda, proveerá de oficio el trámite que proceda, según el estado de los autos.

CAPÍTULO VIII.

De la acumulación de los autos.

Artículo 61.

La acumulación podrá decretarse a instancia de parte o de oficio, en los casos siguientes:

I. Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los juicios, produzca excepción de cosa juzgada en el otro;

II. Cuando hubiere pendientes juicios distintos sobre un mismo objeto;

III. Cuando de seguirse separadamente los juicios, se divida la continencia de la causa.

Artículo 62.

Se entiende dividida la continencia de la causa:

I. Cuando haya entre los dos juicios identidad de personas, cosas y accionen.

II Cuando haya identidad de personas y cosas, aun cuando la acción sea diversa;

III. Cuando haya identidad de personas y acciones, aun cuando las cosas sean

distintas;

IV. Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque se den contra muchos, y haya, por consiguiente, diversidad de personas;

V. Cuando las acciones provengan de la misma causa, aunque sean diversas las cosas;

VI. Cuando haya identidad de acciones y cosas, aunque las personas sean distintas,

Artículo 63.

No procede la acumulación:

I. En los juicios que están en diversas instancias;

II. Cuando se trata de interdictos.

Artículo 64.

La acumulación se pedirá, expresando:

I. El juzgado en que se siguen los juicios que deban acumularse;

II. El objeto de cada uno de los juicios;

III. La acción que en cada uno de ellos se ejercite;

IV. Las personas que en ellos se hayan constituido parte;

V. Los fundamentos legales en que se apoya la acumulación.

Artículo 65.

Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el juez dispondrá que se haga relación de ellos en una audiencia que, con citación de las partes, se celebrará dentro de tres días.

La citación para la audiencia producirá los efectos de citación para sentencia.

Artículo 66.

Terminada la relación y oídas las partes que a ella hubieren concurrido, el juez dictará, dentro de veinticuatro horas, la resolución que corresponda.

Artículo 67.

Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, se promoverá la acumulación ante el que conozca del juicio que se ha promovido primero.

Artículo 68.

Iniciada la acumulación, se dará a conocerá los litigan les para que dentro de tres días contesten lo que crean conveniente; y transcurrido este término, el juez, dentro de tercero día, dictará auto, declarando si procede o no la acumulación.

Si el juez la es lima procedente, reclamará los autos por medio de oficio con inserción de las constancias que sean bastantes para dar a conocer la causa porque se pretende la acumulación.

Artículo 69.

El juez a quien se dirija el oficio, lo pondrá a la vista del actor en el juicio de que conoce, para que dentro de tres días exponga lo que a su derecho convenga, y dentro de otros tres resolverá aceptando o negando la acumulación.

Artículo 70.

Si la aceptare, su resolución será apelable en los términos del artículo 72. En caso de que no se interponga el recurso, el juez requerido, ya sea que se consienta o declare ejecutoriada dicha resolución, remitirá los autos al requirente, con emplazamiento de las partes, para que se presenten ante éste a usar de su derecho en el término que se les señale.

Artículo 71.

Si el juez requerido estima que no procede la acumulación, lo comunicará sin demora al requirente, exponiendo sus fundamentos y fijándole el plazo de tres días, para que conteste si desiste de su pretensión o insiste en ella,

En el primer caso, el juez requirente manifestará su desistimiento al requerido, comunicándolo a la parte que promovió la acumulación, siempre que dentro de tres días no se interpusiere el recurso de apelación. En el segundo caso, dentro del término de veinticuatro horas, previo aviso al juez requerido, remitirá al requirente los

autos al tribunal de circuito a que ambos estén sujetos, o a la Suprema Corte si el juez requerido no pertenece al mismo circuito, para que dicte la resolución que corresponda, la que en todo caso causará ejecutoría.

Artículo 72.

La apelación a que se refiere este capítulo, procederá, si cualquiera de las sentencias definitivas en los juicios, objeto de la acumulación, admite dicho recurso; se substanciará sin más trámite que el informe de las partes, y se decidirá en el improrrogable término de quince días, contados desde que el superior respectivo reciba los autos.

Contra el fallo que se dicte no cabe recurso alguno.

Artículo 73.

El tribunal de circuito, o la Suprema Corte de Justicia en su caso, substanciará el incidente de acumulación, sujetándose al procedimiento determinado para la decisión de las competencias.

Artículo 74.

Desde que se pida la acumulación se suspenderá todo procedimiento en los juicios de que se trate, hasta que el superior respectivo pronuncie sentencia; sin perjuicio de que se practiquen las diligencias precautorias y urgentes.

Artículo 75.

Cuando se acumulen los autos, se suspenderá el recurso del juicio que estuviere más próximo a su término, hasta que el otro se halle en el mismo estado, a fin de que ambos se decidan en una misma sentencia.

CAPÍTULO IX.

De los impedimentos y recusaciones.

Artículo 76.

Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito deben inhibirse de aquellos negocios en que tengan impedimento.

Son impedimentos:

I. El parentesco en línea recta sin limitación de grados; en la colateral, por consanguinidad, dentro del cuarto grado y por afinidad dentro del segundo, con alguna de las partes, sus abogados o procuradores;

II. La amistad íntima con alguno de los litigantes o sus patronos;

III. La enemistad manifiesta con alguna de las partes;

IV. El interés directo o indirecto en el negocio que es objeto del litigio;

V. La relación de los intereses, como socio, arrendatario o dependiente de alguna de las partes;

VI. Tener pendiente un juicio semejante al de que se trate;

VII. Ser heredero, legatario, donatario, deudor o fiador de alguna de las parles;

VIII. Haber sido tutor o curador de alguno de los interesados, haber prestado a éstos servicios como abogado, procurador, perito o testigo del negocio de que se trate;

IX. Seguir algún negocio en que sea juez árbitro o arbitrador alguno de los litigantes, o un juicio civil con alguno de éstos o los parientes por consanguinidad o afinidad en los mismos, en los grados que expresa la fracción I;

X. Haber gestionado o recomendado anteriormente en favor de una de las partes el asunto de que se trate;

XI. Haber fallado en otra instancia el mismo negocio.

Artículo 77.

Las causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de los litigantes, y es caso de responsabilidad la infracción del artículo anterior.

Artículo 78.

El impedimento se calificará por quien corresponda, conforme a lo dispuesto en la ley orgánica de los Tribunales Federales, con

vista del informe que dentro de tres días rinda el juez o magistrado, y contra el fallo no habrá recurso alguno.

Artículo 79.

Admitido un impedimento, conocerá del negocio el suplente del tribunal de circuito o juzgado de distrito a quien tocare, o la sala de la Corte integrada conforme a las disposiciones de la ley orgánica de los Tribunales Federales. Desde que el impedimento se proponga hasta que se acepte o deseche, se suspenderá la secuela del juicio, excepto para las providencias de carácter urgente. Si el impedimento se desecha, seguirá conociendo el ministro, magistrado o juez que se había considerado impedido.

Artículo 80.

Cuando los magistrados o jueces no se inhibieren, a pesar de existir alguno de los impedimentos, expresados, procede la recusación.

Artículo 81.

Sólo pueden recusar las personas que sean parte en el juicio.

Artículo 82.

Las recusaciones pueden, proponerse desde que se conteste la demanda o se opongan las excepciones dilatorias, hasta la citación para sentencia en la primera instancia o para la vista en los tribunales superiores;

Si después de la citación ocurriese cambio de personal del tribunal o juzgado, será admisible la recusación, siempre que se proponga dentro de los tres días siguientes al en que se notifique el auto o decreto proveído por el nuevo personal.

Artículo 83.

Si concurren varias causas de recusación, se propondrán simultáneamente, a no ser que se alegue una causa superveniente.

Artículo 84.

Los jueces y magistrados desecharán de plano toda recusación que no estuviere hecha en tiempo y forma o que sea improcedente.

Artículo 85.

Las recusaciones se interpondrán por el interesado o por su apoderado, expresando concreta y claramente la causa en que se funden.

Artículo 86.

Cuando el magistrado de circuito o juez de distrito recusado, estime cierta y legal la causa de la recusación, sin audiencia de la parte contraria se declarará inhibido, mandando que pasen los autos a quien deba reemplazarlo, y comunicando su resolución a la Secretaría de Justicia.

Artículo 87.

Cuando el funcionario recusado no estimare como cierta y legal la causa alegada, señalará al recusante el término de cuarenta y ocho horas para que ocurra al juez o tribunal que deba conocer de la recusación.

Además de las cuarenta y ocho horas indicadas, se concederá otro término, computado conforme a la disposición relativa de este Código, si el tribunal que debe conocer de la recusación estuviere en diferente lugar del en que resida el funcionario recusado.

El término para la presentación es improrrogable, y al recusante que no se presentare dentro de él, se le tendrá por desistido.

Artículo 88.

El juez, magistrado o sala que deba decidir de la recusación, resolverá dentro de los tres días siguientes al en que reciba el expedientes'! es legal la causa alegada. Si la resolución es afirmativa y la causa se funda en hechos que no estén justificados, se abrirá el incidente a prueba por un término que no exceda de diez días.

Artículo 89.

Concluido dicho término, serán citadas las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días, y en las cuarenta y ocho horas siguientes se pronunciará la resolución, contra la cual no puede intentarse ningún recurso.

Artículo 90.

Cuando se niegue la recusación, se condenará al recusante a una multa de 10 a 100 pesos, que hará efectiva el tribunal o juez que continúe conociendo del negocio principal.

Artículo 91.

Admitida la recusación, el recusado quedará definitivamente separado del conocimiento del negocio, radicando éste en el suplente respectivo.

Artículo 92.

En los impedimentos y recusaciones de los asesores, se observarán las disposiciones, relativas a las recusaciones de los magistrados de circuito o jueces de distrito, según asesoren a unos o a otros.

Artículo 93.

Los secretarios y los oficiales mayores de los tribunales o juzgados, quedan comprendidos en lo dispuestos en este título, con las modificaciones que determinan los siguientes artículos.

Artículo 94.

Alegado el impedimento o la recusación, el secretario u oficial mayor recusado pasará los autos a quien deba substituirlo conforme a la ley.

Artículo 95.

De estos incidentes conocerá el tribunal o juez con quien actúe el empleado impedido.

Artículo 96.

Reconocida por éste como cierta la causa de la recusación, o admitido como legítimo el impedimento, el magistrado o juez declarará, sin más trámite, impedido en toda intervención en el negocio al empleado de quien se trate.

Artículo 97.

Si se declara que el impedimento-o la recusación no es legal, el secretario u oficial mayor continuará actuando en el negocio. Las resoluciones que se dicten en este caso no son apelables.

Artículo 98.

No son recusables los magistrados y jueces federales:

I. En los negocios en que esté interesada la Hacienda Pública;

II. En las diligencias precautorias;

III. Al cumplimentar exhortos;

IV. En lodos los actos de jurisdicción voluntaria;

V. En los juicios de amparo;

VI. En los incidentes de competencia;

VII. En los incidentes de recusación, respecto del tribunal que debe calificarla;

VIII. En la ejecución de sentencias y en los incidentes que surjan con motivo de dicha ejecución.

CAPÍTULO X.

De las formalidades judiciales.

Artículo 99.

Todos los juicios se substanciarán por escrito. Las partes pueden expresar su conformidad e interponer recursos verbalmente en el acto de la notificación.

Las diligencias judiciales y las juntas se harán constar en actas.

Artículo 100.

Los tribunales federales estarán siempre expeditos para administrar justicia. El despacho ordinario se hará todos los días, con excepción de los domingos y días de fiesta nacional.

Artículo 101.

Los secretarios de los tribunales y juzgados harán constar las promociones, asentando al pie del escrito, o en la comparecencia respectiva, el día y la hora en que las partes se presenten a hacerlas.

Artículo 102.

Los secretarios de los tribunales y juzgados darán cuenta de las promociones

dentro de veinticuatro horas, bajo la pena de 10 pesos de mulla y sin perjuicio de lo demás que proceda conforme a la ley.

Artículo 103.

En los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito, los magistrados y jueces verán por sí mismos las actuaciones para dictar autos o sentencias. En la Suprema Corte de Justicia darán cuenta los secretarios, sin perjuicio de que los ministros se impongan de los autos en la forma y tiempo que el reglamento de la Corte determine.

Artículo 104.

El acuerdo será reservado. Las diligencias de prueba y las vistas serán públicas, salvo que en concepto del tribunal o juzgado convengan que sean secretas por algún motivo justificado, o lo que dispone este Código respecto a los juicios de amparo.

Artículo 105.

En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose al fin, con toda precisión, el error cometido. Todas las fechas y cantidades se escribirán precisamente con letra y número.

Artículo 106.

Los secretarios foliarán exactamente las actuaciones y rubricarán todas las hojas en el centro de lo escrito; pondrán el sello del tribunal o juzgado en el fondo del pliego, de manera que queden selladas las dos caras, y cuidarán de que se usen las estampillas correspondientes, dando cuenta al tribunal o juez de las faltas que observen, para que disponga lo conveniente.

Artículo 107.

En el caso de que el promovente tenga representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona, a la primera promoción acompañará precisamente el documento o documentos que acrediten la personalidad.

Artículo 108.

Los expedientes nunca se sacarán de la Secretaría, quedando en ella a disposición de las partes para que se impongan de su contenido.

Artículo 109.

Los expedientes que se perdieren serán repuestos a costa del culpable, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 110.

Los secretarios de los tribunales y juzgados cotejarán las copias o testimonios de constancias judiciales que el tribunal o juez mande expedir, y las autorizarán con su firma y el sello correspondiente.

Artículo 111.

Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas por el funcionario público a quien corresponda firmar, dar fe o certificar el acto.

CAPÍTULO XI.

De las notificaciones.

Artículo 112.

Los litigantes en su primera promoción o en la primera diligencia judicial en que intervengan, designarán casa ubicada en el lugar del juicio para oír las notificaciones, y en caso de no designarla, se hará la notificación por medio de cédula fijada en la puerta del tribunal. También designarán la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona demandada o el lugar en que ésta se encuentra.

Artículo 113.

Los decretos, los autos, las sentencias interlocutorias o definitivas y demás resoluciones judiciales, se notificarán a todos los que sean parle en el juicio, en el mismo día en que sean dictadas, o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 114.

La primera notificación se hará per-

sonalmente a los interesados, salvo los casos exceptuados expresamente por la ley.

Si a la primera busca no se encuentra al que deba ser notificado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente, y si no espera, se le notificará por cédula, apercibiéndole de lo que hubiere lugar.

Artículo 115.

Las notificaciones se practicarán por el secretario del tribunal y por el escribano de diligencias o ejecutor, en sus respectivos casos, leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, dándole copia de ella, si la pidiere, o dejándosela si rehusare oír la notificación.

Artículo 116.

Las notificaciones se firmarán por el funcionario que las practique, con arreglo al artículo anterior, y por la persona a quien se hicieren. Si ésta no supiere firmar o no pudiere, firmará un testigo a su ruego; Si no quisiere firmar ni presentar testigo, se hará constar esta circunstancia.

Artículo 117.

Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser notificado, si no fuere hallado en él, se le hará la notificación por cédula.

Artículo 118.

La cédula de notificación contendrá:

I. La naturaleza y objeto del juicio y los nombres y apellidos de los litigantes;

II. Copia literal de la resolución que haya de notificarse;

III. El nombre de la persona a quien deba hacerse la notificación;

IV. El motivo de hacer la notificación por cédula;

V. La fecha en que se extiende la cédula, la hora en que se deja y la firma del que notifica.

Artículo 119.

La cédula se entregará a la persona que se halle en la casa, y no habiéndola, al policía encargado de la vigilancia del punto, o a falta de éste, al vecino más inmediato. Todo esto se hará constar en las actuaciones firmando el que practique la diligencia y la persona que reciba la cédula si supiere y quisiere hacerlo.

Artículo 120.

Los litigantes pueden, en el curso del juicio, señalar diversa casa de la que antes hubieren designado para oír las notificaciones.

Artículo 121.

La citación de los testigos y demás personas que no sean parte en el juicio, se hará por medio del comisario o mozo de oficios.

Al efecto, se extenderá la cédula por duplicado, entregando un ejemplar al citado, el cual firmará su recibo en el otro ejemplar que se unirá al expediente. Estas citaciones podrán hacerse por medio de oficio, cuando el juez lo estime conveniente.

Artículo 122.

Además del caso a que se refiere el artículo 114, se hará personalmente la notificación cuando haya cambio en el personal del juzgado o tribunal que conozca del asunto; cuando deba hacerse a terceros extraños al juicio; cuando por cualquier motivo se haya dejado de actuar en el negocio durante dos meses o más, y cuando se emplace al demandado para contestar la demanda, se le mande correr traslado de ella o se le cite para absolver posiciones, excepto en el caso previsto por el artículo 169.

Artículo 123.

Los requerimientos se harán en la forma que el auto prevenga, haciéndolo constar así el empleado o funcionario ejecutor.

Artículo 124.

Cuando tenga que notificarse, emplazarse, citarse o requerirse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se practicará la diligencia por medio de exhorto al juez de la residencia del notificado, emplazado, citado o requerido.

Artículo 125.

Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentra, será citado por edictos que se publicarán en el Diario Oficial del Supremo Gobierno, en el periódico oficial de la localidad y en el lugar donde se presuma que reside la persona citada, por un término que no bajará de dos meses, ni excederá de seis. Si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se le nombrará un procurador con quien se entenderán las diligencias del juicio.

Artículo 126.

La notificación a personas que residan en el extranjero, se hará por medio de exhorto, cuando sea conocido su domicilio, y en caso contrario, en los términos del artículo anterior.

Artículo 127.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos serán nulos si no so practican con arreglo a las prescripciones anteriores

Cuando la persona notificada, citada o emplazada, se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la resolución, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos.

Artículo 128.

El secretario, escribano o ejecutor que incurriere en morosidad en el desempeño de las funciones que le encomienda este capítulo, o faltare a alguna de las formalidades establecidas en él, será corregido disciplinariamente por el tribunal o juez de quien dependa, con una mulla que no exceda de 10 pesos por primera vez, de 50 por la segunda y con suspensión de empleo hasta por tres meses en la tercera, sin perjuicio de que indemnice debidamente a la persona que resulte perjudicada por la omisión La parte agraviada podrá promover ante el mismo juez que conozca del negocio, el incidente relativo a la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente.

CAPÍTULO XII.

De los exhortos y requisitorias.

Artículo 129.

Cuando tuviere que practicarse una diligencia judicial fuera del lugar del juicio, se encargará su cumplimiento, por medio de exhorto o requisitoria, al juez de distrito, o a falta de éste, al del fuero común de la localidad en que dicha diligencia deba practicarse.

Se empleará la forma de exhorto, cuando se dirija a un juez o tribunal igual o superior en grado, y la de simple requisitoria, cuando se dirija a un inferior.

Artículo 130.

Se dará entera fe y crédito a los exhortos y requisitorias que libren los jueces y tribunales de la Federación, debiendo, en consecuencia, cumplimentarse siempre que llenen las condiciones fijadas por este Código.

Artículo 131.

Los exhortos y requisitorias contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza de la diligencia que se haya de practicar; irán firmados por el juez de distrito, magistrado de circuito o el ministro de la Suprema Corte que designe el reglamento de ésta y el respectivo secretario; llevando además el sello del tribunal o juzgado correspondiente.

Artículo 132

En casos urgentes se podrá usar del telégrafo; pero en el mensaje se expresarán con toda claridad la diligencia de que se trata, los nombres de los litigantes, el fundamento de la providencia y el aviso de que se mandará por el primer correo el exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje.

Artículo 133.

Los exhortos a los tribunales extranjeros se remitirán por la vía diplomática al lugar de su destino, Las firmas de las autoridades que los expidan serán legalizadas por el Secretario de Justicia, y la de este

funcionario por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Artículo 134.

No será necesaria la legalización, si las leyes o prácticas del país a cuyo tribunal se dirige el exhorto no establecen ese requisito para documentos de igual clase.

Artículo 135.

Respecto de las naciones cuya legislación lo autorice, el exhorto se remitirá directamente por el tribunal o juez exhortante de la República al exhortado, sin más legalización que la exigida por las leyes del país en el cual se deba cumplir.

Los exhortos que de esas naciones se dirijan a los tribunales de la República, podrán también enviarse directamente por el tribunal o juez exhortante al exhortado, bastando que sean legalizados por el ministro o cónsul mexicanos residentes en la nación o lugar del tribunal exhortante.

Artículo 136.

La práctica de diligencias en países extranjeros, podrá también encomendarse a los secretarios de Legación y a los agentes consulares de la República, si lo pidiere la parte que las promueve, en cuyo caso, el exhorto legalizado por la Secretaría de Justicia se remitirá a su destino por conducto de la de Relaciones.

Artículo 137.

El tribunal o juez que recibiere un exhorto o requisitoria extendido en debida forma, acordará su cumplimiento dentro del plazo que se hubiere fijado en el mismo exhorto, o lo más pronto posible en caso diverso, devolviéndolo cumplimentado.

Artículo 138.

Si el juez exhortado o requerido, creyere que no debe cumplimentar el exhorto, por interesarse en ello su jurisdicción, o si tuviere dudas sobre este punto, oirá al Ministerio

Público y resolverá dentro de tres días, promoviendo, en su caso, la competencia, conformé a las reglas establecidas en este Código.

Artículo 139.

La resolución dictada por el juez requerido, ordenando la práctica de la diligencia, no admite más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 140.

Cuando un tribunal o juez no pudiere practicar por sí mismo, en todo o en parte; las diligencias que se le encarguen, podrá encomendar su ejecución al juez local, remitiéndole el exhorto original o su oficio con las inserciones necesarias, si aquel no pudiere mandarse.

Artículo 141. Cuando el juez no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra jurisdicción la persona o ¡os bienes que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al juez de la localidad en que éstas se encuentren, poniéndolo en conocimiento del juez exhortante.

Artículo 142.

No se notificarán, al que presente un exhorto o requisitoria, las providencias que se dicten para su cumplimiento, sino cuando se prevenga en el mismo despacho que se practique alguna diligencia con citación, intervención o concurrencia del que lo hubiere presentado. Sin embargo, el juez exhortado podrá requerirle para que suministre algunos datos o noticias que puedan facilitar el cumplimiento del exhorto.

Artículo 143.

Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto o requisitoria, se recordará por medio de oficio a instancia de la parte interesada. Si a pesar del recuerdo continuare la demora, el exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado, y dicho superior apremiará al moroso, obligándolo a la devolución del exhorto y exigiéndole la responsabilidad en que pueda haber incurrido. Del mismo medio se valdrá el que haya expedido una requisitoria, para obligar a su inferior moroso a que la devuelva cumplimentada.

Artículo 144.

Los jueces o tribunales, al dirigirse a autoridades o funcionarios que no sean judiciales, lo harán por medio de oficio.

Artículo 145.

Los edictos y convocatorias que deban publicarse en el extranjero y no ameriten práctica de diligencias judiciales, se enviarán por conducto de la Secretaría de Justicia a la de lalaciones Exteriores, y por el de ésta a la Legación o Consulados mexicanos que correspondan, para su publicación, previniendo los jueces a los interesados que ministren oportunamente en la mencionada Secretaría de Relaciones, los gastos necesarios.

CAPÍTULO XIII.

De los términos judiciales.

Artículo 146.

Los términos judiciales, incluyendo en éstos el día del vencimiento, empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación.

Artículo 147.

Cuando sean varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquel en que hayan quedado notificadas todas ellas, excepto en los casos en que la ley disponga especialmente otra cosa.

Artículo 148.

Los términos se contarán por días naturales, excluyendo los domingos y los días de fiesta nacional.

Artículo 149.

El secretario hará constar en las actuaciones, el día en que comienza a correr un término o una prórroga y el en que deba concluir. La infracción de este artículo se castigará con multa de diez pesos, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente.

Artículo 150.

Los términos sólo podrán prorrogarse en los casos determinados por la ley, siempre que se pida la prórroga antes de que expire el término ya señalado, y previa audiencia de la parte contraria.

Artículo 151.

Todos los términos y las prórrogas son comunes a ambas partes.

Artículo 152.

La prórroga no podrá exceder del término señalado por la ley.

Artículo 153.

No son prorrogables los términos:

I. Para contestar la demanda;

II. Para oponer excepciones dilatorias:

III. Para pedir revocación o reposición de las resoluciones;

IV. Para oponerse a la ejecución;

V. Para pedir aclaración de sentencia;

VI. Para interponer el recurso de apelación; y siendo denegado, los que procedan con arreglo a este Código.

VII. Para presentarse a mejorar los recursos interpuestos;

VIII. Para cualesquiera otros actos, respecto de los cuales esté prevenido que pasado el término no se admitirá en juicio la acción, excepción, recurso o derecho que estuviere concedido.

Artículo 154.

Cuando este Código no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

1º. Hasta diez días, a juicio del juez, para pruebas;

2º. Seis días para alegar y probar lachas;

3º. Cinco días para interponer el recurso de apelación;

4º. Tres días para apelar de autos y pedir aclaraciones;

5º. Tres días para la celebración de juntas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de documentos, dictamen de peritos y práctica de otras diligencias; a no ser que, por circunstancias especiales, creyere justo el juez ampliar el término, lo cual podrá hacer por tres días más;

6º. Tres días para todos los demás casos.

Artículo 155.

Transcurridos los términos y las prórrogas, sin necesidad de instancia de parte o especial declaración, seguirá el juicio su curso.

CAPÍTULO XIV.

De las diligencias preparatorias.

Artículo 156.

Antes de promoverse una demanda, y de que sea o se tenga por contestada, pueden promoverse algunas diligencias con calidad de preparatorias del juicio.

Artículo 157.

Son diligencias preparatorias las que tienen por objeto:

I. Que la persona contra quien se pretenda entablar la demanda, declare bajo protesta acerca de algún hecho relativo a su personalidad;

II. La exhibición de la cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar;

III. La exhibición de un testamento pedida por quien, fundado en él, tenga que deducir alguna acción, como heredero, legatario o con cualquier otro título;

IV. La exhibición o reconocimiento de títulos u otros documentos;

V. La declaración de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada, o que se hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones; siempre que no pueda deducirse aún la acción u oponerse la excepción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se baya cumplido;

VI. La inspección judicial en los casos en que hubiere temor de que desaparezcan las huellas materiales, objetos, situaciones de lugar, etc., a que se refiera la diligencia.

Artículo 158.

El juez o tribunal, en cada uno de los casos del artículo anterior, puede disponer lo que crea necesario para cerciorarse de que es urgente la diligencia preparatoria que se solicita.

Artículo 159.

Citándose pida la exhibición do un documento protocolizado o archivado, la diligencia se practicará, previa citación de la parte contraria, en el oficio del notario o en la oficina respectiva, sin que en ningún caso salgan de éstos los documentos originales.

Artículo 160.

Si no comparece la parte citada para la práctica de una diligencia preparatoria, se procederá en su rebeldía con audiencia del Ministerio Público.

Artículo 161.

Las declaraciones de testigos recibidas con calidad de preparatorias, se reservarán en el secreto del tribunal o juzgado, para publicarse en el término probatorio, a menos que las partes consientan en que sean publicados desde luego en cuyo caso podrá dárseles el testimonio o certificado que pidieren.

Artículo 162.

El juez decretará la exhibición de la cosa, del testamento o de los documentos, siempre que el promovente acredite el interés que tiene en ella.

Artículo 163.

Las diligencias preparatorias deberán practicarse con citación de la parte a quien puedan perjudicar en el juicio, la cual podrá usar* de los derechos que le otorga la ley,

cuando se trate de diligencias de prueba.

Artículo 164.

En caso de oposición, se comunicará ésta a la otra parle por el término de tres días; con lo que ella exponga, si e! juez lo considera necesario, se recibirá el incidente a prueba por cinco días improrrogables; concluido este término, se citará a las partes para que dentro de tres días aleguen lo que a su derecho convenga, en vista de las pruebas rendidas, y se pronunciará la sentencia dentro de otros tres días improrrogables.

Artículo 165.

Contra la resolución que conceda la diligencia preparatoria, no habrá más recurso que el de responsabilidad. Contra la que la deniegue, habrá el de apelación.

CAPÍTULO XV.

De las diligencias precautorias.

Artículo 166.

Las diligencias precautorias sólo pueden dictarse:

I. Para impedir que una persona se ausente del lugar donde ha de ser o ha sido demandada, sin dejar apoderado instruido y expensado que conteste el juicio y lo siga hasta su terminación;

II. Para impedir que un deudor elida sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra.

Artículo 167.

En el primer caso del artículo anterior si la diligencia se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición del actor para que se notifique al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar apoderado instruido y expensado.

Artículo 168.

Si se pide antes, se decretará la providencia, señalando al actor el término de tres días para presentar su demanda, y si no lo verifica, pasado el plazo, quedará sin efecto la diligencia.

Artículo 169.

Notificada la resolución, si el arraigado se ausenta sin dejar apoderado instruido y expensado, el juicio, ya esté promovido, ya deba promoverse en el término fijado en el artículo anterior, se seguirá sin necesidad de hacer emplazamientos ni notificaciones personales.

Artículo 170.

El embargo precautorio, en el caso de la fracción II del artículo 166 se pedirá expresando el valor de la demanda o la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; y el juez, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia y los bienes en que debe ejecutarse.

Artículo 171.

Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, o da fianza bastante a juicio del juez, no se llevará a cabo la diligencia precautoria o se levantará la que se hubiese dictado.

Artículo 172.

Los bienes embargados por diligencia precautoria, se depositarán en los establecimientos de crédito, en las oficinas de Hacienda, o en su defecto, en persona abonada, propuesta por el actor bajo la responsabilidad de éste y del juez.

Artículo 173.

Cuando la providencia precautoria se pida sobre bienes raíces, no se embargarán éstos, sino que se comunicará únicamente al Registro Público de la Propiedad a que aquéllos están sujetos, para que se hagan las anotaciones correspondientes, a fin de impedir que dichos bienes se vendan, enajenen o graven; pero si la providencia se ha pedido también sobre las rentas o productos de cualquier género de esos bienes y el juez encuentra que es necesario incluir en la providencia los indicados rendimientos, se ejecutará ésta en las condiciones de un secuestro o intervención, según proceda.

Artículo 174.

Sí se tratare de una negociación mercantil, industrial, agrícola o minera, se nombrará un interventor a propuesta del actor y bajo su responsabilidad.

Artículo 175.

El que pida el embargo precautorio deberá entablar la demanda dentro de los tres días siguientes al en que la diligencia quedare ejecutada, si el juicio hubiere de seguirse en el mismo lugar. Si ha de seguirse en otro lugar distinto, el juez aumentará a los tres días señalados, el tiempo que sea necesario en proporción a la distancia.

Artículo 176.

De las diligencias precautorias queda responsable el que las pida; y no podrán decretarse sin que el solicitante dé fianza para responder de los daños y perjuicios que se sigan porque no se entable la demanda dentro del término señalado en los artículos 168 y 175, porque se revoque la providencia o porque entablada la demanda sea absuelto el reo.

El Ministerio Público no estará obligado a otorgar fianza.

Artículo 177.

El que promueva la diligencia precautoria, expresará los fundamentos en que se apoye y la necesidad de la medida que solicita.

Artículo 178.

Para dictar una diligencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pida.

Artículo 179.

En la ejecución de las diligencias precautorias no se admitirá excepción alguna.

Artículo 180.

La persona contra quien se dicte una providencia precautoria puede reclamarla antes de la sentencia definitiva, a cuyo efecto se le notificará dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo.

Artículo 181.

Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando alegue que los bienes embargados o parte de ellos le corresponden en propiedad, o, por lo menos, que tiene la posesión de ellos.

Artículo 182.

Si el tercero prueba la posesión o la propiedad con instrumento público, se levantará de plano la providencia en el todo o en la parte que corresponda, quedando al que la pidió su derecho expedito para señalar otros bienes.

La resolución no afectará los derechos de posesión y de propiedad.

Artículo 183.

Reclamada la providencia, el juez citará una junta que deberá verificarse dentro de los tres días; si en ella se promoviere prueba, se recibirá ésta dentro de los diez días siguientes; dentro de los tres que sigan a la celebración de la junta o dentro de igual término después de concluido el de prueba, el juez o tribunal oirá los alegatos v fallará en la misma audiencia.

Artículo 184.

La resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo. Si el acto recurrido levanta la providencia precautoria mientras se substancia el recurso, no se ejecutará sino previa fianza otorgada ante el juez.

Artículo 185.

Cuando la diligencia precautoria se dicte por un juez que no sea o que deba conocer del negocio principal, una vez ejecutada y resuella la reclamación, se remitirán al juez competente las actuaciones, que en todo caso se unirán al expediente, para que en él obren los efectos que correspondan conforme a derecho.

Artículo 186.

Contra la Hacienda Pública en ningún caso proceden las diligencias precautorias.

Artículo 187.

El embargo precautorio procede en los casos en que no se ejerce la facultad económico-coactiva.

CAPÍTULO XVI.

De la demanda.

Artículo 188.

En el escrito de demanda se expresarán con precisión y claridad los hechos, los fundamentos de derecho, la acción que se intenta, la persona contra quien se promueva el juicio, y la petición que se deduzca de los antecedentes referidos.

Artículo 189.

El actor, al entablar la demanda, presentará:

I. El documento o documentos que acrediten su personalidad;

II Aquellos en que se funde la acción que intente, y si no los tuviere a su disposición, designará el archivo u oficina pública en que se encuentren los originales, para que a su costa se mande expedir copia de ellos. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales;

III. Copia simple de la demanda y de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores. Con estas copias se formará cuaderno separado.

Artículo 190.

No se dará curso a la demanda que no llene los requisitos establecidos en los artículos anteriores.

La resolución que se dicte en este sentido, será apelable en ambos efectos, substanciándose el recurso con sólo la audiencia del actor.

Artículo 191.

Después de contestada la demanda, el actor no puede modificarla en ningún sentido.

CAPÍTULO XVII.

Del emplazamiento.

Artículo 192.

Presentada la demanda, se correrá traslado de ella al demandado por el término de seis días, entregándosele las copias a que se refiere la fracción III del art. 189.

Artículo 193.

Si el demandado reside fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, el juez, atendidas las circunstancias, señalará el término que juzgue necesario para contestar la demanda, sin que pueda exceder de un mes. Lo mismo se liará cuando el demandado resida en el extranjero; en este caso, el término no podrá exceder de cuatro meses.

Artículo 194.

La notificación del auto que manda correr el traslado produce los efectos siguientes:

I. Prevenir el juicio en favor del juez que emplaza;

II. Interrumpir la prescripción;

III. Hacer litigiosa la cosa demandada;

IV. Sujetar al demandado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, salvo en todo caso el derecho de promover la declinatoria o inhibitoria.

CAPÍTULO XVIII.

De las excepciones.

Artículo 195.

Son excepciones dilatorias, las defensas que puede emplear el demandado para impedir el curso de la acción.

Artículo 196.

Tienen este carácter, las siguientes;

I. La incompetencia del juez;

II. La falta de personalidad del actor;

III. La falta de personalidad en el

demandado, por no tener el carácter o representación con que se le demanda;

IV. La litispendencia;

V. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la acción intentada;

VI. La obscuridad o defecto legal en la forma de proponer la demanda;

VII. La división;

VIII. La excusión:

IX. En general las que, sin atacar en su fondo la acción deducida, tiendan a impedir legalmente el procedimiento.

Artículo 197.

Las excepciones dilatorias se opondrán antes de la contestación de la demanda y se substanciarán en el mismo expediente.

El actor expondrá lo que a su derecho convenga, y el juez fallará dentro de tercero día.

Artículo 198.

Si se promoviere prueba, se concederá un plazo de ocho días para rendirla; pasado este término, se oirá a las partes dentro de tres días; y sin más citación, el juez fallará en los tres días siguientes al de la audiencia.

Artículo 199.

La incompetencia promovida por inhibitoria debe substanciarse conforme al capítulo VII de este título.

Artículo 200.

La acumulación de autos se substanciará en la forma y términos que establece el capítulo VIII.

Artículo 201.

Las excepciones perentorias tienen por objeto destruir la acción, y se opondrán precisamente en la contestación de la demanda, en la que también podrá proponerse la reconvención, si procediere conforme a la ley.

Artículo 202.

Las excepciones perentorias, aunque no se exprese su nombre, se decidirán en la sentencia definitiva.

CAPÍTULO XIX.

De la contestación de la demanda.

Artículo 203.

La contestación se ajustará, en su forma, a las reglas establecidas para la demanda.

Artículo 204.

Si el demandado no contesta dentro del término fijado, se dará por contestada la demanda en sentido negativo.

Artículo 205.

En el caso del artículo anterior y en el de que la contestación se reduzca a negar la demanda, no podrá el demandado oponer excepción de ninguna clase, a no ser superveniente; pero sí podrá utilizar, para su defensa, las constancias de autos y contradecir la existencia del derecho reclama do o la aplicación de la ley.

CAPÍTULO XX.

De las pruebas.

Artículo 206.

El actor y el reo deben probar, respectivamente, sus acciones y excepciones.

Artículo 207.

Sólo los hechos están sujetos a prueba. Cuando el derecho se funde en leyes extranjeras, deberá probarse la existencia de éstas y que son aplicables al hecho de que se trata.

Artículo 208.

El juez abrirá el juicio a prueba si lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere. Contra la resolución que dicte en este sentido, no habrá más recurso que el de responsabilidad; pero contra la que dicte,

negándose a recibir la prueba, procederá la apelación en ambos efectos.

Artículo 209.

Los tribunales recibirán todas las pruebas que se presenten, exceptuando las que fueren contra derecho o contra la moral.

Artículo 210. Los autos en que se niegue alguna providencia de prueba, son apelables en ambos efectos, si lo fuere la sentencia definitiva; aquellos en que se conceda, no tienen más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 21 1.

El que solicite pruebas notoriamente impertinentes, deberá pagar los gastos e indemnizar los perjuicios que de la presentación se sigan al colitigante, aunque en lo principal obtenga sentencia favorable.

Artículo 212.

Contestada la demanda, no se admitirán documentos para fundar acciones o excepciones, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando los documentos sean de fecha posterior a la contestación;

II. Cuando siendo de fecha anterior a la contestación o referentes a hechos anteriores a ésta, proteste el que los presente que no tenía conocimiento de ellos;

III. Los que siendo conocidos no hubieren podido adquirirse con anterioridad, siempre que se hubieren designado en la demanda;

IV. Los que tengan por objeto contradecir la compensación o reconvención.

Artículo 213.

Los jueces, magistrados y ministros asistidos de secretario, recibirán las pruebas con citación de la parte contraria.

Artículo 214.

La ley reconoce como medios de prueba:

I. La confesión;

II. Los documentos públicos y privados;

III. El dictamen pericial;

IV. La inspección ocular;

V. Los testigos;

VI. Las presunciones.

Artículo 215.

El juez en la sentencia definitiva apreciará las pruebas y hará la condenación en daños y perjuicios; si procediere.

CAPÍTULO XXI.

Del término probatorio.

Artículo 216.

El término probatorio será ordinario y extraordinario; el primero, podrá concederse hasta por sesenta días, cuando la prueba deba rendirse en et territorio nacional, y el segundo, hasta por ciento veinte días, cuando deba rendirse en el extranjero.

Dentro de esos términos, el juez señalará el tiempo que estime necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de las comunicaciones,

Artículo 217.

El tiempo señalado por el juez es prorrogable a petición de parle; pero sólo puede extenderse al máximum fijado en el artículo anterior.

Artículo 218.

Pedida la prórroga, el juez resolverá de plano concediéndola o negándola.

Artículo 219.

Contra el auto en que se conceda la prórroga no habrá más recurso que el de responsabilidad. El auto en que se niegue será apelable, si lo fuere la sentencia definitiva.

Artículo 220.

El término extraordinario deberá pedirse dentro de los ocho primeros días del ordinario; y para que pueda otorgarse se requiere:

I. Que se expresen el nombre y la residencia de los testigos que han de ser examinados, cuando la prueba sea testimonial;

II. Que se designen, en el caso de que la prueba sea instrumental, los archivos donde se hallen los documentos que deban presentarse o compulsarse;

III. Que se exhiba el billete de depósito de la cantidad que como multa fije el juez, conforme al artículo siguiente, menos cuando el Ministerio Público lo solicite.

Artículo 221.

El litigante a quien se haya concedido el término extraordinario y no rindiere la prueba que hubiese propuesto, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante, a juicio del juez, será condenado, en la sentencia definitiva, a pagar a su contrario una multa de cincuenta a quinientos pesos y a la indemnización de daños y perjuicios. En la misma pena incurrirá, si la prueba rendida se calificare de inconducente.

Artículo 222.

El término extraordinario corre con el ordinario, de modo que este se compute con aquél; pero comenzará a contarse desde el día siguiente al en que se conceda.

Artículo 223.

Concluido el término ordinario no se podrán rendir otras pruebas que aquellas para las cuales haya sido concedido el extraordinario.

Artículo 224.

Rendidas las pruebas que motivaron la concesión, el término se dará por concluido, aun cuando de hecho no hubiere expirado.

Artículo 225.

Ni en el término ordinario ni en el extraordinario podrán suspenderse sino con el común consentimiento de los interesados.

Artículo 226.

Si todos los interesados piden que el término legal se amplíe o se dé por concluido, el juez así lo decretará de plano.

Artículo 227.

Las diligencias de prueba que durante la suspensión del término se practiquen en otros juzgados, en virtud de exhorto o requisitoria, surtirán sus efectos si el juez requerido no tenía aviso de dicha suspensión.

Artículo 228.

Las pruebas que pedidas en tiempo legal no hayan podido practicarse por causas independientes de la voluntad del interesado, por caso fortuito, fuerza mayor o dolo de la parte contraria, se recibirán aun concluido el termino probatorio; pero antes de los alegatos o a la vista.

Artículo 229.

En el caso previsto en el artículo anterior, se substanciará el incidente con audiencia de las partes, que se verificará dentro de tres días, y en los tres siguientes se pronunciará la resolución.

Si se promueve prueba, se recibirá en el término improrrogable de diez días. Pasados éstos, se citará la audiencia con plazo de tres días y dentro de los tres siguientes fallará el juez.

Artículo 230.

Si se resuelve que sean admitidas las pruebas para el negocio principal, se recibirán dentro de un término que en ningún caso podrá exceder de diez días.

Artículo 231.

Cuando se observare que al examinar a un testigo, se omitió hacerle alguna de las preguntas contenidas en el interrogatorio, la parte que presentó éste tiene derecho de pedir, aunque hubiere expirado el término de prueba, que el testigo sea examinado sobre el punto omitido, incurriendo el juez por la omisión, en una multa de veinticinco a cien pesos, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar.

Artículo 232.

Los jueces y tribunales, después de la citación para resolver en lo principal o en los incidentes, podrán para mejor proveer:

I. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean necesario para esclarecer el derecho de las parles, si no hubiere inconveniente legal;

II. Decretar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que reputen necesario;

III. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el juicio, si su estado lo permite.

Al decretar y practicar las diligencias a que este articulo se refiere, los jueces y tribunales se ajustarán a las formalidades prescritas para las pruebas en este título.

CAPÍTULO XXII.

De la confesión.

Artículo 233.

La confesión puede hacerse en cualquier estado del juicio ante el juez competente. Es expresa o tácita. Expresa, la que se hace clara y distintamente; y tácita, la que se refiere de algún hecho o se presume por la ley,

Artículo 234.

La confesión sólo produce efecto en lo que perjudique al que la hace.

Artículo 235.

Contestada la demanda y hasta antes de la citación para sentencia, todo litigante está obligado a declarar, bajo protesta, sobre hechos propios, a petición de parte, sin que por esto se suspenda el curso de los autos.

Artículo 236.

Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que estuviere expresamente autorizado para absolverlas.

Artículo 237.

En el caso de cesión, si el cesionario ignora los hechos, pueden articularse las posiciones al cedente.

Artículo 238.

Si el que debe absolver las posiciones estuviere ausente, se dirigirá exhorto al juez del lugar en que resida, acompañándole cerrado y selladlo el pliego de posiciones, de las que se dejará copia autorizada en el secreto del tribunal.

Artículo 239.

El juez requerido se limitará a diligenciar el exhorto con arreglo a la ley y a devolverlo al juzgado de su origen.

Artículo 240.

El que articula las posiciones tiene derecho de asistir al interrogatorio, y hacer en el acto las nuevas preguntas que le convengan.

Artículo 241.

Las posiciones deberán articularse en términos precisos; no han de ser insidiosas; no contendrán cada una más que un solo hecho, y éste debe ser propio del que declara.

Artículo 242.

No se procederá a citar, para absolver posiciones, sino después de que se haya presentado el pliego que las contenga. Si se presentare cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la cubierta que rubricará el juez y firmará el secretario.

Artículo 243.

El que deba absolver posiciones será citado con anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, debiendo expresarse en el citatorio el objeto de la diligencia y la hora en que ha de practicarse; y no compareciendo, se le volverá a citar en la misma forma, con el apercibimiento de que si no se presenta a declarar se le tendrá por confeso.

Artículo 244.

Las posiciones se absolverán por la parte a quien se articulen, sin intervención ni consulta de otra persona, aunque tenga el carácter de mandatario o abogado. Sólo en el caso de que el absolvente no hable el idioma castellano, el juez nombrará un intérprete.

Artículo 245.

El juez abrirá el pliego de posiciones

en presencia de la parte que deba absolverlas, se impondrá de ellas y las calificará,.

Concluida esta diligencia, la misma parte firmará el pliego de posiciones. Acto continuo se procederá al interrogatorio, previa la protesta legal, asentándose literalmente las respuestas.

Artículo 246.

Sí fueren varios los que hayan de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en el mismo día, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de absolver después.

Artículo 247.

Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, pudiendo agregar el que las dé, las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida.

Artículo 248.

En el caso de que el absolvente se negare a contestar o de que sus respuestas fueren evasivas, el juez le apercibirá en el acto de tenerlo por confeso.

Artículo 249.

Si la negativa se fundare en ilegalidad de las posiciones, el juez decidirá inmediatamente. Contra esta declaración no habrá más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 250.

El absolvente firmará su declaración después de leerla; si no supiere o no quisiere hacerlo, la leerá en su presencia el secretario; y si no quisiere, ni supiere firmar, firmará el juez y el secretario, haciendo constar esta circunstancia.

Artículo 251.

Una vez firmada la declaración, no puede variarse ni en la substancia ni en la redacción.

Artículo 252.

El que deba absolver posiciones será declarado confeso:

I. Cuando sin justa causa no comparezca a la segunda citación;

II. Cuando se niegue a declarar;

III. Cuando al hacerlo, insista en no responder, afirmativa o negativamente.

Artículo 253.

En el primer caso del artículo anterior, el juez abrirá el pliego que contenga el interrogatorio de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración.

Artículo 254.

La declaración se hará a instancia de parte, desde la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia. Contra el auto que se pronuncie procederá el recurso de apelación en ambos efectos, si procediere con Ira la sentencia definitiva.

Artículo 255.

Se tendrá por confeso al articularte respecto de los hechos que afirme en las posiciones, y contra ellos no se le admitirá prueba testimonial.

Artículo 256.

La confesión se hará saber en el acto a la parte contraria, quien podrá pedirse repita para aclarar algún punto dudoso sobre el cual no se haya respondido categóricamente, o que se declare confeso al absolvente si se halla en alguno de los casos de que habla el artículo 252.

Artículo 257.

No se articularán posiciones al Ministerio Público.

CAPÍTULO XXIII.

De los documentos públicos y privados.

Artículo 258.

Son documentos públicos:

I. Los testimonios de escrituras autorizadas por los notarios, escribanos o jueces conforme a las leyes del Distrito Federal, del Estado o Territorio respectivo;

II. Los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;

III. Los libros de actas, registros, catastros y demás documentos que se hallen en los archivos públicos dependientes de la Federación, de los Estados y del Distrito o Territorios Federales;

IV. Las certificaciones de constancias existentes en los mismos archivos;

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales que se refieran a actos del estado civil, que hubiesen sido expedidas con anterioridad al establecimiento del Registro Civil;

VI. Las certificaciones a que se refiere la fracción anterior expedidas con posterioridad al establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o juez que haga sus veces;

VII. Las certificaciones de actas del estado civil dadas por los encargados del Registro, respecto de constancias existentes en los libros del mismo.

VIII. Las actuaciones judiciales.

IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por ley, y las expedidas por corredores titulados, con arreglo al Código de Comercio y con, referencia al libro de registro de sus respectivas operaciones, en los términos y con las solemnidades legales.

Artículo 259.

Los documentos de crédito de los Bancos tendrán el carácter que les atribuyan las leyes especiales de la materia.

Artículo 260.

Son documentos privados los que otorguen los particulares sin intervención de escribano ni de otro funcionario legalmente autorizado.

Artículo 261.

Las certificaciones de documentos existentes en los archivos y oficinas dé la federación, serán expedidas conforme a las leyes y reglamentos a que estén sujetos dichos archivos u oficinas.

Las copias certificadas y testimonios de constancias que obren en los tribunales federales, serán autorizadas por el secretario del juzgado o tribunal, salvo cuando la ley disponga expresamente otra cosa.

Artículo 262.

Siempre que uno de los litigantes pidiere copia de parte de un documento que exista en los archivos públicos, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento.

Artículo 263.

Los documentos existentes en un lugar distinto de aquel en que se sigue el juicio, se mandarán compulsar por medio de exhorto dirigido al juez de distrito respectivo o, en su defecto, al juez local que corresponda.

Artículo 264.

Los documentos públicos procedentes del extranjero, para hacer fe en la República, deberán ser legalizados por el Ministro o Cónsul mexicano residentes en el territorio del otorgamiento, y si no lo hubiere, por el Ministro o Cónsul de la Nación que tenga tratado de amistad con la República.

En el primer caso, la legalización de las firmas del Ministro o Cónsul se hará por el Subsecretario de Relaciones de la República.

En el segundo caso, la legalización de las firmas del Ministro o Cónsul de la nación amiga se hará por el Ministro o Cónsul respectivo, residente en la capital de la República, y la de éste por el Subsecretario de Relaciones.

Artículo 265.

Los documentos redactados en idioma extranjero, se presentarán originales, acompañados de su traducción al castellano.

Si esta no fuere objetada dentro del tercero día por el colitigante, se considerará correcta, ipso facto. Si fuere objetada, el juez someterá el caso al juicio de peritos.

Artículo 266.

Los documentos privados se presentarán originales, y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.

Artículo 267.

Si los documentos propios de algunos de los litigantes estuvieren en poder de otra persona, podrá exigirse su exhibición, compulsándose en los autos y devolviéndose los originales.

Artículo 268.

Si el documento se encuentra en libros o papeles de algún establecimiento industrial o mercantil, el que pide el documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál sea, y la compulsa se hará en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados a llevar al juzgado los libros de cuentas, ni a más que presentar las partidas o documentos designados.

Cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de comerciantes, se practicará lo que ordene el Código de Comercio.

Artículo 269.

Es aplicable a los documentos privados lo dispuesto en los artículos 262 y 264.

Artículo 270.

El documento privado que se presente por vía de prueba y no fuere objetado por la parte contraria, se tendrá por admitido y surtirá sus efectos como si hubiere sido reconocido.

Artículo 271.

Los documentos privados procedentes de uno de los litigantes que se presenten por el otro, se reconocerán por aquél para hacer fe, y al efecto se le manifestarán los originales y se le dejará ver todo el texto, no sólo la firma.

Artículo 272.

En el reconocimiento de documentos privados se observarán las reglas establecidas en este Código para las posiciones; pero no podrá promoverse sino dentro del término de prueba.

Artículo 273.

Sólo pueden reconocer un documento privado, e! que lo firma, el que lo manda extender, o el apoderado de ellos con poder o cláusula especial.

Artículo 274.

Los telegramas se tendrán como documentos públicos o privados, según que sean firmados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o por particulares.

Artículo 275.

Si la parte contra quien se produce la prueba negare la autenticidad del telegrama, se procederá a la comprobación, y al efecto, se pedirá el original a la oficina que lo transmitió, en la que quedará copia del mismo telegrama, autorizada por el jefe de dicha oficina.

CAPÍTULO XXIV.

Del dictamen pericial.

Artículo 276.

El dictamen pericial procede en los negocios relativos a una ciencia o arte.

Artículo 277.

El nombramiento de peritos corresponde a los litigantes.

Si éstos fueren más de dos, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan.

Los litigantes podrán, de común acuerdo, nombrar un solo perito.

Sí los que deben nombrar peritos no se pusieren de acuerdo, el juez designará uno de entre los propuestos por los interesados, y el que fuere designado practicará la diligencia.

Artículo 278.

Al hacerse el nombramiento de los peritos, las partes, de acuerdo, nombrarán un

tercero para el caso de discordia.

Si las partes no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez.

Artículo 279.

Los peritos serán nombrados dentro de los tres días siguientes al en que sea notificado el auto que ordene el dictamen pericial.

Artículo 280.

Si alguno de los litigantes no hiciere el nombramiento en el término señalado en el artículo anterior, lo hará el juez, y del auto correspondiente no habrá recurso.

Artículo 281.

Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el punto sobre el cual han de emitir su dictamen.

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera otras personas entendidas, aun cuando no tengan título.

Artículo 282.

Sí los peritos nombrados por las partes no aceptan el encargo en el acto de la notificación, se procederá al nombramiento de otros, dentro del término de tres días.

Si en esta vez no aceptare alguno de los peritos, el juez lo designará.

Artículo 283.

El juez señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si él debe presidirla.

En cualquiera otro caso, señalará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen.

El juez deberá presidir la diligencia cuando así lo solicite alguna de las partes y lo permita la naturaleza del reconocimiento.

Artículo 284.

El perito que dejare de concurrir sin causa justa, calificada por el juez, incurrirá en una multa de diez a cincuenta pesos y será responsable de los daños y perjuicios que por su falla se causaren.

Artículo 285.

Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir los interesados al acto y hacerles cuantas observaciones quieran; pero deberán retirarse para que los peritos discutan y deliberen solos. Los peritos estarán obligados a asentar en su dictamen las observaciones de los interesados y la solución que si les hubiere dado.

Artículo 286.

Los peritos darán inmediatamente su dictamen, siempre que lo permita la naturaleza del reconocimiento.

Artículo 287.

Los peritos que estuvieren conformes, extenderán su dictamen en una sola declaración firmada por todos.

Sí estuvieren discordes, cada uno presentará y firmará su dictamen, y el juez citará al tercero para que emita el suyo en vista de los presentados anteriormente, sin obligación de adherirse a ninguno de ellos.

Artículo 288.

El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se notifique su nombramiento a los litigantes, siempre que concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 76.

Artículo 289.

La recusación se calificará por el juez, observándose las reglas siguientes:

I. Si el perito recusado confesare la causa invocada y ésta fuere legal, el juez declarará admitida la recusación;

II. En el caso contrario y en el mismo supuesto de ser legal la causa invocada, el juez abrirá el incidente a prueba por un término que no exceda de ocho días, y fenecido éste dictará su resolución;

III. Si la parte contraria hubiere

manifestado su conformidad con la recusación, sin más trámite se dará ésta por admitida.

Artículo 290.

Contra el auto en que se admita o deseche la recusación, no procede recurso alguno.

Si la recusación fuere admitida, se nombrará nuevo perito.

Artículo 291.

Cuando el juez, para mejor proveer, nombrare algún perito, mandará en el mismo auto que se haga saber a las parles, para que puedan usar del derecho de recusación.

Artículo 292.

Los peritos se sujetarán en su dictamen a las bases que fija la ley, pudiendo, sin embargo, exponer y fundar las consideraciones que en su concepto deban modificarla en el caso de que se trate.

Artículo 293.

Si el objeto del dictamen pericial fuere fijar el valor de una finca rustica o urbana, de un crédito o en general de cualquiera cosa, los peritos tendrán en cuenta el precio de plaza y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación de ese precio.

Artículo 294.

No se repetirá el reconocimiento pericial, aunque se alegue la insuficiencia del practicado o no haya resultado mayoría en el dictamen.

Sin embargo, cuando el juez lo crea necesario, podrá acordar para mejor proveer, que se practique otro reconocimiento o se amplíe el anterior por los mismos peritos.

Artículo 295.

A instancia de cualquiera de las partes, o para mejor proveer, el juez podrá pedir informe a la academia, colegio o corporación oficial que corresponda, cuando el dictamen pericial exija operaciones o conocimientos científicos especiales.

En este caso, se unirá a los autos y producirá, sus electos el informe, aunque se expida o reciba después de transcurrido el término de prueba.

Artículo 296.

El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombre o por la que deje de nombrarlo en el caso del artículo 280, y el del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva sobre condenación en daños y perjuicios.

En el caso del artículo 291, con la misma salvedad de lo que en definitiva dispusiere la sentencia, ambas partes pagarán por mitad los honorarios del perito.

CAPÍTULO XXV.

De la inspección ocular.

Artículo 297.

La inspección ocular puede practicarse a petición de parte o por disposición del juez con citación previa y expresa.

Artículo 298.

Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.

Artículo 299.

De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran.

Artículo 300.

A juicio del juez o a petición de parte, se levantaran planos o se sacarán vistas fotográficas del lugar u objeto inspeccionado.

CAPÍTULO XXVI.

De los testigos.

Artículo 301.

Toda persona está obligada a declarar como testigo, y la que se resistiere a hacerlo, quedará sujeta a lo dispuesto en el artículo

905 del Código Penal.

Artículo 302.

No pueden ser testigos:

I. El menor de catorce años, salvo el caso de que el juez estime necesaria su declaración;

II. El que esté sujeto a interdicción;

III. El ebrio consuetudinario;

IV. El que haya sido condenado por el delito de falsedad.

V. El tahúr;

VI. El marido respecto de su mujer y la mujer respecto de su marido, y los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado, y por afinidad dentro del segundo;

VII. El que tenga interés en el juicio;

VIII. El que viva a expensas o sueldo del que lo presente;

IX. El enemigo capital;

X. El que haya sido juez en el negocio de que se trate;

XI. El abogado y el procurador en el negocio en que lo sean o lo hayan sido;

XII. El tutor y el curador por los menores y éstos por aquéllos, mientras que no fueren aprobadas las cuentas de la tutela.

Los sordomudos podrán ser admitidos como testigos. Sí saben leer y escribir, pueden dar sus declaraciones por escrito, o por medio de intérprete, en caso contrario.

Artículo 303.

Los testigos rendirán su declaración al tenor de los interrogatorios que presenten las partes.

Artículo 304.

Los jueces calificarán los interrogatorios y suprimirán las preguntas que a su juicio fueren contra derecho o contra la moral; mandarán dar copia de ellos a la otra parle, citándola, así como a los testigos, a más tardar el día anterior a aquel en que deba practicarse la diligencia.

Artículo 305.

Las partes podrán presentar interrogatorios de repreguntas antes del examen de los testigos; estos interrogatorios se presentarán en pliego abierto o cerrado y quedarán reservados en el secreto del juzgado hasta el momento en que se practique la diligencia.

También podrán presentarse interrogatorios de repreguntas durante el examen de los testigos o inmediatamente después de terminado éste, antes de firmarse la diligencia. Estos interrogatorios estarán sujetos al examen del juez, en los términos del artículo anterior.

Artículo 306.

Los interrogatorios de preguntas y repreguntas deberán estar redactados en términos claros y precisos y cada una de las preguntas y repreguntas contendrá un solo hecho.

Las repreguntas deberán concretarse al hecho o hechos contenidos en el interrogatorio y acerca de los cuales va a ser examinado el testigo; sobre las circunstancias de esos hechos o sobre las condiciones personales del testigo, conducentes a la prueba de que se trate.

Artículo 307.

A los mayores de más de sesenta años, a los enfermos y a las mujeres podrá recibírseles la declaración en sus casas.

Artículo 308.

Los altos funcionarios de la Federación, gobernadores de los Estados, diputados a las Legislaturas de los mismos, magistrados, jueces, generales con mando, jefes superiores de las oficinas federales, gobernador del Distrito y jefes políticos de los Territorios, rendirán su declaración por oficio.

Artículo 309.

Si el testigo no reside en el lugar del juicio, será examinado con arreglo al artículo 129.

Artículo 310.

Los testigos declararán con protesta de decir verdad, en la forma y bajo las penas que las leyes imponen.

No se exigirá protesta a los menores de catorce años.

El testigo responderá por sí mismo, de palabra, sin valerse de ningún borrador de respuesta.

Cuando la pregunta se refiera a cuentas, libros o papeles, podrá permitírsele que los consulte para dar la contestación.

Artículo 311.

Las partes pueden asistir al acto del interrogatorio de los testigos; pero no podrán interrumpirlos ni hacerles otras preguntas o repreguntas que las formuladas en sus respectivos interrogatorios. Sólo cuando el testigo deje de contestar algún punto o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez, para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo las declaraciones oportunas.

Artículo 312.

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el juez fijará un solo día para que se presenten los testigos que deban declarar conforme a un mismo interrogatorio, y designará el lugar en que deban permanecer hasta la conclusión de la diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 307, 308 y 309.

Si por cualquier motivo no se presentaren todos los testigos en la audiencia señalada para su examen, a petición de la parte interesada, hará el juez nuevo señalamiento del día y hora en que deban comparecer, haciéndolo saber a las partes.

Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarla al siguiente.

Artículo 313.

El juez, al examinar a los testigos, puede y debe hacerles las preguntas que estime convenientes, siempre que sean relativas a los hechos contenidos en los interrogatorios, a efecto de formar su convicción sobre que el testigo está en situación de conocer la verdad y que tiene ánimo de declararla.

Artículo 314.

Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de un intérprete, que será nombrado por el juez. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete.

Artículo 315.

Las respuestas de los testigos se asentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos dictarlas y rubricar las páginas que las contengan.

Artículo 316.

El testigo podrá leer por si mismo su declaración, y deberá firmarla, ratificando antes su contenido. Si no puede o no sabe leer o escribir, la declaración será leída por el secretario, y firmada por éste y por el juez, haciéndose constar esta circunstancia.

Una vez firmada la declaración del testigo, éste no puede cambiarla.

Artículo 317.

Los testigos están obligados a dar en cada una de sus contestaciones la razón de su dicho, y el juez deberá exigirla, aunque no se pida en el interrogatorio.

Artículo 318.

Inmediatamente después que el testigo conteste al interrogatorio de preguntas, contestará al de repreguntas.

Artículo 3 19.

Siempre se preguntará a los testigos sobre los puntos siguientes, aun cuando no se comprendan en el interrogatorio:

I. Su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio;

II. Si son parientes consanguíneos o

afines de alguno de los litigantes, y en qué grado;

III. Si tienen interés directo o indirecto en el juicio o en otro semejante;

IV. Si son amigos íntimos o enemigos de los litigantes.

Artículo 320.

Los nombres de los testigos que se presentaren, su profesión y domicilio se comunicarán en el acto a las partes, si no hubieren estado presentes al practicarse la diligencia.

Artículo 321.

Sobre los hechos que han sido objeto de un interrogatorio o los directamente contrarios, no puede presentarse otro en ninguna instancia del juicio.

Artículo 322.

Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a dar declaración, serán satisfechos por la parte que los llamare a declarar, salvo siempre lo que se decida sobre condenación en daños y perjuicios.

No habiendo avenencia entre la parte y el testigo sobre la cantidad importe de la indemnización, el juez la fijará sin ulterior recurso, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Artículo 323.

Cada uno de los litigantes puede presentar hasta diez testigos sobre un mismo hecho, salvo lo que para casos especiales disponga este Código.

Artículo 324.

La prueba testimonial no es admisible cuando el hecho que se trate de probar debe constar en escritura pública o por escrito.

CAPÍTULO XXVII.

De las presunciones.

Artículo 325.

Las presunciones son:

I. Las que establece expresamente le ley;

II. Las que se deducen inmediata y directamente de la ley;

III. Las que se deducen necesariamente de un hecho comprobado.

Artículo 326.

El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que aquella se funda.

Artículo 327.

No se admitirá prueba contra la presunción legal:

I. Cuando la ley lo prohíba expresamente;

II. Cuando el efecto de la presunción sea anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar.

Artículo 328.

Contra las demás presunciones es admisible la prueba.

CAPÍTULO XXVIII.

Del valor de las pruebas.

Artículo 329.

La confesión expresa de persona capaz de obligarse, hecha con pleno conocimiento y sin coacción, hace prueba plena.

Los hechos propios del actor, aseverados en su demanda y los propios del reo asentados en su contestación, harán prueba plena en contra de quien los aseveren, aun sin necesidad de presentar la demanda o la contestación como prueba en el término correspondiente.

Artículo 330.

Cuando la confesión expresa afecte a toda la demanda, se dará por concluida la controversia, y se procederá a la ejecución por quien corresponda; si no afecta a toda la demanda no se admitirá prueba en contrario sobre el punto confesado.

Artículo 331.

La confesión tácita produce presunción legal, pero el declarado confeso puede destruirla rindiendo prueba en contrario.

Artículo 332.

Los documentos públicos hacen prueba plena.

La parte contraria puede, en confrontación con los originales, redargüirlos de falsedad.

Artículo 333.

La confrontación de los documentos públicos se practicará por el secretario del tribunal o juzgado, en el local donde se hallen los originales, a presencia de las partes y de sus patronos si concurren, a cuyo fin se señalará el día y la hora en que haya de verificarse la diligencia.

También podrán concurrir a ella los jueces o magistrados cuando lo estimen conveniente.

Artículo 331.

Los documentos que resulten enteramente inconformes con los originales, no tendrán valor alguno probatorio. Si hubiere conformidad parcial en este punto harán prueba plena.

Artículo 335.

En el caso de que alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, se seguirá por cuerda separada el incidente, sin suspenderse los procedimientos; pero no se pronunciará sentencia definitiva en el negocio principal, sino concluido que fuere dicho incidente por resolución que cause ejecutoria.

Artículo 336.

Los documentos otorgados en el extranjero, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que concede este Código a los que se otorguen en la República, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de los principios de Derecho internacional privado, reconocido en las leyes mexicanas y en los tratados celebrados con las naciones extranjeras.

Artículo 337.

Los documentos públicos no pueden objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación, en el que se podrá hacer uso de cualquiera otro medio de prueba.

Artículo 338.

Los documentos privados harán prueba plena contra su autor, cuando no fueren objetados o quedaren legalmente reconocidos.

Artículo 339.

El reconocimiento hecho por el albacea o por el representante común, hace prueba plena contra la testamentaria y contra los representados, en su caso.

Artículo 340.

Los documentos privados cuya comprobación se obtenga por medio de testigos, tendrán el valor que merezcan las declaraciones de estos.

Artículo 341.

Ei documento que un litigante presente, prueba plenamente en su contra.

Artículo 342.

Los libros de las negociaciones mercantiles tendrán el valor probatorio que les atribuye el Código de Comercio.

Artículo 343.

El avalúo hecho por un solo perito o por dos, si éstos hubieren estado conformes, se tendrá como precio de la cosa avaluada; si hubiere diferencia menor de un cinco por ciento, se tomará el promedio de los dos avalúos; pero si la diferencia fuere mayor, se practicará por el tercero un nuevo avalúo, y el precio legítimo será el promedio dé las tres tasaciones.

Artículo 344.

El valor probatorio de los demás dictámenes periciales, será calificado por el juez, según las circunstancias.

Artículo 345.

La inspección ocular hará prueba plena cuando no exija conocimientos facultativos.

Artículo 346.

El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del juez, quien nunca considerará probados los hechos sobre los cuales ha versado, cuando no haya por lo menos dos testigos en quienes concurran las siguientes condiciones:

I. Que sean mayores de toda excepción;

II. Que convengan en lo esencial de! acto que refieren, aun cuando difieran en alguno de los accidentes;

III. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que deponen;

IV. Que den fundada razón de su dicho.

Artículo 347.

El juez, para estimar la prueba testimonial, tendrá en cuenta las circunstancias siguientes.

I Que el testigo no sea inhábil por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 302;

II. Que por su edad, su capacidad y su instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto;

III. Que por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

IV. Que el testigo conozca por sí mismo el hecho de que se trate, y no por inducciones ni referencias de otras personas.

V. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales;

VI. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

Artículo 348.

Un solo testigo hace prueba plena, cuando ambas partes personalmente y siendo mayores de edad, convengan en pasar por su dicho.

Artículo 349.

Las presunciones legales de que traía el artículo 327 hacen prueba plena.

Artículo 350.

Las demás presunciones legales hacen prueba plena, mientras no se pruebe lo contrario.

Artículo 351.

Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida Y la que se busca, apreciarán en justicia el valor de las presunciones a que se refiere la fracción III del artículo 325.

Artículo 353.

Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en la prueba de tachas y en las que se rindan sobre excepciones o cualquier otro incidente.

CAPÍTULO XXX.

De las tachas.

Artículo 354.

Durante el término probatorio o dentro de los tres días que sigan a la notificación del decreto en que se haya hecho la publicación de las pruebas, podrán las partes tachar a los testigos por causas que éstos no hayan expresado en sus declaraciones.

CAPÍTULO XXIX.

La publicación de pruebas.

Artículo 352.

Concluido el término probatorio, el secretario lo hará constar en los autos, y a petición de cualquiera de cualquiera de los

interesados se mandará hacer la publicación.

Si antes de expirar el término de prueba se hubieren ya rendido las promovidas, las partes, de común acuerdo, pueden pedir la publicación, y el juez la decretará.

El secretario hará constar el día en que se ha hecho la publicación, asentando el número de cuadernos que formen las pruebas de cada parte, con expresión de la prueba que en cada uno se contenga, y de las fojas de que se componga.

Transcurridos dichos tres días no podrá admitirse ninguna solicitud sobre tachas.

Artículo 355.

Las tachas deben exponerse con claridad y precisión.

Artículo 356.

Son tachas legales las declaradas en el artículo 302 y además que el testigo hubiese declarado por cohecho.

Artículo 357 No son tachables: el testigo que con ambas partes estuviere ligado por el mismo parentesco o desempeñare los oficios de que hablan los párrafos VIII y XII del articulo 302 y el que hubiere sido presentado por las dos partes.

Artículo 358.

El testigo será examinado, aunque adolezca de alguna tacha lega.

Artículo 359.

Para la prueba de tachas no se admitirán más de cinco testigos sobre cada hecho.

Artículo 360.

No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testigos que hayan declarado en el incidente de tachas.

Artículo 361.

En las pruebas de lachas se observarán las reglas que en las comunes. Además, a petición de parte, el testigo tachado está obligado a comparecer para contestar las nuevas preguntas que se le hagan en el punto de tachas.

Artículo 362.

La petición de tachas se hará saber desde luego a la parte contraria, ya para que use de igual derecho dentro de veinticuatro horas, ya para que asista a la protesta de los nuevos testigos, que declararán dentro del término que falte para concluir el señalado en el negocio principal, o dentro de cinco días si aquel hubiere concluido.

Artículo 363.

Si no alcanzare el término ordinario para probar las tachas, el juez concederá los días que falten para completar los cinco a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 364.

Transcurrido el término concedido para probar las tachas, las pruebas de éstas se unirán a los autos, sin necesidad de gestión de los interesados.

Artículo 365.

La petición sobre tachas suspende el término para los alegatos y vistas.

Artículo 366.

La calificación de las tachas se hará en la sentencia definitiva.

CAPÍTULO XXXI.

De los alegatos y vistas.

Artículo 367.

Los alegatos serán verbales; pero las partes podrán presentar sus apuntes manuscritos o impresos.

Artículo 368.

Al mandar hacer la publicación de pruebas, el juez señalará día para alegar, ordenando que el expediente quede a la vista de cada una de las parles por el término de seis días.

Artículo 369.

En los alegatos se observarán las reglas siguientes:

I. Alegará primero el actor y después el

demandado;

II. En los negocios en que el Ministerio Público litigue como actor o demandado, alegará en el orden que le corresponda; en los demás casos en que deba intervenir, alegará después de las partes;

III. Cada parte podrá alegar por sí misma o por medio de uno de sus abogados hasta en dos audiencias, que no excederán de dos horas cada una;

IV. Se expresarán con claridad y concisión los hechos, haciendo un breve y metódico resumen de las pruebas que, a juicio de las partes, lo justifiquen o contradigan;

V. De la misma manera podrá apreciarse la prueba de la parte contraria;

VI. Los alegatos terminarán con la indicación clara y precisa de las leyes en que se funda la acción o la excepción en su caso.

Artículo 870.

Las vistas se señalarán por orden cronológico, sin necesidad de que lo pidan las partes. Exceptuándose solamente las cuestiones de competencia, recusaciones, interdictos y demás negocios urgentes que, a juicio del tribunal, deban tener preferencia. En la Suprema Corte de Justicia toca al Presidente de la Sala señalar día para la vista.

Artículo 371.

Sólo podrá diferirle o suspenderse la vista:

I. Por falla de alguno de los ministros que forman la sala;

II. Por solicitarlo las partes de común acuerdo;

VII. Por enfermedad comprobada de alguno de los abogados informantes, siempre que no exceda de diez días.

Articuló 372.

En el caso de suspensión de la vista, se volverá a señalar el día en que deba celebrarse, tan pronto como haya desaparecido el motivo de la suspensión, sin alterar el orden de los señalamientos que ya estuvieren hechos.

Artículo 373.

Si después de la vista, pero antes de la votación, se enfermare alguno de los ministros de la sala, y faltare por más de quince días, integrada la sala se citará nueva vista.

Artículo 374.

Si visto un negocio, alguno de los ministros de la sala cesare en su encargo por cualquier motivo antes de la votación, se citará nueva vista, después de integrar la sala.

Artículo 375.

Las vistas empezarán con una relación verbal hecha por el secretario, quien leerá las constancias de autos que se consideren necesarias, así por el tribunal como por las partes, para dar idea de lo que se ventile.

Artículo 376.

En las vistas se observarán las reglas establecidas en los artículos 367 y 369.

Si las partes lo solicitaren, se señalará una nueva audiencia para la réplica y la duplica. En esta audiencia, cada parle sólo podrá hablar una hora.

Artículo 377.

Transcurrido el día señalado para los alegatos o terminada la vista, ya sea que las partes hubieren o no concurrido a la audiencia respectiva, el juez, magistrado de circuito o presidente de la sala declarará los autos vistos, no siendo ya necesario nueva y forma! citación para sentencia, la que se pronunciará en et término legal.

CAPÍTULO XXXII.

De las resoluciones judiciales.

Artículo 378.

Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, si deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria sobre procedencia de la demanda o reconvención, sobre recusación, y en general,

sobre todos los que decidan un incidente; y sentencias, si deciden el asunto principal controvertido.

Artículo 379.

Los decretos contendrán simplemente la resolución pronunciada.

Los autos se formularán haciendo una breve exposición de los hechos y resolviendo con fundamento legal el punto controvertido.

En la sentencia se expresarán: la fecha, los nombres, domicilio y profesión de las partes y el carácter con que litiguen, los nombres de sus abogados y procuradores y el objeto de la controversia.

En párrafos distintos que principiarán con la palabra «resultando,» se consignarán con claridad los hechos conducentes de la demanda y contestación, y los relativos a la reconvención, compensación y demás excepciones opuestas.

También en párrafos separados, que comenzarán con la palabra «considerando,» se apreciarán los puntos de derecho fijados por las partes, y se expondrán las razones, fundamentos legales y doctrinas que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse.

Finalmente, se pronunciará la parte resolutiva que debe ser congruente con la demanda y contestación, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

Cuando alguna de las partes hubiese sido condenada al pago de frutos, daños o perjuicios, se fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida o se establecerán, por lo menos, las bases para hacer la liquidación.

Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, se reservarán a la parte sus derechos para que los haga valer en el juicio que le corresponda.

Extendida y firmada la sentencia, se notificará por el secretario a las partes.

Artículo 380.

Los decretos deben dictarse dentro de veinticuatro horas después del último trámite, los autos dentro de cinco días, y las sentencias dentro de ocho, salvo lo que este Código dispone en casos especiales.

Cuando el juez o tribunal decrete para mejor proveer, la práctica de alguna diligencia, quedará en suspenso el término para la resolución, el que volverá a correr luego que se unan al expediente las diligencias practicadas.

Artículo 381.

Si transcurriere el término legal sin dictarse la resolución, los tribunales superiores corregirán disciplinadamente a los inferiores que hayan incurrido en esta falta, sin perjuicio de la responsabilidad que se hará efectiva, si la parte lo pidiere.

Artículo 382.

En los juzgados de distrito y tribunales de circuito, los autos y sentencias se redactarán por los respectivos jueces y magistrados, y firmados por ellos, se autorizarán por el secretario.

Artículo 383.

Para que haya sentencia o auto, se requiere en el tribunal pleno el voto de la mayoría de los ministros presentes en la votación, y en las salas el de la mayoría de los ministros que las forman.

Artículo 384.

Cuando las salas no tengan el número de ministros que les da la ley, se integrarán conforme al reglamento interior de la Suprema Corte.

Artículo 385.

La designación que se haga con arreglo al artículo anterior, se hará saber a las partes, quienes podrán ejercitar sus derechos dentro de cuarenta y ocho horas.

Artículo 386.

Recogida la votación, el tribunal pleno y las salas fijarán dentro de tres días los puntos que deba contener la sentencia.

Artículo 387. Ei ministro que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto

particular, expresando sucintamente los funda-mentos principales de él.

Este voto se agregará al expediente.

Artículo 388.

Las sentencias deben ser fundadas en ley.

Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni por el texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, se decidirá según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.

Artículo 389.

Los jueces y tribunales no pueden, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido sometidas a su conocimiento.

Artículo 390.

No podrán los jueces modificar ni variar sus sentencias después de firmadas, ni las salas colegiadas después de haberlas votado. Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio del recurso de aclaración de sentencia, pedido por las partes en los términos señalados en este Código.

Artículo 391.

Las resoluciones judiciales no se entienden consentidas, sino cuando notificada la parte, contesta expresamente de conformidad.

Si la parte responde a la notificación, que la oye, no pierde el derecho de interponer, en el término legal, los recursos que procedan.

CAPÍTULO XXXIII.

De la sentencia ejecutoriada.

Artículo 392.

La cosa juzgada, es la verdad legal.

Artículo 393.

Hay cosa juzgada, cuando la sentencia ha causado ejecutoria.

Artículo 394.

Causan ejecutoria:

I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia, cuando el interés no pase de quinientos pesos, salvo lo dispuesto en leyes especiales;

II. Las sentencias pronunciadas en segunda instancia;

III. Las de denegada apelación;

IV. Las consentidas expresamente por las partes; por sus representantes legítimos o por sus apoderados con poder o cláusula especial;

V. Las sentencias notificadas de que no se haya interpuesto recurso alguno en el término señalado por la ley, salvo lo que se dispone en el capítulo de este Código relativo a la revisión forzosa;

VI. Las sentencias de que se ha interpuesto recurso, y no se ha continuado en el término legal;

VII. Las sentencias y resoluciones que se declaren irrevocables por prevenciones de este Código, así como aquellas respecto de las cuales no se concede más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 395. La sentencia se declarará ejecutoriada, a petición de parte y con audiencia de la contraria. Los términos serán de tres días para contestar, y otros tres para la resolución.

La declaración será hecha por el juez o tribunal que hubiere pronunciado la sentencia, y no admite más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 396.

Las sentencias ejecutoriadas, en virtud de las cuales se trasmitan o modifiquen la propiedad, la posesión o el goce de bienes inmuebles o de derechos reales impuestos sobre ellos, serán inscriptas en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que los bienes estén ubicados.

CAPÍTULO XXXIV.

De la revocación.

Artículo 397.

Las sentencias no pueden revocarse por el juez o tribunal que las dicté.

Artículo 398.

Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo juez o tribunal que las haya pronunciado.

Artículo 399.

La revocación puede pedirse en el acto de notificarse la resolución o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 400.

La promoción se hará saber a las demás partes, para que dentro de tres días contesten.

Artículo 401.

Si alguno de los litigantes pide que se reciban pruebas, se abrirá para ese efecto un término que no exceda de cinco días.

Transcurrido éste, se citará, a solicitud de cualquiera de las partes, una audiencia dentro de tres días, en la que con vista de las pruebas rendidas, alegarán de su derecho.

Al terminar dicha audiencia, serán citadas las partes para la resolución respectiva que se pronunciará dentro de tres días.

Artículo 402.

Si no se hubiere abierto el término probatorio, pasados los tres días a que se refiere el artículo 400 y previa citación, se resolverá dentro de tres días.

Artículo 403.

Del auto en que se decida si se concede o no la revocación no habrá más recurso que el de responsabilidad.

CAPÍTULO XXXV.

De la aclaración.

Artículo 404.

La aclaración procede exclusivamente respecto de las sentencias. Se solicitará ante el mismo juez o tribunal que las haya dictado, y sólo puede pedirse una vez dentro del término de tres días contados desde la notificación.

Artículo 405.

En la promoción se expresará claramente la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las cláusulas o palabras cuya aclaración se solicita.

Artículo 406.

En el caso de liquidación que se refiere en el artículo 379, el que pida la aclaración, deberá exponer las bases que en su concepto hayan de fijarse para la liquidación, y acompañar los dalos que fueren conducentes al objeto.

Artículo 407.

De la promoción en que se pida la aclaración, se dará conocimiento a la otra parte para que conteste dentro de tres días.

Artículo 408.

El juez o tribunal, en vista de lo que las partes expongan y sin otro trámite, a los tres días aclarará la sentencia o decidirá no haber lugar a la aclaración solicitada.

Artículo 409.

El juez o tribunal, al aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u obscuras de la sentencia no puede variar la substancia de ésta.

Artículo 410.

La resolución que recaiga se notificará a las partes, y de ella no se admitirá recurso alguno, ni se podrá pedir nueva aclaración,

Artículo 411.

El auto que declare la sentencia se reputará parte integrante de ésta.

Artículo 412.

Siempre que los jueces y tribunales, al resolver que no ha lugar a la aclaración, juzgaren que se ha pedido maliciosamente, impondrán al que la solicitó, una multa de 10 a 100 pesos.

Artículo 413.

La solicitud de aclaración de sentencia interrumpe el término señalado para la interposición de los demás recursos legales.

CAPÍTULO XXXVI.

De la apelación.

Artículo 414.

El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la sentencia, o el auto dictado en la primera.

La apelación debe interponerse ante el juez o tribunal de primera instancia.

Artículo 415.

Todo el que haya intervenido en el juicio con el carácter de litigante, puede apelar de la sentencia o del auto en que se considere agraviado.

Artículo 416,

El procurador podrá apelar y continuar el recurso, aunque el poder no tenga cláusula especial para ello.

Artículo 417.

La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero.

Artículo 418.

La apelación admitida en ambos efectos, suspende, desde luego, la ejecución de la sentencia o del auto hasta que éstos causen ejecutoria, y, entretanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieren a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos.

Artículo 419.

La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado.

Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias, remitiéndose el expediente original al tribunal de segunda instancia.

Si se tratare de un auto, se remitirá al tribunal copia de lo que el apelante señale como conducente, agregándose las constancias que la parte contraria juzgue necesarias.

Si el apelante no se presenta a hacer el señalamiento o no ministra las estampillas para las copias de que trata el artículo anterior, dentro de veinticuatro horas de que la secretaría respectiva lo requiera, con la certificación de dicha Secretaría sobre este punto, el tribunal, a pedimento de la parte contraria decretará la deserción.

Artículo 420,

Para ejecutar la sentencia o el auto en el caso del artículo anterior, se otorgará previamente caución que podrá consistir:

I. En hipoteca sobre bienes bastantes a juicio del juez, ubicados dentro de su territorio jurisdiccional;

II En depósito de dinero efectivo, verificado en una oficina de Hacienda o en un Banco establecido legalmente;

III. En fianza, en la que deberán renunciarse los beneficios de orden y excusión.

La caución otorgada por el actor comprenderá la devolución de la cosa o cosas que deba recibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y perjuicios, si el fallo se revoca; la otorgada por el demandado comprenderá el pago de lo juzgado y sentenciado en el caso de que la resolución condene a hacer o no hacer.

El Ministerio Público no está obligado a prestar la caución a que este artículo se refiere.

Artículo 421.

Las sentencias en negocios cuyo interés exceda de quinientos pesos, son apelables en ambos efectos, salvo que este Código o alguna ley federal dispongan expresamente otra cosa.

Artículo 422.

Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. La apelación en este caso, será admisible en el efecto o efectos en que lo fuere la que proceda contra la sentencia, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa.

Artículo 423.

Son también apelables los autos 2 que determinan la forma del juicio, S cuando lo sea la sentencia definitiva en el mismo.

Artículo 424.

Si la sentencia o el auto constaren de varias proposiciones, puede consentirse respecto de unas y apelarse de ella respecto de otras. En este caso, la segunda instancia versará sólo sobre las proposiciones apeladas.

Artículo 425.

La parte que obtuvo puede adherirse a la apelación interpuesta, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación.

En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de éste.

Artículo 426.

Interpuesta la apelación en tiempo hábil, lo cual certificará el secretario, el juez la admitirá sin substanciación alguna, si procede legalmente.

Artículo 427.

Si la procedencia del recurso fuere dudosa, el juez lo hará saber a la parte contraria en el término improrrogable de tres días, y decidirá dentro de otros tres.

Artículo 428.

Admitida la apelación en ambos efectos, el juez, dentro de cuarenta y ocho horas, remitirá los autos al tribunal de apelación, emplazando antes a las partes.

Si la apelación sólo se ha admitido en el efecto devolutivo, se observará lo dispuesto en el artículo 419.

Artículo 429.

Si el tribunal de segunda instancia reside en el lugar del juicio, se fijará al apelante el término de cinco días improrrogables para que se presente a continuar el recurso.

Artículo 430.

Si el tribunal de segunda instancia reside en lugar distinto de aquel en que se pronunció la sentencia, a los cinco días señalados en el artículo anterior se agregará el término que sea necesario, atendidas las distancias y los medios de comunicación; pero en ningún caso podrá exceder de dos meses.

Artículo 431.

Cuando el Ministerio Público interpusiese la apelación, continuará el recurso el funcionario que lo representa en el tribunal de alzada.

Artículo 432.

El tribunal de segunda instancia, en virtud de la promoción del apelante, pondrá el expediente a la vista de las partes por el término común de quince días.

Artículo 433.

Si la apelación fue admitida sólo en el efecto devolutivo, y el apelante la creyere procedente en ambos, puede promover en este sentido dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que comience a correr el plazo de quince días señalado en el artículo anterior.

Si el que tuvo sentencia o auto favorable quiere impugnar la admisión del recurso, porque no lo considere procedente o porque habiéndose concedido en ambos efectos, sostenga que sólo debe admitirse en el devolutivo, podrá hacerlo dentro de las mismas cuarenta y ocho horas.

Estos incidentes se substanciarán oyendo dentro de tres días a las parles, y decidiendo el tribunal dentro de otros tres.

Artículo 434.

Si se declara inadmisible la apelación, se devolverá el expediente o el testimonio al juez inferior para que ejecute la sentencia o continúe el procedimiento, en su caso.

Declarada procedente solo en el efecto devolutivo, se remitirá al juzgado de primera instancia copia certificada de la sentencia que se ha de ejecutar, y de las demás constancias que sean necesarias, o el expediente original, si se trata de apelación de auto, quedando en este caso en el tribunal, testimonio de lo que señale el apelante como conducente, y agregándose a él, a costa de la parte contraria, las constancias que éste señale.

Artículo 435.

Cuando se declare que la apelación procede tal como fue admitida, se impondrá a la parte que promovió el incidente una multa de 25 a 100 pesos.

Artículo 436.

Resueltos los incidentes, o si no se hubiesen promovido, pasados los quince días de que habla el artículo 432, el apelante expondrá dentro de seis días, los agravios que en su concepto le cause la resolución apelada, expresando sucintamente los puntos de hecho y de derecho en que se funde cada agravio.

La sentencia de segunda instancia no tomará en consideración ningún agravio que no hay a sido expresado en la promoción.

Artículo 437.

De la promoción del apelante se dará conocimiento a la parte contraria, para que conteste dentro de seis días

Artículo 438.

Si hubiere de rendirse prueba por petición de alguna de las partes o disposición del tribunal, éste, una vez transcurridos los términos a que se refieren los artículos 436 y 437, mandará abrir el término probatorio, que no excederá de la mitad del señalado en la primera instancia.

Artículo 439.

Son admisibles en la segunda instancia todos los medios de prueba establecidos en la primera.

Artículo 440.

Si en la primera instancia se hubiere omitido interrogar a un testigo presentado legalmente, podrá ser interrogado en la segunda instancia.

Lo mismo se observará cuando en la primera instancia se haya omitido el examinar a un testigo sobre algún punto de los comprendidos en el interrogatorio, y el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo 231.

Artículo 441.

Si se opusieren tachas, se observará lo dispuesto en el capítulo XXX de este título.

Artículo 442.

Concluido el término probatorio, y en su caso, el incidente de tachas, se citará para la vista que se verificará, aunque las partes o sus abogados no concurran, dentro de diez días si la apelación fuese de sentencia, o de cinco si fuere de auto. Terminada la audiencia, el tribunal declarará los autos vistos y pronunciará la sentencia dentro de cinco días.

Artículo 443.

En cualquier estado de ¡asegunda instancia podrá separarse de la apelación el que la haya interpuesto, siendo de su cuenta el pago de daños y perjuicios que con este motivo causare a su contrario. El tribunal hará de plano la declaración.

Artículo 444.

Si la parte contraria se hubiere adherido a la apelación, y por este motivo, se opusiere a que se dé por terminada la segunda instancia, el tribunal tendrá por separado al apelante y mandará seguir la substanciación del recurso para resolver sobre los puntos pendientes.

CAPÍTULO XXXVII.

De la denegada apelación.

Artículo 445.

El recurso de denegada apelación se interpondrá dentro de tres días contados desde la notificación del auto en que se niegue el recurso de apelación.

Artículo 446.

El juez o tribunal, sin substanciación alguna, proveerá auto mandando expedir, en el término de cinco días, un certificado firmado por él y por el secretario, en el que después de darse una idea breve y clara de la materia sobre que verse el juicio, de su naturaleza y estado, y del punto sobre el que recayó la apelación, se insertarán a la letra la resolución apelada, la que la haya declarado inapelable y las constancias que las partes designen en el acto de hacérseles la notificación, o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 447.

Si residen en un mismo lugar el juez y el tribunal de segunda instancia, el interesado se presentará a éste dentro del improrrogable término de tres días, contados desde que se le entregue el certificado. Si el tribunal reside en otro lugar, el juez, además de los tres días, señalará término conforme a lo dispuesto en el artículo 430 haciéndolo constar al fin del certificado y dejando de todo, razón expresa en el expediente.

Artículo 448.

Recibido el certificado en el tribunal, se citará una audiencia con término de cinco días, para que aleguen las partes.

Artículo 449.

Transcurrido ese término, el tribunal decidirá dentro de cinco días, confirmando o revocando el auto que hubiere negado la apelación.

Artículo 450.

De esta decisión se remitirá testimonio al inferior quien, sí la apelación hubiese sido admitida en ambos efectos, debe remitir el expediente dentro de veinticuatro horas, con citación y emplazamiento de las partes.

Artículo 451.

Del recurso de denegada apelación conocerá el tribunal de circuito o sala de la Corte a quien correspondería conocer de la apelación si este recurso hubiera sido admitido.

CAPÍTULO XXXVIII.

De la revisión forzosa.

Artículo 452.

La revisión forzosa procede respecto de todas las resoluciones contrarias al interés fiscal que siendo apelables conforme a este Código, no hayan sido recurridas por el Agente del Ministerio Público dentro del término legal. En este caso, el juez, de oficio, y previa certificación del secretario, remitirá los autos al superior para su revisión, si ésta debe producir ambos efectos, o copia de lo conducente cuando la revisión sea sólo con efecto devolutivo, conforme a lo establecido para la apelación.

Artículo 453.

Los procedimientos en el caso del artículo anterior, serán los establecidos en este Código para substanciar el recurso de apelación. Llegados al tribunal los autos o la copia en su caso, de oficio se dará vista al Ministerio Público y también de oficio se decretarán los demás trámites que debiera promover el funcionario citado, cuando éste no los promueva.

Artículo 454.

El tribunal de segunda instancia pronunciará sentencia confirmando, modificando o revocando la del inferior.

Artículo 455.

También procede la revisión forzosa para la calificación del grado, cuando habiéndose negado la apelación que hubiere interpuesto el Ministerio Público, este funcionario no interponga el recurso de denegada apelación.

Artículo 456.

Cuando el tribunal de segunda instancia revoque o modifique la resolución dictada en la primera, lo pondrá en conocimiento de la Secretaría de Justicia, para que ésta, según las circunstancias, acuerde la destitución del Agente del Ministerio Público que intervino en la primera instancia o le imponga una corrección disciplinaria.

Artículo 457.

Es también forzosa la revisión de las sentencias que dicten los jueces de distrito en los juicios de amparo y se rige por lo que dispone el capítulo VI, título II de este Código.

CAPÍTULO XXXIX.

De la deserción de los recursos.

Artículo 458.

Los recursos de apelación y denegada apelación, se declararán desiertos, si el recurrente no se presentare a continuarlos en el término legal.

Artículo 459.

La declaración se hará a instancia de parte por el tribunal que deba conocer del recurso, previo informe de la secretaría, sobre la exactitud del hecho a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 460.

Al declararse desierto cualquiera de los recursos indicados, se condenará al que lo haya interpuesto, a pagar daños y perjuicios, menos cuando el recurrente fuere el Ministerio Público.

CAPÍTULO XL.

De la ejecución de sentencias.

Artículo 461.

El juez o tribunal de primera instancia es el que debe ejecutar las sentencias.

Artículo 462.

Si la sentencia se hubiere pronunciado en segunda instancia, se devolverá el expediente al inferior dentro de los tres días siguientes al en que fuere notificada, acompañándole testimonio de la sentencia para que proceda a ejecutarla.

Artículo 463.

En los negocios fiscales, si la sentencia declara que la oficina de Hacienda de que se trate ha obrado con arreglo a la ley, dicha oficina continuará sus procedimientos de apremio en el orden administrativo.

Artículo 464.

Si se tratare de sentencias contra la Hacienda pública de la Federación o de los Estados, la autoridad judicial las notificará directamente al gobierno respectivo, para que, dentro de la órbita de sus facultades, proceda a cumplirlas, sin que en ningún caso pueda librarse mandamiento de ejecución o providencia de embargo.

Artículo 465.

En las controversias que se susciten entre dos o más Estados, el tribunal ejecutor se limitará a notificar a cada uno de los Gobiernos de los Estados contendientes, la sentencia en que se declare el derecho de las partes.

Artículo 466.

En las controversias en que la Federación fuere parte y en las suscitadas entre un Estado y uno o más vecinos de otro, cuando la sentencia sea adversa a dichas entidades soberanas, regirá respectivamente lo dispuesto en los artículos anteriores, y si lo fuese a particulares, la ejecución se verificará conforme a las disposiciones siguientes:

Artículo 467.

Cuando se pida la ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba ejecutarse por haberse otorgado va la fianza correspondiente, el juez señalará al deudor el término improrrogable de tres días, para que cumpla la sentencia, si en ésta

no se hubiere fijado algún término para ese efecto.

Artículo 468.

Pasado el plazo del artículo anterior sin haberse cumplido la sentencia, se procederá al embargo.

Artículo 469.

Si los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, se hará pago al acreedor inmediatamente después del embargo.

Artículo 470.

Si los bienes embargados no estuvieren valuados anteriormente, o si su precio no constare por instrumento público o por consentimiento de los interesados, se practicará el avalúo pericial y se procederá a la venta en almoneda pública, en los términos prevenidos por éste Código.

Artículo 471.

Del precio del remate se pagará al ejecutante el importe de su crédito y se cubrirán los gastos que haya causado la ejecución

Artículo 472.

Si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días después de pronunciada la ejecutoria, no se admitirá más excepción que la de pago; si ha pasado este término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción y compensación; y transcurrido más de un año será también admisible la de novación. Todas estas excepciones deberán ser posteriores a la sentencia o transacción y constar por instrumento público, por documento reconocido o por confesión.

Artículo 473.

Dentro de los tres días siguientes al embargo, el deudor podrá oponer las excepciones acompañando el instrumento en que las funde o promoviendo la confesión o el reconocimiento.

Artículo 474.

El incidente de oposición se substanciará abriendo un término probatorio que no pase de diez días, si éste fuere necesario, oyendo a las partes dentro de tres días, contados desde que expire aquel y fallando dentro de cinco.

Artículo 475.

Sí la sentencia no expresa cantidad liquida ni se ha fijado en ella bases para la liquidación, el ejecutante, al pedir que se ejecute la sentencia, presentará su proyecto, del cual se dará vista por tres días a la parte contraria. Si ésta nada expusiere se ejecutará la sentencia en los términos indicados, por el importe de la liquidación no objetada. En caso contrario, se substanciará el incidente como está prevenido en el artículo anterior.

Artículo 476.

Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado, un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho.

Artículo 477.

Si pasado el plazo, el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes:

I. Si el hecho fuese personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le fijará un nuevo plazo para que lo ejecute, conminándolo con una multa que no excederá de 200 pesos, a juicio del juez. Si a pesar de esto no lo ejecutare, se hará efectiva la multa y se le condenará al pago de daños y perjuicios;

II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado, en el término que le fije;

III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de alguna escritura u otro instrumento, lo ejecutará el juez, expresándose en el instrumento que se otorga por falla del obligado.

Artículo 478.

Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en el pago de daños y perjuicios.

Artículo 479.

Cuando el juez lo considere necesario, ocurrirá al Ejecutivo de la Unión, para que facilite los auxilios correspondientes, a fin de que se lleve a efecto la ejecución.

Artículo 480.

Cuando la sentencia deba ejecutarse en un lugar distinto del de la residencia del juez o tribunal que la hubiere dictado en primera instancia, la ejecución se verificará por el juez de distrito correspondiente, en virtud de exhorto o requisitoria.

Artículo 481.

Si la sentencia hubiere de ejecutarse en un lugar distinto del de la residencia del juez de distrito requerido, éste encargará la ejecución al juez del orden común correspondiente.

Artículo 482.

El juez requerido no podrá admitir excepción alguna de las partes que litigan ante el juez requirente.

Artículo483.

Los jueces requeridos no ejecutarán las sentencias que no versen sobre cantidad liquida o cosa individualmente determinada.

Artículo 484.

Cuando un tercero que no hubiere sido oído por el juez de los autos, poseyera en nombre propio y con título traslativo de dominio la cosa en que deba ejecutarse la sentencia, no se llevará adelante la ejecución, y si ésta se hubiere pedido por exhorto será éste devuelto con inserción dé la resolución dictada y de las constancias en que se haya fundado.

Artículo 485.

Todo lo que en este capítulo se dispone sobre ejecución de sentencias es aplicable a la ejecución de los autos y transacciones judiciales.

Artículo 486.

En los casos, en que deban ejecutarse por los tribunales federales las sentencias dictadas en país extranjero, el juez o tribunal requerido resolverá previamente, si la sentencia es o no contraria a las leyes de la República, a los tratados o a los principios de derecho internacional. En caso afirmativo, se devolverá el exhorto con expresión de los motivos que impiden la ejecución de la sentencia.

CAPÍTULO XLI.

Del secuestro judicial.

Artículo 487.

El secuestro judicial consiste en el aseguramiento de bienes bastantes para garantizar los derechos deducidos o que deban deducirse en juicio.

Artículo 488.

El secuestro judicial procede en las providencias precautorias, en los juicios ejecutivos o hipotecarios, cuando así lo dispongan las leyes y en la ejecución de sentencias, autos o transacciones judiciales.

Artículo 489.

Decretado el mandamiento de ejecución, el secretario del juzgado o tribunal requerirá de pago al deudor, y no verificándolo éste en el acto, se procederá al secuestro de bienes suficientes para cubrir el importe íntegro de la demanda, transacción, auto o sentencia judicial. Ei actor podrá asistir a la práctica de la diligencia.

Artículo 490.

Si el deudor no estuviere en el lugar del juicio o no tuviere domicilio fijo, el secretario ejecutor le hará el requerimiento por medio de edictos publicados en la puerta del juzgado en un periódico, si lo hubiere en la localidad, prefiriéndose siempre al oficial, para que en el término de ocho días contados desde la publicación del edicto, cumpla el mandamiento. Transcurrido este término sin que se presente el deudor, se procederá a practicar la diligencia de embargo con la persona que se encuentre en la localidad designada al efecto, y a falta de ésta, con el actor solamente, quien hará la designación

de bienes.

Artículo 491.

Cuando en virtud de requerimiento el deudor cumpla en su totalidad, se dará por terminada la diligencia, asentándose la constancia respectiva.

Artículo 492.

Si el deudor manifiesta que consigna la cosa o cantidad reclamada sólo por evitarse las molestias del embargo, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución, se suspenderá el acto y la cosa o cantidad consignada se depositará de la manera que establece este capítulo.

Artículo 493.

Cuando el mandamiento no se haya cumplido o lo sea sólo en parte, el secretario prevendrá al ejecutado que designe bienes bastantes en que trabar ejecución, sujetándose al orden siguiente:

I. Bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame;

II. Dinero;

III. Alhajas;

IV. Créditos realizables en el acto.

V. Frutos y rentas de la especie;

VI. Bienes muebles;

VII. Bienes inmuebles;

VIII. Créditos o derechos no realizables en el acto;

Artículo 494.

Si el ejecutado o la persona con la que se entienda la diligencia, rehusaren hacer el señalamiento de bienes, o al hacerlo, invirtiese el orden que establece el artículo anterior, el ejecutante podrá hacer la designación, sujetándose a ese mismo orden.

Artículo 495.

Si al practicarse el señalamiento hubiere controversia sobre si son suficientes los bienes señalados, el secretario ejecutor la resolverá de plano oyendo el dictamen de un perito nombrado por él, si lo estimare necesario. La resolución que el ejecutor dicte en este caso, podrá ser confirmada o revocada por el juez de los autos, a solicitud de parte.

Artículo 496.

Cuando al estarse verificando el señalamiento de bienes, rehusare el ejecutado abrir los muebles en que el ejecutante manifieste que hay valores, el secretario ejecutor dispondrá que se proceda a fracturar las cerraduras.

Artículo 497.

Si en la diligencia de embargo de una finca arrendada, el arrendatario manifestare haber hecho alguna anticipación de rentas, deberá justificarlo en el acto con los recibos del arrendador.

Artículo 498.

Cuando los bienes designados para la traba de ejecución estuviesen ya embargados por tribunales del orden común, la diligencia se llevará adelante, y la autoridad federal ejecutora se avocará el conocimiento del negocio, a fin de decidir el incidente de preferencia con audiencia de las partes y en su caso, continuará los procedimientos de apremio, sin resolver ni comprometer las cuestiones de la competencia de la autoridad común.

Artículo 499.

Si se declararen preferentes los derechos ejercitados ante la autoridad común, la diligencia de ejecución se limitará al re embargo, el cual se hará saber al juez que secuestró los bienes para que hecho el pago se disponga del sobrante.

Artículo 500.

Si el embargo a que se refiere el artículo 498 hubiere sido decretado por otro juez federal, se re embargarán los bienes; dándole a dicho juez el aviso correspondiente.

Artículo 501.

El acreedor puede pedir la ampliación del embargo:

I. Cuando a juicio del juez no basten los bienes embargados para cubrir la deuda y los gastos, y cuando transcurran dos meses sin obtener su venta;

II. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y después aparezcan o se adquieran;

III. En los casos de tercería.

Artículo 502.

Quedan únicamente exceptuados de embargo:

I. Las rentas y demás bienes de la Federación y de los Estados, conforme a lo dispuesto en el artículo 464;

II. El lecho cuotidiano y los vestidos, muebles comunes y de uso indispensable del deudor, de su mujer y de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez.

III. Los instrumentos y útiles necesarios para la profesión, arte u oficio a que el deudor esté dedicado;

IV. Los animales propios para la labranza, sólo en cuanto sean necesarios para el servicio de la finca a que están destinados;

V. Los libros de las personas que ejerzan profesiones literarias, en cuanto fueren necesarios para el ejercicio de ellas, a juicio del juez;

VI. Las armas y caballos de los militares en actual servicio;

VII. Los efectos propios para el fomento de negociaciones industriales o mercantiles, en cuanto fueren necesarias para su servicio, movimiento o comercio, a juicio del juez; a cuyo efecto éste oirá el informe de un perito nombrado por él; pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a que están destinados;

VIII. Los granos mientras no hayan sido cosechados;

IX. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

X. Los derechos de uso y habitación;

XI. Las servidumbres, a no ser que se embargue el predio dominante; pero en la de aguas, pueden éstas ser embargadas cuando ya estén en ese predio;

XII. Los sueldos de los funcionarios y empleados públicos, sean civiles o militares, y las asignaciones de los pensionistas del Erario Federal;

XIII. Las pensiones de alimentos y la renta vitalicia, si el que la constituyó, a título gratuito, dispuso al tiempo de otorgarla que no estaría sujeta a embargo por derecho de un tercero, o cuando se haya constituido para alimentos, en cuyo caso sólo podrá ser embargada la parte que a juicio del juez exceda de la cantidad necesaria para cubrirlos, según las circunstancias de la persona.

Artículo 503.

Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a notificar al deudor o a quien deba pagarlos, que no verifique el pago, sino que retenga la cantidad o cantidades correspondientes a disposición del juzgado, apercibido de doble pago en caso de desobediencia. Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, quien tendrá obligación de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el titulo represente, y de intentar todas las acciones y recursos que la ley conceda para hacer efectivo el crédito.

Artículo 504.

Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la providencia de secuestro se notificará al juez de los autos respectivos, dándole a conocer al depositario nombrado, a fin de que éste pueda, sin obstáculo alguno, desempeñar las obligaciones que le impone su cargo.

Artículo 505.

Cuando por vía de secuestro se aseguren dinero efectivo o alhajas, el depósito se hará precisamente en un Banco autorizado legalmente al efecto, o si no lo hubiere, en persona abonada propuesta por el ejecutante y aprobada por el juez, o

nombrada sólo por éste, si aquel no lo propusiere. El documento que acredite el depósito se agregará a las actuaciones y no se recogerá lo depositado, sino en virtud de orden escrita del juez de los autos.

Artículo 506.

El depositario de bienes muebles secuestrados que no sean dinero, alhajas ni créditos, sólo tendrá la obligación de conservarlos en su poder a disposición del juez respectivo, a quien dará conocimiento del lugar en que quede constituido el depósito.

Si no pudiere el depositario hacer los gastos que dicho depósito demande, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juez, para que éste los autorice, oyendo a las partes en una junta que se celebrará dentro de tres días.

Artículo 507.

Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, el depositario tendrá además obligación de imponerse del precio que en la plaza tengan los efectos confiados a su guarda, a fin de que si encuentra ocasión favorable para la venia, lo ponga desde luego en conocimiento del juzgado, con el objeto de que éste determine lo que fuere conveniente, oyendo a las partes en una junta que se verificará a más tardar dentro de tres días.

Artículo 508.

Si los muebles depositados pudieren deteriorarse o demeritarse, el depositario deberá examinar frecuentemente su estado, y poner en conocimiento del juez el demérito que en ellos observe o tema fundadamente que sobrevenga, a fin de que aquel, oyendo a las partes, como se dispone en el artículo anterior, dicte el remedio oportuno para evitar el mal o acuerde su venta con las mejores condiciones, en vista de los precios de plaza y del demérito que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir los objetos secuestrados.

Artículo 509.

Cuando el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas, o sobre éstas solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador, con las facultades y obligaciones siguientes:

I. Podrá arrendar bajo la condición de que las rentas no sean menores de las que, al tiempo de verificarse el secuestro, rindiere la finca o departamento de ésta que estuviere arrendado; exigiendo para asegurar el contrato, las garantías usuales, bajo su responsabilidad. Si no quisiere aceptar ésta o fuere necesario arrendar en precio menor, recabará la autorización judicial;

II. Cobrará los arrendamientos, procediendo en su caso contra los inquilinos morosos, con arreglo a la ley;

III. Hará los gastos ordinarios, como el pago de contribuciones, los de mera conservación, servicio y aseo, incluyéndolos en la cuenta mensual;

IV. Presentará a la oficina de contribuciones, en tiempo oportuno, las manifestaciones que las leyes de la materia prevengan, y de no hacerlo así, serán de su responsabilidad los daños y perjuicios que su omisión origine;

V. Para hacer los gastos de reparación o construcción ocurrirá al juez, solicitando licencia y acompañando al efecto los presupuestos;

VI. Pagará, previa autorización judicial, los réditos de los censos impuestos sobre la misma finca.

Artículo 510.

Pedida la autorización a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juez citará una audiencia que se verificará dentro de tres días, para que las partes, en vista de los documentos que se acompañen, resuelvan de común acuerdo si se autorizar o no el gasto. No lográndose el acuerdo, a petición del depositario o de alguna de las partes, se substanciará el incidente respectivo.

Artículo 511.

Si el secuestro se verifica en finca rústica o en una negociación mercantil o industrial, el depositario será mero interventor, teniendo a su cargo la caja; inspec-

cionará el manejo de la negociación o finca rústica en su caso, y en las operaciones que en ella respectivamente se verifiquen, y vigilará la realización de frutos o recaudación de productos, ministrando los fondos para los gastos necesarios.

Artículo 512.

Si en el cumplimiento de los deberes que el artículo anterior impone al interventor, éste encontrare que la administración no se hace convenientemente, o puede perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del juez, para que, oyendo a las partes y al interventor, resuelva lo que corresponda.

Artículo 513.

Todo depositario deberá tener bienes raíces bastantes, a juicio del juez, ubicados dentro del territorio jurisdiccional de éste, para responder del secuestro, o en su defecto otorgar fianza apud acta, por la cantidad que se designe. Los que tengan ad-ministración o intervención presentarán al juzgado cada mes, una cuenta de los esquilmos y demás frutos de finca, y de los gastos erogados, no obstante cualquier recurso interpuesto en lo principal.

Artículo 514.

El juez, con audiencia de las partes, aprobará o reprobará la cuenta mensual y determinará los fondos que deben quedar para los gastos que sean necesarios, mandando depositar el sobrante líquido. Los incidentes relativos al depósito y a las cuentas seguirán por cuerda separada.

Artículo 515.

El depositario que no rinda la cuenta mensual o cuya cuenta no fuere aprobada, será removido de plano de la administración. Si el removido fuere el deudor, el ejecutante nombrará nuevo depositario; si lo fuere el acreedor, o la persona por él nombrada, la nueva elección se hará por el juez.

Artículo 516.

El actor y el depositario nombrado por él, son responsables solidariamente de los bienes.

El juez será responsable cuando hubiere nombrado o aprobado como depositario a persona sin las condiciones exigidas por la ley.

Artículo 517.

El depositario tendrá el derecho de percibir los honorarios que fije el arancel.

Artículo 518.

Los interventores tendrán el honorario que de común acuerdo les señalen las partes; si no se obtuviere este acuerdo, el juez, con audiencia de ellas, señalará el que deban percibir según las circunstancias, que no podrá ser menos del dos ni más del ocho por ciento del monto de los productos que se recauden.

CAPÍTULO XLII.

De los remates.

Artículo 519.

Los remates serán públicos y deberán celebrarse en el juzgado o tribunal en que actúe el juez que fuere competente para la ejecución.

Artículo 520.

Los bienes embargados que no estuvieren valuados anteriormente, o cuyo precio no conste por instrumento público o por consentimiento de los interesados, se valuarán por peritos en los términos prevenidos por este Código.

Artículo 521.

Si los bienes valuados fueren raíces, se anunciará su venta por tres veces, de siete en siete días, publicándose edictos en el periódico oficial y en algún otro del lugar en que aquella deba verificarse.

Artículo 522.

Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares, en todos ellos se publicarán los edictos, y si en alguno no hubiere periódico, se fijará dicho edicto en la puerta del juzgado. En el caso a que se refiere este artículo, se concederá un día más por

cada cuarenta kilómetros o por una fracción que exceda de veinte, y se calculará para designar el aumento, la mayor distancia a que se hallen los bienes.

Artículo 523.

No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido al Registro Público certificado de los gravámenes, y sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan de dicho certificado. Este comprenderá los últimos veinte años; pero si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquel hasta la en que se decretó la venta.

Artículo 524.

Los acreedores citados conforme al artículo anterior, tendrán derecho:

I. Pava intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos;

II. . Para apelar del auto de aprobación del remate.

Artículo 525.

Durante el remate se pondrán de manifieste los planos que hubiere y estarán a la vista los avalúos.

Artículo 526.

El remate de bienes muebles se pregonará tres veces, de tres en tres días, por medio de edictos que se lijarán en la puerta del juzgado. Si los bienes que deben rematarse fueren caldos, semillas u otros semejantes, se pondrán de manifiesto las muestras, y si fueren de otra naturaleza, estarán a la vista de los postores.

Artículo 527.

Antes de comenzar el remate puede el deudor librar sus bienes, pagando íntegramente el monto de su responsabilidad.

Artículo 528.

Los postores para hacer sus propuestas podrán pedir los datos que obren en el expediente.

Artículo 529.

En el día, hora, lugar y sitio señalados en los edictos, el juez pasará lista de los postores presentados y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. Transcurrida la media hora, declarará el juez que va a verificarse el remate y procederá en seguida a la revisión de las propuestas, desechando desde luego las que no contengan postura legal y las que no estuvieren abonadas.

Artículo 530.

Es postura legal, en remate de bienes raíces, la que cubre las dos terceras partes del precio, y en el de bienes muebles, la que cubre la mitad del precio.

Artículo 531.

Solo cuando se trate de bienes raíces y la postura exceda de la totalidad del adeudo, podrá quedarse a reconocer el exceso con hipoteca de los bienes rematados, por un término que no exceda de cinco años, y con el 6 por 100 de interés anual.

Artículo 532.

Las posturas se presentarán con un papel de abono. El que firma el papel de abono se constituye garante de las posturas, pujas y mejoras que haga su fiado, y aun cuando no lo exprese, se entiende que renuncia los beneficios de orden y excusión, y el de división en su caso. El papel de abono se firmará ante un corredor titulado, y a falta de éste, ante dos comerciantes caracterizados de la localidad, quienes declararán conocer al abonador y que éste tiene los bienes necesarios para cubrir su responsabilidad.

Artículo 533.

Las posturas en remate de bienes raíces deben contener;

I. El nombre, edad, capacidad legal, estado, profesión y domicilio del postor;

II. Las mismas circunstancias respecto del abonador;

III. La cantidad que se ofrezca por la finca;

IV. La que se dé al contado, y los términos en que el resto haya de pagarse;

V. El interés que deba causar la suma que se quede reconociendo;

Vi. La sumisión expresa al juez que conozca del negocio, para que haga cumplir el contrato.

En remate de bienes muebles, se admitirán las propuestas, si el que las hace exhibe en el acto su importe en numerario.

Artículo 534.

El postor no puede rematar para un tercero, sino con poder. Queda prohibido hacer postura reservándose la facultad de declarar después el nombre de la persona para quien se hizo.

Artículo 535.

No pueden adquirir en el remate, por si ni por medio de tercera persona, el juez, el secretario, el ejecutado y sus procuradores, albaceas, administradores, tutores, curadores y los ahogados de ambas partes. Tampoco pueden hacerlo, el fiador del ejecutado ni el que el ejecutante haya dado, cuando la sentencia deba llevarse a cabo pendiente la apelación, ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate.

Artículo 536.

Calificadas de buenas las posturas, el juez mandará que les dé lectura el secretario, declarará cuál es la mejor, y concederá diez minutos para las pujas, que se harán de palabra o por escrito.

Artículo 537.

Si no se mejora la postura, el juez declarará fincado el remate a favor del lidiador que la hizo.

Si se mejora, el juez procederá como se previene en el artículo anterior, y concederá un segundo término de diez minutos para nuevas pujas sobre la postura declarada mejor.

Artículo 538.

Sí se presentaren posturas durante ese segundo término, se concederá un tercero, transcurrido el cual y leídas las nuevas posturas, el juez resolverá definitivamente cuál es la mejor, declarando fincado el remate a favor del licitador que la hubiere hecho.

Artículo 539.

El juez decidirá de plano cualquiera cuestión que se suscite relativa al remate, sin más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 540.

El auto en que se declare fincado el remate, es apelable en ambos efectos, siempre que el interés que represente la postura legal exceda de quinientos pesos.

Artículo 541.

Ejecutoriado el auto de aprobación, si los bienes rematados fueren muebles, se entregarán al comprador luego que exhiba el precio; si fueren raíces, se le otorgará la escritura de venta correspondiente, conforma a los términos de su postura, previa exhibición del precio, con arreglo a ésta.

Artículo 542.

Si el deudor se niega a extender la escritura, la otorgará el juez; pero en todo caso de evicción y saneamiento, responde el demandado.

Artículo 543.

Otorgada la escritura y consignado el precio, pondrá el juez al comprador en posesión cuando lo pidiere, y se le dará con citación de los colindantes, arrendatarios y demás interesados.

Artículo 544.

Con el precio del remate se pagará al acreedor. Si el precio fuere inferior a la totalidad del adeudo, se entregará el mismo día en que se verifique su consignación; si excediere, se entregará al deudor el exceso, siempre que éste no se hallare retenido judicialmente por un tercero.

Artículo 545.

Cuando en la primera almoneda no hubiere postura legal y se tratare de bienes raíces, se citará la segunda con término improrrogable de siete días, y en ella se tendrá por precio el primitivo, con deducción de un diez por ciento..

Artículo 546,

Si en la segunda almoneda no hubiere postor, se citarán con el mismo término la tercera y las demás que fuesen necesarias, hasta realizar el remate, En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base.

Artículo 547.

En cualquier almoneda, si no hubiere postor, el acreedor tiene derecho de pedir la adjudicación por las dos tercias partes del precio que en ella haya servido de base para el remate.

Artículo 548.

El acreedor que se adjudique la cosa, reconocerá los créditos hipotecarios para pagarlos al vencimiento de sus escrituras, y entregará al deudor, al contado, lo que resulte libre del precio después de hecho el pago.

En caso de que el precio no baste para pagar en su oportunidad a todos los acreedores hipotecarios, se mandarán cancelar las hipotecas o la parle de ellas que no quepan en el precio.

Artículo 549.

Si en el contrato se ha fijado el precio en que una finca hipotecada haya de adjudicarse al acreedor, sin haberse renunciado la subasta, el remate se hará en una almoneda, teniéndose como-postura legal la que exceda del precio señalado para la adjudicación y cubra con el contado el crédito. Si no hubiere postura legal, se llevará desde luego a efecto la adjudicación en el precio convenido.

Artículo 550.

Si en el contrato se ha fijado preció a la finca hipotecada, sin convenio expreso sobre la adjudicación al acreedor, no se hará nuevo avalúo, y el precio señalado será el que sirva de base para el remate.

Artículo 551.

Si en la almoneda de bienes muebles no hubiere postura por la mitad del avalúo, el ejecutante podrá pedir la adjudicación por esa mitad de los que exija y basten a cubrir el crédito. Si los referidos bienes son de tal naturaleza que la adjudicación no pueda hacerse sino de todos, el actor podrá pedirla; pero cubierto su crédito, deberá entregar el resto del precio de la adjudicación.

Artículo 552.

Cuantió el actor no estuviere conforme con la adjudicación de los bienes muebles o no hubiere postores en la primera almoneda, se procederá a rematarlos con las reducciones determinadas para los bienes raíces.

Artículo 553.

Si se presentaren varias posturas, será preferiría la que importe mayor cantidad, y si hubiere dos o más iguales, la suerte decidirá cuál sea la que haya de aceptarse. En este caso, el juez verificará el sorteo en el acto, a presencia de los postores que hayan hecho iguales posturas.

CAPÍTULO XLIII.

De los incidentes.

Artículo 554.

Los incidentes que pongan obstáculo a la demanda principal se substanciarán en el expediente, quedando entre tanto en suspenso aquella.

Los que no pongan obstáculo a la prosecución del juicio, se substanciarán por pieza separada.

Artículo 555.

Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial se sujetarán a las reglas siguientes.

Artículo 556.

Promovido el incidente, el juez dentro de veinticuatro horas mandará dar traslado a la parte contraria para que conteste en el término de tres días.

Si se promoviere prueba, el juez señalará un término que no pase de diez días.

Hendidas las pruebas, el juez citará a las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga.

La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia, que pronunciará el juez dentro de cinco días, concurran o no las partes a la audiencia.

Artículo 557.

Si ninguna de las partes hubiere pedido prueba, se procederá como previene el artículo anterior en su último inciso.

Artículo 558.

Los autos que deciden los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia.

Artículo 559.

Las cuestiones promovidas o seguidas ante una autoridad que no sea judicial, no preocupan el carácter de fas partes que intervienen en las controversias judiciales a que aquellas dieren lugar.

CAPÍTULO XLIV.

De las tercerías.

Artículo 560.

Toda tercería deberá oponerse ante el mismo juez que conoce del juicio principal!, y en los términos prevenidos para entablar una demanda.

Artículo 561.

Las tercenas coadyuvantes pueden proponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite, y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal que aun no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria.

Artículo 562.

Las tercerías coadyuvantes no producen otro efecto que el de asociar a quienes las interpongan a la parte a cuyo derecho coadyuvan, a fin de que el juicio continúe según el estado en que se encuentre, y se substancie, en las ulteriores diligencias, con el tercero y el litigante asociado.

Artículo 563.

La acción que deduce el tercero coadyuvante deberá decidirse con la principal en una misma sentencia.

Artículo 564.

Las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo negocio, cualquiera que sea su estado, con tal de que, si son de dominio, no se haya dado posesión de los bienes al rematante o al actor en su caso, por vía de adjudicación; y si son de preferencia no se haya hecho pago al actor.

Artículo 565.

Las tercerías excluyentes se substanciarán en pieza separada, con los mismos trámites y procedimientos del juicio en que se hubieren interpuesto. La demanda de tercería se contestará por el actor y el demandado en el plazo legal. Se tendrá por contestada la demanda, en sentido negativo respecto de la parte que no evacué el traslado.

Artículo 566.

Las tercerías excluyentes de dominio deben fundarse en el título que lo acredite y que se presentará desde la primera promoción.

Artículo 567.

Si el ejecutado estuviere conforme con la reclamación del tercer opositor, sólo se seguirá el juicio entre éste y el ejecutante.

Artículo 568.

Presentándose tres o más opositores, si estuvieren conformes, se seguirá un solo juicio, graduando en una sola sentencia sus créditos; pero si no lo estuvieren, se seguirá

el juicio que corresponda.

Artículo 569.

Si la tercería fuese de dominio, el juicio principal en que se interponga seguirá sus trámites hasta antes del remate, y desde entonces se suspenderán los procedimientos hasta que se decida la tercería.

Artículo. 570.

Siendo la tercería de preferencia, seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entretanto se decida ésta, se depositará el precio de la venta.

Artículo 571.

Cuando sólo alguno de los bienes ejecutados fuere objeto de la tercería, los procedimientos del juicio principal continuarán hasta vender y hacer pago al acreedor, con los bienes no comprendidos en la misma tercería.

Artículo 572.

Los impedimentos del juez en una tercería, lo inhiben del conocimiento del juicio principal.

CAPÍTULO XLV.

De los honorarios y gastos judiciales.

Artículo 573.

Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y honorarios que exijan las diligencias que promueva.

Artículo 574.

Cuando un litigante proceda con temeridad o mala fe, será condenado a indemnizar a su contrario de los gastos y honorarios que éste justifique haber erogado.

Artículo 575.

El juez o tribunal declarará que ha incurrido en temeridad o mala fe:

I. El que presentare instrumentos falsos;

II. El que presentare testigos falsos o sobornados;

III. El que fuere condenado en dos instancias por sentencias conformes de toda conformidad. En el caso de esta fracción, la declaración de temeridad se expenderá a ambas instancias;

IV. El que en juicio ejecutivo no obtenga sentencia favorable;

V. El actor que no rinda prueba para justificar su acción, si se funda en hechos;

VI. El demandado que no rinda prueba para justificar sus excepciones en los términos de la fracción anterior.

Artículo 576.

Los honorarios de los abogados, apoderados, depositarios, peritos y demás personas que intervengan en el juicio, se regularán conforme al arancel. Los gastos se liquidarán según las constancias del expediente.

Artículo 577.

Presentada la regulación, se dará vista de ella por tres días a la parte condenada, para que exprese su conformidad o inconformidad.

Artículo 578.

Si nada expusiere la parte condenada dentro del término fijado, se decretará el pago. Si en el término referido expresare no estar conforme, se dará vista de las razones que alegue a la otra parte que presentó la regulación, la que dentro de igual término contestará las observaciones hechas.

Artículo 579.

En vista de lo que las partes hubieren expuesto, el juez o tribunal fallará dentro de tercero día. De ésta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importare la total regulación.

Artículo 580.

Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera otros funcionarios, no sujetos a arancel, fueren impugnados, se oirá a otros dos individuos de su profesión.

Artículo 581.

Los derechos de contador sólo podrán cobrarse por las personas que, en virtud del nombramiento expreso del juez o de los interesados, hayan servido el cargo.

Artículo 582.

Nunca se condenará al Ministerio Público al pago de gastos y honorarios ni se hará igual condenación en su favor.

CAPÍTULO XLVI.

De las correcciones disciplinarias.

Artículo 583.

Los jueces y tribunales tienen la obligación de exigir que se les guarde el respeto debido, corrigiendo las faltas qué cometieren los litigantes o sus abogados.

También deberán imponer correcciones disciplinarias a los secretarios y dependientes de los mismos tribunales y juzgados, por las faltas que cometan en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 584.

Son correcciones disciplinarias:

I. El apercibimiento;

II. La multa de diez a doscientos pesos;

III. La suspensión hasta por un mes;

Artículo 585.

Las correcciones disciplinarias podrán imponerse de plano en el acto de cometerse la falta, o después, en vista de lo consignado en el expediente o en la certificación que, respecto de ella, hubiere extendido el secretario, de orden del juez o tribunal.

Artículo 586.

Contra cualquiera providencia en que se impusiere alguna corrección se oirá al interesado, si lo solicitare, dentro de los tres días siguientes al en que haya sido notificado, y sin más trámite resolverá el juzgado o tribunal, si subsiste o no la corrección.

Artículo 587.

Si las faltas llegaren a constituir un delito, se procederá contra el que lo cometiere, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal.

CAPÍTULO XLVII.

De los medios de apremio.

Artículo 588.

Los jueces o tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualesquiera de los medios siguientes de apremio:

I. La multa desde cinco hasta cien pesos, que se duplicará en caso de reincidencia;

II. El auxilio de la fuerza pública;

III. El cateo por orden escrita;

IV. El arresto hasta por quince días. Si el caso exige mayor pena se dará parte a la autoridad competente.

TÍTULO II.

De los juicios.

CAPÍTULO I.

Del juicio ordinario.

Artículo 589.

Las controversias que no tengan señalada tramitación especial, se decidirán en juicio ordinario conforme a las reglas generales establecidas en el título primero de este libro.

CAPÍTULO II.

Del juicio sumario.

Artículo 590.

Se tramitarán y decidirán en la vía sumaria las controversias que se susciten sobre:

I. Multas;

II. Reintegro de alcances o liquidaciones de cuentas;

III. Derechos y obligaciones constantes en título ejecutivo;

IV. Terrenos baldíos;

V. Constitución de servidumbres;

VI. Consignación en pago para extinguir una obligación;

VII. Acción exhibitoria;

VIII. Controversias que resulten del ejercicio de la facultad económico-coactiva;

IX. Bienes nacionalizados;

X. Hipotecas;

XI. Posesión interina;

XII. Concurso;

XIII. Sucesiones;

XIV. Naufragios y demás accidentes de mar.

Artículo 591.

El término para contestar la demanda será de tres días.

Artículo 592.

No se admitirán más incidentes de previo y especial pronunciamiento que los relativos a incompetencia y personalidad.

Artículo 598.

La compensación y la reconvención procederán cuando la acción en que se funden deba ejercitarse también en juicio sumario.

Artículo 594.

El término para la prueba no excederá de veinte días, y dentro de él se podrá alegar y probar las tachas que tuvieren los testigos e instrumentos, observándose en su caso, lo dispuesto en el artículo 335.

Artículo 595.

Fenecido el término de prueba, se pondrá el expediente a la vista de cada una de las partes, por el término de tres días, para que aleguen, y el fallo se pronunciara dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 596. Los autos y sentencias que se dicten en los juicios sumarios, sólo son apelables en el efecto devolutivo y siempre que la cuantía del juicio exceda de quinientos pesos.

Artículo 597.

Son títulos ejecutivos para los efectos a que se refiere la fracción III del artículo 590:

I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada, y la arbitral que sea inapelable;

II. Los instrumentos públicos;

III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 330;

IV. Las letras de cambio, vales, pagarés y demás documentos mercantiles en los términos que disponen los artículos relativos del Código de Comercio, observándose lo que ordena el artículo 534 del mismo Código, respecto a la firma del aceptante;

V. Las pólizas de seguros, conforme al artículo 441 del Código de Comercio;

VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en el artículo 420 del Código de Comercio.

Artículo 598.

En esta clase de juicios, dictado el auto de exequendo, el secuestro y en su caso el remate, se llevarán a efecto de conformidad con las disposiciones relativas contenidas en los capítulos XLI y XLII, título I de este Código.

SECCIÓN I.

Del juicio hipotecario.

Artículo 599.

Para los efectos de la fracción X del artículo 590 se requiere que la hipoteca esté constituida y regida conforme a las leyes vigentes en el lugar de la ubicación de los bienes, que sea de plazo cumplido o que deba anticiparse. El acreedor tiene el derecho de exigir anticipadamente el pago, en los casos siguientes:

I. Si el inmueble hipotecado se hiciere insuficiente para la seguridad de la deuda;

II. En el caso de quiebra o insolvencia del deudor, o por falta de pago de una sola de las pensiones.

Artículo 600.

Presentada la demanda, si el juez encuentra que el instrumento respectivo llena los requisitos legales, expedirá la cédula hipotecaria, en la que simplemente se expresará que la finca de que se trata queda sujeta a juicio hipotecario.

Artículo 601.

La cédula hipotecaria se fijará en el lugar más aparente de la finca y se publicará en un periódico de la localidad, prefiriéndose siempre el oficial. Si no hubiere periódico, se fijará la copia autorizada de la cédula en la puerta del juzgado. Expedirá además el juez otras dos copias, insertando en ellas una relación sucinta de la escritura hipotecaria, y las remitirá a la oficina correspondiente del Registro Público de la Propiedad. Hecho el registro quedará una de las copias en dicha oficina, y la otra se devolverá al juzgado, para que anotada se agregue al expediente.

Artículo 602.

En virtud de la cédula hipotecaria, contrae el deudor las obligaciones de depositario judicial de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los bienes que, con arreglo a la escritura y conforme a la legislación local, deban considerarse como inmuebles y formando parte de la misma finca, según inventario que se agregará al expediente, siempre que lo pida el acreedor.

Artículo 603.

El deudor que no quiera aceptar la responsabilidad de depositario, entregará desde luego la finca al actor o al depositario que éste nombre con aprobación judicial.

El secuestro de la finca hipotecada se regirá por lo dispuesto en el capítulo XLI del título primero de este libro.

Artículo 604.

Expedida la cédula hipotecaria, no podrá verificarse en la finca hipotecada embargo, toma de posesión, diligencia precautoria, ni alguna otra que entorpezca el curso del juicio o viole los derechos del acreedor hipotecario, sino en virtud de ejecutoria relativa a la misma finca y anterior al titulo hipotecario que ha motivado la expedición de la cédula, o en virtud de providencia dictada a petición de acreedor de mejor derecho.

Artículo 605.

Para el avalúo de la finca se observará lo prevenido en el capítulo XXIV del título primero; pero si el demandado no hace el nombramiento de perito en el término que fija el artículo 279 o el perito no verifica el avalúo en el plazo fijado por el juez, éste hará el nombramiento que correspondía hacer al demandado.

Artículo 606.

El avalúo se practicará sin perjuicio de las excepciones que el demandado proponga, dentro de los tres días que se le conceden para contestar la demanda.

Artículo 607.

El demandado podrá alegar todas las excepciones que tuviere, probándolas por los medios que establece el artículo 214; las de pago de capital o réditos, las de compensación y reconvención se justificarán precisamente por confesión o prueba documental, y la de renovación, por medio de instrumento público.

Todo lo relativo a las excepciones formará cuaderno separado, a fin de que no

se interrumpan las actuaciones sobre aseguramiento y avalúo de la finca.

Artículo 608.

Si el actor obtuviere una resolución favorable a su demanda se procederá al remate, previa la caución correspondiente, en el caso de que dicha resolución no haya causado ejecutoria.

El Ministerio Público no está obligado a prestar caución.

Artículo 609.

Cuando el acreedor o acreedores a que se refiere la parte final del artículo 570 no se presenten al juicio antes de la ejecución de la sentencia, se procederá a depositar el importe de sus créditos.

Artículo 610.

Cuando quede revocada la sentencia que declaró improcedente el remate, o confirmada la que lo denegó, el juez, luego que reciba el expediente, mandará quitaría cédula hipotecaria, devolverá, en su caso, la finca al demandado, ordenando al depositario que rinda cuenta con pago en el término de treinta días, y si el rematése hubiere ya verificado, se hará efectiva la caución en los términos del artículo 420.

Artículo 611.

Confirmado el fallo que declaró procedente el remate, se procederá a éste, conforme al capítulo XLII, título I, si no se hubiere ya verificado, otorgándose la correspondiente escritura a favor del postor en quien haya fincado, o del acreedor si le hubiere adjudicado la finca.

SECCIÓN II.

Del juicio sobre posesión Interna.

Artículo 612.

En los juicios para retener o recobrar la posesión interina de una cosa raíz contraías oficinas o autoridades federales, se observarán los procedimientos establecidos en este capítulo, con la diferencia de que el término de prueba no podrá exceder de diez días. Este mismo procedimiento se observará cuando dichas oficinas o autoridades pretendan recobrar la posesión interina de una cosa raíz.

La Hacienda Pública y en general las autoridades federales podrán en la vía administrativa, retener la posesión que tengan. El que se considere perjudicado, podrá deducir en el juicio correspondiente la acción de propiedad o de posesión definitiva.

Artículo 613.

Lo dispuesto en el artículo anterior se observará cuando se trate de impedir la construcción de obra nueva o de destruir algún objeto, o edificio peligroso.

Artículo 614.

Cuando se trate de juicios para retener o recobrar la posesión interina de una cosa raíz entre personas privadas que por disposición de la ley deban acudir a los tribunales federales, o de impedir la construcción de una obra nueva o la destrucción de algún objeto u obra peligrosos, se observarán las disposiciones del capítulo IV, secciones I, III, IV, V y VI, título II, libro II del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en lo que no sea contrario a las prescripciones del presente Código.

En los casos en que dicho Código exige fianza a alguna de las partes, si se tratase de la Hacienda Pública, ésta no será obligada a otorgarla.

SECCIÓN III.

Del juicio de concurso.

Artículo 615.

La Hacienda Pública no entra en los juicios universales. En consecuencia, asegurados administrativamente los intereses que persiga, responderá ante los tribunales federales a las reclamaciones que se le hagan contra la legitimidad de su procedimiento o la preferencia en los pagos de sus créditos.

Artículo 616.

Siempre que la Hacienda Pública pro-

ceda con arreglo al artículo anterior, el aseguramiento administrativo se practicará en los bienes del concursado, y la controversia que resulte se ventilará en juicio sumario entre el agente del Ministerio Público y el síndico del concurso. La personalidad de este último se justificará con las constancias que de su nombramiento expida el juez del concurso.

Artículo 617.

El juicio iniciado contra la Hacienda Pública no suspende la tramitación del concurso; pero no podrá disponerse de los bienes concursados hasta que la sentencia de los tribunales federales cause ejecutoria.

Artículo 618.

La sentencia de los tribunales federales resolverá sobre la existencia del derecho fiscal, si ésta hubiere sido reclamada, o sobre la preferencia que tal derecho deba tener respecto de los que se hayan considerado privilegiados.

Artículo 619.

Si los bienes secuestrados administrativamente estuvieren afectos a responsabilidades de pago preferente al derecho de la Hacienda Pública, así lo declarará la sentencia; pero en tal caso, con el sobrante del precio de dichos bienes y con los demás que constituyan el fondo del concurso, se pagará el crédito fiscal.

Artículo 620.

Si los bienes concursados no fueren bastantes a cubrir los créditos preferentes al de la Hacienda Pública, el Agente del Ministerio Público provocará la declaración judicial en ese sentido, y la remitirá a la Secretaría de Hacienda, para justificar los asientos que deban hacerse en los libros de la contabilidad fiscal.

SECCIÓN IV.

Del juicio de sucesión.

Artículo 621.

En los juicios de sucesión, si la Hacienda Pública es heredera o legataria en concurrencia con particulares, el juez de los autos remitirá al de distrito copia de la cláusula respectiva y demás constancias conducentes, a efecto de que haga en la vía sumaria las declaraciones que correspondan.

Artículo 622.

En el caso a que se refiere el artículo anterior, el juicio se substanciará entre el agente del Ministerio Público y el albacea: éste acreditará su personalidad con las constancias que le expida el juez común ante quien se hubiere radicado el juicio hereditario.

Artículo 623.

Las diligencias que se practiquen por los tribunales federales no suspenden las actuaciones del juez del orden común, que continuará sus procedimientos sin que en ningún caso pueda disponerse de los bienes hereditarios, hasta que el Fisco haya sido íntegramente satisfecho.

Artículo 624.

El aseguramiento de los bienes que se estimen suficientes para el pago de la herencia o legado que al Fisco corresponda, se practicará administrativamente, y si verificado éste no se hubiere nombrado albacea, el juez que conozca de la sucesión nombrará uno provisional para los efectos del artículo 622.

La sentencia del juez de distrito se limitará a declarar si el Fisco Federal es heredero o legatario, y en qué porción; pero si se impugnare la validez del testamento o se promovieren cuestiones de otro género, se substanciará el juicio que corresponda.

Artículo 625.

Si la Hacienda Pública fuere instituida heredera universal, el juicio de sucesión se radicará ante el juez de distrito. Las funciones de albacea quedarán desde luego a cargo de las Jefaturas de Hacienda en los Estados, de las Administraciones de Rentas en los Territorios y de la Tesorería General en el Distrito, si la Secretaría de Hacienda no designa un albacea especial. En todo caso

tendrá el Agente del Ministerio Público la representación jurídica

Artículo 626.

Si no se impugnare la validez del testamento ni se promovieren cuestiones de otro género, el juez hará en la sentencia la declaración de heredero; de lo contrario, se procederá como está prevenido en el artículo 624.

Artículo 627.

Si por falta de herederos debe suceder la Hacienda Pública Federal el juez del orden común luego que pronuncie su declaración de heredero, remitirá los autos al juzgado de distrito correspondiente, quien pondrá a la Hacienda Pública en posesión de los bienes hereditarios.

SECCIÓN V.

De los naufragios y demás accidentes de mar.

Artículo 628.

Están comprendidas en la fracción XIV del artículo 590 de este Código, no sólo las controversias del orden civil que se susciten con motivo de los naufragios, sino todas las que provengan de avenas, abordajes, incendios, varadas, pérdidas de embarcaciones y de otros accidentes de mar. Están igualmente comprendidas las cuestiones de salvamento de mercancías, y las que se originen con motivo de la devolución de las salvadas a los que acrediten su propiedad.

Artículo 629.

En los casos a que se refiere el artículo anterior, el juez cuidará de que se cumplan las disposiciones de las ordenanzas de marina; y siempre que se trate de embarcaciones o mercancías extranjeras, será tenido como representante de los interesados que no comparecieren, el cónsul de la nación a que dichas embarcaciones o mercancías pertenezcan.

SECCIÓN VI.

Del apeo o deslinde.

Artículo 630.

El apeo o deslinde tiene lugar siempre que haya motivo fundado para creer que no son exactos los límites que separan dos fundos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ya porque se hayan destruido las señales que los marcaban, ya porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo.

Artículo 631.

El apeo o deslinde de un fundo de propiedad nacional sólo puede practicarse a moción de la autoridad administrativa.

Artículo 632.

Los particulares pueden también pedir el apeo para deslindar su propiedad respecto de otra nacional. En este caso, la diligencia se limitará a marcar los linderos entre ambos predios.

Artículo 633.

Tienen derecho para promover el apeo en el caso del artículo anterior, el propietario, el poseedor con título bastante para transferir el dominio, el usufructuario y el enfiteuta.

Artículo 634.

En la promoción del apeo se expresarán:

I. El nombre y ubicación de la finca;

II. La parte o partes en que el acto deba ejecutarse;

III. Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo;

IV. El sitio donde están o estuvieron las señales y donde deban estar éstas.

Artículo 635.

Se acompañarán además a la misma promoción los planos y documentos que puedan servir para practicar la diligencia, y en su defecto se ofrecerá información testimonial.

Artículo 636.

El juez hará saber la petición a los colindantes para que, dentro de tres días, presenten sus títulos de propiedad o posesión u ofrezcan la información correspondiente.

Artículo 637.

Las informaciones se recibirán dentro de diez días, con citación de los interesados. Cada uno de éstos sólo puede presentar hasta tres testigos.

Artículo 638.

El promovente y los colindantes nombrarán sus respectivos peritos.

Artículo 639.

Recibida la información y nombrados los peritos, el juez señalará día para el apeo que se verificará pasados cuarenta días, desde la fecha del auto respectivo. Éste se notificará inmediatamente a los interesados, y dentro del plazo señalado se publicará por tres veces en el periódico oficial del Distrito Federal, Estados o Territorios respectivos.

Artículo 640.

Si fuere necesario identificar algún punto, se prevendrá a cada uno de los interesados que nombren dos testigos de identidad.

Artículo 641.

El día designado, el juez, en unión del agente del Ministerio Público, de los interesados que se presenten y de los peritos y testigos de identidad practicará el apeo, levantando el secretario acta circunstanciada de la diligencia, en que consten todas las observaciones que las partes hicieren. En virtud de ellas no se suspenderá la diligencia, a no ser que alguno de los interesados presente en el acto un instrumento público que pruebe ser dueño del terreno que se pretende deslindar.

Artículo 642.

Si estuvieren conformes los interesados, el juez aprobará el apeo y dispondrá que se fijen los mojones en los puntos que se designen en la propia diligencia. En caso de inconformidad se seguirá el juicio correspondiente.

CAPÍTULO III.

Del juicio sobre nacionalidad y derechos de extranjería.

Artículo 643.

En los casos en que un Ayuntamiento rehusé expedir la copia certificada del escrito en que alguien manifieste el designio de hacerse ciudadano mexicano y de renunciar la anterior nacionalidad, o cuando un individuo niegue tener la nacionalidad mexicana, o la reclame porque le haya sido desconocida, el juez, previa audiencia del Ministerio Público, pedirá informe con justificación a la autoridad que corresponda, y además, abrirá el negocio a prueba, computándose los términos conforme a las disposiciones generales de este Código.

Artículo 644.

La sentencia de primera instancia es apelable en ambos efectos, y la de segunda no admitirá más recurso que el de responsabilidad.

Artículo 645.

Si la sentencia de segunda instancia fuere adversa al interesado, porque se resuelva en ella que la prueba fue insuficiente, el extranjero queda en libertad para promover de nuevo la naturalización, mediante todos los trámites marcados en la ley de extranjería y en este capítulo.

Artículo 646.

Lo dispuesto en este capítulo no impide que el Ejecutivo mande ampliar la información sobre los puntos que estime necesarios, a cuyo efecto comunicará al agente del Ministerio Público las instrucciones conducentes.

Ampliada la información, el juez remitirá el expediente respectivo a la Secretaría de Relaciones.

Artículo 647.

Si se negare a un ciudadano la prerrogativa de que habla la fracción I del artículo 35 de la Constitución, puede ocurrir al juez de distrito competente, acreditándolos requisitos a que se refiere el artículo 34 de la misma Constitución; y el juez, sin más trámites que el informe de la autoridad respectiva y el pedimento fiscal, fallará sin ulterior recurso.

Artículo 648.

Para resolver sobre los casos a que se contrae el artículo 12 de la ley electoral de fecha 18 de diciembre de 1901, el juez en vía sumaria oirá al interesado y al agente del Ministerio Público, y en el término de prueba recabará informe de las autoridades respectivas y pronunciará su sentencia, que tendrá los recursos legales.

CAPÍTULO IV.

Del juicio sobre expropiación.

Artículo 649.

Los procedimientos judiciales para las expropiaciones que se verifiquen por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de 31 de mayo de 1882, serán los que determinen los artículos siguientes.

Artículo 650.

Declarada y fundada administrativamente la expropiación, y siempre que no haya avenimiento con el propietario respecto del monto de la indemnización, se consignará el asunto al juzgado de distrito correspondiente, por la autoridad expropiadora, designando ésta desde luego su perito. El juez requerirá al propietario para que dentro de ocho días haga igual designación, y hecha, se harán saber en el acto a los dos peritos sus respectivos nombramientos para que manifiesten su aceptación o renuncia, y en el primer caso, protesten el fiel desempeño de su encargo. Después de la aceptación no puede renunciarse el nombramiento.

Artículo 651.

Si el propietario se resiste a verificar el nombramiento de perito, o no contesta la notificación que al efecto se le haga, el juez de oficio o a instancias del Ministerio Público, fijará un nuevo plazo de cuarenta y ocho horas al resistente, para que verifique tal nombramiento, apercibiéndolo de que en caso contrario servirá de base para la indemnización el avalúo del perito nombrado por la autoridad. Este apercibimiento, se hará efectivo inmediatamente después de que expire el segundo plazo, sin necesidad de promoción alguna.

Artículo 652.

Si el perito nombrado por el propietario no acepta el cargo, el juez de distrito fijará la indemnización, según el avalúo del perito nombrado por la autoridad.

Artículo 653.

Aceptado el nombramiento por ambos peritos, éstos quedan obligados a presentar sus avalúos dentro de ocho días contados desde la fecha de sus respectivos nombramientos, y si no lo verificaren, el juez les impondrá una multa de 5 a 25 pesos diarios, por todo el tiempo que exceda de dichos ocho días; si transcurrieren otros ocho días sin que se hubiese presentado más que uno de los avalúos, el juez hará efectiva la multa y fijará la indemnización sobre la base del avalúo que se haya exhibido; pero si no hubiere ninguno, se hará constar así, y se procederá a nombrar un solo perito por el juez, sin que puedan ya tomarse en consideración los avalúos que se presenten después de los dos plazos a que este articulo se refiere.

Artículo 654.

Para la práctica del avalúo se estará a lo dispuesto en el artículo 293 de este Código, y si no estuvieren de acuerdo los peritos, se observarán las reglas siguientes:

I. Si la diferencia de valores no excediere de un diez por ciento, se tomará un promedio para fijar la indemnización;

II. Si la diferencia excediere de un diez

por ciento, el juez nombrará un tercero, quien presentará su avalúo sin tomar en consideración los otros dos;

III. Si el avalúo del tercero estuviere de acuerdo con alguno de los otros dos avalúos, éstos servirán de base para la resolución judicial;

IV. Si el avalúo del tercero difiriese en menos de un diez por ciento, respecto de cualquiera de los presentados con anterioridad, se tomará un promedio entre ambos avalúos;

V. Si entre el avalúo del tercero y cualquiera de los otros dos hubiere una diferencia de más de un diez por ciento, el juez, en vista de las consideraciones que sirvan de fundamento a cada uno de los tres avalúos, fijará la indemnización que creyere de justicia.

Artículo 655,

Contra la resolución judicial que fije la indemnización no podrá interponerse recurso alguno.

Artículo 656.

Fijada la indemnización judicial se procederá al otorgamiento de la escritura que corresponda conforme a la ley, poniéndose en el acto la cosa a disposición de la autoridad, y el precio a la del expropiado. Si éste se negare a recibirlo, se depositará a su costa en el banco u oficina pública que el juez designe. Cuando el mismo expropiado se niegue a firmar la escritura, lo hará el juez en su nombre, y se procederá como está dispuesto en el artículo 543 de éste Código, si se resistiere a la entrega de la cosa expropiada.

CAPÍTULO V.

Del juicio sobre patentes de invención, marcas Industriales y de comercio.

Artículo 657.

Las controversias que se susciten con motivo de la expedición, término, nulidad o caducidad de una patente de invención, marcas industriales y de comercio se decidirán en el Distrito Federal.

Artículo 658.

El Ministerio Público para entablar la demanda, contestarla o aceptar el desistimiento de la parte contraria, recabará instrucciones de la Secretaría de Fomento.

Artículo 659.

Los procedimientos en esta clase de controversias serán los que determine la ley especial de patentes de invención, marcas industriales y de comercio.

Artículo 660.

Todas las sentencias que se dicten en estos juicios serán comunicadas a la Secretaría de Fomento y publicadas en el Diario Oficial.

CAPÍTULO VI.

SECCION I.

Sobre el juicio de amparo.

Artículo 661.

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales;

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

Artículo 662.

Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determine este Código. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto

que la motivare.

Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garantías individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los Tribunales de la Federación, después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación.

Artículo 663.

El juicio de amparo sólo puede promoverse y seguirse por la parte a quien perjudique el acto o la ley de que trata el artículo anterior; pudiendo hacerlo por si, por apoderado, por representante legítimo, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, y también por medio de algún pariente y hasta de un extraño, en los casos que expresamente lo permita este capítulo.

Artículo 664. La mujer casada y el menor podrán pedir amparo aún sin intervención de sus legítimos representantes cuando éstos se hallen ausentes o impedidos o cuando se trate de la pena de muerte, destierro, de algún otro acto de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal o de su libertad. En el caso relativo al menor, el juez, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, nombrará desde luego un tutor dativo que represente a aquél, pudiendo ser designado por el menor mismo, si éste hubiese ya cumplido14 años de edad.

Artículo 665.

La mujer casada, en los casos en que tenga un interés opuesto al de su marido, aunque sólo se trate de la propiedad o posesión de bienes, puede intentar y seguir el juicio sin licencia de aquél ni autorización judicial.

Artículo 666.

No se requiere cláusula especial en el poder general, para que el apoderado intente y prosiga el juicio de amparo; pero sí se requiere para que se desista de dicho juicio, Una vez intentado.

Artículo 667.

La personalidad se justificará en la forma que previene este Código, salvo las excepciones que fija el presente capitulo. Si el acto reclamado emana de una causa criminal, bastará la aseveración protestativa que de su carácter haga el defensor. En este caso, el juez ordenará que el individuo en cuyo nombre se pida el amparo, ratifique la demanda antes de que el juicio se reciba a prueba; o bien, pedirá al juez que conozca de dicha causa, que le remita el justificante relativo al nombramiento de defensor.

Artículo 668.

Cuando se trate de la pena de muerte, de ataques a; la libertad individual, destierro o algún otro acto de los enumerados en el artículo 22 de la Constitución Federal, y el individuo a quien perjudique el acto esté imposibilitado para promover podrá hacerlo otro en su nombre, pero el juez mandará que la persona por quien se promueva el juicio ratifique la demanda inmediatamente después de dictar el auto de suspensión. Si no se hace esta ratificación, se sobreseerá en el juicio-por causa de improcedencia, salvo el caso previsto en el artículo siguiente.

Artículo 669.

En el caso a que se refiere el artículo anterior, si el individuo en cuyo favor se pide el amparo hubiere sido secuestrado y, suspendido el acto reclamado, resultaren infructuosas las medidas tomadas por el juez para la comparecencia de aquél, suspenderá el procedimiento y abrirá proceso contra la autoridad o autoridades que resulten responsables del secuestro, debiendo ser éste castigado como si se tratara de desobediencia a una ejecución de amparo.

El procedimiento en el caso de este artículo podrá permanecer suspenso basta por un año contado desde la fecha de la demanda, pasado el cual, se sobreseerá, si nadie se hubiere apersonado con la representación legal del ofendido para continuar el amparo hasta su término.

El sobreseimiento de que se trata en este artículo, no preocupa los derechos del

interesado, de sus deudos ni la acción del Ministerio Público que puedan emanar del acto reclamado.

Artículo 670.

En los juicios de amparo serán considerados como partes el agraviado, la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público.

Artículo 671.

Es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; pero si éste consistiere en una resolución judicial o administrativa, se tundra también como responsable a la autoridad que la haya dictado.

Artículo 672.

Se reputa tercero perjudicado:

I. En los actos judiciales del orden civil; a la parte contraria del agraviado;

II. En los actos judiciales del orden penal, a la persona que se hubiere constituido parte civil en el proceso en que se haya dictado la resolución reclamada y, solamente, en cuanto ésta perjudique sus intereses de carácter civil.

El tercero perjudicado se sujetará al estado que guarde el juicio al presentarse en él, sea cual fuere; y no tendrá derecho a más términos ni a rendir otras pruebas que los que expresamente concede este capítulo.

Artículo 673.

En el juicio de amparo las notificaciones se harán:

I. A la autoridad responsable por medio de oficio cuando se trate de pedirle informes, previo y justificado; de hacerle saber lo resuelto en el incidente de suspensión de la apertura del término probatorio; de la citación para alegatos y de la sentencia;

II. Personalmente a los quejosos privados de su libertad cuando se trate de los cuatro últimos actos a que se refiere la fracción anterior, en el local del juzgado o en donde ellos se encuentren, y por despacho o requisitoria si están en lugar distinto del de la residencia del juzgado. Si a pesar de los medios que acaban de expresarse, no pudieren ser habidos, la notificación se practicará con el defensor, con la persona que haya promovido el amparo, y en último extremo se hará por cédula, haciendo constar la razón para haberse adoptado este último medio.

III. Personalmente en el juzgado a las parles o a sus apoderados o representantes legítimos, si se presentaren dentro de las veinticuatro horas i siguientes a la en que se hubiere pronunciado el auto o resolución relativa; o por cédula que se fijará en las puertas del juzgado si no se presentaren oportunamente. De igual modo se harán las notificaciones al tercer perjudicado cuando concurra al juicio.

Artículo 674

La cédula contendrá: el nombre de la persona a quien se notifica, el del juicio en que la notificación se hace, copia de la parte resolutiva que ha de notificarse, motivo de hacerlo por cédula y día y hora en que ésta se fije.

Artículo 675.

Toda resolución debe ser notificada en la forma que determinan los artículos anteriores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que fuere dictada, y se asentará la razón respectiva en el expediente a que pertenezca.

Artículo 676.

Las notificaciones surtirán sus efectos:

Las comprendidas en la fracción del artículo 673 a la hora en que se haya entregado el oficio relativo a la autoridad responsable o dejándose en su oficina, si está en el mismo lugar del juicio; y en caso contrario, pasados los días que invierta el correo en ida y vuelta al lugar en que aquélla esté instalada;

II. En los casos de las fracciones II y III del mismo artículo, al día siguiente de aquel en que se haya hecho la notificación personal o se hubiere fijado la cédula.

Artículo 677.

La falta de notificación en la forma que expresan los artículos anteriores, constituye responsabilidad para el empleado encargado de hacerla, y da derecho a la persona perjudicada para ocurrir en queja, mientras no se pronuncie sentencia definitiva, a la Suprema Corte de Justicia, quien la castigará con una multa de 10 a 50 pesos, que impondrá al empleado culpable, o con la destitución de éste en caso de reincidencia.

Artículo 678.

Las notificaciones se harán a los abogados de las partes, cuando en autos hayan sido facultados por sus clientes. La facultad de recibir notificaciones autoriza al abogado para promover lo que estime conveniente en la respuesta a la notificación.

Artículo 679.

El cómputo de los términos en el juicio de amparo se hará conforme a las reglas generales establecidas en el presente Código; pero en los que fija este capítulo para la suspensión del acto reclamado y para que la autoridad ejecutora rinda su primer informe, se incluirán los domingos y días de fiesta nacional.

Artículo 680.

Los términos que establece este capítulo son improrrogables; a su vencimiento, cada una de las partes, y el tercer perjudicado tienen derecho a pedir que el juicio continúe sus trámites. Si el amparo se refiere a la pena de muerte, a la libertad, a algún otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o a la consignación al servicio militar, el agente del Ministerio Público cuidará de que el juicio no quede paralizado, promoviendo al efecto lo que corresponda; y el juez continuará sus procedimientos hasta pronunciar sentencia definitiva, auto de improcedencia o de sobreseimiento, según corresponda. En todos los demás casos, la falta de promoción del quejoso durante veinte días continuos después de vencido un término, presume el desistimiento y obliga al Ministerio Público a pedir el sobreseimiento y al juez a dictarlo, aun sin pedimento de aquél.

Artículo 681.

Es aplicable al juicio de amparo lo prevenido en el artículo 3º de éste Código.

Artículo 682.

En las actuaciones del juicio de amparo se harán constar el día en que comienza a correr un término o una prórroga, y en el que deba concluir. Si el término es de horas, se hará constar la hora en que comienza y la en que concluya.

Artículo 683.

En el juicio de amparo, la demanda y las demás promociones del quejoso podrán hacerse verbalmente cuando se trate de ataques a la libertad personal, a la vida o a alguno de losados prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.

Artículo 684.

Los autos pronunciados en los juicios de amparo no admiten más recursos que los que este capítulo expresamente concede. Sin embargo, cuando la Corte tenga noticia de algún acto del juez, que por su naturaleza trascendental y grave reclame la inmediata intervención de dicho tribunal, podrá pedir informe con justificación al juez y revisar dicho acto.

Artículo 685.

En los juicios de amparo no se substanciará más artículo de especial pronunciamiento, que el relativo a la competencia de los jueces. Los demás incidentes o artículos que surjan, si por su naturaleza son de previo y especial pronunciamiento, se resolverán de plano y sin forma de substanciación. En caso distinto, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que se dispone sobre el incidente de suspensión.

Artículo 386.

Los jueces de distrito deberán avisar a la Suprema Corte de Justicia la iniciación de todo amparo.

Este aviso deberá darse en la fecha en

que se admita la demanda.

Artículo 687.

El amparo puede promoverse en cualquier día si se trata de la libertad individual Cuando se trate de la vida o de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, cualquiera hora del día o de la noche será útil para promover el amparo y tramitarlo hasta resolver sobre la suspensión del acto.

Artículo 688.

A falla de disposición expresa en la tramitación del juicio de amparo, se estará a las prevenciones generales de este Código.

SECCIÓN II.

De la competencia.

Artículo 689.

Es juez competente el de distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse la ley o acto que motive el juicio de amparo. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces a prevención será competente. Tratándose de resoluciones judiciales, es competente el juez de distrito del Estado o Territorio en que aquellas se pronuncien.

Artículo 690.

En los lugares en que no resida el juez de distrito, los jueces de primera instancia de los Estados tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, para suspender el acto reclamado, en los términos proscriptos en este capítulo y para practicar las demás diligencias urgentes, dando cuenta de ellas inmediatamente al juez de distrito respectivo, y podrán también, bajo la dirección de éste, continuar el procedimiento hasta ponerlo en estado de sentencia. Sólo en el caso de que se trate de la ejecución de la pena de muerte, destierro o algún otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, los jueces de paz o los que administren justicia en los lugares en donde no resida juez de primera instancia, recibirán la demanda de amparo y practicarán las demás diligencias de que habla este artículo.

Los jueces del orden común nunca podrán fallar en definitiva estos juicios.

Artículo 691.

Son también competentes los jueces de paz, alcaldes o conciliadores para recibir la demanda de amparo contra actos del juez de primera instancia en los lugares donde no resida el de distrito, y para resolver el incidente de suspensión. Practicadas estas diligencias, remitirá el expediente al juez de distrito que corresponda.

Artículo 692.

Cuando se promueva amparo contra jueces federales, se entablará la demanda ante el juez suplente que esté expedito, si se reclamaren los actos del propietario, o ante éste v los suplentes, por su orden, si la violación se imputa a uno de los suplentes. Si en el lugar hubiere dos jueces propietarios de distrito, uno de ellos conocerá de los amparos que contra el otro se promuevan. Respecto a los suplentes y a la falta de jueces, se observarán los artículos 24 y 25 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Si el amparo se promueve contra uno de los magistrados de circuito, se entablará la demanda ante uno de los jueces de distrito que no corresponda al circuito de aquél, observándose en su caso los artículos 24 y 25 que acaban de citarse.

Artículo 693.

La Corte, en acuerdo pleno, calificará los impedimentos y excusas de los jueces de distrito, que ocurran en dicho juicio; revisará los incidentes sobre ejecución de sentencia y los demás que conforme a éste capítulo admitan el recurso de revisión.

Artículo 694.

Las cuestiones de competencia entre jueces de distrito, por motivos de un mismo amparo, se dirimirán del modo siguiente:

Cuando un juez de distrito ante quien se presente una demanda de amparo, tenga noticia de que otro juez está conociendo del mismo juicio, dará inmediatamente aviso a

este funcionario, insertando en su oficio el contexto de la demanda.

El juez requirente, el día en que se dirija al requerido y éste, al recibir el oficio de aquél, remitirán a la Suprema Corte una copia de la demanda para que este tribunal pueda juzgar si se trata del mismo amparo.

La Suprema Corte luego que reciba el primer oficio mandará formar el toca, y recibido el segundo, resolverá inmediatamente, designando al juez que deba conocer del juicio.

Si la Corte tío encuentra un motivo satisfactorio que explique la necesidad de haberse entablado la misma demanda ante dos jueces, impondrá al quejoso, a su abogado o representante, una multa de diez a doscientos pesos.

La resolución de la Corte se comunicará a ambos jueces, al uno para que siga conociendo y al otro para que se inhiba del conocimiento del juicio y remita las diligencias que haya practicado al juez competente.

SECCIÓN III.

Dé los impedimentos.

Artículo 695.

En los juicios de amparo no son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia ni los jueces de distrito; pero manifestarán forzosamente que están impedidos para conocer, en los casos siguientes:

I. Si son parientes en línea recta, o dentro del segundo grado en la colateral por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes sus abogados o representantes.

Aunque la autoridad ejecutora del acto reclamado no se constituye parte en el juicio, siempre será considerada como tal para los efectos de este inciso;

II. Si tienen interés personal en el negocio;

III. Si han sido abogados o apoderados en el mismo negocio o han pronunciado en él con calidad de juez o magistrado o aconsejado como asesor, la resolución discutida en el amparo;

IV. Si tienen pendiente algún amparo semejante en que figuren como parte agraviada.

Artículo 696.

La manifestación a que se refiere el artículo anterior, se hará ante la Suprema Corte.

Artículo 697.

Manifestada por el ministro o juez la causa del impedimento, la Suprema Corte en el mismo acuerdo en que se le dé cuenta calificará de plano la excusa admitiéndola o desechándola.

Artículo 698.

Si alguna de las partes alega el impedimento, se pedirá desde luego informe al ministro o juez aludidos, quienes deberán rendirlo dentro de 2í horas, agregándose a este término el tiempo indispensable que invierta el correo en ida y vuelta en caso de tratarse de un juez que resida fuera de la capital de la República. Transcurrido dicho término, la Corte, en acuerdo pleno, resolverá lo que proceda sí se ha confesado la causa o no se ha rendido el informe. Si se niega, se otorgará un término de prueba que no excederá, en ningún caso, de cinco días, fenecidos los cuales, se resolverá admitiendo o desechando la causa del impedimento.

Artículo 699.

Cuando el Ministerio Público no sea quien haya manifestado la causa del impedimento contra un juez o ministro, si se desechare, se impondrá a la parte que lo alegó, a su abogado o representante, una multa que no exceda de cien pesos.

Artículo 700.

Cuando se manifestaren impedidos uno o varios ministros, la Corte, teniendo en consideración la calidad de los impedimentos propuestos, resolverá el punto procurando que el Tribunal no quede incompleto.

Artículo 701.

El impedimento no inhabilita a los jueces para dictar el auto de suspensión, y continuar el juicio hasta ponerlo en estado de sentencia, mientras la Corte no resuelva la excusa, excepto en el caso de la fracción II del artículo 695, en el que desde la presentación de la demanda y sin demora, el juez hará saber al promovente que ocurra al suplente o a quien corresponda.

SECCIÓN IV.

De los casos de improcedencia.

Artículo 702.

El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra actos de la Suprema Corte, ya sea funcionando en acuerdo pleno o en salas;

II. Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo;

III. Contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, aunque se aleguen vicios de anticonstitucionalidad que no se hicieron valer en el primer juicio, siempre que sea una misma la parte agraviada;

IV. Contra actos consumados de un modo irreparable;

V. Contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

Se presumen consentidos para los efectos de este artículo:

a) . Los decretos y autos dictados en un proceso criminal, si contra ellos no se ha intentado el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al de la notificación;

b). Las resoluciones judiciales civiles contra las cuales no se haya pedido amparo dentro de los términos que señala este capítulo;

c). Los actos del orden político administrativo que no hubieren sido reclamados en la vía de amparo dentro de los quince días siguientes a la fecha de su ejecución, exceptuándose los actos contra la libertad individual y los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, siempre que unos y otros tengan carácter reparable;

d). El servicio en el Ejército Nacional, si no se pide el amparo dentro de noventa días contados desde que el individuo de que se trate quedó a disposición de la autoridad militar;

VI. Contra sentencias que impongan penas de que se haya pedido la gracia de indulto;

VII. Cuando han cesado los efectos del acto reclamado;

VIII. Cuando en los tribunales-ordinarios esté pendiente un recurso que tenga por objeto confirmar, revocar o enmendar el acto reclamado.

En los casos a que se refiere esta fracción, el interesado podrá intentar el juicio de amparo, únicamente contra la resolución que se dicte en el recurso pendiente, siempre que entable su demanda de amparo en tiempo y forma;

IX. En los demás casos en que lo prevenga este capítulo.

SECCIÓN V.

De la demanda de amparo.

Artículo 703.

La demanda de amparo debe entablarse precisamente contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute o trate de ejecutar el acto que se reclama, o contra la autoridad que lo haya ordenado en los casos del artículo 668.

Artículo 704.

Cuando la demanda se entable contra la pena de muerte o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará que se declare en ella cual es el acto reclamado y, si es posible al quejoso, la autoridad o agente que trate de ejecutar dicho acto, para que se dé curso a la

queja.

Artículo 705.

En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de distrito aún por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, para que ésta pueda comenzar a conocer del juicio. La demanda cubrirá los requisitos que le correspondan como si se entablare por escrito; y el peticionario deberá ratificarla también por escrito dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo, y además los que el correo emplee entre el lugar en que se halle el quejoso y el de la residencia del juez.

Artículo 706.

Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda y se impondrá una mulla de diez a cien pesos al peticionario y a su abogado o representante, menos cuando se trate de la pena de muerte, de la pérdida de la libertad personal, o de cualquiera otro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en que el juez estará obligado a hacer que la ratificación se lleve a cabo, sin perjuicio de que el amparo continúe su curso hasta sobreseer o pronunciar sentencia definitiva, según el caso de que se trate.

Lo dispuesto en este artículo y el anterior no perjudica ni en manera alguna altera lo preceptuado sobre el término en que debe entablarse la demanda.

Artículo 707.

En los casos a que se refieren los artículos anteriores, si se pide la suspensión del acto reclamado o ésta procede de oficio, el juez, si lo estima urgente, pedirá informe por la vía telegráfica insertando el escrito de la demanda. En los amparos de carácter civil se pedirá el informe telegráfico a costa del peticionario.

SECCIÓN VI.

De la suspensión del acto reclamado.

Artículo 708.

La suspensión del acto reclamado procederá de oficio o a petición de la parte agraviada, en los casos y términos que previene este capítulo.

Artículo 709.

Procede la suspensión de oficio en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de la pena de muerte o de algún otro acto violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal;

II. Cuando se trate de algún otro acto, que si llega a consumarse, hará físicamente imposible poner al quejoso en el goce de la garantía individual violada.

Artículo 710.

Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, la suspensión sólo podrá decretarse a petición de parte y cuando sea procedente conforme a las siguientes disposiciones.

Artículo 711.

La suspensión debe concederse siempre que lo pida el agraviado, en los casos en que sin seguirse por ello daño o perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, sean de difícil reparación los que se causen al mismo agraviado con la ejecución del acto.

Aunque la suspensión pueda producir algún perjuicio a tercero; el juez y la Suprema Corte de Justicia, en grado, tendrán facultad de concederla, si el que la pide da fianza de reparar ese perjuicio.

Artículo 712.

La suspensión bajo de fianza a que se refiere el artículo anterior, cuando no se trata de asunto del orden penal, quedará sin efecto si el tercero da a su vez fianza bastante de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengan por no haberse suspendido el acto reclamado. Además de esta fianza, dicho

tercero deberá indemnizar previamente el costo del otorgamiento de la fianza dada por el quejoso.

Artículo 713.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, el juez, con sólo la petición hecha en la demanda de amparo sobre la suspensión del acto, podrá ordenar que se mantengan las cosas en el estado que guarden, durante el término de setenta y dos horas, tomando las providencias que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y evitar hasta donde sea posible, perjuicios a los interesados; el transcurso del término sin dictarse la suspensión en forma, importa la revocación de la providencia. La Corte, al revisar el incidente o el juicio, examinará especial y atentamente si se ha procedido con justificación en este punto.

Artículo 714.

Cuando en la demanda de amparo se pida la suspensión del acto reclamado en los casos en que esta suspensión no esté comprendida en la fracción l del articulo 709, se acompañarán dos copias simples de dicha demanda, para que, cotejada una de ellas por la secretaría del juzgado respectivo, se remita a la autoridad responsable al pedirle el primer informe. Con la otra copia sedará principio al incidente de sus-pensión, el cual deberá tramitarse por cuerda separada y agregarse al expediente principal cuando éste se remita a revisión

Artículo 715.

La suspensión de oficio en los casos del artículo 709, se decretará de plano al recibirse el escrito de demanda o la petición telegráfica relativa.

Artículo 716.

Promovida la suspensión que no deba decretarse de oficio, el juez, previo informe que la autoridad ejecutora habrá de rendir dentro de veinticuatro horas, oirá dentro de igual término al agente del Ministerio Público, y dentro de las veinticuatro horas siguientes resolverá lo que corresponda.

La falta de este informe establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión.

Artículo 717.

Si el amparo se pide contra impuestos, multas u otros pagos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto, previo depósito de la cantidad que se cobre en la misma oficina recaudadora, entretanto se pronuncia en el juicio la sentencia definitiva.

Artículo 718.

Si el acto reclamado se refiere a la garantía de la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de distrito respectivo, quien dictará las providencias necesarias para el aseguramiento de aquél, a fin de que, negado el amparo, pueda ser devuelto a la autoridad que deba juzgarlo; o bien podrá ponerlo en libertad bajo caución, si procediere legalmente.

Artículo 719.

En los amparos por consignación al servicio militar, la suspensión del acto podrá concederse para los efectos que expresa este artículo, la cual será comunicada directamente al jefe u oficial en cuyo poder se encuentre el consignado. Por la vía más violenta y por conducto de la secretaría de Justicia, se comunicará a la de Guerra, a fin de que ordene que el promovente sea desde luego anotado para que, si se concede el amparo, pueda ser restituido en el goce de sus garantías, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre.

Artículo 720.

El auto en que el juez conceda o niegue la suspensión, se ejecutará desde luego, sin perjuicio de que la superioridad lo revise en los casos en que deba hacerlo.

Artículo 721.

Mientras no se pronuncie sentencia definitiva, puede revocarse el auto de suspensión o dictarse durante el curso del juicio, cuando ocurra algún motivo superveniente

que sirva de fundamento a la resolución.

Artículo 722.

La suspensión del acto reclamado no impide que el procedimiento continúe hasta que se pronuncie resolución firme, siempre que la naturaleza de ese acto sea tal, que la suspensión de él permita continuar dicho procedimiento. Los jueces de distrito y la Suprema Corte, en su caso, cuidarán de fijar y concretar con la debida claridad en su resolución respectiva, el acto que ha de suspenderse.

Artículo 723.

Contra el acto del juez de distrito que conceda, niegue o revoque la; suspensión, las partes y el tercer perjudicado pueden interponer el recurso de revisión. Lo interpondrá precisamente el agente del Ministerio Público, cuando la suspensión perjudique los intereses de la sociedad o del Fisco.

Artículo 724.

El recurso de revisión deberá interponerse verbalmente ante el juez de distrito en la diligencia en queso notifique el auto, o por escrito dentro de tres días si se interpusiere ante la Suprema Corte, agregándose a este término el que sea necesario, según el tiempo que dilate el correo.

Artículo 725.

Interpuesto el recurso, el juez remitirá desde luego el incidente a la Suprema Corte. En caso de urgencia, la revisión podrá pedirse a la superioridad respectiva por la vía telegráfica. Aquella, por la misma vía, ordenará al juez la remisión del expediente. En los casos de la fracción I del artículo 709 el juez remitirá testimonio de la demanda y del auto de suspensión.

Artículo 726.

La Suprema Corte, en vista de las constancias que menciona el artículo anterior, resolverá dentro de cinco días, contados desde que sean turnadas al ministro revisor, confirmando, revocando o reformando el auto del juez.

Artículo 727.

Para llevar a efecto el auto de suspensión, el juez procederá en los términos ordenados en este capítulo para la ejecución de la sentencia.

SECCIÓN VII.

De la substanciación del juicio

Artículo 728.

El juez, ante todo, examinará la demanda de amparo, y si encuentra motivos manifiestos e indudables de improcedencia, desechará aquella desde luego, sin suspender el acto reclamado.

Artículo 729.

Sí hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda o no se manifestare con precisión en ella el acto o actos reclamados, con cuya manifestación debe terminar todo escrito de queja, el juez exigirá del quejoso la aclaración correspondiente, la cual deberá presentarse dentro de las 24 horas siguientes a la de la notificación. Si dentro de este término no se hiciere la aclaración, el juez correrá traslado por igual plazo al agente del Ministerio Público; y en vista de lo que él exponga, admitirá o desechará la demanda dentro de las 24 horas subsecuentes. Si la demanda fuere desechada, será revisable el auto.

Artículo 730.

Si el juez no encuentra motivos de improcedencia, tendrá por presentada la demanda y pedirá informe con justificación a la autoridad ejecutora del acto reclamado. Dicha autoridad lo rendirá dentro de tres días; pero si el juez halla que la importancia del caso lo amerita, podrá ampliar el plazo hasta por otros tres días más, avisándolo así a la autoridad informante en el mismo oficio en que le pida el informe.

A este oficio se acompañará una de las copias exigidas en el artículo 714, a no ser que la autoridad responsable tuviese ya conocimiento de la demanda con motivo del incidente de suspensión.

Artículo 731.

La circunstancia de no rendir el informe justificado, establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías individuales; pero esta presunción cederá a las pruebas que resulten de autos.

Artículo 732.

Recibido el informe de la autoridad o transcurrido el término en que debió haberse rendido, el agente del Ministerio Público, dentro de los tres días siguientes, pedirá lo que corresponda conforme a derecho.

Artículo 733.

Cumplidos los trámites anteriores, si el juez creyere necesario esclarecer algún punto de hecha, lo pidiere alguna de las partes o no se hubiere rendido el informe de que habla el artículo 730, se abrirá el juicio a prueba por un término común que no exceda de ocho días.

Artículo 734.

Si la prueba hubiere de rendirse en lugar distinto de la residencia del juez de distrito, se considerarán además de los ocho días a que se refiere el artículo anterior, los que invierta el correo ordinario en ida y vuelta y otros tres días más

En esta ampliación de término no puede rendirse sino la prueba que haya ameritado esa prórroga, y no se concederá en manera alguna cuando la prueba que se ofrezca hubiere de rendirse en el extranjero.

Artículo 735.

En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones. Los jueces desecharán de plano las que conformé a la segunda parte del artículo 743 no deban tomarse en consideración al pronunciar sentencia definitiva.

Artículo 736.

Las autoridades o funcionarios tienen obligación de remitir con oportunidad copia de las constancias que señalen las partes ante el juez de distrito para presentarlas como pruebas. Estas constancias se designarán en el oficio en que se pidan; la copia será cotejada y autorizada por la autoridad a quien la pida el juez de distrito; y cuando ésta se niegue a cumplir las obligaciones que le impone el presente artículo, el juez o la Corte en su caso, le impondrá de plano una multa de 25 a 300 pesos, sin perjuicio de la acción penal que podrá intentar la parte interesada.

Si se redarguye de falsa la copia, el juez mandará confrontarla en términos legales.

Artículo 737.

La copia a que se refiere el anterior artículo, será pedida precisamente por conduelo del juez de distrito ante quien se siga el juicio de amparo, y se expedirá a costa de quien la pida, excepto en los amparos por actos contra la vida o la libertad del hombre, o por algún otro acto de los señalados en el artículo 22 de la Constitución Federal; en estos casos se expedirán sin costo alguno para la parte agraviada.

Artículo 738.

Cuando la copia que se pida sea demasiado extensa y el juez entendiere que es notoriamente frívola o impertinente, la denegará de plano. Cuando se trate de actuaciones concluidas, se podrán pedir originales, siempre que esto no cause perjuicio a tercero; y concluido el amparo deberán ser devueltas a la autoridad u oficina que las hubiere proporcionado.

Artículo 739.

Las pruebas se recibirán públicamente. Las partes y el tercer perjudicado tendrán derecho para imponerse de las escritas, y asistir al acto en que los testigos rindan sus declaraciones, para hacerles las preguntas que estimen conducentes y para oponer las tachas que proceden conforme a este Código, sin que para probarlas se conceda nuevo término.

No se podrán presentar más de cinco testigos sobre el mismo hecho.

Artículo 740.

Concluido el término de prueba, se

pondrá el expediente en la secretaría del Juzgado por seis días comunes, para alegar. El agente del Ministerio Público debe alegar en todo caso.

Artículo 741.

Transcurrido el término fijado en el artículo anterior y sin más trámite, el juez, dentro de ocho días, pronunciará su sentencia, sólo concediendo o negando el amparo y sin resolver cuestiones sobre daños o perjuicios, ni aun sobre costas. Notificada la sentencia a las partes y sin nueva citación, remitirá los autos a la Suprema Corte para la revisión.

Artículo 742.

Las sentencias pronunciadas por los jueces se fundarán precisamente en el texto constitucional de cuya aplicación se trate; y las proposiciones resolutivas de aquellas expresarán el acto o actos contra los que se conceda un amparo. Queda, en consecuencia, prohibida la frase de: «se concede el amparo al quejoso contra los actos de que se queja.»

Artículo 743.

En toda sentencia de amparo, se apreciará el acto reclamado tal cual aparezca probado ante la autoridad responsable.

Por consiguiente, sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, y no las que se hubieren omitido pudiendo haberlas presentado ante la autoridad de referencia en su oportunidad, para comprobar los hechos que fueron objeto de la resolución reclamada en el amparo.

Artículo 744.

Siempre que los jueces de distrito declaren improcedente el amparo o lo nieguen por haberse interpuesto sin motivo, impondrán a los promoventes, a sus representantes o abogados, una multa que no baje de 10 ni exceda de 500 pesos. Aunque los jueces no hayan impuesto la multa, podrá imponerla la Suprema Corte aun en los casos de desistimiento del quejoso. Podrá también modificar o declarar insubsistente la multa que se hubiese impuesto.

La multa a que se refiere este artículo, será siempre impuesta por el juez de distrito o la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, a cualquiera de las partes que haya pedido término probatorio y no haya rendido prueba, o la haya rendido inconducente.

Sólo la insolvencia comprobada en autos, podrá eximir del pago de estas multas.

Artículo 745.

Las sentencias de los jueces, los autos de sobreseimiento y las resoluciones que declaren improcedente el amparo, no pueden ejecutarse ni aun con la conformidad de las partes, antes de la revisión de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 746.

Cuando la Suprema Corte encuentre al revisar un amparo, que éste tiene con otro u otros una conexión tal, que haga necesario o conveniente que todos ellos se vean en una sola sesión o en varias continuadas, podrá ordenarlo así, designando un solo ministro revisor, para dichos amparos.

Las partes pueden pedir esta acumulación y la Corte resolverá lo que proceda en justicia.

SECCIÓN VIII.

Del sobreseimiento.

Artículo 747.

Procede el sobreseimiento:

I. Cuando el actor se desiste de la demanda;

II. Cuando muere durante el juicio, si la garantía violada afecta solo a su persona. Si trasciende a sus bienes, el juicio seguirá adelante hasta pronunciarse sentencia definitiva, sin perjuicio de que e! representante de la sucesión pueda desistiese;

III. En los casos de improcedencia que ocurran o aparezcan durante el juicio.

Artículo 748.

El sobreseimiento no prejuzga la res-

ponsabilidad en que haya podido incurrir la autoridad ejecutora; quedando expedidos los derechos de los interesados para hacerla efectiva ante los jueces competentes.

Artículo 749.

El auto de sobreseimiento se notificará a las partes, y sin otro trámite, se remitirá el expediente a la Suprema Corte para su revisión.

Artículo 750.

Para la revisión de los autos de improcedencia, sobreseimiento v sentencias que pronuncien los jueces de distrito en el juicio de amparo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia dentro de cuarenta y ocho horas, cordadas desde que se notifiquen dichas resoluciones.

SECCIÓN IX.

De las sentencias y demás resoluciones de la Suprema Corte.

Artículo 751.

Recibido el expediente en la Suprema Corte, el presidente de ésta señalará un término que no exceda de ocho días para que los interesados tomen apuntes en la Secretaría respectiva y ésta haga su extracto, que debe comprender lo substancial de la demanda de amparo, de los informes de la autoridad responsable, de las pruebas rendidas y de los alegatos presentados. En seguida, el mismo expediente pasará al estudio del ministro revisor, quien no puede detenerlo por más de diez días, para preparar el proyecto de sentencia de que ha de dar cuenta; y devuelto, el presidente señalará día en que ha de tener lugar la revisión, observándose para ésta riguroso orden cronológico en cada una de las secretarías.

Artículo 752.

El primer término señalado en el artículo anterior, es improrrogable para los interesados, quienes desde luego pueden presentar alegatos. El Tribunal Pleno, tratándose de negocios de libertad personal o de otros urgentes, puede restringir los plazos ya señalados, así como respecto de expedientes muy voluminosos o que contengan cuestiones difíciles, puede ampliar el segundo; pero de modo que después de esa prórroga la revisión no se demore más.

Artículo 753.

Al hacerse la revisión, la Suprema Corte puede con calidad de para mejor proveer o para suplir las irregularidades que se hayan cometido, mandar practicar las diligencias que estime necesarias; en este caso señalará nuevo término para la revisión, al recibirse el expediente.

Artículo 754.

La revisión de un juicio de amparo no puede verificarse en tribunal Pleno, sin la concurrencia, cuando menos, de nueve de los ministros. En ella, el secretario dará cuenta de la resolución que ha de revisarse, con las demás constancias del expediente, que se estimen necesarias y del proyecto de sentencia del ministro revisor. En este acto, si alguno o varios de los ministros desean imponerse personalmente de los autos, se suspenderá la revisión por uno o dos turnos de la secretaría respectiva, permaneciendo entre tanto el expediente en poder de ésta, a disposición de los ministros. Transcurrido el término fijado, se pondrá a discusión el negocio; y suficientemente discutido, a juicio de la mayoría de los ministros presentes, se procederá a la votación nominal en el sentido de confirmar, revocar o modificar la resolución del juez de distrito. Siempre que los interesados hayan presentado en sus alegatos o se proponga en la discusión por alguno de los ministros alguna de las causas de improcedencia, la votación se tomará de preferencia sobre este punto.

Artículo 755.

Inmediatamente después de la votación, el Presidente declarará el resultado de ésta, expresando si el amparó se concede, se niega o se sobresee respecto de él. Cuando el proyecto del ministro revisor fuese aprobado, lo será la sentencia; en caso contrario, el Presidente designará el ministro que la ha de redactar, y expondrá los

fundamentos de la mayoría, que se consignarán en el acta así como el número de votos que haya habido en pro y en contra

En toda sentencia de la Suprema Corte se expresará quien ha sido el ministro ponente.

Artículo 756.

La revisión se extenderá a todos los procedimientos del inferior, y especialmente al auto en que se haya concedido o negado la suspensión del acto, si antes no se hubiere revisado.

Artículo 757.

Cuando al revisar cualquier acto del juez de distrito, la Corte encontrare que no se ha sujetado en sus resoluciones a lo que dispone este capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido dicho juez, lo consignará al tribunal de circuito competente.

Artículo 758.

Siempre que al revisarse las sentencias de amparo, los autos de improcedencia o sobreseimiento aparezca que la violación de garantías de que se trata constituye un delito que deba perseguirse de oficio, la autoridad responsable será consignada por la Corte, al tribunal competente.

Artículo 759.

La Suprema Corte de Justicia, y los jueces de distrito en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclame, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún caso.

Artículo 760.

La sentencia que conceda un amparó, tendrá por objeto restablecer al quejoso en el pleno goce de la garantía constitucional violada, restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en el caso de que el acto reclamado sea de carácter negativo por parte de la autoridad responsable, el efecto del amparo será el de obligar a dicha autoridad a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate, y a cumplir de su parte lo que esa garantía exija.

Artículo 761.

Las sentencias de amparo sólo favorecen a los que hayan litigado en el juicio, y no podrán alegarse por otros como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes o providencian que las motivaren.

Artículo 762.

Las ejecutorias de amparo y los votos de la minoría se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación. También se publicarán las sentencias de los jueces de distrito, cuando así lo ordene en su ejecutoria el tribunal revisor.

SECCIÓN X.

Del amparo contra actos judiciales del orden civil.

Artículo 763.

El amparo en asuntos judiciales del orden civil, sólo será procedente conforme al artículo 102 de la Constitución general de la República, cuando fuere interpuesto después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al litigio, y contra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto sea la revocación. En este caso se observarán la tramitación y los requisitos establecidos en este Código para la substanciación y término del juicio de amparo.

Artículo 764.

Cuando en la iniciación o en el curso de un juicio civil, alguno de los litigantes se considerare agraviado por reputar violada en su persona o intereses alguna garantía individual por resoluciones que no tengan el carácter de sentencias definitivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple con los requisitos siguientes:

I. Que promueva oportunamente contra dicha resolución el recurso ordinario que corresponda, reclamando a la vez las violaciones de garantías que haya sufrido,

para que en su oportunidad, sean debidamente consideradas;

II. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución violatoria de garantías, el interesado proteste contra ella expresando las garantías violadas y los fundamentos de la violación;

III. Que si en la iniciación o en el curso del juicio civil se estimaren violadas varias garantías, se expresen todas para que en un solo juicio de amparo sean conocidas y resueltas en una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que se quejare él agraviado.

Artículo 765.

Para los efectos de las disposiciones de esta sección X, se deberá entender por actos judiciales del orden civil:

I. Toda resolución judicial de carácter civil dictada en juicios del mismo orden;

II. Toda resolución que, aunque dictada en juicio criminal, tenga por objeto único la responsabilidad civil del acusado.

Artículo 766.

El acusador o denunciante en un juicio del orden penal podrá intentar el juicio de amparo únicamente por inexacta aplicación de la ley contra las resoluciones que se pronuncien en el incidente de responsabilidad civil; la resolución que en dichos amparos se dicte no podrá nulificar ni modificar en manera alguna la declaración que hagan los tribunales contra los que se haya intentado el amparo, sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado.

Artículo 767.

El juicio de amparo contra los actos judiciales del orden civil por inexacta aplicación de ley, es de estricto derecho; en consecuencia, la resolución que en aquel se dicte, a pesar de lo prevenido en el artículo 759 deberá sujetarse a los términos de la demanda sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ellos.

Artículo 768.

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá llenar los requisitos siguientes:

I. Fijará el acto concreta y claramente, designando la autoridad que lo ejecute o trate de ejecutar;

II. Fijará expresamente la garantía constitucional violada, citando el artículo de la Constitución que la comprenda;

III. Si se trata de inexacta aplicación de ley, deberá citarse la ley aplicada inexactamente, el concepto en que dicha ley, fue aplicada con inexactitud; o bien la ley omitida, que debiendo haberse aplicado, no se aplicó;

IV. En caso de que se trate de aplicación inexacta de varias leyes, deberá explicarse cada concepto de inexactitud, en párrafo separado y numerado. Si la queja se funda en la violación de alguna garantía constitucional, para cuyo examen sea indispensable investigar previamente si se aplicó la ley con inexactitud en el caso de que se trate, el amparo quedará sujeto a los requisitos exigidos en la fracción III y en la presente.

Artículo 769.

Si la demanda no llena los requisitos expresados en el artículo anterior, el juez procederá conforme a lo prevenido en el artículo 729 de este Código.

Artículo 770.

El auto del juez desechando una demanda por falta de los requisitos que señala esta sección, deberá precisamente expresar cuáles son esos requisitos omitidos, a fin de que la parte pueda subsanarlos dentro del término hábil. El juez que no cumpla con esta prevención, quedará sometido a la corrección disciplinaria que le imponga la Suprema Corle al revisar el auto relativo.

Artículo 771.

Cualquiera de las partes interesadas puede reclamar sobre la admisión de una demanda improcedente o sin los requisitos legales; y si así lo hiciere, el juez, previa audiencia del Ministerio Público, cuando no fuere éste el que haya hecho la reclamación,

resolverá lo que proceda. En este caso, si el auto del juez fuere desechando la demanda, remitirá el expediente a la Corte para su revisión. Sí fuere admitiéndola, el auto no será revisable, sino con la sentencia definitiva. El agente del Ministerio Público y el juez, el primero para pedir, y el segundo para dictar su resolución, gozarán del término de veinticuatro horas improrrogables.

Artículo 772.

La personalidad en el juicio de amparo contra la resolución judicial de carácter civil, se acreditará en la forma que lo exija le ley local respectiva, en el juicio a que corresponda la resolución reclamada en el amparo, o en la forma que este Código determina.

Artículo 773.

Las partes podrán pedir el término probatorio. El juez en su caso, y las partes en el suyo, deberán necesariamente fijar con toda claridad el hecho o hechos que se vayan a probar. Las partes en el acto que se les notifique la concesión del término probatorio, si la notificación se hace personalmente, o dentro de las veinticuatro horas siguientes, si se hace por medio de cédula, expresarán la clase de la prueba que van a rendir y fuera de ella ninguna otra será admisible.

Artículo 774.

La interpretación que los tribunales hagan de un hecho dudoso o de un punto opinable de derecho civil, no puede fundar por sí sola la concesión de un amparo por inexacta aplicación de la ley, sino cuando aparezca haberse cometido una inexactitud manifiesta e indudable, ya sea en la fijación del hecho, ya en la aplicación de la ley.

Artículo 775.

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de 15 días contados desde el siguiente al en que fuere notificado el quejoso. Los que estén aumentes del tugaren que se haya dictado la resolución, tendrán 90 días si residen en la República, y 180 sí estuvieren fuera de ella. No se tendrán como ausentes del lugar, los que tengan en él mandatario admitido en el juicio en que se haya dictado la resolución, motivo del amparo, o hubiesen señalado casa para las notificaciones.

Artículo 776.

Si la sentencia causa del amparo, no hubiese sido notificada y se prueba, en el curso del juicio, que el quejoso tuvo conocimiento de dicha sentencia, el término expresado en el artículo anterior, se computará desde la fecha en que se pruebe haber tenido el quejoso ese conocimiento.

SECCIÓN XI.

De la ejecución de las sentencias.

Artículo 777.

Pronunciada la ejecutoria, se devolverán los autos al juez de distrito, con testimonio de ella para que cuide de su ejecución. En casos urgentes en que la Corte lo estime necesario, podrá ordenar por telégrafo la ejecución de sus resoluciones.

Artículo 778.

Si la sentencia se refiere a individuos pertenecientes al ejército por violación de la garantía de la libertad personal, la autoridad revisora dará aviso de lo substancial de la sentencia, por conducto de la Secretaría de Justicia a la de Guerra, a fin de que ésta, por la vía más violenta, remueva los inconvenientes que pudieren entorpecer su cumplimiento. Esto, sin perjuicio de que el juez de distrito remita la ejecutoria a dicha Secretaría de Guerra por conducto de la de Justicia.

Artículo 779.

El juez de distrito hará saber sin demora a las partes y a la autoridad responsable la sentencia ejecutoria, para su más pronto y exacto cumplimiento. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, no quedare cumplimentada, cuando el caso lo permita, o en vía de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de distrito ocurrirá al superior inmediato de dicha autoridad para que haga cumplir la

sentencia. Sí la autoridad ejecutora no tuviere superior, el requerimiento se entenderá desde luego con ella misma

Cuando a pesar de este requerimiento no se obedeciere la ejecutoria, el juez procederá como lo previene el artículo 479.

Artículo 780.

Si el retardo en el cumplimiento de la ejecutoria fuere por desobediencia, evasivas o proceder ilegal, de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución, el juez de distrito instruirá proceso a la autoridad responsable del hecho; y si ésta gozare de la inmunidad que conforme a la Constitución Federal o como consecuencia de ella, tienen los altos funcionarios de la Federación o de los Estados, dará cuenta al Congreso Federal o a la Legislatura respectiva para que procedan conforme a sus atribuciones. De la misma manera procederá contra la autoridad ejecutora, si por resistencia de ésta al cumplir la ejecutoría, se consumare de un modo irremediable el acto reclamado.

Artículo 781.

Ningún expediente de amparo por actos contra la vida, contra la libertad individual o por alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal podrá mandarse archivar por el juez de distrito, sino hasta que la ejecutoria quede enteramente cumplimentada.

Artículo 782.

Cuando el acto reclamado conste de distintos hechos y el amparo se hubiere concedido solamente contra uno o algunos de ellos, en los mismos se ejecutará a sentencia, dejando subsistente el acto en todo lo demás,

Artículo 783.

Si cualquiera de las partes o la autoridad responsable creyere que el juez de distrito, por exceso o por defecto, no cumple con la ejecutoria de amparo, podrá ocurrir en queja ante la Corte, en vía de revisión. Con el informe justificativo que rinda dicho juez, el tribunal revisor confirmará o revocará la providencia, absteniéndose siempre de alterar los términos de la ejecutoria. El escrito de los interesados y el informe del juez, se remitirán de la manera que ordena el artículo 725.

Artículo 784.

El que se considere perjudicado por exceso o defecto en la ejecución de alguna sentencia de amparo, podrá acudir en queja al juez del distrito, si se trata de la autoridad responsable.

SECCIÓN XII.

De la Jurisprudencia de la Corte

Artículo 785.

La jurisprudencia que se establezca por la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo, sólo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales.

Artículo 786.

Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia votadas por mayoría de nueve o más de sus miembros, constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario.

Artículo 787.

La jurisprudencia de la Corte en los juicios de amparo es obligatoria para los jueces de distrito.

La misma Suprema Corte respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin embargo, contrariar la jurisprudencia establecida; pero expresando siempre en este caso, las razones para resolverlo así. Estas razones deberán referirse a las que se tuvieren presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría.

Artículo 788.

Cuando las partes en el juicio de amparo invoquen la jurisprudencia de la Corte, lo harán por escrito, expresando el sentido de aquella y designando con precisión las ejecutorias que la hayan formado; en este caso la Corte se ocupará en el estudio del

punto relativo a la jurisprudencia. En la discusión del negocio en lo principal, y en la sentencia que se dicte, se hará mención de los motivos o razones que haya habido para admitir o rechazar la mencionada jurisprudencia.

SECCIÓN XIII.

De la responsabilidad de los juicios de amparo.

Artículo 789.

Los jueces de distrito son responsables en los juicios de amparo, por los delitos que cometan, ya en la substanciación, va en las sentencias de los juicios, en los términos que lo define y castiga el Código Penal del Detrito Federal y Territorios, al tratar de la responsabilidad de funcionarios públicos y este capítulo en los casos que tiene previstos.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia serán responsables cuando infrinjan la presente ley, en los términos de la reglamentaria de 3 de noviembre de 1870.

Artículo 790.

El juez que no suspenda el acto reclamado en los casos de condenación a muerte, será destituido de su empleo y castigado con la pena de 1 a 6 años de prisión. Si la procedencia de la suspensión fuere notoria y no se hubiere decretado por negligencia o descuido, el juez podrá ser suspendido en su empleo por un término que no excederá de 6 meses.

Artículo 791.

El juez que suspenda el acto reclamado en casos indebidos, si procede con dolo, será destituido de su empleo y castigado con pena privativa de libertad de 3 meses a un año; si ha obrado únicamente por negligencia o descuido, podrá ser suspenso en su empleo por un término que no exceda de seis meses.

Artículo 792.

El juez que excarcele a un preso en contra de lo prevenido en el artículo 718, será destituido de su empleo. Si de las diligencias del proceso aparece que con el hecho expresado cometió algún otro delito, sufrirá además las penas que para él designe el Código Penal.

Artículo 793.

El juez que no dé curso oportuno a la petición de que hablan los artículos 724, 725, 783 y 784, remitiendo también el informe que debe rendir, quedará suspenso en su empleo por un término que no exceda de tres meses.

Artículo 794.

La talla de ejecución de las sentencias de la Corte imputable al juez de distrito, se castigará con suspensión de empleo de 1 a tres meses, quedando, además, el juez obligado a pagar a las partes el perjuicio que les haya causado y conservando éstas su derecho para hacer que la sentencia se ejecute.

Artículo 795.

La suspensión de empleo de que hablan los artículos anteriores, comprende la privación del sueldo por el tiempo respectivo.

Artículo 796.

La infracción de los artículos de este capítulo que no tenga pena señalada, se castigará por medio de las siguientes correcciones disciplinarias impuestas por la Suprema Corte de Justicia:

I. Amonestación;

II. Multa de 5 hasta 500 pesos.

III. Suspensión de empleo desde 3 hasta 30 días.

Los funcionarios que deban ser enjuiciados por delitos cometidos en materia de amparo, serán juzgados por el tribunal competente en los términos que para los demás casos de responsabilidad determinan las leyes; pero solamente podrá procederse contra ellos por consignación de la Suprema Corte.

TÍTULO III.

De la jurisdicción voluntaria.

CAPÍTULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 797.

Las diligencias de jurisdicción voluntaria se practicarán por los jueces de distrito con intervención del Ministerio Público.

Artículo 798.

Las promociones se formularán por escrito, cualquiera que sea el interés de que se trate.

Artículo 799.

Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a las prescripciones de este Código, advirtiéndole que el expediente queda por tres días en la secretaría del juzgado para que se imponga de él. El cuarto día se verificará la audiencia, de la cual se levantará el acta respectiva.

Artículo 800.

Los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrezcan se admitirán sin otra citación que la del Ministerio Público.

Artículo 801.

Siempre que a la práctica de las diligencias promovidas se opusiere alguna persona que tenga interés legítimo, se hará contencioso el asunto, y se substanciará la controversia con los trámites establecidos por el juicio que corresponda.

Artículo 802.

Practicadas las diligencias, se pasará el expediente al Ministerio Público, quien podrá promover otras para esclarecer algún punto dudoso, o para subsanar los defectos u omisiones en que se hubiere incurrido.

Artículo 803.

Si del examen que haga el Ministerio Público apareciere que las diligencias practicadas pueden perjudicar a persona cierta y determinada, el juez procederá como está prevenido en el artículo 799 y si dicha persona se opone se cumplirá lo dispuesto por el artículo 801.

Artículo 804.

Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria dé que pueda resultar perjuicio a la Hacienda Pública. Las que se practiquen en contravención a lo dispuesto en este artículo, no producirán efecto legal.

Artículo 805.

Terminadas las diligencias sin oposición de tercero, ni del Ministerio Público, se dará testimonio de ellas al promovente, o se mandarán protocolizar si éste lo pidiere.

Artículo 806.

Las resoluciones que se dicten en los expedientes de jurisdicción voluntaria, tendrán los recursos establecidos para los de la contenciosa.

Artículo 807.

No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa.

CAPÍTULO II.

De las diligencias que promueva la autoridad administrativa.

Artículo 808.

La autoridad administrativa promoverá las diligencias de jurisdicción voluntaria, por conduelo del Ministerio Público.

Artículo 809.

En esta clase de diligencias, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se observarán las prevenciones de las leyes, reglamentos y circulares vigentes que tengan relación con el asunto de que se trate.

CAPÍTULO III.

De las diligencias que se promuevan por los particulares.

Artículo 810.

Los jueces de distrito practicarán las diligencias que soliciten los particulares, siempre que ellas estén autorizadas por una ley federal.

Artículo 811.

El Ministerio Público presenciará las declaraciones y podrá repreguntar y tachar a los testigos en los términos prevenidos por la jurisdicción contenciosa.

Artículo 812.

Si los testigos no fueren conocidos del juez, del secretario ni del Ministerio Público, el promovente debe presentar otros dos que sean conocidos y que abonen a los primeros.

TRANSITORIOS.

Artículo 1º.

Este Código comenzará a regir el 5 de febrero del año de 1909.

Artículo 2º.

El recurso de casación que se interponga antes de la expresada fecha, se regirá por el Código de 6 de octubre de 1897.

Artículo 3º.

Los términos pendientes en 5 de febrero de 1909, se computarán conforme a la ley que se reforma.

Artículo 4º.

Quedan derogadas las leyes de procedimientos federales en el ramo civil, anteriores a esta fecha.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, a 26 de diciembre de 1908.- PORFIRIO DIAZ.- Al C. Lic. Justino Fernández, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia.- Presente.

Y lo comunico a Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.- Libertad y Constitución. México, diciembre 26 de 1908.- FERNÁNDEZ

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo en relación al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Promulgado ya el nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles de conformidad con la autorización que para reformar el anterior, otorgó al Ejecutivo el decreto de fecha 24 de mayo de 1906, quedaba solamente por cumplir la disposición del decreto de fecha 13 de diciembre de 1907, que al prorrogar el plazo de aquella facultad, ordenó se diera cuenta del uso que de ella se hubiere hecho, en el período de sesiones inmediato a la expedición de dicho Código. La mejor y cabal cuenta de aquel uso no puede ser otra que dar a conocer los motivos y razones que se tuvieron presentes para acordar las modificaciones, supresiones y adiciones que se han hecho al Código anterior, fundiendo en un solo principio el elemento racional y el histórico, y justificando, al contraste de las disposiciones precedentes, las novedades de la reforma.

Acatando así la prevención del último decreto mencionado, el C. Presidente de la República ha tenido a bien rendir al H. Congreso de la Unión, por conducto de esta Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia, el informe siguiente:

Si Códigos seculares han sufrido indispensables reformas en su funcionamiento, en el transcurso más o menos dilatado de los tiempos, por cuanto la aplicación de alguno de sus preceptos impedía una recta administración de justicia, ya porque le causaba demora, ya porque ponían algún otro trastorno en ella, con tanta o mayor razón debía esto ocurrir tratándose de un Código que se expedía por primera vez en la República, no en la esfera común, sino para el fuero federal, en que se debaten ante los tribunales asuntos y cuestiones directamente enraizados en la Constitución, los cuales reclaman trámites adecuados de especial

orden jurídico y de carácter extraño por completo a legislaciones anteriores.

Materias hay en ese Código sumamente complejas y difíciles que causan inquietud a la sociedad y confunden con frecuencia a los tribunales, como lo es por su propia índole, sirva de ejemplo, el amparo de garantías individuales. Así, puesta la mira en la conveniencia y el bien públicos, cual es el requisito principal de toda ley y debe ser su más esencial carácter, se ha cuidado de corregir los defectos de que adolece aquel primer Código expresado, salvar sus aparentes o reales contradicciones, suplir sus notorios vacíos, y en una palabra, acomodarlo a las necesidades sociales mediante las reformas que se juzgaron indispensables.

Grande es sin duda la importancia de la materia de que se trata, ya se la considere bajo el aspecto de su aplicación diaria, ya bajo el de su trascendencia en el orden social de la Nación; porque la ritualidad de los procedimientos no debe lomarse sólo como el medio de dar orden, concisión y claridad a los litigios, sino que es, a la vez, una verdadera garantía individual para el ejercicio de todos los derechos constitucionales.

Sin un sistema de actuaciones preciso y riguroso, la administración de justicia sería arbitraria y desigual; y sólo definiendo con método y claridad las diferentes pretensiones que en los juicios del ramo federal se deducen, es como podrá llegarse a conseguir ilustradamente en cada caso un fallo justo.

El nuevo Código ha procurado suplir el silencio, obscuridad o insuficiencia del anterior y procediendo con el más riguroso sistema, sin dejarse avasallar por la vaguedad que ha sido las más veces causa de extravío, ofrece nuevas divisiones y preceptos más conformes con el desenvolvimiento y la expresión de las relaciones jurídicas en el ramo federal.

Sin embargo, en este ramo como en todos los demás de cualquiera ciencia, rio son demasiadas las verdades que han salido del agitado mar de la polémica para brillar en la región tranquila del axioma.

Y si en esta virtud las leyes sustantivas no están exentas de las alteraciones que el trascurso de los tiempos trae consigo y les impone, con mayor razón tienen que ser mudables las leyes complementarias o adjetivas que fijan los procedimientos judiciales.

Objeto final de la ciencia del derecho, que sin esto fuera una abstracción inútil, es la solución práctica y legal de las numerosísimas dificultades que diariamente se presentan; y por lo tanto, las leyes adjetivas tienen que adecuarse a todas las épocas y a todos los momentos, ya que entrañan el arte tan difícil de poner la ley en acción, restringiendo o extendiendo su aplicación a las innumerables cuestiones a que dan origen el conflicto de los intereses y la variedad de las relaciones sociales y, en esta materia federal, el especial carácter de nuestras instituciones jurídicas.

Pero por notables que sean las reformas que se han hecho en el nuevo Código, como los principios de que emanan son fijos y los mismos que dieron ser al Código anterior, es fuerza que subsistan y que íntegramente sean transcritos la mayoría de sus artículos. Estos, pues, no ameritan particular explicación; pues si se han conservado intactos es porque se ciñen debidamente a los principios técnicos que rigen la materia, y no ha habido motivo alguno, bajo otros respectos, que hiciera necesaria su reforma.

En cuanto a los motivos y razones que fundan las modificaciones hechas, se expresan concretamente a continuación, siguiendo el orden mismo en que se hallan distribuidas las materias en el Código ya vigente.

TÍTULO I.

Reglas generales.

CAPÍTULO I.

De la personalidad de los litigantes.

En este capítulo se han introducido únicamente dos reformas. La primera, en el artículo 4º que no permitía la representación del apoderado en juicio mediante carta-poder, sino en los casos en que el interés no excediera de cien pesos; se amplió esta

cantidad fijándola en la suma de mil pesos, porque no se considera justo, que, dominando en el Código Federal un espíritu más amplio y menos sujeto a restricciones que los del orden común, muy particularmente en todas aquellas formalidades que obstruyen, dificultan o hacen más costoso el procedimiento, se determinara una cantidad inferior a la que se consigna en el fuero común (artículo 2383 del Código Civil del Distrito Federal). Por esa razón parecía más conveniente seguir la regla de ese fuero, y se fijó en este artículo la suma de un mil pesos.

La segunda reforma consiste en haber aclarado el sentido de la fracción última del artículo 6º de la ley anterior, que estaba redactada de una manera ambigua, y en haberle agregado las palabras "nombren nuevo apoderado." En efecto, esa fracción última prevenía que en los casos de muerte o interdicción del mandante, si el apoderado no presentaba nuevo poder de los herederos o del tutor en su caso, el juez debía citar a aquellos interesados para que, dentro del plazo que les señalara con ese fin aceptaran su personalidad en los autos. Redactada así esta fracción, además de ser vaga porque no expresaba con precisión a que personalidad se refería, si a la de los interesados, o a la del anterior mandatario, resultaba también demasiado dura, porque el juez debía imponer, según el texto de la ley, una representación determinada contra la voluntad y el derecho de los interesados en el juicio. Esta disposición se ha corregido, y con las palabras que se le agregaron, faculta a los interesados para que dentro del plazo que se les fije, en el caso a que se contrae, nombren nuevo apoderado o acepten la representación del anterior.

CAPÍTULO VII.

De la substanciación de las competencias.

No habiéndose hecho modificación alguna en los capítulos II al VI, quedaron literalmente trascritos en el nuevo Código.

El artículo 33 del capítulo VII se adicionó con la fracción VI, que hoy figura en él, para hacer extensivo su precepto a las competencias que puedan suscitarse entre los tribunales militares con los federales o con los de los Estados, del Distrito y Territorios, pues siendo estas competencias posibles, aunque probablemente remotísimas, es indudable que deben estar previstas y categóricamente comprendidas en la ley.

En los artículos 35, 48, 51, 55, y 58 se han hecho solamente las ligeras modificaciones que reclamaba la concordancia de estos preceptos con la ley Orgánica del Poder Judicial, pues habiendo ésta dividido entre las Salas 1ª y 2ª de la Corte, la facultad para resolver competencias, que en la ley anterior correspondía exclusivamente a la 1ª Sala, era necesario corregir el texto de los artículos citados, sustituyendo a las palabras “la 1ª Sala" estas otras "la Sala respectiva," que satisfacen debidamente aquella concordancia.

CAPÍTULO VIII.

De la acumulación de autos.

Al detallar el procedimiento que comprende esta materia, el artículo 140 del Código anterior prevenía que en la misma audiencia en que se hacía la relación del asunto, pronunciara el juez su resolución. Pero como ésta, en la generalidad de los casos, suele entrañar dificultades en su estudio, que, no pudiendo vencerse inmediatamente o siendo de carácter complicado, no permiten que acto continuo de oída la relación, se pueda pronunciar un fallo perfectamente justo; o, a lo menos, tanta festinación no es, en verdad, prenda de acierto para resolver con exactitud los problemas jurídicos que son dignos, bajo todos sus aspectos, de más reposado estudio, ha sido conveniente conceder al juez un término de veinticuatro horas para dictar esas resoluciones, y así lo establece el artículo 66 del nuevo Código.

CAPÍTULO IX.

De los impedimentos y recusaciones.

El inciso 1 del artículo 76 estaba anteriormente redactado de tal suerte que no comprendía entre los impedimentos el parentesco por afinidad en línea recta. Para corregir esta irregularidad se adoptaron los términos que expresan ahora claramente el completo contenido de la citada disposición.

El inciso IX del mismo artículo, en su relativo del Código anterior se refería a un proceso en que el litigante fuera arbitro o arbitrador, y esta palabra «proceso» antepuesta, como extremo de una disyuntiva, a juicio civil, estaba significando claramente que la disposición se refería a un proceso criminal; pero este caso no podía ocurrir, y, por tanto, la interpretación, o mejor dicho el texto mismo del inciso, era absurdo, desde el momento en que no puede haber árbitros ni arbitradores en las causas criminales, por estar en éstas interesado esencialmente el derecho público, y ser aquéllos, como su nombre mismo lo expresa, una autoridad particular constituida por la elección privativa de los mismos litigantes, para resolver una contienda determinada o para, procurar una composición amistosa, pero sin autoridad judicial alguna. Por este motivo se consignó el impedimento en los términos que aparecen en su texto, actual, y que de seguro responden mejor al espíritu de la ley y al dictado de la justicia.

El inciso X de este propio artículo existía sumamente exagerado en el Código anterior. En efecto, bastaba, según él, que hubiese habido una recomendación, por insignificante que fuera, dada en cualquier sentido y aun en un tiempo remoto, a un pariente de alguno de los litigantes y sin conocimiento, quizá, de que existiera tal parentesco, para tener por impedido a un juez. Pero tales hechos no constituyen siquiera una presunción poderosa para suponer a un juez sin la probidad ni justificación necesarias para llenar las obligaciones de su oficio, ni mucho menos dominado por alguna pasión que haga vacilar en sus manos la balanza de la justicia; y, por lo tanto, no hay motivo suficiente que justifique la excusa en este caso.

Por otra parte, la administración de justicia sufre entorpecimientos y perjuicios cuando fácilmente se aparta a un juez o magistrado del conocimiento de un negocio, máxime cuando se trata de jueces de distrito cuyos suplentes son legos y residen en lugares apartados del país. Además, es muy frecuente que una de las partes en un juicio se interese vivamente en remover del conocimiento del asunto a un juez que resulta, por integridad, inaccesible, o bien porque a los propósitos ilegítimos de aquella misma parte convenga emplear este género de excusas como un recurso malicioso y de torcidos fines; y, para tales casos, la ley debe ser cauta en extremo, cerrando la entrada a esta clase de medios peligrosos, que el dolo suele convertir en verdaderas armas reprobadas. Por tan importantes motivos quedó restringida la disposición de este inciso en los términos en que ahora la expresan, y que seguramente bastan al objeto de la probidad que se debe esperar de un funcionario

Se agregó, por último, una fracción bajo el número XI estableciendo un impedimento que por su notoria procedencia no requiere expiación alguna.

El artículo 78 es, en substancia, el mismo de la ley anterior; pero habiéndose establecido ya en la Ley Orgánica de Tribunales a quién corresponde calificar los impedimentos, en este artículo se corrigió la redacción en el sentido que reclamaba aquella concordancia.

El artículo 79 contiene una reforma. La ley anterior no expresaba si entretanto se hacía la calificación del impedimento, debía continuar la secuela del juicio o suspenderse la tramitación. La ley actual ha cuidado de llenar este vacío disponiendo que el procedimiento se suspenda, menos en las providencias de carácter urgente. Esta reforma se funda en la intención misma de la ley que admite la posibilidad de ser inhábil el juez, si se acepta como cierta la existencia del impedimento; porque en este caso es consiguiente que fueran nulos ipso jure los procedimientos por él ejecutados, exceptuán-

dose sólo las providencias de carácter urgente, porque, como su carácter mismo lo indica, no admiten dilación alguna y atendiéndolas se evita un mal de mayor significación. Coadyuva también a fundar este precepto la evidente conveniencia de no dar lugar a arbitrariedades, cuyas consecuencias serían difíciles de prever, y que pudieran llevarse a término mientras se califica el impedimento. Esta disposición está, por otra parte, de entero acuerdo con lo que disponen las leyes del orden común.

En el artículo 86 se suprimió el último párrafo de su relativo, que es el artículo 160 del Código anterior, por hallarse consignada la disposición en otro lugar correspondiente.

El artículo 162 del Código anterior podía entenderse en el sentido de que después de decidida afirmativamente una recusación, se abriera un término probatorio de diez días. Pero cabría preguntar ¿cómo puede recibirse a prueba un asunto de cualquiera clase que sea, después de haberse resuelto? Otra fue, sin duda alguna, la mente de este artículo. El recurso de recusación comprende por su naturaleza dos periodos; en el primero se califica si la causa alegada es legítima o admisible conforme a la ley, y en el segundo se resuelve la recusación, según que la causa fuere o no debidamente comprobada. En consecuencia, lo que en aquel artículo quiso expresarse fue que, resuelto el punto sobre legitimidad o admisibilidad de la causa alegada para la recusación, si esa resolución era afirmativa, y la causa se fundaba en hechos, se abriera un término probatorio para justificar ese fundamento. En este sentido quedó claramente redactada la disposición que contiene el artículo 88 del nuevo Código.

El artículo 98 contiene una modificación, usando en el inciso VI la palabra, "incidente"en lugar de la de "recurso." por ser esta última impropia para referirse a las competencias, y resultar tanto más inadecuada, cuanto que se omitió en la misma fracción la frase «o casación,» por haber quedado suprimido en el fuero federal este recurso.

Se agregó en el mismo artículo un inciso, en cuya virtud no son recusables los jueces y magistrados en la ejecución de las sentencias y en los incidentes que surjan con motivo de la misma ejecución. La primera razón de esta reforma es, que estando definida la contienda, han cesado ya los riesgos de la parcialidad, y la parte que obtuvo puede, sin otros temores, confiarse en la ley para exigir el cumplimiento de la sentencia. Otra razón bien poderosa es que en este estado del juicio no debe admitirse obstrucción alguna del procedimiento; y precisamente es el periodo en que el interés de la parte que sucumbió se despierta más vivamente para oponerse a todo trance a que la sentencia se ejecute, siendo la recusación uno de los medios que más frecuentemente se ponen en juego para estorbar ese cumplimiento. De aquí que las leyes comunes prohíban la recusación en ese estado del juicio, y de aquí también que en el presente Código se haya consignado igual disposición correspondiente.

CAPÍTULO X.

De las formalidades judiciales.

Es tendencia bien laudable de los Códigos modernos hacer breve y sencillo el procedimiento, purificándolo de formulismos inútiles, en los cuales, por la inmensa variedad de casos no resulta siempre aplicada la ley exactamente.

Con este propósito el Código Federal de Procedimientos que se ha reformado, establecía el procedimiento verbal para lodos los juicios y prevenía, al mismo tiempo, que los escritos que las partes presentaran se tuviesen como comparecencias. Así se observó durante el tiempo transcurrido desde que se puso en vigor ese Código, pero la experiencia ha venido demostrando que el procedimiento verbal, que no deja de ser verdaderamente escrito, lejos de simplificar la tramitación, complica y demora notablemente el despacho, siendo además de gran incomodidad para el juez, para los empleados judiciales y aun para los mismos interesados. En efecto, es motivo de innegables molestias para los litigantes tener que

concurrir precisamente al juzgado o tribunal para redactar en acta sus comparecencias, y hacer en esa forma sus promociones o defensas, no siéndoles posible, muchas veces, con grave perjuicio de sus derechos, asistir acompañados de sus patronos o abogados; hay además el inconveniente de que, si los interesados son varios, con mucha facilidad mezclan en un acta, o en una serie de actas, puntos diversos, quizá divergentes, y aun pudiera suceder que diametralmente opuestos y a su vez, empleado que recibe o escribe la comparecencia puede carecer del conocimiento bastante, y desde luego no tiene facultad alguna para determinar qué puntos son pertinentes al caso, ni cuáles pueden ser materia de otra promoción o de otro incidente. De todo lo cual resulta que, después de practicadas algunas actuaciones, es ya el procedimiento informe y complicado y confusa al mismo tiempo la sustancia misma, sin manera de corregirse después los efectos de una tramitación viciada y defectuosa. Por otra parte, cada litigante pretende, con razón, redactar su comparecencia, y con el propósito de no incurrir en omisiones, se extiende de tal modo, que ocupa la labor de un escribiente, del secretario y a veces del juez mismo, haciéndoles así verdaderamente imposible atender, como deben, sus otras labores, en el número considerable de negocios que diariamente ocurren y que con toda regularidad se deben ir tramitando y resolviendo en el juzgado o tribunal.

En cambio, el procedimiento escrito ofrece las facilidades de que se puedan llevar y entregar sencillamente en la oficina del tribunal, cualesquiera clase de promociones, sin pérdida de tiempo y sin distraer a los empleados de sus otras labores; permitiendo también al juez, tal procedimiento, examinar, comparar y estudiar las diversas promociones que las partes hayan hecho, para resolver con más acierto, en la quietud de su gabinete, todos los asuntos diarios que puedan presentársele. En esta virtud, el artículo 99 del nuevo Código establece el procedimiento escrito, y deja a salvo la facultad de las partes para expresar su conformidad o interponer recursos verbalmente en el acto de la notificación. Este artículo ordena en su parle final, que las diligencias judiciales y las juntas se hagan constar en actas. Esta disposición simplificará el despacho, lo hará más breve y fácil, y al mismo tiempo satisfará los casos de excepción en que el procedimiento puede con mayor ventaja hacerse constar verbalmente o sea en actas.

Las subsecuentes disposiciones de este capítulo no contienen diferencia alguna respecto de sus predecesoras en el Código anterior, sino solamente en el sentido de hacerlas adecuadas y concordantes con la forma escrita del procedimiento.

El único artículo que contiene una reforma de índole distinta es el 113. La disposición anterior relativa dejaba a salvo únicamente la facultad del Ministro en turno, designado en el reglamento de la Corte, para imponerse de los asuntos que se ventilan ante este alto tribunal. La actual disposición hace extensiva esa facultad a todos los Ministros, en el tiempo y forma que el expresado reglamento lo determine.

CAPÍTULO XI.

De las notificaciones.

El artículo 186 del Código anterior disponía que los litigantes en la primera diligencia judicial designaran casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hicieran las notificaciones. Evidentemente este artículo incurrió en un error involuntario, porque no todos los actos en que resulta la necesidad de hacer consignar ese dato, pueden propia y jurídicamente llamarse diligencias. Por tal motivo el artículo 112 del actual Código expresa que, en la primera promoción o en la primera diligencia judicial en qué intervenga, deberá el litigante proporcionar el dato mencionado.

La última frase del artículo 191 del Código anterior que decía: «sin necesidad de mandamiento judicial» resultaba completamente inútil en las prevenciones del Código actual y fue, por lo tanto, suprimida.

El artículo 193 del Código anterior

contenía una disposición bastante difícil, por si misma, de ser cabalmente cumplida, y podía producir con mucha frecuencia la nulidad del procedimiento. Si el notificador hace constar en el acta haber entregado la cédula a una persona mayor de catorce años, asienta un hecho difícil de aseverar por su parte; y como éste, ofrecía también aquella disposición otras circunstancias igualmente difíciles de calificar, como las de relaciones de parentesco, y de servidumbre que tengan, con el que deba ser notificado las personas a quienes ha de entregarse la cédula. Es evidentemente más llano, sin declinar en importancia, y de mejores resultados, establecer lo que hoy previene el artículo 119, a saber; que la cédula se entregue a la persona que se halle en la casa, sin necesidad de averiguar el carácter o la relación que guarde con el que deba ser notificado.

La disposición del artículo 194 del Código anterior podía ocasionar con frecuencia que fuese juzgado v sentenciado un ausente, no obstante que la ley sustantiva vigila con solícito cuidado la defensa de esos derechos y los rodea de cuantos requisitos puede dictar la previsión. Cierto es que no se trata en este caso de verdadera ausencia legal, en el sentido de desaparición definitiva, y por eso es aplicable lo que más adelante previene el artículo 125, pero la ley, para todo evento, debe garantizar de un modo absoluto la defensa, que es de derecho natural, no renunciable ni aun por el mismo interesado, y no permitir que se hagan en otra forma las notificaciones personales, establecidas así tan necesaria como esencialmente en los juicios. Por eso se ha sustituido la disposición citada con la que contiene el artículo 120 del nuevo Código, cuyos términos permiten a todo litigante designar el nuevo domicilio de su contrario, si este ha cambiado el lugar de su habitación, o no fuere habido en el que señaló para oír notificaciones; pues ¿quién más interesado que el litigante para indagar y descubrir la residencia de su contrario, de igual manera que lo hace; al instaurar su demanda?

Solamente así se conjura el peligro de juzgar en rebeldía implícita, cual si se hubiere declarado de plano y sin fundamento alguno. Puede suceder que un individuo temerario abuse de esa situación para demorar un juicio; pero, por una parte, no es presumible que alguien quiera ocultarse de tal modo que se secuestre, voluntariamente, privándose de toda relación social; y por otra parte, es preferible esta situación, que siempre encuentra remedio en la pesquisa y vigilancia del litigante, a los abusos y a los graves e irreparables perjuicios que pueden causarse injustamente a un individuo, que por causas independientes de su voluntad ha dejado su habitación sin dar aviso al juez.

En cuanto a la citación de los testigos y demás personas que no sean parte en el juicio, como no tiene la trascendencia que la de los litigantes no exige las mismas solemnidades; y si se previene en el artículo 121 que se haga esta clase de notificaciones por medio del comisario o mozo de oficios.

El artículo 122 establece los casos en que debe hacerse a los interesados notificación personal de igual forma que la primera; adoptándose en esta prevención la del derecho común, cuya conveniencia resulta notoriamente del texto.

El artículo 126 contiene una adición. En el precepto relativo anterior no se preveía el caso, muy posible, de que el residente en el extranjero, no tenga domicilio o habitación conocidos. La expresada adición resuelve el caso refiriéndose al procedimiento que debe corresponderle.

CAPÍTULO XII.

De los exhortos y requisitoria.

Las disposiciones del Código anterior no exigían que los exhortos y las requisitorias fueran firmados más que por el juez de distrito; magistrado de circuito o ministro de la Corte, respectivamente; pero un documento de esta naturaleza debe ir revestido de mayor solemnidad; y puesto que contiene casi siempre inserciones y certificaciones de autos, debe estar autorizado, no sólo con la firma del juez, sino también con la del secretario, cuya genuina función, según el carácter que la ley misma le

confiere, es complementar y autentificar, por decirlo así, la firma del juez.

El articulo 136 exige la legalización de firmas hechas por la Secretaría de Justicia, porque, bajo cualquier aspecto que se considere el documento, tiene que ser cumplimentado en el extranjero; y la Secretaría de Relaciones no se halla siempre en condición de saber si una firma es auténtica o no lo es. Existe, por lo tanto, en este caso la misma razón que hay para exigir idéntica legalización en los exhortos que se dirigen a los tribunales extranjeros, a saber: que la Secretaría de Relaciones tenga constancia oficial v fehaciente de que es auténtica la firma del juez o magistrado puesta en dichos documentos.

En el artículo 140 se hace una rectificación. En su relativo del Código anterior se decía "juez inferior," refiriéndose al "juez local" a quien podía encomendarse la ejecución de una diligencia; pero aquella expresión no era rigurosamente exacta, porque un juez de primera instancia, no es inferior o subalterno de un juez de distrito, sino que es sencillamente juez de otro fuero, con las usuales denominaciones de juez ordinario, común o local.

En los demás artículos de este capítulo aparecen algunas modificaciones, que son más bien correcciones de estilo, conservando intacta la sustancia de sus anteriores relativos.

CAPÍTULO XIII

De los términos judiciales

Establecido en el capítulo X, para todos los juicios, el sistema de substanciación por escrito, fue preciso modificar la redacción del inciso I del artículo 228 del Código anterior, que lleva hoy el número 153, sustituyendo a la frase general y vaga para comparecer, esta otra para contestar a la demanda que es la propia y enteramente adecuada al procedimiento por escrito.

Además de no haberse innovado con esta redacción lo que sin duda quiso expresar la disposición anterior, se tuvo como razón capital para definir este inciso, que produciendo precisamente la contestación a la demanda el cuasi-contrato mutuo entre los litigantes, no puede estar sujeto a prórrogas el término que la ley señala para formularla.

En la fracción VI se omitió la referencia al recurso de casación, como consecuencia de haberse suprimido en la ley actual este recurso según se explicará en su lugar respectivo.

El artículo 154 se adicionó con un nuevo inciso, que es el que obra en el número 6º, y que dentro del término que fija, comprendí; todos aquellos casos a los cuales la ley no se haya referido expresamente para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho.

CAPÍTULO XIV.

De las diligencias preparatorias.

La única reforma que ofrece este capítulo es la contenida en la fracción VI con que se adicionó el artículo 157. En ella se prevé un caso importante y que puede ocurrir con alguna frecuencia, a saber: cuando hubiere temor de que desaparezcan las huellas materiales, objetos, situaciones de lugar, etc., a que deba i referirse un acto preparatorio. Para satisfacer esta previsión se establece la diligencia de inspección judicial correspondiente.

CAPÍTULO XV.

De las providencias precautorias.

El fundamento en que se apoya esta clase de medidas prudentes y previsoras, es la necesidad misma de practicarlas, en virtud de la urgencia del caso para el cual se solicitan. Pero tratándose de asegurar bienes raíces, como no es posible que se oculten, resulta exagerado sujetarlos a un secuestro, y al objeto de la precautoria basta que se comunique únicamente la providencia al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que se hagan las anotaciones preventivas, y se impedirá así que se vendan,

se graven o de cualquiera otra manera se enajeno. En cambio, si la providencia se ha pedido también sobre las rentas y productos de cualquier género de esos bienes y el juez encuentra que es necesario incluir en la precautoria los indicados rendimientos, entonces sí es de practicarse respecto de éstos un embargo en toda forma, con sus efectos legales de depósito o intervención.

En este sentido se concibió la reforma que contiene el artículo 173 del nuevo Código.

CAPÍTULO XVI.

De la demanda.

La fracción II del artículo 264 del Código anterior se hallaba redactada en términos vagos y deficientes en extremo. En primer lugar, siendo necesario presentar con la demanda todos los documentos en que se funde la acción, tanto para esclarecer el derecho que se deduce, como para ofrecer al demandado amplia y sobrada ocasión de buscar títulos y probanzas con que contrarrestarlos, débese solamente eximir al actor de la obligación de ser él quien presente esos documentos, en el caso de que no los tuviere a su disposición, pues aunque de hecho no existieren en su poder, si se hallan a su disposición, debe exigírsele que los recabe antes de proponer su demanda. En segundo lugar, debe la ley definir cuándo se entiende que el ador tiene a su disposición los documentos, porque de otra manera, multitud de interpretaciones, más o menos fundadas en diferentes conceptos, romperían la unidad de la jurisprudencia. Para satisfacer ambos puntos se redactó la disposición que aparece en la fracción 11 del artículo 189 del Código actual.

Se agregó también como un requisito adminicular de la demanda, la fracción III, que ordena la presentación de copias simples, y que es una consecuencia de la innovación relativa a que el procedimiento sea escrito.

CAPÍTULO XVII.

Del emplazamiento.

Obedeciendo a la nueva forma de sustanciación escrita, se cambiaron los términos de los artículos 267 y 268 del Código anterior por los que se expresan en los artículos 192 y 193 del actual, conservando en el fondo sus idénticos preceptos.

De igual manera se han reducido a cuatro fracciones en el artículo 194, las cinco que contenía su anterior relativo número 269, pues se refundieron en la fracción IV del actual las fracciones IV y V anteriores, sin alterarlas sustancialmente.

CAPÍTULO XIX.

De la contestación de la demanda.

El artículo 205 importa una novedad, y es la que conduce a permitir que el demandado, aun después de haber transcurrido el término para contestar la demanda, y aun después de haberla negado absolutamente, proponga alguna excepción que se tunde en hecho superveniente; pues no habiendo éste existido antes de la contestación, sería injusto excluir de la contienda los elementos y la luz que en sí aporte en favor de legítimos derechos.

CAPÍTULO XXI.

Del término probatorio.

El artículo 220 introduce un nuevo requisito, que era necesario para dejar asegurada la responsabilidad pecuniaria que en calidad de multa impone el artículo 221. Esta multa está destinada en su totalidad a la parte contraria, y no correspondiendo participación al erario, no podría ejecutarse mediante alguna facultad coactiva; por eso la ley establece como el medio más eficaz para ejecutarla en su oportunidad, que se exhiba el billete de depósito por la cantidad respectiva. De este requisito se ha exceptuado al Ministerio Público, no solo por la notoria solvencia de los intereses que representa, sino, principalmente, porque el

ministerio Público no puede ser condenado en multas de ninguna clase cuando se trate del cumplimiento de sus funciones, que están por su propia índole exentas de toda malicia.

El artículo 307 del Código anterior, por los términos de su redacción, expresaba claramente que no sólo después de la citación para sentencia, sino también antes, podían los jueces dictar autos para mejor proveer. Por otra parte restringía, es la facultad a los casos en que se fuera a pronunciar sentencia, y como de esta última palabra pudiera deducirse que sólo tratándose de sentencia definitiva se podían proveer tales autos, siendo así que por su naturaleza misma caben cuando se trate de resolver cualquier artículo o incidente, que indispensable modificar aquella disposición, substituyéndola por la que expresa el artículo 232 del nuevo Código, que limita la facultad del juez a la época en que ha citado ya para su resolución, y que adopta esta palabra en lugar de la de sentencia, refiriéndola tanto a lo principal como a los incidentes.

CAPÍTULO XXII.

De la confesión.

El artículo 310 del Código anterior al imponer a todo litigante la obligación de absolver posiciones, establecía como condición de tiempo la de que estuviera ya contestada la demanda, pero como no señalaba el otro extremo del período dentro del cual se debía practicar esa diligencia, era fácil deducir o sostener que aun después de la citación para sentencia podía ser promovida o Cumplimentada. En este sentido además de ser una arma que con la más aparente legalidad podía usarse para alargar indefinidamente, un juicio, entrañaba la irregularidad jurídica de que habiendo ya cesado para las partes toda tramitación, y cuando sólo correspondía al juez pronunciar su sentencia, fuera posible interrumpir con aquellas diligencias el estado final del juicio.

El artículo 237 del Código actual, tija con precisión este punto, señalando, como término para absolver posiciones, desde que esté contestada la demanda hasta antes de la citación para sentencia.

Siendo la confesión la prueba por excelencia, por ser el medio menos sospechoso de obtener la verdad, debe extremarse la previsión para impedir que el absolvente en el acto de rendirla sea aconsejado por una tercera persona; y como esto es muy fácil que suceda, si en el caso de que el absolvente no hable el idioma castellano se le da la facultad de nombrar él mismo su intérprete, como lo permitía la ley anterior, el artículo 244 del Código actual hace imposible todo abuso disponiendo que el juez nombre el intérprete.

CAPÍTULO XXIII.

De los documentos públicos y privados.

El artículo 333 del Código anterior no comprendía en su enumeración una clase de documentos que hacen prueba por sí mismos, porque este carácter tenían en la época en que se extendieron, y porque privarlos de aquella virtud sería dar a la ley que así lo estableciera, un efecto retroactivo. Tales son las certificaciones de constancias existentes en tos archivos parroquiales que se refieran a actos del estado civil, que hubieren sido expedidas con anterioridad al establecimiento del Registro Civil. El artículo 258 del nuevo Código comprende estos documentos entre los de carácter público, y previene respecto de las mismas certificaciones, si fueren o hubieren sido expedidas con posterioridad al establecimiento del Registro Civil, que sean cotejadas por notario público o juez que haga sus veces, para que queden igualmente revestidas de fe pública.

CAPÍTULO XXIV.

Del dictamen pericial.

Siguiendo el espíritu de la ley que establece que el nombramiento de peritos corresponde a los litigantes, y armonizando este precepto con el que dispone que si alguno de ellos no hiciere el nombramiento en el término señalado, lo hará el juez, es

innegable que debe, por igual para ambas partes, quedar previsto el caso de que sus respectivos peritos no acepten el encargo al ser notificados, para que se proceda al nombramiento de otros. En este sentido, el artículo 282 del nuevo Código modificó su anterior relativo, agregándole la frase "nombrados por las partes," para hacer común su disposición a unos y otros peritos.

Conforme al artículo 369 del Código anterior, podía el juez acordar, para mejor proveer, que se ampliara el reconocimiento judicial practicado en autos, o que se practicara uno nuevo por otros peritos de su elección; pero esta facultad abría la puerta a un grave abuso, cuál era el de que el juez, de un modo avieso, anulara una probanza ya legalmente afirmada en autos, llamando a otros peritos que opinaran en contra de los anteriores, sin intervención de las partes, y pretiriendo el derecho de éstas para hacer el nombramiento, derecho solemnemente reconocido en el artículo 277 del nuevo Código. Por eso el artículo 294 de este último ordenamiento previene que esta clase de diligencias, peligrosas en todo caso, se practique por los mismos peritos; y hace imposible toda arbitrariedad por parte del juez, suprimiendo la frase «o por otros de su elección» que consignaba el citado artículo anterior.

CAPÍTULO XXVI.

De los testigos.

El artículo 306 mantiene la prevención de su anterior relativo, pero agrega, tratándose de repreguntas, las restricciones necesarias para concretar la prueba dentro de lo que es pertinente, y evitar la confusión que resultaría si se permitiera formular al testigo interrogaciones ajenas a los hechos que son objeto del cuestionario directo.

CAPÍTULO XXVIII.

Del valor de las pruebas.

Se ha observado en los tribunales una práctica, que consiste en no considerar como probanza la confesión o él reconocimiento, que tanto el actor en su demanda, cuanto el reo en su contestación, hayan hecho acerca de la verdad de algunos puntos, materia de la controversia, sino solamente cuando la parte contraria pide, dentro del término respectivo, que se tenga como parte de su prueba aquellas aseveraciones. Rigorismo injustificado, pues aunque es verdad que la confesión debe hacerse bajo protesta ante el juez; si tal requisito fuera, tratándose de este caso exclusivamente, una razón incontestable, regiría por igual ambas situaciones, es decir, demostraría invariablemente la ineficacia de esta probanza, sea que se propusieran como pruebas aquellas afirmaciones, sea que dejaran de mencionarse dentro del término probatorio.

En el caso de que se trata, la afirmación o reconocimiento de hechos aparece en la raíz del pleito, en el cuasi-contrato mutuo entre los litigantes, en la parte más fundamental del juicio, y sería verdaderamente absurdo desatenderla, sólo porque el litigante contrario omitiera pedir, dentro del término respectivo, que se tuviese como prueba rendida por su parte. Esto seria incurrir en un formulismo contrario a la verdad y que redundaría en perjuicio de los más genuinos intereses de la justicia.

No se afirma que tales aseveraciones hechas por los litigantes en la demanda y en la contestación, sean una confesión judicial con los requisitos de protesta; pero por la solemnidad del acto en que se han producido, por la respetabilidad de los tribunales, ven cumplido acatamiento ala verdad, deben tenerse como probados los hechos que en esas afirmaciones se contienen y contra quien los ha reconocido como propios, pero de ninguna manera en su favor, por ser esto último sencillamente absurdo.

En obsequio a estos motivos, el artículo 329 ofrece un segundo párrafo, que no existía en el anterior relativo, y que da solución justa a los elementos de convicción de que se trata.

CAPÍTULO XXXI.

De los alegatos y vistas.

La fracción III del artículo 444 del Código anterior concedía a las partes, para alegar, sólo una audiencia que no excediera de dos horas; pero este tiempo resultaba notoriamente escaso, por la frecuente necesidad de refutar en réplica los argumentos contrarios; pues si la recapitulación y concierto de todo lo que a cada interesado podía resultar favorable, así corno las deducciones y reflexiones que hiciera para apoyar jurídicamente sus pretensiones, ocupaban por completo las dos horas de la audiencia, o si con intención maliciosa consumía el adversario, por medio de sus informaciones de derecho, todo el resto de la audiencia, ya no podía efectuarse en término hábil la impugnación en réplica, con evidente perjuicio de los litigantes y con menoscabo quizá de la justicia misma.

Por tanto la fracción III del artículo 369 del Código actual concede hasta dos audiencias con dos horas de duración cada una.

El artículo 371, en su última fracción, sólo permite que se difiera o suspenda la vista de un negocio por causa de enfermedad comprobada de alguno de los abogados informantes, siempre que este impedimento para concurrir no exceda de diez días. No señalar este límite, daría margen a aplazar indefinidamente la conclusión de un juicio, muchas veces aun por causas independientes de la voluntad de los mismos litigantes; pues hay enfermedades que se prolongan meses y años. En este sentido quedó enmendada la disposición anterior.

El artículo 373 cierra la entrada al fraude que pudiera cometerse remitiendo a la Sala un voto escrito y que apareciese como firmado por un ministro de la misma, fallecido antes de la votación. Si después de la vista de un asunto en que no se hubiese recogido la votación se enfermare algún ministro y su falta excediere de quince días, debe citarse a nueva vista; pues en ningún caso es conveniente admitir y computar el voto de un magistrado que no se halla presente.

CAPÍTULO XXXIII.

De la sentencia ejecutoriada.

En el artículo 394 quedó suprimida la fracción IV de su anterior equivalente, porque se halla perfectamente comprendida en las prevenciones que para sus respectivos casos, definen las fracciones II y VII actuales. Se omitió también en la fracción III la frase «y denegada casación.» por no existir ya este recurso, como en su lugar se verá.

CAPÍTULO XXXVI.

De la apelación.

En el último párrafo del artículo 419 se ha consignado una disposición nueva, que es de tangible conveniencia. El hecho que la ha motivado consiste en que sucedía con frecuencia que, después de admitida en el efecto devolutivo la apelación de un auto, no se presentaba el apelante a señalar las constancias que debían remitirse al tribunal, ni a ministrar las estampillas para la copia testimoniada de esas constancias, sosteniendo así, con esta omisión, un estado de autos irregular. Como por otra parte, esta conducta del apelante es enteramente igual a la que observaría no presentándose ante el superior a mejorar el recurso dentro del plazo legal, y esta última lo haría acreedor a que se decretase la deserción del recurso, forzoso es que tenga aquella conducta idénticos resultados, pues donde hay la misma razón debe existir la misma disposición de la ley. Por lo tanto, el artículo citado castiga la omisión de que se trata, previniendo que se declare la deserción del recurso.

En la fracción l del artículo 420 se agregó una condición que antes no existía, y es la de exigir que los bienes que se ofrezcan en hipoteca, para caucionar la ejecución de una sentencia, estén ubicados dentro de la jurisdicción del juez que conoce del negocio. La razón de este requisito es que el gravamen hipotecario sobre inmuebles sujetos

al dominio eminente de otra jurisdicción, no puede obedecer a las disposiciones inmediatas de quien no la tiene. Además, ni el juez ni el Ministerio Público se hallan en el caso de juzgar con exactitud respecto a determinadas condiciones de un inmueble que se encuentra, no sólo fuera de su jurisdicción territorial, sino aún quizá fuera de la República.

Los artículos 430, 432 y 433 se modificaron solamente en el sentido de ampliar los términos que señalan, porque en la práctica se observó que eran demasiado angustiosos e insuficientes los que antes fijaban la ley.

Con la supresión de los capítulos 38 y 39 del Código anterior se eliminó del nuevo Código el recurso de casación. El objeto y la importancia de este recurso subsisten incontestables para otras legislaciones. Es sin duda alguna un medio de perfección a que se ha llegado, para satisfacer la deuda que la autoridad pública tiene consigo mismo y con la sociedad, de anular aquellas sentencias que por injustas o erróneas, además de los perjuicios que causan a los particulares, atacan al interés público, violando las leyes que sirven de fundamento al edificio social. Pero, por una parte, es de la esencia de este recurso no ocuparse sino de la sola cuestión de derecho, que es la que interesa a la sociedad, quedando segregadas de su jurisdicción todas las cuestiones de hecho en que la aplicación de la ley no puede ser disputada; y la materia referente a la fijación de estas cuestiones es ardua y contradictoria, por cuanto es dificilísimo, que a veces toca en las regiones de lo moralmente imposible, distinguir clara y netamente el hecho del derecho, cuando se juzga o se legisla. Esto hace nacer en su aplicación las dudas más embarazosas y las cuestiones más metafísicas, al grado de no haberse podido trazar siempre el límite de sus atribuciones de manera firme e invariable. Y por otra parte, existe entre nuestras instituciones una, con carácter propio de juicio, que se halla esencialmente en armonía con los más altos principios y con los más graves intereses sobre que pueda versar el recurso de casación, cuales son el velar por la rigurosa observancia y aplicación de las leyes y mantener incólume el sagrado depósito de la justicia. Este remedio supremo, esta institución elevadísima es el juicio de amparo. En su presencia pierde todo valimiento y resulta sencillamente inútil el recurso de casación. En esta virtud, y además, por lo complicado y formalista de ese recurso, fue necesario suprimirlo.

CAPÍTULO XXXVIII.

De la revisión forzosa.

La revisión forzosa no es, sustancialmente, sino una apelación necesaria: sus trámites son los mismos que los que se siguen para sustanciar este recurso y el de denegada apelación en su caso, con la única variante de que, según su propia condición, se decretarán de oficio.

Para introducir este capítulo se tuvo en cuenta el informe de la Secretaría de Hacienda, que expone como aquilatada razón de este recurso, la necesidad de atender cumplidamente en la contienda judicial, los intereses fiscales, con frecuencia sacrificados a la falta de previsión o de vigilancia de algún agente, que no interpone en tiempo la apelación, y deja por este medio negativo, en calidad de firme, una resolución no sólo infundada, en cuanto a lo jurídico, sino hondamente perjudicial a los intereses de la Nación.

CAPÍTULO XXXIX.

De la deserción de los recursos.

Este capítulo fue debidamente adaptado a la no existencia del recurso de casación, sin otras diferencias que la de exceptuarse al Ministerio Público del pago de daños y perjuicios, porque nunca puede declararse la deserción de un recurso que él haya interpuesto; y la de haberse suprimido el antiguo artículo 562, que resulta innecesario, desde el momento en que ya existe la revisión forzosa.

CAPÍTULO XL.

Dé la ejecución de sentencias.

El artículo 484 del nuevo Código es el mismo 667 del antiguo, que obraba en el capítulo de las tercerías, y que se trasladó a este lugar por ser el que propiamente le corresponde, haciéndosele solamente una modificación que sin alterar su sentido, lo aclara y lo concreta.

CAPÍTULO XLI.

Del secuestro judicial.

El artículo 488 agrega a los casos en que procede el secuestro judicial, los juicios hipotecarios, que no mencionaba el artículo 589 del Código anterior, y en los cuales hay derecho de practicar ejecución cuando así lo disponga la ley.

En el artículo 493 se suprimió la antigua fracción VIII, por reputarse alimentarios los sueldos y pensiones, y porque en los casos en que resulten no serlo, cabe su designación dentro del concepto de alguna de las fracciones que determina el misino artículo.

En el artículo 513 se añadió la condición de que los bienes raíces, cuya propiedad acredite la solvencia del depositario, deben estar ubicados dentro del territorio jurisdiccional del juez, por la misma razón que se ha expuesto al tratar de idéntica reforma en el artículo 420 de este Código.

CAPÍTULO XLII.

De los remates.

En los artículos 521 y 545 se ampliaron los plazos para anunciar la venta de bienes raíces, por ser demasiados cortos los que estaban señalados, quedando hoy asimilados estos términos a los que establece el procedimiento del orden común.

El artículo 627 del Código anterior disponía que el remate de bienes muebles se pregonara tres veces de tres en tres días, por medio de j edictos que se habían de publicar en la forma establecida para los bienes raíces; pero este procedimiento, además de embarazoso, era en extremo difícil de cumplir. Por esta consideración el artículo 526 ordena que el remate de bienes muebles se pregone por medio de edictos que se deberán fijar únicamente en la puerta del juzgado.

Ei artículo 536 permite que las licitaciones se hagan de palabra, en el acto del remate, a diferencia de lo que prevenía la ley anterior, que las declaraba aceptables solamente por escrito.

Ningún inconveniente legal puede existir para que las pujas se hagan verbalmente en el acto del remate, puesto que formuladas ante el juez y su secretario, y consignadas en el acta, quedan investidas de toda la solemnidad y la eficacia externa que les corresponde.

El artículo 551 contiene como única diferencia la aclaración de que, en la almoneda de bienes muebles, el ejecutante puede pedir la adjudicación por la mitad del avalúo, pues tan importante concepto no estaba expresado antes.

CAPÍTULO XLIII

De los incidentes.

Se adicionó este capítulo con el artículo 559 que dice: «Las cuestiones promovidas o seguidas ante una autoridad que no sea judicial, no preocupan el carácter de las partes que intervienen en las controversias judiciales a que aquéllas dieren lugar». Esta prevención era absolutamente necesaria, para evitar conflictos relativos a la personalidad y otros que, consiguientemente, conciernen a la determinación de acciones, puesto que cada origen diferente constituye un derecho o una obligación distinta.

Existen, por ejemplo, algunas controversias que ya como principales, ya como incidentes, emanan directamente de actos o diligencias practicados en el orden administrativo, y exigen para su resolución la intervención judicial. Sea por caso: un

individuo hace un denuncio de terrenos baldíos ante la autoridad administrativa, y durante los trámites respectivos se presenta una oposición. La contención empeñada pasa al conocimiento de la autoridad judicial, y allí surge esta cuestión: ¿quién es el actor? Para definirla es evidente que no debe tomarse en cuenta el carácter que hayan asumido los contendientes en el ramo administrativo, sino que necesariamente debe mirarse a la naturaleza de la controversia misma, puesto que según ella, y con estricta sujeción a los principios jurídicos, es como se habrá de admitir la personalidad y delinear el carácter de cada litigante.

En los demás artículos aparecen pequeñas alteraciones, sin más significación que la de guardar concordancia con la forma de procedimiento por escrito.

CAPÍTULO XLVII.

De los medios de apremio.

No se hallaba en el Código anterior este importante capítulo sobre las medidas de apremio que pueden emplear los jueces para hacer cumplir sus mandatos, y que son tan indispensables para sancionar con alguna pena el respeto debido a sus determinaciones. Para llenar este vacío se introdujo el artículo 588º, único de este capítulo, que define y establece esos medios de apremio, siguiendo las inspiraciones de la ley común.

TÍTULO II.

CAPÍTULO II.

Del juicio sumario.

La ley anterior (art. 696) admitía la apelación en el efecto devolutivo, respectó de los autos y sentencias que se dictaran en los juicios sumarios; pero si la materia propia de estos juicios es de tal naturaleza que exige una sustanciación rápida y términos que no permitan dilatar la última resolución, es lógico, siguiendo las reglas del derecho común, limitar el recurso de apelación a los asuntos cuyo interés exceda de quinientos pesos. En este sentido lo establece el actual artículo 596º.

El artículo 597° es nuevo y se dictó, lo mismo que el artículo 598°, como un consiguiente obligado de la existencia de los juicios ejecutivos que designa la fracción III del artículo 590º. El secuestro y el remate, en su caso, no requieren para esta clase de juicios reglas especiales, sino que deben, invariablemente, practicarse conforme a las disposiciones que se han establecido en los capítulos XLI y XLII de este título, y a éstos, precisamente, se refiere el artículo 598º.

Siguiendo el método del Código anterior, se ha dividido este capítulo en secciones, para comprender en ellas los preceptos singulares que, según su condición, requiere cada una de las controversias sujetas genéricamente a decidirse en la vía sumaria.

SECCIÓN II.

Del juicio sobre posesión interina.

Ninguna reforma se hizo en la sección I, pues las pequeñas diferencias que aparecen en los artículos 601 y 611, son únicamente aclaratorias y no necesitan, por lo tanto, explicación.

La sección II contiene dos novedades de verdadera importancia. La primera guarda relación con el segundo párrafo del artículo 710 del Código anterior. En él se establecía que la Hacienda Pública, y en general las autoridades federales, podían retener o recobrar la posesión interina de una cosa raíz en la vía administrativa, Pero si respecto de retener la posesión en esta forma no surgen graves inconvenientes, por cuanto el que se considere perjudicado puede ocurrir ante la autoridad judicial a deducir la acción correspondiente, sin haber sufrido de hecho alteración alguna en las condiciones en que antes se hallaba; no sucede lo mismo tratándose del acto de recobrar la posesión en la vía administrativa, porque entonces estos procedimientos alteran de hecho y de derecho el estado de aquella posesión, y pueden constituir un verdadero despojo.

Si en todos los tiempos han olor-gado las leyes su constante protección al poseedor, de tal manera, que sólo mediante la autoridad judicial, han consentido que se le pueda privar de la posesión, salvo el caso de despojo y recobro inmediato de ella, hay entre nosotros algo profundamente más respetable que la ley común; hay en la legislación de México una institución veneranda, hay la garantía constitucional que consagran los artículos 16º y 17º de la Carta Fundamental de la República. Ella no permite molestar a nadie en su posesión sino en virtud de mandamiento escrito, de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y mucho menos permite que nadie, absolutamente nadie, ejerza violencia para reclamar su derecho, ya que los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia. De esto claramente se deduce que, aun en el caso en que la Hacienda Pública o cualquiera autoridad se crea con el más perfecto derecho para recobrar la posesión de una cosa raíz que disfruta algún individuo, no puede por sí y ante si arrebatársela, sino que debe recurrir a los tribunales para quitársela legalmente. En acatamiento a esta conclusión se suprimió, en el segundo párrafo del artículo actual 612 la facultad de recobrar la posesión en la vía administrativa, dejando sólo subsistente la de retenerla en esa forma.

La segunda novedad de esta sección consiste en habérsele adicionado el artículo 614 que prevé un caso no comprendido en la ley anterior. Tal es el de juicios para retener o recobrarla posesión entre particulares, pero que por disposición de la ley deban acudir a los tribunales federales. Este caso puede existir, aunque parezca anómalo, cuando se trate de un bien raíz, que por su ubicación o por otro motivo o accidente, caiga dentro de la jurisdicción federal. Serán entonces aplicables las disposiciones de la ley común, pero con esta estricta sujeción a los términos en que el presente artículo establece la referencia.

Las secciones III, IV y V no acusan más variación que la de haberse sustituido el antiguo nombre de promotor fiscal, por el más propio y exacto de Agente del Ministerio Público, que en esta institución le corresponde.

SECCIÓN VI.

Del apeo y deslinde.

Esta materia se contaba anteriormente entre las diligencias de jurisdicción voluntaria, pero esto, que rompía con nuestras prácticas tradicionales, no era de todo punto justificado; pues en el curso de estas diligencias se desarrollan actos que son por completo independientes de la voluntad de las partes, y que las estrechan no sólo a concurrir ante la presencia judicial, sino a vigilar y defender sus derechos, ya en las informaciones que deben rendir, ya en la fijación de medidas y designación de lugares, ya, por último, en las mismas resoluciones que se dictan. Fue necesario, en consecuencia, trasladar estas cuestiones al lugar en que hoy se encuentran.

CAPÍTULO VI.

SECCIÓN I.

Sobre el juicio de amparo.

La materia en que se ocupa este capítulo es la que imperiosamente ha exigido el mayor número de reformas, y en verdad que con sobra de justificación. Las garantías del hombre despiertan siempre tan grande interés, las cuestiones a que han dado margen son tan arduas y trascendentales, y la extensión a que han llegado abarca tan amplios horizontes, que ha sido forzoso consagrarles especialísima atención y el más profundo estudio al dictarse la ley que debe definirlas y que establece lo concerniente a su recta y cabal aplicación.

Aunque cada uno de los artículos que ofrezca alguna innovación ha de ser pertinentemente explicado, debe considerarse, en general, que el propósito o fin último de la reforma ha sido fijar la naturaleza sui géneris que corresponde al juicio de amparo; destacar de manera señalada y precisa el que se refiere a negocios judiciales del orden civil, y dar, a lo menos, las reglas más

indispensables a que debe sujetar a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

El Código anterior comenzaba el capítulo de amparo copiando el artículo 101º de la Constitución política de la República, como la raíz u origen de este recurso; pero habiéndose dictado últimamente una reforma que limita los actos a que esa disposición se refería, pareció conveniente introducir en el Capítulo esta limitación, y se hizo transcribiendo el texto constitucional reformado, en el artículo 662º del nuevo Código.

En virtud de esta disposición ya no se puede llevar al amparo toda clase de resoluciones judiciales del orden civil; sólo podrán ser materia de él aquellas que, por cualquier motivo que fuere, reúnan las condiciones de la ley, a saber: que el acto consista en una sentencia que ponga fin al litigio y que contra esa sentencia no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto pueda ser la revocación.

No cabe, por lo tanto, amparo contra un auto o contra una sentencia interlocutoria; tampoco cabe contra una definitiva sino cuando ha quedado firme, bien por haberse agotado sus recursos ordinarios, bien porque las partes hayan dejado en absoluto de interponerlos, o porque no los hubieren hecho valer oportunamente.

El artículo 746º del Código anterior determinaba quién podía pedir amparo, y refiriéndose a la mujer casada y al menor de edad, establecía que podían solicitarlo, aun sin intervención de su legítimo representante, siempre que el mío afectara su integridad personal.

La significación de estas dos últimas palabras es tan amplia como vaga; pueden decir tanto, que no resulta admisible la frase en que están usadas para constituir una excepción, como fue, sin duda, la mente de este artículo. Su vaguedad es de tal manera genuina, que no ha habido forma alguna de concretarla en la práctica,

Para evitar esos inconvenientes se concibió y redactó el artículo 664 en los términos que ahora lo consignan, suprimiéndose las palabras integridad personal, y expresándose en su lugar, con toda claridad, los casos especiales a que debe cotí-traerse la excepción, a saber: aquellos en que peligra la vida o la libertad, o en que se trate de actos expresamente prohibidos por el artículo 22º de la Constitución Política de la República.

La notoria importancia y gravedad de tales actos, a la vez que la urgencia con que se debe acudir a impedirlos, justifican plenamente la excepción de que se trata. Pero como en ella se contraria lo que las leyes han establecido en todo tiempo en guarda de los derechos de personas alieni juris, y esto con el fin de darles una representación y una garantía conjuntamente, el minino artículo citado cuida, bajo un aspecto, de la protección inmediata del menor, ordenando que se dicten las providencias urgentes que el caso reclame; y por otro lado, atiende a dejar asegurada una personalidad jurídica que guarde y represente los derechos del individuo, que por su edad, no se halla en condición legal de deducir un juicio que conforme a la Constitución solo puede promoverse y seguirse por quien sea la parte agraviada.

Esta representación puede designarla el menor mismo, si ha cumplido la edad de catorce años, de igual manera que lo establecen las leyes del orden común.

Tal es la génesis del precepto que se contiene en el artículo 664 del nuevo Código. Con esta disposición se consagra el respeto que la ley actual quiso otorgar especialmente a ciertas garantías individuales, y queda al mismo tiempo, completa y jurídicamente asegurada la personalidad de los menores; pues no deja de ser una anomalía suponer que un menor, un niño de ocho o diez años, por ejemplo, pueda tener el criterio suficiente para gobernarse por sí solo en un juicio de amparo.

En los artículos 749º y siguientes hasta el 752º del Código de 1897, se introdujo una novedad respecto de la ley anterior favoreciendo la promoción del amparo cuando se hubiese violado una garantía individual; pero, por una parte, aquel remedio se extendió con exceso a toda clase de garantías, siendo así que, evidentemente,

la demanda de amparo, por lo que mira a las garantías que a la propiedad se refieren, corresponde a la iniciativa y gestión individual de un modo tan completo y exclusivo, que la intromisión de un tercero, cuando de la propiedad se trata, sobre ser anómala y contraria a la naturaleza de aquellas garantías, en muchos casos llegaría hasta a ser perjudicial para los mismos intereses del agraviado, a quien pudiera convenir en conjunto una resolución, aunque una parte de ella apareciera serle adversa. Por otra parte, como la índole del amparo es favorecer al individuo en el goce de sus garantías de hombre, la autorización de la ley permitiendo la intervención de gestores oficiosos, no puede resultar justificada, sino cuando es dado presumir que el ofendido se encuentra de alguna manera impedido para formular una queja, por la violencia que sobre él se ejerza, como cuando se trata de la privación de la libertad o de abusos que la autoridad pueda cometer contra un hombre haciendo sobre él violencia, tales como los de mutilación, marca infamante, azotes, etc., actos que la Constitución ha prohibido expresamente y que son de tal modo graves, que bien merecen la disposición legal que autorice la gestión de un tercero, sujeto siempre a la ratificación del interesado, para no contrariar el espíritu del artículo 102º de la Constitución.

En todos estos casos, aunque la reclamación del amparo esté reservada al ejercicio puramente individual, las leyes deben ser bastante amplias para anatematizar y extinguir tales abusos de la fuerza contra la personalidad humana; y, por lo tanto, deben permitir la intervención de un tercero, aunque siempre en nombre del quejoso; y con tanta más razón deben así establecerlo, cuanto que en la mayoría de casos relativos a actos prohibidos por el artículo 22º de la Constitución, los abusos quedarían consumados de un modo irreparable, si no se impidiera su ejecución mediante una demanda de amparo, que no siempre está el individuo en aptitud de entablar personalmente.

Ahora bien, esto que quiso hacer la ley anterior, no parece expresado según su verdadero espíritu, ron la sola frase «en casos urgentes;» y por esta razón, en el Código actual, se restringe el precepto legal a los casos que se refieren a actos prohibidos por el artículo 22º de la Constitución y a los que tienen por objeto la libertad personal; y para hacer de todo punto eficaz esa disposición, se suprime el requisito de la fianza, y se procura que la responsabilidad de la autoridad sea más seria y efectiva, pues el hecho de no haberse dado el caso de que alguno se haya aventurado en un juicio de esta naturaleza, exponiendo sus intereses por la responsabilidad pecuniaria que se le exigía, está demostrando que la fianza ha sido un obstáculo insuperable para poner en práctica la franquicia que introdujo la ley en los artículos de que se está haciendo mérito.

Todas las reformas a este respecto están contenidas en los artículos 668 y 669 del Código actual.

Asimismo se suprimió la última parte del artículo 749 del Código anterior, que permitía la continuación del juicio hasta su término sin la promoción del quejoso, porque es contraria al artículo 102 de la Constitución, en cuanto que este artículo exige que el amparo se siga a petición de la parte agraviada.

Un concepto de prevención, agresivo al principio de autoridad, y algún tanto demagógico, ha pretendido siempre alejar del juicio de amparo, y aún cerrarle completamente sus puertas a la autoridad contra quien se intenta, lo mismo que a los terceros perjudicados; pero un espíritu más liberal, cada vez que se modifica la ley, introduce nuevos medios al alcance de esa autoridad para que explique y defienda la legalidad de sus actos, y los pone también en manos del tercero para que resguarde sus derechos. En el Código anterior nos encontramos a este respecto varias disposiciones que antes no existían: la autoridad puede rendir pruebas y producir alegatos, lo mismo que el tercero perjudicado; y aunque no se le reconoce el derecho de interponer directamente el recurso de revisión, se le ofrece un medio indirecto de lograrla con que puedan ocurrir en queja a la Suprema Corte (artículo 759)

impetrando su intervención oficiosa,

Sin embargo, la ley no había entrado de lleno en la cuestión, y era tiempo de proponerlo en el sentido que fuere más constitucional, más jurídico y que estuviese en mejor acuerdo con la equidad.

Los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal definen y establecen la naturaleza del amparo, al expresar que es una controversia o juicio contencioso promovido por el agraviado en cada caso, por medio de procedimientos y formas de orden jurídico que la ley determine.

Un juicio tal no puede concebirse sin ciertos elementos constitutivos, que son: cosa controvertida, juez, actor y reo.

Esos elementos se encontraban desde luego en el amparo, con excepción del reo o sea de la parte demandada, sin explicación posible, a no ser la de una prevención contra la autoridad

Pero un juicio así es tan anómalo y absurdo, que jurídicamente no debe sostenerse.

La ley de 14 de diciembre de 1882 parecía dejar entender que el Promotor Fiscal representaba la parte demandada; pero esto es completamente inexacto ante las nociones más rudimentarias del derecho.

El Promotor Fiscal de la Federación, hoy Agente del Ministerio Público, no tiene ninguno de los caracteres que pudieran trazar la silueta de la parte demandada. Nada se pide de él: ningún motivo jurídico le impone el deber u obligación de oponerse a la demanda ni de impedir el juicio mediante su aquiescencia. En innumerables casos, en vez de abogar en favor del acto reclamado, pide contra él y hasta solicita la consignación de la autoridad responsable, sin que esto impida la continuación del juicio ni que la sentencia sea conforme o disconforme con su pedimento. Alguien opondrá que, en el fuero común, el Ministerio Público que es parte actora en el orden penal, muchas veces no pide contra el reo o procesado. Esto es cierto; pero también lo es, que desde el momento en que así lo expresa en el juicio, deja éste de existir, precisamente porque ya no hay parte que sostenga la contención, lo cual no sucede en el amparo.

Siendo lógico e indispensable que, dada la naturaleza jurídica del amparo, haya, parte demandada, se impone la necesidad de imprimir, como es natural, este carácter a la autoridad ejecutora; porque ella es quien da motivo a la queja y contra quien se pide que deje sin efecto el acto reclamado; ella es la causante de ese acto y éste la materia del juicio.

Podría objetarse que una autoridad, con su carácter de tal, no pueda ser parte en un juicio; y que si sus actos pueden dar motivo a quejas y recursos, de esto no se infiere que en esos recursos y quejas, tenga el papel de parte; porque en éstas tiene el deber de informar y justificarse; en aquéllos, el de someterse, por su calidad oficial, a las consecuencias del recurso, según la índole de éste. Todo sería muy cierto tratándose de simples quejas y de simples recursos; pero ese razonamiento no puede aplicarse, por falta de analogía, y carece por ende de toda fuerza y vigor, cuando se trata de un juicio de naturaleza especialísima, del juicio de amparo, en el que, si se prescinde de la autoridad responsable, ya no será posible encontrar una entidad que reúna los caracteres que, en todo juicio, tiene que revestir la parte demandada.

Si se tratara de reformar los artículos 101 y 102 de la Constitución, podría cambiarse al amparo su naturaleza de juicio, dejándole simplemente la de queja o recurso. Pero mientras esos artículos existan, no podemos desentendemos de que el amparo es un verdadero juicio contencioso, al que no es posible dar procedimientos y formas que no sean del orden jurídico, como lo dice el mismo texto constitucional. Así es que, por más que se palpe la prevención que hay de alejar del juicio lo más que sea posible a la autoridad ejecutora, tendencia muy explicable en los que recurren al amparo para apartar de él este elemento de oposición, no puede menos que declarase que a dicha autoridad se le debe reconocer de un modo franco, lógico y sincero su carácter, si bien

sujetándolo a las restricciones que parecen justas, para no dar lugar a que este juicio se convierta en ordinario y pierda su carácter rápido, sencillo y útil a su objeto, que es la protección oportuna en favor del hombre contra, los abusos de la autoridad, en lo que mira a Ion derechos garantizados por el título I de la constitución Federal, cuyas declaraciones y preceptos fundamentales han sido y serán la más preciosa egida de nuestras libertades y el mejor título de gloria para nuestra legislación nacional.

Si la ley asigna al agente del Ministerio Público el carácter de parte, lo hace, porque en efecto coadyuva con el quejoso o con la autoridad responsable, o asume en estas contiendas que interesan al derecho público, el carácter legal que éste exija

En cuanto a los terceros perjudicados, la ley les da entrada al juicio; pero únicamente en lo que basta para no perjudicar su derecho sin defensa de su parte; mayores consideraciones harían del juicio de amparo una controversia ordinaria desnaturalizada y contraria a los fines que se propuso la Constitución al instituir ese juicio.

Los artículos 671 y 672 detallan los pormenores consiguientes a la innovación que queda expuesta, explicándose en ellos, para la debida claridad y para evitar una intromisión indebida, quién es la autoridad responsable y quién el tercero perjudicado, que pueden intervenir en el juicio.

En los artículos 673 al 678 del actual Código se comprenden y modifican los que en la ley anterior llevaban los números del 754 al 756. Estos artículos, que en el Código anterior adolecían del defecto de ser demasiado generales y de abarcar casos enteramente distintos, que la justicia y la equidad exigen sean considerados de diversa manera, han sido divididos en los que obran en la nueva ley, con el objeto precisamente de remediar id mal de que se ha hablado y de establecer regias precisas, hasta donde ha sido posible, para que todo lo relativo a las notificaciones en los juicios de amparo, quede bien definido y tan claro, que se reduzcan al número menor posible las cuestiones, en asunto de tanta trascendencia.

Así, al tratar de la autoridad responsable, se ha conservado el medio de notificación por oficio, tan sólo de las providencias verdaderamente capitales del procedimiento, a efecto de que la manifestación sea oída como corresponde, sin que por tal motivo sufran los intereses de las demás partes que intervienen en el juicio. La idea de la disposición queda completa con lo prescrito en el artículo 676 que fija cuándo se deberán tener por hechas las notificaciones.

Cuando se trata de los presos, la excepcional situación en que están colocados y que los priva de la facultad de asistir libremente a oírlas notificaciones, requiere una forma especial para hacérselas; y en tal virtud, se ha procurado allegar todo género de precauciones, para tener la seguridad de que han sido hechas en los momentos verdaderamente esenciales de todo juicio, cuales son las diligencias de apertura del término probatorio y de la citación para alegar; declarándose que, cuando no se puedan hacer al reo, se entenderán dichas diligencias con su defensor, y sólo en caso extremo de que no pueda ser habida la persona del reo ni la de su representante, se hagan por medio de cédula, como lo establecía el Código reformado; pero asentando en los autos el motivo de haberse hecho la notificación en esta forma.

Cuando las partes tienen la libertad propia para asistir por sí o por medio de sus apoderados o representantes a oír notificaciones en el juzgado, no hay dificultad en mantener el sistema de hacerlas personalmente, si ocurren dentro de las veinticuatro horas de dictada la providencia, o por media de la cédula que se fija en la puerta del juzgado, con todos los requisitos debidos; y así lo ha mantenido la fracción III del artículo 673.

Los demás artículos a que hemos hecho referencia, contienen preceptos aceptados ya por nuestra legislación y sancionados por la práctica, de tal modo, que no parece necesario insistir en explicarlos, bastando expresar que para rodear de seguridades y de garantías un juicio tan

importante, como el de amparo, se creyó conveniente incluirlos en esta sección.

Artículo 679 del Código actual correspondiente al artículo 761 del anterior. Las prescripciones de este artículo se cambiaron por razón de orden al lugar que hoy ocupan en el Código, modificándolas en el sentido de que se incluirán en el cómputo de los términos, los domingos y días de fiesta nacional, solamente en los que se fijan para la suspensión del acto reclamado y para que la autoridad ejecutora rinda su primer informe, por ser éstos los casos de verdadera urgencia en el amparo; y se dejaron dentro de las reglas generales todos los demás términos, inclusive el que preveía el Código anterior para entablar la demanda de amparo, por no haber las mismas razones de urgencia y ser más liberal el precepto que se establece.

Artículo 680 del nuevo Código que corresponde al artículo 756 del reformado. Este último artículo contenía un precepto demasiado general, y que el carácter mismo del amparo no bastaba a explicar. Establecía que el Promotor Fiscal (hoy Agente del Ministerio Público) cuidara de que ningún juicio de esta naturaleza quedara paralizado hasta dictarse una resolución definitiva, sin atender a que, si bien hay casos en que un interés público, claramente definido, exige la continuación del juicio, hay otros, y forman la mayoría, en que no existe ese interés.

El precepto que contiene el nuevo Código, enumera los casos de primera categoría, reduciéndolos a los de pena de muerte, a los que se refieren a la libertad y a los que comprenden actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y establece para todos los demás casos algo que se ha considerado como muy importante para descargar a los tribunales federales del cúmulo de amparos que entorpecía su marcha; declara: que la falta de promoción del quejoso durante veinte días continuos después de vencido el término, hace presumir el desistimiento del amparo, obliga al Ministerio Público a pedir el sobreseimiento y al juez a dictarlo aun sin pedimento de aquél. Si el interés del quejoso es bastante para que en realidad justifique su apelación al medió excepcional que nuestras leyes establecen para hacer efectiva una garantía, el quejoso, a no dudarlo, estará pendiente de que no se venza un término; si no lo es, lo que se manifestaría por el hecho de descuidar ese vencimiento, nuestras leyes no deben alentar ese espíritu de litigio que desvirtúa por completo una institución que debe conservar toda la elevación de miras que el legislador ha querido darle, como un medio supremo de mantener incólumes las garantías constitucionales, y no de ofrecer un recurso extraordinario del que tanto se ha abusado en la práctica.

El artículo 681 contiene una disposición cuya reforma se revela útil y necesaria en la expresión misma de su texto. En el juicio de amparo, más que en ningún otro, suelen acudir en queja, simultáneamente, varios individuos, cuando a todos perjudica por idéntico motivo el acto de la autoridad que redaman; y en tales casos sería sumamente embarazoso y aun contrario a los intereses de los propios quejosos, como sin duda lo es al fin mismo de la ley, que las diligencias judiciales hubieran de desahogarse con cada uno de los interesados separadamente. Además, es de exacta aplicación a este precepto la razón jurídica en que descansa el artículo 3º a que se hace referencia.

Artículos 682 al 688, correspondientes a los números 757 a 762 del Código anterior. Las disposiciones citadas han quedado con ligeras reformas en el Código, y sólo merecen particular mención los artículos 686 y 687, correspondientes a los anteriores 757 y 761; pues por lo que mira al primero, se ha modificado suprimiéndole la fracción II que se refiere a que la Corte exigirá la responsabilidad en que hayan incurrido los jueces y los agentes por demoras en el despacho, porque esa es una facultad que en todo caso compete a aquel alto Cuerpo, aun sin dicha prescripción, y que ejercitará cuando lo juzgue conveniente; y, en cambio, se sanciona una práctica que establece el verdadero medio por el cual la Corte y los interesados puedan darse cuenta de la marcha posterior del expediente de amparo en el Supremo Tribunal del país. Respecto

del segundo precepto se ha cuidado de aclarar de la manera más completa y terminante que todos los días, sin excepción alguna, son hábiles para la interposición del amparo, y que cuando se trata de garantías tan esenciales, cuales son las que resguardan la vida y la libertad de la persona humana, no sólo todos los días, sino todas las horas, aun de la noche, son útiles para la interposición del juicio y para tramitarlo hasta dictar el auto de suspensión. De esta manera se ha creído haber interpretado fielmente los deseos de nuestros legisladores, que quisieron dar una eficiencia completa al recurso por excelencia contra todo abuso de autoridad.

SECCIÓN II.

De la competencia.

Artículo 689 correspondiente al número 763 del Código anterior. Este artículo no ofrece más novedad que la de prever algunos otros casos de conflicto jurisdiccional, que, aunque remotos, son posibles y deben quedar resueltos por la ley.

Los artículos 690 y 691 no contienen modificación alguna respecto de sus correspondientes anteriores.

En el final del artículo 692 se ha hecho una adición. Ha parecido conveniente al orden y jerarquía de los tribunales impedir, hasta donde sea posible, el trastorno que resulta de subvertir ese orden, cuando se da a los jueces de distrito la facultad de conocer, por vía de amparo, de las resoluciones de los magistrados de circuito, que son sus inmediatos superiores; pudiendo no sólo revocar o dejar sin efecto las resoluciones de éstos, sino hasta consignarlos y castigarlos mediante la imposición de una multa. Para alejar toda prevención, en favor o en contra de ellos, ha sido prudente conferir el conocimiento de los expresados juicios a un juez de distrito que no corresponda al circuito en que ejerza jurisdicción el magistrado ejecutor del acto reclamado, Esta es la única novedad del presente artículo, y a la vez, la razón en que descansa.

En el artículo 693 se conserva la misma disposición de su anterior relativo, pero completando lo que a éste le fallaba para determinar el tribunal a quien debe corresponder la revisión de cualquier otro incidente en el juicio de amparo, distinto de los que se mencionaban en aquel precepto.

Lo racional es que lo accesorio siga la naturaleza de lo principal, y con sujeción a este principio se establece que la Corte, en acuerdo pleno, debe ser la que revise todos los incidentes del amparo, que conforme a este capítulo admitan el recurso de revisión.

En el artículo 694 se refundieron sin alteración substancial los artículos 768 y 769 del Código anterior.

SECCIÓN III.

De los impedimentos.

El Código anterior reducía a un número muy limitado las causas de impedimento que pudiera tener un juez o un ministro para conocer en el juicio de amparo. Ha sido, sin embargo, indispensable incorporar una nueva causa al texto anterior de la ley, porque de presentarse, aun sin estar determinada, tendrá que tomarse en cuenta para fundar una excusa. Tal es el caso en que el juez de distrito o un ministro de la Corte haya sido el juez o magistrado que pronunciara la resolución reclamada o que la hubiese aconsejado como asesor.

En los artículos subsiguientes de esta sección, se han señalado con más amplitud de como lo hacía la ley anterior, los procedimientos para la contingencia de que no se rinda el informe, o de que en éste se niegue la causa alegada

Se introdujo una disposición imponiendo multa a la parte que alegue un impedimento que fuere desechado.

Esta pena es de estricta justicia, porque alegar una causa de impedimento que tío procede o que no se prueba, importa un agravio y hasta un ultraje para el funcionario a quien se refiere.

El Ministerio Público queda excep-

tuado, porque representando el interés de la sociedad, no debe presumirse que obra con dolo alguno; y por otra parte, la imposición de una multa vendría a ser parte a cohibir i frecuentemente a los agentes de ese Ministerio para el cumplimiento de sus deberes.

Estas han sido las causales de los artículos 695 al 700 del nuevo Código. Por último, el artículo 701 prevé un caso importante de que no trataba la ley anterior. Consiste en que si el juez de distrito ante quien se entable un amparo, tiene un interés personal en la controversia, sería notoriamente inmoral y contrario a principios fundamentales de derecho, que comenzara a conocer de esa controversia aunque sólo fuera mientras se resuelve la excusa o impedimento alegado por la parte; pues que en ningún caso, ni en ningún momento, puede nadie ser juez en su propia causa.

SECCIÓN IV.

De los casos de improcedencia.

La fracción V del artículo 779 del Código de Procedimientos Federales contenía una excepción deficiente por los términos en que estaba formulada: "contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal."

Hay penas sobre las cuales no puede obrar el consentimiento presunto por el hecho de no reclamarlas en tiempo determinado, y que, sin embargo, no son corporales. Tales son, por ejemplo, la multa excesiva, la confiscación de bienes y algunas que pudieran llegará presentarse con el carácter de inusitadas o trascendentales. La infamia, aunque reputada por algún autor pena corporal, sería discutible en ese aspecto, y la ley no debe dar lugar a dudas cuando se trate del ejercicio de una acción que tiene por objeto mantener incólumes las garantías constitucionales.

Está, pues, justificado formular la excepción de que se viene hablando en los términos en que lo ha hecho el Código actual, es decir: «siempre que estos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.

Esta misma deficiencia se advertía en la letra C de la propia fracción, en la cual se hizo, una reforma análoga a la que antecede.

Es irregular que sea impetrable la gracia de indulto contra sentencias que pueden ser recurridas después de resuelto, en cualquier sentido que fuere, porque con ello se pone en peligro el respeto que merece la autoridad del Presidente de la República, que es la suprema en las cuestiones cometidas al Poder Ejecutivo; y porque también pueden resultar cohibidos los tribunales a quienes corresponde el conocimiento del amparo al examinar una causa sobre la cual, en virtud de anterior examen hecho por el Ejecutivo, se ha negado la gracia de indulto; pero, sobre todo, la naturaleza de esta gracia indica que sólo puede referirse a penas impuestas en sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y sin ningún otro medio de modificarlas. Por tanto, el actual Código introdujo una nueva fracción de improcedencia en ese sentido.

Sería un rigor excesivo declarar la improcedencia de un juicio de amparo por falta de requisitos de forma, cuando es de presumirse que si la parte hubiera percibido aquella falta, con seguridad se habría apresurado a cubrirla. Pero como, por otra parte, no puede desatenderse la forma cuando ella tiende a hacer posible y concreto el procedimiento para poder llegar a una sentencia congruente, este Código previene medidas más eficaces en el artículo 729, omitiendo la prevención relativa en la sección de improcedencia.

La disposición que a este respecto contenía la ley anterior, aparte de que hubo suscitado discusiones sobre la manera de computar el término para un huevo juicio de amparo, daba lugar a que se cometiera una injusticia dentro de los términos rigurosos de dicha ley, como habría pasado si a un juez se le hubiese ocurrido durante el juicio, avanzado va o en sentencia definitiva, declarar la improcedencia; porque entonces evidentemente habrían transcurrido los términos para entablar un nuevo amparo,

cuya improcedencia se fundaría en un error u omisión, la mayor parte de las veces involuntario, y que pudo haber corregido la parte, si de él hubiese tenido conocimiento oportuno, como en el orden común sucede cuando se trata de la excepción de obscuro e inepto libelo.

Se suprimió la fracción 8ª del artículo 779 del Código anterior, por estar ya incluida en la fracción 5ª, letra B, de ese mismo artículo, correspondiente a la misma fracción y letra del artículo 702 del nuevo Código.

En fin, se agregó una fracción última para casos no previstos.

Es posible que haya motivos de improcedencia no señalados en el capítulo especial relativo, y que sí resulten de cualquiera otra disposición en el conjunto de la ley. Por ejemplo, cuando se pide el amparo por aquel en cuyo perjuicio no se ejecutare el acto reclamado, o bien cuando se pida contra un acto que realmente no emane de una autoridad; pero cuyo engaño, motivado por las apariencias, no haya podido discernirse de momento.

SECCIÓN V.

De la demanda de amparo.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido como jurisprudencia, durante muchos años, que el amparo debe entablarse contra la autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; y esta jurisrudencia tuvo origen y se fundó, desde sus comienzos, en el espíritu latente de los artículos 11 y 27 de la ley de 14 de diciembre de 1882, cuyo sentido fue transcripto en el Código que acaba de reformarse. Pero no existiendo un precepto textual y categórico que determinara este punto, podía crearse situaciones verdaderamente complicadas e indecisas, motivadas por las diversas jerarquías ante quienes hubiera ocurrido el desenvolvimiento del acto reclamado, desde el primer momento de su ser, y a través de los recursos del orden común, hasta su ejecución.

Precisaba, pues, dictar algún precepto que, sin dar lugar a esas vacilaciones y dudas, no excluyera a la autoridad de donde verdaderamente emanara el acto reclamado. El artículo 703 del Código actual contiene esa prevención y fija contra que autoridad debe entablarse la demanda de amparo.

El artículo 782 del Código anterior abría la puerta a un procedimiento anómalo e inexplicable, que se pone de relieve en el supuesto siguiente: un individuo que viera expirando ya el término señalado para entablar una demanda de amparo, no podía legalmente impedir que ese término transcurriera en su perjuicio, si tenía que promoverlo por escrito, cumpliendo todos los requisitos de la ley; pero si promovía por telégrafo, entonces, siéndole posible hacerlo de un modo ambiguo, informe y deficiente el último día del término, gozaba de otros quince días para hacer rectificaciones y ampliaciones por escrito, después quizá de que se hubiera suspendido el acto reclamado y de que por la contestación de la autoridad, informante se hubiera fijado el carácter del juicio. Podía también suceder que después de los quince días que concedía el anterior artículo 780, y cuando se habían producido acaso perjuicios a tercero, el peticionario de amparo no ratificara la demanda.

Otra circunstancia embarazosa que producía este artículo, era la manera de pedir el informe y de concretar la suspensión del acto, cuando en virtud de la demanda pre-sentada por escrito, a los quince días de haber comenzado el juicio, se advertían los cambios o alteraciones de esta nueva demanda.

Sobre todo, no hay razón suficiente que justifique la excepción de no llenarse los requisitos legales fie forma para entablar la demanda de amparo cuando se pida por la vía telegráfica. El solo hecho de promoverse así, es ya una excepción que basta a su objeto. Por eso establece el Código actual, a diferencia de lo que se ordenaba antes, que la demanda de amparo, que puede entablarse por telégrafo, ha de contener todos los requisitos que le correspondan, lo mismo que si se pidiese por escrito, y que la ratificación se hará dentro de los tres días

siguientes a la fecha en que se hizo la petición por telégrafo, bajo pena de desechar la demanda y de imponerse una multa. El artículo 705 actual provee respecto al tiempo que puede emplear el correo entre el lugar en que se halle el quejoso y el de la residencia del juez.

Por las consideraciones expuestas, previendo las circunstancias del amparo pedido por la vía telegráfica y los abusos a que puede dar lugar esta concesión, y tomando en cuenta que no hay motivo para gravar al Erario Federal con telegramas extensos en los casos de orden civil, cuyo interés está en el que promueve, se han dictado las reformas que contienen los artículos 705 al 707 del nuevo Código.

SECCIÓN VI.

De la suspensión del acto reclamado.

El artículo 708 no tiene equivalente en el Código anterior, viniendo a ser una preparación necesaria para fijar de un modo claro y metódico las diferentes clases de suspensión que deben admitirse en el juicio de amparo. En efecto, es de suspenderse un acto, no solamente por solicitud del quejoso, sino más imperiosamente aún, cuando resulta como una condición esencial para el objeto de la sentencia, lo pida o no la parte.

El Código anterior, en su artículo 786, ordenaba que el juez suspendiera de oficio el acto, en el caso del inciso I del artículo 784, es decir, cuando se tratara de la pena de muerte, destierro y las demás prohibidas expresamente por la Constitución; pero no son éstos los únicos casos en que se impone de oficio la suspensión, porque es también indispensable, para el objeto del amparo, cuando se trate de algún acto, después de cuya ejecución sea físicamente imposible poner al quejoso en el goce de la garantía individual violada. Sirva de ejemplo que el acto consistiera en la destrucción de un objeto arqueológico; o histórico, o de una obra de arte, como una pintura del Ticiano, de Rubens, etc., que a pretexto de obscenidad, o por cualquier otro motivo, se mandará destruir. Después de consumada la destrucción sería imposible restituir las cosas al estado que guardaban antes; y por otra parte, el pago de los daños y perjuicios es materia ajena al amparo.

En virtud de lo expuesto los artículos 709, 710 y 711 del actual Código ordenan que la suspensión se decretará de oficio o a petición de parte; estableciendo así una división conveniente y detallada en cada uno de sus extremos. En estas prevenciones se refunden los artículos 784, 785 y 786 del Código anterior, dejando los pormenores de procedimiento para otro lugar.

El artículo 712 introduce una disposición nueva, que se estimó necesaria para cortar el abuso que se hace del amparo.

En multitud de casos este juicio se promueve con el fin de estorbar la acción de la justicia común y aún de paralizarla por medio de la suspensión. Si la persona a quien perjudica la suspensión tiene la seguridad de sus derechos y ve su acción detenida, es de toda equidad proporcionarle algún medio con el que pueda contrarrestar aquel obstáculo; pues las dilaciones que ocurran en los juicios son permitidas única, mente en cuanto aseguran la función tutelar de la justicia misma, y la suspensión deja de tener esta calidad, desde el momento en que la parte a quien perjudica, garantiza el objeto de aquélla y resarce al que la obtuvo de los gastos erogados en el otorgamiento de la fianza.

Otras veces sucede que el juez de distrito encuentra la necesidad de suspender momentáneamente el acto reclamado, sin demora de ningún género, y por otra parte, no tiene los elementos bastantes para decidir jurídicamente si el caso sujeto a examen es el de una suspensión, o, aunque los tenga, no puede impedir que mientras se corren los traslados y se rinde el informe, el acto progrese lo suficiente para crear una situación jurídica complicada, como la de colocarse el hecho en la imposibilidad legal de restituirlo a su prístino estado; sea, por ejemplo, que se trate de documentos o valores al portador, etc., etc. En estos casos hace falta una disposición que autorice al juez para mantener una especie de statu quo

por un tiempo muy limitado; bajo su más estrecha responsabilidad, a la vez que recomiende a la Corte fije especialmente su atención sobre estos casos, al revisar el incidente respectivo o el juicio en general, a fin de que no se abuse por los inferiores, de esta facultad. Con este objeto se ha dictado el artículo 713.

En los artículos 714 y 715 quedó comprendido el artículo 783 del Código anterior, con las modificaciones de forma, únicamente, que aquéllos establecen.

Era oportuno y propio de esta sección aclarar el precepto que contenía el artículo 800 del Código anterior. Este artículo por los términos de generalidad en que estaba redactado, no era jurídico, porque trastornaba las reglas establecidas por las leyes sobre pruebas, y hacia depender el buen éxito del amparo, del silencio de una autoridad, que pudiera ser mal intencionado en perjuicio de derechos de tercero. Por este motivo, la segunda parte del artículo 716 del Código actual restringió la presunción de ser cierto el acto reclamado, para sólo el efecto de la suspensión, dejando a salvo calificar las pruebas en la sentencia definitiva, con mejor acierto y conforme a las reglas que las leyes determinan.

El artículo 718 contiene una disposición nueva en su parte final. Según ella, el juez que ha suspendido un acto de detención preventiva o de formal prisión, puede poner al quejoso en libertad bajo fianza; pero es necesario que tenga presente lo que las leyes comunes prevengan, porque el delito imputado puede ser tal, que conforme a esas leyes no consienta la libertad provisional del presunto responsable, y sea el caso del acto reclamado. A esta idea responde el artículo 718 cuando dice: «si procediere legalmente.

En el artículo 719 se corrige un resultado práctico que ha dado lugar a injusticias irritantes. El caso es el siguiente; un individuo consignado al servicio de las armas pide amparo, y se le concede la suspensión; conforme al artículo 790 del Código anterior debía conservársele en el lugar en que pidió amparo, hasta que se pronunciara la sentencia definitiva; y si, como sucede frecuentemente, era movilizada la fuerza a que estaba incorporado, el jefe de ésta, para no contraer responsabilidades, lo dejaba a cargo de la autoridad política respectiva, quien a su vez, para asegurar la entrega del quejoso, ya por habérsele amparado, o bien porque negado el amparo, tuviera que ser devuelto a la autoridad militar, lo guardaba en la cárcel; y esto como una medida de imprescindible necesidad, pero contra preceptos terminantes de la Constitución. De donde resultaba una irritante injusticia, la de tener en prisión por un término indefinido, a un hombre que evidentemente no ha cometido delito alguno.

Para remediar este grave mal, se dictó la segunda, parte del artículo 719, que tiende a conciliar la necesidad de cubrir el contingente de guerra con la libertad individual, con los preceptos de la Constitución y con la justicia.

La segunda parte del artículo 791 del Código anterior se suprimió en el actual. Las razones son tan obvias que parecería ocioso expresarlas. Basta decir que muchos promoventes de amparo intrigaban para que se les negara la suspensión del acto, sabiendo que la conseguían de hecho, por más absurda que fuera, con sólo interponer la revisión contra el acto denegatorio del juez.

El artículo 792 del Código anterior, del que es trasunto el número 721 del actual, no tiene más alteración que la de habérsele agregado la palabra superveniente, que aclara la intención de este artículo.

La suspensión del acto reclamado es el punto en donde converge con más frecuencia el abuso del amparo; y no debe admitirse sino en los casos que sean deveras indispensables, previniendo basta donde sea dable, el abuso. Por tanto, cuando sea posible continuar el procedimiento, no obstante la suspensión del acto concreto en que radica la violación de garantía, no hay razón para dejar paralizado todo ese procedimiento. Ahora bien, si el acto estuviese inseparablemente unido al procedimiento en general, éste habría de interrumpirse; pero la resolución de cada caso no puede estar sujeta a más regla que la enunciada, con los

particulares anexo de consideración especial y precauciones consiguientes a evitar complicaciones y perjuicios.

Tal es el objeto del artículo 722 sin equivalente en el Código que se ha reformado.

El artículo 723 sólo agrega a su relativo el 723 del Código anterior la frase: «o del Fisco,» porque no son exactamente las mismas ideas la sociedad y el Fisco; y es indudable que éste debe estar protegido por el Ministerio Público de un modo ex-preso, como se ordena en varios artículos del Código.

Las otras prevenciones de esta sección se refieren a la simple tramitación del incidente, reproduciendo las que la ley actual contiene.

SECCIÓN VII.

De la substanciación del juicio.

El motivo de improcedencia por falta de requisitos de forma en la demanda de amparo, era en extremo riguroso y debía sujetarse a determinadas condiciones, porque desde el momento en que esta falta hace necesaria la declaración de improcedencia, es de estricta justicia ofrecer completa oportunidad al quejoso para llenar esos requisitos; y a esto mira el incidente de que trata el artículo 729. Este incidente deberá ser tan breve que no constituya una rémora para la libre tramitación del amparo. El examen de la demanda, en cuanto a su forma, está encomendado al ministerio del juez; así, bastará la responsabilidad de éste como sanción, y el conocimiento que concierne al agente del Ministerio Público, para que tal incidente responda a su objeto.

El artículo 730 modifica en parte el artículo 799 del Código anterior, por no ser conveniente dejar al arbitrio del juez que amplíe el término del informe según la importancia del negocio, siendo, como es, suficiente en todo caso, una ampliación por tres días. Queda suprimido en esa misma ampliación el concepto de la distancia entre el juez de distrito y la autoridad responsable, porque en lodos los casos análogos sirve de regla en el Código el tiempo que emplea el correo en ir y volver.

El artículo 731 contiene el mismo precepto que el artículo 716; pero refiriéndose éste al efecto que produce la falta de informe en la suspensión, y aquél, al afecto que debe producir en la sentencia definitiva. En este último caso, lo más jurídico será que el fallo se pronuncie por lo que resulte de autos, para no complicar de modo alguno aquellos hechos que el actor está obligado a probar.

Los artículos 735 y 736 establecen las diferencias que sugiere el sentido de sus demás prevenciones y aun las del mismo Código anterior. Contienen una disposición enteramente nueva, y es la que exceptúa la confesión del número de pruebas admisibles en el amparo.

A este propósito cumple recordar en cada momento, que el amparo tiene un carácter peculiar inadaptable a cualquiera otra clase de juicios.

No puede iniciarse de oficio, es forzoso que lo promueva una persona por su interés meramente individual. Sin embargo, como el objeto del amparo es reparar una violación de los preceptos constitucionales, a pesar de que su promoción y su desistimiento dependen de la voluntad del individuo, el carácter de este juicio es genuinamente de derecho público. Y por tanto si resulta que se ha violado la Constitución, sea cual fuere la confesión de las partes, deberá concederse el amparo.

Hay otra circunstancia en lo que toca a la autoridad responsable: si esa autoridad produjera una confesión de acuerdo con el promovente, en perjuicio de los derechos de tercero bien comprobados en autos, esa confesión no debería tomarse en cuenta, y el amparo tendría que negarse si así resultare de autos; pues de otra manera, sería poner en manos de dicha autoridad el buen éxito del juicio, siempre que entrara en sus miras apoyar el perjuicio que con su confesión pudiera causarse al tercero.

El artículo 737 es nuevo, y tiene por

objeto evitar las dificultades frecuentes que se presentan entre los jueces del orden común y los de distrito, con motivo de las copias que éstos piden, y que, en la mayoría de los casos, cuando son muy extensas, la parte que las solicita lo hace para dilatar el curso del amparo, si obtuvo previamente la suspensión del acto reclamado.

Es justo que las copias se den a costa de quien las pida, con las excepciones que expresa el artículo.

Es también justo que cuando las copias sean demasiado extensas, y notoriamente frívolas e impertinentes, se nieguen de plano, como se hace siempre con toda petición de este género; y por último, es conveniente y expedito que cuando se trate de actuaciones concluidas y no haya perjuicio de tercero, se remitan originales en lugar de las copias, como ha ocurrido repetidas veces. Estos dos últimos casos están proveídos en el artículo 738.

El artículo 740 no tiene otra novedad, comparado con su equivalente el artículo 805 del Código anterior, que imponer al agente del Ministerio Público, la obligación de alegar en todo caso, como es natural y del recto cumplimiento de su encargo.

Artículo 742.- Con cierta frecuencia se han dictado sentencias de amparo, concediéndolo bajo la frase de: «Se concede el amparo al quejoso contra los actos de que se queja». En la misma Corte se ha deplorado por algunos ministros la vaguedad de esta frase, porque da margen a que unas veces el promovente, otras los terceros perjudicados, y aun la i autoridad responsable, susciten discusiones y aclaraciones pretendiendo, ora ampliar, ora restringir los efectos de una ejecutoria.

De aquí la conveniencia de este precepto que obliga al juez de distrito a expresar en la sentencia el acto o actos contra los que se conceda un amparo, y le prohíbe emplear la fórmula viciosa que acaba de mencionarse.

Artículo 744.- Es un detalle que significa temeridad e incuria de la parte el no rendir prueba, después de haber pedido el término para ese fin. o haberla rendido impertinente. Por tal motivo el artículo 744 señala este caso taxativamente para hacer forzosa la imposición de la multa.

El articulo 746 trae una novedad provechosa, porque observada la regla que contiene, se evitará la ocasión de que se encuentren en pugna ejecutorias sobre asuntos que tienen entre sí una conexión semejante a la que en el orden común amerita la acumulación.

SECCION VIII.

Del sobreseimiento.

Esta sección es casi la misma que la del Código anterior. Hay, sin embargo, la supresión del inciso IV, porque las disposiciones del actual Código acerca del amparo que se promueva por telégrafo, el inciso final del artículo 702 y el inciso III del artículo 747 que trata del sobreseimiento, sustituyen la parte suprimida.

SECCIÓN IX.

De las sentencias y demás resoluciones de la Suprema Corte.

Las diferencias que en esta sección se observan, respecto del Código anterior, se refieren solamente al trámite, y son a manera de complementó y aclaración de las disposiciones que preceden, dictadas con el objeto de hacer más expedito y eficaz el despacho; se explican por sí mismas, y no requieren, por tanto, especial razonamiento, con excepción de una reforma que mira más al fondo del amparo constitucional, y es la que se contiene en el artículo 760.

Este artículo dilata el alcance de la ley anterior, porque ella suponía que el único objeto del amparo era dejar sin efecto el acto reclamado y restituir las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitución; pero no es, en verdad, tan limitado dicho objeto, si se atiende que el individuo no quedaría suficientemente protegido en los casos especiales sobre que puede versar el proceso (artículo 22 de la Constitución).

Es la finalidad del amparo restituir al quejoso en el ejercicio de la garantía violada; y este objeto, si bien se lograba dentro de la ley anterior cuando el acto tenía un carácter positivo o afirmativo, resultaba frustrado si el acto reclamado era negativo. Es un ejemplo, un individuo que se queja de no administrársele justicia, o de no proveerse una petición suya. Si el objeto del amparo consistiera en dejar sin efecto el acto reclamado y restituir las cosas al estado que tenían antes de haberse violado la Constitución, las garantías de los artículos 8º y 17 de esta Suprema Ley, resultarían burladas en el caso de este ejemplo, y la violación quedaría subsistente lo mismo después que antes de haberse concedido el amparo.

Por tanto, el artículo 760 no sólo previene la restitución, sino que, cuando el acto reclamado es negativo, obliga a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate, y a cumplir de su parte cuanto esa garantía exija.

SECCIÓN X.

Del amparo contra actos judiciales del orden civil.

Ha tiempo que tomó estado en la conciencia pública el extraordinario abuso que se hace del amparo en asuntos judiciales del orden civil. Además, en este punto han surgido opiniones, interpretaciones y ejecutorias tantas, y de tan vario sentido, que cuando se recurre a todo ese conjunto como fuente de jurisprudencia, la duda se enseñorea del espíritu como único resultado. Fruto natural de tal estado de cosas es el pesimismo reinante respecto del amparo, y que es en extremo peligroso para pasarlo inadvertido; hay, por lo tanto, que hacer resaltar muy singularmente tos motivos que le han dado origen, para depurar este recurso de aquellos vicios en absoluto ajenos y hasta contrarios a su esencia; pues de otra suerte, habría que renunciar a este juicio constitucional, que es, sin duda alguna, el más noble y elevado de nuestra legislación.

Procediendo ordenadamente, el nuevo Código en su artículo 765 establece de una manera clara y precisa cuáles son los actos judiciales del orden civil, de modo que se haga imposible la concisión que resultaría aplicando las reglas de esta sección a otro género de amparos para los que no son adecuadas. La definición de estos actos ha sido hecha con esmerada atención y particular estudio, y es de esperarse, por consecuencia, que estarán comprendidos en ella todos los actos que son del orden civil, y excluido cualquiera otro que no tenga ese carácter.

A propósito de esta disposición se presentaba desde luego la oportunidad de cortar un abuso inveterado que, si antes había sabido la Corte evitar prudentemente, bien podría no suceder lo mismo en adelante, porque no habiendo una disposición legal que lo impidiese, volviera a imperar en ella lo que algún tiempo fue criterio de ese alto Cuerpo.

Frecuentemente ha sucedido qué el acusador o querellante en un juicio criminal pide amparo cuando es absuelto el reo, y con cierta frecuencia también se ha tramitado como procedente y ha prosperado hasta llegar a destruir una sentencia en cuanto a su aspecto penal, fundándose quizá en prácticas antiguas de que nos da testimonio una doctrina del Sr. Lic. Vallarta. Esta teoría descansa en la razón de que pudiendo el acusador ser responsable por calumnia, tiene un interés directo en la sentencia del juicio criminal y puede pedir amparo contra, ella.

Grande es sin duda, el respeto que se debe a la sabiduría y laboriosidad del Sr. Vallarta; pero en este punto resulta inadmisible su opinión y viciosa la práctica que generó en la Corte, por las razones siguientes: En todo juicio criminal existen dos acciones, como es elemental saberlo: la penal y la civil. Cuando en un juicio criminal se hubiere deducido la acción civil, o se tuviesen derechos en relación con ella, que deban resolverse en la sentencia, y se dicta ésta violándose una garantía individual de aquél que ejercitó dicha acción, es lógico el amparo, siempre que se ciña estrictamente a la misma acción y a los derechos que

mediante ella se hayan ejercitado en el juicio; pero la acción penal no es del querellante o acusador privado, compete a la sociedad en general, por cuyo interés la ejercita su representante el Ministerio Público; sentado esto, se comprende que la acción penal no puede estar subordinada a la acción civil, sino todo lo contrario, ésta tiene que ser dependiente de la primera, por cuanto la responsabilidad civil es una derivación de la penal y como un accesorio en el juicio principal. Este tiene por objeto determinar el delito, quién es el delincuente y qué pena se le impone. De donde se ve que la garantía que consagra el artículo 14 de la Constitución, atañe a quien va a ser juzgado, es decir, al reo, no al acusador, y sólo, respecto de éste, en lo que mira a su acción puramente civil, la cual, corno antes se dijo, es un derivado de la acción penal. En consecuencia, el amparo que motivare el incidente civil, no debe trascender a la acción penal, ni tampoco considerarla, anularla o modificarla en manera alguna.

De aquí se deduce que el acusador bien puede promover este género de amparos en los casos en que se haya hecho una derivación incongruente o aplicación inexacta de la ley; pero sin atacar la verdad legal que los tribunales hayan declarado respecto a la responsabilidad criminal del reo.

Los fundamentos expuestos por el Sr. Vallarla estriban en la posibilidad en que se halla el acusador de resultar responsable de calumnia con motivo de la resolución que provocó; pero de esa posibilidad no se infiere que en aquel momento sea juzgado ni sentenciado desde el punto de vista penal. Cuando llegue el evento de sujetarlo a un proceso por el mencionado delito, entonces sí tendrá el carácter que requiere el artículo 14 de la Constitución, es decir, en tal ocasión sí habrá de ser juzgado y sentenciado, y de allí también podrá nacer un amparo del orden penal.

Esto es lo que ha querido fijar el artículo 766 del Código actual, revalidando el verdadero espíritu de nuestra Constitución.

En los juicios de amparo contra actos judiciales del orden civil, es peligroso, más que en cualquier otro género de amparos, autorizar que el juez supla de oficio las omisiones en que hubiere incurrido la demanda, a exponer el hecho y fijar el derecho.

La obligación de un juez en ese sentido sería un aliciente y estímulo a los amparos aventurados, es decir, a los que frecuentemente se promueven sin fundamento legal ni seguro, y por otra parte daría lugar al abuso, porque todo punto de derecho, al contrastarse con la ley, es susceptible de múltiples y diversas soluciones según los aspectos de hecho o de derecho bajo las cuales se presente.

En consecuencia, conviene que la resolución constitucional en estos amparos, por inexacta aplicación de la ley, sea de estricto derecho y que a pesar de lo dispuesto en el artículo 759, la resolución se dicte sujetándose a los términos de la demanda, sin permitir que de oficio se suprima ni se amplíe nada. De lo contrario podría suceder que, habiéndose defendido la autoridad responsable y el tercero perjudicado desde el I punto de vista jurídico y constitucional propuesto en la demanda, se fallara ésta bajo otro aspecto no considerado ni previsto siquiera en el juicio. Tal es la razón del artículo 767.

El amparo en asuntos civiles da margen, como ya se ha dicho, a diversas apreciaciones y resoluciones, según los aspectos de hecho y de derecho bajo los cuales se presente el caso; y como la sentencia debe ajustarse en todo lo pedido en la demanda, para resolver lo que proceda, es consiguiente la necesidad de un precepto que obligue al demandante a fijar la cuestión de un modo preciso, claro y sin lugar a divagaciones. Así el artículo 768 previene y fija los requisitos que en este orden de amparos debe llenar la demanda, reuniendo a la vez y haciendo más concretos los que determinaba el primer párrafo del artículo 780 del Código anterior.

Entre los requisitos que señala el nuevo artículo 768, reclama particular explicación el que se expresa en la fracción IV.

Es muy frecuente, por los que se ocupan en la gestión de amparos, fundar siempre su queja en los artículos 14 y 15 de la Constitución. Razonando en la demanda, dicen: Si en la sentencia que me priva de tal derecho hubo una aplicación inexacta de la ley y se violó por lo tanto el artículo 14, la misma sentencia viene a ser un mandamiento que por inmotivado e infundado viola el artículo 16. Con sorites de esta naturaleza se ha llegado a señalar la violación del artículo 27, tomando como premisa la violación del artículo 14.

No entra en la índole del Código tratar la cuestión substancial apuntada; pero cabe en los límites del procedimiento exigir, que cuando el examen de la violación de alguna garantía individual dependa, como un derivado, del examen que antes debe hacerse de la garantía que contiene el artículo 14 de la Constitución, es decir, acero de si hubo aplicación inexacta de la ley, el amparo se sujete a las reglas establecidas para el examen de esa garantía, como es racional y jurídico hacerlo.

Es de suma importancia para quien intenta un amparo, el auto que lo declare improcedente por falta de requisitos; y si el juez se limitara a hacer esta declaración simplemente, el quejoso, en nuevas promociones, e ignorando el motivo de la improcedencia, podría perder el tiempo dentro del cual puede intentarse ese juicio y quedar así definitivamente perjudicado. Por esta razón el artículo 770 ordena al juez que, cuando deseche una demanda por falta de requisitos, exprese cuáles sean éstos, a fin de que el interesado pueda satisfacerlos en tiempo hábil. Como la omisión del juez en este caso sería grave y trascendental, el artículo expresado impone responsabilidad por el perjuicio que cause, además de la pena en que incurra si hubo dolo en su conducta.

Por otra parte, podría suceder muy bien que ni el juez ni el agente del Ministerio Público se fijen en la falta de requisitos de que adolezca una demanda de amparo, y que aquél no la deseche en su oportunidad, corno es debido; y puede suceder también que esta opinión del juez o del Ministerio Público sea intencionada. En tales casos es justo que cualquiera de las partes interesadas tenga derecho a reclamar, durante el juicio, la falta de esos requisitos; y que el juez esté obligado, mediante la substanciación de un brevísimo incidente, a pronunciar la resolución que corresponda. Si ésta fuere en el sentido de la improcedencia debe caber el recurso de revisión por cuanto el gravamen resultaría irreparable; pero si fuese lo contrario, tío debe ser admisible la revisión, pues ningún inconveniente resultaría de que el juicio continuara hasta pronunciársela sentencia, porque la Suprema Corte de Justicia podría, al revisar aquélla, dictar la resolución que fuera legal. Esto es lo que dispone el artículo 771.

Es lógico que la personalidad en el juicio de amparo contra una resolución de carácter civil, quede justificada de la misma manera que lo está en el juicio a que corresponde el acto reclamado. Asimismo no hay obstáculo jurídico para que la personalidad se justifique en la forma que lo determina el presente Código de Procedimientos; y para evitar las vacilaciones y dificultades que puedan presentarse, el artículo 772 prevé el caso y dispone que la personalidad pueda justificarse de uno u otro modo, a voluntad del promovente.

Es conveniente que se fijen con toda claridad los hechos que vayan a probarse, a fin de poner al juez en aptitud de saber si esos hechos son conducentes a probar la constitucionalidad del acto reclamado, y pueda así admitir o desechar la prueba, no sólo para cortar divagaciones inútiles, sino también para procurar la brevedad del procedimiento. Es igualmente necesario que al pedirse la prueba se fije su naturaleza, pues se ha observado que en muchos casos se pide el término probatorio y se proponen pruebas que son inadmisibles por sí mismas o por requerir condiciones y términos que no caben en el juicio de amparo.

A satisfacer estos puntos tiende el artículo 773.

El artículo 774 no es nuevo. Lo con tenia el Código anterior; pero es conducente advertir ahora que cuando se trata de leves

federales, y muy particularmente de artículos de la Constitución, no se está en el caso del presente artículo, y que la Suprema Corte de Justicia se encuentra en sus más genuinas facultades para interpretar el hecho y el derecho según lo estime en su alto criterio.

El artículo 775 no tiene más novedad que reducir un poco el término para entablar un juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, fijando el que es muy suficiente, y vigorizando a la vez el principio de que las leyes no deben favorecer la multiplicación de los litigios

El artículo 776 es nuevo, y consigna una prevención que parece racional y justa. Si un individuo ha tenido conocimiento del acto violatorio de sus garantías individuales, no hay razón para dejarle de con lar, desde entonces, el término en que debe entablar su demanda; de lo contrario, debería entenderse que era preciso esperar una notificación que podría no llegar nunca, o llegar después de largo tiempo, manteniendo entretanto suspensos y vacilantes, derechos que ya estarían basados en una resolución judicial.

SECCIÓN XII.

De la jurisprudencia de la Corte.

El artículo 827 del Código anterior suprimió una parte del artículo 47 de la ley expedida en 14 de diciembre de 1882; esta parte prevenía: que los tribunales, para fijar el derecho público, tuvieran como regla suprema de conducta la Constitución Federal, las ejecutorias que la interpretaban, etc.... ¿Cómo debe entenderse la supresión de esta parte? Sea como quiera, siempre será una fuente útil, tal vez indispensable para la recta inteligencia de la ley, lo que resuelvan esas ejecutorias, cuando sus fundamentos estén conformes con la razón.

El derecho es una ciencia que se apoya en la razón, y, por consiguiente, esta será la que constituya el principio fundamental de aquél. De aquí la necesidad de que la jurisprudencia se uniforme y obedezca a determinadas reglas; de lo contrario, es imposible su existencia y autoridad, como sucede ahora, que donde hallamos una ejecutoria para fundar un derecho, encontramos otra para destruirlo. Es urgente, por lo expuesto, uniformarla de alguna manera (artículo 785). En el propósito enunciado, lo primero que debe observarse es que la jurisprudencia de la Corte sólo pueda referirse a las leyes federales, pues las del orden común están encomendadas a sus tribunales respectivos, y hacer extensiva esa jurisprudencia a estas leyes, sería cometer una invasión contraria a los principios constitucionales más importantes, que han querido dejar a los Estados, independientes en su régimen interior. Debe, por tanto, concretarse a las leves federales, y no en todos los casos, sino únicamente en aquellos en que las mismas sean omisas o de aplicación dudosa. Lo .contrario valdría tanto como suplantar la ley expresa con la jurisprudencia, y esto, sobre ser un atentado, importaría la subversión llevada al último grado del absurdo.

Artículo 786.- La jurisprudencia, como lo indica su propia denominación, no puede apoyarse, por todo fundamento, en una sentencia aislada, sino que es de su esencia revelar la manera acostumbrada de entender la ley, y esto sólo quedará demostrado por el concurso de varias resoluciones.

Por otra parte, no puede negarse que muchas veces la razón cae del lado de una minoría. La importancia de ésta no es posible fijarla, desde el momento en que cabe que un magistrado se acerque más a lo justo que los catorce restantes; pero siempre será prenda de acierto y presunción, en favor de la mayoría, la circunstancia de que además de repetirse una resolución cinco veces en determinado sentido, lo sea por mayoría absoluta de los miembros que componen un tribunal. Esto por lo que mira principalmente al tribunal pleno que tiene quorum las más veces variable.

Artículos 787 y 788.- La jurisprudencia debe obligar a los jueces inferiores, porque esta virtud le es propia; por tanto, un juez de distrito podrá aducir razones en contra para que la Corte las tome en consideración; pero debe sujetarse en sus

resoluciones a la jurisprudencia establecida, pues no siendo así, resultaría de todo punto inútil establecerla.

No debe decirse lo propio tratándose de la Corte misma, porque la jurisprudencia, ya sea doctrinal, o bien emanada de las resoluciones judiciales, siempre estará fundada en la autoridad que le presta la razón, y como ésta es por su naturaleza progresiva, aquella tiene que serlo también por extensión.

Constreñir a la Corte, obligarla de alguna manera absoluta a los precedentes de sus resoluciones, sería tanto como imponerla un dogma a manera de los que sustentan las religiones; sería establecer, como éstas, verdades absolutas, y dar a la jurisprudencia, aunque resultare errónea, una inmutabilidad que ni las leyes ni institución alguna pueden tener.

Si es racional estatuir que cuando la Corte cambie su jurisprudencia, haga constar las nuevas razones que tuviere y que contraríen precisamente aquellas que le sirvieron cuando fijó la que trate de cambiar,

(Artículo 788).- Si la Jurisprudencia debe producir algún efecto y éste se relaciona de algún modo con el interés que debaten las partes, justo es permitirles que puedan invocarla; pero imponiéndoles, paja evitar el abuso a que tienden en este respecto los litigantes, la obligación de fijar por escrito el sentido de la jurisprudencia invocada, que demuestre ser ésta aplicable al caso, y el número de ejecutorias por el que realmente haya quedado establecida.

SECCÍÓN XIII.

De la responsabilidad en los juicios de amparo.

La parte de las infracciones a la ley que contiene esta sección, y que el Código Federal de Procedimientos Civiles castigaba de un modo especial se ha conservado en el presente. Respecto de aquellos que define y condena el Código Penal del Distrito Federal, se remiten a este ordenamiento; y como novedad se dispone en esta sección, que las infracciones que cometan los jueces, si no tienen pena señalada en el Código Penal citado, se castiguen con alguna corrección disciplinaria, fijando cuáles son éstas.

La última parte del artículo 796 contiene una disposición que se explica por sí sola.

En conclusión, las novedades y reformas que en el Código actual se introdujeron, han sido tantas cuantas eran las necesidades latentes en todas las circunstancias que rodean nuestras instituciones federales y, asimismo, cuantas emanaban de la indeclinable transformación del medió en que se aplican y desarrollan esas instituciones. Al exponerse los nuevos preceptos en su origen y naturaleza, así como en sus relaciones entre sí y con las demás leyes, se ha procurado a la vez que explicar su más genuino sentido, descubrir su innegable conveniencia con el bienestar general; porque como éste descansa esencialmente en el principio y ejercicio de la justicia, si de aquellas disposiciones pueden, fundadamente, esperarse los resultados benéficos que las han inspirado, y la justa satisfacción a las exigencias que las motivaron, serán un elemento eficaz para la recta administración de justicia en su más elevada esfera.

De esta manera, el Ejecutivo se ha esforzado en satisfacer la necesidad imperiosa que motivó la autorización del decreto de fecha 24 de mayo de 1906.

Tengo el honor de remitir adjunto un ejemplar del Código reformado, y al dar cuenta con este informe a esa H. Cámara, ruego a ustedes se sirvan hacerlo presente, y aceptar para sí, mi atenta y distinguida consideración.

Libertad y Constitución. México, 28 de abril de 1909. - Fernández.- CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.

ÍNDICE.

LEYES MEXICANAS. 1

AÑO DE 1908. 3

Enero 10 de 1908.- RESOLUCIÓN complementaria de las dictadas por la Secretaría del ramo el 16 de diciembre de 1906 y el 4 de febrero de 1907, sobre exámenes generales y títulos de la Escuela Nacional de Medicina. 3

Enero 18 de 1908.- OFICIO por el que se señalan las labores que deben desempeñarse en el Departamento Médico de la Escuela Nacional Preparatoria. 3

Enero 20 de 1908.- PROGRAMA general del Instituto Médico Nacional en 1908. 4

Enero 16 de 1908.- ESTABLECIMIENTO del estudio del idioma mexicano como obligatorio para los alumnos del Museo Nacional que deseen hacer estudios de Etnología. 5

Enero 23 de 1908.- TEXTOS para la Escuela Nacional Preparatoria en 1908. 5

Enero 29 de 1908.- Inscripciones en las escuelas nacionales primarias para el año escolar de 1908. 6

Enero 10 de 1908.- Contrato celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. Manuel Mateos Alarcón, en la del Sr. F. E. Yoakum, para el aprovechamiento en beneficio y lavado de metales, de las aguas del Río del Fuerte, del Estado de Sinaloa. 7

Enero 15 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. José López Portillo y Rojas, en la del Sr. José María Guizar González, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas de la laguna de Quitupán o do Guadalupe, del Estado de Jalisco. 10

Enero 16 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Daniel Audiffred, para el arrendamiento de las lagunas Chacahua, Manialtepec, Corralero, Monroy, Jicaltepec y Minitán, y las Salinas, que en ellas existen, así como de los esteros los Limos, Minizo y Espejo, y el cerro de las Garzas, en las costas del Océano Pacífico, en el Estado de Oaxaca, para la explotación de la sal y caza del caimán y garza. 13

Enero 17 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el C Lic. Luis Méndez, apoderado jurídico de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, denominada antes La Compañía Empacadora do los Estados Unidos, The United States Packing Company, cesionaria del contrato celebrado el 4 de Abril de 1903, con The North American Beef Company, para el establecimiento de dos fábricas de diversos productos, utilizando los desechos animales, y dos casas empacadoras de carnes; para reformar este Contrato y los de reforma celebrados en 15 de noviembre de 1905, 17 de marzo y 24 de noviembre de 1906, y 21 de junio de 1907. 15

Enero 22 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Señor Eduardo Castañeda, en la del Sr.- Jesús Cárdenas, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio Guayalejo, del Estado de Tamaulipas. 16

Enero 30 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Barón de Catllá, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río de Los Naranjos, del Estado de san Luis Potosí. 19

Febrero 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. Lic. Luis Méndez, en representación de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, para establecer en la república almacenes, refrigeradores, depósitos y mercados para refrigerar, conservar y distribuir productos alimenticios de acuerdo con la facultad que concede al Ejecutivo la ley de 15 de diciembre de 1903. 22

Abril 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. José Ballesteros Pliego, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río de la Compañía, del Estado de México. 25

Abril 13 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Alejandro Arena, en representación de la Sra. Soledad Toriello, viuda de Arena, reformando el celebrado el 23 de octubre de 1907, para aprovechar, como fuerza motriz, las aguas del rio Higuerón, del Estado de Morelos. 29

Febrero 21 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor James P. Taylor en la del Sr. Harry J. Earle, reformando el celebrado en 26 de septiembre de 1907, para la explotación del guano, en las islas que se expresan, situadas en las costas del territorio de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 29

Febrero 21 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Gabriel F. Martínez, en la del Sr. Miguel Peón, como cesionario de la Sra. Ernestina Rubio, viuda de Isita, reformando el celebrado con dicha señora, el 20 de diciembre de 1906, para usar, como riego, las aguas torrenciales del río san Juan del Río, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro, en la Hacienda de san Antonio y su Anexa Agua Zarca. 30

Febrero 25 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Gabriel F. Martínez, en la del Sr. Miguel Peón, reformando el celebrado el 18 de diciembre de 1906, para usar, como riego, las aguas torrenciales del río san Juan del Rio, de los Estados de México, Hidalgo y Querétaro. 30

Enero 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de listado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el ciudadano Lic. Benito Juárez, para la explotación del guano, en las islas Duncán, Rasa, san Marlín, Elide, san Jerónimo, san Luis y Adelaida, en el Océano Pacifico. 31

Febrero 29 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. Jesús J. Portugal, en la del Sr. Manuel J. Vázquez, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río de la Cuchara, del Estado de Oaxaca. 33

Marzo 4 de 1908.- Contrato celebrado para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Duero, del Estado de Michoacán..... 36

Marzo 24 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr, Lic. Francisco Alfaro, por la Compañía "A. B. Adama Incorporated," reformando el celebrado el 28 de febrero del año próximo pasado, relativo al aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Balsas del Estado de Guerrero..... 39

Marzo 30 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Malina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Samson Lang, reformando el celebrado el 17 de marzo de 1905, para el aprovechamiento, con fuerza motriz, de las aguas del río Amacusac, del Estado de Morelos. 40

Abril 2 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Lic. Pascual Luna y Parra, en la de la Sra. Dolores Quintanilla de Orvañanos, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Lerma, en el Estado de México. 40

Abril 26 de 1908.- Contrato celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. licenciado Luis Vidal, y Flor, en la del C. Pedro V. Rubio, para la explotación de bosques en una zona de terreno ubicada en el Departamento de Comitán, del Estado de Chiapas. 43

Abril 24 de 1908.- Estatutos de la junta de vigilancia de las aguas del rio de la Magdalena, en el Distrito Federal. 45

Mayo 8 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho do Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y los Sres. Gavito y Villar, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río de Cantar ranas, del Estado de Puebla y rectificación en los canales de llegada y desagüe de la fábrica «La Carolina.» 49

Mayo 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Gral. Juan A. Hernández, reformando el celebrado el 16 de enero de 1908, con el señor Daniel Audiffred, para el arrendamiento de las lagunas Chacahua, Manialtepec, Corralero, Monroy, Jicaltepec y Minitán, y las salinas que en ellas existen, así como de los esteros Los Limos, Mínizo y Espejo, y el Cerro de las Garzas, en las costas del Océano Pacifico, en el Estado de Oaxaca, para la explotación de la sal y caza del caimán y garza. 52

Mayo 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Oleario Molina, secretario de Estado y del despacho do Fomento, en representación del Ejecutivo do la Unión, y el Sr. Lic. Fernando Duret, en la del Sr. Frumencio Fuentes, reformando el celebrado el 31 de agosto de 1906, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Nazas, en los Estados de Durango y Coahuila. 53

Mayo 8 de 1908.- CONTRATO Celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Luis Martínez de Castro, en la de la Sinaloa Land Company, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Culiacán, del Estado de Sinaloa. 53

Mayo 12 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de fomento, en representación del Ejecutivo do la Unión, y el Sr. Lic. Justo Prieto, en la del señor José María Urrutia, para el aprovechamiento, tomo riego, de las aguas del río Conchos, del Estado de Chihuahua. 56

Mayo 19 de 1908.- Se aprueba el contrato que con fecha 15 de abril último, fue celebrado entre el C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, por una parte, y por la otra, el Sr. Augusto Genin, apoderado de la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita y Explosivos, reformando los artículos 6°, 7 y 22° del contrato de concesión de fecha 12 de agosto de 1901, relativo a la edificación Y explotación de una fábrica de dinamita y explosivos industriales en el territorio de la república. 59

Mayo 20 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. Joaquín Baranda Mac Gregor, para el arrendamiento de las salinas ubicadas en los cantones 4°, 6° y 10° del Estado de Jalisco. 61

Mayo 22 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. D. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. D. Luis Méndez, por "The Michoacán Power Company," reformando el celebrado el 19 de octubre de 1904, relativo al aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del rio Angulo, Estado de Michoacán. 63

Mayo 27 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el C. licenciado Enrique Beltrán, en la del C. Ing. Félix Díaz, para la explotación de bosques y compraventa de terrenos nacionales ubicados en el Estado do san Luis Potosí. 63

Junio 2 de 1908.- Se aprueba el contrato fechado el once del corriente mes, celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. Rafael Elguero, en la de «The Oil Fields of México Company,» para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, existentes en los terrenos de propiedad de la misma Compañía en los Estados de Veracruz y Puebla.– 66

Junio 2 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha veintisiete de marzo próximo pasado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Leví, en la del Sr. Alberto Terrazas, para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno existentes en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y aquellos cuyo título de propiedad hubiere expedido el gobierno de la Nación con reserva del subsuelo, en los Distritos de Iturbide y Camargo, en el Estado de Chihuahua.– 70

Junio 4 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el día trece de mayo próximo pasado, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e

Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Sr. John William Hughes, para establecer y explotar en la república una o varias fábricas de lámina galvanizada, plana o acanalada, y otros artefactos que con ella puedan manufacturarse. 74

Junio 4 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 22 de mayo de 1908, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Harold Walker, en la de la compañía denominada «Huasteca Petroleum Company,» para la exploración y explotación de los criaderos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno y sus derivados, existentes en los terrenos de propiedad particular de la misma compañía, ubicados en los cinco cantones más septentrionales del Estado de Veracruz y en los distritos o partidos inmediatamente adyacentes de los Estados de Tamaulipas y de san Luis Potosí.– 79

Junio 5 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 25 de abril de 1908, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el C. Licenciado Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el C. Tomás Macmanus, en representación de la «Cananea, Compañía Consolidada de Cobre, S. A.,» relativo a la introducción de petróleo crudo, por el tiempo que sea necesario, para emplearlo exclusivamente como combustible, y libre del pago de derechos de importación o de cualquiera otro que actualmente o en lo futuro graven dicho artículo, con excepción de los correspondientes a la renta del Timbre, en el Distrito de Arizpe, Estado de Sonora. 84

Junio 6 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Manuel de la Peña, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas torrenciales del rio de san Juan del Rio, del Estado de Querétaro. 86

Junio 17 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión y el Sr. Benigno Diez Salceda, por la Compañía Industrial de Atlixco, S. A., reformando el celebrado con el Sr. Luis Barroso Arias, el 27 de Agosto de 1900, que a su vez reformó los celebrados el 11 y 28 de enero de 1898, con los Sres. Luis Gómez Daza, Marcelino Zepeda y Ramón González, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río san Baltasar o Cantarranas, del Estado de Puebla. 89

Junio 18 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el día diez y nueve de mayo de mil novecientos ocho, entre el Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Sr. Román S. de Lascurain, prorrogando el plazo del contrato celebrado el diez y ocho de marzo de mil novecientos siete, entre el C. Ing. Andrés Aldasoro, subsecretario encargado del despacho de Fomento, Colonización e Industria, representando al Ejecutivo de la Unión, y el mencionado Sr. Román S. de Lascurain, para practicar una exploración minera en terrenos de la Hacienda de «Laguna Verde,» municipalidad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. 89

Abril 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho do Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. William A. McLaren, en la del Sr. Federico Wainwright Perkins, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas del río Hernández, del Estado de Veracruz. 90

Junio 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y do la otra el C. Luis Méndez, apoderado jurídico de la compañía Empacadora

Nacional Mexicana, denominada antes la Compañía Empacadora de los Estados Unidos, The United States Packing Company, cesionaria del contrato celebrado el 4 de abril de 1903, con The North American Beef Company, para el establecimiento de dos fábricas de diversos productos, utilizando los desechos animales, y dos casas empacadoras de carnes; para reformar este contrato y los de reformas celebrados en 15 de noviembre de 1905, 17 de marzo y 24 de noviembre de 1906, 21 de junio de 1907 y 17 de enero de 1908. 94

Julio 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Leví, en la de la Humboldt, Compañía Agrícola y Colonizadora de Chihuahua, para el aprovechamiento, como riego y fuerza motriz, de las aguas del rio Conchos, del Estado de Chihuahua. 94

Julio 11 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. D. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Jesús García, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio de san Juan del Río, de los Estados de México, Querétaro e Hidalgo. 98

Julio 17 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Manuel Calero, en la de la señora Lorenza R., viuda de Braniff, para el enlame de las haciendas El Sabino, Jaltipa y Corregidora, con las aguas del río de Cuautitlán, del Estado de México. 101

Julio 24 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Carlos H. Cahan, en el de la compañía del servicio de aguas y drenaje de Monterrey, para el aprovechamiento, en el abasto y saneamiento de dicha Ciudad, de las aguas torrenciales del río de la Estanzuela, en el Estado de Nuevo León. 104

Agosto 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entro el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y los señores Ismael G. Zúñiga y Antonio Pliego Pérez, para la compra-venta de una zona de terreno ubicada en el departamento de Comitán, del Estado de Chiapas. 107

Agosto 13 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Manuel Tamborrel, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del río Conchos, del Estado de Chihuahua. 108

Agosto 13 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Carlos M. Harrison, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio Pánuco, del Estado de Veracruz. 111

Agosto 14 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y el Lic. Ángel López Negrete por sí y como apoderado del Sr. Eduardo Hartmann y el C. Lic. Salvador M. Cancino, como apoderado del Sr. Hiram C. Smith, para la compra-venta de terrenos nacionales ubicados en el Estado de Chiapas. 114

Agosto 26 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el C. Lic. Emilio

Pardo, en la del señor Eugenio J. Cañas, para el Aprovechamiento, como riego y fuerza motriz, de las aguas del rio Higuerón, del Estados de Morolos. 116

Agosto 29 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión y el señor Alberto Stein en la del Sr. Celedonio Corvera, presidente y primer vocal de la fábrica de Hilados y Tejidos «La Unión,» rescindiendo el contrato celebrado el 22 de Septiembre de 1906, entre el C. Ingeniero Andrés Aldasoro subsecretario de Fomento, como encargado de la secretaría del ramo, y el citado Sr. Stein, con la representación indicada, para el Aprovechamiento, como riego, de las aguas del rio del Presidio, en el Estado de Sinaloa. 119

Septiembre 21 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor José S. Longoria, para el aprovechamiento, como riego, de las aguas del Río Bravo del Norte, del Estado de Tamaulipas. 119

Septiembre 23 de 1908.- Se prorroga por un año, contado desde la fecha de la presente modificación, el plazo que para el establecimiento de las primeras quince familias, señala el art. 4° del contrato celebrado en diez y seis de agosto de mil novecientos seis, con el C. Federico Legazpi, en representación de la extinguida Compañía Colonizadora de Gómez Palacio, S. A., sobre colonización en el Estado de Durango, y modificado el trece de septiembre de mil novecientos siete..... 123

Octubre 3 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor D. Lorenzo González Treviño, en la de la Compañía Agrícola y Ganadera del Río de san Diego, Sociedad Anónima, subvencionando a esta Compañía para establecer las obras hidráulicas que tiene emprendidas, a fin de utilizar, como riego, las aguas de los ríos san Diego y Bravo del Norte, en el Estado de Coahuila. 123

Octubre 31 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Licenciado Rodolfo Reyes, para la explotación de maderas en un porción de terreno nacional ubicado en el territorio de Quintana Roo. 127

Noviembre 5 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el 24 de julio de 1908, entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, de una parte, y de la otra, el Sr. León S. Kuhn, como cesionario del Sr. Lic. Domingo Barrios Gómez, reformando el convenio de 20 de agosto de 1904, modificado a su vez por el de 22 de diciembre del mismo año, para el establecimiento de la industria de la fabricación de la malta. 131

Diciembre 15 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 24 de octubre de este año, entre el C. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el señor Lic. D. Luis Méndez, representante de la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, y que se relaciona con los contratos de 4 de abril de 1903, 21 de junio de 1907 y sus relativos para el establecimiento de casas empacadoras y fábricas de productos procedentes de la matanza de ganado bovino, ovino y porcino, y el de 11 de febrero de 1908, para el establecimiento de almacenes refrigeradores y mercados. 133

Diciembre 28 de 1907.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Lic. José N. Macías, por el señor Cristóbal Pulido, para el aprovechamiento, como fuerza motriz, de las aguas de los ríos san Antonio, Salitre, Agua Blanca e Itzícuaro, del Estado de Michoacán... 136

Diciembre 18 de 1908.- Se aprueba el contrato de 30 de mayo de este año, celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, y el Sr. Diego Redo, relativo a la ejecución de obras hidráulicas para someter a cultivo de riego con aguas del río de san Lorenzo, del Estado de Sinaloa, diez mil hectáreas de terreno. 139

Febrero 19 de 1908.- Se aprueba el contrato que con fecha veinte de mayo de mil novecientos ocho, celebró el C. Lic. Olegario Molina, Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo de la Unión, con el Sr. Carlos Vega Schiafino, para la exploración y explotación de fuentes de petróleo o criaderos de carburos e hidrocarburos gaseosos y sus derivados, en terrenos de la Costa Occidental de la Baja California. 140

Diciembre 17 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha tres de diciembre de mil novecientos ocho, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco del Oro», en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora. 144

Noviembre 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y los Sres. Licenciados Lorenzo Elizaga y Luis Ibarra, sobre compra-venta y colonización de terrenos nacionales en el Estado de Guerrero. 146

Noviembre 27 de 1908.- CONTRATO celebrado entre el C. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, en representación del Ejecutivo Federal, y los Sres. B. F. Hoyt y compañía, S. en C. para la apertura de un pozo artesiano en terrenos de jurisdicción de Mapimi, Durango. 150

Diciembre 21 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado con fecha 3 de diciembre de mil novecientos ocho, entre el Ejecutivo de la Unión, representado por el Sr. Lic. Olegario Molina, secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización e Industria, y el Sr. W. Z. Stuart, presidente de la Compañía Minera «Banco de Oro,» en nombre de la misma, para la introducción de petróleo crudo en el Distrito de Magdalena, Estado de Sonora. 152

Enero 1º de 1908.- Reformas a la Convención sobre bultos postales entre México y Francia. 153

Marzo 12 de 1908.- NOMBRAMIENTO del Sr. D. Federico Gamboa como subsecretario de Relaciones Exteriores. 154

Abril 3 de 1908.- DENUNCIA del Tratado de amistad, comercio y navegación con El Salvador. 154

Mayo 30 de 1908.- TRATADO de arbitraje obligatorio entre México o Italia. 155

Junio 2 de 1908.- NOMBRAMIENTO del Sr. Lic. D. Joaquín D. Casasús, como Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. 157

Julio 1º de 1908.- Circular relativa a gastos en telegramas. 158

Julio 3 de 1908.- Tratado de Arbitraje entre México y los Estados Unidos de América. 158

Julio 11 de 1908.- Violación involuntaria de territorio británico por soldados mexicanos. 159

Julio 17 de 1908.- CIRCULAR relativa a la Ordenanza de Aduanas. 160

Julio 25 de 1908.- C0NVENCIÓN entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemán, en que se reforma el párrafo 1° del art. IV de la Convención de 24 mayo de 1892, sobre cambio do bultos postales. 160

Agosto 20 de 1908.- Circular relativa a facturas consulares. 161

Octubre 20 de 1908.- Numeración progresiva de las circulares. 161

Octubre 26 de 1908.- Circular relativa a remisión de objetos pedidos por las Secretarias de Estado. 161

Octubre 28 de 1908.- Circular relativa a la dirección telegráfica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 162

Febrero 7 de 1908.- CONTRATO celebrado entre la secretaría de Estado y del despacho de Gobernación y la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, para la inspección sanitaria de los productos elaborados en la Casa Empacadora establecida por dicha Compañía en el Estado de Michoacán. 162

8 de febrero de 1908.- En atención a que para comunicar la plaza de san Jacinto con la calle, del Dr. Gálvez (Colonia del Carmen), de la Villa de san Ángel, D. F., se hace indispensable la ocupación de la casa número 2 de la calle de Arteaga, se declara que es de utilidad pública y se acuerda la adquisición de dicha finca en cuanto sea necesario para el fin que se ha expresado. 163

Mayo 22 de 1908.- Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 163

Mayo 22 de 1908.- Se prorroga el actual periodo de sesiones del Congreso general por el tiempo necesario, no excediendo del máximum que la Constitución permite, con objeto de que puedan ser despachadas en ambas Cámaras las iniciativas del Ejecutivo sobre reformas constitucionales e instituciones de crédito. 164

22 de mayo de 1908.- A fin de que se haga con el debido orden la distribución de las asignaciones que para el ramo de Gobernación señale en cada año fiscal el presupuesto de egresos, y de que dichas asignaciones sean aplicadas a sus objetos de la manera más favorable a la satisfacción de las necesidades de los servicios públicos a que están destinadas, el presidente de la república se ha servido acordar que hasta nuevo acuerdo se observen las reglas siguientes: 164

Mayo 27 de 1908.- Los presos federales que se encuentren en las mismas prisiones militares o en las locales de los Estados, recibirán alimentos de la misma calidad y en la misma cantidad que los demás presos que se hallen en la respectiva prisión. 168

Mayo 29 de 1908.- Se aprueba en la parte relativa a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado el 30 de abril último entre la dirección general de Obras públicas y la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces, S. A., para pavimentar con lámina de asfalto veinticinco calles de la ciudad de México. 169

Junio 2 de 1908.- Se convoca a los pueblos de los Estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro u elección extraordinaria de un segundo senador propietario por cada uno de dichos Estados y un segundo senador suplente por cada uno de los de Guanajuato y Jalisco, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910. 176

Junio 10 de 1908.- Se convoca al pueblo del Estado de Veracruz a elección extraordinaria de un segundo senador, suplente, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910. 177

Junio 15 de 1908.- Se aprueba el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes y Zacatecas para delimitar sus territorios entre los distritos de Pinos y Ocampo en los ranchos del «Hepazote» y «La Gloria.» 177

Junio 18 de 1908.- En vista de haberse recibido noticia oficial de la existencia de la peste bubónica en el puerto de Hong Kong, Asín, el presidente de la república ha tenido a bien declarar infestado el puerto de Hong Kong. 178

Junio 18 de 1908.- Se aprueba en la parte relativa a pagos que deben efectuarse en años fiscales posteriores, el contrato celebrado entre la dirección general de Obras públicas y la International Asphalt C°, S. A., el 29 de abril anterior, para pavimentar con lamina de asfalto sobre concreto de cemento, cinco calles de la ciudad de México. 178

Junio 20 de 1908.- El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 127 de la Constitución Federal, y en virtud de la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara adicionada la fracción XXII del art. 72° de la misma Constitución. 185

Junio 20 de 1908.- Sobre establecimientos penales en México. 188

Junio 22 de 1908.- La importancia adquirida en los últimos tiempos por la inmigración de la república, ha determinado al ejecutivo a fijar su atención en todo lo que a ella se refiere, a efecto e estar en posibilidad de dictar en oportunidad las disposiciones que a interés nacional reclame, sea para obtener de la inmigración todo el provecho deseable, sea para evitar que se introduzcan al país elementos que desde luego o en el transcurso del tiempo, por su aglomeración o por otros motivos, puedan ser nocivos. 190

Junio 24 de 1908.- Sobre la consulta del comandante militar de Veracruz, relativa a gastos de los presos civiles del orden federal existentes en la prisión militar de Veracruz y Ulúa. 191

Junio 25 de 1908.- La institución de beneficencia privada denominada "Sociedad Italiana de Mutuo Socorro y Fraternidad." fundada por acta que se otorgó en esta capital a 8 de Junio de 1908, por ante el notario Ramón Ruiz, goza de personalidad jurídica para el objeto de su instituto y de las franquicias que concede la ley de 23 de agosto de 1904. 191

Junio 29 de 1908.- Disposiciones reglamentarias provisionales sobre la pena de relegación, con referencia al decreto de adiciones al Código Penal del 20 del actual. 192

Julio 2 de 1908.- Que conforme al art. 6° del decreto de 20 del actual sobre organización de los Establecimientos penales del Distrito Federal y de la colonia Penal, no pueden ser detenidos en la cárcel general, los inculpados por delitos militares y que no habiendo prisiones de esta clase para las mujeres responsables de delitos del orden militar, solicita que éstas sean detenidas en la mencionada cárcel general. 196

Agosto 20 de 1908.- Toda persona que, viniendo del extranjero, llegue a la república, cualquiera que sea su nacionalidad, sexo o edad, y cualquiera que sea también el vehículo, medio de transporte o manera con que llegue, será sometido a interrogatorio a fin de recoger, respecto de él, los datos que constan en la boleta que se acompañó a la circular de 22 de junio último..... 196

Septiembre 1º de 1908.- Que no se permita que ningún individuo que forme parte de la policía rural se encargue, en los lugares en que se encuentre de destacamento y muy especialmente en las estaciones de ferrocarril, fábricas, minas y haciendas, de desempeñar trabajo alguno que no le corresponda por sus funciones y que tenga por objeto el servicio de particulares o de compañías..... 197

Octubre 10 de 1908.- Se convoca al pueblo del Estado de Aguascalientes a elección extraordinaria de un primer senador propietario, cuyo período constitucional terminará el 15 de septiembre de 1910..... 198

Octubre 17 de 1908.- No existiendo ley que castigue con alguna pena la resistencia a ministrar los datos que se piden a los pasajeros que lleguen a la república, no es posible, por ahora, dictar medida alguna contra los que se nieguen a darlos, por lo cual debe procurarse obtenerlos solamente por la persuasión, haciendo ver al pasajero que, de darlos, no resultará ningún daño, y que, de negarse a ello, será visto por las autoridades como individuo que se niega a someterse a las reglas establecidas en la república. 198

Octubre 22 de 1908.- CONTRATO celebrado entre la secretaría de Estado y del despacho de Gobernación y la Compañía Empacadora Nacional Mexicana, ampliando el de 7 de febrero de 1908, relativo a la inspección satinaría de los productos elaborados en la casa empacadora establecida por dicha compañía en el Estado de Michoacán. 199

Octubre 23 de 1908.- Siendo necesario regularizar el trazo de la plaza del Hipódromo de la colonia de la Condesa, completando hacia el sudoeste su forma circular, conforme al plano aprobado por la dirección general de Obras públicas, se declara que es de utilidad pública llevar a cabo esa operación. 200

Noviembre 12 de 1908.- Se reforman los arts. 11° y 72°, fracción XXI, y adicionado el art. 102 de la misma Constitución..... 200

Diciembre 14 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado el veintidós de octubre de mil novecientos ocho, entre la dirección general de Obras públicas y la compañía denominada Rastro de la Ciudad de México, S. A., por el cual se reforman los contratos de catorce de noviembre de mil novecientos tres y cuatro de septiembre de mil novecientos siete, sobre construcción y explotación del rastro y del mercado de carnes de esta capital..... 203

Diciembre 15 de 1908.- Durante el próximo receso de las Cámaras los senadores podrán aceptar las comisiones que el Ejecutivo les confiare en la Administración Pública..... 208

Diciembre 18 de 1908.- Se aprueba en lo relativo a pagos que deben efectuarse en años fiscales

posteriores, el contrato celebrado en 21 de noviembre último por la dirección general de Obras públicas del Distrito Federal con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., para el servicio de alumbrado público en la ciudad de Tacubaya, Distrito Federal. 208

Diciembre 19 de 1908.- Se aprueba el contrato celebrado en doce de agosto último por la dirección general de Obras públicas con los señores Veyán, Jean y compañía, para utilizar dentro de los límites del distrito federal, con excepción de las municipalidades de Tacuba, Tacubaya y Guadalupe Hidalgo la energía eléctrica obtenida en las caídas de agua del rio dé la alameda, estado de México, en virtud de la concesión que para el aprovechamiento de esas aguas, les otorgó la Secretaría de Fomento. 213

Mayo 1º de 1908.- Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre los gobiernos de Oaxaca y Puebla y ratificado por las Legislaturas de las mismas entidades federativas. 222

Diciembre 22 de 1908.- Disposiciones sobre la entrada de extranjeros. 222

Mayo 2 de 1908.- Se aprueban les arreglos sobre límites celebrados entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y aprobados por las Legislaturas de dichos Estados el 27 de noviembre de 1907 y 14 de enero del año en curso. 229

Marzo 9 de 1908.- Que se haga saber a los notarios y jueces cartularios, que el citado artículo 115 no los autoriza para cobrar un peso por cada una de las rúbricas que pongan al margen de los testimonios que expidan. 236

Marzo 25 de 1908.- Se establece un juzgado menor en Coyoacán, Distrito Federal, cuya jurisdicción comprenderá la municipalidad del mismo nombre. 237

Marzo 27 de 1908.- Que se haga saber a los notarios y jueces cartularios del Distrito Federal, que deben abstenerse de poner en los testimonios que expiden la razón de legalización de su sello y firma, porque esa razón debe ser asentada por la mesa del notario y registro público de la propiedad, en esta secretaría. 237

Abril 29 de 1908.- Que, como adición a la circular número 164 de 22 de febrero del presente año, se haga saber a los notarios y jueces cartularios, que deben abstenerse de hacer al final de las escrituras hipotecarias, la declaración de que la hipoteca quedó constituida en la fecha y hora en que firman la escritura los otorgantes, cuando éstos no han pactado expresamente por cláusula especial, constante en la misma escritura, que en esa fecha se tenga por constituida la hipoteca; 237

Mayo 15 de 1908.- Que, en lo sucesivo, las citaciones y conducción de correspondencia del juzgado de su cargo, se hagan precisamente, y en su respectivo caso, por los comisarios. 238

Mayo 22 de 1908.- Que se haga saber a los notarios y jueces cartularios, actuantes con este carácter, que no están autorizados para recibir las declaraciones a que alude el dictamen, de la mesa del notariado y registro público, de fecha 14 de agosto de 1907 y que se publicó en el número 49, tomo XCI del Diario Oficial, correspondiente al lunes 26 de agosto del mismo año y, por lo mismo, deben abstenerse de extender actas haciendo constar dichas declaraciones, lo cual podría importar una usurpación de funciones, prevista y penada por el Código de la materia. 238

Mayo 27 de 1908.- Que, dentro de veinte y cuatro horas de haberse pronunciado una sentencia ejecutoria en procesos seguidos por delitos de robo y falsificación de moneda, o dentro de

igual término después de recibida del superior respectivo esa ejecutoria, si la sentencia hubiere sido recurrida, remita a esta secretaría de Justicia la copia de dicha resolución. ... 239

Junio 12 de 1908.- Se establece un juzgado en esta capital, que se denominará juzgado sexto de lo civil y cuya jurisdicción y competencia serán las mismas que las de los juzgados de primera instancia de lo civil de México. ... 239

Junio 14 de 1908.- Que diariamente, a las doce y cuarenta y cinco minutos, se sirva remitir al director del «Boletín Oficial» las listas de los acuerdos del día, dictados en ese juzgado de su cargo, así como todo lo demás, que debe publicarse en dicho periódico. ... 240

Junio 20 de 1908.- ADICIONES al Código Penal para el Distrito y territorios federales, sobre delitos del fuero común, y para toda la república, sobre delitos contra la Federación. ... 240

Julio 2 de 1908.- Que los originales que envían los juzgados para su publicación en el "Boletín Judicial", sean escritos con toda claridad y sin ninguna clase de abreviaturas. ... 241

Julio 11 de 1908.- Que el gobierno del Distrito cuide de que, con la debida oportunidad, sean remitidos a cada uno de los establecimientos penales los reos que deben estar en ellos, sin que sea necesaria orden especial del Ejecutivo. ... 242

Julio 14 de 1908.- Que se recomiende a los notarios y jueces cartularios, que, al dar cumplimiento a lo prescripto en la fracción III del art. de 30 de la ley de 19 de diciembre de 1901, cuiden de expresar, no sólo la vecindad en general, sino también el número de la casa y nombre de la calle en que tienen su domicilio los otorgantes y demás personas a quienes se refiere la citada disposición legal. ... 242

Agosto 10 de 1908.- Con el objeto de que se tengan todos los datos estadísticos que suministran las escrituras autorizadas por los CC. notarios y jueces que actúan como notarios y ejercen sus funciones en el Distrito Federal, el C. presidente de la república ha tenido a bien acordar, que los mencionados funcionarios remitan mensualmente a esta secretaría un estado relativo a las escrituras que ante ellos se hayan otorgado. ... 242

Agosto 10 de 1908.- Disposiciones a fin de evitar los inconvenientes que para la administración de justicia tiene el que los jueces foráneos del Distrito Federal se trasladen frecuentemente a esta capital o a Tlálpam, cada vez que sea necesario practicar alguna diligencia con menores que se encuentran recluidos en las escuelas correccionales. ... 243

Agosto 17 de 1908.- Que se prevenga a los jueces que pronuncien sentencias que contengan condena a la pena de relegación, que esas sentencias se redacten en términos claros y precisos, de tal modo que no dejen lugar a duda acerca del tiempo de relegación que se imponga. ... 243

Agosto 17 de 1908.- Que se reduzca a la forma concreta indispensable los edictos y originales, a fin de evitar el gasto inútil y pérdida de tiempo que demandaría la práctica viciosa de insertar en el periódico documentos innecesarios o resoluciones que no requieran publicación. ... 243

Agosto 19 de 1908.- Se establece un juzgado mixto de primera instancia en la sección de Mexicali, del partido Norte de la Baja California, con la siguiente planta de empleados. ... 244

Septiembre 29 de 1908.- Son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, los ciudadanos Manuel García Méndez, Francisco Belmar, Alonso Rodríguez Miramón, Carlos

Flores y Francisco S. Carbajal. 245

Octubre 22 de 1908.- Se traslada el juzgado 6° correccional, que actualmente se encuentra en el Palacio de Justicia del ramo penal, al edificio construido para la 6° inspección de policía, situado en la esquina que forman las calles de "Revillagigedo" y "Las Verdes". 245

Octubre 29 de 1908.- Se aprueba el uso que el Ejecutivo de la Unión ha hecho por medio de la ley de 28 de diciembre de 1907, de las facultades que, por decreto de 11 de diciembre del mismo año, le concedió el Congreso de la Unión para reformar la ley de organización judicial en el Distrito y territorios federales y la ley transitoria de procedimientos del fuero común, para el mismo Distrito y territorios. 246

Diciembre 16 de 1908.- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 246

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 257

Diciembre 18 de 1908.- Ley de Organización del Ministerio Público Federal y Reglamentos de sus Funciones. 264

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo en relación a la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal. 271

Diciembre 16 de 1908.- Código Federal de Procedimientos Penales. 274

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo, referente al Código Federal de Procedimientos Penales. 325

Diciembre 24 de 1908.- Que se haga cumplir a los notarios lo que establece el artículo 95 de la ley de 19 de diciembre de 1901 que impone a los Notarios del Distrito Federal la obligación de remitir al archivo General de Notarías de esta ciudad los protocolos que sean de fecha anterior a los últimos seis años. 331

Diciembre 26 de 1908.- Código Federal de Procedimientos Civiles. 331

Abril 28 de 1908.- Informe del Ejecutivo en relación al Código Federal de Procedimientos Civiles. 413